UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

Ecología política del colapso del Petro-estado venezolano (2013-2022) Gobernanzas híbridas en el extractivismo y ecologismos de sobrevivencia

Emiliano Teran Mantovani

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca

ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis queda condicionado a la aceptación de las condiciones de uso establecidas por la siguiente licencia Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/?lang=es

WARNING. The access to the contents of this doctoral thesis it is limited to the acceptance of the use conditions set by the following Creative Commons license: https://creativecommons.org/licenses/?lang=en

Disertación doctoral

NOVIEMBRE 2025

Ecología política del colapso del Petro-estado venezolano (2013-2022)

Gobernanzas híbridas en el extractivismo y ecologismos de sobrevivencia

Emiliano Teran Mantovani

Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambientales

Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Supervisores

Dr. Joan Martinez Alier

Dra. Marta Conde Puigmal

Tutor

Dra. Isabelle Anguelovski

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

Ecología política del colapso del Petro-estado venezolano (2013-2022)

Gobernanzas híbridas en el extractivismo y ecologismos de sobrevivencia

DISERTACIÓN DOCTORAL

EMILIANO TERAN MANTOVANI

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

A Newen y a Inti

A quienes lucha por la justicia, la naturaleza y la defensa de sus territorios en Venezuela

A la toda vida en el planeta Tierra

AGRADECIMIENTOS

Definitivamente, para llevarse a cabo una tesis doctoral en un contexto como el del colapso venezolano, y con los diversos obstáculos que he encontrado en el camino, se necesita una importante red de apoyos y solidaridad a la que estoy infinitamente agradecido.

En primer lugar, agradezco al entorno de cuidados con el que he contado: a mi siempre amorosa y solidaria compañera Camila Franco; a mi familia por su afecto, mi suegra Martha Estrada por su apoyo incondicional. A mis compañeras y compañeros del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, con quien transitamos juntos buena parte de la evolución de la debacle venezolana, fuimos interpretando la crisis ambiental que vivía el país, y tratando de impactar para contrarrestar las crecientes injusticias que se producían con las comunidades y ecologistas del país. Del mismo modo, doy las gracias a las diferentes redes de investigación regional, de activismo ambiental y el apoyo amistoso de colegas me ayudaron considerablemente a sostener mi trabajo; a Tatiana Roa Avendaño por su respaldo en momentos muy difíciles.

Agradezco especialmente a mi directora de tesis, la Dra. Marta Conde Puigmal, quien desde el principio me apoyo en esta propuesta, me ayudó a desatar nudos en la investigación y su logística, y me ofreció excelentes observaciones teóricas y metodológicas con las cuales este trabajo pudo llegar a buen término. Marta es una excelente directora y académica, y una profesional muy solidaria, y he sido afortunado de ser dirigido por ella.

La construcción de esta investigación ha sido un proceso largo y rico, del que tendría que reconocer a mucha gente, probablemente sin lograr abarcar a todas las personas que pudieron contribuir en él. Agradezco al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA), a sus extraordinarias profesoras y profesores, donde me formé incluso desde la Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social. Mi paso por la institución me ha permitido combinar las perspectivas del Sur y el Norte Global, en pro de enriquecer lo más posible mi trabajo.

Los aportes metodológicos de fantásticas académicas como Isabelle Aguelovsky, Panagiota Kotsila y Mariana Walter fueron de gran ayuda para mi trabajo. Agradezco también al profesor Mauricio Phelan, de la Universidad Central de Venezuela, por su disposición a darme recomendaciones metodológicas. Del mismo modo, a Joan Martínez Alier por las ideas y sugerencias teóricas para proponer mi tesis y su desarrollo. Cada conversación con él fue de gran enriquecimiento para mí. Joan, además, me recibió solidariamente en su casa en mis primeros meses en Barcelona para mis estudios de maestría, cuando los pagos de mi beca no llegaban aún.

Agradecimientos también al profesor y criminólogo Keymer Ávila por sus orientaciones sobre temas de seguridad y delito; a Philippe Le Billon por sus nutritivos comentarios a la tesis y sus extraordinarios aportes teóricos, que me ofrecieron innumerables insumos para pensar estas formas de extractivismo criminal en el colapso venezolano. Al muy querido geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, por enseñarnos a pensar desde otras maneras el territorio. Carlos, que la tierra te sea leve.

Al economista venezolano Carlos Mendoza Pottellá, siempre dispuesto a apoyarme con información en temas de energía. Y a los revisores anónimos de las Revistas 'Political Geography' y 'Geoforum', que me dieron sólidas observaciones para fortalecer mi propuesta de análisis sobre gobernanzas híbridas.

Hubo apoyos y acompañamientos invaluables para mi durante mi investigación, que deseo mencionar. De manera siempre fraterna, he contado con la ayuda de mi colega y amigo, el Dr. Antonio Bontempi, quien me dio excelentes recomendaciones técnicas y metodológicas para el desarrollo de mi tesis; en este sentido, también agradezco a la Dra. Fulvia Calcagni. El abogado y experto en historia Erick Camargo me apoyó en la construcción precisa y bien documentada de los mapas históricos de la geografía política de Venezuela (siglos XVIII y XIX). Y el biólogo Joel Segarra, el Dr. Douglas Rodríguez Olarte y el geógrafo Efrain Porto Tapiquén me apoyaron en la realización de los mapas que presento en este trabajo y me ofrecieron recomendaciones sobre análisis espacial.

Debo también extender mi gratitud a los apoyos financieron de la investigación: empezando por la Fundación Rosa Luxemburg, el EJOLT Project y la Fundación Autónoma Solidaria Barcelona de la UAB.

Con el equipo del Observatorio diseñamos varias fuentes de información de los casos, como el área de periodismo ambiental, monitoreo de problemas y conflictos ambientales, entrevistas a personas y organizaciones clave, que contribuyeron sobremanera a fortalecer la recogida de información de mi tesis. Mi agradecimiento al equipo también por estas labores, sin las cuales este proceso de recolección tan vasto hubiese sido imposible. Además, la data recogida ha sido puesta a la disposición gratuita de la sociedad venezolana.

Adicionalmente, hubo excelentes profesionales y ecologistas, externos al Observatorio, que contribuyeron al llenado de algunos casos, a los cuales extiendo también mi reconocimiento: Atenea Jiménez Lemón, Karina Estraño, Maria Alejandra Vega, Jorge Hinestroza, Douglas Rodríguez Olarte, Juan Planas, Ketsy Medina, José Joaquín Lugo y Vanessa González Peña. Del mismo modo, mi agradecimiento a numerosos ambientalistas y profesionales vinculados a las luchas ecológicas y por los pueblos indígenas de los que aprendí mucho, y que nutrieron este trabajo, sobre todo la sección de los ecologismos de sobrevivencia: Lusbi Portillo, Freddy Lovera, Santiago Arconada, Alcides Pérez, Edgardo Lugo, Bárbara Ordóñez, Francisco Cañizales, Jesús Herrera, José Gregorio de Sousa Infante, Aimee Tillet, Nelson Freitez, Wiston Montes, José 'Cheo' Carvajal, Juan Carlos La Rosa, Vladimir Aguilar, Aida García, Fritz Sánchez, Mario Querales, el Movimiento Salvemos el Embalse de Los Quediches, Nelly Chiquito, Jorge Hinestroza, Edna Medina, Emily Colmenares (que en paz descanse), o el Comité Pro Defensa del Cerro La Vieja, entre muchos otros.

Como dije al principio, hay mucha más gente que en el camino de mi proceso investigativo, me apoyó y cuidó, aunque no esté mencionada en estos agradecimientos. No puedo sino reconocer y compartir un modesto homenaje a ellos, para volver a destacar que estos productos de investigación son siempre de índole colectiva.

RESUMEN

Venezuela ha vivido la peor crisis de su historia republicana y una de las peores de la América Latina contemporánea. A esta la he denominado 'La Gran Crisis' (2013-2022), y sostengo que esta se ha expresado como un colapso societal localizado, generándose un radical y drástico proceso de reorganización de la vida. Esto no solo implicó un derrumbe del histórico Petro-estado y sus instituciones, de la economía rentista petrolera; una fragmentación geográfica y una severa intensificación de las disputas políticas y sociales; y la prevalencia de situaciones de caos y precariedad de la vida; sino también la emergencia de nuevos escenarios en la distribución ecológica y el extractivismo. En estos prevalece una multiplicación de operaciones de extracción de naturaleza, necesidades de control territorial por parte de diferentes actores, una expansión de la violencia en las luchas por los llamados recursos naturales, y un incremento de la presión sobre los ecosistemas. Se registra un cambio histórico del régimen extractivista que va, de la hegemonía del petróleo, la explotación estatal/formal y el despliegue al norte del Orinoco; al protagonismo del oro, la Amazonía y las extracciones ilícito/criminales. Esta investigación propone una lectura e interpretación de La Gran Crisis desde una perspectiva de ecología política. En particular, mi estudio se centra en el análisis de las gobernanzas que dan forma a una nueva morfología del extractivismo; y de las luchas sociales por y en torno a la naturaleza, que se producen en estos contextos de sobrevivencia. Mi trabajo parte del análisis de 75 conflictos de distribución ecológica provenientes de todas las regiones de Venezuela, para lo que recurro a la Ecología Política Comparativa. Esta se basa en una perspectiva de estudio multi-casos orientada a identificar patrones económicos, políticos o ambientales a lo largo del espacio geográfico; y multi-escalar, donde se examinan estas tendencias articuladas en lo local, regional y a nivel de política de Estado. Del mismo modo, aplico entrevistas en profundidad (con actores de las luchas ambientales) y la investigación documental sistemática, así como el análisis cualitativo y el análisis espacial para examinar la data. Como principales aportes, en primer lugar, desarrollo una conceptualización sobre gobernanzas híbridas en el extractivismo, las cuales se conforman como un método de asociación estratégica entre el Estado y el crimen organizado para posibilitar la extracción masiva de naturaleza y, en última instancia, consolidar un régimen extractivista. Antes que solo una víctima de la criminalidad o de una 'captura', sostengo que el Estado puede también ser protagonista en estas gobernanzas. El trabajo intenta contribuir con perspectivas no normativas y críticas sobre la teoría de las gobernanzas híbridas, reconociendo las construcciones conjuntas de autoridad y apropiación de recursos entre grupos estatales y criminales, que además tienen capacidad de incidir y transformar el propio modelo de extractivismo. También ofrece insumos para abordar el creciente rol del crimen organizado en dichos modelos, determinante en regiones como América Latina y África. Mi trabajo, por tanto, aporta también a la teoría del extractivismo, al reconocer el papel central que estos entramados de criminalidad y corrupción pueden tener en los procesos reconfiguración del mismo, algo que ha sido muy poco trabajado en esta literatura. Adicionalmente, propongo algunos elementos de discusión sobre el rol del Estado en estos procesos y la historicidad de la precaria, disputada y dinámica geografía política de los recursos naturales, en tiempos de fragmentación espacial y nuevas soberanías en el siglo XXI. En segundo lugar, mi trabajo explora una extraordinaria multiplicidad de respuestas y

acciones colectivas de actores de la sociedad civil que se produjeron por y en torno a la naturaleza, y que desbordan los marcos de las teorías de los movimientos sociales y por la justicia ambiental. Examino una tipología de orientaciones de lucha en los conflictos ecológico-distributivos, que va desde ambientalismos de alta y baja intensidad, luchas por el acceso básico a los medios de vida, iniciativas sociales de extracción de recursos naturales, hasta acciones de pura sobrevivencia. A partir de estas contradictorias expresiones sociales, construyo una perspectiva de Ecología Política de la Sobrevivencia (EPS), como un enfoque de análisis crítico que busca abarcar un más amplio espectro que, además de los más estructurados y políticos movimientos socioambientales, examine también formas resolutivas, parciales, contingentes y pragmáticas de sobrellevar el colapso y sostener la reproducción de la vida. Mi exploración teórica intenta, por un lado, profundizar en una dimensión poco estudiada de la ecología política como lo es la sobrevivencia, buscando resaltar otras politicidades y potencialidades de creación y transformación que surgen de contextos no convencionales como los de derrumbe sistémico. Se plantea, por tanto, ampliar los marcos de análisis que las teorías de la justicia ambiental, los Estudios Sobre Estrategias de Sobrevivencia, e incluso los ecologismos populares, no abarcan. A su vez, mi propuesta intenta ofrecer ideas para incrementar la comprensión sobre nuevos escenarios para las luchas en torno al ambiente en el marco de un contexto extraordinario como el que configura el antropoceno.

Palabras Clave: extractivismo, gobernanzas híbridas, ecología política, crimen organizado, Petro-estado, conflictos ambientales, ecologismos populares, estrategias de sobrevivencia

ABSTRACT

In recent years, Venezuela has experienced the worst crisis in its republican history and one of the worst in contemporary Latin America. I have called it ‘The Great Crisis’ (2013-2022), and I argue that it evolved into a localized societal collapse, which generates a radical and drastic process of reorganization of life. This period did not only involve the Petro-state and the oil-based rentier economy collapse; geographic fragmentation and a severe intensification of political and social disputes; and the prevalence of situations of chaos and precariousness of life; but also the emergence of new scenarios in ecological distribution and extractivism. These scenarios are dominated by a multiplication of natural extraction operations, the need for territorial control by different actors, an expansion of violence in the competition over so-called natural resources, and an increase in pressure on ecosystems. There is a historical change in the extractivist regime that has evolved from the hegemony of oil, state/formal exploitation and the economic development north of the Orinoco, to the prominence of gold, illicit/criminal extractions and the new colonization of the Amazon. This research proposes an analysis and interpretation of The Great Crisis from a political ecology perspective. In particular, my study focuses on the governance that shapes a new morphology of extractivism; and on the social struggles for and around nature, which develop in these contexts of survival. The analysis is based on 75 ecological distribution conflicts from all regions of Venezuela, for which I apply a Comparative Political Ecology approach. This is focused on a multi-case study that aims to identify economic, political, and environmental patterns across the geographic space; and a multi-scale perspective, where these trends are articulated at the local, regional, and Nation-state policy levels. Similarly, I used in-depth interviews (with actors involved in environmental struggles) and systematic documentary research, as well as qualitative and spatial analysis to examine the data. As my main contributions, first of all, I develop a conceptualization of hybrid governance in extractivism, understood as a method of strategic association between the State and organized crime to enable the massive extraction of nature and, ultimately, consolidate an extractivist regime. Rather than merely being a victim of crime or of a "capture", I argue that the state can also be a protagonist in this governance. My thesis seeks to provide non-normative and critical perspectives on the theory of hybrid governance, highlighting the joint constructions of authority and resource appropriation between state and criminal groups, which also have the capacity to influence and transform the extractivism model itself. It also provides inputs to address the growing role of organized crime in such models, which is a determining factor in regions such as Latin America and Africa. My work, therefore, also contributes to the theory of extractivism, by underscoring the central role that these criminal and corrupt networks can play in the reshaping processes of extractivism, something that has been little explored in this literature. Additionally, I propose some elements for discussion on the role of the State in these processes, and the historicity of the precarious, contested, and dynamic political geography of natural resources, in times of spatial fragmentation and new sovereignties such as those of the 21st century. Secondly, my research explores an extraordinary multiplicity of responses and collective actions for and around nature, developed by civil society actors, which goes beyond the frameworks of social movement and environmental justice theories. I examine a typology of orientations of struggle in ecological-distributive conflicts,

ranging from high and low intensity environmentalisms, struggles for basic access to livelihoods, social initiatives for natural resource extraction, to pure survival actions. From these contradictory social expressions, I construct a perspective of Political Ecology of Survival (PES), as an approach of critical analysis that seeks to encompass a broader spectrum that, in addition to the more structured and political socio-environmental movements, also examines resolutive, partial, contingent and pragmatic ways of coping with collapse and sustaining the reproduction of life. My theoretical exploration aims to, on the one hand, to delve into a little-studied dimension of political ecology: survival. From this scope, I seek to highlight other political dimensions and potentialities for creation and transformation that arise from unconventional contexts such as systemic collapses. It therefore, proposes to broaden the analytical frameworks that environmental justice, Survival Strategy Studies, and even the 'environmentalism of the poor' theories do not encompass. On the other hand, my proposal offers ideas to increase understanding of new scenarios for environmental struggles in the context of an extraordinary context such as the Anthropocene.

Keywords: extractivism, hybrid governance, political ecology, organized crime, Petro-state, environmental conflicts, environmentalism of the poor, survival strategies

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS **5**

RESUMEN **7**

ABSTRACT **9**

ÍNDICE **11**

INTRODUCCIÓN **16**

I 16

II 19

III 21

METODOLOGÍAS **26**

I. Análisis cualitativo 27

I.I Selección de los casos 27

I.II Construcción y registro de los casos 31

I.III Entrevistas en profundidad a actores clave de los conflictos 33

I.IV Bases del análisis cualitativo de los datos 34

II. Análisis documental sistemático 38

III. Análisis espacial 40

IV. ANEXOS 42

CAPÍTULO 1

Emergencia, auge y declive del Petro-estado en Venezuela: marcos geohistórico-conceptuales del extractivismo y los conflictos de distribución ecológica **52**

I. Primeras bases conceptuales: extractivismo, gobernanza, territorialización y ecologismos populares 52

I.I Territorio, Territorialización, Territorialidades 55

I.II Perspectivas críticas sobre gobernanza 56

I.III Estatalidades y procesos permanentes de formación de Estado 58

I.IV Movimientos socioambientales, ecologismos populares y conflictos ecológico-distributivos 61

II. Rasgos geográficos, geoeconómicos y ecológicos de Venezuela 65

III. Marco histórico del extractivismo y surgimiento del Petro-estado 73

III.I La geografía histórica del extractivismo hasta la formación del Petro-estado venezolano 74

III.II Gobernanza rentista y conflictos ecológico-distributivos en el auge y crisis del Petro-Estado (1914-1999) 81

IV. Surgimiento y primera fase del proceso bolivariano (1999-2013): novedades y continuidades del extractivismo y la larga crisis 96

IV.I Socialismo del Siglo XX: nuevo poder político y sobre la naturaleza 98

IV.II Declive bolivariano y los antecedentes de La Gran Crisis 105

V. Algunas conclusiones 108

CAPÍTULO 2

La Gran Crisis venezolana (2013-2022): colapso societal y nuevos escenarios para los conflictos de distribución ecológica 110

I. Sobre petróleo, crisis multidimensional y colapso societal 110

I.I La noción de colapso societal 112

II. Evolución de La Gran Crisis (2013-2022) 114

II.I Factores desencadenantes y las tres fases de La Gran Crisis 114

II.II Datos económicos del colapso en La Gran Crisis 116

II.III Sobre las sanciones internacionales a Venezuela y sus impactos 122

II.IV Los impactos sociales 126

II.V La dimensión ecológica de La Gran Crisis 136

III. Colapso del Petro-estado, entorno societal predatorio y nuevas configuraciones estatales 141

III.I El colapso del Petro-estado 142

III.II El Estado bajo un sistema de poder neopatrimonial 148

III.III Un nuevo entorno societal predatorio 151

IV. Los nuevos escenarios de la distribución ecológica y la fragmentación del extractivismo 156

IV.I Conflictos ecológico-distributivos en La Gran Crisis venezolana 159

V. Algunas conclusiones 165

CAPÍTULO 3

La emergencia de gobernanzas híbridas en el extractivismo ilícito/criminal 170

I. Mapa general de actores, emprendimientos y legalidad/ilegalidad en el extractivismo en Venezuela 171

I.I Mapa general de actores y su peso en el extractivismo 171

I.II Formas de participación y predominio del Estado 172

I.III Las economías ilícito/criminales y su transversalidad en la economía del colapso ... 177
II. Análisis multi-escalar de las gobernanzas en el extractivismo ... 182
II.I Nivel de Política de Estado (Nacional) ... 183
II.II Nivel Biorregión (Regional) ... 199
II.II.III Nivel Local ... 217
III. La emergencia de gobernanzas híbridas en el extractivismo ilícito/criminal ... 245
III.I Ampliando las dimensiones de análisis sobre poder y naturaleza: gobernanzas híbridas en el extractivismo ... 248
III.II Sobre gobernanzas híbridas en otras latitudes ... 253
III.III Gobernanzas híbridas y cambios sistémicos: la configuración de un extractivismo ilícito ... 259
III.IV Extractivismo/poder/territorialización en el siglo XXI: nuevas aristas del problema del Estado y las estatalidades en América Latina ... 263
IV. Conclusiones ... 272

CAPITULO 4276

Colapso, naturaleza y acción colectiva: del movimiento socioambiental a una ecología política de la sobrevivencia ... 276
I. Sobre ecologismos en contextos de colapso societal ... 277
I.I El colapso como sobredeterminación societal: teorías sobre movimientos sociales y acción colectiva en contextos no convencionales ... 277
I.II Hacia una amplia ecología política del conflicto ... 284
II. Mapa general de grupos sociales movilizados: perfiles, territorialidades, demandas e incidencia ... 288
II.I Tipo de población y territorialidades ... 288
II.II Demandas y reivindicaciones ... 298
II.III Fortalezas y debilidades de las estructuras organizativas y movilizaciones ... 307
II.IV Incidencia y las capacidades de sostener las luchas en el colapso ... 317
III. Ambiente, medios de vida, extracción y sobrevivencia: hacia una amplia ecología política del conflicto ... 330
III.I Tendencias generales y Tipología de la orientación de las luchas en los conflictos ecológico-distributivos ... 331
III.II Ecologismos en tiempos de sobrevivencia: motivaciones, estrategias y perspectivas ... 334
IV. Hacia una ecología política de la sobrevivencia ... 379
IV.I Contrastando enfoques y perspectivas sobre la sobrevivencia: hacia un abordaje crítico y político ... 380
IV.II Ecología política de la sobrevivencia: significados y fundamentos ... 387

V. Conclusiones 400

CONCLUSIONES 403

I 403

II 405

III 408

IV 410

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 415

APÉNDICE 483

I. Lista de Acrónimos 483

II. Lista de Tablas 485

III. Lista de Figuras 486

IV. Lista de Imágenes 490

V. Lista de Anexos 494

INTRODUCCIÓN

I

La profunda crisis de la otrora conocida 'rica Venezuela' iniciada a partir de 2013, ha representado la peor de su historia republicana y una de las peores de la historia contemporánea de América Latina y el Caribe. La resonancia internacional que ha tenido ha sido notable, debido no solo a la curiosidad de muchos sobre cómo un país con las mayores reservas mundiales de crudo pudo derrumbarse así, sino también a las imágenes que nos ha dejado, con anaqueles vacíos y hambre, apagones eléctricos nacionales y colapso de los servicios públicos, millones de personas migrando por las fronteras, protestas masivas y de gran intensidad, y un conflicto político nacional de difícil resolución.

Sin embargo, lo que ha ocurrido en Venezuela no ha sido una crisis cíclica convencional: se ha producido un colapso societal, donde se ha generado un radical y drástico proceso de reorganización de la vida que ha sido analizado en profundidad en este trabajo.

Los aspectos que en particular han llamado la atención mediática y académica de esta crisis han sido el rol del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición tradicional con sus intentos de impulsar un cambio político en el país; las disputas geopolíticas, principalmente con el gobierno de los Estados Unidos; los impresionantes indicadores macroeconómicos de la debacle –como la depresión del PIB y la hiperinflación−, y los múltiples impactos humanitarios. No obstante, la dimensión ecológica de la misma ha quedado bastante relegada, y en los pocos casos en los que se ha tomado en cuenta, ha prevalecido una perspectiva más bien parcelada del asunto.

El colapso venezolano, en realidad, no solo ha implicado el derrumbe del centenario Petro-estado y sus instituciones, la debacle económica y la crisis humanitaria; sino que el mismo proceso de impacto sistémico ha trastocado todo el orden socioecológico nacional, lo que ha conllevado a altos niveles de devastación ambiental, modificación de paisajes y transformación de los territorios, significativos cambios en los patrones de extracción de los llamados recursos naturales, un escalamiento de la conflictividad en torno a estos bienes de la naturaleza, y serias perturbaciones en las dinámicas de reproducción de la vida cotidiana.

Partiendo de estos escenarios, en el presente trabajo intento no solo examinar la dimensión ecológica de este crítico período histórico, sino también proponer una lectura e interpretación del mismo desde una perspectiva de ecología política. En lo general, esto ha implicado recorrer el análisis desde presupuestos epistemológicos alternativos a las lecturas parceladas, económicas/economicistas o político-partidistas que han prevalecido en su análisis, buscando integrar las diversas nociones de naturaleza de los actores y los procesos de distribución ecológica, a las demás dimensiones en juego. En lo particular, mi estudio se ha enfocado, por un lado, en comprender los significativos

cambios que se estaban produciendo en el régimen extractivista ante el derrumbe de la ya vieja Venezuela petrolera, que nos introducía no solo a un nuevo período histórico sino también a un nuevo escenario eco-político. Por otro lado, como contraparte a estas dinámicas, me he orientado a analizar cómo respondió la sociedad venezolana, en sus luchas por y en torno a la naturaleza, ante este muy complejo devenir.

Desde mi trabajo de investigación, que por años se ha enfocado en el problema del extractivismo en América Latina, con un especial énfasis en Venezuela, me ha interesado abordar el notable sesgo que ha habido para aproximarse al asunto del petróleo en este país. El 'caso Venezuela' ha sido por décadas objeto de estudio nacional e internacional, vinculado primordialmente a las cuestiones sobre petróleo y desarrollo, la conformación de un Petro-estado tipológico, el problema de la renta petrolera y el fenómeno del rentismo, entre otros temas similares, junto a los estudios de la geopolítica del petróleo. Sin embargo, análisis sobre los impactos socioambientales del modelo petrolero y sus conflictos derivados, los dispositivos de control sobre la naturaleza y los procesos de distribución ecológica del Petro-estado han recibido muy poca atención, a pesar de ser factores cruciales en la evolución de dicho modelo. Algunos pensadores emblemáticos del petróleo de ese país, como Juan Pablo Pérez Alfonzo (uno de los creadores de la OPEP) o el economista Francisco Mieres, plantearon sustanciosas preocupaciones ambientales al respecto; y el antropólogo Fernando Coronil introdujo a la naturaleza en su análisis sobre el Petro-estado en el reconocido libro 'El Estado mágico'. Pero en Venezuela, el petróleo ha sido tan incontestable que una literatura crítica que interpele estos aspectos –pese a la devastación ambiental que históricamente ha dejado– ha sido realmente escasa. Nos hemos enfrentado no solo a un consenso económico, sino también epistémico. Estos antecedentes me motivaron a examinar y profundizar en una ecología política del modelo rentista petrolero, con énfasis en el Petro-estado, y por otro lado, en los movimientos socioambientales que buscaban contestar los impactos y las desigualdades en la distribución ecológica.

No obstante, el colapso ha trastocado también los enfoques y aproximaciones analíticas para estudiar el caso. El análisis del Petro-estado hacía referencia a un particular régimen extractivista, centralizado, predominante, nacionalizador y con una gobernanza motorizada a través de la renta petrolera; y los movimientos y luchas socioambientales se desenvolvían dentro de este marco. Estos factores se desplomaron: el poder se fragmentó, la renta se desintegraba, los actores políticos comenzaron a experimentar una degradación que apuntaba hacia orientaciones predatorias, se incrementó considerablemente la violencia y las disputas territoriales, el crimen organizado experimentó una extraordinaria expansión y predominancia, y parte importante de la población comenzó a estar determinada por lógicas de sobrevivencia. Esto hacía que varias de las categorías y recursos de análisis de este modelo petrolero, y de los movimientos sociales, sirvieran poco, o simplemente no sirvieran para aproximarse a los nuevos escenarios de la crisis.

Para estudiar a Venezuela en la presente investigación, además de mi perspectiva de ecología política, tuve por tanto que involucrarme con literatura sobre Conflictos por los Recursos Naturales y Estudios sobre Paz y Conflicto, más propios de análisis de casos en situaciones de conflicto armado en África y Asia; sobre Fragilidad Estatal y 'Estados fallidos'; sobre crimen organizado, seguridad y actores armados no estatales; y Estudios sobre Estrategias de Sobrevivencia. El colapso venezolano, en su carácter multidimensional, ha implicado una serie de escenarios poco vistos en América Latina y el Caribe, al menos en estas dimensiones; y posiblemente esté apuntando a nuevos escenarios históricos en los procesos permanentes de formación de Estado y de reconfiguración del extractivismo, en un contexto global marcado por las dinámicas del antropoceno.

Ha sido desde este marco que mis preocupaciones comenzaron a inclinarse a tratar de comprender cómo se desarrollan las disputas en torno a la naturaleza en el marco de un colapso como este. ¿Qué nuevas facetas históricas del extractivismo estamos presenciando? O bien, ¿qué puede pasar con el ambientalismo cuando el sistema social en el que se desenvuelve implosiona?

Esto fue la base para las preguntas generales de investigación que se plantearon para este estudio: en primer lugar, y respecto a los grupos de poder y predominantes, ¿Cómo son y qué forma adquieren las nuevas gobernanzas sobre los llamados recursos naturales y el territorio ante el colapso del Petro-estado? ¿Qué nuevas estructuras políticas orientadas a la extracción de naturaleza, emergieron en este período? ¿Qué rol juega el Estado y el crimen organizado en ellas?

En segundo lugar, y respecto a actores de la sociedad civil: ¿Puede el colapso societal configurar nuevas expresiones de luchas por y en torno a la naturaleza? ¿Cómo cambian las perspectivas de naturaleza en estos contextos? ¿Cuáles formas de ambientalismo logran persistir? Y ¿cómo los actores sociales desarrollan estrategias para garantizar la reproducción de la vida?

El abordaje de estas preguntas dio como resultado el análisis de la ecología política del período del colapso venezolano (2013-2022), que he llamado La Gran Crisis. El trabajo se presenta en cuatro capítulos: el primero expone los marcos teórico-conceptuales y los antecedentes histórico-geográficos de la investigación; en un segundo se analizan en profundidad los rasgos multidimensionales y particularidades del colapso; en el tercero se examina la emergencia de las nuevas gobernanzas en el extractivismo (abordando la primera tanda de preguntas de investigación que he presentado más arriba); y finalmente, en el cuarto capítulo se desarrolla un extenso estudio de las luchas sociales por y en torno a la naturaleza en contextos de sobrevivencia (segunda tanda de preguntas). Estos capítulos son precedidos por la exposición detallada sobre mis enfoques, herramientas y técnicas de levantamiento de la información y análisis que son presentados en la Sección de Metodologías.

II

Quisiera compartir aquí algunas motivaciones, vivencias y circunstancias que surgieron del proceso investigativo. En primer lugar, además de mis intereses académicos, la investigación doctoral ha estado motivada por las preocupaciones que surgen ante el acelerado y simultáneo deterioro de los ecosistemas y los regímenes democráticos en los últimos lustros en Venezuela y América Latina. La intensificación de la contaminación de cuerpos de agua, o de la pérdida de biodiversidad y bosques, se han compaginado con las crecientes dificultades de nuestras sociedades para contrarrestar estos avances y conseguir justicia ambiental. Desde la perspectiva de ecología política latinoamericana, que se ha caracterizado históricamente por ser un campo de estudio crítico y comprometido, he puesto el foco particularmente en el conflicto socioambiental como el escenario donde se expresan nítidamente las relaciones de poder sobre la naturaleza y la población, pero al mismo tiempo, las luchas de la sociedad donde defiende la vida humana y no humana y, eventualmente, busca transformar el sistema. Mi búsqueda en este trabajo también ha estado, por tanto, orientada en hacer visibles, dejar en evidencia, los nuevos mecanismos violentos de despojo y explotación en el extractivismo del siglo XXI, y las opciones y oportunidades que crean los grupos sociales ante un contexto tan degradado como lo ha sido el venezolano.

En línea con lo dicho, poco menos de dos años antes de iniciar la investigación doctoral, he fundado junto a un grupo de profesionales universitarios, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), con el objetivo de desarrollar un amplio monitoreo y registro de conflictos de distribución ecológica, y al mismo tiempo establecer un mayor involucramiento con los procesos de movilización socioambiental en el país.

Ha sido desde estas preocupaciones y experiencias que he establecido como base empírica de mi estudio el levantamiento y análisis de 75 conflictos de distribución ecológica, ubicados en todas las regiones de Venezuela. Con este conjunto de casos he pretendido obtener un retrato lo más integral posible de la relación entre extractivismo, poder y conflictividad socioambiental para el período en estudio, con el fin de lograr una caracterización más sólida de los cambios en este tipo de régimen a escala nacional, y de las variadas expresiones de las luchas sociales en torno a la naturaleza que se produjeron en regiones diferenciadas (luchas indígenas en la Amazonía, campesinas en las periferias, activismos y pobladores urbanos y semi-urbanos, entre otros). Para ello, adopto y reivindico la ecología política comparativa como aproximación metodológica, que contempla este ambicioso estudio multi-casos con una perspectiva multi-escalar, donde las expresiones locales se articulan y son comprendidas en sus vínculos con las dinámicas regionales/geográficas (biorregiones y diferentes estatalidades), y con la dimensión Estatal-nacional.

Este abordaje supuso la combinación del análisis de casos basado en metodologías cualitativas, con el análisis documental sistemático para caracterizar la política estatal en el gobierno de Maduro, el análisis espacial para la identificación de las tendencias territoriales/regionales y la realización de entrevistas en profundidad con actores clave

de los conflictos socioambientales para conocer más de sus motivaciones de lucha. He procurado que el registro de cada uno de los 75 conflictos seleccionados sea lo más exhaustivo posible, mostrando además su evolución en el período estudiado y ofreciendo algunas interpretaciones de sus tendencias particulares. Esto implicó también realizar varias actualizaciones de los mismos a lo largo de la investigación, y homologar cada registro para evitar grandes diferencias en la calidad de los casos. Esto representó un nivel de trabajo y de presupuesto mayor al previsto al inicio de la propuesta, lo que conllevó a que me tomara más tiempo concluirlo. Aunque el análisis multi-escalar ha podido ser muy demandante, el resultado ha sido una extraordinaria riqueza de datos, que ofreció una variedad de aristas de análisis muy nutritiva para comprender las dinámicas de la relación sociedad-poder-naturaleza en contextos como el colapso.

Por otro lado, el trabajo de involucramiento en las luchas socioambientales que llevamos adelante desde el OEP –a través del apoyo en el registro y difusión pública de sus denuncias, talleres de formación, acompañamiento en campañas y acciones jurídico-ambientales, entre otras iniciativas− representó para mí una rica experiencia al permitirme recorrer el territorio y tener cercanía a muchas movilizaciones que forman parte de mis casos. El seguimiento de la mayoría de los conflictos por años me ofreció la posibilidad de tener un conocimiento muy aterrizado y actualizado de estos procesos de lucha social, mantener un diálogo permanente con sus protagonistas y fortalecer la identificación de patrones de actuación del extractivismo en las localidades.

Tanto mi investigación, como la actividad con el OEP, estuvieron expuestas a riesgos en un contexto de creciente represión y amenazas a quienes protestan o se manifiestan en contra del extractivismo o los impactos ambientales de las actividades económicas. A medida que avanzó la crisis, el trabajo de organizaciones sociales, líderes comunitarios y profesores e investigadores de la academia fue siendo cada vez más vigilado y atacado, lo que incluyó la detención de varias personas de estos sectores. De los conflictos que he registrado hubo varias personas movilizadas que fueron detenidas, destacándose casos conocidos en la opinión pública como el del activista Santiago Arconada en 2015, vinculado a la lucha contra los impactos de la arenera Conluvar en Naiguatá; o el líder sindical del sector petrolero Eudis Girot en 2020, quien denunció las terribles condiciones en que opera Petróleos de Venezuela. Comunidades como la de Galipán (en el Parque Nacional El Ávila, Caracas) y del municipio Torres (estado Lara) contra la minería de sílice, donde estuve de visita de campo, fueron amedrentadas por cuerpos de seguridad o encapuchados. Wiston Montes, en defensa del embalse Los Quediches, tuvo que salir del país por amenazas; el líder campesino Jesús Osorio fue amedrentado con armas por parte de cuerpos de seguridad especiales y detenido, en sus luchas por el predio Los Tramojos; y la líder indígena pemón Lisa Henrito ha sido abiertamente criminalizada por el alto mando militar. Todos estos casos han sido denunciados públicamente.

De manera que, además de un contexto impactante y cruento para los defensores ambientales y de los territorios –y en general para toda oposición a las políticas del gobierno nacional−, el marco de la investigación ha sido considerablemente desafiante,

sin contar con los extraordinarios obstáculos que representaron los permanentes cortes de electricidad, la falta de transporte público, y en general la debacle de los servicios, junto a la hiperinflación que hacía sumamente difícil la sostenibilidad económica del estudio. Pese a esto, mi trabajó pudo finalmente culminarse con éxito y, como se expone en el capítulo 4, las movilizaciones de numerosos actores también persistieron.

III

Los antecedentes histórico-geográficos y ecológicos de estos escenarios de La Gran Crisis venezolana los voy a presentar en el Capítulo 1, en combinación con los principales conceptos y enfoques teóricos desde los cuales parto en mi investigación. La secuencia del análisis sigue la evolución del Petro-estado, desde su formación hasta el auge y declive del modelo rentista petrolero, que se va a profundizar en el proceso bolivariano liderado por Hugo Chávez. Del mismo modo, se expone de manera general el recorrido las luchas ambientales del siglo XX. Mi propuesta analítica en particular va a destacar cómo el Petro-estado configuró también una particular ecología política donde la naturaleza y los conflictos de distribución ecológica quedaron subordinados a la renta petrolera y su extraordinaria hegemonía y legitimidad en el orden político, económico y sociocultural del país. Las progresivas crisis del modelo desde fines del siglo XX trastocaron esta gobernanza y su relativa pacificación social, abriendo escenarios de cada vez mayor violencia e inestabilidad, que son también preludio de La Gran Crisis.

La exposición en este capítulo va a girar en torno a los dos ejes teóricos a partir de los cuales se desarrollarán los capítulos posteriores: por un lado, la relación histórica entre extractivismo/poder/territorio; y por otro lado, las diversas aristas y expresiones de los "ecologismos populares" que han sido ampliamente estudiados por Joan Martínez-Alier.

A partir del primer eje, abordo la geografía política del Estado para explicar el proceso dinámico mediante el cual, este último tiene más o menos capacidades de penetración y control socioterritorial, con el fin de consolidar el régimen extractivista. Me interesa conectar, en clave histórica, el carácter variante, parcial, y si se quiere precario que ha tenido dicho proceso en América Latina, con la extraordinaria fractura territorial y de poder que ocurre en Venezuela luego del colapso del Petro-estado, que modificó drásticamente el escenario del extractivismo.

A su vez, cuando hablo de 'poder' en esta relación, hago especial referencia a los conceptos de gobernanza y estatalidad. Articularé el primer concepto con la teoría del extractivismo para incorporar en este último el análisis multi-actores que, construyendo y ejerciendo autoridad territorial, se asocian en los procesos de extracción de los llamados recursos naturales y las cadenas de valor. Mientras que con estatalidad, intento integrar un recurso analítico para estudiar al Estado, no como un ente homogéneo, sino diferenciado, y así ilustrar las variadas formas en que se manifiesta el poder estatal en el territorio nacional, la diversidad de perfiles que pueden tener los conglomerados y

estructuras de actores estatales regionales, y como esto también se vincula con la explotación de naturaleza.

Sobre el segundo eje teórico, parto del concepto de 'ecologismos populares' por dos razones: en primer lugar, porque los sujetos en lucha provienen fundamentalmente de las clases sociales más desfavorecidas, en muy buena medida orientados a la preservación de los recursos naturales necesarios para sostener su vida; la segunda razón es que este concepto destaca la articulación intrínseca que existe entre estos ecologismos y las economías de supervivencia. Ambos factores son cruciales para mi análisis sobre la forma de los ecologismos en el marco de la extraordinaria precarización de la vida que ha caracterizado La Gran Crisis. Sin embargo, con estos insumos mi análisis intenta ir más allá de la 'economía moral contra la crematística del capital' y adentrarse en el muy tensionado, complejo, contradictorio, y muchas veces pragmático repertorio de respuestas sociales que determinan las dinámicas del colapso. Este más amplio espectro analítico inspira el capítulo 4.

El capítulo 2 propone una detallada radiografía de La Gran Crisis (2013-2022) ofreciendo un conjunto de datos económicos, sociales y ambientales para poder ilustrar con la mayor claridad posible las variadas dimensiones de este proceso histórico. He planteado una discusión sobre la relación entre el petróleo y las causas de la debacle –más allá de las populares tesis de que la misma fue generada por los conflictos por la abundancia del recurso, o simplemente por la mala administración de la renta petrolera–; y explico las razones de por qué lo que experimentó Venezuela fue un colapso societal localizado. A partir de estos factores se examinan los nuevos escenarios eco-políticos, donde prevalecerá una nueva configuración estatal, la multiplicación de focos de extracción de naturaleza y la expansión de las economías criminales que se vinculan a estos procesos. Estos elementos esbozan un cambio histórico del extractivismo post-Petro-estado en el cual protagonizan el oro, la Amazonía y las extracciones ilícito/criminales.

Llegamos así a los dos principales argumentos de mi investigación, que se desarrollan en los capítulos 3 y 4 respectivamente. El primer argumento (capítulo 3) sostiene que el régimen extractivista en su conjunto se ha reestructurado en buena medida, a través de la proliferación de gobernanzas híbridas, conformadas por los mecanismos de cooperación, asociación, integración e imbricación que se establecen entre el Estado (a través de actores como militares y cuerpos de seguridad, alcaldías y gobernaciones, instituciones mineras, entre otras) y el crimen organizado (bandas nacionales, guerrilla colombiana, garimpo patrocinado por facções desde Brasil). Dichas gobernanzas operan con el objetivo de posibilitar la extracción masiva de recursos naturales, a través de una específica división de tareas que componen parte de la cadena de valor de uno o más commodities. Sostendré que el rol del Estado en ellas puede ser protagónico, y que constituyen un método estratégico de asociación para concretar el imperativo extractivo, el cual tiene gran peso en los Estados dependientes de la exportación de materias primas.

Destaco la relevancia de mi análisis para ampliar la comprensión de este tipo de formas y dinámicas de extracción/apropiación de naturaleza en el presente siglo, en un contexto donde el crimen organizado se ha expandido y sofisticado extraordinariamente a escala global, y viene incorporándose crecientemente al extractivismo. Como veremos en la exposición del capítulo, en algunos sectores, commodities y cadenas de valor estos son actores estructurantes de los mismos: ocurre con el oro en casos como Ecuador o Colombia, donde las proporciones de extracción ilícita/criminal del total extraído pueden rondar el 80%; con la madera en casos como el Perú; con la coca, el coltán, las especies protegidas, con cultivos como el aguacate en México, una proporción relevante del acaparamiento de tierras en Colombia, entre otros. El crimen organizado despliega además un considerable control de territorios, de flujos financieros y logra incidir en el Estado. Mi punto es comprender que tal expansión y consolidación criminal sobre la apropiación de naturaleza, a estas enormes escalas, no ocurre de manera autónoma, y de hecho requiere de un rol central del Estado; que se pueden producir co-protagonismos, antes que solo una "captura del Estado"; y que, por tanto, esto expresa reconfiguraciones a nivel sistémico. Por esta razón he articulado las gobernanzas híbridas a la teoría del extractivismo, y he propuesto el concepto de extractivismo ilícito/criminal, como una faceta, parcial o total, que puede tener este tipo de regímenes.

Como lo presento en este capítulo, mi análisis contrasta con la literatura predominante sobre gobernanzas híbridas, que ha examinado las relaciones entre actores estatales, empresariales y la llamada sociedad civil dentro del marco de los estudios del desarrollo, la participación social y los nuevos modelos de gestión de negocios, y propone interpretaciones normativas, administrativas y despolitizadas. Contrapuesto a esta, busco contribuir a una perspectiva crítica que, aunque aún no es numerosa en producción académica, ha venido creciendo en los últimos años, y pone de relieve que las articulaciones interactorales en la construcción permanente de gobernanzas, pueden también estar conformadas por grupos estatales y criminales. Dicha perspectiva sobre gobernanzas híbridas en la investigación sobre extractivismo es aún más escasa, por lo que mi trabajo presenta una contribución que al respecto es original.

En la teoría del extractivismo, por tanto, mi análisis también puede ofrecer aportes: los agentes de extracción generalmente estudiados han sido empresas privadas nacionales y transnacionales, o empresas e instituciones estatales (mineras, petroleras, agroindustriales, entre otras), y en muy pocas ocasiones se ha puesto la mirada en estas poderosas estructuras criminales. Además, a nivel de la conceptualización del extractivismo, tampoco se ha reconocido el peso de estos agentes y economías en ella, por lo que intento ofrecer definiciones que favorezcan perspectivas más amplias, y reconozcan al crimen organizado y las gobernanzas híbridas como factores estructurantes de este tipo de regímenes.

Del mismo modo, desde la premisa de que el Estado puede ser incluso protagonista y/o promotor de estas gobernanzas híbridas, desarrollo también una discusión con las teorías normativas del Estado en América Latina –que puede interpretar estas actuaciones como expresiones de un "Estado truncado", como propone Guillermo

O'Donnell−, y extiendo una reflexión histórica sobre las nuevas aristas del problema estatal y las estatalidades en el siglo XXI.

En síntesis, el concepto de gobernanzas híbridas en el extractivismo ofrece elementos para un análisis transversal y vertical de este tipo de regímenes, sea porque: a) examina y caracteriza detalladamente la hibridación estatal/criminal en parte de las cadenas del extractivismo (mecanismos, estrategias y operaciones conjuntas entre estos actores); y b) simultáneamente, estudia sus articulaciones de abajo hacia arriba, sus incidencias en la composición del régimen extractivista (peso de las extracciones ilícito/criminales en el total nacional, vínculos de las operaciones territoriales con la política de Estado, entre otros factores).

Mi segundo argumento (capítulo 4) parte de la extraordinariamente amplia multiplicidad de respuestas y acciones colectivas que generó el contexto caótico, fragmentado, volátil y deprimido del colapso. Dichas acciones, aunque incluyeron la existencia de persistentes ambientalismos, vieron también prevalecer luchas sociales en torno a la naturaleza que fueron resolutivas, parciales, extractivas y/o utilitarias, con el objetivo de sobrellevar el contexto y sostener la reproducción de la vida. Mi perspectiva señala la insuficiencia para abordar estos casos desde teorías referentes como la de los movimientos sociales y por la justicia ambiental –las cuales han estado orientadas en muy buena medida a estructuras organizativas más sólidas, con agendas políticas e ideales de cambio sistémico−, para en cambio reivindicar una aproximación realista, no moralista y no romántica de estas luchas, que también reconozca y navegue minuciosa y críticamente en las contradicciones que implica mantener y defender el sostenimiento de la vida en tan duras condiciones.

En este sentido, se adopta esta polivalencia de expresiones como un ámbito privilegiado de análisis para este tipo de escenarios, y desarrollo en este capítulo elementos de interpretación hacia una *Ecología Política de la Sobrevivencia* (EPS), que contribuya a llenar los vacíos de las mencionadas teorías, y ofrezca insumos para reflexionar sobre lo ambiental en marcos de derrumbe sistémico.

Mi análisis, por tanto, pone en el centro la cuestión de la sobrevivencia, lo que va a implicar desplegar una discusión sobre los diferentes abordajes teóricos y políticos que se han dado en torno a ella. ¿Qué sentidos y significados tiene la sobrevivencia en tiempos de crisis profunda? ¿Qué lugar se le da al sujeto y la naturaleza en ella? Mi exploración teórica intenta también debatir con este campo de estudio –que en ciencias sociales ha sido denominado como Estudios sobre Estrategias de Sobrevivencia− integrando perspectivas críticas que, antes que solo retratar sujetos reactivos y administradores de sus desgracias, exploran otras politicidades y potenciales de creación y transformación en estos escenarios de contingencia y acontecimiento. Para ello, integro a la ecología política otros aportes como los de la literatura de Conflictos por los Recursos Naturales, la teoría de Estrategias de Reproducción Social de Bourdieu, Estudios Rurales críticos, Historia Ambiental, Economía Política o el Feminismo Marxista, entre otros.

Me parece crucial y de gran pertinencia el análisis de la EPS en un contexto global donde avanza la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, se expresan colapsos localizados –como en Venezuela, Haití o Cuba−, y se incrementan conflictos armados en todo el planeta. La discusión sobre la sobrevivencia se ha vuelto cada vez más difundida –no solo en círculos científicos, sino también gubernamentales e institucionales, políticos y de los movimientos sociales− y, asumiendo conceptos como el antropoceno y la crisis civilizatoria, esta se redimensiona y plantea importantes interrogantes sobre las luchas en defensa de la naturaleza y el ambiente en el planeta de hoy y de los próximos lustros −¿qué es o será el ambientalismo en el antropoceno?

Mi investigación, en su conjunto, intenta modestamente acercarse a algunas de las preocupaciones y problemas más sensibles que nos atañen en la crisis global que enfrentamos, donde el sostenimiento de la vida está en serio peligro.

METODOLOGÍAS

La tesis doctoral está basada en la ecología política como enfoque principal, la cual orienta su análisis a las relaciones de poder, conflictos y disputas que se desarrollan en torno a la naturaleza y la distribución ecológica (Martínez-Alier, 2003; Alimonda, 2011; Moore, 2011; 2013; Leff, 2015). Esta perspectiva ofrece ideas y herramientas para examinar críticamente las estructuras de poder, y los impactos y conflictos socioambientales generados por la expansión del extractivismo (ver marco teórico en el Capítulo 1). Adicionalmente, fueron incorporadas ideas desde la economía política, la geografía crítica y la economía ecológica para un análisis más comprehensivo.

Para esta investigación he recurrido específicamente a la Ecología Política Comparativa (EPC), que es una perspectiva que se basa en el análisis de múltiples casos ubicados en diferentes regiones −los cuales pueden ser conflictos socioambientales emblemáticos y/o históricos−, que son estudiados comparativamente de acuerdo a temáticas específicas (Temper et al, 2015). El objetivo es identificar patrones económicos, políticos, sociales o ecológicos de los conflictos –como los tipos de commodities, intensidad de los conflictos, tipos de grupos movilizados, entre otros−, y cómo estos se expresan a través del espacio geográfico. La EPC ha venido siendo utilizada en recientes investigaciones basadas en el Atlas de Justicia Ambiental, como las de Pérez-Rincón, 2014; Latorre et al, 2015; Neyra, 2019; Pérez-Rincón et al, 2019; y Le Tran et al, 2020.

En esta línea, el conjunto de los 75 conflictos examinados para esta investigación se inserta en una perspectiva multi-escalar (Escobar 2001; Paulson and Gezon, 2005) desde el cual adoptaré tres niveles simultaneos de análisis: *Local – Biorregión - Política de Estado*. Busco articular los aspectos locales de los conflictos con cadenas de valor transfronterizas de commodities, el régimen extractivista nacional, procesos de transformación territorial de amplia escala y políticas de Estado. Además, el estudio conecta analíticamente estos casos a un ámbito más amplio de conflictos por los recursos naturales (Watts, 2001; Bridge and Le Billon, 2013; Kaldor et al, 2007) y procesos de acumulación de capital a escala global (Moore, 2013).

La tesis doctoral es parte de un trabajo de investigación sobre extractivismo y conflictos socioambientales en Venezuela que he desarrollado desde 2014 hasta 2023 (Teran-Mantovani, 2015; 2016; 2018a; 2018c; 2023), y desde mi participación en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (https://www.ecopoliticavenezuela.org/), una organización líder en el país en la investigación-acción orientada al monitoreo, registro, acompañamiento y análisis de conflictos socioambientales.

Mi análisis de EPC basado en el estudio de estos 75 conflictos socioambientales lo he desarrollado a partir de tres métodos: análisis cualitativo, investigación documental sistemática y análisis espacial. A continuación, presento de manera sintética en la TABLA 1M estos métodos, describiendo la literatura a la que se inscribe, cómo se

aplicó y en qué capítulos se utiliza cada técnica. Posteriormente, voy a explicar en detalle estos aspectos de cada metodología.

TABLA 1M. Métodos aplicados en la investigación doctoral, partiendo desde la perspectiva de la Ecología Política Comparativa

MÉTODOS APLICADOS AL ANÁLISIS DE EPC			
MÉTODO	**ENFOQUE/LITERATURA**	**APLICACIÓN**	**CAPÍTULO(S)**
Análisis cualitativo	Análisis cruzado de casos (*cross-case analysis*). Miles y Huberman (1994)	1 Matriz General 3 Matrices específicas: Gobernanzas Híbridas 2 Matrices específicas: Ecologismos de Sobrevivencia 15 Entrevistas en Profundidad	CAPs 2, 3 y 4 CAP 3 CAP 4 CAP 4
Investigación documental	Análisis documental sistemático. Bowen (2009)	Literatura conceptual (Construcción de Base Teórica) Fuentes Históricas (petróleo, Petro-estado, economía rentista) Documentos de caracterización Ambiental, Geográfica y Geológica de Venezuela Datos y análisis de dimesiones económicas, sociales, políticas y ambientales de La Gran Crisis Leyes, decretos, lineamientos, declaraciones oficiales (Caracterización de la Política de Estado)	CAP 1, 2, 3 y 4 CAP 1 CAP 1 CAP 2 CAP 3
Análisis espacial	Análisis Espacial Cualitativo. (Madrid y Ortiz-López, 2005; Rucks-Ahidiana y Bierbaum, 2015)	Mapeo con georreferenciación Análisis de imágenes satelitales Representación Gráfica (elaboración de mapas)	CAP 3 CAP 2 y 3 CAP 3 y 4

I. Análisis cualitativo

Primero, describo el proceso de selección, registro y construcción de los casos; seguidamente, las razones y criterios para establecer las 15 entrevistas en profundidad. Posteriormente explico cómo se desarrolló el análisis de datos, matrices y las entrevistas.

I.I Selección de los casos

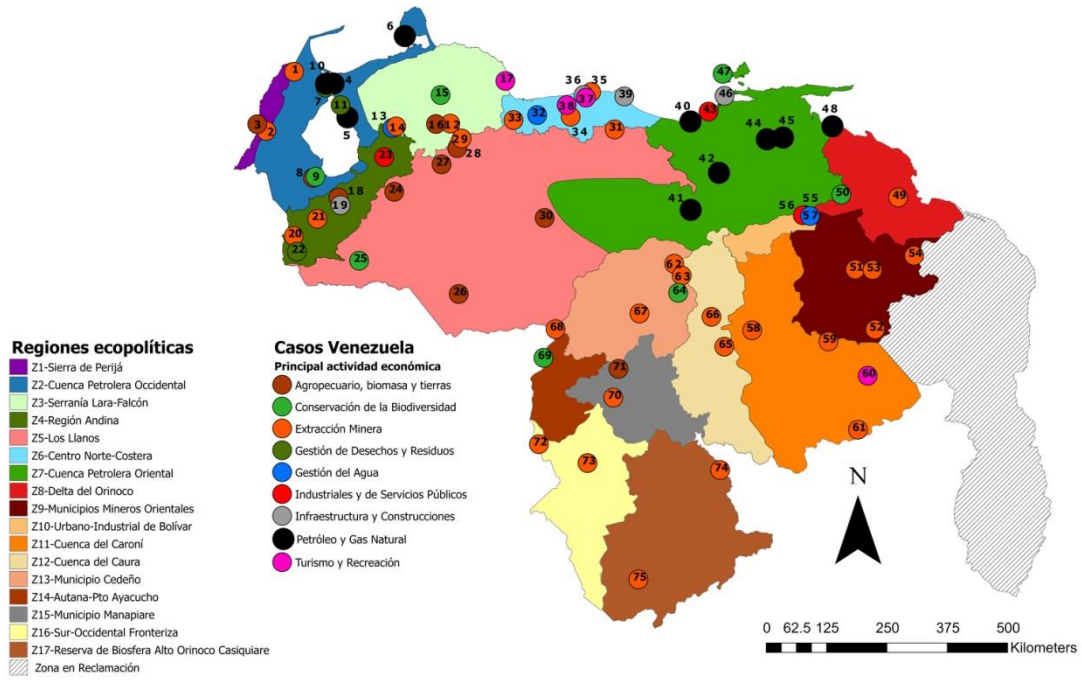
Los 75 casos emblemáticos han sido seleccionado de acuerdo a varios criterios: a) contemporaneidad, es decir, que los casos se hayan desarrollado en el período de La Gran Crisis 2013-2022, sea que estos comenzaron en dicho período o previamente; b) movilización social prominente o caso de relevancia mediática; c) representatividad geográfica, es decir, que el caso exprese los principales rasgos de la conflictividad socioambiental en una región determinada; y d) impacto ambiental significativo.

El número total de casos fue escogido de manera de alcanzar una representatividad de todas las regiones del país, con una proporción razonable de casos por cada una de ellas de acuerdo a los niveles de población y su relevancia económica; pero también, que el

trabajo de recolección y registro de los casos se ajustara a los tiempos previstos para la investigación y al alcance presupuestario.

Los 75 casos seleccionados (ver TABLA 2M) han sido distribuidos de acuerdo a una zonificación de espectro nacional que he construido, y que he llamado Mapa de Zonas o Regiones Eco-políticas. Esta zonificación ha sido diseñada buscando desbordar el ordenamiento territorial tradicional y oficial (municipios y estados), dado que puede ser muy limitado para comprender las dinámicas socioecológicas y de territorialización. El mapa propone 17 zonas ecopolíticas, construidas a partir de la combinación de 4 criterios: 1) biorregión (basada en continuidades ecosistémicas y socioecológicas); 2) patrones de asentamiento poblacional y cultural; 3) zonas económicas (donde se han impuesto 'vocaciones' como la petrolera o la minera); y 4) niveles de conflictividad socioambiental (ver FIGURA 1).

FIGURA 1. Mapa de Regiones Ecopolíticas de Venezuela, con conflictos georreferenciados. Fuente: elaboración propia



Las nuevas zonas creadas expresan la diversidad biosocial del país, las territorialidades y las diferentes actividades económicas que generan los conflictos. En el ANEXO 1 se presenta la numeración, los nombres y la descripción de cada una de estas regiones.

He clasificado los casos de acuerdo a la tipología del EJAtlas (https://ejatlas.org/about), que propone 10 categorías principales de actividades económicas. He prescindido de la categoría "Energía Nuclear", dado que en Venezuela no hay instalación ni proyecto de este tipo. Las 9 restantes categorías se han denominado de la siguiente manera, identificadas con los colores que vemos en la FIGURA 1: Petróleo y Gas Natural;

Extracción Minera; Gestión de Desechos y Residuos; Agropecuario, biomasa y tierras; Gestión del Agua; Infraestructura y Construcciones; Turismo y Recreación; Conservación de la Biodiversidad; e Industriales y de Servicios Públicos.

Existen conflictos de cada una de estas actividades económicas; del mismo modo, dada la amplia distribución de los casos en la geografía nacional, los diferentes grupos sociales del país (como pueblos indígenas, comunidades campesinas, población urbana y semi-urbana) se ven representados en los mismos.

TABLA 2M. Lista de los 75 conflictos socioambientales en Venezuela analizados (2013-2022). Distribuidos por Regiones Ecopolíticas. Fuente: elaboración propia

No.	CASO	REGIÓN	No.	CASO	REGIÓN
C1	Indígenas wayúu del Socuy defienden sus territorios ante el avance de proyectos vinculados a la extracción de Carbón (Carbozulia)	1	C39	La defensa de las lagunas costeras de la región de Barlovento (Lagunas Tacarigua y La Reina, estado Miranda)	6
C2	Indígenas yukpa de los ríos Yaza y Tukuko luchan por frenar la expansión de Carbozulia en la Sierra de Perijá	1	C40	Los impactos socioambientales del Complejo Industrial Petrolero José Antonio Anzoátegui	7
C3	Deforestación por la producción de malanga en la Sierra de Perijá	1	C41	Habitantes de San Diego de Cabrutica se movilizan por escasez de agua e impactos de PDVSA (Faja Petrolífera del Orinoco)	7
C4	Impactos comunitarios del Complejo Petroquímico El Tablazo (Zulia)	2	C42	Indígenas kariña de la comunidad de Tascabaña afectados por PDVSA (Anzoátegui)	7
C5	Movilizaciones ante la contaminación petrolera en el Lago de Maracaibo	2	C43	Contaminación del aire en Guanta y Parque Nacional Mochima por Cementera Vencemos (Anzoátegui)	7
C6	Los impactos socioambientales del Complejo Refinador Paraguaná	2	C44	Los impactos socioambientales de los mechurrios (gas flare) en Jusepín (Monagas)	7
C7	La contaminación del aire en Maracaibo y su relación con la crisis del aseo urbano	2	C45	Contaminación del Rio Guarapiche por PDVSA (Monagas)	7
C8	Impactos socio-ambientales de las plantaciones de palma aceitera en el Sur del Lago de Maracaibo	2	C46	El proyecto del puerto de aguas profundas en la península de Araya	7
C9	La defensa de especies animales en riesgo en el Sur del Lago de Maracaibo	2	C47	La defensa de la Cotorra margariteña (Nueva Esparta)	7
C10	La contaminación de la Laguna de Sinamaica por el contrabando transfronterizo de combustible	2	C48	Impactos socio-ambientales a indígenas warao por explotación petrolera en Pedernales (Delta Amacuro)	8
C11	El conflicto en torno al vertedero a cielo abierto Pedregalito en Cabimas	2	C49	Indígenas warao en el bajo Delta del Orinoco contaminados por desechos de la Corporación Venezolana de Guayana y de la minería ilegal	8
C12	La minería no metálica (areneras) en el marco del conflicto en torno al Valle del Turbio (Lara)	3	C50	Contrabando de especies de fauna silvestre pone en riesgo la biodiversidad en Delta Amacuro	8
C13	La defensa del embalse Los Quediches (Lara)	3	C51	Violentas disputas en torno a la minería ilegal y la contaminación por mercurio en El Callao (Bolívar)	9
C14	Organizaciones y comunidades luchan contra la minería de sílice en el municipio Torres (Lara)	3	C52	La expansión de la minería en Las Claritas y su relación con la epidemia de malaria en Venezuela	9
C15	Tráfico del pájaro "Cardenalito" en Lara	3	C53	Violencia creciente en Tumeremo por control de la minería de oro de grupos irregulares (Bolívar)	9
C16	El envenenamiento con agrotóxicos del	3	C54	Violencia y destrucción ambiental en	9

	Valle de Quíbor			el sector Bochinche, Reserva Forestal Imataca (Bolívar)	
C17	Impacto sobre los manglares del Parque Nacional Morrocoy por proyectos de Desarrollo Turístico (Puerto Morrocoy y Venetur)	3	C55	El cierre del vertedero de Cambalache y la situación de desechos en Ciudad Guayana	10
C18	Pobladores de La Azulita se movilizan en defensa de los humedales del municipio Andrés Bello (Mérida)	4	C56	Contaminación por las lagunas de oxidación (lodos rojos) de CVG-Bauxilum	10
C19	Las luchas para salvar y regenerar la Laguna de Urao, estado Mérida	4	C57	Los impactos socio-ambientales de la contaminación del embalse Macagua (Bolívar)	10
C20	Conflictos en torno a las diversas formas de minería de carbón en Lobatera (Táchira)	4	C58	Disputas de los indígenas del Alto Paragua en torno a la minería ilegal en sus territorios	11
C21	La memoria histórica en el Valle de Mocotíes y su vigencia para el rechazo a la minería en Bailadores (Mérida)	4	C59	Disputas de indígenas pemón del Sector II en torno a la minería ilegal en el río Carrao (Parque Nacional Canaima, estado Bolívar)	11
C22	Crisis sanitaria por el colapso del relleno sanitario de San Josecito (Táchira)	4	C60	Controversias históricas y actuales en torno al turismo en territorio Pemón en el Parque Nacional Canaima (Bolívar)	11
C23	Contaminación del aire y las aguas en la cuenca del río Motatán por central azucarera y otros (Trujillo)	4	C61	Impactos a indígenas de la cuenca de Ikabarú por disputas en torno al control de la minería de oro (Bolívar)	11
C24	Comunidades de los municipios Bolívar y Barinas denuncian contaminación del Río Santo Domingo	5	C62	Habitantes del bajo Caura protestan por la instalación cerca de Maripa de balsas para explotación de oro en el lecho del río (Bolívar)	12
C25	Disputas en torno a los últimos relictos de la Reserva Forestal de Caparo, Barinas	5	C63	Los conflictos por el control de la mina “El Silencio”, municipios Cedeño y Sucre (Bolívar)	12
C26	Desplazamiento forzado del pueblo Pumé en el Estado Apure	5	C64	La creación del Parque Nacional Caura y sus controversias con comunidades indígenas y científicos	12
C27	Conflictos campesinos en torno a las plantaciones de eucalipto en Ospino, estado Portuguesa (Cartones de Venezuela, antigua Smurfit Kappa)	5	C65	Impactos de la minería ilegal en el Alto río Caura en los pueblos Yek’wana, Sanemá y Hoti	12
C28	Extracción ilícita de Tecas en la Zona Protectora Mitar Nakichenovich (Portuguesa)	5	C66	Los impactos socio-ambientales de la mina de bauxita a cielo abierto Los Pijiguaos (Bolívar), de la estatal CVG Bauxilum	13
C29	Las luchas en defensa del Cerro La Vieja (Lara)	5	C67	Minería ilegal de diamantes genera desplazamientos de indígenas Eñepa de Guaniamo (Bolívar)	13
C30	Disputas por la gestión de la tierra y ecocidio en Predio Los Tramojos (Guárico)	5	C68	Los impactos de la minería ilegal de coltán en la frontera colombo-venezolana (estados Bolívar y Amazonas)	14
C31	Minería en el Monumento Natural de los Morros de Macaira (Guárico)	5	C69	Contrabando de especies en el estado Amazonas	14
C32	El trasvase de aguas del Lago de Valencia	6	C70	Impactos de la minería ilegal en indígenas yabarana, hoti y e’ñepa, municipio Manapiare (Amazonas)	15
C33	Minería ilegal en el sur de Carabobo	6	C71	Las luchas de las comunidades uwottüja para salvaguardar la producción agrícola en el municipio Manapiare (Amazonas)	15
C34	Los impactos socioambientales de la minera Loma de Níquel en las comunidades de Tiara y Altagracia de la Montaña	6	C72	Indígenas arawaks del sur afectados por minería ilegal en la cuenca del río Atabapo	16
C35	Conflictos en torno a la explotación de cantera en el río Naiguatá (La Guaira)	6	C73	La minera ilegal en el Parque Nacional Yapacana	16

C36	Movilizaciones en Defensa del Parque Nacional Waraira Repano / Ávila, Distrito Capital	6	C74	Los impactos de la minería ilegal en comunidades indígenas yanomami en la cuenca del río Ocamo (Amazonas)	17
C37	Vecinos de Sebucán luchan contra deforestación en la escuela de enfermería (UCV) en el contexto de movilizaciones en Caracas en defensa del arbolado urbano	6	C75	Comunidades yanomami afectadas por minería ilegal de oro en Cerro Aracamuni y río Siapa (municipio Río Negro, Amazonas)	17
C38	Campesinos contra la deforestación en El Jarillo (Miranda)	6			

I.II Construcción y registro de los casos

El registro de los casos se ha hecho a partir del formulario de la base de datos del EJAtlas. Este instrumento consta de 8 secciones, de las cuales 6 son relativas a contenidos acerca de los casos y tienen en total 30 preguntas (las últimas dos secciones son para referencias y meta-información) (Ver el formulario en ANEXO 2). Las 6 secciones mencionadas son las siguientes: 'Datos Básicos' (para identificar el conflicto), 'Fuente del Conflicto' (relacionado con actividades económicas y productos básicos); 'Detalles del Proyecto y Actores' (características de las iniciativas económicas y los grupos de actores involucrados en ellas), 'Conflicto y Movilización' (descripción y detalles de los grupos movilizados y las movilizaciones en sí), 'Impactos del Proyecto' (ambientales, de salud y socioeconómicos), y 'Resultado' (relacionado con la situación en la que se encontraba el conflicto en el momento en que fue analizado, así como las iniciativas económicas, las respuestas de los actores involucrados y la consecusión o no de la justicia ambiental).

De acuerdo a los objetivos de mi investigación doctoral, he realizado algunas modificaciones al instrumento, con el fin de ampliar el rango de algunas preguntas, facilitar la organización de las variables, y enriquecer el análisis cualitativo. A partir de los cambios hechos, he trabajado con mi propio formulario para el registro de los casos. Las modificaciones fueron los siguientes: se realizó una pequeña reorganización de las preguntas. Por ejemplo, la pregunta sobre las 'Organizaciones de justicia ambiental' fue pasada de la sección de 'Detalles y Actores del Proyecto' a 'Conflicto y Movilizaciones'. El formulario fue traducido al español y se elaboró un instructivo para su correcto uso, principalmente para orientar a otros colaboradores que participaran en su llenado. Se han ampliado un par de preguntas de la sección 'Detalles y Actores del Proyecto' para que se puedan incluir actividades y actores económicos ilegales, informales y criminales (como los que hacen parte de la minería ilegal), considerando la importancia de estos en los conflictos socioambientales venezolanos del período en estudio.

Se eliminó el límite de 500 palabras del 'Resumen del Conflicto', dejándolo sin límite; y he planteado esta sección para desarrollar análisis más amplios y explicaciones causales del caso específico, así como proponer hipótesis. Se han integrado dos preguntas cerradas de la sección 'Conflicto y Movilización', creando en cambio una pregunta abierta para la 'Cronología y Detalles de las Movilizaciones', de manera que

sea más narrativa y explicativa. En esta misma sección, se ha creado una pregunta abierta: 'Algunas Reivindicaciones y Peticiones de los Grupos Movilizados', en la que se pueden colocar elementos como las demandas específicas o las narrativas ambientales de las agrupaciones sociales involucradas en los casos. Asimismo, tres de las cuatro preguntas de la sección 'Resultados' (que ha pasado a llamarse 'Desarrollo del Conflicto') se han convertido en preguntas abiertas.

En el ANEXO 3 se presenta una tabla con las preguntas del formulario, las variables que representa, su descripción y los capítulos de la tesis a los que contribuye. La sección III, que ofrece datos sobre las actividades económicas que generan los conflictos, y los principales actores involucrados en ellos, permite responder a las preguntas del capítulo 3 sobre gobernanzas y estatalidad. La sección 'Conflicto y Movilización' está enfocada a responder principalmente las preguntas de investigación del capítulo 4, aunque es posible encontrar información útil para responder preguntas del capítulo 3 (p.ej. la interacción de las instituciones estatales y/o actores ilícito-criminales respecto de las movilizaciones sociales). La sección de 'Resumen del Caso' ofreció ricas ideas y contenidos de análisis que contribuyeron a todos los capítulos.

Cada uno de los casos analizados siguió los mismos criterios de recolección de datos. El llenado de los formularios se basó en una serie de fuentes secundarias, tales como: declaraciones de diferentes ONGs, entrevistas publicadas en medios, documentales en video, denuncias realizadas por comunidades afectadas, informes de grupos activistas, documentos y declaraciones oficiales, artículos de periódicos y trabajos académicos. Esta información fue complementada con entrevistas (no estructuradas) a actores clave, las cuales sirvieron para cubrir vacíos que las mencionadas fuentes no abarcaban; para responder a interrogantes relacionadas con algunos complejos nudos críticos de los conflictos que ameritaban profundización; o bien para señalar alguna omisión importante del caso que se haya dado.

El registro de los conflictos fue llevado por mí, aunque varios expedientes fueron llenados, parcial o totalmente, por colaboradores bajo mi coordinación. Esto último ha implicado que delegué, orienté, revisé y comenté cada uno de los casos registrados por otras personas, con el objetivo no solo contrastar la calidad de la información y las fuentes, sino también su correspondencia con los objetivos de la tesis.

Desde el año 2017, casi 2 años antes de iniciar la investigación doctoral, junto a un grupo de profesionales (sociólogos, historiadores, ecólogos, antropólogos, comunicadores y educadores), fundé el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), desde donde coordiné el trabajo de registrar los conflictos socioambientales más emblemáticos del país. Al comenzar mi investigación, he alineado esta propuesta con los objetivos del registro para la tesis doctoral. Para ello, en una primera fase, comencé el llenado y la actualización de unos 20 casos, que además había presentado para mi tesis de maestría en el ICTA-UAB. Posteriormente, se propuso la ampliación del registro con la contribución de otros integrantes del equipo del OEP, y en una tercera

fase, se unieron colaboradores externos a la organización, también profesionales con experiencia en conflictos socioambientales −un sociólogo de la Universidad del Zulia con más de 30 años de actividad ambientalista, un doctor en Biología de la Conservación (UC Madrid) y actual profesor de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), una geógrafa de la Universidad Central de Venezuela, un investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), una estudiante de doctorado de la Universidad de Carabobo, o miembros de organizaciones ambientalistas, como el Frente Ecológico Portuguesa (en la región de Los Llanos). Con estos esfuerzos se lograron recolectar los 75 casos, aunque estos requirieron de varios procesos de actualización con el fin que estos cubrieran todo el período estudiado (2013-2022).

Cabe añadir que, gracias al establecimiento del OEP como una organización que estaba difundiendo los conflictos y luchas socioambientales en el país, se logró una muy buena interlocución con muchos de los grupos movilizados y se pudo recorrer varios de los territorios de los casos examinados, lo que ofreció un mayor y más aterrizado conocimiento de las dinámicas predominantes en estas disputas y las perspectivas ambientales de los actores.

Los casos estuvieron disponibles al público a través de la web del OEP, y su primera tanda fue presentada en la Universidad Central de Venezuela en enero de 2018[1]. Sin embargo, con el paso de los años la plataforma experimentó problemas técnicos y no se ha hallado aún el suficiente presupuesto para levantarla nuevamente. Los 75 expedientes están disponibles en PDF.

I.III Entrevistas en profundidad a actores clave de los conflictos

Se estableció la realización de 15 entrevistas en profundidad con personas relevantes en algunos de los conflictos socioambientales estudiados, en línea con las preguntas de investigación del capítulo 4, que se proponían conocer las diferentes motivaciones, orientaciones y estrategias de los grupos movilizados para luchar por la naturaleza en un contexto como el del colapso. El registro de casos desde el formulario, no podía ofrecer las ideas y perspectivas de estos in extenso, por lo que se eligió complementarlo con esta herramienta de investigación.

Se eligieron a los entrevistados buscando representatividad, de acuerdo al tipo de grupo movilizado: 3 del ámbito de pueblos indígenas; 6 del ámbito rural/campesino; y 6 de las luchas ambientales urbanas. Al mismo tiempo, los entrevistados se escogieron dada la relevancia de su participación en las luchas y los impactos positivos de sus acciones en estas, teniendo generalmente un rol de liderazgo.

[1] Véase https://ecopoliticavenezuela.org/lanzamiento-del-mapa-conflictos-socio-ambientales-venezuela-mie-24-ene/

En el ANEXO 4 presento las preguntas guía de la entrevista, las cuales orientaron la conversación, aunque esta pudo también seguir el curso espontáneo del intercambio, con el fin de obtener información sobre otros aspectos complementarios. Dos tercios de las preguntas planteadas están enfocadas a profundizar en la comprensión sobre las motivaciones, perspectivas de naturaleza y estrategias de resistencia de los grupos movilizados. Adicionalmente, hubo dos preguntas sobre la relación entre estos grupos movilizados y las estructuras de poder a las que se enfrentaron, que podían contribuir a responder preguntas del capítulo 3 sobre gobernanzas, o para enriquecer el llenado de los formularios.

Las entrevistas se condujeron de manera presencial o virtual (vía Zoom), esto último por la imposibilidad de traslado hasta los territorios dadas las complicaciones propias del contexto (falta de transporte, inseguridad, entre otros factores).

I.IV Bases del análisis cualitativo de los datos

Mi análisis cualitativo sigue los procedimientos y secuencias planteados por Milles y Huberman (1994) fundamentalmente orientado al 'Análisis Cruzado de Casos' (*Cross-case Analysis*): reducción de datos (con creación de categorías y diseño de códigos), despliegue y visualización de datos (creación de matrices) y generación de conclusiones. Desde este enfoque he adoptado una estrategia de análisis combinada orientada tanto a los casos –desde los cuales extraigo la riqueza de la particularidad−, como a las variables –que me ofrece aproximaciones analíticas más amplias en la comparativa entre casos.

Para el despliegue de los datos he creado una Matriz General (MG) o 'Meta-matriz' y 5 matrices específicas. Con respecto a la primera, esta se ha concebido como una matriz de Análisis Cruzado de Casos vinculado a variables causales que están conectadas entre ellas, donde se examinan las más influyentes en los resultados (ídem). Estos componentes ayudan tanto a construir el marco y las características generales de los conflictos estudiados, como a responder a las preguntas de investigación. La elaboración inicial de esta MG, creada como un Excel, se ha basado en las preguntas del formulario de registro de casos, las cuales fueron transformadas en variables y dispuestas en filas, teniendo en la columna principal el listado de los 75 conflictos. Dado que el instrumento de registro tenía organizadas las preguntas por secciones (datos de la localidad, características de la actividad económica, cronología de las movilizaciones, etc), este agrupamiento de variables también se expresó en la MG, lo que permitió contar con clusters temáticos de las mismas, facilitando la utilización y el aprovechamiento de la información en el análisis.

Algunas de las variables en la matriz tenían valores predeterminados (casos de selección simple, algunas con opción múltiple) y otras se plantearon como preguntas abiertas. Entre las variables de selección simple encontramos, por ejemplo, cuestiones como el

tipo de commodity involucrado en cada conflicto. Aunque mi tesis no contempla el análisis estadístico ni cuantitativo, este tipo de variables me permitió poner de relieve las principales frecuencias numéricas de variados aspectos de los casos, y sus expresiones en las diversas escalas espaciales. De esta forma se pudieron examinar cuestiones como las tendencias en los conflictos hacia determinados recursos naturales; o en cuántos casos de todo el país participaban grupos criminales, y cómo se expresaba esto por regiones. Esto lo realicé totalizando la frecuencia de cada una de las categorías de una variable determinada, y calculando la proporción de cada una de ellas; algo que también se podía obtener cruzando la variable con otra u otras más –por ejemplo, cuántos conflictos de alta intensidad hubo y cuántos de ellos tenían que ver con el oro.

Por otro lado, en las variables de respuesta abierta se pueden hallar algunas con información muy puntual –por ejemplo, área del proyecto o de la actividad económica, expresada en hectáreas o kilómetros−, otras que contemplan varios ítems de información –como las Demandas de los Grupos Movilizados, donde se colocan las principales enunciadas por estos−, y otras de amplio desarrollo, como el Resumen del Caso, que ofrece una completa descripción y análisis de todos los factores en juego en el conflicto.

A partir de los primeros procesos de análisis –revisión uno a uno de los conflictos−, el marco teórico propuesto y las preguntas de investigación, identifiqué otras variables categóricas que son clave para responder a dichas interrogantes sobre gobernanzas/estatalidades y ecologismos en contextos de sobrevivencia. Estas variables fueron incorporadas posteriormente a la MG, sumando taxonomías cruciales para la organización de la data, que me permitió además sintetizar y categorizar información que se desprendía de las preguntas abiertas. Luego de completado el llenado de todos los casos, y con todas las variables ya consolidadas, los formularios fueron vaciados en la MG. A continuación se describen estas variables categóricas y sus taxonomías:

TABLA 3M. Variables categóricas y su taxonomía, agregadas a la Matriz General luego del primer análisis de datos

GOBERNANZAS Y ESTATALIDADES		**ECOLOGISMOS EN CONTEXTOS DE SOBREVIVENCIA**	
Variable	**Clasificación**	**Variable**	**Clasificación**
Territorialidad	Nueva frontera de commodities Zona de sacrificio Periferia Ciudad/Centro político	Tipología de lucha	Ambientalismo fuerte Ambientalismo débil Lucha por medios de vida ecológico Extracción de recursos naturales Sobrevivencia
Perfil normativo de la actividad económica	Legal Ilegal		
Presencia Economía ilícita/criminal	Si No	Masividad	Masivo Comunidad Liderazgo individual
Tipo de grupo criminal	Banda criminal nacional Grupo de choque privado Grupo paraestatal venezolano Paramilitarismo colombiano FARC-disidencias ELN	Escala de la lucha	Local/comunitario Voces simultáneas no articuladas Movimiento Articulación amplia Impacto nacional

	FARC-disidencias y ELN Facções/garimpo Banda criminal extranjera Broker en la sombra Nexos entre particulares y funcionarios estatales Otros		
Economía transfronteriza	Si No	Bien común	Sin categorías (describe valoraciones ambientales predominantes en las narrativas de los grupos movilizados)

En cuanto a la codificación, esta se diseñó también a partir de los marcos teóricos, las preguntas de investigación y la lectura detallada de los casos, enfocados específicamente en el análisis a profundidad de la formación de gobernanzas híbridas y los ecologismos en contextos de sobrevivencia. En este sentido, el conjunto de códigos se propusieron especialmente para identificar: a) Las operaciones de los actores estatales y criminales en el extractivismo, a saber, los rasgos de los actores criminales, sus métodos de operación y las economías ilícitas desde las que actúan; las actividades extractivas desarrolladas por actores e instituciones del Estado y sus roles específicos en ellas; y las posibles articulaciones y asociaciones entre estos dos grupos (Capítulo 3). Y b) las expresiones de persistencia de lo ambiental en el colapso, y las diversas formas de sobrevivencia, adaptación, negociación y pragmatismo que despliegan los actores sociales en sus luchas en torno a la naturaleza (Capítulo 4).

A partir de estos elementos, se crearon 5 categorías y una lista de indicadores para cada una, las cuales conformaron la base para la codificación. En las TABLAS 5M y 6M presento esta información. Tres de las categorías corresponden al análisis de gobernanzas híbridas (Cap 3) y dos al de ecologismos de sobrevivencia (Cap 4). Con esta base, se procedió a una lectura meticulosa, línea por línea, de cada formulario, básicamente enfocada en las preguntas abiertas y de desarrollo del mismo, con el fin de asignar códigos en el texto. Los extractos obtenidos del análisis fueron incorporados a 5 matrices específicas, una para cada categoría, e insertadas en cada indicador correspondiente.

TABLA 4M. Matrices específicas de Gobernanza híbrida. Categorías, Indicadores y Códigos

MATRICES ESPECÍFICAS DE GOBERNANZAS HÍBRIDAS	
Matriz	**Indicadores – (Código)**
Economía ilícita-criminal	Despliegue de la actividad (DA) Actores de la actividad ilícita (AAI) Métodos de los actores (MA) Presencia de Narcotráfico (PN)
Corrupción estatal	Inacción y negligencia estatal (INE) Asociación con extracción ilícita (AEI) Interés directo en la actividad ilícita (IDAI) Violencia y militarización (VM)
Estatalidad formal	Promulgación de leyes y decretos (PLD) Acción de institución estatal (AIE) Declaración oficial (DO) Política pública (PP)

Con la información ya depurada, agrupada en cada matriz de todos los casos, se revisaron minuciosamente cada una de ellas para identificar patrones predominantes de actuación en las gobernanzas del extractivismo a nivel nacional, y extraer los fragmentos más representativos e interesantes para incorporarlos a la narrativa del capítulo. Desde un contraste detallado entre los casos, se caracterizaron los diferentes niveles de imbricación que pueden ocurrir entre actores estatales y criminales (siendo uno de ellos el de gobernanza híbrida). Del análisis se pudo extraer y esquematizar un conjunto de indicadores precisos sobre cómo funciona la gobernanza híbrida en el extractivismo, en los territorios y las cadenas de valor, los cuales son presentados en los resultados del capítulo 3.

Las conclusiones construidas fueron también articuladas con factores de más amplia escala como la extensividad geográfica de las gobernanzas híbridas y la política de Estado, que revelan niveles de involucramiento desde las más altas esferas estatales, por lo que no hablamos solo de fenómenos localizados sino sistémicos. De manera que del análisis se pudieron obtener insumos para el desarrollo de teoría sobre este ámbito.

En cuanto a ecologismos en contextos de sobrevivencia, en la TABLA 6M vemos sus dos matrices específicas y sus correspondientes indicadores, con los cuales seguí la misma secuencia metodológica que la del capítulo 3. En este particular caso del análisis del capítulo 4, el conjunto de indicadores propuesto se correspondió a la notable heterogeneidad y el carácter contradictorio que podían tener las luchas en torno a la naturaleza en el período del colapso, y están en estrecha relación con la ‘Tipología de Luchas’ presentada en la TABLA 4M, que va de un rango de Ambientalismos fuertes a comunidades dedicadas a la extracción de recursos naturales para su comercialización. De manera que la diversidad de indicadores ha tenido como objetivo el poder articular el análisis de una más amplia ecología política del conflicto.

A pesar de la diversidad, dinamismo y volatilidad de estas expresiones sociales, se han podido identificar algunos patrones en las respuestas sociales que son referentes para el análisis, aunque estos, antes que estar vinculados a categorías estables de la acción colectiva, ha ofrecido insumos para la construcción teórica de una ecología política de la sobrevivencia, con actores, contextos y objetos de estudio eminentemente tornadizos, volubles e inconstantes. Es en este sentido, que el resultado ha sido un enfoque que privilegia la contingencia y las relaciones dinámicas entre contextos poco convencionales y grupos sociales en luchas por la subsistencia.

TABLA 5M. Matrices específicas sobre Ecologismos en contextos de sobrevivencia. Categorías, Indicadores y Códigos

MATRICES ESPECÍFICAS SOBRE ECOLOGISMOS DE SOBREVIVENCIA	
Matriz	**Indicadores (Códigos)**
Persistencia del Ambientalismo	Valoración/afectividad ambiental (VAA) Valoración territorial/cultural (VTC) Sostenibilidad (S) Tradición política o de lucha (TPL)
Reproducción de la vida/Sobrevivencia	Asociación con economía ilícita (AEI) Adaptación y negociación (AN) Luchas cruzadas (LC) Defensa territorial o de autonomía económica (DTAE) Valoración de sobrevivencia (estratégica) (VSE) Pragmatismo/cortoplacismo **(PC)**

Las conclusiones construidas a micronivel fueron contrastadas e insertadas en marcos más amplios de análisis, tales como: tendencias en las Tipologías de Lucha a nivel nacional, Tipo de población que más se moviliza, contraste entre la Tipología de Lucha y las geografías criminales, o en especial, las tendencias generales a la desmovilización ante la extensión del colapso en el tiempo. Esta conexión de escalas ofreció insumos para las reflexiones teóricas sobre la relación entre contextos y actores sociales, en un marco no convencional.

Por último, las entrevistas en profundidad siguieron también la secuencia metodológica descrita, con una codificación elaborada especialmente para identificar, por un lado, un conjunto variado de motivaciones ambientales, políticas, culturales, colectivas o subjetivas para persistir en la lucha por el ambiente en semejantes condiciones; y por otro lado, las estrategias de sobrevivencia, su razones y matices ante los dilemas por el ambiente y el sostenimiento de la vida. La información agrupada sirvió para alimentar las explicaciones de las diferentes facetas de la Tipología de Luchas y, sobre todo, de los pilares fundamentales de mi propuesta teórica de Ecología política de la Sobrevivencia, en diálogo con las diferentes bases teóricas desde las cuales me he sustentado.

II. Análisis documental sistemático

Articulado al análisis cualitativo de múltiples casos y las entrevistas en profundidad, he desarrollado un 'Análisis documental sistemático' para la elaboración de los capítulos 1 y 2, y para examinar el Nivel 'Política de Estado' del capítulo 3. El enfoque adoptado es el de Bowen (2009) que establece: a) un criterio de selección de los documentos de acuerdo a su relevancia para los objetivos de investigación, su calidad y pertinencia, y la posibilidad de hacer contraste entre fuentes; b) una primera revisión superficial de los documentos desde la cual se identifican pasajes significativos de los mismos; c) un posterior análisis exhaustivo; y d) la interpretación de los datos, que incluye la

construcción de códigos y/o categorías, también de acuerdo a los propósitos y preguntas de investigación.

En el Capítulo 1, que ofrece los marcos teóricos, históricos y geográficos de la investigación, he desarrollado tres tipos de análisis documental: primero, el que conllevó a la formulación de mi base conceptual, desde la cual se realizó una revisión de literatura (libros, papers, grey literature) vinculada por un lado a la relación extractivismo/poder/territorio, y por el otro a las luchas ambientales y los ecologismos populares. El análisis y contraste de esta literatura es presentada en el capítulo. Un segundo, enfocado en materiales de tipo histórico sobre Venezuela, relacionados con los ejes teóricos recién mencionados, y en especial sobre la evolución del petróleo. Estos giraron en torno a los estudios sobre Petro-estado, renta petrolera y economía rentista. He combinado estos análisis con mis perspectivas de ecología política y geografía crítica. Tercero, para describir los rasgos geográficos, ecológicos, demográficos y de recursos naturales de Venezuela, he recurrido a documentos oficiales sobre el tema (del Ministerio del Ambiente, Servicio de Información Geográfica SIGOT, Petróleos de Venezuela, entre otros) y diversas investigaciones asociadas.

El Capítulo 2, que presenta un amplio análisis de La Gran Crisis, se ha basado en la búsqueda y contraste de literatura sobre los principales abordajes académicos de la crisis venezolana y las conceptualizaciones sobre colapso, lo que se expone en el artículo. No obstante, el principal foco del análisis documental sistemático ha sido la recopilación de una vasta cantidad de fuentes que nutrieron el estudio de este complejo período. He reunido diversos documentos para ilustrar de la manera más exhaustiva posible, las dimensiones económicas, sociales, humanitarias, políticas y ambientales del colapso, lo que ha conllevado un gran esfuerzo debido a la carencia de datos oficiales por parte del Estado venezolano. En lo económico, me he orientado a ofrecer indicadores del lapso 2013-2022 sobre PIB, producción petrolera, hiperinflación, importaciones y exportaciones, salarios, entre otros. Algunas cifras pudieron hallarse de las fuentes del Banco Central de Venezuela u otras instituciones nacionales, aunque he debido apoyarme también de los datos que ofrecieron organismos como el Banco Mundial, la CEPAL, el FMI, así como investigaciones académicas y de tanques de pensamiento para construir dichos indicadores.

Las cifras sobre la situación social –pobreza, subalimentación, mortalidad infantil, migración, entre otras− han sido mucho más escasas desde el Estado, debido a que reflejan las reales dimensiones del impacto a la sociedad que este ha evitado mostrar. Para abordar esta dimensión, he recurrido a datos del más reputado estudio socioeconómico del país, la Encuesta ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello, y los he combinado con los reportes de ONU, FAO, UNICEF, ACNUR, y otros organismos internacionales, así como investigaciones independientes de ONGs y académicos que cuentan con gran credibilidad nacional e internacional. Esto aplicó igualmente para el análisis de los datos de impacto ambiental, aunque el registro que se levantó con el estudio de los 75 conflictos ofreció buenos insumos para ello.

Para la caracterización de las dimensiones generales de la política en la crisis, que se enfocó al derrumbe del régimen democrático, el análisis del colapso del Petro-estado, la gestión de este período por parte del gobierno de Maduro, y el auge de las economías criminales, se utilizaron artículos de investigación académica, que se compaginaron con informes de organismos de derechos humanos (como ONU o CIDH-OEA), artículos de prensa, y los sólidos y nutridos análisis de la ONG Transparencia Venezuela sobre corrupción gubernamental; mientras que en lo específico sobre economías criminales, se usaron también los reportes y análisis de tanques de pensamiento internacional como Insight Crime, Crisis Group o Global Initiative against Transnational Organized Crime.

Por último, en el Capítulo 3, el análisis documental sistemático se ha orientado a la caracterización de los nuevos objetivos de la Política de Estado en La Gran Crisis, en relación al extractivismo y la consolidación del poder político. He definido la categoría fundamental 'Tipo de política' para organizar la información obtenida, en sus dimensiones económica (plan, programa y orientación nacional de la economía); estrategia sobre la extracción de recursos naturales; políticas territoriales y ambientales; atribuciones del Poder Ejecutivo y rol del sector militar; y régimen de libertades y represión. Sobre la base de estos objetivos y categorías, he examinado minuciosamente un conjunto de leyes, decretos (ordinarios, extraordinarios, presidenciales), lineamientos de empresas del Estado (como PDVSA o CVG) y ministerios, declaraciones de voceros estatales, entre otras políticas, que fueron oficializados en el período estudiado.

III. Análisis espacial

Finalmente, la investigación utilizó de manera complementaria recursos de Análisis espacial vinculados al enfoque cualitativo desde el cual parte la misma, y fundamentado en mi perspectiva de Ecología Política Comparativa. El objetivo ha sido desplegar el análisis también en los patrones, atributos y relaciones que, las dinámicas descritas para este trabajo, expresan en el espacio geográfico. Como ya he mencionado, mi trabajo no aborda análisis estadístico ni cuantitativo, por lo que el análisis espacial al que he recurrido solo aplica algunas técnicas elementales de este enfoque. Son tres técnicas específicas que fueron utilizadas: Mapeo georreferenciado, Análisis de imágenes satelitales y Representación Gráfica de las tendencias a través de mapas (Madrid y Ortiz-López, 2005; Rucks-Ahidiana y Bierbaum, 2015). Procedo a explicar la aplicación de cada una.

Primero, a parte de la georreferenciación de los 75 conflictos en el mapa de Venezuela, he realizado para el capítulo 3 un análisis específico del despliegue de puntos de minería ilegal en toda la Amazonía, biorregión donde se expandieron de manera más amplia y consolidada las gobernanzas híbridas. A través de la herramienta de Google Earth, recorrí todos y cada uno de los municipios de la Amazonía para identificar dichos puntos mineros, obteniendo las coordenadas geográficas de cada uno de ellos, que

fueron introducidos en un archivo Excel y convertidos en formato CSV para Sistemas de Información Geográfica.

La búsqueda de estos puntos mineros se basó en reconocer visualmente las principales características de la técnica de minería aluvial –que es la ampliamente predominante en la biorregión−, a saber: piscinas azuladas debido al uso de mercurio, evidencia de pérdida de cobertura forestal, existencia de campamentos mineros visibles, presencia de aeropuertos improvisados, entre otros (MinAmb Perú, 2016). Me he apoyado también de información colectada del análisis documental, donde los reportes señalaron la ubicación de varias minas. El objetivo ha sido poder tener un retrato biorregional de la expansión y localización de la actividad. Con los datos CSV, produje varios mapas en ArcGIS que mostraran este despliegue minero, y los solapé con la presencia de las instituciones del Estado. Por ejemplo, se cruzaron con las poligonales del proyecto Arco Minero del Orinoco - AMO (véase FIGURA 45); o con la presencia de puestos de control militar (véase FIGURA 48).

Segundo, el análisis de imágenes satelitales lo apliqué para el capítulo 3 con el objetivo de detectar solapamientos entre actores criminales y estatales, usando nuevamente la herramienta de Google Earth. Por ejemplo, para el caso de la localidad de Las Claritas, ubicada dentro del AMO, se marcó la ubicación específica de las dos principales minas formales del país, junto con la evidencia de la enorme devastación caótica de la minería ilegal (ver IMAGEN 16). Lo mismo se hizo con la satelital de una parte de la ciudad de El Callao (también en el AMO), donde se encuentra el Complejo Industrial Aurífero Domingo Sifontes, donde se acopia el oro extraído en la biorregión. Dicho instalación está ubicada en el sector Nacupay, controlado por grupos criminales (ver IMAGEN 17).

En el capítulo 2, para evidenciar las transformaciones ambientales de La Gran Crisis, he presentado imágenes satelitales de diversas zonas del país en una secuencia temporal específica, dentro del período del colapso 2013-2022. En las imágenes 6,7,8,9, y 10, se mostró esta evolución con la herramienta ‘Timelapse’ de Google Earth para los humedales del noroeste del Lago de Maracaibo (2016-2022; 2014-2022), en Las Claritas (2015-2020), Ikabarú (2013-2020) y en el Parque Nacional Yapacana (2012-2020). Las imágenes fueron posteriormente modificadas en ArcGIS para destacar los rasgos de cambio ambiental.

Tercera y última: en línea con mi perspectiva multi-escalar y recurriendo también a los datos de los casos y de la investigación documental, se construyeron mapas clave para los niveles intermedios de análisis en el capítulo 3: estatalidades y geografías ilícito/criminales. Primero, desde una Tipología de Estatalidades, se asignaron 1 o más tipos a cada Región Ecopolítica, con el fin de conocer las variaciones espaciales del Estado en Venezuela (véase FIGURA 42). Se ofreció también un mapa que señala las regiones de presencia/predominio criminal, basado en los datos cualitativos disponibles y las características geográficas de las zonas (véase FIGURAS 44 y 46). Estos elementos en su conjunto, también contribuyeron a la comprensión de los posibles

solapamientos entre los actores estatales y criminales; y entre estos y los grupos sociales movilizados, lo cual se examina en el capítulo 4.

Finalizo con los Anexos, donde se comparten los instrumentos que se indicaron en la exposición.

IV. ANEXOS

ANEXO 1. Zonificación del Mapa de Regiones Ecopolíticas de Venezuela. Fuente: elaboración propia

REGIONES ECOPOLÍTICAS DE VENEZUELA		
No. de la Región	**Nombre de la Región**	**Descripción**
Z1	Sierra de Perijá	La región constituye un parque nacional, una biorregión, territorio de las mayores acumulaciones de carbón del país, y asentamiento de pueblos indígenas yukpa, barí y japreria
Z2	Cuenca Petrolera Occidental	La zona emblemática de explotación petrolera y refinación del país, donde se ubica también el lago de Maracaibo
Z3	Andina	Biorregión de los Andes venezolanos
Z4	Serranía Lara-Falcón	Biorregión de serranías donde además hay una fuerte tradición de lucha social
Z5	Los Llanos	Parte de la biorregión llanera (occidental) con fuerte tradición campesina
Z6	Centro Norte-Costera	Conurbación más poblada del país, donde además se encuentra Caracas
Z7	Cuenca Petrolera Oriental	Importante cuenca petrolera, con las mayores reservas mundiales en la Faja del Orinoco, ciudades petroleras y delicados ecosistemas
Z8	Delta del Orinoco	Desembocadura del Orinoco, con varias áreas protegidas y territorio de los warao
Z9	Municipios Mineros Orientales	Zonas de antigua actividad minera y grandes concentraciones de oro, y parte de la cuenca del Cuyuní
Z10	Urbano-industrial de Bolívar	La zona urbano-industrial más importante de la Amazonía (Ciudad Guayana/Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz)
Z11	Cuenca del Caroní	Cuenca del segundo río más importante de Venezuela, alimentador de la represa del Guri y territorio pemón
Z12	Cuenca del Caura	Cuenca con altos niveles de conservación, parque nacional y territorio de indígenas yekwana, sanema y yanomami
Z13	Municipio Cedeño	Territorio fronterizo de grandes reservas de coltán, diamantes y bauxita, habitado por indígenas wottuja
Z14	Autana-Puerto Ayacucho-Eje Carretero	Capital de Amazonas, zona fronteriza y comercial
Z15	Municipio Manapiare	Atravesado por el río Ventuari, territorio de indígenas yabarana, wottuja y eñepa
Z16	Sur Occidental Fronteriza	Atravesado por río Atabapo, fronterizo con Colombia, Parque nacional Yapacana
Z17	Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare	Enorme área protegida fronterizo con Brasil, territorio yanomami

ANEXO 2. Formulario para el registro de conflictos socioambientales. Tomado y modificado de https://ejatlas.org/

FICHA PARA CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES EN VENEZUELA

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Expediente No.

I. Datos básicos

1. Nombre del conflicto

2. Breve descripción para el título
(no más de 250 caracteres)

3. Ubicación del conflicto
(localidad, municipio y estado del país)

4. Latitud y longitud

5. Área del proyecto o extensión de la actividad económica
(en kms^2 o has.)

6. Tipo de población
(urbana, semi-urbana, rural o indígena)

7. Resumen del caso

II. Fuente del conflicto

8. Principal actividad económica (u otra) que origina el conflicto
(Petróleo y Gas Natural; Extracción Minera; Gestión de Desechos y Residuos; Agropecuario, biomasa y tierras; Gestión del Agua; Infraestructura y Construcciones; Turismo y Recreación; Conservación de la Biodiversidad; Industriales y de Servicios Públicos)

9. Otras actividades económicas involucradas
(si existen)

10. Commodities o 'recursos naturales' involucrados
(ej. oro, bauxita, madera, agua, petróleo, gas, soja, eucalipto)

III. Proyecto y actores involucrados

11. Ubicación del proyecto o la iniciativa económica
(localidad, municipio y estado del país)

12. Resumen y descripción del proyecto o la iniciativa económica

13. Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas, u otras de índole extra-legal

14. Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes

15. Instituciones internacionales y de financiamiento
(si existen)

16. Nivel de las inversiones
(en US$ en Bs.)

17. Status del proyecto o la iniciativa económica
(en fase exploratoria, planificado y listo para su ejecución, en ejecución, operando, detenido)

18. Población afectada
(grupos sociales y estimación numérica)

IV. Conflicto y Movilizaciones

19. Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones

20. Cronología y detalles de las movilizaciones
(Formas de movilización tales como campañas públicas, marchas, ocupaciones de instalaciones o tierras, denuncias formales, consultas populares, bloqueos de rutas, etc. También indique tipos de grupos movilizados, tales como movimientos ecologistas, organizaciones internacionales, consejos comunales, comunidades indígenas, sindicatos, gobiernos locales, mineros artesanales, etc.)

21. Algunos reclamos y peticiones de los grupos movilizados
(Tales como saneamiento ambiental, suspensión del proyecto, atención médica, demarcación de tierras, compensaciones, etc.)

22. Intensidad del conflicto
(alta, con movilizaciones masivas, amplia difusión mediática, violencia y arrestos; media, con protestas en la calle y movilización visible; baja, con alguna organización local; o latente, no hay organización ni movilización visible al momento)

23. ¿Este conflicto ha terminado? *(Si o No)*

V. Impactos del proyecto

24. Impactos ambientales

25. Impactos en la salud

26. Impactos socio-económicos y culturales

VI. Desarrollo del conflicto

27. Resultados y respuestas ante el conflicto
(por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, empresas involucradas, instituciones supra-nacionales, comunidades, entre otros)

28. Alternativas propuestas
(por parte de los grupos movilizados, pueblos indígenas, actores políticos y gubernamentales, entre otros)

29. ¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?
(Si, No o No pero con algunas demandas atendidas)

30. Explique por qué

VII. Fuentes consultadas y recomendadas

31. Leyes, decretos, legislaciones y recursos jurídicos relacionados con el caso

32. Artículos

33. Libros, documentos académicos y científicos

34. Videos y media de la campaña

35. Imágenes y registro fotográfico

36. Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha
(si así lo desea, coloque su nombre o el de su organización o comunidad, junto con correo electrónico)

VIII. Notas

ANEXO 3. Cuadro de preguntas del formulario de registro de los casos, con variables y capítulo al que contribuye. Fuente: elaboración propia

PREGUNTAS Y VARIABLES DEL FORMULARIO					
No.	**PREGUNTA**	**VARIABLE**	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO DE PREGUNTA**	**CAPÍTULO AL QUE CONTRIBUYE**
1.	Nombre del conflicto	––	Título del caso	Abierta	––
2.	Breve descripción para el título	––	Corto resumen para presentar el caso	Abierta	––
3.	Ubicación del conflicto	Ubicación del conflicto	Idem	Abierta	CAP 2,3,4 y 5
4.	Latitud y longitud	Ubicación georreferenciada del conflicto	Coordenadas de ubicación del caso (puede ser exacta o general)	Abierta	CAP 2,3,4 y 5
5.	Área del proyecto o extensión de la actividad económica	Área del proyecto o actividad económica	Área en Km o ha por las que se extiende el proyecto o la actividad económica que genera el conflicto	Abierta	CAP 2 y 3
6.	Tipo de población	Tipo de población	Indica si la población involucrada en el conflicto es urbana, semi-urbana, rural, indígena o una mezcla de ellas	Cerrada	CAP 4
7.	Resumen del caso	––	Narración amplia y analítica del caso, con sus características, desarrollo y principales hipótesis y conclusiones.	Abierta	CAP 2,3,4 y 5
8.	Principal actividad económica (u otra) que origina el conflicto	Actividad económica	Petróleo y Gas Natural;Extracción Minera;Gestión de Desechos;Agropecuario, biomasa y tierras;Gestión del Agua;Infraestructura y Construcciones;Turismo y Recreación;Conservación Biodiversidad;Industriales y de Servicios Públicos	Cerrada	CAP 2,3,4 y 5
9.	Otras actividades económicas involucradas	Actividad económica secundaria	Idem	Abierta	CAP 2,3,4 y 5
10.	Commodities o 'recursos naturales' involucrados	Commodity	Idem	Cerrada	CAP 2,3 y 4
11.	Ubicación del proyecto o la iniciativa económica	Ubicación del proyecto o la iniciativa económica	Idem	Abierta	CAP 2,3 y 4
12.	Resumen y descripción del proyecto o la iniciativa económica	––	Características, actores, datos y desarrollo de la actividad económica que genera el conflicto	Abierta	CAP 2 y 3
13.	Empresas privadas nacionales e	Empresas	Idem	Abierta	CAP 2 y 3

	internacionales involucradas, u otras de índole extra-legal	privadas			
14.	Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes	Instituciones y empresas estatales	Idem	Abierta	CAP 2 y 3
15.	Instituciones internacionales y de financiamiento	Instituciones internacionales y de financiamiento	Si este tipo de instuciones financian la actividad económica	Abierta	CAP 2 y 3
16.	Nivel de las inversiones	Nivel de las inversiones	Idem	Abierta	CAP 2 y 3
17.	Status del proyecto o la iniciativa económica	Status de la actividad económica	Situación de operatividad de la actividad económica durante el conflicto	Cerrada	CAP 2 y 3
18.	Población afectada	Cantidad de población afectada	Cantidad aproximada de población afectada por los impactos generados por la actividad económica	Abierta	CAP 2 y 4
19.	Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones	Año de inicio de las movilizaciones	Idem	Abierta	CAP 4
20.	Cronología y detalles de las movilizaciones	––	Características, actores, estrategias y evolución de las movilizaciones	Abierta	CAP 4
21.	Algunos reclamos y peticiones de los grupos movilizados	Demandas y reivindicaciones	Idem	Abierta	CAP 4 y 5
22.	Intensidad del conflicto	Intensidad del conflicto	Nivel alto, medio, bajo o latente	Cerrada (aunque opcionalmente el colaborador puede colocar información complementaria)	CAP 4
23.	¿Este conflicto ha terminado?	Continuidad del conflicto	Idem	Cerrada	CAP 2,3 y 4
24.	Impactos ambientales	Impactos ambientales	Idem	Abierta	CAP 2 y 4
25.	Impactos a la salud	Impactos a la salud	Idem	Abierta	CAP 2 y 4
26.	Impactos socio-económicos y culturales	Impactos socio-económicos y culturales	Idem	Abierta	CAP 2 y 4
27.	Resultados y respuestas ante el conflicto	––	Respuestas dadas por los actores durante el conflicto y resultados	Abierta	CAP 2,3,4 y 5
28.	Alternativas propuestas	––	Alternativas desarrolladas por grupos movilizados u otros actores	Abierta	CAP 4 y 5
29.	¿Considera Ud. que se ha alcanzado la	Logro de	Define si los grupos movilizados alcanzaron	Cerrada	CAP 3 y 4

	justicia ambiental en este caso?	justicia ambiental	total o parcialmente justicia ambiental en el caso		
30.	Explique por qué (relacionada a P29)	––	Idem	Abierta	CAP 3 y 4

ANEXO 4. Guía de preguntas para la entrevista a profundidad con actores de los grupos movilizados en los conflictos socioambientales en estudio. Fuente: elaboración propia.

Entrevista a profundidad

OBjETIVO

Partiendo de la reivindicación de los saberes que se producen desde las movilizaciones y los movimientos sociales, en especial los de los grupos que se activan en defensa de la naturaleza y que disputan territorios y recursos desde su autodeterminación local, la entrevista busca conocer ideas, concepciones y prácticas que surgen de estas movilizaciones. La entrevista será usada para la difusión de contenidos que realiza el Observatorio de Ecología Política de Venezuela en pro de los grupos sociales que luchan por la Justicia ambiental en el país, así como insumo para la investigación académica sobre conflictos ambientales en Venezuela.

Preguntas

Por qué se están movilizando?
Por qué eso es importante para ustedes?
Qué es la naturaleza para ti? Por qué? Qué es para ti el territorio?
Cómo interpretan la crisis que está viviendo actualmente Venezuela?
En qué forma defienden estos valores ecológicos y estos territorios? En qué forma podrían alcanzar sus objetivos?
A qué se están enfrentando?
En qué forma han sido uds enfrentados por las estructuras de poder?
Qué alternativas se impulsan o proponen desde estas luchas?

CAPÍTULO 1

Emergencia, auge y declive del Petro-estado en Venezuela: marcos geohistórico-conceptuales del extractivismo y los conflictos de distribución ecológica

I. Primeras bases conceptuales: extractivismo, gobernanza, territorialización y ecologismos populares

Venezuela ha sido mundialmente conocida por ser un país petrolero, y por décadas uno de los principales productores y exportadores internacionales del hidrocarburo. Pero más allá de este recurso como mercancía, en torno al petróleo se ha configurado todo un sistema social que ha implicado la conformación de estructuras de poder, un despliegue particular sobre la geografía nacional, una forma de relacionarse con la naturaleza y de crear estratificaciones sociales.

La emergencia contemporánea de la "Venezuela petrolera", se desarrolló sobre un entramado societal preexistente, determinado por la estructura histórica de la colonialidad, algo que comparte con el resto de países de América Latina y el Caribe. A esto se refiere el sociólogo peruano Aníbal Quijano con el concepto de la "colonialidad del poder", la cual está basada en la codificación, diferenciación y jerarquización entre grupos sociales –específicamente entre conquistadores y conquistados− fundamentado en patrones eurocéntricos, donde prevalecen la raza y el mandato de civilización a lo salvaje (Quijano, 2000). Estas codificaciones han sido un poderoso instrumento para legitimar las constantes operaciones de conquista de pueblos y territorios, en el marco del proceso global de expansión capitalista.

Pero la colonialidad del poder debe ser entendida, inevitablemente y en estrecha relación, con la "colonialidad de la naturaleza", la cual es también convertida en un objeto de dominación colonial y en un 'recurso' para sostener la economía de estos grupos de poder y los procesos de acumulación de capital a escala mundial (Alimonda, 2011). Ambos componentes son fundamentales para entender, al menos para América Latina y el Caribe, la configuración de un tipo específico de régimen: el *extractivismo*.

El extractivismo ha sido un concepto referente para comprender las sociedades basadas en la extracción masiva de los llamados recursos naturales[2], o "exportadoras de

[2] Se comparte la crítica que se ha planteado desde la ecología política a la idea de 'recursos naturales', como una forma de convertir a la naturaleza y toda la riqueza de las redes de la vida ecológica, en un mero objeto de explotación para el sistema capitalista. Véase la discusión sobre la "desnaturalización de la naturaleza" en Leff (2003). En este trabajo hago, por tanto, uso preferencial del término la *extracción de naturaleza* aunque, para evitar numerosas repeticiones del mismo, recurro también a la utilización de 'recursos' o 'recursos naturales'.

naturaleza" como lo denominaba Fernando Coronil (2002). Este ha sido examinado desde variadas perspectivas y tendencias (Domínguez, 2021; Forero, 2023), y sus especificidades materiales (mineras, petroleras, agroindustriales, entre otras). Aunque estas diferentes perspectivas comparten la crítica a los impactos de este fenómeno, y cómo se expresan en el conjunto de la sociedad y la economía, me interesa referirme a dos grandes enfoques conceptuales sobre extractivismo para proponer una decantación a partir de ellos: uno que lo identifica como una actividad (económica) específica; y el otro, en el que se examina como un sistema particular, patrón de sociedad o régimen integral.

Respecto al primer enfoque, el trabajo de Eduardo Gudynas ha sido emblemático y muy popular, planteando que el extractivismo es un tipo de extracción o modo de apropiación de recursos naturales –también se ha hecho referencia a un tipo de *actividad*− de gran escala, que se basa en la remoción de grandes volúmenes de materias primas que son de escaso o nulo procesamiento, y se orientan al comercio exterior –al menos en un 50% de total extraído (Gudynas, 2015; 2016). Al ser entendida en buena medida como actividad o tipo de extracción, desde Gudynas se ha hecho mención a la importancia de entenderlo en plural, como "extractivismos", siendo ejemplos de ellos el minero, petrolero, agrario, forestal, pesquero, entre otros[3].

El segundo enfoque lo conseguimos en una serie de trabajos donde se ha planteado una visión más sistémica sobre el extractivismo, entendiéndolo, en primer lugar como un modelo histórico –y no solo reciente, como en general lo ha abordado la literatura de las llamadas 'industrias extractivas'− articulado y subordinado a la evolución del capitalismo y el colonialismo (Machado-Araoz, 2015; 2018); en segundo lugar, y por tanto, como un modo o modalidad de acumulación capitalista que tiene la particularidad de desplegarse y organizarse en torno a la extracción masiva de naturaleza (Acosta, 2011; Svampa, 2019; Svampa & Teran-Mantovani, 2019); y en tercer lugar, que logra constituir un régimen no sólo económico, sino también político, ambiental, social y cultural (Teran-Mantovani, 2018b) o, tomando el término de Jason Moore (2013), un régimen sobre todo el "tejido de la vida".

En este trabajo adopto el segundo enfoque, interesado en plantear un estudio más sistémico de los procesos de extracción de naturaleza, reconociendo dimensiones geográficas, culturales o epistémicas, por mencionar ejemplos, y adoptando ideas críticas a la economía/ecología política del capitalismo (Moore, 2000; 2013; Harvey, 2004; Wallerstein, 2004).

Al mismo tiempo, dicha noción permite analizar las variantes históricas que puede tener el modelo en períodos particulares. En el caso venezolano, el petróleo se insertó a principios del siglo XX en las ya existentes estructuras (neo)coloniales nacionales, y reconfiguró de manera determinante a la sociedad y la economía del país, hasta ese

[3] En Gudynas estos 'extractivismos' se conectan con sus implicaciones institucionales, económicas y políticas a través del concepto de "efecto derrame", que sería un proceso posterior al despliegue de este tipo de actividad o modo de apropiación.

momento sustentada en buena medida por el café. Con la nueva predominancia petrolera, a pesar de estos trascendentales cambios, la matriz continuó siendo extractivista. En el período examinado para este trabajo (2013-2022), el colapso puso a los crudos en una posición de menor importancia relativa, restándole la centralidad de otros tiempos, mientras que la economía evidenciaba algunos rasgos y escenarios post-petroleros –como veremos en el capítulo 2–, pero no así post-extractivistas. De modo que en este análisis intento captar el nuevo perfil extractivista venezolano en La Gran Crisis, que se desarrolla en el contexto de colapso del Petro-estado y caos sistémico.

El extractivismo como régimen se compone, por tanto, de instituciones, estructuras de poder, narrativas, procesos de producción del territorio, conflictividades, subjetividades, entre otros factores. Mi investigación pone el foco específico en las formas de gobernanza, estatalidad y territorialización que se derivan de la reconfiguración extractivista en Venezuela y, como contraparte, también en las respuestas, movilizaciones y resistencias sociales a este proceso, colocando la mirada en los conflictos de distribución ecológica o conflictos socioambientales, como unidad de análisis privilegiada. De esto se deriva el esquema conceptual base a partir del cual desarrollo mi trabajo y las nuevas teorizaciones que serán propuestas (ver FIGURA 1).

FIGURA 1. Esquema conceptual base de la investigación. Se presentan los dos ejes teóricos sobre los cuales gira el análisis en este y los siguientes capítulos: uno, *extractivismo/poder/territorio*, siendo que el poder es examinado desde los conceptos de gobernanza y estatalidad. Dos, *ecologismos populares*. Fuente: elaboración propia



A continuación, desarrollo en detalle los conceptos de Territorio, Territorialización y Territorialidades, y posteriormente profundizo en las nociones de gobernanza/estatalidad desde las cuales construyo mi análisis. Seguidamente, defino los marcos conceptuales de los conflictos de distribución ecológica y los movimientos socioambientales, poniendo el foco en las complejas dimensiones de los ecologismos populares.

I.I Territorio, Territorialización, Territorialidades

El análisis que propongo de la relación entre extractivismo/poder/territorialización intenta salirle al paso a las omisiones espaciales que, en general se han presentado en la literatura latinoamericana sobre este tipo de regímenes (Martín, 2017). En este sentido, desde la perspectiva multi-escalar que se utiliza en este trabajo, se incorpora la evaluación simultánea de las dinámicas territoriales que se desarrollan a nivel local, regional y nacional.

Primeramente, el territorio es abordado y definido en este trabajo a partir fundamentalmente de las perspectivas de la geografía crítica y la ecología política, reivindicando un enfoque dinámico, político y no estado-céntrico. En esta línea, el geógrafo brasileño Carlos Walter Porto-Gonçalves propuso examinar la tríada Territorio-Territorialización-Territorialidad, definiendo el territorio como una configuración espacial determinada, apropiada, disputada y producida por relaciones sociales, culturales y de poder (Porto-Gonçalves, 2002). Este proceso dinámico genera los procesos de territorialización.

Para este análisis, acentúo dos fuerzas sociales que se expresan en la producción del territorio: la de los poderes económico/políticos, que pueden incluir actores y grupos de la economía formal y corporativa o ilícito-criminal, poderes estatales, entre otros; y por otro lado, el de las distintas expresiones de resistencias y movilización social. Estas dos fuerzas atraviesan la conflictividad socioecológica del período en estudio en Venezuela.

Propongo la noción de Territorialización para la primera fuerza, y la de Territorialidad para la segunda. Desde análisis como los de David Harvey (2004), que examina el permanente proceso de reconfiguración del espacio geográfico para favorecer ciclos de acumulación de capital a gran escala –lo que llama los "ajustes espacio-temporales"–; o de Michael Watts (2001; 2003), que evalúa las relaciones geográficas desiguales y la creación de economías de enclave y violencia articuladas a poderes geopolíticos y marcos globales de mercantilización de la naturaleza; defino Territorialización fundamentalmente como el proceso de apropiación, organización, reestructuración y remodelación de los territorios, inscritos en dinámicas de acumulación de capital, despojo y extracción masiva de recursos, sean lícitas o ilícitas, además de los ordenamientos que surgen desde el Estado, sus actores e instituciones.

Como contraparte, los procesos de Territorialización son también contestados, resistidos y resignificados, en buena medida por pueblos y comunidades, que dan otros sentidos al territorio desde sus identidades y modos de vida. Esto es lo que Porto-Gonçalves (2002) denomina *Territorialidad*, lo que resalta que estos procesos de transformación del territorio también se disputan desde abajo; y que existe una multiplicidad de agenciamientos sociales y culturales del mismo (Haesbaert, 2013), y por tanto, múltiples territorialidades.

I.II Perspectivas críticas sobre gobernanza

Gobernanza ha sido un concepto muy difundido, trabajado y operacionalizado política e institucionalmente, aunque de ninguna manera ha estado exento de controversias. Se han desarrollado numerosos trabajos sobre el tema, generándose diversas conceptualizaciones, perspectivas y políticas al respecto. Dados los orígenes del término y sus tendencias dominantes, me interesa discernir de manera general sus diferentes corrientes, para decantar la aproximación de la que se va a nutrir mi análisis, así como exponer por qué he elegido este concepto.

Desde fines de los 80 va a emerger una noción dominante de gobernanza, que se va a popularizar en los 90 con una perspectiva marcadamente normativa, tecnocrática y apolítica. Esta analiza la gestión de los asuntos públicos y privados en un marco histórico donde se estaba generando un considerable retroceso del Estado y extraordinarios incentivos de participación para los sectores empresariales, en el contexto de la expansión de la globalización y el modelo neoliberal (Campbell, 2000; De Sousa-Santos, 2009). El grueso de la literatura sobre gobernanza ha estado enmarcado en los estudios del desarrollo, la promoción de la participación ciudadana y los nuevos modelos de gestión de negocios –con las corporaciones transnacionales en auge–; y el concepto se puso en el centro de las estrategias de desarrollo de las instituciones financieras supranacionales como el Banco Mundial, las agencias de cooperación de organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea, y en instituciones universitarias y tanques de pensamiento, entre otros. De forma muy general, estas concepciones de gobernanza se han definido como procesos donde elementos que están en sociedad ejercen poder y autoridad, e influencian e impulsan políticas y decisiones de carácter público, económico y para el desarrollo (The Governance Working Group of the International Institute of Administrative Sciences, en Kakabadse y Kakabadse, 2001); gestiones "imparciales y transparentes" de lo público donde se establece un sistema de reglas aceptadas (Banco Mundial, citado en Launay, 2005); o la forma de gobernar a través de interacciones, negociaciones, redes e interdependencia de los participantes (Rhodes, 2007). En los diferentes conceptos de gobernanza, vemos que destaca la concepción multi-actor, en la que se examinan los roles de las *partes interesadas* o "stakeholders".

En suma, en esta idea dominante de gobernanza que ha planteado promover un "nuevo modo de gestión de los asuntos públicos" (Zurbriggen, 2011) no se contemplan las contradicciones y, sobre todo, la dinámica de conflictividad social y política producto de las asimetrías y relaciones de poder existentes; y mucho menos permite generar un cuestionamiento al modelo de acumulación permanente.

Los fracasos de los programas de ajuste estructural y la evolución de la literatura sobre este tema permitió el desarrollo de aproximaciones críticas que se fueron distanciando de la concepción tradicional, cuestionándola por promover una cierta privatización del

campo público, la justificación de reformas neoliberales (Stiglitz, 2002; Monedero, 2003; Graña, 2005; Launay, 2005; De Sousa-Santos, 2009), y subrayando en cambio la necesidad de una comprensión más política y sistémica de las formas de gestión y construcción de autoridad en la sociedad.

A partir de estos contrastes, resalto cuatro factores cruciales para aproximarnos a una noción crítica de gobernanza: primero, en la composición de los actores o stakeholders, involucrados en la reproducción de la gobernanza, antes que equilibrios e interdependencia, lo que prevalecen son grandes asimetrías de poder y diversas relaciones de dominación (Davies, 2011), algo que es más marcado para Latinoamérica y el llamado Sur Global. En la historia del extractivismo, la larga lista de imposiciones y desmanes socioambientales contra comunidades y pueblos por parte de empresas mineras, petroleras, agroindustriales, entre otras, así como de instituciones y actores estatales (Raftopoulos, 2018; Teran-Mantovani, 2018b; Gudynas, 2019; Vargas-Valencia, 2023), son evidencia de esto y problematizan este supuesto ideal de horizontalidad e interdependencia entre los actores. En cambio, se deben resaltar las recurrentes oposiciones y resistencias sociales al modelo, y el crecimiento de los conflictos socioambientales en América Latina producto de la expansión extractivista (Merchán-Rojas, 2016; Svampa, 2019).

Segundo factor, y en línea con lo dicho anteriormente: estos resultados más bien contradictorios del extractivismo hacen muy discutibles las difundidas ideas que vinculan estas gobernanzas con democracia y desarrollo (Svampa, 2016), y al contrario nos señalan que pueden estar determinadas por lógicas de expolio, intereses económicos y enriquecimiento particular. En este sentido, la gobernanza no solo no está exenta de las dinámicas de acumulación capitalista (Cammack, 2003; Moraitis, 2024), sino que debe entenderse en el marco de su particular economía/ecología política.

Un tercer factor tiene que ver con la disociación o la escasa consideración que suele haber en las nociones convencionales de gobernanza con las dimensiones espaciales. Ha surgido la "gobernanza territorial" como un enfoque específico de esta teoría (Davoudi et al, 2008; Rosas-Ferrusca et al, 2012; Chia et al, 2016), aunque mi argumento va más allá del interés particular en un campo de estudio. Subrayo la pertinencia de un análisis preferencial y permanentemente anclado en el territorio, examinando las gobernanzas desde los aspectos materiales y simbólicos que lo constituye.

Como cuarto factor, se destaca un aumento de la complejidad del entretejido de actores e instituciones que hacen parte de la dinámica de construcción de gobernanza en el siglo XXI, donde resalto la gran heterogeneidad de contextos existentes, la penetración de los Estados por parte de grupos e intereses económicos particulares, un alto nivel de dinamismo en las relaciones sociales, y un fuerte traslape entre legalidad e ilegalidad, lo que incluye la participación de grupos del crimen organizado en estos procesos. En esta línea, se examinan las formas de interacción y relacionamiento entre grupos de las economías ilícitas con el Estado, las empresas privadas y la sociedad civil (Arias, 2006; Sampó, 2021). Esto nos muestra otras configuraciones de la gobernanza que las

perspectivas normativas ni siquiera contemplan, pero que son objeto fundamental de mi trabajo, donde el despliegue extractivista posee alta complejidad y adquiere rasgos híbridos entre la formalidad y la criminalidad, lo que amerita una mirada más amplia y crítica sobre estos procesos.

Nuevamente nutrida por perspectivas de ecología política y geografía crítica, específicamente desde el análisis de la conflictividad socioambiental y territorial (Le Billon, 2001; Mampilly, 2007), entenderemos gobernanza como las estructuras y procesos dominantes que, desde la articulación cooperativa, negociada o disputada entre actores de diversa índole, definen los marcos de autoridad, el ejercicio de poder y la gestión de uno o más territorios/recursos específicos. Como he mencionado, se trata de una perspectiva no estado-céntrica o no institucionalista, que propone un análisis dinámico y multi-actor de la construcción y ejercicio del poder a escalas locales y regionales, en las cuales pueden participar, por ejemplo, latifundistas, militares, grupos armados criminales, actores estatales, o incluso puede darse la no participación de ningún grupo del Estado.

I.III Estatalidades y procesos permanentes de formación de Estado

Al enfocarse en examinar los varios niveles de construcción y reconfiguración de poder que, de abajo hacia arriba y viceversa, se producen en los procesos de extracción de naturaleza, mi análisis observa los vínculos de las gobernanzas con los procesos permanentes de formación de Estado. Estos últimos son mucho más dinámicos y accidentados en contextos de fragilidad estatal, como suele verse en el llamado Sur Global, y en especial ante escenarios de colapso como ha ocurrido con el Petro-estado en Venezuela.

En la profusa literatura sobre el Estado en América Latina, en general se han estudiado las formas en que se ha asumido el proyecto moderno de Estado-nación en la región, al tiempo que se destacan las diferencias con la evolución que se dio y se da en los países del Norte Global. Es importante resaltar que, a muy grandes rasgos, buena parte de esta literatura ha teorizado al Estado latinoamericano dentro de la teleología de la modernidad, en la medida en la que este tenía que llegar a desarrollarse y seguir un rumbo que, a su manera, continuara el modelo occidental (Oszlak, 1978; O'Donnell, 2004; Prebisch, 2012). Desde esta visión, se ha analizado al Estado evaluando su mayor o menor 'capacidad' de alcanzar esta forma ideal moderna.

En cambio, un grupo de lecturas críticas propusieron otros lugares para entender la (re)configuración de los Estados latinoamericanos más allá de esta teleología y de aspectos normativos, destacando que, lo que aparecía como disfuncionalidad estatal era más bien el resultado de las asimetrías de poder globales, que también terminaban estructurando a dichos Estados. De esta literatura voy a rescatar cuatro enfoques de interés: uno que subraya que la estructuración de Estados periféricos y llamados "subdesarrollados" es producto del desarrollo de los centros hegemónicos de las

economías centrales (Cardoso y Faletto, 1979; Frank, 1974), y funcional a ellos, dada la naturaleza polarizante de la economía-mundo capitalista (Wallerstein, 1995).

El segundo enfoque pone de relieve cómo los Estados-nación latinoamericanos están en muy buena medida constituidos por la continuidad de la colonialidad del poder, expresada en los mecanismos de dominación basada en las históricas jerarquizaciones sociales y raciales; en sus instituciones, la organización de la economía y en los patrones de conocimiento dominantes (Quijano, 2000; Lander, 2000).

Tercero, el que examina la condición *abigarrada* de las formaciones sociales latinoamericanas como factor constitutivo de sus Estados nacionales, donde culturas, historias y agrupaciones sociales de gran diversidad se superponen junto con el proceso de homogeneización estatal (Zavaleta-Mercado, 1986; 2009), configurando una estructura política heterogénea y poliforme. Esto revela, por un lado, la permanente incompletud del proyecto estatal-nacional moderno en todo el espectro socio-territorial de nuestros países –el Estado no puede establecer una relación orgánica con parte de dicho espectro–; y por el otro lado, la resistencia y persistencia sociocultural de pueblos y comunidades ante dichos procesos de homogeneización/colonización. Esta perspectiva es relevante para mi trabajo dado que no solo cuestiona las nociones totalizantes del análisis por países –algo que Zavaleta criticó a los dependentistas–, sino que también evidencia la heterogeneidad y variedad, y en cierta forma la condición barroca de los Estados-nación latinoamericanos. Esto ha dado como resultado lo que Zavaleta llamó "Estados aparentes", lo que es en realidad una condición cuasi estructural de estos.

Esto se conecta con el cuarto enfoque, también de importancia para la investigación: el de la geografía política del Estado, que en buena medida aborda el problema de la relación extractivismo/poder/territorio. El Estado, como ese conjunto interdependiente de instituciones, objetivaciones y relaciones sociales, sancionado por un sistema legal (O'Donnell, 2004), que articula un sistema de dominación social (Ozslak, 1978) y se erige como el agente general de la nación y su identidad colectiva (Coronil, 2007), es fundamentalmente una entidad político-territorial. Esto supone también que sus niveles de realización están asociados a sus capacidades de penetración y control socioterritorial, lo que el sociólogo británico Michael Mann (2006) llama el "poder infraestructural". En el caso de América Latina y el Caribe, este proceso ha sido en ciertos aspectos precario, con la gran mayoría de sus Estados con un alcance limitado de su poder y predominio territorial, con algunas regiones con pobre y escasa presencia institucional –y economías de poca relevancia respecto a la economía nacional–, y otras incluso con bajos niveles de penetración (O'Donnell, 2004; Urteaga-Quispe, 2017).

La dinámica geografía del Estado y el extractivismo en América Latina debe ser comprendida en clave histórica y no puede olvidarse que es producto de continuos conflictos, disputas y procesos de recolonización y acumulación por desposesión. Su variación durante diversos períodos ha estado atravesada, desde el siglo XIX hasta nuestros días, por las guerras de independencia y post-independencia, con gran

fragmentación territorial; el paso del aparato burocrático colonial a los acomodamientos de los nuevos Estados-nación independientes (Oszlak, 1978; Pradilla-Cobos y Márquez-López, 2022); los conflictos internacionales en la región, que redefinieron las fronteras de los países –como la guerra de la Triple Alianza o la del Pacífico−; la persistencia de la inserción de la geografía latinoamericana al mercado mundial como exportadora de naturaleza; inversiones e infraestructuras (estatales y privadas) espacialmente desiguales y dificultades en comunicación y transporte (Moncayo, 2012); la precariedad de algunas economías provinciales; los desafíos estatales para el manejo de amplias extensiones territoriales de los países; y las resistencias étnico-territoriales. Aunque avanzado el siglo XX, el poder infraestructural de los Estados se había expandido y consolidado, deben también resaltarse las reconfiguraciones de estos procesos en la globalización, con la transnacionalización de territorios, retrocesos estatales en regímenes neoliberales y la expansión de la criminalidad organizada.

Esta precaria y relativa capacidad de control y despliegue del poder estatal en los territorios es la expresión geográfica de los 'Estados aparentes' de Zavaleta, o bien el reflejo de lo que O'Donnell (2004) cataloga como "Estado truncado". No obstante, enfatizo que mi foco no estará puesto en la tradicional pretensión teleológica de la consecución de un "Estado adecuado" –como también lo denomina O'Donnell. Examino más bien las reconfiguraciones estatales históricas en el marco de la estrecha relación entre extractivismo/poder/territorio, donde podamos comprender la composición regional de las transformaciones del Estado, para lo que voy a trabajar con el concepto de *estatalidad* (statehood).

De antemano, es importante señalar que no recurro a las nociones normativas de estatalidad o "estatidad" (stateness) que, en general son utilizadas como medidor de niveles de desarrollo de la capacidad de Estado –en cuestiones como gestión para proveer bienes públicos, cumplimiento de sus funciones y objetivos, fuerza y alcance, grado de evolución de la estructura de poder estatal, entre otros (Oszlak, 1978; Sojo, 2011; Abente-Brun, 2012; Moya-Díaz y Paillama-Raimán, 2017). Vamos a entender estatalidad, partiendo de la literatura sobre Conflictos por los Recursos, como una particular estructura de poder y un marco político específico determinado dinámica y empíricamente por elementos del ámbito estatal –grupos, instrumentos y/o instituciones−, que se puede expresar de maneras diferenciadas y múltiples, tanto en la diversidad territorial como en la historia particular de un Estado-nación. Al igual que la gobernanza, la estatalidad está también definida en buena medida por disputas y negociaciones entre actores diversos, en este caso inscritas en procesos, sea de construcción de estructuras de organización territorial coherentes y coercitivas (Schlichte, 2005; Boege et al, 2008; Hagmann and Péclard, 2010; Meagher, 2012), o bien de aprovechamiento de recursos, todo lo cual dinamiza la formación y reconfiguración de Estado.

El análisis de la estatalidad con perspectiva territorial o regionalizada, nos permite advertir que un Estado-nación puede tener diferentes formas de estatalidad que pueden articularse con los poderes centrales del Estado (que en Venezuela están vinculados al

Poder Ejecutivo, al presidente y los poderes políticos que residen en Caracas), de manera subordinada o no. En estas dinámicas, una forma de estatalidad podría también adquirir relativa autonomía de dichos poderes centrales, o incluso llegar a separarse de ellos –lo que representaría un acto de secesión−, todo lo cual puede configurar la formación de nuevos órdenes político-territoriales.

Este enfoque permite también un estudio desgranado del Estado en unidades que pueden ser relativamente particularizables y separadas por regiones, donde los conglomerados de actores estatales pueden participar de economías de extracción criminales (Tilly, 2006) y de procesos de "acumulación por desposesión" (Harvey, 2004) territorializados, como veremos para el caso de Venezuela.

I.IV Movimientos socioambientales, ecologismos populares y conflictos ecológico-distributivos

Con la irrupción de numerosas luchas y movilizaciones ambientales a escala mundial ante la grave crisis ecológica y climática, la literatura disponible sobre el tema, en el marco de los estudios sobre acción colectiva y los nuevos movimientos sociales, es considerablemente extensa y es uno de los objetos centrales de la ecología política. Estas en general se han examinado como expresiones sociales organizadas que surgen ante la falta de respuestas de las instituciones y las carencias de la democracia, que promueven iniciativas para impulsar sus agendas y formas de transformación de las sociedades (Wagner, 2010).

Una clave de identificación de estos movimientos socioambientales está en su especial valoración respecto a la naturaleza, sea desde sus perspectivas políticas, sus culturas (Leff, 2004) o Territorialidades (Porto-Gonçalves, 2002), y que sus luchas están centradas en abordar problemas tales como el derecho a la apropiación y gestión de recursos naturales o bienes comunes, la defensa de patrimonios ambientales ancestrales y estilos de vida tradicionales, obtención de bienes simbólicos, oposición a la explotación socioecológica, entre otros (Leff, 1994). No obstante, es evidente que en el ámbito de este tipo de movimientos existe una extraordinaria diversidad, y muy diferentes perspectivas políticas y epistémicas, lo que hace que puedan tener objetivos muy distintos unos de otros.

Varios autores, desde la ecología política, han planteado clasificaciones para aclarar el perfil de estas diferencias: para Acosta y Machado (2012) existen dos tipos de ambientalismo, uno reformista, que se centra más en controlar o remediar los impactos ambientales, y no tiene agenda de intervención política ni una lectura amplia del orden social; y uno radical, que sí propone un cuestionamiento a las formas de organización convencionales de la sociedad, y posee un planteamiento más política. Esta distinción tiene similitudes con las nociones de movimientos sociales en sentido fuerte y débil de Maristella Svampa (2019), siendo que los primeros se pueden vincular con los ambientalismos radicales, en la medida en la que cuestionan la lógica de dominación

imperante; o la centralidad del poder y el autoritarismo del Estado, como también afirma Enrique Leff (2004).

Clasificaciones más detalladas las encontramos en Martínez-Alier (2003), quien propone tres corrientes diferentes: el culto de la vida silvestre, con perfiles más bien naturalistas y conservacionistas, escasamente politizados; la del credo ecoeficientista, que promueve correcciones y reformas del sistema para paliar los impactos ambientales, pero no lo cuestionan (generalmente se alinean a las ideas de desarrollo sostenible o a los tecnooptimistas); y *el movimiento de justicia ambiental*, nuevamente, relacionado con los movimientos más fuertes y radicales que mencionáramos, que tienen raíces histórica en la convergencia entre comunidades y grupos racializados afectados por la contaminación y las luchas por los derechos civiles en la década de 1960 en los Estados Unidos. Por estas razones, estos movimientos expresan altos niveles de politización, y no sólo proponen perspectivas y acciones críticas y divergentes respecto a los actores empresariales y estatales, sino también a la reproducción globalizada del capital y las desigualdades sociales, al tiempo que asumen posiciones éticas y comprometidas con la consecución de justicia ante la estructura de explotación socioecológica que predomina en el sistema (ídem).

Bebbington y Humphreys (2009) han planteado la existencia de 5 tipos de ambientalismo diferentes, que en parte coinciden con Martínez-Alier al señalar la rama de los conservacionistas, la del ambientalismo de justicia socioambiental, y una que también toman de este autor denominada "ecologismo de los pobres" (o ecologismo popular), que explicaré en detalle en breve. Bebbington y Humphreys agregan a la consideración los ambientalismos de tipo nacional-populista, orientados al mayor control nacional sobre los recursos naturales y su rentabilidad económica; y el ecologismo profundo, vinculado a movimientos que reivindican la idea de que la Naturaleza tiene los mismos derechos a la existencia que los humanos.

Aunque destaco la relevancia y potencia de los fuertes movimientos sociales, en mi investigación voy a poner el énfasis en los ecologismos populares, concepto ampliamente trabajado por Martínez-Alier, y muy acorde a los escenarios del colapso venezolano. Esta noción de 'ecologismo'[4] es un ámbito de representación útil para agrupar este tipo de luchas, iniciativas, prácticas y valoraciones que provienen de los sectores populares y las capas sociales más desfavorecidas, los cuales se orientan a la defensa y preservación de los llamados recursos naturales, en tanto estos son elementos fundamentales para cubrir sus necesidades vitales (agua, alimento, energía, territorio, etc) (Martínez-Alier, ibíd). Esto, de acuerdo al autor, los incorpora en el perfil ecologista, aunque en numerosas ocasiones, estas comunidades y pueblos no se cataloguen a sí mismos como tales. Martínez-Alier destaca la articulación intrínseca de estas luchas ecologistas con las *economías de supervivencia*, y cómo estas deben ser

[4] A pesar de que se ha desarrollado un interesante debate sobre las distinciones entre ecologismo y ambientalismo, y reconociendo que los orígenes epistémicos y políticos de los términos ecología y ambiente son diferentes, asumo en este trabajo una perspectiva homologada entre ambos términos, alineados en la conceptualización que desarrollo en esta sección.

entendidas dentro de una 'economía moral', mediada por sus propias pautas colectivas de sostenimiento de la vida, las cuales no están alineadas a la crematística del capital.

Es necesario explicitar cinco aristas que se derivan de esta aproximación teórica y que son de interés en mi análisis. Primera, el grueso de este tipo de expresiones ecologistas ha provenido del Sur Global, no solo por darse en condiciones generales más precarias, sino también porque surgen como una respuesta a las lógicas de despojo, externalización socioambiental y lesión sociocultural, propia del despliegue del extractivismo y el desarrollo industrial capitalista (Leff, 1998), fuertemente impulsado desde el Norte Global. Son por tanto, consecuencias y formas de contestación a la colonialidad del poder y la naturaleza.

Segunda arista: los ecologismos populares, por un lado, están atravesados por el asunto existencial de la subsistencia, y su consecución en un mundo plagado de injusticias, violencias y desigualdades; por otro lado, emergen fundamentalmente de procesos de organización comunitaria y social, que además han evolucionado al calor del desarrollo de los conflictos ecológico-distributivos. Estos elementos expresan, su naturaleza política, que se hace más fuerte y nítida a medida que se ha consolidado una historia de luchas.

Tercera, los ecologismos populares ponen de relieve también la importancia fundamental del ámbito micro-político de la *reproducción de la vida*, más allá del espectro de incidencia macro-política que pueden alcanzar los más fuertes movimientos por la justicia ambiental. Para Silvia Federici (2013), dicho ámbito ha sido históricamente desplazado, marginalizado y aprovechado por el desarrollo capitalista y la división social del trabajo, y encarna no solo la afirmación de la economía de subsistencia, o la fertilidad, sino también el mundo de los cuidados, la interdependencia entre humanos y no humanos, la comunalidad de los medios de vida y, por tanto, desde una perspectiva amplia, el sostenimiento de la vida en su conjunto. Esto no solo señala este espacio interior de los grupos sociales como uno en disputa, sino también contribuye a un análisis que intenta poner en el centro otras escalas de la lucha eco-política.

En cuarto lugar, estas expresiones sociopolíticas son fundamentalmente territorializadas, sea que en sus reivindicaciones locales está claramente contenido el territorio (Porto-Gonçalves, 2002; Navarro y Pineda, 2009), o bien que en procesos de mayor politización incorporan con más fuerza narrativas sobre el territorio (Merlinsky, 2017), algo que en América Latina también se expresó en la convergencia de luchas como la indígeno-comunitaria y la ambientalista, que alimentó lo que Svampa (2011) ha denominado el "giro-ecoterritorial".

Quinta y última arista: el foco de estos ecologismos en el sostenimiento más básico de la vida apunta a luchas que van más allá de lo estrictamente ecológico; defender el mantenimiento de lo que Karl Polanyi (1977) denominó la "economía sustantiva", el proceso institucionalizado de interacción entre el humano y su entorno (naturaleza), del

cual obtiene el sustento material, los medios necesarios para vivir. En esta dinámica constitutiva, se entrecruza naturalmente el aspecto ecológico con otras dimensiones de la subsistencia como la económica, social, cultural, entre otras (Pérez-Cubero, 2019).

Sin embargo, en este punto de la exposición es necesario introducir un crucial elemento de problematización. Lo 'popular' puede ser un ámbito profundamente abigarrado, atravesado por múltiples contradicciones y, debido a la precariedad, permanentemente tensionado. En Martínez-Alier, Sejenovich y Baud (2015) se contempla que, a veces dentro de los ecologismos populares pueden encontrarse expresiones puramente reactivas ante problemas ambientales específicos, sin aspiración a tener influencia política ni crear alternativas, e incluso estos pueden terminar enlazados a los propios lugares de extracción de recursos o a los grandes proyectos económicos, finalmente sucumbiendo a estos. Más allá de tipologías ideales, la realidad refleja un abanico mucho más amplio de formas de relacionamiento con la naturaleza y lo ambiental.

El concepto de 'ecologismos populares' me aproxima al análisis de la ecología en sus vínculos con las múltiples facetas del empobrecimiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, que en el caso de La Gran Crisis venezolana es especialmente marcado. Este énfasis no implica que no haya ambientalismos conservacionistas, ecoeficientistas o de justicia ambiental en los conflictos ecológico-distributivos estudiados en mi trabajo; de hecho los hay. No obstante, las luchas atravesadas y determinadas por una extraordinaria precarización fueron la condición generalizada, y estas incluso se expresaron como una multiplicidad de respuestas sociales que fueron también complejas, reactivas y contradictorias. En este último sentido, el rango de la acción colectiva en el colapso desborda los límites conceptuales de la tesis de los ecologismos populares. Me interesa ofrecer una mirada amplia de las disputas en torno a la naturaleza en este contexto por lo que, antes que ser un punto de llegada, el concepto de ecologismos populares es una bisagra analítica, que me ayuda a conectar una serie de expresiones diversas de las luchas populares, que incluya también estas otras facetas más paradójicas de la relación ecología/empobrecimiento social. El desarrollo de esta perspectiva amplia, que requiere la combinación de la ecología política con otros enfoques teóricos para una comprensión del marco del colapso venezolano, es el objeto de análisis del capítulo 4.

Finalmente, defino mi conceptualización de conflicto ecológico-distributivo (también entendido como conflicto ambiental o socioambiental). En primer lugar, analizo estos conflictos tanto desde su dimensión material como simbólica. Respecto a la primera dimensión, recurro a la noción de "distribución ecológica" de Martínez-Alier (2003) para, desde una perspectiva amplia, examinar las dinámicas de apropiación[5], acceso y disposición de los bienes naturales, así como de las cargas y consecuencias que provoca la degradación ambiental. En esta línea, sigo la definición propuesta por Gabriela

[5] Para el concepto de distribución ecológica, planteo una mirada de mayor alcance sobre los procesos de acceso, yendo más allá de la idea de distribución como 'reparto', e incorporando acciones previas a la misma, como la apropiación, que puede ser conflictiva y disputada, o no.

Merlinsky (2015), quien entiende este tipo de conflictos como "focos de disputa de carácter político que generan tensiones en las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos naturales en cada comunidad o región". Esta definición materialista permite reconocer no solo el componente de valoración ambiental en juego en estas disputas, sino también otro conjunto de motivaciones que participan en los conflictos por recursos, algo muy relevante para una región rica en minerales, hidrocarburos, tierras y agua como América Latina.

Como propone Folchi (en Walter, 2009), más allá de conflictos puramente ambientales, estos pueden ser entendidos como "conflictos de contenido ambiental", abarcando una "pluralidad de conflictos vinculados a la dimensión ambiental", y no sólo aquellos en los que se defiende el ambiente. Esto permite contemplar cómo opera, por ejemplo, el componente económico en estos, que incluso puede ser ampliamente dominante, como se expresa en algunos de los casos que he incorporado a mi estudio.

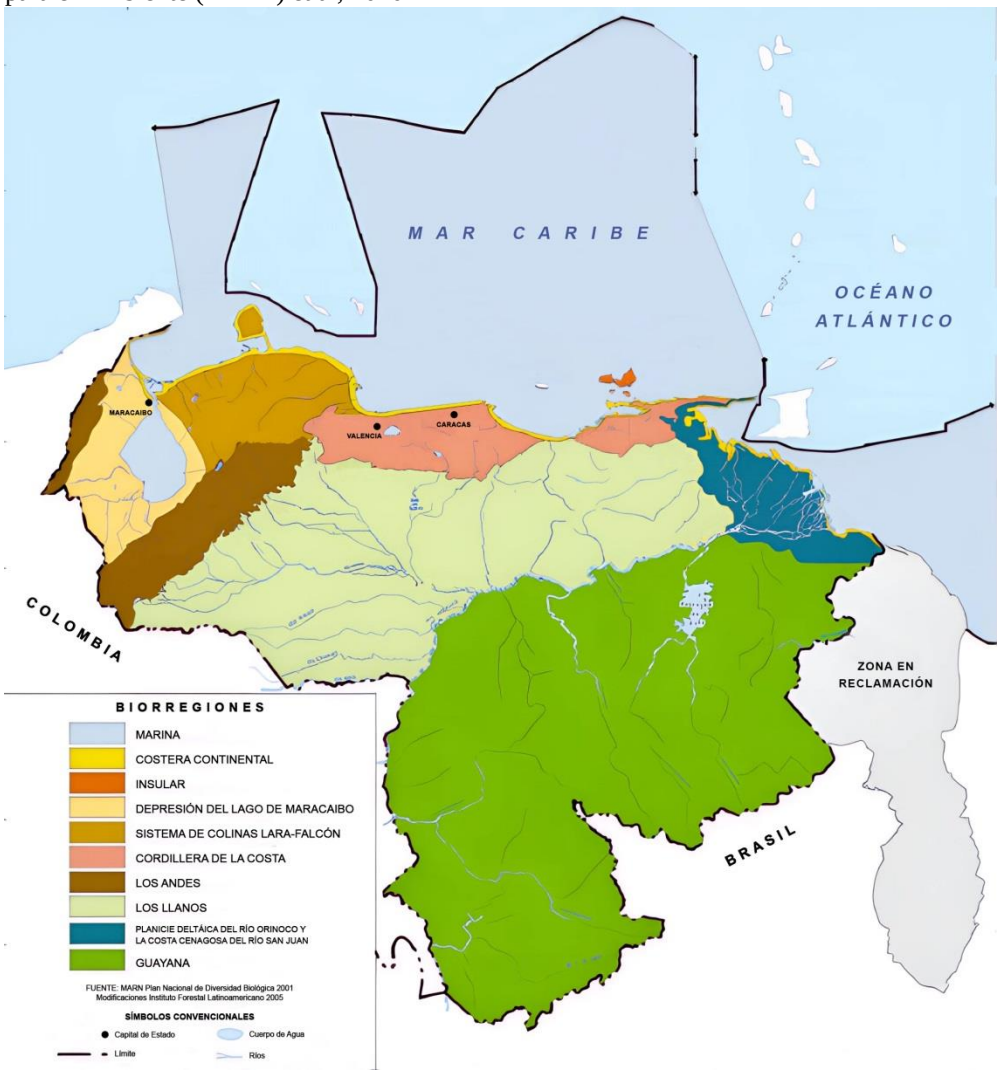
Respecto a la dimensión simbólica, se examinan las controversias (Leff, 2003) y las diferencias de postura (Gudynas, 2014) que se generan entre actores, en relación a las valorizaciones de la naturaleza −sea como bien común, recurso natural, sujeto y parte de la comunidad, lugar sagrado o 'servicio ambiental', entre otros− y las percepciones sobre las condiciones sociales y ambientales en un espacio determinado. El componente simbólico puede tener peso considerable para generar y marcar el rumbo de un conflicto, aunque esto también varía dependiendo del recurso involucrado en el conflicto y su valor en el mercado mundial en un período determinado. En todo caso, más allá de la desavenencia que se produce entre los actores involucrados, uno de los factores determinantes son las relaciones de poder local, nacional y global que atraviesan esos conflictos.

II. Rasgos geográficos, geoeconómicos y ecológicos de Venezuela

Presento en esta sección las características de las biorregiones y sus ordenamientos territoriales, las áreas de reservas de recursos naturales y los tipos de asentamientos poblacionales de Venezuela.

El Ministerio del Ambiente ha establecido la delimitación de 10 biorregiones que, de manera general, agrupa y reconoce los principales sistemas ecológicos del país (MPPA, 2010). Esta se presenta en la FIGURA 2 y más abajo se describen las regiones.

FIGURA 2. Biorregiones de Venezuela. Fuente: Modificado (mejorado) de Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA) et al, 2010



1) Los Andes, incluye los tres estados andinos, de tradición agrícola, y más al norte la Sierra de Perijá, conflictiva zona fronteriza con Colombia, que contiene un parque nacional, las más amplias reservas de carbón del país y territorios indígenas yukpa, barí y japreria.
2) Depresión del Lago de Maracaibo, donde se encuentra el lago más grande de Suramérica, la cuenca petrolera occidental y la industria de este sector, la ciudad de Maracaibo y otras actividades industriales y agropecuarias de importancia.
3) Sistema de Colinas Lara-Falcón, donde prevalecen bosques secos, algunos bosques húmedos y tierras áridas, una potente tradición cultural y de activismo en sus habitantes; tradición agrícola y ganadera, y en la Península de Paraguaná se ubica el que fuese el más grande sistema de refinerías del mundo.
4) Cordillera de la Costa, con la mayor concentración poblacional del país en la parte central, ciudades en valles fértiles y en general cuencas hidrográficas de corta extensión. Se ubica allí Caracas y el lago de Valencia. En la parte oriental, resaltan las ciudades de Puerto La Cruz y Cumaná, y la actividad petrolera y pesquera tienen gran impacto.

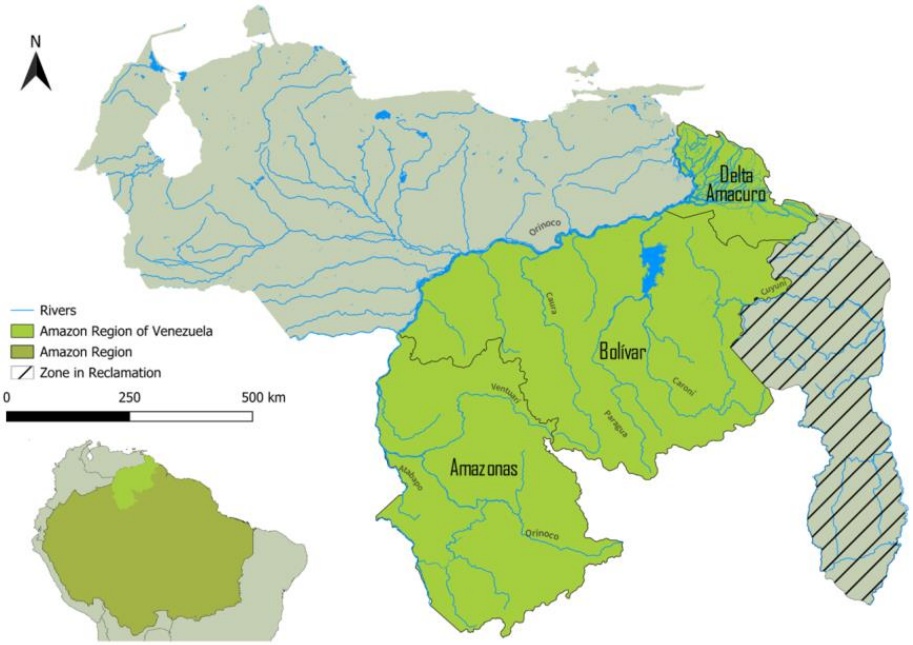
5) Los Llanos, con una enorme extensión a lo largo de la parte central del país que va de este a oeste, resaltando sabanas (algunas inundables), un rol central de la actividad agropecuaria y la cultura llanera.
6) Planicie Deltaica del Río Orinoco y la Costa Cenagosa del Río San Juan, definida principalmente por este delta y continuaciones ecosistémicas que se desarrollan hasta el estado Sucre, con una delicada biodiversidad y población indígena warao.
7) Guayana, ubicada en muy buena parte de los estados Bolívar y Amazonas, con extensas sabanas, serranías y tepuyes; selvas y rica biodiversidad. Se ubica la mayor parte de los pueblos indígenas del país, y se ha extendido el turismo y la minería.
8) Insular, donde prevalecen numerosas islas, varias de gran importancia como Margarita, Coche y Cubagua, y una actividad turística de importancia.
9) Costera Continental, con sus más de 4.000 km de extensión e importantes humedales y territorios semiáridos.
10) Marina, identificada por las áreas marinas y submarinas propias del mar territorial.

Me interesa hacer especial énfasis en la Amazonía venezolana, dada la importancia de la biorregión para este trabajo. Generalmente y por largo tiempo, la Amazonía ha sido catalogada y delimitada desde criterios restrictivos, fragmentadores, formalistas, y muy centrados en el desarrollo económico. Esta delimitación tradicional se ha basado en el criterio de cuenca hidrográfica del río Amazonas, que parte del brazo Casiquiare hacia el suroeste, hasta la frontera venezolana con Brasil y Colombia, lo que representa apenas una porción del estado Amazonas. Otros la han delimitado señalando directamente al estado Amazonas completo. Estas visiones no sólo no reconocían los factores de continuidad entre los ecosistemas del bioma, ni los aspectos socioculturales y de ecología humana; sino también ha implicado que una porción muy grande de la misma no fuera llamada Amazonía. Esto último reducía las reivindicaciones de protección y políticas de conservación más restrictivas para ella, así como su inclusión ampliada en iniciativas panamazónicas, entre otras acciones, favoreciendo a los intereses estratégicos del extractivismo.

Desde perspectivas científicas comprometidas, la visibilización que han logrado las luchas de pueblos indígenas por sus derechos y territorios, y la reivindicación de un criterio ampliado, vamos a entender a la Amazonía venezolana como la biorregión compuesta por la unificación de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro (ver FIGURA 3), resaltando las continuidades biogeográficas, ecosistémicas y paisajísticas que existen entre las tierras bajas de la Amazonía y la región Guayana, incluyendo también el sistema deltaico del Orinoco. Este criterio se basa en la visión panamazónica que propone la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG, 2012), en la que se combinan criterios socioambientales y jurídico-administrativos. Desde mi perspectiva de ecología política, la Amazonía venezolana es al mismo tiempo un territorio-frontera que contrasta con el desarrollo extractivista del

norte del Orinoco, así como una Territorialidad muy marcada por las (re)significaciones de las luchas indígenas, ambientalistas y conservacionistas.

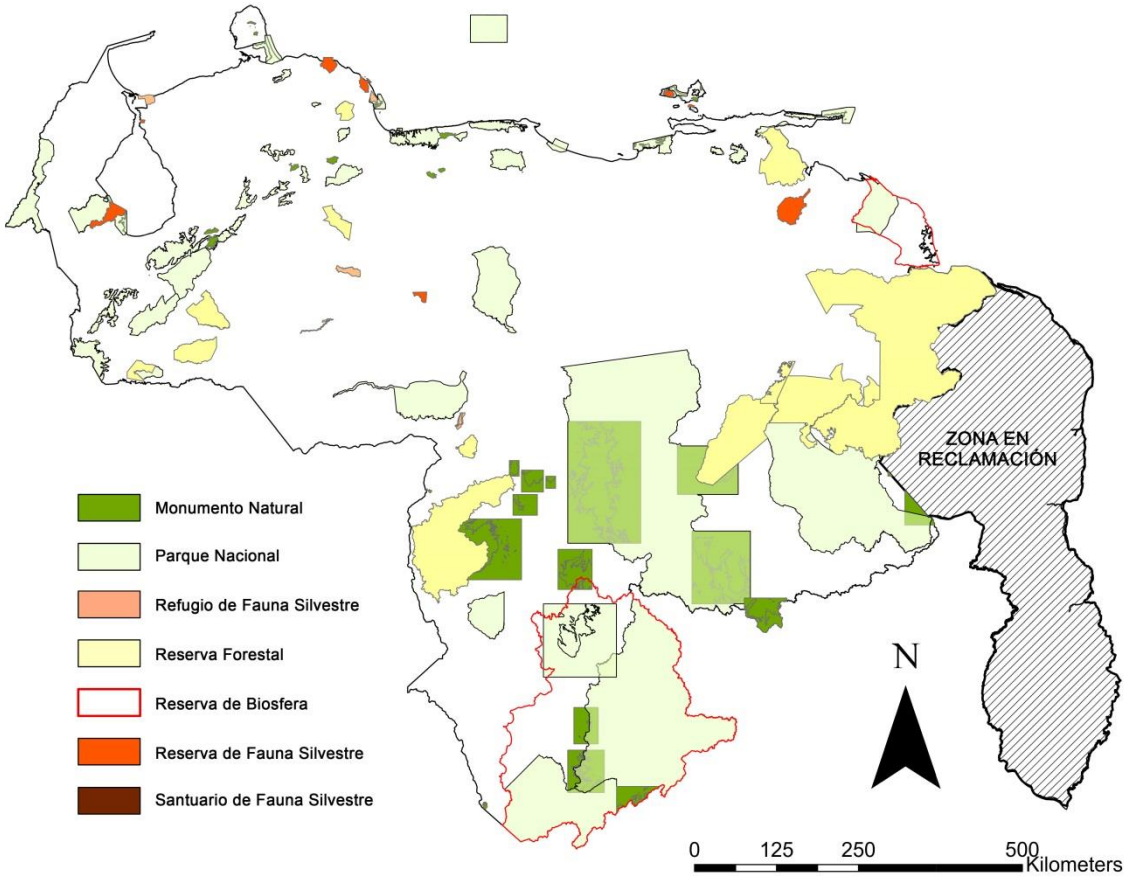
FIGURA 3. Amazonía venezolana (en verde) y sus estados. En la parte inferior izquierda se encuentra el mapa de la Panamazonía (de acuerdo a RAISG, 2012). Fuente: elaboración propia



El particular modo de territorialización del Petro-estado no solo se orientó a la división geográfica de las diferentes funciones económicas y urbanísticas del país, sino también a la creación de áreas de reserva naturales. Distingo aquí las áreas con objetivos de protección (categorizada como Áreas Protegidas [AP]) de aquellas orientadas a la 'producción sustentable'. Desde fines de la década de los 50 se fueron estableciendo numerosas AP de diverso tipo, para la protección de cuencas hidrográficas y de los biomas y paisajes geográficos más representativos del país (Hernández-Arocha, 2007). El resultado, como vemos en la FIGURA 4, ha sido hasta la fecha la creación de 44 Parques Nacionales (PN), 36 Monumentos Naturales (MN), 7 Refugios de Fauna Silvestre, 7 Reservas de Fauna Silvestre, 1 Santuario de Fauna Silvestre y 2 Reservas de Biosfera (Yerena y Naveda en Yerena, 2018[6]).

[6] Para actualizar las cifras ofrecidas por Yerena y Naveda, que son de 2014, tenemos que agregar el Parque Nacional Caura (creado en 2017), PN 44.

FIGURA 4. Áreas Protegidas de Venezuela y Reservas Forestales. Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en WDPA (S/F)



Las unidades más extensas están en la Amazonía, que alberga un total de 7 PN, 5 MN y 2 Reservas de Biosfera: destacan la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare con 8.477.466 ha, el PN Caura con 7.534.000 ha (uno de los más grandes del mundo), PN Parima-Tapirapecó con 3.420.000 ha y el emblemático PN Canaima con 3.000.000 ha. Las estimaciones del porcentaje de cobertura de las AP respecto al total del territorio nacional varían, dependiendo el criterio de inclusión del tipo de área. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estimó con datos de 2010, que al menos un 27% del territorio nacional tenían un nivel excepcional de protección (Elbers, 2011).

Aunque Venezuela ha sido reconocida por estar en la vanguardia de la protección de espacios naturales y contar con una de las mayores coberturas de AP de América Latina, es importante mencionar que esto también es producto del desarrollo geográfico-económico desigual del país, siendo que la profusa renta petrolera, obtenida de la explotación de zonas acotadas permitió una captura muy grande de riqueza que no generaba mayores presiones hacia una diversificación de la economía, con el consecuente avance a nuevas fronteras de commodities. Del mismo modo, la territorialización del Petro-estado al norte del Orinoco daba margen para este despliegue de AP en los márgenes geográficos de dicho proceso, en buena medida en la Amazonía. Además, Hernández-Arocha (2007) enfatizan que en la concepción de estas AP desde el

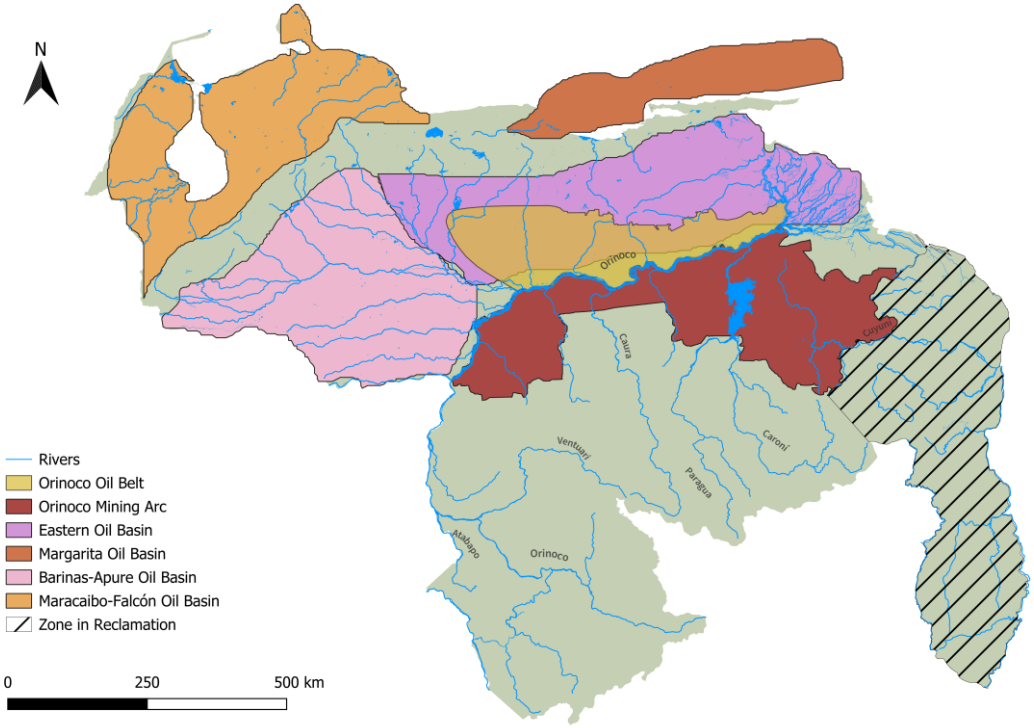
Estado, y en general del Ordenamiento Territorial venezolano, ha prevalecido una perspectiva instrumental y parcelada de la 'administración sectorial de los recursos naturales', que no les otorgó una valoración realmente ecológica, con concepción integral de hábitats, ecosistemas y cuencas hidrográficas.

Los territorios privilegiados del Petro-estado, y en general todo el modo de territorialización venezolano contemporáneo, están marcados por las extraordinarias reservas petroleras al norte del Orinoco (ver FIGURA 5). En la TABLA 1 se presentan las cuencas petroleras del país, la cuantificación de sus reservas, el tipo de crudo y su situación actual. Resalto que la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) (extensión de 55.314 km^2) es la principal acumulación de petróleo del mundo, aunque de crudos pesados y extrapesados, pero sobre la que se ha generado la mayor expectativa de incremento de la producción. Esto contrasta con la Cuenca Occidental Maracaibo-Falcón, por décadas la principal cuenca y la que generó los mayores niveles de producción, pero en los últimos tiempos se encuentra en fase de declinación. En total, las reservas probadas petroleras venezolanas son las mayores a nivel global.

TABLA 1. Reservas probadas de petróleo en Venezuela, por cuencas. Se presenta también el tipo de crudo y su situación actual. Fuente: elaboración propia a partir de PDVSA (2014) y otras fuentes de la empresa

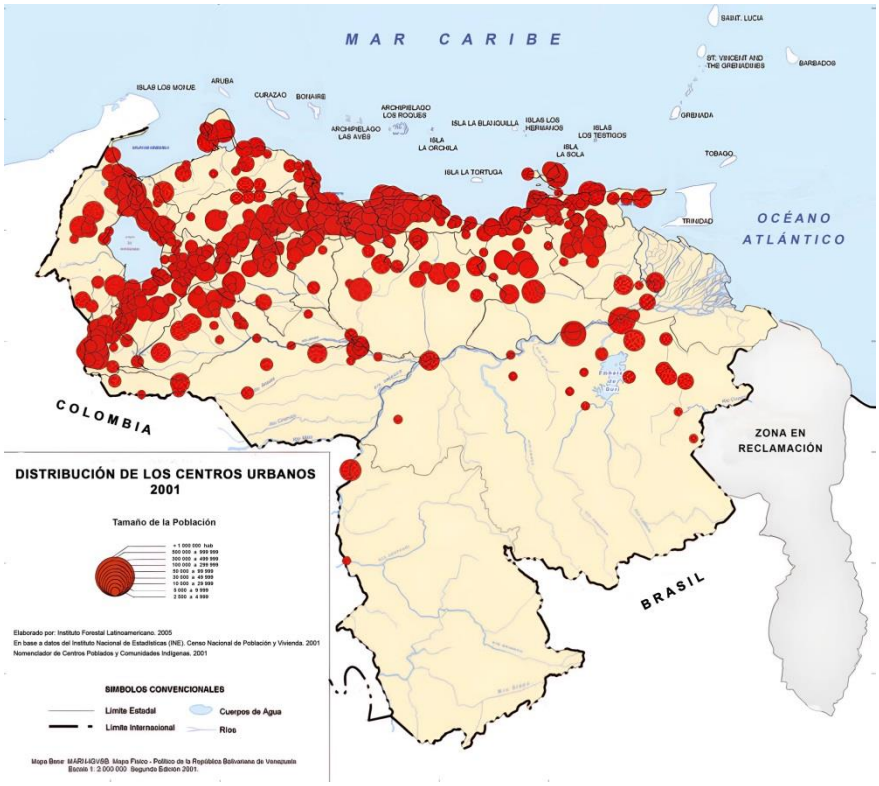
RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO POR CUENCAS, TIPO DE CRUDO Y SITUACIÓN ACTUAL (2010)				
CUENCA PETROLERA	**RESERVAS PROBADAS (EN MILLONES DE BARRILES)**	**PORCENTAJE DEL TOTAL**	**TIPO DE CRUDO**	**SITUACIÓN**
Occidente (Zulia-Falcón)	19.952	6,7%	En su mayoría liviano y mediano	Fase de declinación
Barinas-Apure	1.262	0,43%	Medianos y livianos	Despliegue acotado de la actividad
Oriente	16.584	5,7%	Medianos y pesados	Aún en fase de crecimiento
Faja (FPO)	258.227	87,01%	Pesados y extrapesados	Fase de crecimiento
Margarita/Costa afuera	476	0,16%	Por determinar	Amplio margen de desarrollo
TOTAL	**296,501**			

FIGURA 5. Ubicación de las principales cuencas petroleras de Venezuela, incluyendo la Faja Petrolífera del Orinoco. Como contraposición, se muestra al norte de la Amazonía el área del proyecto Arco Minero del Orinoco, en color vinotinto. Fuente: elaboración propia a partir de Capas de Información Geográfica SIGOT (SIGTA/SF)



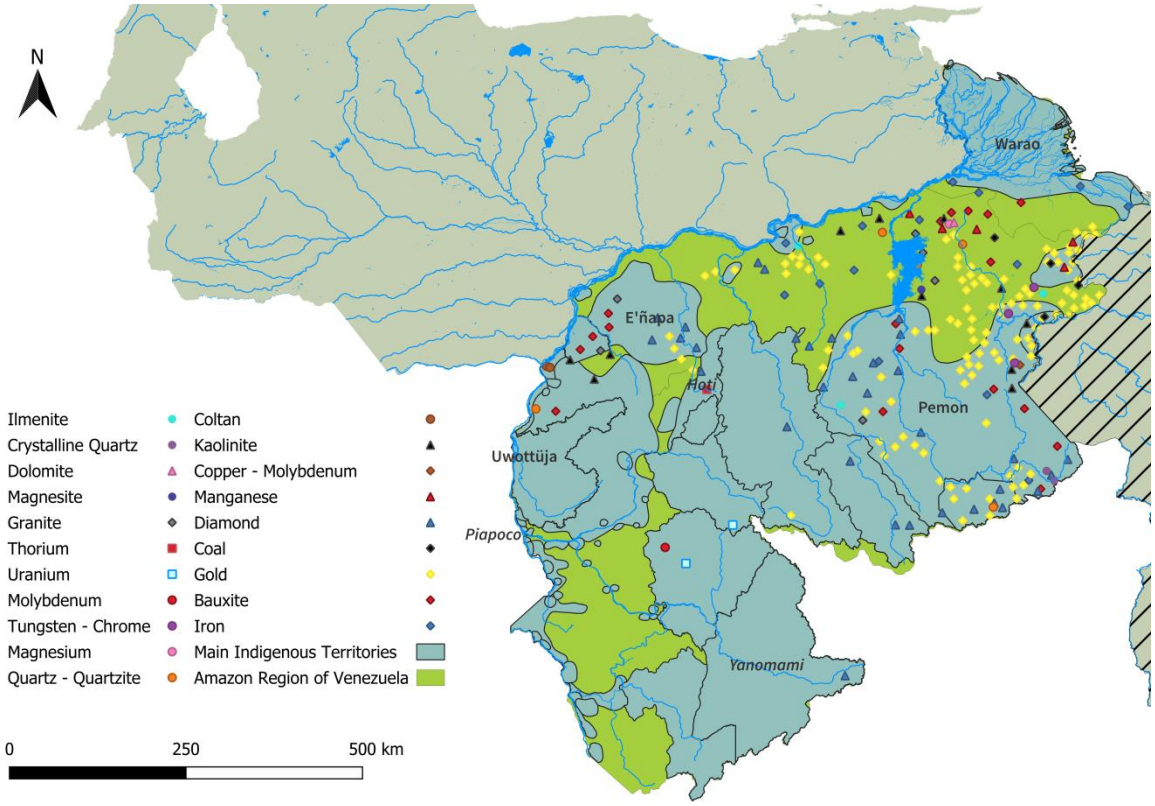
En la FIGURA 6 se puede observar que la distribución geográfica de la población ha seguido el patrón de desarrollo económico volcado a la región septentrional: a partir del boom petrolero con el que nació el Petro-estado, se produjo uno de los procesos de urbanización más acelerado de los tiempos modernos a nivel mundial, y ya para 1951 la población que vivía en ciudades era mayoritaria (55%). Esto ha implicado la evolución de unas muy notables asimetrías socioespaciales: 95% de la población vive al norte del Orinoco, y para la década de los 80 el 80% vivía en ciudades (88% en 2018) (Banco Mundial, 2018).

FIGURA 6. Ubicación de aglomeraciones poblacionales en los centros urbanos de Venezuela (2001). Fuente: modificado (mejorado) de Instituto Forestal Latinoamericano 2005, en MPPA et al (2010)



Como contraposición, la gran mayoría de los 51 pueblos indígenas del país se ubica precisamente en los márgenes geográficos del proceso de desarrollo venezolano, representando, de acuerdo al Censo 2011, 724.592 personas, el 2.8% del total de habitantes de Venezuela (INE, 2015). Vale la pena destacar que el 57% del total de esta población es del pueblo wayuú, quienes en muy buena medida se han integrado a las dinámicas de la vida 'criolla'. La Amazonía, donde está la mayoría de los pueblos indígenas, es la biorregión menos densamente poblada, y donde prácticamente no hay reservas petroleras, excepto por los relativamente pequeños depósitos del norte del delta del Orinoco. Lo que debe ser destacado en esta nueva frontera de commodities son sus importantes reservas minerales, como oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán, entre otros. El commodity más valorado en los últimos lustros en la Amazonía es el oro; aunque no hay una cifra de reservas certificada. Se ha hecho referencia a depósitos estimados de entre 8.000 (MPPEF, 2018) a 10.000 toneladas (Library of the Congress, 2005). En la FIGURA 7 puede constatarse el complejo solapamiento entre los numerosos territorios indígenas amazónicos con los variados depósitos minerales de la biorregión.

FIGURA 7. Ubicación de reservas de minerales y su solapamiento con los territorios indígenas tradicionales (marcados en áreas azules) en la Amazonía venezolana. Fuente: elaboración propia, basada en información de MDME (2018) y WDPA (S/F)



III. Marco histórico del extractivismo y surgimiento del Petro-estado

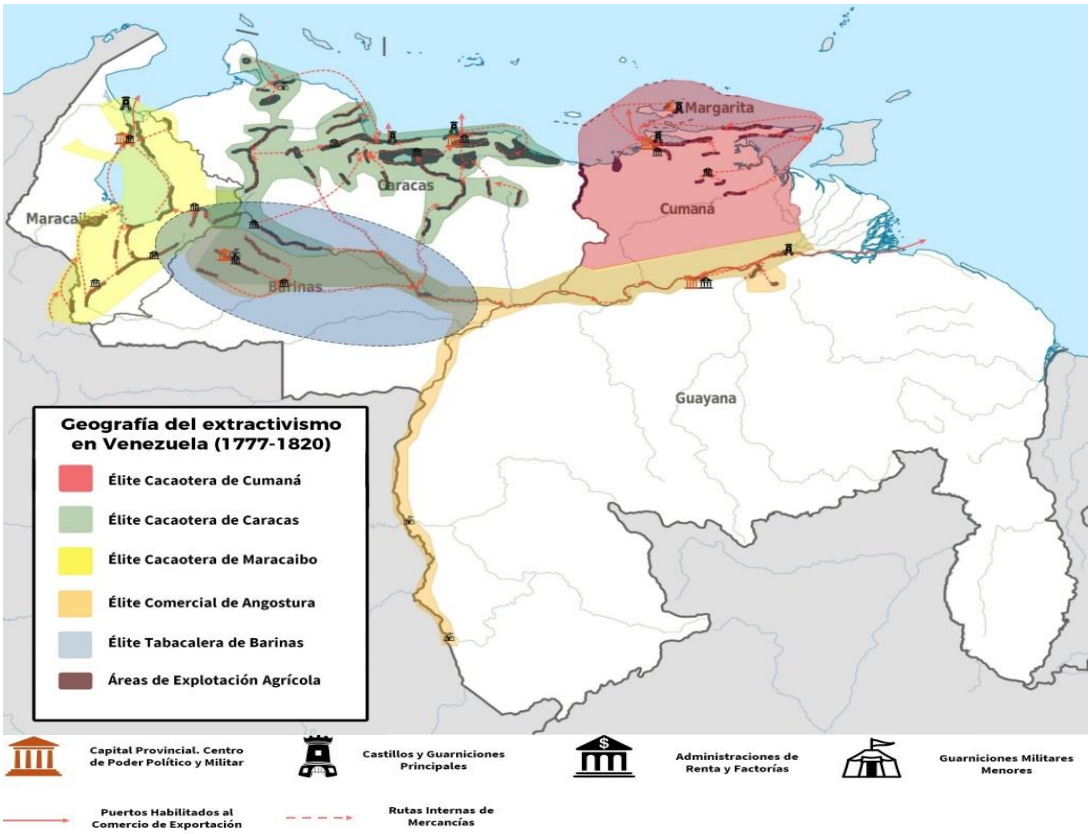
Me dispongo a analizar en clave histórica, la relación extractivismo/poder/territorialización, así como examinar los principales factores que generaron el derrumbe de la Venezuela petrolera, el surgimiento de La Gran Crisis y los nuevos escenarios eco-políticos que de ella se derivan. Esto lo presentaré en tres momentos: primero, esbozo brevemente la evolución de la geografía del extractivismo en Venezuela desde períodos previos al Petro-estado hasta su conformación en el siglo XX. Segundo: trazo los factores fundamentales de la ecología política del Petro-estado en su proceso de auge y crisis, poniendo el foco en el rol de la gobernanza a través de la renta petrolera. El análisis incluye los antecedentes de las luchas ambientales en el siglo XX. Tercero: examino dichos procesos dentro de la emergencia del proceso bolivariano de Chávez en el siglo XXI, contemplando su declive, preámbulo de La Gran Crisis.

III.I La geografía histórica del extractivismo hasta la formación del Petro-estado venezolano

A partir de los tres primeros siglos del complejo proceso de colonialidad (del poder y la naturaleza) en Venezuela (XVI, XVII y XVIII), ya se había configurado una geografía del extractivismo, solo que, a diferencia de la del período del Petro-Estado, esta se caracterizó por una muy clara fragmentación del poder, y el Estado apenas era una sub-entidad territorial y militar del Imperio español (la Capitanía General de la Provincia de Venezuela). Como vemos en la FIGURA 8, referida al período 1777-1820, esta geografía reflejaba áreas de influencia regional, constituidas por diversos factores simultáneos como el tipo de 'commodity', la demanda de recursos que existía en el mercado mundial en ese momento determinado, las disputas políticas y sociales en la región, las condiciones ambientales, entre otros. La configuración de poder real se traducía entonces en élites económico-territoriales (provinciales) que se establecían en torno a commodities particulares, que además se vinculaban a rutas comerciales, puertos específicos, control de la fuerza de trabajo (esclavista y de servidumbre), y el establecimiento de pautas de poder concreta. Por ejemplo, la formación de las élites del cacao, llamados "*Los Grandes Cacaos",* lograron conformar poderes en varias regiones del país, como en el piedemonte andino, en Maracaibo o los valles de Aragua y El Tuy, promoviendo particulares relaciones con la naturaleza y procesos de territorialización significativos, dándole así forma a polos extractivistas que fueron moldeando una economía de puertos, fundamentalmente al norte del río Orinoco. Habrá una tensión político-territorial entre las élites provinciales y el poder de la Capitanía y la Corona que llegará a su punto máximo en tiempos previos y durante las guerras de independencia.

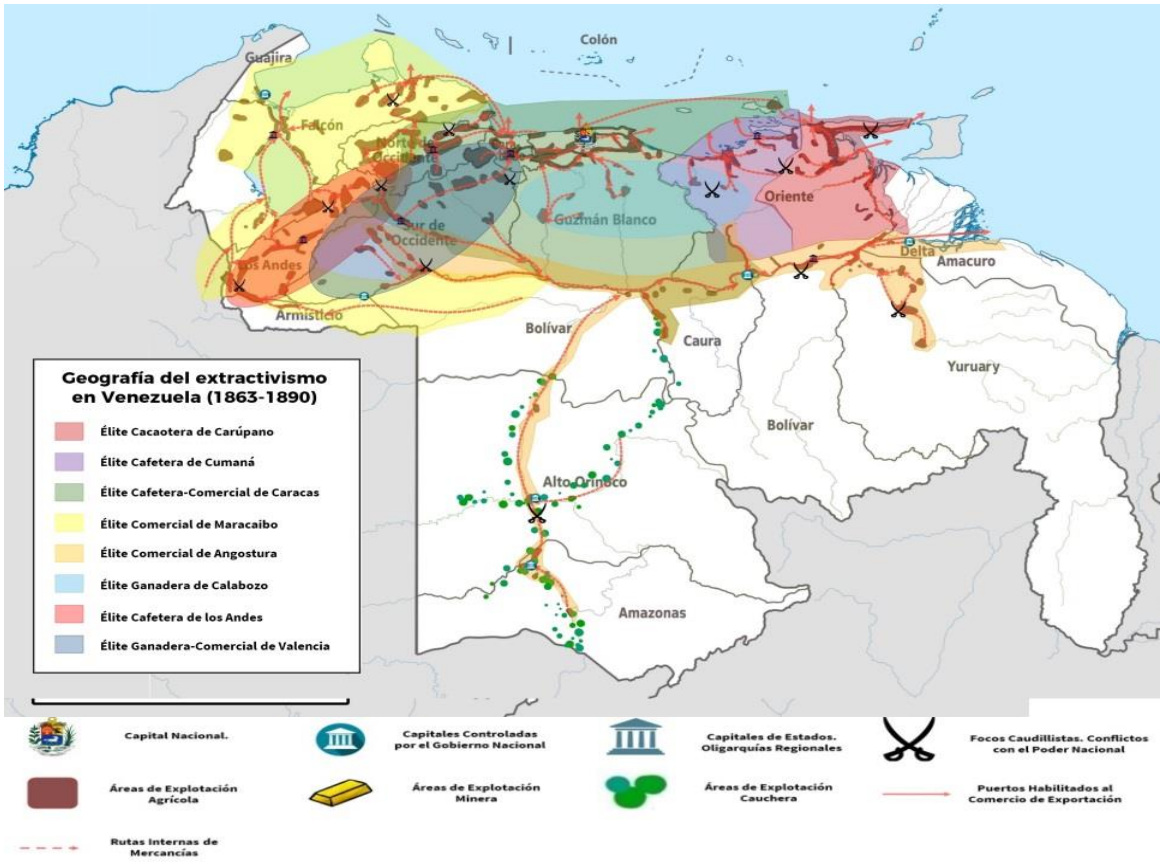
El mapa muestra hasta cierto punto el grado de ocupación del territorio por parte de la sociedad colonial y el relativo poder de la Corona, y los espacios en blanco representan aquellos lugares donde no hay un control efectivo de la misma o de las élites criollas, que son considerados desiertos, o donde habitan pueblos y comunidades indígenas, o existen cumbes y rochelas (donde cimarrones o esclavos fugitivos se concentraban para llevar sus propios estilos de vida).

FIGURA 8. Geografía del extractivismo en Venezuela (1777-1820). Dividido por zonas de influencia de las élites regionales, muestra también localizaciones específicas de poder y rutas comerciales principales. Fuente: elaboración propia/Erick Camargo, a partir de: Brito-Figueroa (1974), Codazzi, (1840; 1841), Halperin-Donghi (1985), Lombardi (1982), Montenegro y Colón (1833), Rodríguez (2007). Mapa base de Venezuela 1810 – Wikimedia Commons.



Con el siglo XIX llega también la independencia, el establecimiento de la Primera República y el largo pero muy conflictivo proceso de formación de Estado que, al menos para los primeros tres cuartos del siglo, no consolida ni una economía nacional ni un Estado-nación. En la FIGURA 9, que muestra la geografía del extractivismo 1863-1890, se evidencia tanto una expansión de los núcleos extractivos –fundamentalmente agrícolas y pecuarios− como la penetración/ocupación territorial, en el marco de unos vínculos más fuertes entre Venezuela y el mercado mundial, que vienen estrechándose desde el siglo XVIII (Vivas, 1991; 1993). Las estructuras de poder siguen proliferando de manera regionalizada, como los grupos que monopolizan el ganado en Los Llanos, las familias del tabaco en Guanare o, en tiempos más avanzados del siglo, o las élites del café en el eje comercial Andes-Maracaibo. Como vemos, estas continuaron su despliegue fundamentalmente al norte del Orinoco. No obstante, la Amazonía comenzaría a ser insertada con más fuerza en las dinámicas de colonización territorial, principalmente con la explotación del oro en el oriente de la biorregión, y al suroccidente con focos de explotación cauchera, estas últimas no obstante desarticuladas de las regiones de poder del norte.

FIGURA 9. Geografía del extractivismo en Venezuela (1863-1890). Dividido por zonas de influencia de las élites regionales, muestra también localizaciones específicas de áreas de explotación, figuras de poder y rutas comerciales principales. Fuente: elaboración propia/Erick Camargo[7], a partir de: Brito-Figueroa (1974), Halperin-Donghi (1985), González-Guinán (1954), Lombardi (1982), Pittier (1922), Rodríguez-Campos y Pino-Iturrieta (2007). Mapa base de Venezuela 1880 – Wikimedia Commons.



Aquí es crucial subrayar que, aunque más expandida, esta geografía de poder del siglo XIX no se define por una evolución estable, sino por el conflicto regionalizado y la violencia extendida, expresados en intensas y devastadoras disputas por tierra, territorio y naturaleza. En un escenario de gran fragmentación, diferentes escalas de poder se confrontan entre sí, donde el eje comercial del centro del país (en torno a Caracas-Valencia y los puertos de La Guaira y Puerto Cabello) tendrán predominio sobre las élites productoras de las otras ciudades; se desarrollaron tensiones entre poderes locales y sectores comerciales financieros; continuaron rebeliones indígenas y antiesclavistas negras; y, sobre todo, se expandía con fuerza el poder de los caudillos regionales. Como vemos en la FIGURA 9, estos último se desplegaban en el grueso de las áreas de influencia extractivista, en muy buena medida confrontados con los poderes centrales del Estado. En este sentido, persistía un extractivismo de rasgos descentralizados.

A estos procesos se les deben añadir las disputas internacionales que, en el caso del Estado venezolano, provocaron que se perdieran significativas regiones del territorio,

[7] Agradezco encarecidamente al abogado y experto en historia de Venezuela, Erick Camargo, por su apoyo en los detalles historiográficos más exhaustivos para la elaboración de los mapas del siglo XVIII y XIX.

como pasó con gran parte de La Guajira y los llanos orientales, amplias extensiones de la Amazonía –en favor de Colombia y Brasil−, mientras que al oriente del país la Guayana Esequiba pasaría a ser formalmente un territorio en disputa, algo no resuelto hasta nuestros días.

Hay por tanto una gobernanza caudillista que se despliega también dependiendo de la mayor o menor estructuración de la estatalidad, así como de su capacidad de extensividad geográfica. El caudillo construía poder regional desde un liderazgo personalista y militar, obtenido por demostración de fortaleza y carisma, por ciertas retribuciones que tenía con sus seguidores y el establecimiento de relaciones clientelares; logrando el apoyo de fracciones importantes de las masas populares (Wolf y Hansen, 1967; Irwin y Micett, 2011). Fue un poderoso instrumento de apropiación de riqueza y se sostenía por la conformación de ejércitos particulares, bandas, montoneras y/o guerrillas armadas, operando con lógicas de rapiña y despojo. Visto desde el sentido más amplio del término, y en relación con los poderes constituidos formalmente, los caudillos podrían ser interpretados como una forma de criminalidad organizada –o el "bandolero social" que ha analizado Eric Hobsbawm (1974).

Sin embargo, estos también pudieron vincularse con el poder hacendal o ser herramienta clave para la consolidación de oligarquías extractivistas (Balladares 2016). Paradójicamente en algunos casos emergieron los llamados 'caudillos nacionales' que utilizaron su influencia, poder y capacidad de movilización social en pro de la consolidación del proyecto estatal-nacional (como José Antonio Páez o Antonio Guzmán Blanco, que llegarían incluso a ser presidentes de Venezuela). Otros pudieron funcionar como bisagras que articulaban con poderes de nivel nacional, una especie de intermediarios políticos, algo que se ha evidenciado en casos como el caciquismo mexicano, que tuvo un importante rol en la propia formación del Estado en ese país (De la Peña 1986 citado en Ibarra, 2002).

Ante esta incapacidad de centralización política del Estado y su estructura notoriamente frágil, se configuraba un alto nivel de abigarramiento en la estatalidad. Esto era así no tanto por las diferencias culturales territoriales que hacía mención Zavaleta-Mercado –más evidentes en el caso boliviano−, sino por la notable predisposición a la conflictividad, los rasgos beligerantes de las estructuras de poder regionales y el carácter levantisco de la sociedad venezolana (Irwin, 1991; Pino-Iturrieta, 2018). Sin embargo, este proceso va a modificarse para el último cuarto del siglo XIX y primero del siglo XX, cuando una serie de caudillos nacionales (desde Guzmán Blanco hasta Juan Vicente Gómez) recurrieron a estrategias políticas de centralización del poder, aprovecharon el impulso económico de la expansión capitalista mundial de la Segunda Revolución Industrial, y fueron ampliando la capacidad estatal de ejercer violencia organizada (desde la victoria en guerras civiles a la formación de un ejército nacional a principios del siglo XX), para derrotar a los caudillos regionales y comenzar a consolidar procesos reales de centralización del poder por parte del Estado-nación (Harwich Vallenilla 1975; 1990; Arcila-Farías, 1985).

En el mismo proceso, se despliega una reconfiguración metabólica del extractivismo donde, además de los productos agrícolas, surge con más fuerza la minería de oro y cobre, la explotación forestal, del caucho y la sarrapia en la Amazonía, del fosfato y el guano, entre otros, y de manera incipiente del petróleo. Surgían procesos de territorialización desde el Estado sin precedentes, como ocurrió con el presidente Guzmán Blanco y su propuesta de una nueva administración territorial desde la cual creaba los 'Territorios Federales', concebidos como espacios de control directo del Ejecutivo Nacional para otorgar concesiones de explotación extractivista (Guillén-Araque, 2014). Esto para el siglo XX va a evolucionar hacia una forma más bien centralizada de organización territorial −el modelo Federal, que tanto se disputó en el siglo XIX, en los hechos ya no tendría cabida−, hasta que se terminarían consolidando los regímenes de concesiones petroleras en la Venezuela del Petro-estado.

Como vemos, aunque en buena parte de la literatura historiográfica latinoamericana el caudillismo ha sido visto como atraso y barbarie, mientras que el Estado representaría la modernidad y el orden, lo cierto es que ambos, a su manera, han apuntado hacia el desarrollo del régimen extractivista recurriendo a formas de violencia organizada (Tilly, 1992). Por otro lado, aunque en muchos sentidos estas dos figuras político-territoriales han estado en confrontación, en ocasiones también han podido articularse y serse funcionales la una a la otra, lo que revela factores de continuidad entre estas.

III.I.I La geografía política del Petro-estado

Los elementos descritos son el telón de fondo para el surgimiento del Petro-Estado, que va a modificar significativamente la composición de la relación extractivismo/poder/territorialización en el siglo XX. Se van a combinar en este proceso tres factores fundamentales: un considerable poder de centralización estatal; el petróleo como elemento determinante de la reconfiguración de las estructuras de poder; y el boom petrolero con el que se inicia la nueva historia contemporánea venezolana, que dará un extraordinario impulso a dicho proceso.

A partir de dos grandes "reventones" petroleros –el del pozo Zumaque I en 1914 y Barroso II en 1922−, Venezuela se va a convertir en el primer exportador de crudos del mundo desde 1928 hasta 1970, período en el que se desarrolló un impresionante y acelerado crecimiento económico, sin precedentes en América Latina (Baptista, 2010). La súbita y masiva entrada de petro-dólares y la significativa modernización impulsada inicialmente por gobiernos militares, los cuales establecieron férreos regímenes de represión, produjeron un dramático shock tanto a nivel de las comunidades como del "cuerpo político nacional" (Watts, 2001). El contraste entre la Venezuela previa y posterior al petróleo va a ser muy grande. La captación de ingentes ingresos petroleros por parte del Estado, su canalización hacia la formación y consolidación institucional, y su uso como instrumento de legitimación social y política, van a darle paso a la conformación de un Petro-estado. Este se define porque su principal fuente de ingresos

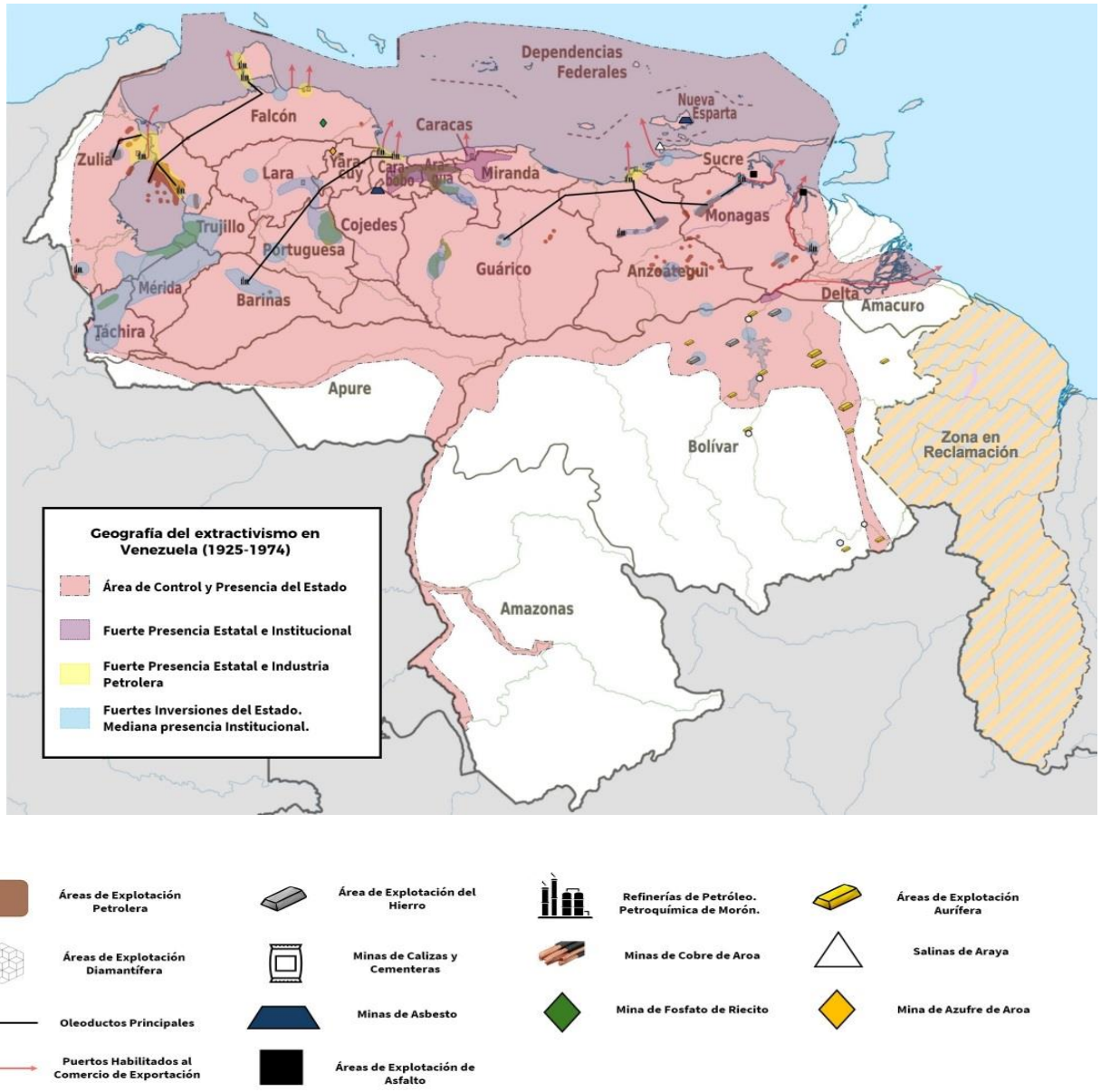
se deriva de la renta petrolera internacional, y por estar determinado por los muy particulares rasgos que el petróleo le da a la política y la economía (Karl, 1997; Watts, 2001; Coronil, 2002), los cuales describo a continuación.

El petróleo, al ser desde el primer cuarto del siglo XX el recurso más importante y valorado en el metabolismo social del sistema global capitalista, tiene la capacidad para otorgar gran poder y capacidad de negociación a sus poseedores. Más allá de la posición internacional de las despectivamente llamadas "repúblicas bananeras", Venezuela sería capaz de alcanzar una cierta influencia geopolítica, como se evidenció con su rol protagónico en la fundación de la OPEP en 1960. Este poder, por un lado, va a potenciar notablemente la capacidad de centralización y homogeneización del Estado venezolano y la estatalidad, configurando una gobernanza predominante, centralizada y de carácter nacional, posibilitada por la renta del petróleo. Por otro lado, dadas las características de la industria petrolera, de muy alta tecnificación, extracciones muy centralizadas y tendencias económicas a la formación de monopolios y oligopolios (Bridge y Le Billon, 2013), el Petro-Estado apuntaría a la propia monopolización de la economía nacional, del poder político y la captación/administración de la renta petrolera, lo que de acuerdo a Watts (2001) configura una forma de "hiper-centralización".

De esta manera, el petróleo se convierte en el determinante de la organización del conjunto del régimen extractivista –continuarán las actividades extractivas agrícolas y pecuarias, mineras, madereras, pesqueras, entre otras−, y el Petro-estado pasa progresivamente a ser el promotor e impulsor del mismo, moldeando un modelo profundamente asimétrico, una petroeconomía. Este particular proceso redujo considerablemente la fragmentación política y la conflictividad regional, mientras se fueron fortaleciendo las instituciones estatales.

Como resultado, tal y como se muestra en la FIGURA 10, "Geografía del extractivismo" (1925-1974), se fue consolidando una expansión, y mayor presencia y penetración territorial por parte del Petro-estado, así como mayores niveles de despliegue de infraestructuras, inversiones y comunicaciones en el espacio nacional. Esto fue unificando una economía nacional y al Estado, en dimensiones no vistas anteriormente, lo que se vincula además con una más profunda inserción del país en el mercado mundial. No obstante, esta capacidad infraestructural sigue siendo diferenciada: los territorios privilegiados del Petro-Estado daban continuidad al patrón histórico-geográfico del extractivismo de instalación y explotación al norte del Orinoco. Caracas conservó centralidad política y, en contraposición, buena parte de la Amazonía fue asignada como 'zona de reserva' o 'por desarrollar', constituyéndose con más fuerza como nuevas "fronteras de commodities" (Moore, 2000; Teran-Mantovani, 2016).

FIGURA 10. Geografía del extractivismo en Venezuela (1925-1974). En color vinotinto se expresa el área de control y presencia del Petro-Estado. También se señalan las áreas donde esta presencia y las inversiones, es más fuerte, y se indican las zonas y actividades económicas principales. Fuente: elaboración a partir de: Chávez (1963), Lombardi (1982), Marrero (1964; 1978), Montenegro (2020), Rodríguez-Flores y Colomine-Rincones (2003). Mapa base con la actual división político-territorial - Wikimedia Commons.



Esto de ninguna manera implicó que no continuara una expansión sobre la Amazonía. De hecho, se produjo un importante salto en la inserción de esta biorregión en el proyecto de desarrollo nacional, fundamentalmente durante los gobiernos del período liberal-democrático (1959-1998). Esto se basó en un plan que se orientaba a la explotación minera (principalmente hierro, bauxita y oro) y forestal, desarrollo urbano e industrial, y proyectos de generación hidroeléctrica, administrados principalmente por la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Dicho despliegue, no obstante, se orientó muy focalizadamente al polo urbano-industrial de Ciudad Bolívar, Ciudad

Guayana y Puerto Ordaz (al norte del estado Bolívar, riberas del Orinoco), a las minas de oro del municipio Sifontes, y las minas de hierro y bauxita al norte y noroccidente de Bolívar, respectivamente.

III.II Gobernanza rentista y conflictos ecológico-distributivos en el auge y crisis del Petro-Estado (1914-1999)

Vistos los principales rasgos de la histórica geografía política del extractivismo hasta el surgimiento del Petro-estado, pongo ahora atención a los específicos mecanismos de gobernanza y conflictividad ecológico-distributiva. Examino en esta sección tres procesos fundamentales: primero, el rol central de la renta petrolera y su impacto determinante en las relaciones sociales y con la naturaleza, prefigurando la gobernanza, la gestión de los conflictos y una particular ecología política. Segundo, los rasgos y antecedentes de las luchas socioambientales en el país previo al surgimiento del proceso bolivariano. Y tercero, la forma cómo este modelo de sociedad va a generar las condiciones para su propia crisis, una que será larga y profunda, y que se desarrollará en al menos dos grandes oleadas: la severa crisis de los 80-90, y posteriormente, La Gran Crisis 2013-2022. Veamos.

III.II.I Gobernanza rentista, violencia y la absorción de la conflictividad

Buena parte de la historiografía y la narrativa venezolana han interpretado el surgimiento de la Venezuela petrolera como la entrada de esta nación a la civilización. Sin embargo, la transición de un país arruinado y sumergido en constantes guerras, a otro rico que fue estructurando un régimen político moderno fue, nuevamente, violenta, en este caso determinada y posibilitada por la férrea dictadura de 27 años de Juan Vicente Gómez. Esta fue la más larga de la historia contemporánea de Venezuela y funcionó en estrecha cooperación con las compañías petroleras extranjeras. No hablo, por tanto, de la violencia bélica que caracterizó el siglo XIX –la última guerra civil fue la llamada "Revolución Libertadora" (1901-1903)−, sino de una violencia que fue elemento constitutivo y central del propio régimen político-económico, que anulaba cualquier tipo de disidencia interna.

Este caso refleja la íntima relación entre violencia y petróleo, que ha sido ampliamente analizada en sus diversas formas, sea en el despliegue territorial de la industria en países como Angola (Reed, 2009), Sudán (James, 2015), Nigeria (Watts, 2001), y otros países africanos (Volman, 2003); en Colombia (Sarmiento, 2017) o Ecuador (Etchart, 2012); en su manifestación en regímenes corruptos (Wenar, 2017); o bien vinculado al neocolonialismo, petro-violencia y conflictos geopolíticos (Saxe-Fernández, 2004; Caffentzis, 2005; Kaldor et al, 2007; Bridge y Le Billon, 2013). Estos autores han analizado cómo el petróleo y su valor global estimulan la violencia y los conflictos −intensificados especialmente en el Sur Global−, dados los incentivos sistémicos para

apropiarse del recurso, el imperativo económico de la instalación de la industria, las disputas por la captura de la renta, las asimetrías de poder que genera, o los efectos socioambientales que deja el desarrollo local petrolero.

Sin embargo, en Venezuela durante, y sobre todo posterior a la larga dictadura de Gómez, se fueron desarrollando varios procesos que van a lograr desplazar progresivamente la centralidad de la violencia (extendida) en el régimen político, apuntando a un posterior cambio de rumbo que se va a orientar hacia una gobernanza motorizada a través de la renta petrolera.

El Petro-estado se irá haciendo a sí mismo a partir de la asunción, cada vez más determinada, de su condición de propietario del petróleo, reivindicando el derecho estatal a la mayor participación posible en la riqueza generada de este, y procurando técnicamente mejorar los esquemas de ganancia y organizar las concesiones (Crazut, 2000; Mommer, 2010). Esto le permitió incrementar progresivamente los ingresos provenientes del crudo pero, sobre todo, captar renta petrolera[8], es decir, participar directamente en las ganancias de la explotación al cobrar el 'arriendo' a otros por el usufructo del subsuelo, del cual ejerce propiedad. Con esto se fueron expandiendo las dimensiones del Petro-estado y sus instituciones, así como de las nuevas estructuras de poder ligadas a este. A su vez, este fue buscando la apropiación y gestión de la mayor parte posible de la industria a través de procesos de nacionalización/estatización, algo que fue consolidándose a fines de los 50 y principios de los 60, en una época de nacionalismo sobre los recursos naturales que cobró fuerza internacional en los países exportadores. En Venezuela esto se corona formalmente con la nacionalización de las operaciones y la fundación de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en 1976.

Es la consolidación de estos procesos la que va a posibilitar la notable predominancia del Petro-estado, sea por la monopolización de la copiosa renta y, por tanto de la economía nacional, dado que el modelo rentista tiende a promover una economía doméstica poco productiva y muy dependiente de los ingresos del petróleo; o bien, porque la distribución de la misma se convierte en el principal mecanismo estatal en la política nacional y el dinamizador del conjunto del sistema social.

A pesar de la centralidad que ha tenido el sector militar en la historia de Venezuela, y en la formación y consolidación del Petro-estado, fueron los partidos políticos –principalmente Acción Democrática y en segundo lugar Copei− los protagonistas en la canalización rentista de las demandas y reivindicaciones sociales en el período democrático-liberal, así como de la organización política de la sociedad (Rey, 1991; Bracamonte, 2015). El Petro-estado, dirigido ahora por líderes políticos electos que

[8] Hay que decir que no todo ingreso petrolero es considerado renta. La renta se caracteriza por ser el ingreso que cobra un arrendatario a quien o quienes hacen uso de su bien, sin menoscabo de su condición de propietario. Esto aplica cuando el Petro-estado asume dicha condición sobre la tierra (en este caso el subsuelo) y exige la participación en el negocio en la forma de regalías. Diferente es el impuesto sobre la renta que, como lo indica su nombre, grava posteriormente estos beneficios económicos. La reivindicación histórica nacionalista en torno a la llamada 'soberanía petrolera' ha sido en muy buena medida en torno al cobro de las regalías.

lograban arrastrar masas, orientó parte de la distribución de la renta hacia objetivos de modernización en infraestructura y en la economía, consolidó sistemas como el electoral y de justicia, pero también se enfocó a los ámbitos sociales impulsando políticas de salud y educación. Estas estrategias en realidad estuvieron muy marcadas por lógicas clientelares, dado que se mantenían claros niveles de desigualdad social y racial en la sociedad, y se consolidaban grupos de poder económico ligados al Estado (Rangel, 1971; Fierro y Ferrigni, 2008). La distribución selectiva y estratégica de la renta, como forma de construir legitimidad política por parte de estos líderes y partidos, configuró lo que el historiador Diego Bautista Urbaneja (1992) ha denominado una forma de "distribución populista".

Por otro lado, este poder del Petro-estado le permitió también incidir en las estructuras organizativas de la sociedad, con una fuerte capacidad de cooptación e institucionalización de las mismas, configurando una debilidad estructural en la vasta mayoría de ellas (García-Guadilla, 1992).

La renta petrolera, sobre todo cuando fue muy abundante en los períodos de boom de los precios internacionales del crudo, no solo contribuyó a atenuar coyunturalmente las carencias económicas de sectores de la población, sino que tuvo además la capacidad de recrear artificialmente una sociedad moderna –siendo en realidad apenas una economía sostenida por un recurso que no produce, sino que solo extrae−, con lo que logró incidir poderosamente en los imaginarios sociales y las expectativas de progreso. La particularidad del petróleo, en comparación con el resto de commodities, tiene que ver también con esta extraordinaria valoración económica y social que posee, con su capacidad de generar súbitas y grandes riquezas, lo que explica su significación mítica como 'oro negro', la idea del Estado venezolano como un "Estado Mágico" (Coronil, 2002) y la denominación de las formas de hacer políticas en torno al recurso como "petro-política" (Carter, 2011; Stendie, 2013).

Como resultado de estos procesos, las dinámicas rentistas de distribución selectiva e imaginarios/expectativas culturales de riqueza, lograban desplazar progresivamente la centralidad de la violencia (extendida) en el sistema –tanto la bélica, generalizada en el siglo XIX, como la dictatorial de principios del siglo XX−, absorber los efectos de la desigualdad y el descontento social, y minimizar la conflictividad social. Ciertamente los primeros años del período democrático-liberal fueron convulsos, con protestas, intentonas golpistas e incluso con el surgimiento de la lucha armada de izquierda. Sin embargo, esta última no logró convertirse en un determinante social ni alcanzar una mayor conexión popular (Beaumont-Rodríguez, 2007; Espina, 2017) y, en cambio, presenció cómo el sistema político iba teniendo creciente legitimación, mientras se registraba la participación masiva de la población en los procesos electorales. Las iniciativas insurgentes poco duraron y habían sido prácticamente derrotadas a fines de los 60, y para la década de los 70, en el gobierno de Rafael Caldera se había instaurado un proceso de "pacificación", integrando a los líderes y seguidores de la insurrección al sistema político y de partidos. La violencia pues, no desaparece, pero se vuelve más bien sectorizada y selectiva, mientras que la Venezuela petrolera de entonces lograba

establecer una imagen que recorrió el mundo, como una de las 'democracias más estables' y 'modelo' para la región.

El proceso venezolano de *rentificación* de la sociedad nos muestra por tanto las variaciones de la colonialidad del poder y la petro-violencia que, décadas después, durante el colapso venezolano en el siglo XXI, van a mostrarnos una especie de vuelta al despliegue masivo de violencia. En clave comparativa internacional, Michael Watts (2001) examinaba cómo la expansión de la petro-violencia en el caso de Nigeria fue exacerbada, mientras que en el Ecuador, otro Petro-estado, y siendo ambos países del Sur Global, fue más bien esporádica. Estas diferencias las adjudicó a variaciones en la solidez del Estado-nación y su relación con la distribución de renta petrolera. Se intuye por tanto que, a mayor solidez estatal, y una distribución rentística más amplia y sistemática, menores posibilidades hay de despliegue de la petro-violencia.

Siguiendo esta interpretación de Watts, si unimos a Venezuela en la comparación, es posible añadir tres elementos más que nutren el análisis: primero, el asunto del rentismo es un problema de "magnitudes relativas", es decir, de las proporciones que representa la renta en una formación económica particular, tal y como lo ha subrayado el economista Asdrúbal Baptista (2010). Para el caso venezolano, la captura de renta petrolera fue enorme y prolongada, en un país además con una baja densidad poblacional −en los años 50 su PIB per cápita estaría entre los más altos del mundo, superando incluso al de los EEUU (Astorga, 2003; Santos, 2016)− a diferencia de Ecuador y Nigeria, con rentas mucho menores y menos longevas. Esto, por tanto, tuvo un peso relativo mucho mayor en Venezuela, para conformar, masificar y estabilizar una gobernanza rentista efectiva.

Segundo, los más de 100 años de instalación y persistencia histórica de la Venezuela petrolera en los territorios y la economía del país, generó una especie de asimilación y acostumbramiento social que, al menos por un tiempo, tendió a reducir la propensión a resistencias sistémicas.

Tercero, y no menos importante, la petro-violencia y su relación con la mayor o menor solidez estatal a la que hace referencia Watts, está también determinada por la composición interna de la comunidad política que encarna dicho Estado; sea en el grado de articulación/estratificación étnico-cultural que se da en la misma (Quijano, 2000), en sus niveles de abigarramiento, y en las formas en las que se ejerce la colonialidad del poder en esos contextos. Esto implica examinar dos cuestiones importantes: una, el tipo de racialización, siendo que en África (y en este caso, en Nigeria) ha estado muy relacionado con el racismo hacia la negritud, y que ha sido profunda y exacerbadamente más violenta (Mbembe, 2016). Y dos, las Territorialidades y etnicidades que pueden, o bien ser más resistentes a la expansión extractivista, o en cambio plegarse a los procesos de integración al régimen extractivo. Por ejemplo, la expansión petrolera en la Amazonía ecuatoriana ha enfrentado mayores resistencias (hasta nuestros días) de la mano de pueblos indígenas, a diferencia del caso de Venezuela, donde los procesos de homogeneización estatal fueron mucho más exitosos.

Es necesario ahora precisar y profundizar en cómo este patrón de gobernanza rentista del Petro-estado estableció un tipo de relacionamiento con la naturaleza y la distribución ecológica.

III.II.II Ecología política del Petro-estado y su régimen eco-sistémico

El estudio en torno al Petro-estado y la *cuestión petrolera* en Venezuela ha centrado notablemente su interés en el problema de la renta y el rentismo, la administración de la misma y la muy popular idea de "sembrar el petróleo", las políticas para el desarrollo, el mejoramiento técnico de la industria y su gestión, o el asunto de la soberanía energética ante los intereses extranjeros. Ha habido en estos análisis, en cambio, grandes carencias y una cierta invisibilización de las dimensiones ecológico-territoriales.

En términos más generales, aunque hay una amplia literatura desde la ecología política que ha examinado la explotación petrolera y el rol de su industria, en relación al Petro-estado esta ha sido menor. Los enfoques dominantes para estudiar estos Estados se han orientado fundamentalmente a su rol en las economías rentistas –y los *Estados Rentistas*− y a los perfiles políticos que desarrolla. Su relación con el ambiente o la naturaleza ha sido analizada más que todo en casos nacionales, vinculado a sus performances en este ámbito específico: Carter (2011) y Stendie (2013) evaluaron el Petro-estado canadiense, Tynkkynen (2007) el ruso y Reed (2009) el caso angoleño. Estos autores convergen en un análisis que señala cómo este tipo de Estados, conformado por alianzas entre actores gubernamentales y corporaciones petroleras, socava las instituciones, la democracia, los derechos de comunidades locales e indígenas, y las políticas ambientales, al tiempo que promueve formas de externalización socioambiental para favorecer la actividad extractiva.

Para el caso venezolano, se puede mencionar puntualmente el trabajo de Delgado (2017), que analizó los severos impactos de los proyectos de producción solar de sal en el estado Zulia, considerados por el autor como los "daños colaterales" de la agenda nacional de petro-modernización, basada en la domesticación de la naturaleza. Por su parte Massabié (2008), estudió las posibilidades y obstáculos que enfrenta el Petro-estado para impulsar la energía renovable en el país, tomando en cuenta los negativos efectos de las políticas rentistas –como el enorme subsidio a la gasolina− en la consolidación del patrón energético del país, muy sesgado hacia los combustibles fósiles.

Se reconoce el valor de estos aportes para examinar aspectos particulares de la actuación de los Petro-estados vinculada con diversas dimensiones ecológicas, aunque para esta interpretación a nivel de conformación de régimen extractivista, me inspiro en las perspectivas más comprehensivas de los trabajos de Fernando Coronil (2002) y Michael Watts (1999; 2001; 2003) que además están alineadas con las bases teóricas de mi investigación. Desde Coronil destaco e incorporo la idea de cómo estos Estados

están estructurados a partir de una relación colonial con la naturaleza, que necesita perpetuarse para su sostenimiento. Desde Watts, recupero sus vínculos con la producción del espacio geográfico en varias escalas, como ya he mencionado anteriormente.

Tomando estos elementos y los demás componente teóricos expuestos en este capítulo, planteo que el Petro-estado venezolano no sólo configuró una particular economía, una forma de hacer política, una predominancia de la llamada cultura del petróleo, sino también una específica ecología política, una forma de poder y saber sobre la naturaleza. Esto incluye el establecimiento de un marco para la distribución ecológica y las valoraciones ambientales que, antes que ser elementos adicionales del análisis, en realidad componen la estructura societal que este conforma.

La consolidación del Petro-estado no sólo se basó en una masiva apropiación y capitalización de la naturaleza, convertida esta en renta, que además permitió desarrollar procesos de acumulación de capital favorables a las élites estatales y económicas, y capitales foráneos. También lo hizo desplegando enormes impactos socioambientales en amplios espacios de la geografía del país, promoviendo la creación de zonas de sacrificio, y generando e intensificando conflictos de esta índole.

Esto último se evidenció en el progresivo desplazamiento de indígenas barí en el estado Zulia por el avance de la explotación petrolera, y en décadas posteriores, de comunidades pescadoras en la península de Paraguaná (Falcón) por la instalación de refinerías; la contaminación constante del delta del Orinoco donde habitan indígenas warao; o la conversión paulatina del lago de Maracaibo en una cloaca petrolera, por mencionar ejemplos emblemáticos. Los impactos fueron sufridos por las comunidades como un avasallamiento territorial, ante la drástica y acelerada irrupción de la Venezuela petrolera. Pero también, y sobre todo, esto se desarrolló con un notable consentimiento social construido desde el incuestionable predominio del Petro-estado, y en el marco de un muy significativo cambio cultural en la población, que va a incluir importantes modificaciones en las concepciones y relacionamientos sociales con la naturaleza.

Esto no solo tuvo que ver con una política explícita de las compañías petroleras estadounidenses en conjunto con los gobiernos del período democrático liberal, orientados a transmitir sistemáticamente contenidos favorables a la industria e ideales de progreso e identidad nacional estrechamente relacionados con la explotación petrolera (Tinker-Salas, 2014); sino también a otras cuestiones más de tipo antropológico. El proceso de territorialización del Petro-estado, que implicó la muy acelerada urbanización que he mencionado anteriormente, favoreció que la movilidad social se dirigiera fundamentalmente hacia la captura de la renta petrolera, fortaleciendo los mitos de riqueza y progreso súbito que están íntimamente asociados al oro negro (Coronil, 2002). Esto hizo que la vasta mayoría de la población estuviese permeada por los valores crematísticos asociados a la renta, tendencias al consumismo de productos importados, y la cultura política del Petro-estado.

En este mismo proceso, se fue produciendo un considerable desplazamiento de las culturas rurales e indígenas, de otras cosmovisiones y saberes mucho más cercanos a valores ecológicos, que van quedando subordinados en los campos dominantes de valoración social en el país. Esto ocurrió junto a un distanciamiento geográfico respecto a las mismas, dada la lejanía espacial que promovió la hiper-concentración urbana de la zona norte-costera, todo lo cual promovió un importante debilitamiento de las valoraciones ambientales en la cultura nacional (Teran-Mantovani, 2018c).

Como resultado, el peso relativo de la conflictividad socioambiental en la historia contemporánea venezolana ha sido, en general, de mucha menor importancia en relación a otro tipo de conflictos, como el económico y el político. En este marco, el surgimiento de un problema ambiental, y un potencial conflicto de esta índole, podía ser también absorbido por la política rentista. En este sentido, mientras que en países como Colombia la violencia ha jugado un rol central para el Estado como mecanismo para enfrentar los conflictos ecológico-distributivos (Pérez Rincón, 2014), en Venezuela, el Petro-estado recurrió por décadas a la distribución estratégica y selectiva de la renta petrolera, sea canalizando la movilidad social y la expectativa de progreso hacia ella, o bien a través de la compensación económica, sobre todo por parte de las empresas estatales (como PDVSA). El carácter incuestionable del petróleo y su modelo, así como los imaginarios sociales de inclusión y riqueza vinculados al mito del oro negro, tuvieron el poder para normalizar el impacto socioambiental masivo o hacerlo tolerable –como ha ocurrido en el Lago de Maracaibo−; y para invisibilizar, debilitar o posponer la conflictividad y demanda socioambiental, principalmente en los territorios de predominio del Petro-estado (Terán-Mantovani, 2018a). Estos dispositivos, que podemos denominar *políticas de asimilación*, persiguen la integración de la población a las dinámicas políticas y culturales de la economía rentista petrolera.

En suma, el régimen que establece el Petro-estado, más allá de ser puramente económico o político, debe ser tambien entendido como *un régimen eco-sistémico* o ecorégimen, que se despliega sobre el conjunto de la vida. A partir de los elementos expuestos en esta y secciones anteriores, establezco cuatro pilares sobre los que este se sostiene, y que funcionan articulados con la dinámica rentista: a) Control de la naturaleza y establecimiento de un marco de distribución ecológica dominante; b) Comando de procesos de territorialización; c) Establecimiento de valoraciones sobre la naturaleza subordinadas a la renta petrolera; y d) Confrontación de las desigualdades ecológicas fundamentalmente a través de mecanismos de asimilación. En la FIGURA 11 presento de manera esquemática los factores de este ecorégimen.

FIGURA 11. Pilares del Régimen eco-sistémico del Petro-estado en su articulación con la distribución de renta petrolera. Fuente: elaboración propia



No obstante, el poder del Petro-estado no debe ser entendido como una fuerza absoluta e irresistible. A pesar de este tipo de políticas, también surgieron movilizaciones importantes y exitosas, que preceden al conjunto de luchas socioambientales que son analizadas más adelante en este trabajo.

III.II.III Breve antecedente de las luchas ambientales previas al surgimiento del proceso bolivariano

Con la instauración de la democracia-liberal, se establecieron nuevas reglas de juego, y se perfilaba la configuración de una ciudadanía moderna. Esto se expresó progresivamente en formas más políticas de acción colectiva, donde el contexto de estabilización/mecanismos de asimilación que he mencionado hacía prevalecer la canalización de las demandas por vías institucionales, y vinculadas a nociones normativas y de derecho. Por otro lado, la expansión de la petro-economía y de los procesos de modernización territorial, hicieron que los impactos ambientales se fueran convirtiendo cada vez más en problemas de orden público y político. Todo esto abrió un escenario de paulatina emergencia de luchas socioambientales en Venezuela.

Las agrupaciones sociales organizadas –como movimientos socioambientales− y los ambientalismos contemporáneos tienen sus orígenes en la primera mitad del siglo XX, en su momento basados en perspectivas de protección y reclamos ciudadanos puntuales, sin mayor disputa ni al modelo societal ni al poder establecido. Este proceso va a evolucionar hacia la posterior emergencia de ambientalismos más formados, algunos de los cuales tendrán enfoques más políticos, a partir de los años 80. Para comprender esta evolución, tenemos que mirar cuatro ámbitos de organización y movilización ambiental que fueron consolidándose y/o transformándose con el tiempo. Estas son:

a) Primero, una perspectiva conservacionista que provino de sociedades y fundaciones de ciencias naturales (establecidas desde fines de los 20 a fines de los 50), dedicadas a la investigación y protección de especies naturales del país, y que se fue asentando progresivamente en el país.
b) Segundo, la evolución de las juntas de vecinos (a partir de los 30), que fueron fundando confederaciones de juntas, y que se orientaron a movilizarse por la mejora de sus condiciones de vida barriales, incluyendo denuncias y reivindicaciones ambientales (Velasco-Páez, 2018).
c) Tercero, la irrupción de corrientes ambientalistas internacionales tuvieron también incidencia en la formación de grupos y organizaciones locales y nacionales que comenzaban a adoptar estas identidades.
d) Y cuarto, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su sobrevivencia cultural y por la reivindicación de sus derechos territoriales que, en el caso de Amazonas, se remonta a los 70 y 80 con la resistencia a invasiones de sus territorios por parte de terratenientes, hasta la conformación de organizaciones indígenas de base y regionales (Moncada y Tillet, 2018). Estas irán creciendo en visibilidad hacia finales de siglo, pero no lograrán tener mayor peso e incidencia en la política nacional, como sí la tuvo, por ejemplo, el movimiento indígena en el Ecuador.

Había emergido una diversidad de formas de organización y estrategias de diferente composición social y variados marcos ideológicos y de valoración, en la forma de organizaciones vecinales, ONGs con un perfil más tecnocrático, frentes y alianzas amplias, hasta movimientos autónomos con críticas al modelo de sociedad (Velasco-Páez, 2018).

Ciertamente, y como ya he mencionado, la gobernanza rentista del Petro-estado y sus políticas sobre la distribución ecológica y la organización social, tuvieron un notable efecto de acotamiento de estas iniciativas, logrando en muy buena medida encauzarlas y absorberlas. Esto se expresó, por ejemplo, con el intervencionismo y asistencialismo estatal sobre el movimiento vecinal, y la burocratización y partidización de las juntas promejoras; o bien, con la incorporación de las iniciativas conservacionistas en el proceso de formación de parques nacionales y planificación estatal de recursos hídricos (Velasco-Páez, 2018). No obstante, tres factores de cambio metabólico van a favorecer un incremento de la conflictividad ecológico-distributiva y una mayor politización de lo

ambiental, en la Venezuela de fines del siglo XX: primero, la eclosión de la crisis urbana (años 70), que hacía más evidentes las transformaciones y problemas socioambientales para el grueso de la población; segundo, la crisis del modelo rentista (desde los 80), que afectó la captura/distribución de renta por parte del Petro-estado y la efectividad de su gobernanza; y tercero, la importante expansión extractivista en el marco de las reformas neoliberales, que implicó nuevos avances en las fronteras de commodities. Estos tres factores favorecieron el crecimiento de ambientalismos más políticos y críticos en las décadas de los 80 y 90, que representaron las movilizaciones de este tipo más vigorosas de la historia nacional.

Destaco la emergencia de la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela (FORJA) en 1978; las movilizaciones para evitar la minería en la Reserva Forestal del Imataca en 1997, que articularon una diversidad de actores, tuvieron impacto nacional y lograron congelar los efectos del decreto N° 1850 que permitía la actividad en esa zona, a través de medidas cautelares que en su momento fueron adoptadas por la Corte Suprema de Justicia (Amigransa, 2003; Rodríguez-Gilly, 2024). Las luchas del pueblo indígena pemón contra el proyecto turístico "Turisur" en la Gran Sabana entre 1995 y 1997, que lograron detenerlo; y también su oposición a la instalación del tendido eléctrico para exportar energía a Brasil (Rodríguez y Aguilar, 2021). La coalición de organizaciones, incluyendo de indígenas warao, que se movilizaron contra la contaminación de la British Petroleum (BP) en Pedernales (Delta del Orinoco), consiguiendo sacar a la empresa y haciendo que el Ministerio del Ambiente de entonces declarara la obligación de la misma de ejecutar planes de recuperación de daños (Pocaterra, 2004).

También se puede mencionar el surgimiento de la Red de Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch, que congregó a numerosas organizaciones ecologistas como Amigransa, intelectuales como Francisco Mieres y ambientalistas como Frank Bracho, defendiendo no solo reivindicaciones de justicia ambiental ante los impactos de la industria petrolera, sino también planteando críticas al modelo petrolero (Red Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch, 2003). La lucha emblemática de la comunidad de El Hornito (estado Zulia) contra la compañía nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 1994, que logró resonar y ser reubicada; o de los campesinos del municipio Ospino (estado Portuguesa) en 1997 contra la expansión de plantaciones de eucalipto que llevaba la corporación irlandesa Smurfit Kappa.

IMAGEN 1. Marcha en Caracas contra la minería en la RF Imataca, con la participación de más de 500 organizaciones sociales, ambientalistas, derechos humanos, estudiantes universitarios de varias partes del país, además de representantes del pueblo Pemón. Mayo de 1997. Fuente: Rodríguez-Gilly (2024)



Aunque de manera subordinada, estas luchas lograron posicionarse en la discusión política haciendo que el tema ambiental entrara en el debate electoral presidencial de 1998, contienda donde Hugo Chávez sería elegido. En muy buena medida, las reivindicaciones ecológicas que el Petro-Estado asumirá posteriormente en el proceso bolivariano son también resultado de estas movilizaciones previas y, numerosas de las luchas de perfil socio-ambiental que se desarrollaron en la época chavista son continuaciones o herederas de aquellas.

Es necesario señalar que el crecimiento de los conflictos de distribución ecológica en Venezuela también incidió en un incremento de su estudio, aunque, de igual manera que ocurrió con las movilizaciones ambientales, estos no lograron una mayor trascendencia y las publicaciones sobre el tema siguieron siendo relativamente escasas. La mayoría de estos análisis ha desarrollado estudios de caso localizados, o examinando problemas ambientales particulares. Menciono los trabajos de Sebastiani et al (1994), que estudiaron el conflicto vinculado a los cultivos de camarones de gran escala en humedales costeros del país; Rodríguez (2002), Rodríguez (2004) y Sletto (2008) plantearon fructíferos análisis de los conflictos que se han desarrollado en el emblemático Parque Nacional Canaima. En años más recientes, se estudiaron conflictos por la minería ilegal e informal de oro en el sur (Herrera y Rodríguez, 2015); Scott (2016) y Penfield (2019) examinaron cómo los indígenas jivi y los sanema respectivamente, han sido afectados por la estandarización de la organización política y la dependencia social al Petro-Estado, aunque ambos autores remarcan cómo los indígenas también negocian y se adaptan a las formas de vida dominantes de la sociedad petrolera. Finalmente, Castro et al (2017) estudiaron el conflicto generado en torno a la construcción del segundo puente sobre la Laguna de la Restinga (Isla Margarita); Suárez

(2017) la resistencia, también emblemática, de comunidades yukpa ante la expansión de la minería de carbón (estado Zulia); y en los últimos años se incrementó el interés en torno a los variados impactos generados por el proyecto Arco Minero del Orinoco (Lozada, 2019; Mora-Silva y Rodríguez-Velásquez, 2019; Vázquez y Rodríguez, 2021).

Muy pocos trabajos han planteado un análisis de conflictos de distribución ecológica en el país con perspectiva multi-casos, tratando de conectarlos con el marco político-económico nacional. Ferreira (1998) examinó brevemente en la década de 1990 algunos casos para evaluar cómo se violaron las políticas ambientales, principalmente en materia de áreas protegidas, debido a las políticas de ajuste neoliberal desarrolladas en el país. Carrillo (2000) estudió los 10 conflictos ambientales más mediáticos de los 90s y su relación con la inversión extranjera directa, vinculada también a medidas neoliberales. Es el trabajo de María Pilar García-Guadilla (1992; 2001; 2009; 2014) el que ofrece el análisis quizás más completo, de lo que ella llama el "movimiento ambiental venezolano" y su relación con las instituciones del Estado (no descrito como un Petro-estado), desarrollando una perspectiva de teoría política enfocada en las posibilidades de consecución de la ‘democracia participativa’ y el ‘desarrollo sostenible’. Desde este marco, me ha interesado contribuir desde mi análisis multi-casos de toda Venezuela, con una perspectiva comprehensiva y comparativa de ecología política que vincule la multiplicidad de luchas en torno a la naturaleza, con la caracterización a nivel de régimen extractivista y de estructuras de poder a nivel nacional.

IMAGEN 2. Protestas Pemón en contra del tendido eléctrico en Caracas, 1998. Fuente: Archivo fotográfico Kumarakapay, en Vitti (2021)



III.II.IV La primera ola de la larga crisis del modelo rentista petrolero

El modelo de poder y acumulación rentista petrolero venezolano pasó de manifestar síntomas de agotamiento en la década de los 70, a entrar en una profunda crisis que se va a expresar tanto en lo económico, como en lo social, político y ambiental. El punto de inflexión fue el llamado "Viernes Negro" en 1983, cuando se decretaba el fin de la libre convertibilidad del bolívar y su devaluación en 30%, representando un cambio drástico en la captación y distribución de la renta, y un quiebre en el imaginario social de riqueza y prosperidad construido a lo largo de décadas (Teran-Mantovani, 2014). Desde entonces, comienza un período de desequilibrios económicos estructurales en el país que, con grados de severidad variables, se han mantenido sin resolver, al menos hasta inicios de la tercera década del siglo XXI. Se trata por tanto, de una misma crisis determinada por dos grandes oleadas, siendo la segunda, una mucho más fuerte que la primera, la que desencadena La Gran Crisis.

Los factores que generaron la primera oleada de la crisis se han convertido en objeto emblemático de estudio nacional e internacional. Además de los análisis del tipológico Petro-estado venezolano y sus limitaciones, se han generado numerosas investigaciones sobre los particulares efectos que generan las economías petroleras en los países productores-exportadores, con análisis sobre 'rentismo', 'Estados rentistas', 'rent seeking behaviour' o la llamada 'maldición de la abundancia', recurriendo también a hechos y fenómenos desarrollados en la Venezuela del siglo XX. La profesora en ciencias políticas Terry Lynn Karl, muy conocida internacionalmente por introducir y desarrollar el concepto de Petro-estado en su obra "La paradoja de la abundancia. Booms petroleros y Petro-estados", ha reconocido que fue el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo –uno de los fundadores de la OPEP y Ministro de Minas e Hidrocarburos en el gobierno de Rómulo Betancourt− quien la incentivó a hacer su estudio tomando el caso de Venezuela. Pérez Alfonzo le había advertido proféticamente a Karl que en algunos años el modelo se derrumbaría. Por otro lado, antes de ser acuñado el término "enfermedad holandesa", economistas noruegos habían hecho referencia al "Efecto Venezuela" para describir la propensión al gasto de los ingresos petroleros extraordinarios que estaban por encima de la capacidad de absorción del aparato económico nacional (Mendoza-Pottellá, 2016).

Me interesa en este capítulo no solo por resaltar los particulares problemas estructurales que contribuyeron al posterior surgimiento de la figura política de Hugo Chávez y la llamada 'Revolución Bolivariana', los cuales verán continuidad en este proceso político del siglo XXI. También quisiera denotar, nuevamente, los vínculos que existen entre las dinámicas rentistas y el régimen extractivista (y eco-sistémico), ya no en faceta de auge, sino ahora de crisis y declive.

En esta línea, hay 6 factores fundamentales que son constitutivos de la crisis de este modelo, y que es importante subrayarlos:

1) Incapacidad del desarrollo económico doméstico para autonomizarse de la renta petrolera: aunque se orientó una parte de la inversión de la renta petrolera hacia las políticas de sustitución de importaciones en las décadas de los 50 y 60, el proceso de desarrollo capitalista nacional no logró generar ingresos internos (no rentísticos) que les permitieran aparejarse con el incremento de la capacidad productiva alcanzada, y compensar así el propio circuito económico doméstico (Baptista, 2010). Esto generó que dicho proceso se estancara, sin poder autonomizarse y desanclarse de la dependencia rentística petrolera.

2) Baja histórica de la rentabilidad petrolera: se desarrollaron tendencias continuas hacia la baja en la rentabilidad del petróleo venezolano desde los años 80 (Baptista, 2005), lo que iba a afectar los procesos de acumulación nacional.

3) Inundación de divisas: un asunto central ha sido lo que Juan Pablo Pérez Alfonzo (2009) llamó la inundación o "indigestión" de divisas, sobre todo ante booms de los precios petroleros, lo que implica el ingreso de enormes y súbitos caudales de renta a la economía nacional. Esto, dada la condición inorgánica del modelo rentista (percibe un ingreso de un bien que no produce), tiene efectos tanto en la estructura económica doméstica como en la política de distribución de la renta. Por ejemplo, inundaciones de divisas como la que provocó el boom de los 70, generan el relajamiento de los factores productivos no petroleros (que tienden más bien a buscar capturar parte de esa renta), haciendo por tanto que sea vuelvan cada vez más improductivos, mientras que el mercado nacional se ensancha artificialmente. Todo esto genera un desequilibrio estructural que no es percibido debido a la bonanza momentánea (Baptista, 2004).

4) Gigantismo y despilfarro: la relación entre la enorme masa de renta y la distribución populista de la misma para sostener la legitimidad política de los gobiernos de turno, instaló una lógica de gigantismo en las promesas y narrativas, de delirios económicos e impulso de faraónicos proyectos –la recurrida idea de La "Gran Venezuela" (Coronil, 2002; Teran-Mantovani, 2014)−, que en tiempos de caída de los precios del crudo costaba sostener. Para Pérez Alfonzo, era el propio modelo el que promovía una lógica de despilfarro rentístico.

5) Corrupción gubernamental en expansión: la enorme captura centralizada de renta en el Petro-estado, sin auditorías sociales posibles, fue también un incentivo para el auge de la corrupción que, de ser una expresión particular de funcionarios, pasó a evolucionar hacia importantes entramados de apropiación ilícita de riqueza. Casos emblemáticos y mediáticos como el de la Oficina RECADI por tráfico de divisas que involucraban 50.000 millones US$ o el de las "Partidas Secretas" en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, mostraban las dimensiones del problema. Esto además evidenciaba que la corrupción se había convertido en un poderoso e instituido mecanismo de distribución de renta.

6) Inflación y endeudamiento como efectos macroeconómicos: el declive de las economías productivas nacionales se vinculó con el alza de los precios generales, que para Venezuela va a desarrollar tendencias inflacionarias entre las más altas del mundo. Por otro lado, el gigantismo dependiente de la renta, al desatarse la crisis, va a estar conectado con la extraordinaria expansión de la deuda externa, siendo que de 49.099 millones de bolívares en 1978, se debían 93.661 millones en 1983 (Wexell-Severo, 2009). Esto, unido al incremento de las tasas de interés, provocaron que Venezuela entrara en moratoria de pagos en los años 1983 y 1988, en la llamada "crisis de la deuda".

Estos factores van a afectar no solo el funcionamiento del Petro-estado y sus instituciones, sino también su capacidad para sostener el marco de estabilización de la sociedad que lograba a través de la política rentista. Esto, junto a la creciente pobreza y crisis de los servicios públicos, abrió un período de enorme descontento social y descrédito de los partidos políticos, y en consecuencia, de mucha mayor conflictividad. Una expresión y clímax de este proceso lo marcó el estallido social de febrero de 1989, "El Caracazo", que alcanzó repercusión nacional y sacudió todo el orden político, el cual se mostraba ya agotado. El estallido quebraba la imagen de la 'democracia estable' de América Latina, e implicó el retorno de los mecanismos populares de interpelación al poder, no regulados por el Petro-estado, lo que se tradujo en un incremento del volumen e intensidad de las protestas (López Maya en Baptista, 2000; López-Maya, 2001).

La crisis también debilitó la perspectiva de nacionalismo energético que el Petro-estado había fortalecido y consolidado durante décadas. A su vez, había perdido fuerza para orientarse hacia objetivos de desarrollo y la 'siembra del petróleo', teniendo que enfocarse en tratar de salir de la crisis. Ante la creciente influencia del paradigma neoliberal en América Latina, los correctivos económicos para abordar la situación se enfocaron en estrategias de mercado y se apostó por la idea del "Estado mínimo". Esto implicó una significativa regresión del rol del Petro-estado en la economía y la sociedad, y se impulsaron varias transformaciones en sus estructuras (Bautista Urbaneja, 2007). Entre ellas, se privatizaron varias empresas y compañías que habían sido anteriormente nacionalizadas; se promovió un vuelco hacia la globalización, mientras fue amainando progresivamente la centralización de la gobernanza. Al mismo tiempo, se intentaba impulsar una nueva cultura en el Estado, acorde con estos cambios de perfil neoliberal (Contreras, 2004).

El período crítico implicó al mismo tiempo, un reordenamiento del extractivismo y de numerosos procesos de Territorialización. El profundo ajuste económico en curso suponía una orientación más intensiva y agresiva hacia la naturaleza. Esto se tradujo en una política de apertura a los territorios para facilitar un mayor acceso a los llamados recursos naturales, que para el caso del sector hidrocarburos refería a una 'internacionalización' de PDVSA y el impulso de la llamada "Apertura petrolera" en la década de los 90. Este plan establecía puertas abiertas de la industria a las inversiones

extranjeras −siendo el sector de la economía que recibió las más altas sumas (Carrillo, 2000)−, y facilidades al capital privado tanto en la participación en las ganancias, en la capacidad de influencia en las decisiones corporativas, como en la propia producción petrolera (Mommer, 2010). En última instancia, la política aperturista apuntaba a desmantelar el marco jurídico de la nacionalización, a la privatización de la empresa y a reducir el poder del Estado.

Se trazaron objetivos expansivos en el extractivismo, lo cual se evidenció en la propuesta de PDVSA de alcanzar un muy considerable incremento de la producción, hasta llevarla a 5 o 6 millones de barriles diarios. Esto incluyó el impulso de los niveles de extracción en la Faja Petrolífera del Orinoco y en nuevos pozos en la parte norte del delta del Orinoco. Pese a que entre 1985 y 1997 la producción se incrementó en casi 2 millones de barriles diarios adicionales, no se lograría esta ambiciosa meta, pudiendo llegar hasta un máximo de 3.473.000 barriles en ese año 97.

La Amazonía representaba otro importante flanco extractivista: en los 90 se reportaron incrementos sostenidos de inversiones extranjeras que también se orientaron hacia la minería, alcanzando máximos históricos. El foco se puso en recursos de localización amazónica, como el oro, el hierro y la bauxita, aunque también se incluyó el objetivo de expansión de la minería de carbón en zonas aledañas a la Sierra de Perijá (Carrillo, 2000), otra frontera de commodities. El segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999), previo al de Chávez, retomaba la idea de "La Conquista del Sur", una propuesta de recolonización de la Amazonía que, además de minería, incluía el impulso de proyectos forestales, de infraestructura y turísticos.

El impacto metabólico era notable: por ejemplo, en 1996 se alcanzaron las 11,72 toneladas de oro extraídas de la Amazonía, y en 1997 se llegó a la cifra record de 22,32 toneladas, descendiendo luego a 10 toneladas en 1999 (USGS, 1999). Las secuelas generales del extractivismo fueron numerosas y, como respuesta, como ya he mencionado, emergieron variadas iniciativas de oposición ambientalista y conflictos ecológico-distributivos (García-Guadilla, 1992; Carrillo, 2000).

No obstante, estas transformaciones políticas y económicas no lograron sortear ni resolver la crisis y el gran descontento social. Justo antes de la entrada de Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1999, había un 80% de pobreza, 39% de pobreza extrema, 15% de desempleo, 50% de empleo informal y 37% de desnutrición infantil (Cordiplan, en Ochoa-Henríquez y Chirinos Zárraga, 2006).

IV. Surgimiento y primera fase del proceso bolivariano (1999-2013): novedades y continuidades del extractivismo y la larga crisis

La crisis venezolana había propiciado el surgimiento del liderazgo político de Hugo Chávez, quien no provenía ni de los partidos tradicionales ni de las clases poderosas del país. La instauración de su gobierno en 1999 suponía novedad no solo por esta razón y

por el surgimiento de nuevos rostros en los puestos de mando estatal. También por el impulso de una serie de significativos cambios políticos y una nueva institucionalidad que promovía la inclusión social y cultural, mecanismos para ampliar la distribución de la riqueza –fundamentalmente de la renta petrolera–, y discursos políticos reivindicativos que, en sus inicios, generaron alta aceptación popular. Todo esto configuró un nuevo orden político nacional.

La concepción política de Chávez se basaba en una fuerte crítica al neoliberalismo y a los impactos socioeconómicos que genera, para en cambio proponer un nuevo nacionalismo petrolero que recuperara el rol central del Petro-estado, desmontado en el período 1983-1998. El proyecto político tuvo en los primeros años un perfil reformista (no cuestionaba al capitalismo), enfocado en hacer algunos cambios que favorecieran más a los sectores populares e instaurar una 'democracia social y participativa' y un 'Estado de justicia social'.

El petróleo para el proyecto de Chávez tenía, desde sus inicios, un papel crucial, ya que era el recurso principal para la recuperación estatal y las políticas sociales (lucha contra la pobreza y la exclusión económica). Antes de ser presidente, Chávez había estudiado a los principales intelectuales de la 'cuestión petrolera' venezolana –como Pérez Alfonzo–, y en su momento se adhería a una visión más austera y no expansivista en la producción, dados los negativos efectos que provocaban (Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y PDVSA, S/F). De ahí que para los primeros años de su gobierno se planteara una crítica al histórico despilfarro de la renta, y el extractivismo tuviese más bien un rasgo mesurado. Lo que sí estuvo en el centro de su plan fue la recuperación de la captación de renta, y para ello comenzó desarrollar una política petrolera orientada a incrementar la participación en las ganancias del negocio hidrocarburífero, minimizadas tras la Apertura petrolera.

El cambio de régimen político se sustentó normativamente en una nueva Constitución promulgada en 1999 y una secuencia de nuevas leyes que incluyeron también al ambiente y los pueblos indígenas. Se institucionalizaban formas de organización popular y canalización social de renta, como cooperativas y redes de producción local, programas de asistencia y fomento económico, figuras de participación y contraloría social, en el marco de la idea del 'Poder Ciudadano' (Cordiplan, en Ochoa-Henríquez y Chirinos-Zárraga, 2006).

Pero cabe destacar también que este período de instauración fue más bien de alta conflictividad e inestabilidad política, al menos hasta 2004, desarrollándose numerosas y masivas protestas de calle –en contra del gobierno, con un carácter insurreccional, y otras a favor−, prolongados cortes de ruta, un golpe de Estado en 2001, y un drástico paro petrolero que detuvo a la industria por 3 meses desde fines de 2002 a inicios de 2003 –hundiendo la producción a 590 mil b/d en enero 2003−, lo que evidenciaba que el proyecto bolivariano no estaba consolidado.

La estrategia de la oposición contaba con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos (George W. Bush). Es necesario destacar que, desde la dictadura de Juan Vicente Gómez que inició la Venezuela petrolera, la potencia norteamericana tuvo siempre una serie de gobiernos venezolanos aliados que garantizaban estabilidad política interna y en la relación bilateral, un suministro seguro de hidrocarburos y condiciones de negocios favorables. Esto se modificaría con la llegada de Chávez, lo que intensifica el componente geopolítico en la conflictividad nacional de Venezuela, incluyendo en los conflictos de distribución ecológica.

Este período de intensas disputas se consolidaría una victoria del "bloque chavista" (Ellner 2014) a partir de 2004/2005, lo que generaba un importante punto de inflexión e inauguraba una fase de su hegemonía. Este nuevo escenario será mucho más favorable para el gobierno, en medio del boom internacional de los precios de los commodities y nuevos gobiernos progresistas aliados instalándose en América Latina. Allí, Chávez comenzaba a reformular su proyecto aún más hacia la izquierda, el cual denominó el "Socialismo del Siglo XXI". Se trataba de un nuevo balance de poder y metabólico, en el que se va a modificar la relación extractivismo/poder/territorio, lo cual va a ser determinante para el curso de los sucesivos acontecimientos, donde se acentuarán los históricos problemas del modelo petrolero, el chavismo vivirá un proceso de estancamiento y declive, y se generarán las condiciones para la segunda ola de la crisis venezolana.

IV.I Socialismo del Siglo XX: nuevo poder político y sobre la naturaleza

A partir de 2005, el Socialismo del Siglo XXI fue propuesto por Chávez como un socialismo que no sería el convencional, sino con características venezolanas, y que debería trascender al capitalismo. Desde este surgieron las propuestas de la construcción del 'Poder Popular', de un 'Estado Comunal' sostenido por una proliferación de comunas articuladas entre sí y con el Estado, y de la integración latinoamericana y la promoción de un 'Mundo multipolar'.

El proyecto va a sostenerse sobre dos grandes pilares, estrechamente articulados, un pilar de Poder político (*Petro-estado chavista, nuevo rentismo y poder corporativo*) y otro de Poder sobre la naturaleza (*Venezuela Potencia Energética Mundial, eje geoeconómico del Orinoco y nueva asimilación de conflictos de distribución ecológica*). Veamos.

IV.I.I Poder político: Petro-estado chavista, nuevo rentismo y poder corporativo

Concebido como un proyecto de disputa y que debe avanzar ante sus 'enemigos históricos', el proyecto 'revolucionario' se orientó hacia una expansión, reorganización y fortalecimiento del Petro-estado y sus instituciones que va a apuntar hacia un

extraordinario proceso de centralización del poder, mucho más intenso que el de períodos previos. Esto se va a sustentar en cuatro factores: uno, la copiosa renta petrolera que era captada en el marco de la nueva bonanza petrolera de este período; dos, el liderazgo carismático de Chávez, como factor sociopolítico cohesionador de las fuerzas sociales; tres, la conformación de una alianza nacional-popular, principalmente con las clases trabajadoras y más desfavorecidas, por un lado, y el sector militar por el otro –la denominada "alianza cívico-militar"–; y cuatro, una diplomacia petrolera como forma de negociación y posicionamiento internacional.

Esto supuso una muy significativa transformación de la estatalidad y la gobernanza, que incluso tendrá algunas formas de continuidad en el gobierno de Nicolás Maduro. Cinco estrategias fueron cruciales para esta nueva configuración:

1) Fusión de poderes públicos: se desarrolló un progresivo y creciente proceso de fusión entre los Poderes Públicos, esto es, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral (Lander, 2017; López-Maya, 2018), que comenzó a operar basada en la dirección de Chávez y la lealtad política que debía tenérsele al líder, lo que socavó la independencia que podían tener las instituciones y la posibilidad de interpelación y hacer contrapeso al poder del Presidente y de los líderes revolucionarios. Además, se crearon diversos mecanismos para neutralizar a gobiernos locales u otros Poderes Públicos que estuviesen dirigidos por sectores de oposición.

2) Estatizaciones masivas: definido en los lineamientos del Plan de desarrollo 2007-2013, se concretó un proceso de amplio control estatal de la mayor parte de los sectores económicos estratégicos, como ocurriría con PDVSA después del Paro Petrolero, pero sobre todo con la expropiación y estatización de empresas que, de acuerdo a la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), llegó a la cifra de 1.168 entre 2002 y 2012 (Asamblea Nacional de Venezuela, 2022); y en cuanto a tierras, superaría las 3,6 millones de hectáreas expropiadas para 2012 (IPDRS, 2021).

3) Creciente presencia e influencia del sector militar: se produjo una significativa expansión de la presencia del sector militar en posiciones de poder, gobiernos locales y en la administración de las empresas estatales estratégicas. Este proceso ha sido decisivo en la formación de grupos de poder cobijados en las estructuras del proceso bolivariano, en las gobernanzas territoriales y en el perfil de actores dominantes dentro del Petro-estado chavista.

4) Reedición de la gobernanza rentista: se retoma la histórica política de gobernanza rentista centralizada, que en lo narrativo se presentó como una forma de 'poder para el pueblo', y una actualización de la idea de 'sembrar el petróleo'. Aunque en sus inicios tuvo un impacto positivo en la lucha contra la pobreza y la exclusión –por ejemplo, como ocurrió con los programas de ayuda social

llamados “Misiones”–, la distribución de la renta tuvo un notorio sesgo clientelar, creando inclusión social a partir del consumo, usándose para lograr filiaciones políticas y resultados electorales, y selectivamente para mantener lealtades (Penfold, 2010; López-Maya y Panzarelli, 2012). Además, la distribución de la renta nuevamente estuvo anclada a las viejas promesas del imaginario petrolero venezolano, recurriendo a variantes de la promesa de la ‘Gran Venezuela’, ahora retocadas con ideales revolucionarios (Teran-Mantovani, 2014).

5) La estructura de un poder corporativo: para integrar el apoyo y la organización social en torno al liderazgo del presidente Chávez, desde 2006/2007 se crearon dos formas claves de participación política: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los “Consejos Comunales”. El primero fue propuesto inicialmente como un partido político único para congregar a todos los partidarios ‘revolucionarios’ y crecerá hasta alcanzar millones de afiliados en todo el país. Además de unificar la acción política del chavismo, el PSUV va a operar como una “maquinaria electoral” y para otorgar privilegios a quienes mantengan lealtad política. Respecto a los Consejos Comunales, estos han sido la figura más emblemática de la organización social en este proceso político, los cuales deben pasar por un proceso de formalización a través del registro ante las instituciones estatales. Esta figura establece un vínculo estrecho entre dicho tejido de instituciones y la organización territorial de las comunidades, siendo la distribución directa de la renta petrolera el principal factor material que alimenta la relación. Estas estructuras han promovido una burocratización de la movilización social y la consolidación de un poder corporativo, que operará de arriba hacia abajo (Teran-Mantovani, 2014).

IV.I.II Poder sobre la Naturaleza: Venezuela Potencia Energética Mundial, eje geoeconómico del Orinoco y nueva asimilación de conflictos de distribución ecológica

El segundo pilar del Socialismo del Siglo XXI se basó en una intensificación de los mecanismos de colonialidad sobre la naturaleza y un plan de expansión extractivista, lo que representó un giro respecto al planteamiento más austero de los primeros años. La idea era captar más renta para darle sustento material a la expansión del Petro-estado bolivariano y el proyecto político chavista. Esto en lo concreto se expresó en el objetivo de la “Venezuela Potencia Energética Mundial” (VPEM), lo que suponía dar continuidad a viejos proyectos de desarrollo y abrir otros nuevos, además de persistir en la carga diferenciada de impactos ambientales a comunidades y pueblos racializados, principalmente a indígenas.

La industria petrolera fue concebida como un ‘instrumento revolucionario’, y en especial, los crudos pesados y extrapesados de la nacionalizada Faja Petrolífera del

Orinoco (FPO), que se convirtieron en el bastión para avanzar a la VPEM. El objetivo propuesto era alcanzar los 6 millones de barriles diarios para 2021 –de los que la FPO aportaría 4 millones. Esta meta paradójicamente planteaba la misma cifra de la PDVSA de la Apertura petrolera; pero también seguía el trazo del avance de frontera de commodities que se había venido desarrollando con la crisis del modelo rentista petrolero de los años 80-90.

Sobre esto último, es crucial resaltar que la crisis del modelo rentista petrolero tiene también una proyección geográfica, y nos remite al agotamiento de ciertos procesos históricos de Territorialización del Petro-estado. El progresivo declive de las fuentes de petróleo convencionales, principalmente las de la Cuenca Occidental (ver TABLA 1), han venido presionando a expansiones hidrocarburíferas en otros ejes territoriales, y aunque podemos mencionar la frontera gasífera offshore en la amplia fachada marítima venezolana, la referencia especial de este proceso es la FPO, que se encuentra en la ribera norte del río Orinoco, una región además con una densidad poblacional muy baja. Aunque la tendencias expansivas en la FPO ya venían del período neoliberal, fue con el proceso bolivariano que se inicia el verdadero despegue histórico extractivista en esta nueva frontera: de 50.000 b/d en 1997, la producción alcanzaba los 563.000 b/d en 2006 y 1.228.300 en 2014 (PDVSA, 2015), fundamentalmente en los bloques Junín y Carabobo.

Este crecimiento en la faja llevó a que la composición del petróleo venezolano cambiara significativamente, ya que los crudos pesados y extrapesados pasaban de representar el 38% del total extraído en el país en 2006, al 58,8 % en 2014. Debido a que los costos de producción en la FPO son mucho mayores que en otras cuencas (EIA, S/F), es claro que la rentabilidad del negocio que sostiene a la ya centenaria nación petrolera era mucho menor, o al menos muy dependiente de precios altos y constantes –algo que no ocurre en el siglo XXI, donde predomina el comportamiento de ‘montaña rusa’ de los precios internacionales. Por tanto, la economía era también mucho más vulnerable, como se revelaría en La Gran Crisis. Pero el asunto que quiero destacar sigue siendo territorial: se abría con claridad la necesidad de una mayor y más nítida diversificación del extractivismo, que mejorara la rentabilidad del mismo, o que sorteara el agotamiento del modelo societal.

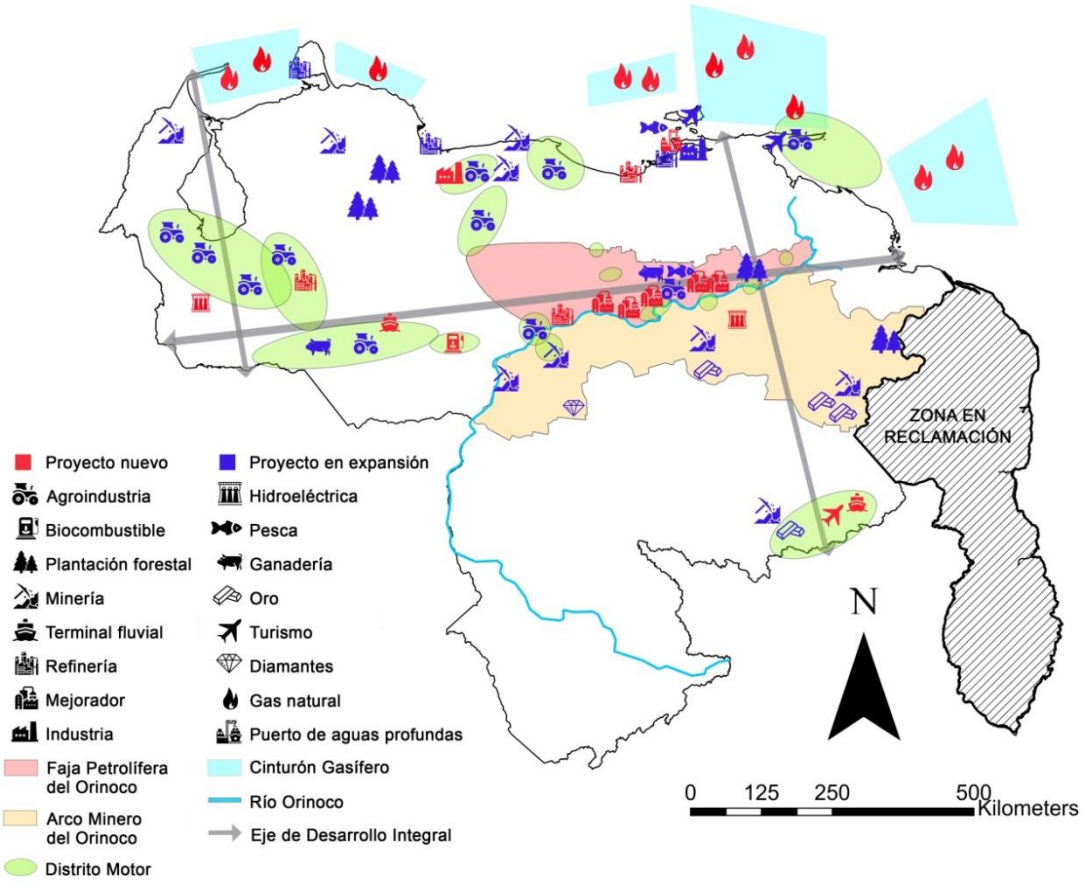
La propuesta de la VPEM planteó que prácticamente todo proyecto económico de gran escala fuera revisado, reformulado y relanzado, incluyendo industrias extractivas como la minería, la forestal o la agroindustria. Esto fue acompañado con la promoción de polos y ejes de desarrollo, distritos motores y proyectos de infraestructura energética y de commodities, en su momento vinculados a los planes regionales de la IIRSA, impulsada principalmente desde el gobierno de Lula Da Silva en Brasil. La evolución de este proceso incrementó la importancia relativa de la minería y, dada la valoración global de los recursos minerales metálicos y no metálicos del país, esto le confirió una gran relevancia al oro de la Amazonía (Teran-Mantovani, 2016).

Es en este escenario que las propuestas mineras del gobierno bolivariano, y en especial su política en relación al oro, se van a condensar en la propuesta que extendiera Hugo Chávez en 2011 de crear el mega-proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO), el más grande de este tipo en la historia de Venezuela, con un área total de explotación de casi 112.000 km^2. Además de oro, el AMO contempla la extracción de diamantes, coltán, hierro, cobre, bauxita entre otros y se ubica en el norte del estado Bolívar.

Los grandes proyectos FPO y AMO, conforman una continuidad geográfica y en su conjunto un gran polo extractivista de 175.000 km^2, lo que además evidencia cambios en la geografía del extractivismo histórico venezolano, dándole una mayor importancia al eje geoeconómico en torno al Orinoco y mostrándonos una potencial transición territorial del modelo hacia la Amazonía, todo lo cual ha tuvo repercusiones de gran importancia en el corto y más largo plazo.

Todas estas iniciativas extractivistas y desarrollistas fueron sistematizadas por el gobierno de Chávez en su plan quinquenal socialista "Plan de la Patria 2013-2019", mostrando cómo cada territorio del país es un objetivo de colonización y re-colonización. En la FIGURA 12 se ilustran los principales proyectos extractivos de dicho plan. Como vemos en la imagen, al menos en lo conceptual, el gobierno de Chávez se propuso también expandir la capacidad infraestructural del Petro-estado y avanzar en la integración territorial a través de la concepción de agregaciones espaciales conectadas por ejes que fueron definidos a partir de proyectos de conexión vial terrestre, portuaria y aeroportuaria. Evidentemente, la consecución de un proyecto de estas magnitudes dependía también de un funcionamiento más regular y eficiente del Estado y una economía más estable, algo con lo que no se contó. Muchos de estos objetivos no se cumplieron, o lo hicieron muy temporalmente. Se debe agregar también que este mapa no refleja de ninguna manera el crecimiento de las extracciones ilícitas que comenzó a registrarse principalmente en torno a la minería ilegal de oro en la Amazonía, desde mediados de la primera década del siglo, algo sobre lo que profundizaré en el capítulo 3.

FIGURA 12. Ubicación de los principales proyectos extractivistas del "Plan de la Patria 2013-2019". Resalta la FPO y el AMO, así como los Distritos Motores y los Ejes de Desarrollo Integral. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Plan de la Patria 2013-2019



Este cambio metabólico evidentemente generó grandes impactos y conflictos ambientales y territoriales, lo cuales se desarrollaron en el particular entorno de gran legitimidad social del gobierno de Chávez, y de un avance incuestionable del proyecto para los seguidores del proceso 'revolucionario'; de gran polarización política entre gobierno y oposición, que a pesar de ello coincidían en el imperativo extractivista y dejaban casi nulo margen a posiciones críticas y alternativas; de una todavía fuerte cultura del petróleo que lo hace difícil de objetar; y de un período de extraordinaria bonanza rentista.

IV.I.II.I *Nuevas políticas de asimilación en los conflictos de distribución ecológica*

Desde que Chávez fuera candidato a la presidencia en 1998, este ya había extendido promesas electorales que ofrecían una nueva política ambiental y la resolución de los variados conflictos ambientales que se daban en el país durante el gobierno de Caldera. Entre esos estaba el de la Reserva Forestal de Imataca, varios conflictos donde estaban siendo afectadas comunidades pemón, o la petición de no ampliar la explotación de carbón en la Sierra de Perijá. Es significativo notar que en muchos de estos conflictos,

que tuvieron fuertes resistencias sociales e indígenas, fue el gobierno de Chávez quien lograría consolidar los proyectos que los causaban.

Por ejemplo, en el caso del tendido eléctrico iniciado en 1997, que atravesaba territorios pemón en el Parque Nacional Canaima, fue con el gobierno bolivariano cuando se logró culminar el proyecto. La resistencia de las comunidades indígenas había incluso llegado a derribar varias torres del tendido, lo que se había convertido en una imagen icónica de esta lucha. No obstante, el gobierno recurrió a estrategias de división y cooptación −pactando con los pemón que estaban a favor del proyecto y llegando a acuerdos con la Federación Indígena del Estado Bolívar−, e incluso de criminalización descalificando a quienes se oponían y llegando a intervenir militarmente la zona en conflicto. Este caso es significativo debido a que a la larga fragmentó al pueblo pemón (Mellado y Rodríguez, 2018) −asimilando a muchos de ellos al modelo de desarrollo− y consolidó un proceso de intervención de sus territorios que se acentuaría en los años siguientes.

Con el caso de Imataca, que como mencioné en secciones anteriores, había iniciado en el gobierno de Caldera, y contó con la promesa de Chávez de parar la minería y defender esos bosques, ocurrió algo similar. Entre discursos contradictorios y estrategias de consulta manipulada, el Ejecutivo Nacional terminaría firmando el Decreto 3.110 de septiembre de 2004, en el que se ratificaban las intenciones mineras (industrial y de pequeña escala) en esos ecosistemas, dejando sin efecto la medida cautelar que habían introducido en años anteriores los movimientos ambientales, y despreciando una de las luchas socioambientales más emblemáticas de las últimas décadas en el país (EjAtlas, 2018).

La polarización tuvo la capacidad de dividir cada ámbito de la sociedad civil, y reorganizarla de acuerdo a estos dos grandes bloques político-partidistas. El proyecto del presidente Chávez tendría, en su momento, la fuerza para aglutinar en torno a este al grueso de las expresiones ambientalistas más críticas y politizadas. La gran legitimidad del gobierno y la promulgación de las leyes ambientales e indígenas, así como un relanzamiento de los ministerios y organismos oficiales encargados de estos ámbitos, llevaron buena parte de la movilización hacia los canales institucionales chavistas. Con la radicalización discursiva del proceso bolivariano, el gobierno de Chávez articuló el discurso de lo ambiental con los ideales de revolución, y anunció el carácter "ecosocialista" del mismo. En el Plan de la Patria colocó como uno de sus objetivos centrales la "salvación de la vida en el planeta" (5to Objetivo Histórico). Estas estrategias de cooptación lograron intensificar la tendencia a la monopolización de la vocería y el liderazgo de lo ambiental por parte del gobierno. Además, dentro de la lógica de polarización política, se les planteaba a los diversos ambientalismos que se identificaban con el proceso, que evitaran hacer denuncias que 'favorecieran a la derecha' y que 'cerraran filas' ante 'el enemigo'.

Estos factores se articularon, paradójicamente, con el hecho de que las instituciones ambientales del Petro-estado continuaron jugando un rol secundario y subordinado a la centralidad de la economía petrolera –como ocurrió en los regímenes políticos

anteriores. Buena parte de las políticas ambientales tenían más bien un efecto cosmético ante los grandes impactos generados por el modelo económico. Por ejemplo, la 'Misión Árbol', una política anunciada para la recuperación de bosques, apenas lograba sembrar algunos árboles mientras que, para la primera década del siglo XXI, Venezuela estaba entre los 10 países con la mayor deforestación del mundo (FAO, 2010).

Por otro lado, en el marco del régimen eco-sistémico del Petro-estado chavista, las demandas de justicia ambiental y las luchas ecologistas fueron, en general, una vez más desplazadas y marginalizadas a través de políticas de asimilación basadas en la distribución selectiva de la renta, en los ideales de progreso petrolero y en el llamado a la defensa del 'gobierno revolucionario' (Terán-Mantovani, 2018a). La presencia acentuada del Petro-estado en las estructuras organizativas de colectivos ambientales e indígenas, tanto políticamente como con recursos, también se cuenta entre los factores que han tenido un impacto negativo en las capacidades de movilización de las mismas (Tillet y Moncada, 2018).

En suma, además de una clara política de cooptación desde arriba, los diferentes ambientalismos veían sus agendas de lucha desplazadas ante la predominancia política de la polarización. Grupos ambientales más pequeños y algunas organizaciones indígenas se confrontaron con el gobierno nacional; del mismo modo, algunos ecologismos con tendencias más conservacionistas, posturas políticas conservadoras y cercanos a los partidos de oposición asumieron una parte importante de la crítica a los impactos del modelo económico. No obstante, todos estos grupos no lograron alcanzar una incidencia política medianamente significativa y vencer su atomización, aunque se alcanzaron algunas victorias puntuales.

IV.II Declive bolivariano y los antecedentes de La Gran Crisis

Probablemente desde 2009, el proceso bolivariano entró en una progresiva fase de estancamiento, impactado por la crisis económica global (2008) y un desgaste del apoyo popular, que estuvo acompañado por una desmovilización social y pérdida del dinamismo político que caracterizó al mismo en años anteriores. Los efectos en la economía se evidenciaron con la caída del PIB en 2009 de -3,3%, que continuó su tendencia a la baja para el segundo semestre de 2010 (CEPAL, 2010), mostrando posterior recuperación, para luego comenzar a caer de nuevo en el inicio de La Gran Crisis en 2013. Este impacto recesivo evidentemente tendrá efecto en la gobernanza rentista, y en general, en todo el modelo de poder.

En este marco, fueron incrementándose tendencias al autoritarismo estatal (Andreani, 2018), así como una notable expansión de la corrupción gubernamental, que fue un componente fundamental en la consolidación de los nuevos nichos de acumulación ilícita de capital nacional y foráneo, posibilitados desde la estructura del Petro-estado 'socialista'. Entre estos nichos estuvieron: contratos y negocios con el Estado; operaciones ilegales ejecutadas desde el sistema cambiario o desde sectores de

importación; fraudes por medio de instrumentos financieros derivados y acceso a títulos de deuda soberana de libre disponibilidad en el exterior (Arenas, 2010; Marea Socialista, 2014; Sutherland, 2018); o bien a través de las transferencias de propiedad que se generaron con las expropiaciones, y que favorecieron en buena medida a actores de la burocracia estatal. Todo esto terminó formando y consolidando una nueva burguesía en el seno del proceso bolivariano, que el economista Domingo Alberto Rangel llamó la "boliburguesía" (Rangel, 2007).

A su vez, desde sectores de las propias bases sociales del chavismo y algunos intelectuales críticos se fueron denunciando varias políticas regresivas y tendencias a revertir los avances sociales alcanzados en el proceso, llevadas adelante por parte de dirigentes de la 'revolución'. Estos elementos evidenciaron resquebrajamientos en el bloque del chavismo, lo que va a articularse con los problemas estructurales del modelo petrolero, incidiendo tanto en el declive de este proyecto, como en el posterior surgimiento de La Gran Crisis.

En esta línea, me interesa analizar el declive de este proceso en el marco de los 6 factores constitutivos de la crisis del modelo petrolero que examiné en la sección anterior. Intento mostrar más claramente algunas continuidades que se generaron entre estos diferentes período políticos, y cómo dichos factores incidieron en esta dinámica más reciente de decadencia económico-política.

1) Incapacidad del desarrollo económico doméstico para autonomizarse de la renta petrolera: nuevamente, las inversiones estatales para generar mayor producción interna no petrolera, e ingresos no rentísticos, pudieron, en algunos rubros, generar incrementos de la producción, que sin embargo fueron apenas momentáneos (López-Maya y Lander, 2009). Esto fue así debido a que, entre otros factores, estos sectores siguieron anclados a la dependencia de la renta petrolera distribuida por el Petro-estado, que se vería afectada con la nueva crisis. A su vez, el gobierno de Chávez evidenció una terrible ineficiencia en el manejo de las empresas nacionalizadas, siendo que el grueso de estas terminarían en grandes fracasos, con parálisis de la producción y cierres (Vera, 2018). Como resultado general de todo esto, hay que señalar que la dependencia de las exportaciones petroleras respecto al total era de 79,5% en 1999, y para 2013, año de la muerte de Chávez, había escalado a 96% (Banco Central de Venezuela, S/Fb).

2) Baja histórica de la rentabilidad petrolera: al haberse incrementado la proporción de crudos pesados y extrapesados en la composición del petróleo venezolano, y al ser estos más caros de producir, se han intensificado aún más las tendencias a la baja de su rentabilidad relativa. La inestabilidad política interna y el mal funcionamiento de la industria han aumentado aún más los costos de producción, mientras que las nacionalizaciones masivas incrementaron los riesgos para las inversiones.

3) Inundación de divisas: el boom de los commodities de la primera década del siglo XXI produjo un gigantesca recepción de ingresos que ha tenido varias estimaciones: González-Cruz (2009) señala más de 800.000 millones US$ (petroleros y no petroleros) entre 1998 y 2008; la consultora Ecoanalítica ha referido a unos 960.589 millones US$ en ingresos petroleros entre 1999-2014 (Bermúdez, 2016), y el economista venezolano Francisco Monaldi, del Instituto Baker de Políticas Públicas (Universidad Rice, Houston), señala que la cifra superaría el billón de dólares entre 2004-2014 (Transparencia Venezuela, S/Fa). Dados los rasgos de la economía venezolana, esto evidentemente tuvo nuevos efectos de 'enfermedad holandesa' afectando, como vimos, el sostenimiento de los sectores productivos y profundizando los desequilibrios estructurales.

4) Gigantismo y despilfarro: el gobierno de Chávez recurrió a un gasto masivo, que en mucho casos tuvo que ver con la construcción de legitimidad social y lealtades políticas pero, sobre todo, con la reedición de las narrativas grandilocuentes de la Venezuela petrolera, evidenciadas en el discurso de la Venezuela Potencia Energética Mundial. Como en viejos períodos, este gigantismo ya no podría ser sostenido en tiempos de caída de los precios del crudo.

5) Corrupción gubernamental en expansión: ante tal volumen de ingresos petroleros, la corrupción en la Venezuela de Chávez se expandió a niveles sin precedentes, expresándose en cada ámbito del Petro-estado y la sociedad, y en poderosas redes de apropiación ilícita de riqueza. Este fenómeno en el período bolivariano ha contado con diferentes estimaciones: los exministros del gobierno de Chávez, Héctor Navarro y Jorge Giordani, refirieron que en 10 años de este mandato se desfalcaron unos 300 mil millones US$ a través de operaciones cambiarias y otras actividades ilícitas (Chinea y Pons, 2016); la organización política de izquierda Marea Socialista (2014) publicó un informe independiente calculando unos 259.234 millones US$ de fuga 'mafiosa' entre 1998 y 2013; y Transparencia Venezuela (2023a) calculó en 68.311 millones US$ los dineros desfalcados, estimados solo con información obtenida en investigaciones abiertas en otros países, de las cuales se conocen cifras apenas en un 61% de las mismas.

6) Inflación y endeudamiento como efectos macroeconómicos: dados estos procesos, se replicaron tendencias inflacionarias, aunque hasta 2012 la inflación mantuvo promedios menores a la de los años 90. Es a partir de fines de 2012 que se va a generar un extraordinario aceleramiento de la misma. En cuanto a la deuda externa, desde 2009 fue generándose un acelerado incremento de la misma para alcanzar en 2013 los 112.103 millones US$ (Cepal, 2017a).

Con la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013, se genera un detonante político que va a desatar una mayor conflictividad en el país, y los factores de crisis mencionados van a empeorar extraordinariamente.

V. Algunas conclusiones

He presentado los elementos teóricos, y los antecedentes histórico-geográficos del marco de La Gran Crisis venezolana, poniendo el foco en la relación extractivismo/poder/territorialización, y sus expresiones en la formación, auge y declive del Petro-estado venezolano.

He propuesto un análisis de la evolución histórica de estos procesos, examinando las relaciones entre la renta petrolera y la distribución ecológica, poniendo de relieve cómo el extraordinario predominio de la primera creo un sistema social muy sesgado en torno a ella, subordinando a la naturaleza a esta, y desplazando el problema ambiental del centro de la conflictividad social y política en el país. La gobernanza rentista configuró un modelo de poder que pudo generar una relativa pacificación de la sociedad y se sostuvo por un período de tiempo, hasta que entró en crisis y abrió a Venezuela a escenarios de mayor violencia.

Los ambientalismos venezolanos tuvieron, por tanto, que enfrentarse ante el dificultoso contexto que estableció el Petro-estado, que conllevó importantes impactos socioambientales que no solo no eran cuestionados en el sistema social, sino que se desarrollaron ante marcos de notoria impunidad y pasividad.

El proceso bolivariano, que había generado grandes expectativas sociales y se presentaba como un proyecto de transformación profunda y radical de la sociedad, no solo no logró abordar los problemas estructurales del modelo rentista petrolero, sino que al mismo tiempo intensificó el extractivismo y replicó los impactos y desigualdades en la distribución ecológica de sus antecesores. Esta actuación prolongó la crisis del modelo y allanó el camino para el posterior colapso que se desata desde 2013.

Mi análisis ha mostrado también cómo el agotamiento histórico del modelo petrolero conllevó a un dilema territorial que, en el gobierno de Chávez abrió una pugna por la expansión hacia nuevos núcleos territoriales de extracción, antesala no solo a un brutal asalto de la Amazonía, sino a buena parte de los conflictos de distribución ecológica en La Gran Crisis.

CAPÍTULO 2

La Gran Crisis venezolana (2013-2022): colapso societal y nuevos escenarios para los conflictos de distribución ecológica

I. Sobre petróleo, crisis multidimensional y colapso societal

A partir de 2013 se va a desarrollar en Venezuela la peor crisis de su historia y una de las peores de la América Latina contemporánea, cambiando drásticamente el panorama social, político, económico y ambiental del país. Dados estos rasgos, la he llamado *La Gran Crisis* venezolana (Teran-Mantovani, 2022). En este capítulo voy a examinar sus características fundamentales desde una perspectiva multidimensional –entendida como crisis sistémica–, para evidenciar las significativas reconfiguraciones y transformaciones del poder, el Estado, el extractivismo y la distribución ecológica.

La Gran Crisis venezolana ha despertado mucho interés internacional, siendo estudiada también desde el ámbito académico. Se han producido numerosas publicaciones, siendo que el grueso de ellas ha investigado problemas sectorizados, sobre todo en lo que respecta a las causas y consecuencias de la masiva migración venezolana (Vargas-Ribas, 2018; D'Hers-Del Pozo, 2021); la situación alimentaria del país (Gutiérrez, 2020); la crisis sanitaria (Page et al, 2019); y las condiciones laborales (Carballo-Arias, 2018). Variados artículos han evaluado la debacle económica (Vera, 2018; Dachevsky y Kornblihtt, 2017), los cambios políticos (Magdaleno, 2018) o político-económicos (Buxton, 2018); así como sus impactos internacionales (Ellis, 2018; Romero y Benayas, 2018; Serbin-Pont, 2019).

Abundante cantidad de estos análisis, muchos de ellos desde una perspectiva institucional, han catalogado el fenómeno como una crisis o 'emergencia humanitaria' –o humanitaria compleja– para señalar sus vastos y profundos impactos sociales (ONU, 2019a; HRW, 2021). En algunos trabajos, se ha examinado la crisis como una multidimensional (Legler et al, 2018; Bull y Rosales, 2020; Jiménez, 2022) o multifactorial (Magdaleno, 2018; Lander, 2016; 2017b). Sin embargo, en estos enfoques más comprehensivos no se contempla o integra la dimensión ecológica como otra de las expresiones de la crisis. Mi análisis no solo agrega elementos de la crisis ambiental que también se produjo, sino que incorpora interpretaciones de ecología política de este período histórico, en procura de obtener una caracterización lo más integral posible.

Antes de detallar los rasgos y examinar las dimensiones específicas de La Gran Crisis, me interesa proponer dos interpretaciones preliminares sobre la configuración de la misma: una, que enfatiza una perspectiva sistémica del petróleo para comprender las causas de la crisis; y dos, entenderla como un colapso societal.

En relación al petróleo, aunque hay factores coyunturales que incidieron en la configuración de esta grave situación, como las serias deficiencias en la gestión gubernamental y las dinámicas de intensa conflictividad política y social, estos deben también ser comprendidos en su articulación con los no resueltos desequilibrios estructurales del modelo rentista petrolero, que he analizado en el capítulo anterior. La Gran Crisis hace parte de un período turbulento más largo y, en este sentido, pongo al petróleo como elemento central para comprender su surgimiento. Sin embargo, mi análisis toma distancia de varias tesis muy difundidas que, desde la política y lo académico, suelen ofrecer explicaciones unicausales, interesadas o muy sesgadas hacia un factor, a saber: que lo que ha ocurrido en Venezuela es simplemente el producto de un conflicto geopolítico, determinado por las abundantes reservas petroleras que tiene el país, y los intentos de potencias como EEUU por controlar el recurso (Aharonian, 2018; 2024; Field, 2018; Kovalik, 2019; Duque, 2020; Hunt, 2023); o bien, que la debacle se ha dado por una mala administración de la renta, es decir, no se ha sabido 'sembrar el petróleo' (Martínez- Castillo, 2017; Echarte-Fernández et al, 2018; Ramírez, 2021; Aray y Vera, 2024).

Aunque ambos factores son relevantes, hay otras cruciales dimensiones que están también en juego simultáneamente. He examinado el petróleo no solo como recurso natural, sino también como un poderoso elemento que puede configurar sistemas sociales y ecológicos alrededor suyo. En Venezuela no solo se produjo una debacle de la estratégica industria de los hidrocarburos y, por tanto de la producción petrolera; no solo se registraron presiones geopolíticas contra el gobierno de Maduro; o una terrible gestión económica. Lo que subyace a este crítico período es el desplome de todo un orden construido en torno al petróleo que además, en el caso de Venezuela fue particularmente marcado, con unas estructuras republicanas y de nación profundamente moldeadas en torno al oro negro, como no se vio en otros países productores como Canadá, Rusia o Noruega, o incluso de América Latina, como México, Bolivia o Colombia, donde los impactos sistémicos del petróleo fueron más localizados y menos intensos en el cuerpo político nacional.

Asumir una perspectiva sistémica del petróleo para interpretar la crisis tiene varias implicaciones, de las cuales quiero destacar dos. La primera subraya que, a pesar de las diferencias políticas y programáticas que pudimos encontrar entre gobiernos militares autoritarios, liberales tradicionales, neoliberales y socialistas; o entre derechas, centros e izquierdas, en la historia de la Venezuela petrolera; todos, en un grado u otro, replicaron las lógicas expansionistas y de grandilocuencia en las metas de producción de crudos, las tendencias rentistas en la política y la economía, los imperativos de dominación de la naturaleza y la externalización ambiental con alta impunidad, así como en las dificultades para pensar el país más allá del petróleo; factores estos que caracterizaron al modelo societal que entró en crisis. Aunque los análisis de este proceso pueden tender a señalar a un grupo político en particular como el responsable de la debacle, me interesa observar también los patrones compartidos que podemos encontrar en el conjunto de actores predominantes en disputa. Esto tiene aún más valor si tomamos en cuenta el

carácter polarizado que han tenido los estudios sobre la Venezuela del proceso bolivariano.

La segunda implicación de esta mirada sistémica es que permite una aproximación multi-nivel de las disputas en torno al petróleo, que las podemos sintetizar en cuatro dimensiones. Además de (1) las rivalidades geopolíticas por el recurso, y los efectos de la crisis energética global o las "nuevas realidades del petróleo" (Bridge y Le Billon, 2013), entran simultáneamente en la dinámica de crisis y conflictividad de este período: (2) los límites del Petro-estado y las disputas por su control; (3) los límites de las sociedades rentistas y las disputas por la apropiación de la renta petrolera; y (4) los extendidos impactos territoriales y conflictos ecológico-distributivos que el modelo genera, tanto en las localidades petroleras como en el conjunto del territorio nacional. Estas cuatro dimensiones están estrechamente articuladas e impactan unas sobre otras. No se puede entender el proceso venezolano prescindiendo de ninguna de estas.

De manera que la crisis de una nación petrolera tiene incidencia en todo el conjunto de la conflictividad que se desarrolla en el país; que los niveles de intervención o injerencia extranjera para intentar controlar los hidrocarburos también pueden incidir directa o indirectamente en ese entramado diverso de conflictividad; que las menores capacidades de apropiación del crudo y su renta por parte de diferentes grupos políticos y sociales nacionales, puede incrementar el interés y el imperativo extractivo hacia otros commodities; y que este entramado multi-escalar de conflictos no está entonces, solo determinado por intereses económicos sino también por valoraciones ecológicas, culturales y territoriales, que también entran en juego. Esta red de conflictos de múltiple nivel la podemos entender como una *geo-ecopolítica del petróleo*.

I.I La noción de colapso societal

Si la crisis venezolana ha implicado el desplome integral de los pilares de la nación petrolera, propongo examinar la forma como esta se ha desarrollado, como un *colapso societal*. Los estudios sobre los colapsos, el grueso de ellos desarrollados desde la historia, la arqueología, antropología, biología, entre otras ciencias, han aportado importantes insumos para determinar sus causas, describir sus rasgos y plantear mecanismos para su abordaje. Existe un campo específico de Estudios sobre Colapsos Societales (ECS) desde el cual nutro conceptualmente mi análisis sobre el caso venezolano, aunque este ha estado más bien orientado a generar lecturas retrospectivas que buscan las causas de estos declives en sociedades antiguas y, por tanto, analizan grandes cambios demográficos y la desaparición de civilizaciones (Tainter, 1988; Diamond, 2006). Estas dimensiones temporales y espaciales para estudiar los colapsos exceden los marcos de mi enfoque.

Respecto a abordajes más acotados y de corto plazo, la literatura enfocada en los colapsos generados por malas gestiones o gobernanzas de los recursos naturales o bienes comunes limitados, que devienen en su posterior agotamiento (Ostrom, 2002),

son insuficientes para el caso estudiado. Esto es así, porque la crisis venezolana se ha producido ante una gran cantidad de reservas de recursos de consumo primario como el agua o la tierra, y de commodities abundantes como el petróleo, pero en cambio con un nivel muy alto de inviabilidad de su sistema distributivo.

Defino entonces el colapso societal combinando elementos conceptuales de los ECS con perspectivas sociológicas y próximas a la ecología política. Especifico tres aspectos de mi concepto. Primeramente, hago referencia a lo societal como el orden que no sólo incluye lo social, sino también lo político, económico, cultural y ambiental –en el mismo sentido del concepto integral de extractivismo que he planteado−, lo que alude a la noción de sistemas sociales, e incluso socioecológicos. En segundo lugar, un colapso será entendido como la quiebra o ruina a gran escala de un sistema socioecológico y sus instituciones en un espacio-tiempo determinado, que puede darse de forma parcial o definitiva, y que suele conllevar desintegración económica, fragmentación o desarticulación de las estructuras políticas (lo que genera una pérdida de administración central) y declive demográfico (Tainter, 1988; Lawler, 2010; Faulseit, 2016; Bardi, 2020). Desde la 'colapsología', se incorporan unan más claras dimensiones sociales, al subrayarse que un rasgo de los colapsos es que la mayoría de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas (energía, alimentación, agua, vestimenta, etc.) dados los impactos del derrumbe societal (Servigne y Stevens, 2020). Estos factores, como veremos, aplican para el caso venezolano.

En tercer lugar, es necesario ajustar y acotar la escala geográfica de mi concepto. Más allá de las perspectivas macro −históricas, arqueológicas y antropológicas− de los ECS, e incluso de los debates más recientes sobre colapsos en el marco de la grave crisis planetaria y el Antropoceno, este concepto es examinado en mi trabajo en sus formas parciales y circunscritas, en línea con lo que Maristella Svampa (2024) denomina "colapsos localizados".

Es importante añadir dos elementos más: uno, el concepto de Tainter señala que las sociedades colapsan debido a un incremento de su complejidad interna, algo que ocurrió con el desarrollo de la Venezuela petrolera, y posteriormente comienzan a aumentar los niveles de insostenibilidad de las mismas, y como proponen Bardi et al (2019), de la ineficiencia del propio sistema. En el caso venezolano esta complejidad societal se había vuelto en extremo insostenible dado que además dependía de un factor completamente exógeno como era la renta petrolera.

Segundo elemento a tomar en cuenta: de acuerdo a Diamond (2006), un factor que también puede generar colapsos es la presencia de enemigos externos, los cuales pueden provocar gran destrucción en los sistemas sociales. Esto último destaca que los colapsos no dependen sólo de factores endógenos y que en la geopolítica actual casos como el de Irak después de la invasión estadounidense de 2003 o la destrucción de la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel, evidencian que estos impactos pueden ser muy significativos.

II. Evolución de La Gran Crisis (2013-2022)

II.I Factores desencadenantes y las tres fases de La Gran Crisis

Hugo Chávez era una figura que gozaba de gran legitimidad tanto en la mayoría de la población, en los partidos políticos del bloque bolivariano, como en el crucial sector militar, aunque este liderazgo sufrió en sus últimos años un desgaste. Con su muerte en marzo de 2013, luego de un cáncer diagnosticado en 2011, se va a desatar una crisis de hegemonía, dado que esa capacidad de aglutinamiento y regulación del sistema político que tenía Chávez, así como su liderazgo carismático, no tenía parangón ni reemplazo inmediato en el conjunto de la política venezolana de entonces. Esto dejaba un escenario de mayor declive de la legitimidad del proceso bolivariano, debilidades para la unificación de fuerzas en dicho bloque político, una crisis de autoridad (Gramsci, 1999), y sobre todo, una escalada de intensas y abiertas disputas, en muy buena medida por el control del Petro-estado. Este proceso fue uno de los dos factores coyunturales desencadenantes de La Gran Crisis.

El otro factor detonante ha sido la debacle de los precios internacionales del crudo a partir de 2014 hasta principios de 2016, que alcanzó una disminución del 70% en este lapso, y fue una de las tres mayores caídas desde la Segunda Guerra Mundial y la más prolongada desde el desplome de 1986 (World Bank Group, 2018). Este bajón afectó notablemente la liquidez monetaria del gobierno, generó una gran contracción económica con PIB negativo, aumentó el desabastecimiento y la inflación, e incrementó los niveles de endeudamiento nacional (Puente, 2016). Pero sobre todo, dejó al desnudo los problemas estructurales del modelo petrolero, lo que va a desencadenar un colapso de la economía nacional sin precedentes.

En las elecciones presidenciales de abril de 2013, quedaría electo por estrecho margen, y no sin polémicas, Nicolás Maduro, a quien Chávez había elegido como su sucesor y solicitado públicamente a sus seguidores que le concedieran el voto si él moría, intentando hacer un traspaso de legitimidad social y política. A partir de la asunción del mandato de Maduro, se intensificaron extraordinariamente los enfrentamientos del gobierno con los sectores de la oposición tradicional, estos últimos bandeándose durante años entre la posición de grupos moderados y radicales. Protestas masivas, violencia expandida, actos insurreccionales, represión sociopolítica y una amplia militarización van a marcar el rumbo del complejo conflicto político venezolano, del que haré referencia detallada en la Sección III de este capítulo.

Es crucial destacar dos dinámicas fundamentales que van a marcar la evolución de este período, y los nuevos escenarios de conflictividad sociopolítica y de distribución ecológica. En primer lugar, el progresivo colapso de la petro-economía trajo consigo, por tanto, el colapso de la renta petrolera, y con ello, de la gobernanza centralizada que

se posibilitó a través de ella, y que fue también central para el gobierno de Chávez. Si la renta había sido clave en Venezuela para garantizar gobernabilidad y una cierta canalización de los conflictos, con su relativa desintegración se abre un nuevo período signado por la violencia, que va también a impactar en la economía y en el extractivismo.

En segundo lugar, hay una estrecha relación de retroalimentación perversa entre la crisis económica y esta nueva fase del conflicto político, que en momentos incluso alcanza algunos rasgos bélicos de gran riesgo para el país. Las ruinas económicas atizaban la conflictividad, mientras que la confrontación política, con violencia hacia personas, cortes de ruta que afectaron al comercio, destrucción de infraestructuras y de los canales institucionales para gestionar los asuntos de la vida pública, socavaron notablemente la reproducción la economía nacional. De manera que, más que una dinámica lineal, con esta acelerada retroalimentación la crisis evolucionó bajo un vertiginoso efecto geométrico de colapso y caos sistémico, de reacciones en cadena y espirales de crisis, que ha generado impactos multidimensionales.

Con estos elementos introductorios, es ya posible ofrecer datos e hitos clave de La Gran Crisis que nos permita obtener una más nítida caracterización de la misma. No obstante, antes se debe añadir una mayor precisión temporal de este proceso a través de su periodización. Los 10 años examinados no fueron todos iguales, y se experimentaron transformaciones que podríamos segmentar en tres fases, de manera de identificar las variaciones del marco específico donde se desarrollaron los conflictos ecológico-distributivos.

En la TABLA 2 presento las tres fases de esta periodización, definidas como: Fase I, de Depresión (2013-2016), Fase II, de Mutación (2017-2019) y Fase III de Consolidación Predatoria (2020-2022). Para delimitarlas, he elegido tres dimensiones que en muy buena medida dan forma al marco societal venezolano: la Económica, destacando la situación nacional y social, y el perfil general de las medidas llevadas adelante por el gobierno nacional. La de Régimen Político, que expresa la situación de la democracia, del Estado y las respuestas políticas que surgieron para enfrentar las luchas sociales; y la de Conflictividad Política y Social, que nos remite al estado de la movilización y la intensidad del conflicto a escala nacional.

En la tabla podemos ver sintetizados los rasgos generales de estas fases por dimensiones, colocando los elementos que he identificado como fundamentales, sin con esto pretender poder abarcarlos todos en esta figura.

TABLA 2. Periodización de La Gran Crisis 2013-2022 (por fases). Fuente: elaboración propia.

Periodización de La Gran Crisis 2013-2022 (por fases)			
DIMENSIÓN	**FASE DE DEPRESIÓN (I) (2013-2016)**	**FASE DE MUTACIÓN (II) (2017-2019)**	**FASE DE CONSOLIDACIÓN PREDATORIA (III) (2020-2022)**
ECONÓMICA	- Caída libre de la economía y shock generalizado - Parcial y sectorial apertura al favorecimiento del gran capital - Depresión de las economías populares y del acceso a medios de vida -Expansión de economías ilícitas	- Acentuación de la caída económica y consolidación de situación de colapso - Fragmentación del extractivismo - Intensificación de la neoliberalización económica heterodoxa y despliegue de mecanismos violentos de apropiación de riqueza - Economías de sobrevivencia y procesos sociales de adaptación - Consolidación de las economías criminales	- Punto crítico de la economía, aunque posteriormente se registra leve y relativa recuperación de algunos sectores - Consolidación legal y normativa de la reestructuración neoliberal - Leve incremento de la capacidad adquisitiva, aunque con destrucción del salario y enormes desigualdades sociales - Penetración profunda de la economía y sociedad por parte de las economías ilícitas
RÉGIMEN POLÍTICO	- Deriva autoritaria del gobierno y desconocimiento de protocolos y canales democráticos - Incremento de la represión y militarización de la sociedad	- Consolidación de la situación de colapso del Estado - Intensificación de la deriva autoritaria y progresivo cercenamiento de canales democráticos - Salto cualitativo en la represión política y social	- Leve y sectorizada recuperación institucional y de infraestructuras - Deriva dictatorial y nueva intensificación de la represión y el silenciamiento social y político
CONFLICTIVIDAD POLÍTICA Y SOCIAL	- Aumento considerable de la conflictividad política y social	- Altísima conflictividad política y social - Mayor internacionalización del conflicto político nacional	- Debacle y derrota de la movilización de oposición - Decrecimiento progresivo de las protestas populares

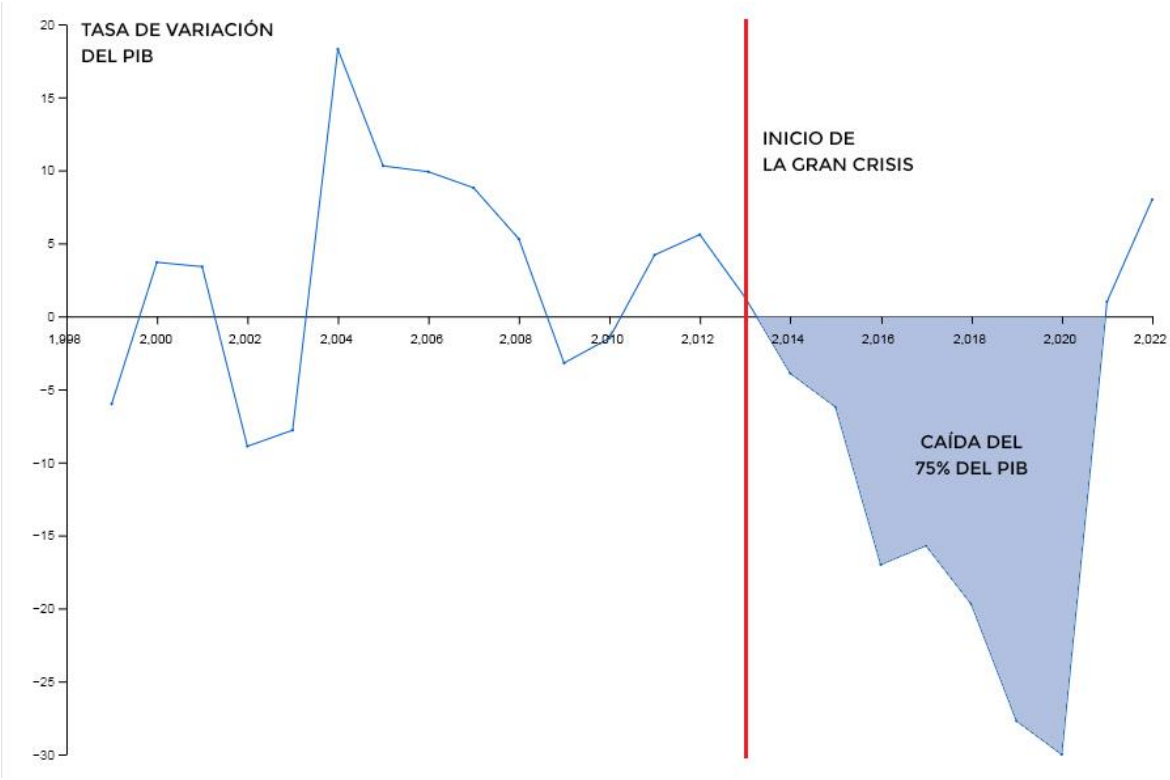
De manera resumida, se puede decir que la Fase I se ha caracterizado por el shock social y político que supuso la caída libre de la economía y las instituciones de Venezuela, conformando un entorno de depresión de la cotidianidad y del acceso a los medios de vida, el incremento de la hostilidad política y la paulatina suspensión de facto de la democracia liberal. La Fase II ya confirmaba el proceso de colapso, las muy intensas protestas, el perfil predatorio que fue adquiriendo la apropiación y distribución de la riqueza en el país –en muy buena medida motorizada por los actores gubernamentales/estatales y economías ilícitas− y los cambios en el régimen político hacia un formato abiertamente autoritario, todo lo cual daba cuenta de la mutación del propio orden societal. La Fase III, aunque mostraba leves recuperaciones económicas, institucionales y de infraestructura, supuso la consolidación de dinámicas establecidas en fases previas, como la liberalización económica, formas predatorias de extractivismo y de apropiación ilícita de riqueza, y un sistema con visos dictatoriales y de amplia represión social y política. Estas dimensiones son examinadas en detalle a continuación.

II.II Datos económicos del colapso en La Gran Crisis

El colapso societal venezolano puede ser ilustrado con algunos datos fundamentales, de los que podemos comenzar con algunas cifras macroeconómicas y de producción clave: el Producto Interno Bruto (PIB), la producción petrolera y los ingresos por exportaciones.

Respecto al PIB, si miramos a más largo plazo en el marco de la prolongada crisis del modelo rentista petrolero (1983-2022) veríamos que este se caracteriza por una dinámica inestable de ciclos de crecimiento y recesión –por ejemplo, con PIB negativo en 1983, 1989, 1994 y 1996−, que se repitieron en el proceso bolivariano, con contracciones en 1999, y 2002-2003. En la FIGURA 13 vemos que previo a La Gran Crisis ya se había experimentado la recesión de 2009-2010, en buena medida impulsada por la crisis global 2008-2009. No obstante, desde 2014 hasta 2020 presenciamos un desplome nunca visto en la historia contemporánea del país: de acuerdo a la CEPAL (2022a), entre 2013-2021 se estima que la pérdida total de PIB ha llegado al 75%. En lo comparativo, esto expresa una cifra dramática, más propia de países que han sufrido devastadoras guerra internas, como Irak, Líbano, Liberia o en la Libia del conflicto armado por el derrocamiento de Muamar el Gadafi. El desplome económico venezolano podría ser parangonable a los colapsos de Georgia, Moldova y Tajikistan, después de la caída de la Unión Soviética, pero estos fueron acumulando PIB negativo por más de 30 años, mientras que en el caso de Venezuela el derrumbe fue mucho más acelerado, en apenas 8 años. Por estas razones es que el colapso venezolano ha sido catalogado como el peor documentado en un país que no ha estado inmerso en una guerra, en la historia contemporánea –o al menos en los últimos 50 años (Álvarez et al, 2022; Idrobo et el, 2023; Muci, 2024).

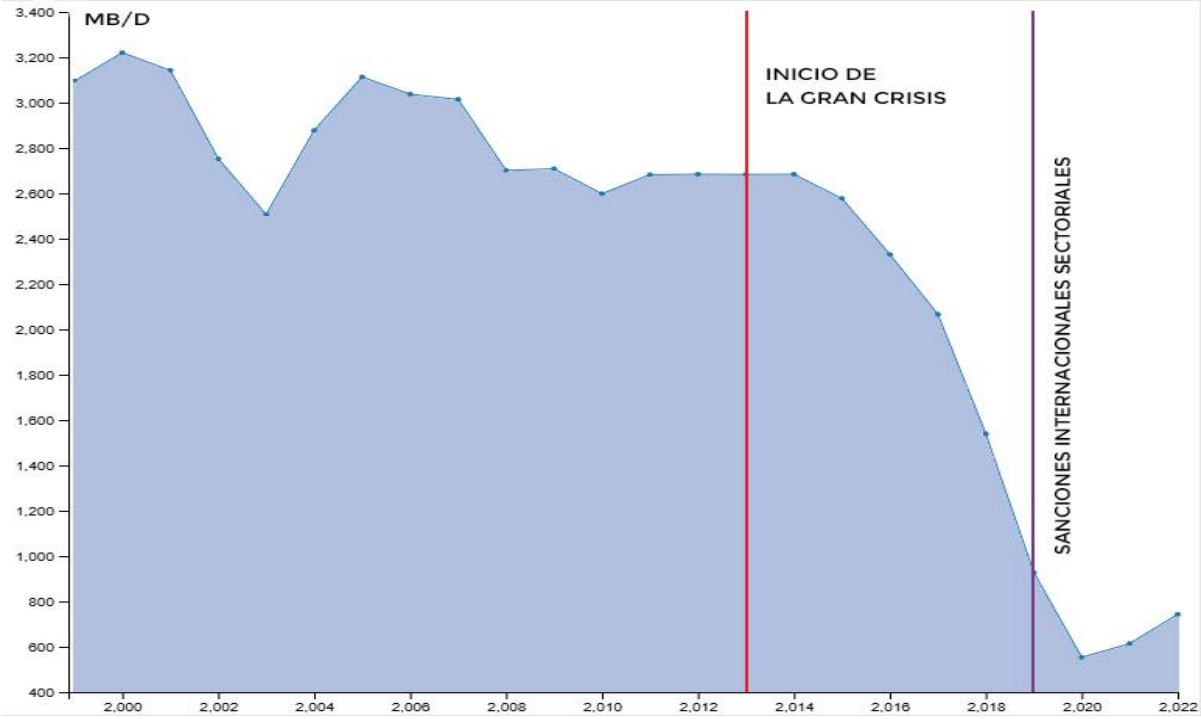
FIGURA 13. Tasas de variación del PIB, Venezuela 1999-2022. Fuente: elaboración propia con datos del IMF (S/F)



La producción petrolera durante 1999-2012 promedió 2.866.285 barriles diarios (b/d) para luego entrar en un proceso de declive desde 2014 y luego debacle a partir de 2019

(ver FIGURA 14). Para 2018 la producción había caído a 1.354.000 b/d (OPEC, 2020) y, con las sanciones internacionales aplicadas al petróleo venezolano, y los impactos energéticos de la pandemia global de COVID19 –donde se hundieron los precios del crudo–, la cifra llegaba en agosto de 2020 a 340.000 b/d, niveles similares a los de la década de los años 40s. Esto daba cuenta de la quiebra ya no sólo de la gran fuente de divisas, sino también de la economía nacional; y de un momento económico en el cual el petróleo pasaba a ser una fuente de ingresos no necesariamente predominante, aunque seguía siendo importante.

FIGURA 14. Producción de petróleo y otros líquidos (en MBD), período 1999-2022. Se indica también el punto donde se emiten las sanciones internacionales sectoriales directas sobre toda actividad de PDVSA (2019). Fuente: elaboración propia con datos de EIA (S/F)



El sector industrial no petrolero también experimentó una extraordinaria caída, siendo que para 2018 se desplomó en un 71,8% respecto a los niveles de 2007, y la actividad de manufactura un 70% entre 2013-2018 (BCV, S/Fb). Entre los sectores más afectados está la industria pesada (se hunde la producción de hierro y acero, y desaparece la de aluminio), la de bienes duraderos o de inversión; y en segundo nivel, la de bienes semiduraderos (Lucas, 2021). Para 2018 el parque industrial y de manufactura estaba operando en alrededor del 20% de su capacidad instalada –en comparación con el 57% de 2012–, y se mantuvo así hasta 2021, cuando comienza a experimentar un cierto repunte (Conindustria, 2021). Como referencia, cabe mencionar que, en el mismo período, la capacidad industrial utilizada de Brasil era de 82%, 81% en Colombia y 64% en Argentina.

La producción agrícola experimentó caídas estrepitosas, unas más fuertes que otras dependiendo del cultivo. El comportamiento general de la misma registró picos de producción entre 2007-2008 y 2011-2014, para iniciarse una baja pronunciada desde

2014 y la debacle en 2019-2020. Por ejemplo, el sorgo, uno de los cultivos tradicionales en la alimentación de la población, cayó un 99,53% para el período 2006-2020. Para 2013-2020 la debacle del pimentón fue de 95,14%, el tomate de 84,67%, la cebolla de 87,93% (ver FIGURA 18) y el arroz de 77,13% (ver FIGURA 16). El café bajó un 77,57% y la caña de azúcar de 76,38% para 2006-2020 (ver FIGURA 15). Y para 2008-2020, el maíz cayó 76,18% (ver FIGURA 17) y la papa 43,85%, por mencionar los ejemplos más emblemáticos (cálculos desde la base de datos de Fedeagro, S/F).

FIGURA 15. Producción de Caña de Azúcar (2002-2022). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Fedeagro

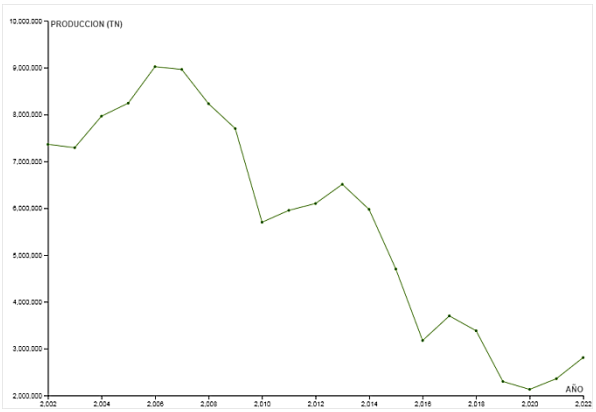


FIGURA 16. Producción de Arroz (2003-2022). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Fedeagro

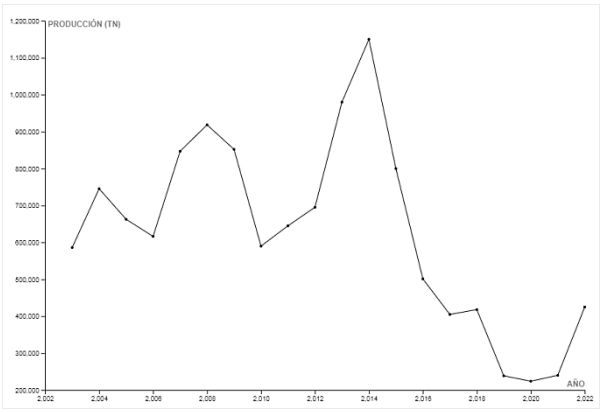


FIGURA 17. Producción de Maíz (2003-2022). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Fedeagro

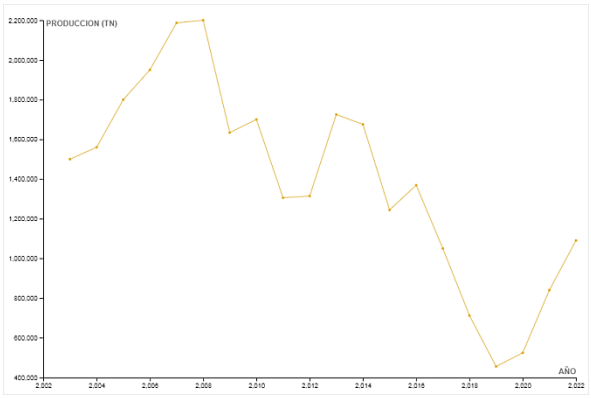
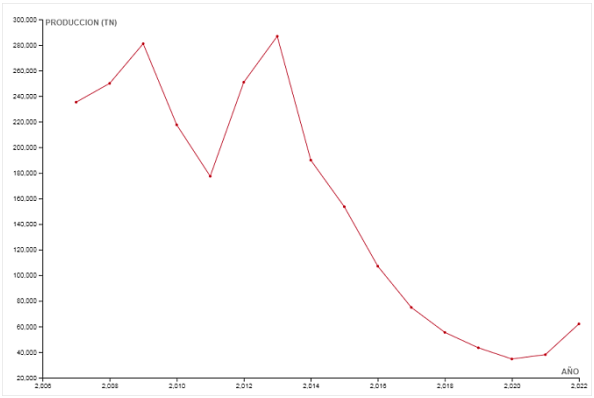


FIGURA 18. Producción de Cebolla (2007-2022). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Fedeagro

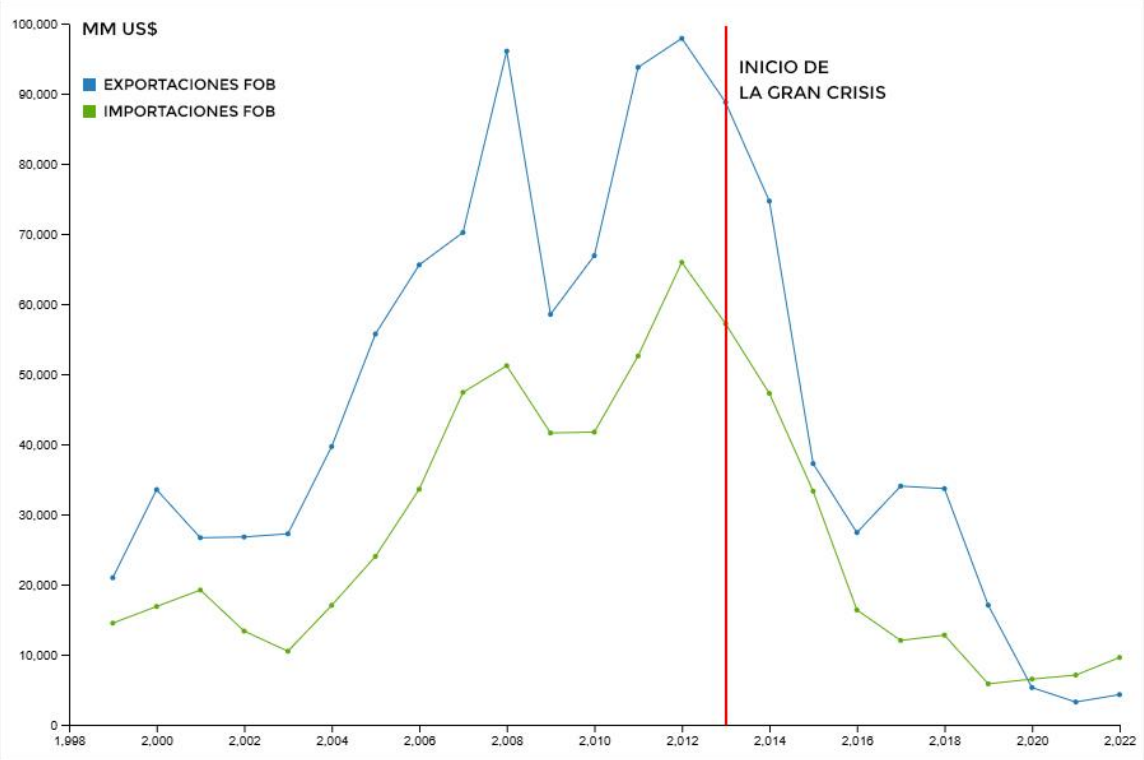


El hundimiento de los pilares de la economía tuvo un extraordinario impacto en la captura y distribución de renta en Venezuela. Empezando, claro está, por una caída de los ingresos por exportaciones, que para 2020 representaban un valor 94,58% menor del de 2012. Esto tuvo una incidencia directa en el recorte de las importaciones, como vemos en la estrecha correlación que se evidencia en la FIGURA 19. Si en 2012 se importaban productos por 65.951 millones US$, en 2020 el monto cayó a 6.508 US$, una drástica reducción de 90,13% (BCV, S/Fa; CEPAL, 2022b; OEC; S/F).

A esto hay que agregar el desplome de la recaudación fiscal desde el primer semestre de 2015, hasta llegar a niveles de reducción interanual de casi 100% en 2018, y terminar recuperándose levemente en el último semestre de 2021 (Cedice, 2024). Las reservas internacionales pasaron de casi 30 mil millones US$ en 2012 a 6.364 US$ en 2020, para recuperarse levemente en 2022 a 9.921 US$, según datos del BCV.

Y el gasto público, que en el gobierno de Chávez se había duplicado desde 1999 hasta 2013 (Echarte-Fernández, 2018), promediando 33,33% del total del presupuesto nacional en ese período, experimentó caídas significativas desde 2014-2015 (Aponte-Blank, 2016; Lander, 2017b). Algunas estimaciones –ante la carencia de datos oficiales sobre el asunto− señalan que de 2012 a 2017 este se redujo en 73,21%, con impactos muy negativos en sectores como el de la salud, pasando de 6,59% del presupuesto nacional en 2012 a 1,70% en 2018 (Expansión, S/F). Además, el porcentaje promedio de asignación al gasto público respecto al total nacional bajó a 26,41% en los 10 años analizados de La Gran Crisis, y si se cuentan sólo los últimos 4 años la cifra llega a 12,63% (calculado con datos de IMF, S/F), motivado a la drástica política de recortes del gobierno de Maduro.

FIGURA 19. Exportaciones e importaciones FOB (en MM US$), 1999-2022. Fuente: elaboración propia con datos del BCV, CEPAL y OEC.



Pese a que el gobierno de Maduro intentara abordar esta situación incrementando la masa monetaria a través de la emisión de dinero inorgánico (Sutherland, 2018), la economía interna estaba profundamente marcada por la progresiva pérdida de valor de la moneda nacional y la expansión inflacionaria, que alcanzaría los niveles de hiperinflación. En los años previos a La Gran Crisis, Venezuela ya estaba entre los

países con las mayores tasas inflacionarias del mundo. Como vemos en la TABLA 3, en 2013 Venezuela no sólo alcanzaba niveles que no se veían desde 1997 en el país, sino que ya se encontraba como la más alta inflación del mundo. Este liderato global lo tendría en todos los años del período analizado, con las excepciones de 2016 y 2022. En 2015 ya superaba los 120 puntos porcentuales, y la escalada sería tan dramática en los siguientes años que se separó de los niveles de los demás países record. No se puede olvidar que parte de estos otros países han estado inmersos en cruentas guerras civiles y profundos desplomes económicos. La situación de hiperinflación se alcanza desde 2017 hasta 2022, siendo 2018 el año que rompe record, al alcanzar la tasa de 65.374,1% −130.060,2% al final del año. Posterior a 2018, se iniciaba una curva descendente aunque con valores que seguían siendo muy altos. Esto no es sólo otro claro síntoma del colapso, sino que será un factor de mucho peso en los impactos sufridos por la población.

TABLA 3. Tasas de inflación de los 5 países con los niveles más altos del mundo, por año (2013-2022). Fuente: elaboración propia con datos de World Bank Group (S/Fb); IMF (2025) y BCV.

TASAS DE INFLACIÓN MÁS ALTAS DEL MUNDO 2013-2022 (PRECIOS DE CONSUMIDOR PROMEDIO)									
2013		**2014**		**2015**		**2016**		**2017**	
Venezuela	**40,6**	**Venezuela**	**62,2**	**Venezuela**	**121,7**	Sudán del Sur	380	**Venezuela**	**438,1**
Irán	36,6	Sudán	36,9	Sudán del Sur	52,8	**Venezuela**	**254,9**	Sudán del Sur	187,9
Sudán	36,5	Malawi	23,8	Ucrania	48,7	Surinám	55,4	Sudán	32,4
Malawi	27,3	Bielorrusia	18,1	Malawi	21,9	Angola	30,7	Angola	29,8
Bielorrusia	18,3	Irán	16,6	Ghana	17,1	Libia	25,9	Egipto	29,5
2018		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**	
Venezuela	**65.374**	**Venezuela**	**19.906**	**Venezuela**	**2.355,1**	**Venezuela**	**1.588,5**	Zimbabwe	193,4
Sudán del Sur	83,5	Zimbabwe	255,3	Zimbabwe	557,2	Sudán	359,1	**Venezuela**	**186,5**
Sudan	63,3	Sudán del Sur	87,2	Sudán	163,3	Líbano	154,8	Líbano	171,2
Liberia	23,6	Argentina	53,5	Líbano	84,9	Zimbabwe	98,5	Sudán	138,8
Angola	19,6	Sudán	51	Argentina	42	Surinám	59,1	Argentina	72,4

En este conjunto de cifras debemos mencionar el incremento de la deuda externa, que marca un aumento de 113.112 millones US$ en 2012 a 147.899 en 2019 (30,75%), año

hasta donde están disponible los datos. Cabe destacar que el incremento más significativo no se dio en La Gran Crisis sino previo a ella, cuando Chávez aún tenía el endeudamiento en 2002 en 35.460 millones US$ (CEPAL, 2017b; 2022b) y vemos que en varios años lo hizo escalar a más de cien mil millones. Lo que conviene resaltar es que, dado el colapso económico, por un lado, el porcentaje del PIB que representa la deuda creció extraordinariamente para pasar, de acuerdo a estimaciones del FMI, del 58,4% en 2012 a 329,1% en 2020, con una cierta atenuación en 2021 de 249,7%, y 2022 de 160,7% (IMF, S/F). En todo caso, estas son cifras que estarían entre las más altas del mundo, y componen el conjunto de factores que han fortalecido esta situación tan crítica. Por otro lado, desde 2015 hasta 2019, los niveles de endeudamiento prácticamente no crecieron, muy probablemente por la gran inconveniencia de emitir préstamos a Venezuela ante la situación que vive y por la gran inestabilidad política existente.

Finalmente destaco que, como vimos en la mayoría de los fenómenos examinados, para el par de años 2021-2022 se evidenció un leve mejoramiento de los indicadores macroeconómicos. Sobre esto hay dos cuestiones que destacar. Primera, las razones de este alivianamiento están en los resultados de la apertura económica, y las políticas de liberalización y favorecimiento del capital nacional e internacional que impulsó el gobierno de Maduro; una tenue recuperación de los niveles de producción petrolera (que cerró en 743.000 b/d en 2022); mejoras en la recaudación fiscal (Zambrano-Sequín, 2023); y la consolidación de mecanismos para comercializar productos por vías subterráneas ante las sanciones internacionales. Segunda cuestión, la desintegración del 75% del PIB implica que el crecimiento de 1% en 2021 y 8% en 2022 se calcula a partir de una economía que representa apenas una cuarta parte de lo que era en 2013, por lo que dicho crecimiento es realmente minúsculo.

II.III Sobre las sanciones internacionales a Venezuela y sus impactos

No se pueden dejar de mencionar las sanciones internacionales y su impacto en la crisis, impuestas estas principalmente por el gobierno de los Estados Unidos, aunque también y en menor medida por Canadá, la Unión Europea y Suiza. En el caso de los EEUU, el uso de este instrumento de coerción ha sido justificado en nombre de la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, la realización de elecciones libres, en contra de la represión política, el agravamiento de la crisis humanitaria, y clara y explícitamente en favor de los líderes políticos de la oposición. Todos estos objetivos son muy controvertibles debido no sólo a la tradicional práctica injerencista estadounidense (Harvey, 2004; Caffentzis, 2005; Wallerstein, 2006) proclive a fortalecer sus intereses geopolíticos por sobre todas las cosas, sino también porque la aplicación de estas sanciones ha tenido impactos muy negativos fundamentalmente sobre la población. Como vemos en la TABLA 4, las sanciones estadounidenses comenzaron a aplicarse desde 2015, aunque para entonces se enfocaron específicamente en funcionarios del gobierno de Maduro. Fue desde 2017, con el gobierno de Donald

Trump, que se empezaron a emitir sanciones financieras que impactaban directamente en las capacidades de adquirir nueva deuda por parte del país.

En 2018 se dan "pasos adicionales" para avanzar en el ámbito de impacto de las sanciones, aunque fue en 2019, en el marco de la intensificación del conflicto político, donde se va a concretar un bloqueo económico total (salvo algunas excepciones). Este va a incluir el congelamiento de bienes y activos del gobierno venezolano en los EEUU –entre los que se cuenta la empresa de productos petroleros CITGO, con bienes valorados en más de 5 mil millones US$–, sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro –sea o no estadounidense– y, por parte de Inglaterra, el bloqueo de unos 1.000 millones US$ en oro venezolano, localizado en el Bank of England. Estas medidas implicaron la prohibición de toda transacción con PDVSA, lo que le generó enormes dificultades para mantenerse, operar y comercializar. La compañía nacional del oro, Minerven, sería también sancionada.

En 2020 las sanciones continuaron, pero dirigidas básicamente a nuevos funcionarios gubernamentales y otras empresas particulares, incluso internacionales. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia, cambiaría el enfoque de línea dura y este sería mucho más proclive a recuperar las negociaciones políticas e impulsar ciertas formas de acercamiento con el gobierno de Maduro, lo que se va a intensificar con el inicio de la guerra en Ucrania y las más sensibles necesidades energéticas norteamericanas. Esto incluso apuntaría a una posterior reanudación de las operaciones de Chevron en Venezuela, lo que se concretaría con la Licencia General 41 de noviembre de 2022 (Departamento del Tesoro de EE. UU., 2022).

TABLA 4. Lista de las principales sanciones internacionales emitidas por el gobierno de los Estados Unidos, período 2015-2019. En la columna 'Objetivo de la sanción', la mayor intensidad del color de fondo expresa que la sanción es más directa para la economía y el Estado venezolano. Fuente: elaboración propia con información de OFAC (S/F)

PRINCIPALES SANCIONES DEL GOBIERNO DE LOS EEUU A VENEZUELA (2015-2019) **Gobierno de Venezuela (GV)** **Asamblea Nacional (AN)**					
AÑO	**INSTRUMENTO**	**EMISOR**	**MOTIVO**	**SANCIÓN**	**OBJETIVO DE LA SANCIÓN**
2015	Orden Ejecutiva 13692 (8 mrz)	Barack Obama	Socavamiento de la democracia, los DDHH. Corrupción pública	Congelamiento de bienes y cuentas bancarias en EEUU. Suspensión de visados y prohibición de entrada a EEUU	Funcionarios y personas clave vinculadas al GV

2017	Orden Ejecutiva 13808 (29 ago)	Donald Trump	Violación de los DDHH, represión política, profundización de crisis humanitaria, establecimiento de Asamblea Constituyente ilegítima	Prohibición de transacciones (personas o empresas en EEUU) de nueva deuda de PDVSA, del GV y bonos emitidos por este; de pago de dividendos o utilidades, o compra directa o indirecta de valores a estos	Capacidad crediticia de la economía
2018	Orden Ejecutiva 13827 (19 mrz)	Donald Trump	Enfrentar la emisión de la moneda digital 'Petro' por parte del GV	Prohibición (a personas y empresas en EEUU) de toda transacción o financiamiento con la moneda digital 'Petro'	Instrumentos financieros alternativos
	Orden Ejecutiva 13835 (21 may)		Socavamiento de la democracia y elecciones libres y justas; profundizar crisis humanitaria; represión política	Prohibición de transacción o financiamiento de toda deuda con el GV, de participación accionaria en la que este se encuentre, así como venta, transferencia, asignación o prenda de garantía de este	Capacidad crediticia de la economía
	Orden Ejecutiva 13850 (1 nov)		Saqueo de riquezas del país; degradación de infraestructura y ambiente; practicas mineras confiscatorias; impulso de crisis migratoria	Bloquear transacciones relacionadas con propiedades en EEUU que operen en el sector oro de la economía venezolana. Bloquear transacciones relacionadas con proyectos gestionados por el GV, o de prácticas corruptas	Actividad aurífera
2019	Orden Ejecutiva 13857 (25 ene)	Donald Trump	Violación de DDHH, represión política y contribución al Presidente Interino y la AN a ejercer autoridad	Ampliación del ámbito de sanciones: por GV se entiende a todo Estado venezolano, incluyendo el BCV y PDVSA	Todo el Estado venezolano
	Orden Ejecutiva 13884 (5 ago)		Usurpación del poder por parte de N Maduro, violación de DDHH, represión política y socavamiento del Presidente Interino y la AN	Bloqueo de todas las propiedades e intereses del GV en EEUU. Prohibición de cualquier transacción con este. Sanciones financieras y prohibición de visa a cualquier no estadounidense que contribuya con el GV (incluye empresas energéticas asociadas con PDVSA). Aplican	Todo el Estado venezolano

				algunas excepciones	

Dado lo sensible del tema, se ha desarrollado un intenso debate tanto político como académico en torno a las sanciones. En la discusión académica más rigurosa, a pesar de las diferencias de visión, hay una notable coincidencia en señalar que las sanciones han generado impactos generales en la economía y la sociedad; este no ha sido el caso de la discusión política, mucho más polarizada, donde se han solido plantear argumentos en blanco y negro, o en extremos. Las diferencias se han basado, por un lado, en definir si las sanciones originaron o no el colapso venezolano; y por otro lado, qué tanto peso han tenido estas medidas en los diversos impactos sufridos por el país. Exceptuando la narrativa del gobierno de Maduro, que señala que La Gran Crisis es el producto de una "guerra híbrida, multiforme, (e) invisible" que sufre este desde el exterior (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2021), y algunos tanques de pensamiento de filiación con dicho gobierno, que señalan que "el bloqueo explica la mayor parte de la crisis económica que afecta al país, (y) que ha sido el principal causante de las migraciones" (Celag, 2019); el grueso de los análisis conviene en que la crisis y el deterioro de la vida son previos a las sanciones y que estas lo que han hecho es agudizar la situación y los impactos en la población (Hausmann y Muci, 2019; Rodríguez, 2019; ONU, 2019b; Oliveros, 2020; Sutherland, 2020; Bahar et al 2021; Montenegro, 2021). Incluso, el trabajo de Weisbrot y Sachs (2019), que enfatizó los tremendos impactos producidos por dichas medidas, señaló que se trató de un "empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación" ya existentes[9]. Los análisis de Rodríguez y Oliveros han señalado que las secuelas que estas generaron fueron un determinante en el desenvolvimiento posterior que tuvo la crisis, lo que significa que sin esas sanciones quizás el desplome no hubiese sido tan profundo (sobre todo en la Fase III), o se hubiesen podido tomar mayores medidas paliativas, algo con lo que coinciden Weisbrot y Sachs.

En todo caso, y como ya he mencionado, la evidencia ha mostrado que los impactos han sido sufridos fundamentalmente por la población y no tanto por el gobierno de Maduro, que se mantuvo en el poder durante todo el período examinado. Por otro lado, los datos macroeconómicos del colapso que he presentado en este capítulo, en efecto, exhiben que para 2017, fecha de las primeras sanciones a la economía venezolana, el PIB ya había caído un 31,9%, la producción agrícola estaba en franco desplome desde 2014, las importaciones se habían derrumbado en un 81,76% respecto a 2012, la inflación era la más alta del mundo con 438,1% de incremento, y la deuda remontaba la enorme cifra de 148.328 millones US$.

[9] El análisis de Weisbrot y Sachs ha señalado que las sanciones produjeron 40.000 muertes en Venezuela entre 2017 y 2018, y de los estudios disponibles sobre el tema es uno de los que ofrece las cifras de impacto a la economía y la sociedad más altas. No obstante, este trabajo ha sido muy contestado por autores como Bahar et al, Hausmann y Muci, o Sutherland, debido a que estos señalan que el grueso de ese deterioro socioeconómico ya se había generado en los años anteriores a las sanciones; o bien, que hay grandes dificultades para diferenciar con claridad los impactos específicos que las sanciones habrían generado, respecto al proceso crítico previamente existente, como lo plantean Bull y Rosales (2023).

Ciertamente, el cercenamiento de financiamiento y de las operaciones comerciales de PDVSA, provocados por las sanciones internacionales de 2019, tienen estrecha relación con la específica debacle de producción petrolera de 2020 −además de los efectos que dejaba la pandemia global−, pero como vimos en la FIGURA 14, la caída de la misma venía sostenida desde 2015. La prohibición internacional del comercio con oro venezolano, es probable que se haya sumado como otro incentivo para la ampliación de la minería ilegal en la Amazonía, pero dicho flagelo venía creciendo dramáticamente desde principios del siglo XXI. Del mismo modo, las estructuras de corrupción consolidadas en el proceso bolivariano se fortalecían con las sanciones, ya que el gobierno nacional debía recurrir cada vez más a canales 'subterráneos' de comercio nacional e internacional.

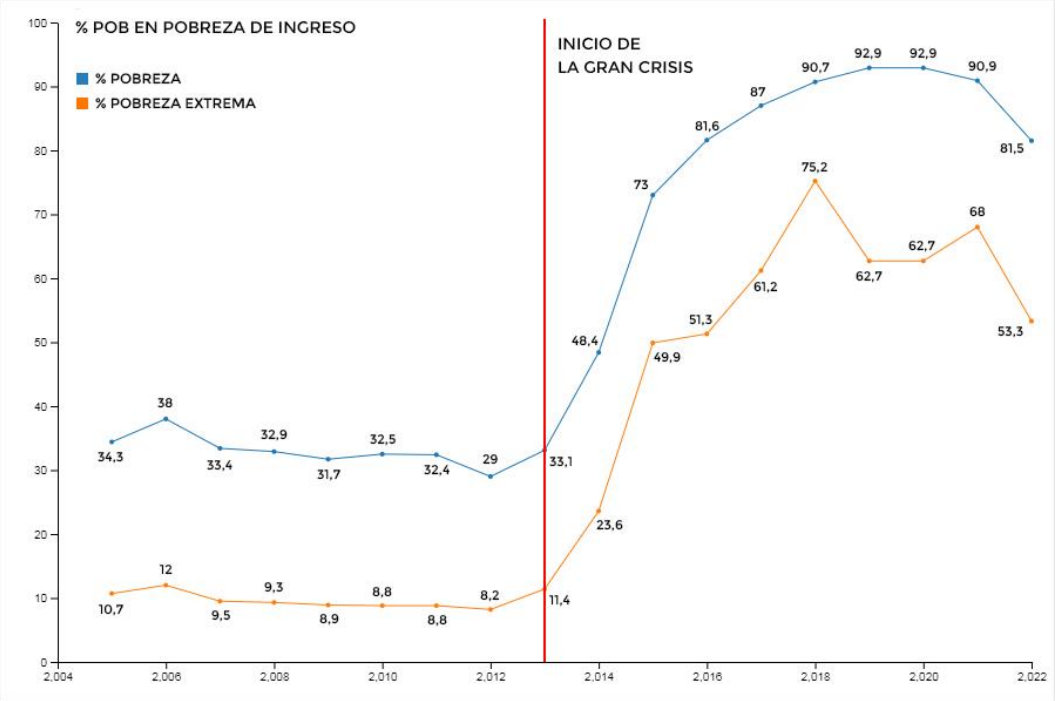
Aunque estas medidas buscan dañar las economías y son un claro obstáculo para su recuperación, no está garantizado que las haga colapsar, como se ha evidenciado en otras economías del mundo como la iraní, que están bajo un régimen de este tipo de instrumentos coercitivos (Sutherland, 2020). En suma, las sanciones son un componente importante, pero no el predominante de la crisis, que en cambio se va a combinar con los problemas histórico-estructurales del modelo petrolero, la terrible gestión del gobierno de Maduro, el entorno político predatorio que se fue configurando –de la mano también de los actores de la oposición−, el debilitamiento de los canales de respuesta de la sociedad y el socavamiento de los medios de vida.

II.IV Los impactos sociales

Las secuelas dejadas en la población han sido de gravedad, generando una extraordinaria precarización de sus condiciones básicas de vida. La primera cuestión a señalar es la pobreza, específicamente la pobreza en ingresos. Mientras que entre 2007 y 2013 la pobreza alcanzó en promedio al 32% de la población, en La Gran Crisis comienza a incrementarse dramáticamente, y para 2018 ya abarcaba la abrumadora cifra de 90,7%, manteniéndose en niveles similares hasta 2022 (81,5%) (Encovi, S/F) (ver FIGURA 20). Esto ha implicado que gran parte de las personas que no estaban en situación pobreza en el país entraron a la misma, y quienes ya estaban pasaron a empeorar esta condición.

Lo que más llama la atención es el crecimiento de la pobreza extrema, entendida esta como la situación en la cual no se dispone de los recursos para satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. Esta pasó de 11,4% en 2013 a 75,2% del total de la población en 2018, lo que equivale a decir que para el 82,91% de las personas pobres su situación era extrema, y que de cada 4 venezolanos 3 estaban en esta grave condición. Estos datos permiten comprender parte de la dimensión social del colapso, la catalogación del escenario de Venezuela como uno de Crisis o Emergencia Humanitaria Compleja, y la conexión de estas dimensiones socioeconómicas con otras como las nutricionales y de salud.

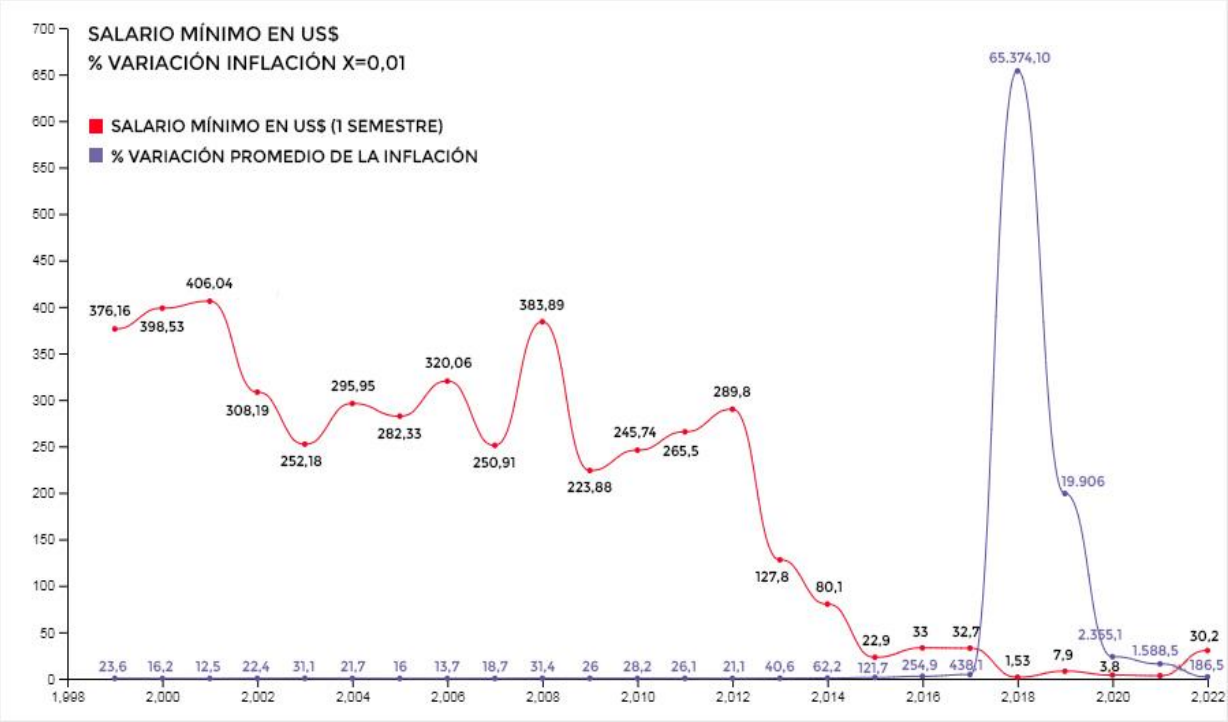
FIGURA 20. Porcentaje de la población en condición de pobreza y pobreza extrema (de ingresos), período 2005-2022. Fuente: elaboración propia con datos de Encovi (S/F)



Esto podemos conectarlo con la situación salarial. En mayo de 2008, el salario mínimo alcanzaba los 383,89$ mensuales, y a partir de ahí comenzó a experimentar tendencias a la baja, hasta que desde 2013 inicia su debacle, pasando de 147,64$ a 4,70$ mensuales a finales de 2017. Como vemos en la FIGURA 21, la aceleración de la hiperinflación entre 2017-2018 fue absolutamente devastadora para la población, registrándose salarios mínimo promedio de 3,33$ en 2020.

Con el Índice de Desarrollo Humano podemos incorporar una mirada más amplia de la situación de empobrecimiento de la vida en el colapso, señalando que Venezuela, que estuvo en la categoría de Desarrollo Humano Alto entre 2005-2012 y en puesto mundial 71-75, comenzó un declinar hasta llegar a categoría Desarrollo Humano Medio y caer al puesto 120. El IDH bajó más pronunciadamente entre 2020 (0,695) y 2022 (0,699), representando, de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano PNUD-ONU, el país que más profundo cayó en los puestos mundiales y, por tanto, el que más acelerado deterioro registró (PNUD-ONU, 2022; 2024).

FIGURA 21. Salario mínimo en US$ (1er semestre de cada año), a tasa paralela (desde 2018, calculado a tasa oficial) y porcentaje de variación de la inflación (promedio anual). Período 1999-2022. Fuente: elaboración propia. Salario, con datos de Clyde & Co (2025) Wikipedia (2025) y BCV. Para inflación, datos de BCV y IMF (2025)



Esto ha repercutido dejando altos niveles de inseguridad alimentaria. Una evaluación in situ que realizó el Programa Mundial de Alimentos (ONU) en 2019, determinó que 9,3 millones de personas estaban en inseguridad alimentaria y requerían asistencia, de las cuales 2,3 millones estaban en situación severa, todo lo cual englobaba al 32,3% de la población del país (PMA, 2019). Los datos de FAO (S/F) han sido un poco más moderados aunque siguen indicando una cifra muy alta, con casi un cuarto de la población en situación de subalimentación en el período 2018-2020 (ver FIGURA 22). Se señalan los muy bajos ingresos como el principal factor causal del fenómeno, aunque en los primeros años de la crisis también impactaron los altos niveles de carestía de productos. En todo caso, al menos para el período 2017-2019 Venezuela estaría entre los 10 países con mayor nivel de inseguridad alimentaria del mundo (FSIN, 2020; FAO et al, 2020) (ver FIGURA 23). Estos factores explican por qué Venezuela ha entrado en las prioridades globales en materia de emergencia nutricional para organismos como el PMA o FAO. Para el período 2022-2023 hubo una leve disminución, con unas 5,2 millones en situación de seguridad alimentaria, aunque la cifra seguía siendo muy alta (WFP, 2023).

FIGURA 22. Prevalencia de subalimentación respecto al total de la población de Venezuela. Período 2000-2022. Datos de 2008 a 2013 marcados como <2.5. Fuente: elaboración propia con datos de FAO (S/F)

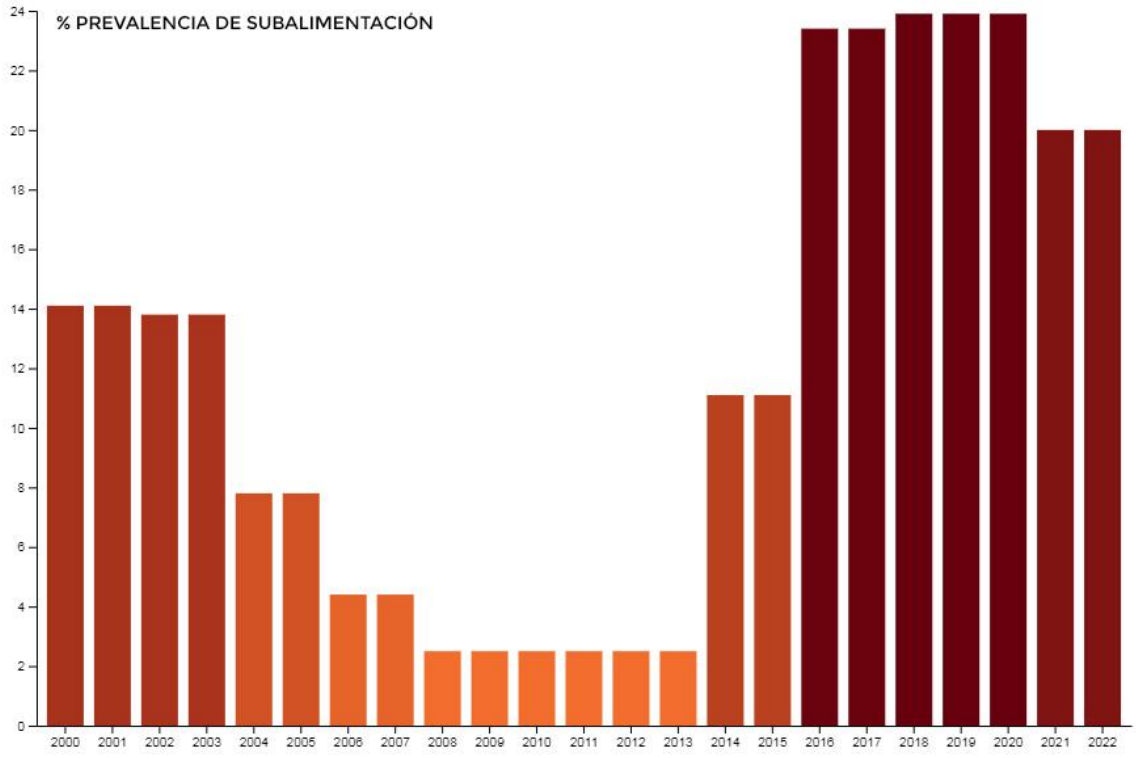
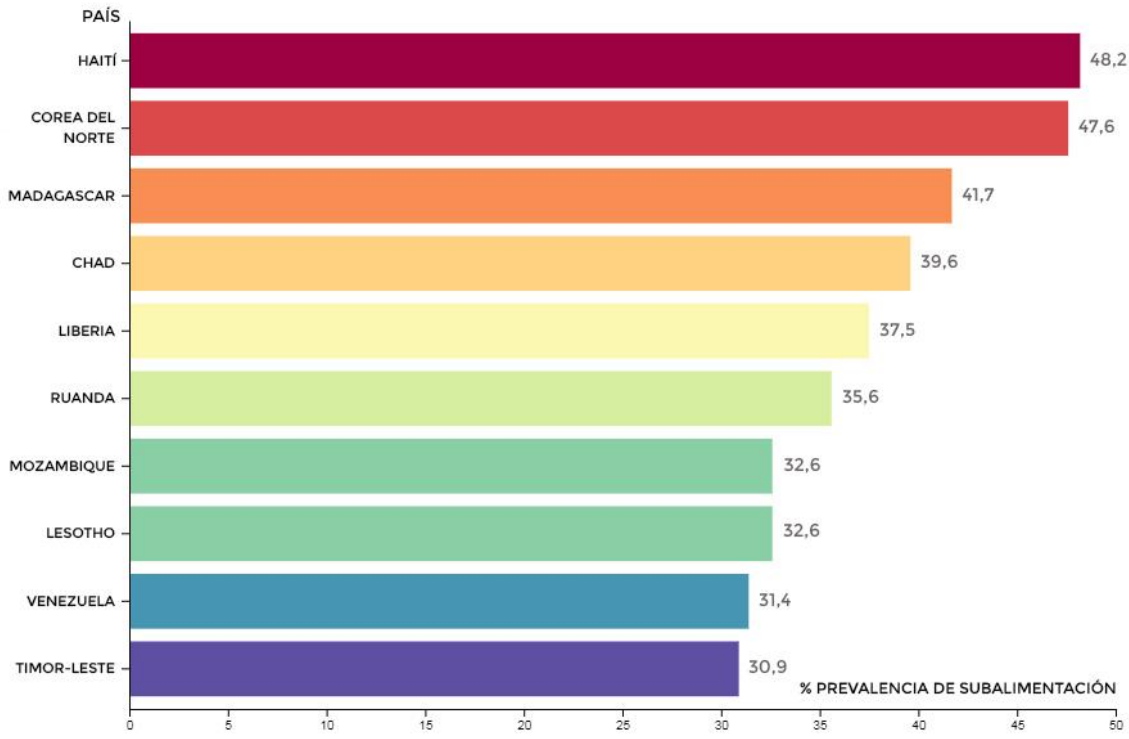


FIGURA 23. Top 10 de países del mundo con la mayor prevalencia de subalimentación respecto al total de su población. Período 2017-2019. Fuente: elaboración propia con datos de FAO et al (2020)



La situación negativa de nutrición es expresión, y también uno de los factores causales, de la crisis de salud del país, revirtiendo varios logros alcanzados en este ámbito en décadas anteriores. La Gran Crisis, a su vez, fue mermando progresivamente la capacidad operacional del sistema de salud pública, sea por la falta de servicios básicos (agua y electricidad), la escasez de insumos médicos y medicinas, a lo que se fue sumando la reducción de personal, que en conjunto ocasionaron un colapso estructural del mismo, con el desmantelamiento operativo del 70% de los servicios de salud. En 2020, ante las demandas de la pandemia de COVID19, la reducción operativa llegaría al 80% (ENH, 2019; OCDE y World Bank, 2020; Provea, 2021).

En este marco, se debe resaltar el incremento de la mortalidad infantil, que de 17,4 niños fallecidos por cada 1.000 nacidos en 2012, se pasó a 24,2 en 2016, un 40% de incremento, manteniéndose esta cifra en los años posteriores, de acuerdo a Unicef (2024). La mortalidad materna subió de 115 a 125 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos entre 2013 y 2017 (Álvarez et al, 2022); mientras que enfermedades que en varios casos parecían erradicadas se dispararon, incluso generando impactos regionales. Por ejemplo, los casos de malaria pasaron de 35.500 en 2000 a más de 467.000 en 2019 (WHO, 2024), la cifra más alta en la historia del país, convirtiéndose en epidemia en algunos estados, sobre todo donde se ha desplegado la minería ilegal. Esto representó entre 2016-2017, el más grande incremento de las tasas de malaria en el mundo, y la mayor proporción de casos registrados por el sistema de vigilancia global de la OMS (WHO, 2017), lo que a su vez repercutió en una propagación que tuvo efectos en Sudamérica.

Situaciones similares se expresaron con el sarampión, que pasó de 0 casos entre 2008-2015 a un rebrote desde junio de 2017 de 7.300 casos, que también se extendió a otros países; la difteria, de 0 casos en 2006-2015 a más de 2.000 presuntos casos entre 2016-2018; la tuberculosis con un 41% de incremento de casos entre 2014-2016; y la falta casi total de tratamiento antirretroviral para personas con VIH, con un 87% de las personas inscritas para recibirlo que no lo estaban obteniendo (HRW, 2018; Page et al, 2019).

En cuanto al acceso a los servicios públicos, sectores como el transporte se desplomó, siendo que en períodos de mayor depresión prácticamente desapareció en algunas partes del país. Esto ocurrió también con el aseo público, dejando en grave situación sanitaria a los centros urbanos. Sin embargo, voy a detenerme especialmente en los ámbitos de la energía y el agua.

Sobre la energía, se debe subrayar que Venezuela vivió el colapso de su Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual ya venía de una crisis prolongada desde la primera década del siglo XXI, cuando aún gobernaba Chávez. Dicha crisis está vinculada al anclaje que tenía este sistema en la renta petrolera para su funcionamiento (mantenimiento e inversiones), al elevado consumo de electricidad per cápita que había en el país –estimulado por los altos subsidios que poseía−, y a la fuerte dependencia respecto a las centrales hidroeléctricas de la Región Guayana (López-González et al,

2017). La demanda máxima nacional estaba rebasando la capacidad de generación eléctrica disponible (Altez, 2019), lo que estaba llevando al SEN a sus límites. Esto motivó a Chávez a declarar emergencia eléctrica en 2010, aunque no evitó que se produjeran importantes apagones en 2013 y 2017. Para este último año, la capacidad de generación nacional era apenas 37,74% de la capacidad instalada (que era de 36.560 MW), y según el Comité de Afectados por Apagones, en dicho año se presentaron en Venezuela 18.221 fallas eléctricas, subiendo en 2018 a 46.566 fallas (Aula Abierta, 2020). En marzo 2019 se producía el más grande apagón en la historia del país, afectando a 21 de sus 23 estados, y durando de 3 a 5 días, dependiendo la región. Los blackouts continuaron en los meses siguientes (aunque sólo por varias horas) y el resto de los años de La Gran Crisis que he analizado.

Los racionamientos eléctricos han sido extendidos y severos en este período: de acuerdo a la Encuesta Encovi (2018), mientras en 2017 el 55% de la población mencionó tener algún nivel de racionamiento o carestía de electricidad, en 2018 esta cifra subió a 71%; y para 2021, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reflejó que llegó al 82,6% de la población (OVSP, 2021).

En cuanto al gas, usado para cocinar por el 83% de los venezolanos, para 2021 el 72% de la población tenía un suministro irregular del mismo; el 38,5% podía recibir la 'bombona' o tanque particular apenas entre 2-3 meses del año; y al 42,5% no le llegaba nunca o casi nunca (OVSP, ibíd.).

Respecto al acceso al agua, el sistema de distribución nacional también ha sufrido el colapso económico e institucional, con desinversiones y grave precarización de su funcionamiento, en ámbitos como los procesos de bombeo, potabilización, embalses, entre otras (Fundación Agua Sin Fronteras, 2018; Fundación Aguaclara, 2021). Todo esto ha causado graves carestías y una muy mala calidad del agua. De acuerdo a Encovi (2018), algún nivel de carestía o racionamiento de agua lo sufría el 85% de la población en 2017, lo que se asemeja al 75% que calculó OVSP para 2021. Estos también señalaron que el 52% de los entrevistados dijo que recibe el agua con algún tipo de coloración. HumVenezuela (2023) ha indicado que en 2020 más de 12 millones de personas (42,4% del total de población) se encontraban en una situación de 'necesidad crítica' respecto al agua y saneamiento.

IMAGEN 3. Usuarios en Guarenas (cerca de Caracas) usan métodos de transporte masivo alternativo (transportes de carga), que establecen sus rutas y sus propias tarifas. Noviembre 2017. Fuente: Rivas (2017)

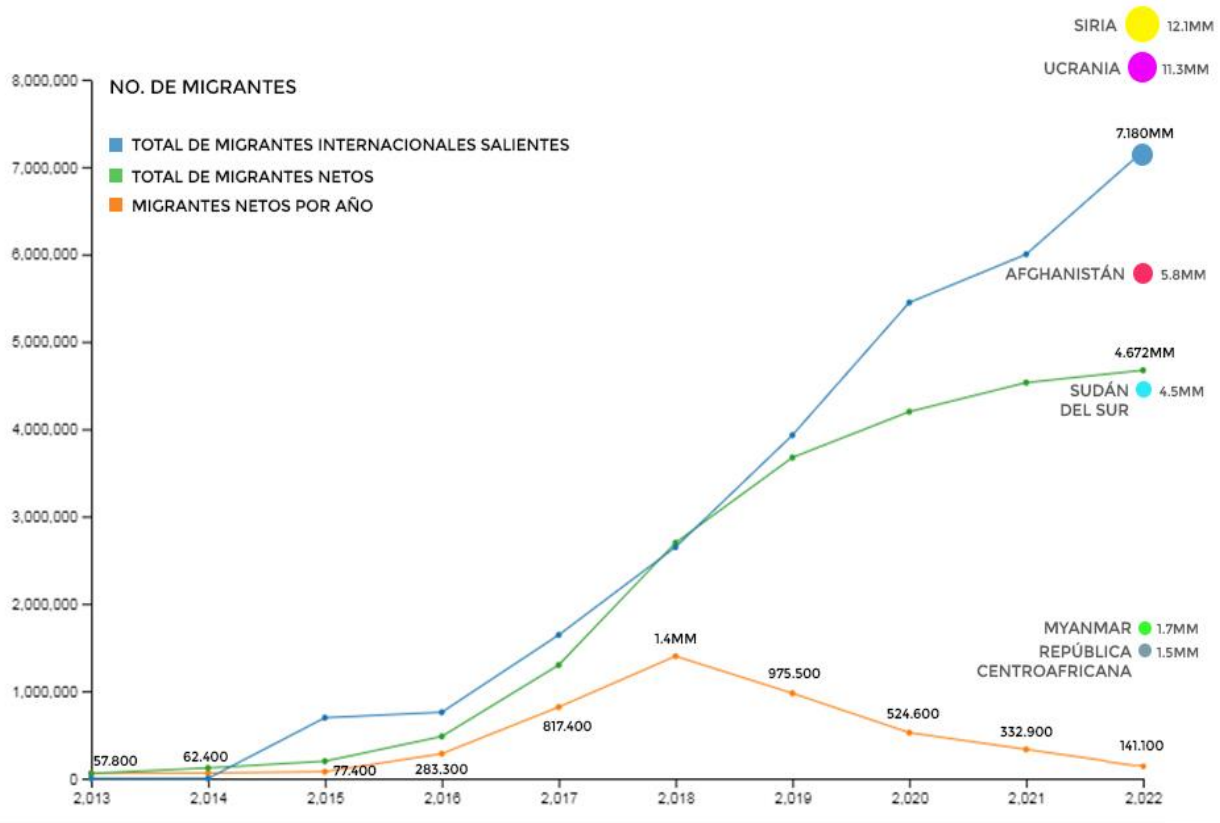


II.IV.I Tres efectos colaterales del colapso en la sociedad: migración, desigualdades sociales y protestas

Los impactos sociales descritos generaron varios efectos colaterales, de los cuales voy a destacar tres: la migración masiva, el aumento dramático de las desigualdades sociales y el incremento de la conflictividad social.

La migración se convirtió en una de las principales válvulas de escape de la situación para los venezolanos. Al menos entre 2014-2022 se ha generado la más grande movilización humana de la historia reciente de América Latina y una de las crisis migratorias más intensas del mundo en los últimos lustros (UNHCR, 2022; World Bank Group, S/Fa). Como vemos en la FIGURA 24, desde 2015 comienza una expansión de la migración que se va a disparar en 2017, con casi un millón de personas saliendo ese año y continuando un ritmo sostenido que llegó a acumular más de 7 millones de personas en 2022. Las razones principales ofrecidas por la gente han sido la falta de trabajo e ingresos, y la debacle de los servicios públicos (Encovi, S/F).

FIGURA 24. Migración hacia fuera de Venezuela, en total acumulado de migración saliente, y de migración neta por año y total. Período 2013-2022. Migración total saliente con datos desde 2015. Fuente: elaboración propia con datos de R4V-UNHCR (2023); IOM (S/F); Encovi (2018); y para datos de otros países WFP (2022)



El comportamiento de la migración neta, que hace un balance entre las personas que abandonan el país y los que ingresan, evidencia el pico que se registró en 2018, y las tendencias a la baja desde 2019, dado que comenzaba a incrementarse el nivel de venezolanos que regresaban a Venezuela. Aun así, la migración total neta en 2022 fue de 4.672.400 personas. Cabe agregar que la población total del país en 2011 de acuerdo al Censo Nacional era de 27.227.930 (INE, 2014), y el Instituto Nacional de Estadísticas estimó su crecimiento hasta llegar en 2018 a 31.979.553 (en CNE, 2018). No obstante, el resultado de la migración masiva ha sido un decrecimiento de la población nacional, siendo que CEPAL (S/F) señala un total de habitantes en 2024 de 28.405.500 de personas, mientras que UNFPA (S/F) los estima en 29,4 millones.

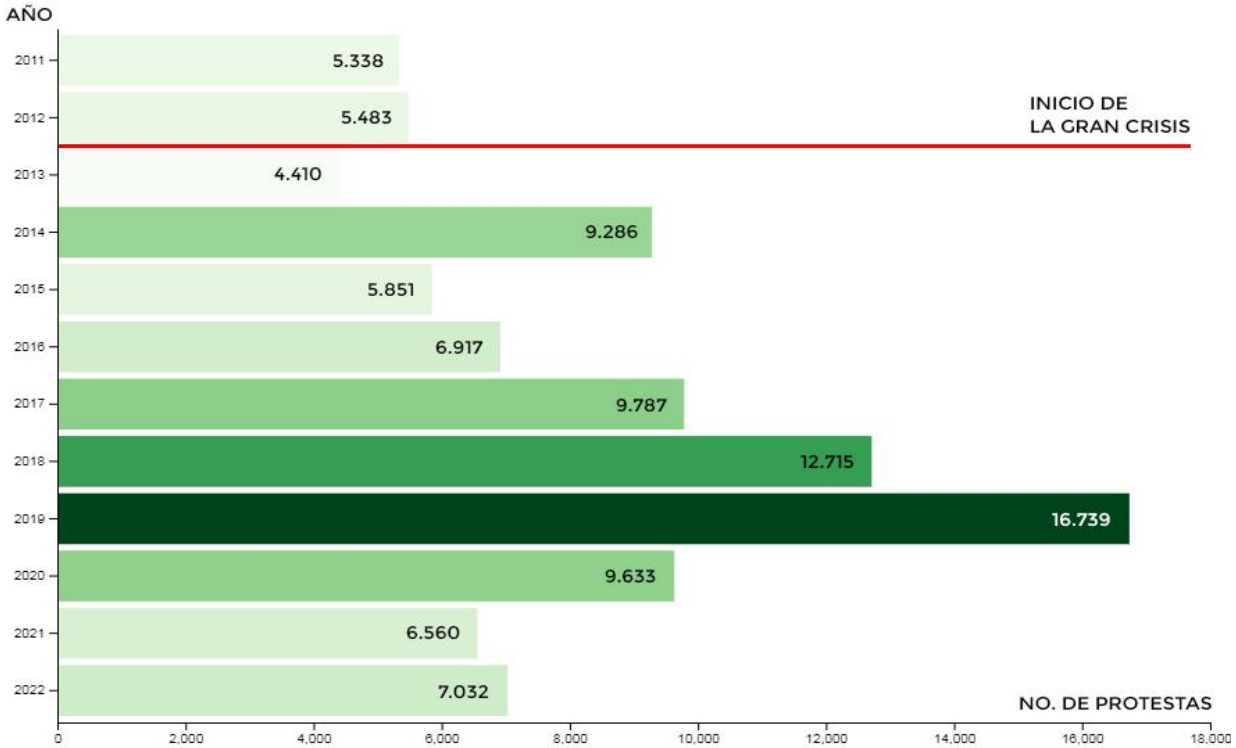
Como se muestra en la FIGURA 24, si comparamos con las peores crisis de desplazados del planeta para 2022, vemos que la de Venezuela sería la tercera, después de Siria y Ucrania.

Respecto a las desigualdades socioeconómicas, se produjo un notable ensanchamiento de la brecha entre un pequeño sector social con fuerte capacidad para concentrar riqueza, y el grueso de la población empobrecida, algo que se intensificó justo cuando se daba un leve mejoramiento de los indicadores macroeconómicos en 2021-2022. Si observamos el coeficiente GINI –que mide la desigualdad de ingresos en una población

en un período de tiempo determinado, con 0 indicando la igualdad perfecta y 1 la desigualdad máxima−, este ha tenido un significativo aumento en La Gran Crisis. Venezuela podía presumir del coeficiente GINI más bajo de América Latina, incluso reduciéndose en el período 2004-2014 (CEPAL, S/F). No obstante éste pasó de 0.406 en 2014 a 0.603 en 2022 (Encovi, S/F). Esta encuesta ha señalado que la diferencia entre el decil más pobre del país (con ingresos promedio de 7,9$) y el más rico (553,2$) es de 70 veces su cifra. La depresión del salario se combina aquí con la emergencia de pequeños grupos y élites económicas que exhiben consumos y estilos de vida de lujo (Schlenker, 2021; Bull et al, 2022), resultado tanto de los enormes privilegios otorgados a los inversionistas en Venezuela, como de los entramados de corrupción vinculados al Estado. El contraste del GINI de Venezuela con el promedio del resto de países latinoamericanos (0,499 para 2022) (Banco Mundial, 2024) es notable, y se constata que se trata del país con las mayores desigualdades de la región y una de las más altas del mundo.

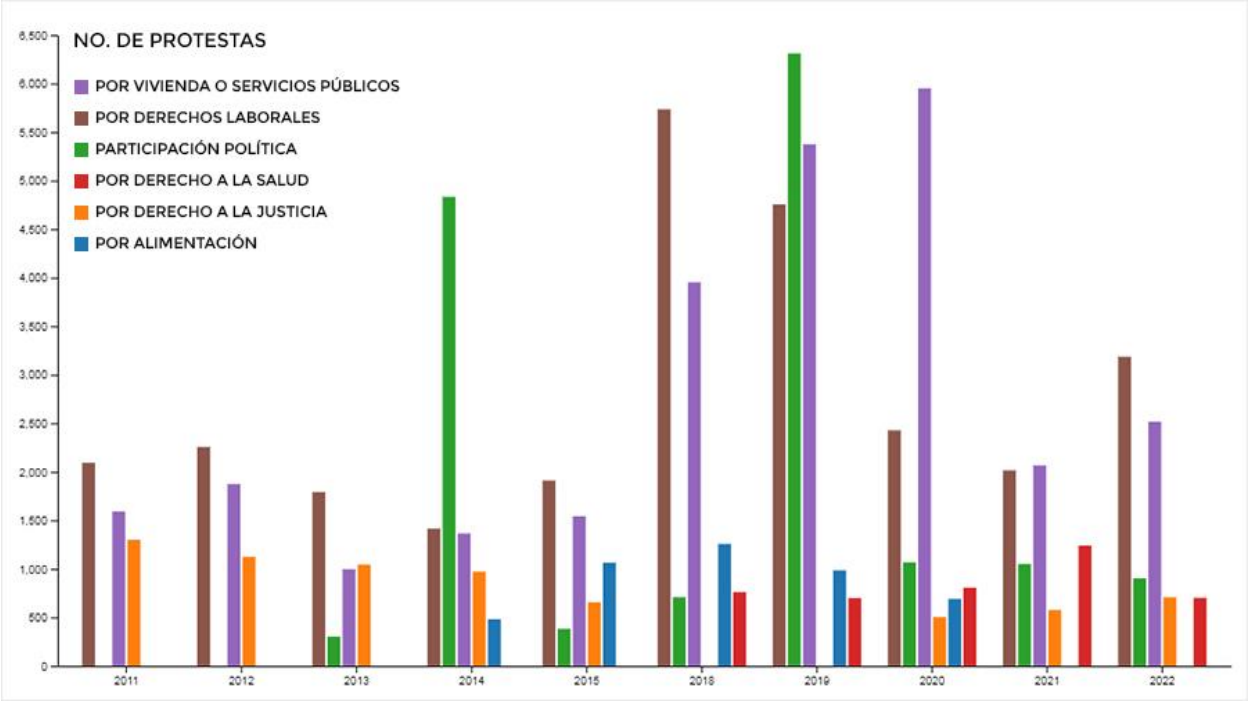
En relación a la conflictividad social, los datos proporcionados por el seguimiento del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS, S/F) muestran un incremento del número de protestas en el país desde 2014, subrayando la considerable expansión de las mismas en el período 2017-2019 (ver FIGURA 25), cuando se estaban produciendo las más grandes movilizaciones políticas. Esto se va a atenuar con el fracaso de la estrategia de gobierno paralelo de Juan Guaidó y la llegada de la pandemia de COVID19 a Venezuela, con las respectivas medidas de cuarentena en 2020.

FIGURA 25. Protestas en Venezuela, período 2011-2022. Fuente: elaboración propia a partir de OVCS (S/F)



En la FIGURA 26 podemos ver los principales tipos de protestas que se desarrollaron en el período 2011-2022. Aunque las movilizaciones políticas (contra el gobierno; contra leyes, medidas o decretos de este; por el respeto a la democracia y la defensa de la participación política; en apoyo a los partidos de oposición; entre otras) jugaron un rol estelar en 2014, 2017 y 2019, estas no representaron la mayoría del total de protestas registradas. El grueso de ellas ha estado motivado por demandas y exigencias por condiciones básicas que permitan vivir con dignidad; la defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; así como también la búsqueda de justicia.

FIGURA 26. Principales tipos de protestas, frecuencia por años. Período 2011-2022 (sin datos para 2016-2017). Se eligen los 6 tipos con más incidencia, de acuerdo a la categorización del OVCS. En los primeros dos años, 'Participación política' está integrada en la categoría Derecho a la Justicia. Fuente: elaboración propia a partir de OVCS (S/F)



Las protestas salariales y de sindicatos tuvieron mucha fuerza desde 2018, y protagonizaron la movilización social en el país en el 2022. Del mismo modo, el colapso de los servicios públicos ha representado una de las principales fuentes de conflicto: movilizaciones por las carencias de energía, por un servicio eléctrico eficiente y en rechazo a los permanentes cortes de electricidad; por la falta de gas doméstico, al igual que por la escasez de gasolina; y quizás una de las principales demandas: las de agua potable. El OVCS (2022) documentó desde 2018 hasta 2022 un total de 6.442 protestas por este recurso –por acceso, calidad, tratamiento de la misma, contaminación, etc–, movilizaciones que además estuvieron atravesadas por diferentes valoraciones del mismo, que hacen parte de los conflictos ecológico-distributivo que voy a examinar en detalle en el capítulo 4.

Los protagonistas de las protestas sociales han sido principalmente pobladores de comunidades rurales, vecinos de barriadas urbanas, trabajadores y sindicatos, gremios, universidades, organizaciones no gubernamentales, medios independientes, entre otros. El descenso del número de protestas desde la pandemia también fue de la mano del aumento de la represión por parte del gobierno de Maduro, y la evolución hacia un régimen autoritario en los años más avanzados de la crisis.

II.V La dimensión ecológica de La Gran Crisis

Antes de y durante La Gran Crisis, la dimensión ecológica evolucionó en una dinámica de estrecha interrelación con los otros aspectos del derrumbe societal, teniendo como trasfondo el asunto de la imperiosa reproducción de la vida. Las extraordinarias asimetrías de un modelo marcadamente centrado en la renta petrolera –hiperurbanización, hiperrentificación económica y sociocultural, hipercentralización de la administración de un país−, no sólo nos remite a un problema de insostenibilidad económica del mismo, sino también a un notorio proceso de alienación respecto al aspecto ecológico. En primera instancia, el modelo venezolano llevó al extremo la contradicción dinero-naturaleza, atravesada por un embelesamiento rentista y valoraciones muy determinadas por lo crematístico, persistiéndose por tanto en una intensa colonización ambiental, sea para sostener dicho sistema, o bien como apuesta para buscar salir de las cíclicas crisis.

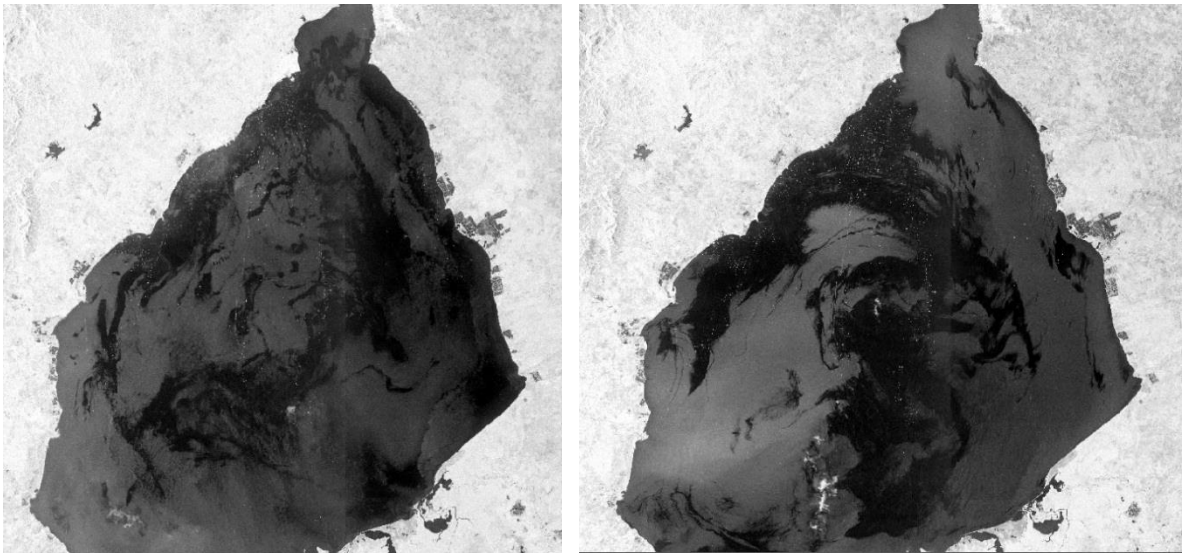
En segunda instancia, la evolución de esta extrema asimetría de la petrosociedad está muy vinculada a la ruptura de las relaciones metabólicas más estrechas entre humano y naturaleza, las cuales terminaron muy disociadas. Todo esto fue socavando las capacidades sociales y culturales para mantener economías locales de productividad ecológica, como la agricultura y la pesca en diversas escalas, y por tanto, las posibilidades que el país pudiese sobreponerse mejor al colapso del sistema petrolero. Las raíces de la situación de severa inseguridad alimentaria venezolana que he reseñado, están también en esta marcada disociación sociometabólica.

En tercera instancia, la permanente degradación de los medios ecológicos fue también mermando la disponibilidad y calidad de los mismos, y por tanto, empobreciendo aún más la reproducción de la vida cotidiana para el grueso la población. La crisis ambiental en el colapso agudizó esta situación previamente establecida. Por ejemplo, la industria petrolera, que ya venía de décadas de contaminación de variados ecosistemas del país, comenzó a experimentar en el período de crisis un incremento considerable de la tasa de siniestros o accidentes (OEP, 2022). A raíz de esta situación, se fueron desarrollando numerosos y permanentes derrames petroleros que se fueron combinando con el abandono de la gestión ambiental por parte de PDVSA desde 2016, algo que he corroborado en visitas de campo que realicé con el Observatorio de Ecología Política de Venezuela en zonas de extracción.

En las Imágenes 4 y 5 del Lago de Maracaibo, podemos ver el nivel de intervención que sufre este cuerpo de agua, impactado por múltiples estresores ambientales simultáneos. Los constantes derrames petroleros, se combinan principalmente con el enorme y descontrolado despliegue de plantas flotantes (visibles en las imágenes), provocado por el vertido de efluentes y desechos con ingentes cantidades de fertilizantes y biocidas. Estos últimos son derivados de la producción agroindustrial tierras arriba de productos como el plátano, la palma africana, pastos, entre otros, lo que ha generado la eutrofización del lago.

Esto tiene un severo impacto en la fauna, en la calidad del agua y en la salud de las comunidades que habitan en las costas del ecosistema. Las familias de pescadores de la zona sufren sobremanera la situación, siendo afectada la soberanía alimentaria de las mismas y sus fuentes de trabajo, algo que alimenta el conflicto que examinaré como parte de mi análisis de casos (Caso No. 5). Situación como esta se repite en otras zonas petroleras, como en la Península de Paraguaná (estado Falcón), lo que provocó un impacto aún mayor en la seguridad alimentaria de los pescadores locales, y un período de conflictividad más intenso (Caso No. 6).

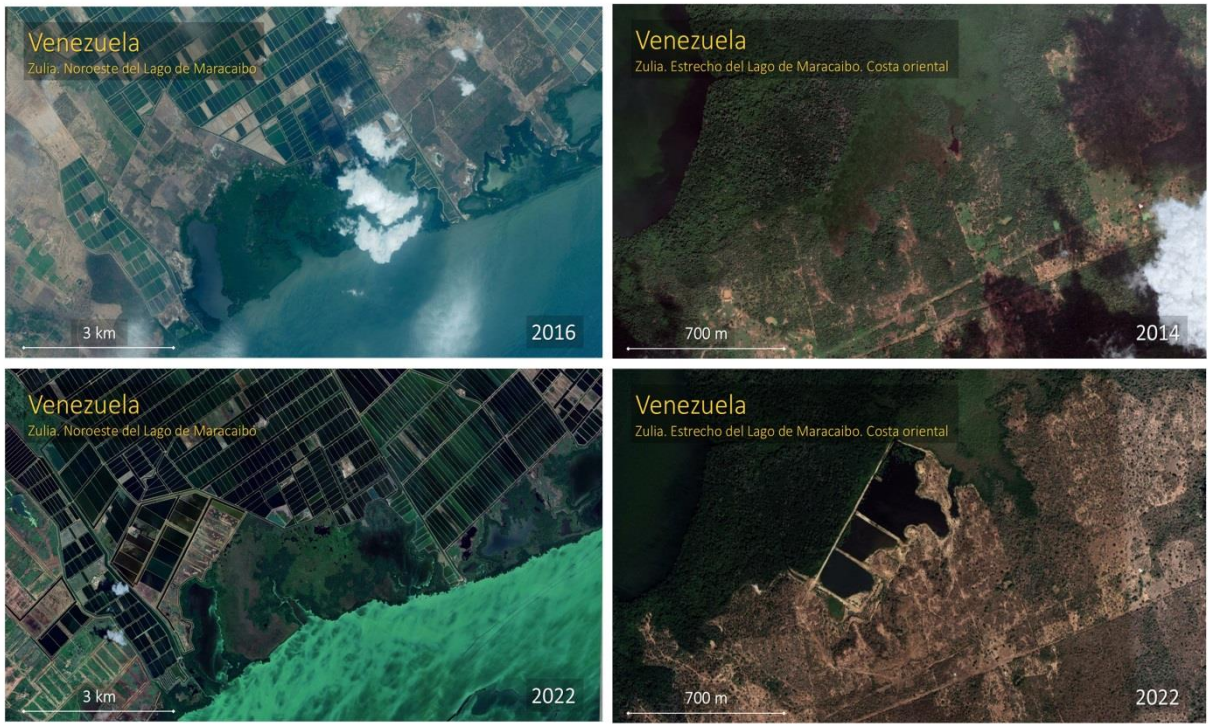
IMÁGENES 4 y 5. Imágenes de radar del lago de Maracaibo (estado Zulia), el más grande de Suramérica, donde se denotan grandes manchas negras que dan cuenta de la presencia de plantas flotantes y derrames petroleros en el cuerpo lacustre. Fecha de Imagen 4: 04/11/2022. Fecha de Imagen 5: 22/12/2022. Fuente: Sentinel 1 (https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1).



Los cambios económicos y el avance hacia nuevas fronteras de commodities producto de la crisis –que analizaré en detalle más adelante en este capítulo−, han también agravado esta situación. Pongo como ejemplo dos sectores extractivistas que estuvieron en expansión: la industria camaronera, fundamentalmente en áreas costeras de esta misma zona del Lago de Maracaibo; y la minería ilegal de oro en la Amazonía.

El crecimiento de la industria camaronera en La Gran Crisis se ha expresado abarcando más ecosistemas de humedales sin regulación alguna, como lo podemos observar en las Imágenes 6 y 7, donde se aprecia la secuencia de avance para el período 2014-2022 en el estrecho del Lago de Maracaibo (costa oriental); y 2016-2022 en la zona noroeste de la misma biorregión. Rodríguez-Olarte (2023) examinó esta evolución indicando que para el lapso 2020-2022 –cuando en sus inicios prevalecía la cuarentena de la pandemia de COVID19–, se destruyeron 6.683 hectáreas por parte de esta industria, de las cuales 2.200 eran nuevas intervenciones en planicies, cauces, lagunas y selvas para posibilitar la construcción de granjas acuícolas. La actividad de las camaroneras está asociada a la destrucción de manglares y otras comunidades relictuales, la transformación de estuarios y cauces, la contaminación por efluentes cargados de sedimentos y patógenos, y la pérdida de biodiversidad, agrediendo aún más al muy afectado lago de Maracaibo (ídem).

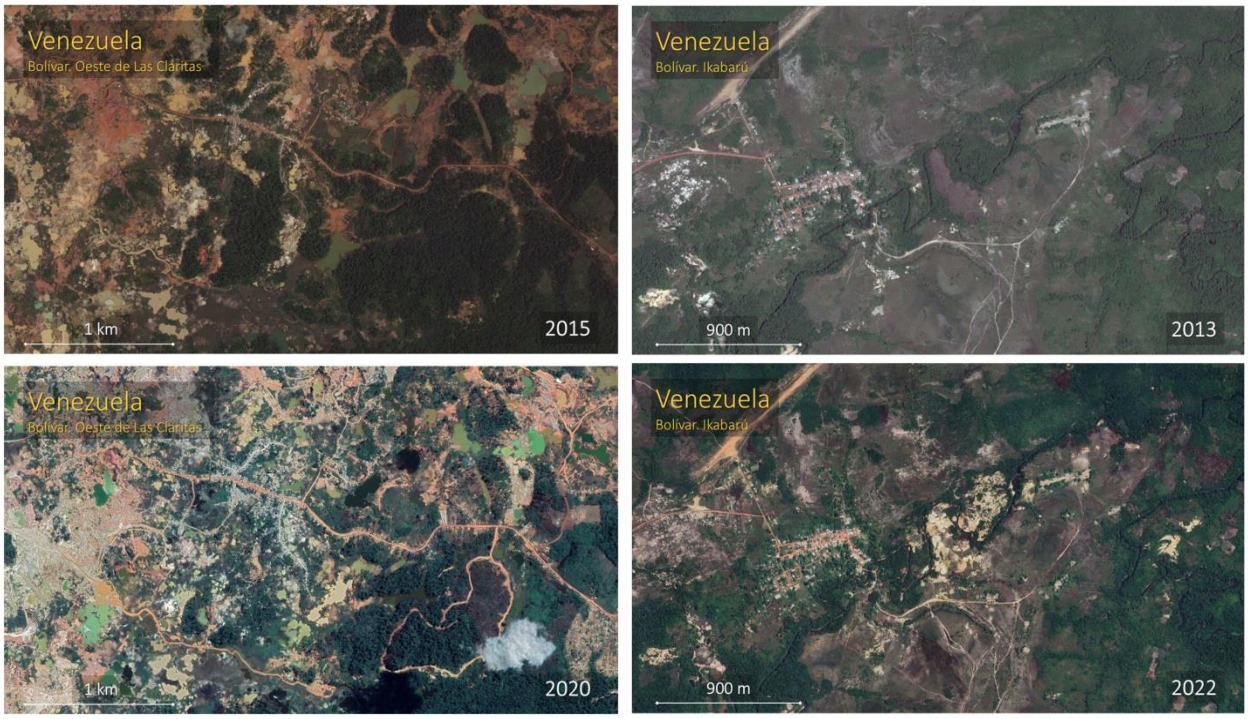
IMÁGENES 6 y 7. Imágenes satelitales de la región oriental del Lago de Maracaibo donde se denota el avance territorial de la industria camaronera en zonas de humedales. Secuencia de la imagen 6: 2016-2022, Noroeste de la biorregión. Secuencia de la imagen 7: 2014-2022. Estrecho del lago, Costa Oriental. Fuente: elaboración propia/Douglas Rodríguez-Olarte. Imágenes modificadas con SIG, a partir de Digital Globe-Google Earth 2024 (https://earth.google.com/web/)



En la Amazonía, donde se encuentran las mayores concentraciones de oro del país, el avance hacia nuevas de fronteras de la extracción y los procesos de degradación ecológica han sido de extraordinaria intensidad, ante el avance de la minería ilegal. En las Imágenes 8, 9 y 10 podemos ver el claro avance de la actividad: destaco la extraordinaria devastación ambiental desarrollada en la localidad de Las Claritas (estado Bolívar) (Imagen 8), donde puede denotarse el acelerado avance de la deforestación en los años de la crisis, así como la contaminación de aguas y suelos por el uso del mercurio, evidente en las piscinas de color azul turquesa (Caso No. 52 de mi estudio). Y

la expansión en una de las regiones menos intervenidas de Venezuela como lo es el estado Amazonas, observando el crecimiento de la destrucción ecológica de la minería en las faldas del Cerro Yapacana, que hace parte del Parque Nacional con el mismo nombre (Imagen 10) (Caso No. 73).

IMÁGENES 8, 9 y 10. No. 8 corresponde a Las Claritas (Bolívar), secuencia satelital 2015-2020, zona con un alto nivel de concentraciones de oro. Imagen 9, Ikabarú, territorio indígena al sur del estado Bolívar, donde se encuentra un bloque especial del Arco Minero del Orinoco. Secuencia 2013-2022. Imagen 10, Parque Nacional Yapacana (Amazonas). Al centro de la imagen se encuentra el Cerro Yapacana, el cual, como se puede ver en el detalle de la satelital, está degradado en sus faldas por el avance de la minería ilegal. Secuencia 2012-2020. Fuente: elaboración propia/Douglas Rodríguez-Olarte. Imágenes modificadas con SIG, a partir de Digital Globe-Google Earth 2024 (https://earth.google.com/web/)

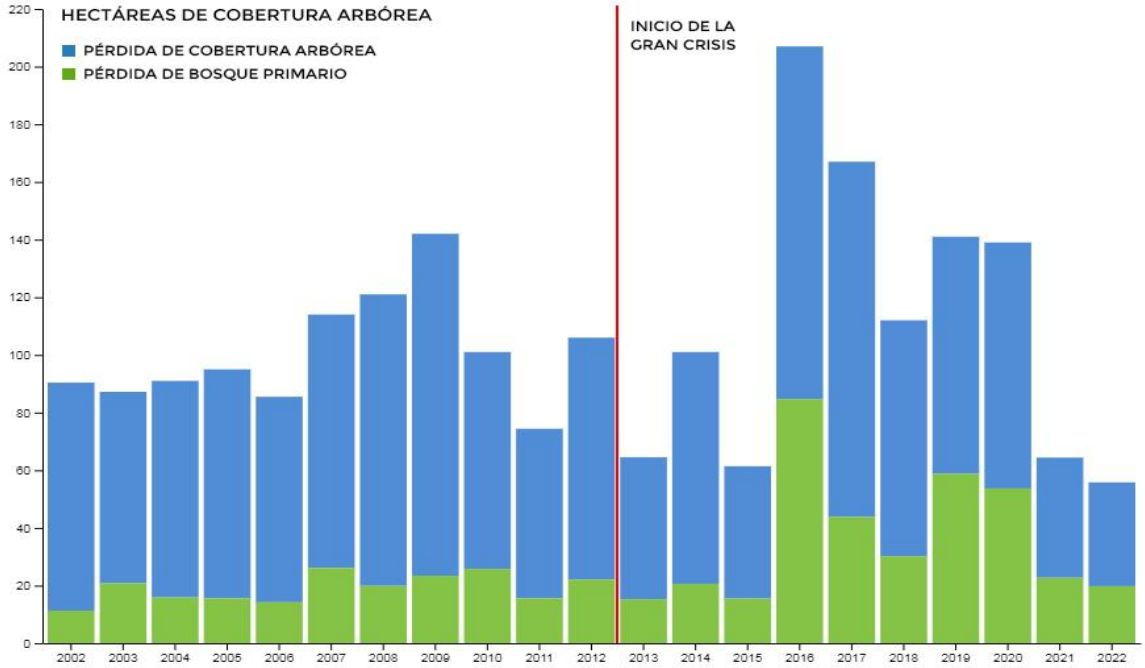




Podemos tratar de aproximarnos a estos procesos de degradación ambiental y el avance hacia nuevas fronteras a escala nacional, examinando los indicadores de deforestación del país y su evolución en La Gran Crisis. Aunque el gobierno de Maduro ha estimado que las tasas de deforestación se han reducido (FAO, 2020), otros grupos de expertos han señalado lo contrario (MAAP, 2022; Clima21 y OVDHA, 2022; SOS Orinoco, 2024; Global Forest Watch, S/F), destacando el agravamiento de la situación a partir de 2015. La FIGURA 27 muestra que la Pérdida de Cobertura Arbórea desde 2002 hasta 2022 es de 2.219.400 hectáreas, de las cuales 1.113.100 se perdieron entre 2013-2022, siendo especialmente intenso el lapso 2016-2020. Puede notarse que de esta deforestación general, la pérdida de bosque primario también se incrementó en la crisis, pasando del 19,6% entre 2002-2015 a un 35,39% entre 2016-2022. Los principales

factores que generan la deforestación han sido las actividades agropecuarias, la minería y la construcción de infraestructuras.

FIGURA 27. Niveles de deforestación en Venezuela (medido en hectáreas), período 2002-2022. Se contrasta proporcionalmente la pérdida de cobertura arbórea en general (en azul), con la pérdida de bosque primario (en verde). Fuente: Global Forest Watch (S/F)



Aunque he colocado algunos ejemplos emblemáticos, los impactos socioambientales fueron generalizados, y se expresaron con mayor o menor intensidad a lo largo de toda la geografía nacional, lo que incluye procesos de destrucción y degradación de las cuencas hidrográficas, las zonas costeras y las áreas protegidas del país. En estas se registra la disminución de los caudales que aportan a los sistemas hídricos, así como importantes niveles de contaminación de los cuerpos de agua, como ocurre en otros lagos como el de Valencia, o en ríos del norte del país como el Tuy, Cabriales, Yaracuy, Tocuyo, Manzanares o Chama; o en los amazónicos Caroní, Cuyuní, Paragua u Orinoco, entre otros. Esto también ha tenido un impacto en los graves problemas de acceso al agua que han experimentado los venezolanos durante este período (OEP, 2022; 2023).

III. Colapso del Petro-estado, entorno societal predatorio y nuevas configuraciones estatales

Luego de conocer detalles de las principales dimensiones de La Gran Crisis, es crucial examinar los nuevos escenarios políticos, ecológicos y económicos que nos ha dejado este proceso. En esta sección voy a analizar el colapso del Petro-estado y el entorno predatorio que se conformó tras esta caída, con la emergencia de una nueva configuración estatal y el crecimiento de las economías ilícitas criminales. En la

siguiente sección (IV) estudio la nueva ecología política de la crisis y la morfología de un extractivismo fragmentado.

III.I El colapso del Petro-estado

He partido de la idea de que se ha producido un colapso del Petro-estado en el período estudiado, lo cual además ha sido un factor central en el desarrollo de La Gran Crisis. Esto no se da súbitamente, sino que fue ocurriendo de manera progresiva, pasando de un proceso de caída libre entre 2016-2018, para consolidar su colapso en el período 2019-2020, lo que no implicó la desaparición del Estado en sí mismo, sino la modificación y reconfiguración histórica de su condición de Petro-estado.

La existencia del Petro-estado venezolano no está únicamente determinada por la existencia de amplias reservas de petróleo y su respectiva explotación. Como se ha explicado en el capítulo uno, se trata de un asunto de magnitudes relativas. Ni la existencia de explotación petrolera hace que un país determinado sea necesariamente Petro-estado –como es el caso de Estados Unidos o Colombia−, ni la generación de renta petrolera hace que un modelo nacional sea automáticamente rentista, ya que estos factores deben ser proporcionalmente dominantes en la economía, y constituir la dinámica de funcionamiento estatal.

Para fundamentar mi afirmación del colapso del Petro-estado venezolano, me dispongo entonces a examinar cómo se han derrumbado sus elementos constitutivos, que examiné anteriormente a partir de los trabajos de Karl (1997), Mommer (2010), Coronil (2002), Baptista (2010) y Watts (2001; 2003). Cinco son los elementos a analizar, que van desde la estructura petrolera nacional, la capacidad estatal de captura de renta petrolera, la predominancia de dicha industria e ingresos rentísticos en el país, hasta su configuración institucional.

1) <u>El socavamiento de la economía petrolera nacional como base material del Petro-estado</u>

El profundo desplome de la industria petrolera que examinamos en los datos económicos del colapso –al punto de tocar los 340.000 b/d de producción en agosto de 2020−, ha sido en realidad el reflejo de algo que iba más allá de una simple descapitalización y desinversión en PDVSA: la industria se encontraba ante una fuga masiva de personal calificado, con grandes casos de corrupción interna que desfalcaron sus cuentas, y un extraordinario deterioro de su infraestructura medular. Esto último se tradujo en parálisis y situación de abandono de instalaciones y pozos que previamente habían estado operativos, a lo que se unió el desvalijamiento de las mismas por parte de la delincuencia organizada, lo que provocó este incremento de la accidentalidad que he mencionado anteriormente.

La situación de miles de pozos desactivados ha implicado grandes complicaciones y altos costos para poner a funcionar nuevamente buena parte de ellos, sin poder garantizar que puedan ser tan productivos como antes. Además de los problemas histórico-estructurales de la industria y el propio modelo petrolero evaluados en el capítulo anterior (aumento de los costos de producción, proporción creciente de no convencionales, entre otros), se han estudiado las posibilidades y enormes desafíos para que Venezuela alcance los niveles de extracción de años anteriores. La firma IPD Latin America planteó en 2020 que para que el país alcanzara una producción de 2,6 millones b/d y perforara 13.400 pozos adicionales, requeriría como mínimo 10 años y una inversión total de 212 mil millones de dólares, monto que Venezuela no posee (en Inter-American Dialogue, 2020). La Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (oposición) calculó en 2019 un requerimiento similar, de entre 180-200 mil millones US$ en inversiones para alcanzar los 2 MM b/d (AN, 2019); y el Baker Institute, considerándolo un escenario improbable, estimó el requerimiento de inversiones en 8-9 mil millones US$ al año para generar incrementos de 220-225 mil b/d, solo con condiciones idóneas para ello (Monaldi, 2024). Las cifras ofrecidas por el gobierno de Maduro son más optimistas, con una inversión de 58.000 MM US$ para lograr un nivel de 3,4 MM b/d (Cohen, 2021), lo cual sigue siendo una cifra muy significativa, mucho más si se toma en cuenta que PDVSA para fines de 2021 mantenía una deuda de 34.900 millones US$ (Reuters, 2022). En todo caso la fuente de producción petrolera ha quedado con daños estructurales y con un escenario a futuro como mínimo muy incierto.

2) <u>Declive extraordinario de los ingresos petroleros y debilitamiento estatal en la participación directa de los beneficios</u>

Los ingresos por exportaciones para el Estado prácticamente se pulverizaron, al caer en casi 95% entre 2012-2020. Lo mismo ocurrió específicamente con los ingresos petroleros, aunque la ausencia de datos oficiales desde 2019 impide ofrecer una cifra exhaustiva. Desde 2013 a 2018, según cifras del BCV (S/Fa), el ingreso petrolero se contrajo en un 65,17%, y el propio Nicolás Maduro afirmó públicamente en 2020 que entre 2014-2019 la caída había sido de 99%, y que se había pasado de 56.000 millones US$ en ingresos petroleros en 2013 a solo 400-700 millones en 2019 (en Swiss Info, 2020). Esta última cifra podría ser exagerada, o al menos disonante con otras estimaciones. Para 2022, pese a que se registró una leve recuperación calculada entre 3,5-7 mil millones US$, esto sigue siendo una cifra pequeña para la economía del país (Castro, 2022; VOA, 2023).

Hay un segundo factor que, como lo expliqué en el capítulo 1, tiene que ver con los mecanismos históricos de participación directa e indirecta en las ganancias petroleras, a saber, regalías e Impuesto sobre la Renta (ISRL), que se han visto muy afectadas con la crisis. Estos mecanismos han posibilitado que este caudal de ingresos se haga predominante en la estructura de la economía nacional, y que en el proceso bolivariano se oficializaron y normaron a través de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001.

Aunque la información oficial no es abundante sobre esto, existe evidencia de que se ha venido desarrollando un desmontaje de esta estructura de apropiación de ingresos. Desde 2014-2015 comienza un proceso de transformación de las políticas en PDVSA, orientado a lo que se llamó un "régimen especial de inversiones", que también apuntó a marcos de negocios flexibilizados en favor de las corporaciones transnacionales (Teran-Mantovani, 2022). En agosto de 2018, mediante el Decreto 3.569, el gobierno venezolano oficializaba la exoneración del ISRL a los enriquecimientos de PDVSA y sus empresas filiales y mixtas (que abarca a las corporaciones petroleras foráneas asociadas), un contrasentido para la naturaleza histórica de un Petro-estado, al menos en la tradición de los del Sur Global.

Con la profundización de la crisis de la industria, acicateada por las sanciones internacionales, estas facilidades al capital extranjero se van a ampliar. Dos ejemplos emblemáticos de esto son ilustrativos: el primero, se sintetiza en la Licencia General 41 de la OFAC de noviembre 2022 (Departamento del Tesoro de los EEUU), que da luz verde a Chevron para operar nuevamente en Venezuela, luego de su prohibición con las sanciones. Se permitió a la corporación estadounidense asumir el control de la producción y comercialización del petróleo extraído, y se prohibió cancelarle al Estado la regalía y los impuestos que genere la actividad y comercialización, lo que viola la legislación venezolana. Se contempló también que el producto fiscal de la venta se utilice para pagar la deuda que se tiene con esta empresa (Márquez-Marín et al, 2023). El problema del endeudamiento de PDVSA ha sido un factor importante que ha presionado para el desmontaje de los marcos tradicionales del negocio petrolero en Venezuela.

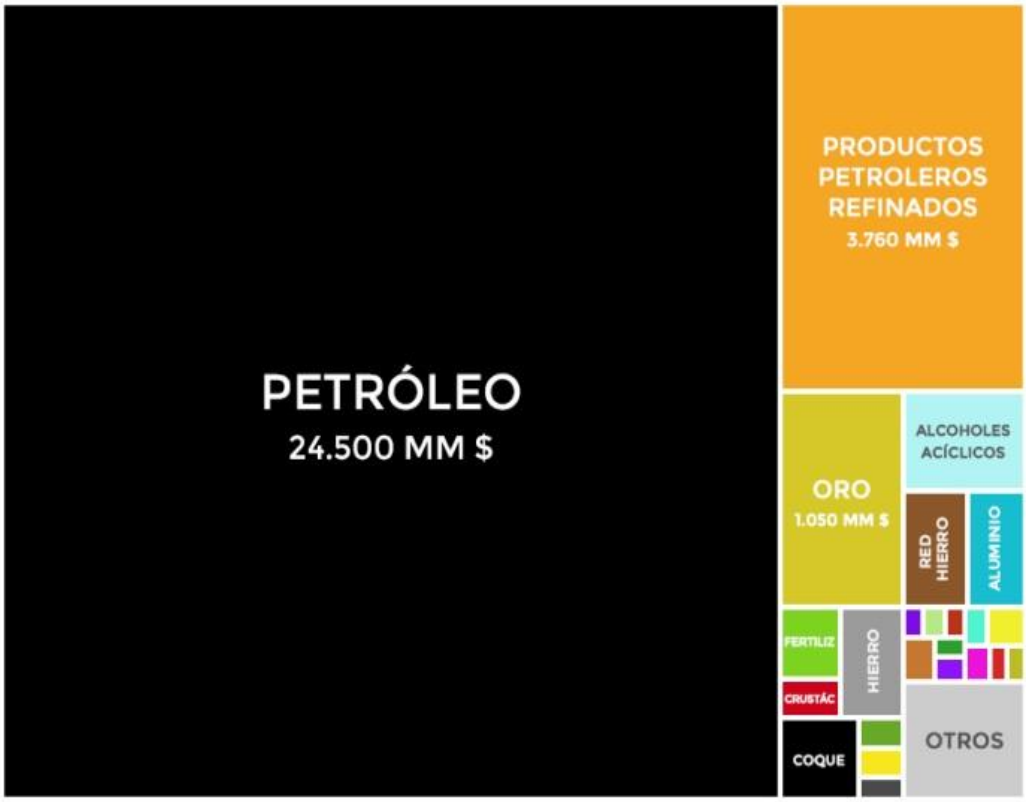
El segundo ejemplo está en los acuerdos de Venezuela con China que vinculan deuda con comercialización petrolera, siendo que aproximadamente el 90% del petróleo que Venezuela enviaba a China en 2019 correspondía a pago de deuda y tan solo el 10% restante se consideraba ingresos para el país (Jiménez-Lemón y Teran-Mantovani, 2024). Todos estos mecanismos se han establecido en secreto, amparados por la llamada "Ley Antibloqueo" de agosto de 2020 que, entre otras cosas, suprime mecanismos de escrutinio público de las medidas y acuerdos alcanzados por parte del Ejecutivo Nacional, y establece que esta sea información clasificada en nombre de la seguridad nacional.

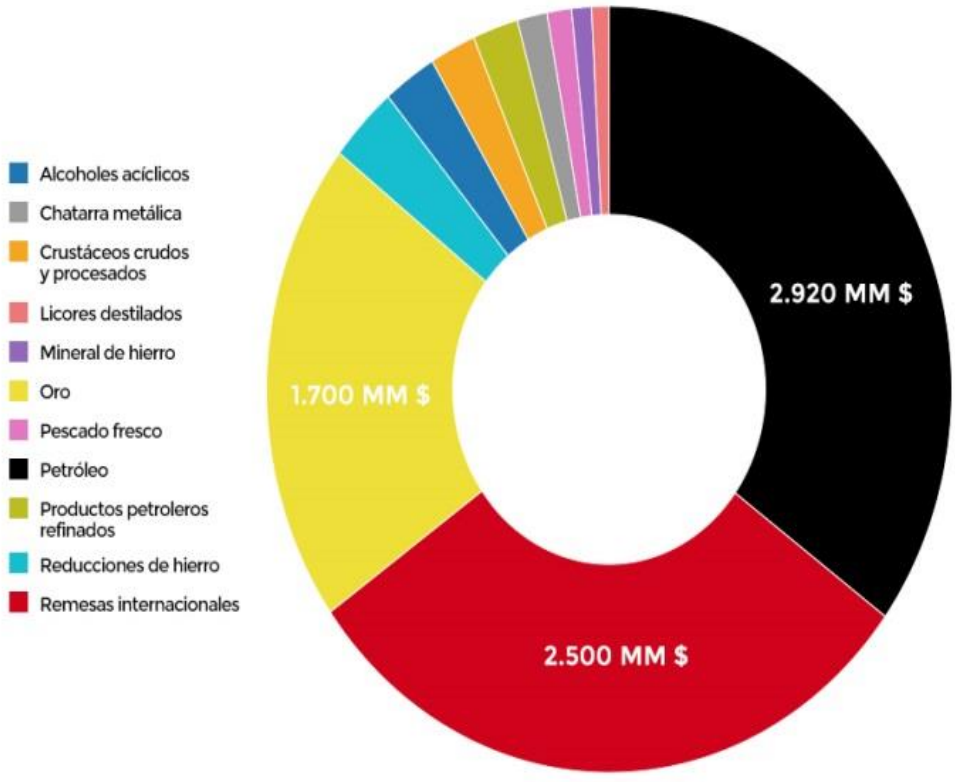
3) <u>Retroceso relativo de la importancia de los ingresos del petróleo</u>

Es necesario clarificar ahora si el petróleo sigue siendo o no la principal fuente de ingresos de la economía venezolana en este período. Como vemos en la FIGURA 28, en la distribución de las exportaciones por producto, los crudos seguía teniendo una dominación del 76% del total para 2017, y commodities como el oro y el coque de petróleo venían aumentando su importancia, pero con valores pequeños. No obstante, el hundimiento de los ingresos petroleros desde 2020 y el incremento de otros de diferente índole, van a cambiar estas proporciones. En la FIGURA 29 observamos que para este último año la suma de los ingresos por remesas internacionales y comercialización del

oro superan a los proventos de los crudos, cuestión sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela.

FIGURAS 28 y 29. Arriba, principales exportaciones de Venezuela por productos (2017). Fuente: elaboración propia con de datos de OEC (S/F). Abajo, principales ingresos financieros desde el exterior (2020). Fuente: elaboración propia con datos de OEC; Averbuch (2022); y OCDE (2021)





Es muy importante mencionar que con el veto total al petróleo venezolano producto de las sanciones desde 2019, y su comercialización en muy buena medida a través de canales subterráneos y mercados ilegales, existen variaciones en las estimaciones de los ingresos petroleros a partir de este año. Para la FIGURA 29 he tomado una cifra intermedia (OEC), entre los 400-743 millones US$ de ingresos que declaró Maduro, los 3.500 MM de Datanalisis (Seijas-Meneses, 2020), y los 7.960 MM que plantea la OPEP (OPEC, 2021). Similarmente lo he hecho con el caso del oro, ya que OCDE (2021) afirmó que los 1.700 millones US$ de ingreso anual por el recurso es un 'mínimo', y que el monto podría ser mayor; mientras que Transparencia Venezuela (2023b) llegó a estimar proventos de entre 2.250 y 2.685 millones US$ para 2022. Y esto aplica para las remesas: el rango de estimaciones va de los 1.951 millones US$ en 2018, según el BCV (S/Fa); 3.500 MM US$ en 2019 de acuerdo a la firma Ecoanalítica –aunque señaló que la pandemia de COVID produjo un decrecimiento de estas a 1.500 MM en 2020 (Villasmil, 2022)−; Bloomberg indicó que la caída de este último año mencionado llevó la cifra a 2.500 millones (Luján, 2022); CEPAL (2023) señaló un nuevo incremento a 3.500 MM en 2021, y el Remittance Industry Observatory apuntó otro aumento que alcanzó los 4.200 MM US$ en 2022 (Inter-American Dialogue, 2023). Las cifras revelan la importancia e impacto que alcanzaron estos montos en la composición de los ingresos financieros externos.

Aunque después de 2020, los proventos petroleros tuvieron un repunte, y por tanto un incremento en la proporción de los ingresos totales del país, el factor central a destacar es la reconfiguración de la morfología de la estructura de las exportaciones, las cuales pasarían a funcionar más por factores contingentes, ilícitos/irregulares y fragmentados; o si se quiere, se produjo una significativa fragmentación de las fuentes de ingreso internacional.

En todo caso, estos elementos proponen otra discusión –de tipo prospectiva− sobre si este proceso de reconfiguración representa una situación ya permanente, si se ha producido un daño muy profundo y estructural, o en cambio si tuviese algún remedio. Lo que sí se ha evidenciado en el período estudiado es un quiebre en la tradicional escasa diversificación económica, característica recurrente del Petro-estado.

4) Fin de la hiper-centralización

Los procesos descritos anteriormente destruyeron la estructura de alta centralización del poder y la economía que caracterizó la predominancia del Petro-estado, dejando abierto un escenario sui generis. Ante los muy altos niveles de dependencia que había configurado la hiper-centralización, su debacle dejó una realidad de hiper-fragilización política, social y territorial. Como resultado, ha emergido un panorama de clara fragmentación del poder y la multiplicación de intereses privados, que favorecen las disputas por poder, rentas y recursos naturales, y la aparición de nuevas gobernanzas.

Esto ha llevado al surgimiento de un nuevo tipo de estado, con diferentes expresiones de estatalidad.

5) Desestructuración institucional y fragilidad estatal

Las dinámicas reseñadas han dejado como resultado una debacle de las instituciones que se traduce en un Estado de estructuras extraordinariamente frágiles. Existen algunas mediciones sobre fragilidad estatal a nivel global, entre ellas el State Fragility Index (Índice de Fragilidad Estatal - IFE) de la organización The Fund For Peace. Estos proponen analizar 12 indicadores representados en 5 grupos, como vemos en la TABLA 5:

TABLA 5. Indicadores del Índice de Fragilidad Estatal. Fuente: The Fund for Peace (2017)

INDICADORES DEL ÍNDICE DE FRAGILIDAD ESTATAL (IFE)	
TIPO DE INDICADOR	**INDICADOR**
Cohesión	Aparato de Seguridad (situación de cuerpos armados estatales y grupos irregulares) Élites Divididas (fragmentación del Estado) Reivindicación de Grupo (división y conflictividad en la sociedad)
Económico	Declive Económico y Pobreza Desarrollo Desigual Fuga de Personas y Cerebros
Político	Legitimidad Estatal Servicios Públicos Derechos Humanos y Estado de Derecho
Social	Presiones Demográficas (por alimento, agua potable, salud u otros medios de vida) Refugiados y Desplazados
Transversal	Intervención externa

Como puede verse, en estos indicadores se corroboran numerosos de los aspectos examinados en este capítulo, vinculados al derrumbe económico, la pobreza y la migración, la presión demográfica por medios de vida y el deterioro de los servicios públicos, el peso de la intervención extranjera en la crisis, así como la pérdida de legitimidad política del gobierno y las propias instituciones estatales, la violación masiva de derechos sociales, y la conflictividad política y social interna. Si se observan los análisis globales de IFE, que evalúan estos indicadores en su conjunto y establecen un ranking (donde quienes están en los primeros lugares, con las más altas puntuaciones se consideran los Estados con mayor fragilidad e inestabilidad), podemos ver la posición de Venezuela y su evolución en los años de la crisis. El país pasó del puesto 89 en 2013 al 58 en 2017, hasta el puesto 25 en 2021, junto a países como el Congo, Uganda, Myanmar, Mozambique o Irak. Estos elementos también nos muestran serias incapacidades del sistema social y político para sobreponerse y recomponerse a estas

crisis desde sus propios medios, haciendo que, a medida que esta se ha profundizado, sea más dificultosa su recuperación.

III.II El Estado bajo un sistema de poder neopatrimonial

Con estos cinco elementos puestos sobre la mesa, puedo hacer más clara la siguiente aseveración, en línea con mi planteamiento sobre el colapso del Petro-estado venezolano: aunque aumentaran los ingresos petroleros en términos absolutos y relativos, factor que es determinante en la constitución de un Petro-estado, el asunto crucial está en cuál es el conglomerado de poder que los captura y administra. La destrucción de las instituciones y estructuras administrativas del Estado venezolano, junto a la progresiva deriva autoritaria del gobierno de Maduro, ha generado una notable simplificación estatal o, tomando elementos de Tainter (1988) en sus análisis sobre los colapsos societales, una severa pérdida de la complejidad interna del Estado. Esto se ha traducido en uno cuyas estructuras están determinadas por un *sistema de poder neopatrimonial*.

Un sistema neopatrimonial es aquel en el cual un gobierno o un grupo político −que suele estar dirigido por un líder con una alta concentración de poder− hace un uso personalista del Estado, convirtiéndolo en un recurso particular para este, y administrándolo de manera discrecional y estratégica (Oszlak, 1986; Goyatá-Campante, 2003; Monsiváis-Carrillo y Del Río-Martínez, 2013). Esto tiende a hacer muy borrosa las distinciones entre las esferas de lo público y lo privado –configurándose una especie de privatización del Estado por parte de estos grupos particulares−, y constituye regímenes oligárquicos donde los ejércitos y otros ámbitos del Estado funcionan primordialmente por lealtades al líder. En el caso venezolano, es la figura del presidente Maduro y su estructura de lealtades quienes han encarnado esta modalidad, apropiándose los ingresos petroleros y otras formas de riqueza. Esto ha configurado una nueva morfología del Estado y las estatalidades.

Será en el siguiente capítulo donde voy a analizar en profundidad los objetivos del gobierno de Maduro respecto al régimen extractivista, sus redes de actores, sus políticas de Estado, los rasgos de estatalidad y los mecanismos de gobernanza desarrollados en el colapso. No obstante, ofrezco a continuación un primer esbozo y perfil general de la administración y la orientación del gobierno de Maduro en La Gran Crisis, de manera de comprender con un poco más de detalle cómo evolucionó esta estructura neopatrimonial.

III.II.I Rasgos generales y evolución de la administración y orientación del gobierno de Maduro en La Gran Crisis

Se describen 4 rasgos generales de la gestión y orientación del gobierno de Maduro en el colapso, y la forma cómo evolucionaron. Me enfoco fundamentalmente en dimensiones económicas y políticas.

1) Disfuncionalidad en las labores fundamentales de gobierno: el manejo de la economía, los proyectos y las instituciones estuvo atravesada por una terrible ineficiencia, que no solo no daba respuesta a la crisis sino que tampoco garantizaba el funcionamiento básico de las operaciones de los mismos. El grueso de las empresas estatales, como la industria siderúrgica, la cementera y el sector agroindustrial, quedaron paralizadas, mientras que las empresas de electricidad y telecomunicaciones fueron llevadas a la ruina (Transparencia Venezuela, 2017; Vera, 2018). Transparencia Venezuela (S/Fb) ubica en 72 las obras públicas inconclusas por parte del gobierno nacional entre 2013 y 2018. Estos factores contribuyeron sobremanera a la debacle y la degradación estatal y mostraban los rasgos de un funcionamiento general muy precario.

2) Corrupción como mecanismo privilegiado de distribución de excedentes: los fuertes nichos de corrupción que preexistían a la crisis habían contribuido a la emergencia de la misma, lo que a su vez, con el colapso de la economía formal, favorecieron un nuevo y extraordinario auge de este fenómeno. Nuevos entramados corruptos se consolidaron (Transparencia Venezuela, 2019; S/Fc), lo que además implicaba un fortalecimiento de los grupos de poder del Estado y aquellos ligados a este. El Fiscal General de la República señaló que entre 2017 y 2023 se investigaron 30 tramas de corrupción, principalmente vinculadas a la industria petrolera (Ciudad CCS, 2023), que involucraron decenas de miles de millones de dólares desfalcados, a pesar de tener un país en la quiebra. Destacan casos en los que incluso fueron detenidos el exministro de Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, y el expresidente de PDVSA, Nelson Martínez; o la trama internacional de venta de alimentos para el programa gubernamental CLAP, de oro a Turquía y la adjudicación para construir 25 mil viviendas, de la mano de Alex Saab y Álvaro Enrique Pulido. En este marco de evolución neopatrimonial, la corrupción se convirtió en uno de los mecanismos privilegiados de apropiación y distribución de excedentes en Venezuela.

3) Gobernar con cada vez menos legitimidad y mantener el poder por encima de todo: se produjo un declive sostenido de la popularidad del gobierno de Maduro y un rechazo cada vez más intenso en la crisis. Esto no sólo se revela en encuestas de popularidad sino en los propios resultados electorales que muestran cómo la coalición chavista obtuvo 7.587.579 de votos en 2013 (presidenciales) y fue registrando un paulatino descenso hasta 2021 (parlamentarias) con 3.595.490. El proceso muestra que las bases de legitimación social y política del

gobierno quedaron muy afectadas. En este marco, Maduro colocó como prioridad número uno el conservar el poder y control del Estado a toda costa. Los objetivos de recuperación económica y de las instituciones quedaban no solo relegados ante aquella, sino que algunos serían sacrificados. Como resultado no solo tenemos una política de contingencia permanente y cortoplacista, sino también un proceso de decadencia del régimen político que fue recurriendo cada vez más al uso de la fuerza para gobernar, evolucionando hacia el autoritarismo.

4) Del férreo control estatal a la neoliberalización de la economía: en la Fase I y parte de la Fase II de la crisis, y ante la debacle económica que se expresaba en inflación, especulación, contrabando y fuga de capitales, la política gubernamental se orientó a intensificar los controles centralizados sobre la economía: control de cambio, de precios, de la tasa crediticia, fuerte fiscalización al comercio, etc. El resultado fue bastante negativo, en la medida en la que se empeoró la situación de escasez de bienes y servicios, la contracción económica y el fortalecimiento de los mercados paralelos de divisas y productos (Rosales, 2018; Vera, 2018; Gutiérrez, 2019). Por otro lado, el gobierno de Maduro recurrió a la emisión de dinero inorgánico para tratar de sostener los niveles de consumo y los apoyos políticos, sobre todo en períodos electorales. En 2017, el año anterior al record de hiperinflación de 2018, el BCV incrementaba la base monetaria en un 1.737%; y en el propio 2018 el aumento fue de 42.365%, cifra record en la historia del país (Sutherland, 2019). Hay una estrecha relación entre estos procesos de expansión de dinero inorgánico y expansión de la inflación que debe ser remarcada (Puente y Rodríguez, 2020; Rojas-Díaz, 2020).

Las consecuencias generadas llevaron al gobierno a ir desplazando su política de controles, y en cambio ampliar mecanismos de liberalización económica desde 2018/2019. Ya en la Fase I se habían oficializado políticas de desregulación como las 'Zonas Económicas Especiales' en 2014. En la Fase II se creó la Ley de Protección a la Inversión Extranjera (2017) y en 2018 el gobierno lanzaba el "Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica" que también promovía el favorecimiento al capital. Se fue estableciendo un relajamiento de los controles, y reduciendo drásticamente el gasto público y la emisión de dinero, con el fin de disminuir la inflación, lo que en cambio tuvo un costo social alto, como se expresa por ejemplo en la severa depresión de los salarios. Como ya lo expliqué anteriormente, el resultado de la neoliberalización económica generó el leve mejoramiento de algunos indicadores macroeconómicos en la Fase III (específicamente desde 2021) y la salida de la situación de hiperinflación; mientras se producía una notoria expansión de las desigualdades sociales.

Lo que resalta en este marco de desestructuración estatal y poder neopatrimonial es que presenciamos un neoliberalismo más bien heterodoxo y poco convencional, donde lo

normativo es apenas una parte de las políticas de facilitación para la apropiación de la riqueza de un selecto grupo del Estado e inversores nacionales e internacionales de variado tipo (Teran-Mantovani, 2022), bajo lógicas de 'acumulación por desposesión' (Harvey, 2004).

III.III Un nuevo entorno societal predatorio

Los factores que han sido examinados en este capítulo, fueron también transformando las relaciones sociales y políticas, hacia arriba, en las esferas del Estado y los grupos de poder, y hacia abajo, en los tejidos sociales y las economías locales y subterráneas, configurando un entorno societal predatorio. Con esto último me refiero a la prevalencia de lógicas de aniquilación del otro, de escaso miramiento a la devastación del medio, y de rapiña y voracidad. De este marco, expongo a continuación elementos del conflicto político y una discusión sobre la guerra en Venezuela; y posteriormente doy detalles de la expansión de las economías criminales en el país.

III.III.I Conflicto político venezolano y estado de guerra

Desde la propia victoria electoral de Maduro en 2013 se agudizaron tensiones entre el gobierno y la oposición, y el desconocimiento de su legitimidad por algunos sectores de esta última. El escalamiento de la violencia fue continuo hasta 2020. Las protestas populares de 2014 tuvieron gran impacto en el país, con enfrentamientos violentos, casi 500 heridos y 43 fallecidos; aunque fueron las del 2017 las de mayor masividad, intensidad y trascendencia, extendiéndose por más de 4 meses, con un saldo de entre 124 (Ministerio Público, 2017) a 163 muertos (OVCS, 2017) y más de 2.000 heridos. Estas movilizaciones paralizaron el país e hicieron que el conflicto político venezolano tuviera mucha mayor resonancia mediática internacional, aunque para la oposición política y social, en su objetivo de derrocar a Maduro, representó una dura derrota.

En este proceso, lo que fue evolucionando y predominando ha sido el no reconocimiento mutuo por parte de los grupos políticos enfrentados, y lógicas de guerra que fueron penetrando la política. En las grandes protestas de calle se desplegaron estrategias de guerra urbana. Sectores de la oposición procuraban permanente levantamientos insurreccionales sociales y militares, que llegaron a incluir ataques a instalaciones gubernamentales con armas, como el lanzamiento de granadas al Tribunal Supremo de Justicia en 2017 por parte del inspector de la policía científica, Oscar Pérez (Crisis Group, 2018). Ante las protestas, el gobierno de Maduro recurrió a una brutal y creciente represión social y política, y a la persecución de sus opositores. Además, el régimen chavista iba aplicando cada vez más inhabilitaciones políticas a este sector que les impedían ejercer cargos públicos, y fue cercenando la vía electoral transparente y competitiva, como ocurrió con el progresivo desconocimiento de la Asamblea Nacional que ganó la oposición en 2015, donde había obtenido dos terceras partes de los escaños.

Esto hizo del Poder Legislativo uno de los principales focos de disputa, tendiendo la asamblea opositora que funcionar de manera paralela.

IMAGEN 11. Manifestantes protestan contra el gobierno de Maduro, crean una barricada con escudos elaborados por ellos mismos, y se enfrentan a la Guardia Nacional Bolivariana. Caracas, mayo 2017. Fuente: Miguel Gutierrez/Epa/Lusa https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39801435



Se debe añadir que en el conflicto se dio una multiplicación del uso de grupos armados paraestatales por parte del gobierno (Insight Crime, 2018a; UN, 2021), así como algunos actores armados en protestas de la oposición (Ávila, 2020). En 2018 se produjo un atentado con drones en Caracas contra Maduro; y en 2020 se dio un intento de intervención directa en territorio, como la incursión marítima de Macuto (estado La Guaira) llevada a cabo por un grupo de militares disidentes venezolanos en el exilio e integrantes de una fuerza de seguridad privada con sede en Estados Unidos. Esto ocurría a la par que el régimen venezolano desarrollaba una militarización de todos los ámbitos de la vida.

En 2019, la oposición encabezada por Juan Guaidó, intentó crear un gobierno y Estado paralelo, con amplias movilizaciones sociales y notorias presiones internacionales a Maduro, lo que representó otro hito en el conflicto. Estas últimas fueron encabezadas por el gobierno de Donald Trump, la Unión Europea y varios gobiernos de América Latina, con lo que Guaidó lograba el reconocimiento como ‘Presidente Interino’ por parte de más de 50 países del mundo. El fracaso de esta estrategia favoreció la consolidación del gobierno y dejó más debilitada a la oposición, por lo que desde 2020 decreció la intensidad de la confrontación, aunque de ninguna manera acabó el conflicto.

Como resultado, esta destructiva dinámica fue progresivamente asfixiando la democracia establecida en el país décadas atrás, socavando los canales institucionales, los principios establecidos en la Constitución nacional y los marcos de convivencia, haciendo prevalecer una absoluta impunidad y la resolución de los problemas,

disyuntivas y conflictos primordialmente por la vía de la fuerza. Esto, como expliqué anteriormente, se combinó en una espiral de crisis con la debacle económica, configurando un escenario de descomposición, lo que contribuyó a una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina.

El caso venezolano amerita una discusión más amplia sobre los vínculos y distinciones entre las nociones de conflicto y guerra. Por un lado, cuando he examinado el peso de las sanciones en la crisis, señalé que Maduro ha usado la narrativa de la 'guerra contra Venezuela y la Revolución Bolivariana' para explicar todos los sucesos y procesos ocurridos en el país durante su gobierno, alegando que las diferentes debacles se dieron por ataques imperiales y de sus enemigos políticos. Junto al presidente, otros voceros del Ejecutivo nacional, del alto mando militar, del Partido Socialista Unidos de Venezuela, entre otros, afirmaron permanentemente que el colapso se generaba por una 'guerra económica' (DW, 2013), los apagones por una 'guerra eléctrica' (BBC, 2019) o la mala reputación de su gobierno era debido a una "guerra comunicacional" (RT, 2017), por mencionar ejemplos. Esto presentaba una narrativa unilateral que trataba de quitarles toda responsabilidad de la crisis. Hacia la Fase III, con la disminución de la intensidad del conflicto político, Maduro lograría asentar y afianzar estructuras de poder y regímenes de mando hasta alcanzar un control prácticamente completo del país.

Por contraste, en el polarizado contexto venezolano, otras narrativas contrarias al gobierno desconocieron el componente de confrontación política de la oposición, y su carácter a veces insurgente y violento, para proponer en cambio otra perspectiva unilateral que señalaba que el problema era únicamente resultado de la mala administración gubernamental. Desde mi perspectiva, no se trata de adherir a una u otra narrativa unilateral, sino en cambio comprender que La Gran Crisis se compone de los roles y aportes que los diferentes grupos de actores políticos tuvieron en ella, aunque se reconozca que los gobiernos bolivarianos ha tenido las mayores responsabilidades en el desarrollo y evolución de la misma.

El conflicto político venezolano no puede ser catalogado como una guerra en el sentido convencional: no se despliegan dos ejércitos para el desarrollo de combates en campo. No obstante, existen otras perspectivas sobre nuevas formas de guerra que se han desarrollado después de la Guerra Fría y con el despliegue de la globalización, que convienen ser tomadas en cuenta. Para Kaldor et al (2007) y Hardt y Negri (2004), la guerra ya no puede ser comprendida sólo en el marco de las confrontaciones armadas entre ejércitos soberanos y en las clásicas competiciones geopolíticas, sino entrelazadas en la propia reproducción de los sistemas sociales. Se genera así una extraordinaria borrosidad en las fronteras que separan guerra y política. Kaldor et al examinan en particular las nuevas guerras del petróleo en la globalización, vinculadas precisamente a la insostenibilidad de los modelos rentistas petroleros y cómo, en ese contexto de vulnerabilidad y crisis, se producen confrontaciones entre varios actores domésticos y foráneos simultánea y articuladamente, la guerra se incrusta en las diversas relaciones sociales existentes, se da un auge de comportamientos predatorios violentos, y el

declive o desintegración estatal propios de las dinámicas de los conflictos globalizados del Sur Global; todo lo cual se da para facilitar el acceso al crudo y sus rentas. En el caso de Hardt y Negri, estos observan cómo en los nuevos contextos, la guerra penetra las instituciones, la economía, la sociedad y las relaciones personales, transformándolas a partir de la provisión permanente y generalizada para ella, y conformando poder y técnicas de dominación moldeadas desde esta. De ahí que interpreten que la guerra ha pasado hoy a ser un régimen de biopoder.

Las perspectivas de estos autores nos permiten incorporar elementos para una interpretación alternativa del conflicto político venezolano. Se ha conformado un escenario predatorio determinado por la emergencia de un ordenamiento societal profundamente marcado lógicas de guerra en la política. Esta conclusión se fortalece si tomamos en cuenta algunos componentes internacionales, como el rol de actores como la guerrilla colombiana, el crimen organizado transnacionalizado, actores armados privados, o el propio y continuo despliegue de bases y fuerzas militares estadounidenses en América Latina y el Caribe, que tienen o pueden tener incidencia en la evolución del conflicto.

Siguiendo a Hardt y Negri, y Kaldor et al, el conflicto político venezolano, lo vamos a entender como un *estado de guerra*, no surgido de un marco normativo y tradicional, ni emanado de una 'declaración de guerra' formal. Se trata de una especie de *Warfare State*, aunque no en el sentido del conocido 'complejo militar-industrial' estadounidense de la posguerra, que orientaba el modelo, por un lado, en torno a la interrelación entre la producción capitalista, la guerra y el ámbito militar, y por el otro, la política interior y exterior. En nuestro caso, este se constituye como un Estado, expresado como forma de organización política, y como régimen; pero también como un estado (con e minúscula), una condición o marco societal particular. Antes que por la guerra como acontecimiento, el estado de guerra que configura al conflicto político venezolano se expresa en las políticas y actividades, en las técnicas y tecnologías, en las operaciones, procedimientos y métodos, en las estrategias y tácticas que lo conforman, y que se proyectan sobre los diferentes ámbitos de la vida.

Esta discusión es relevante en la medida en la que hace más nítidas las características del marco que determina el resto de los múltiples conflictos que surgen en Venezuela, incluyendo los de distribución ecológica que examinaré en el siguiente capítulo.

III.III.II El auge de las economías ilícitas

La destrucción de la economía formal conllevó en La Gran Crisis a un extraordinario auge de las economías ilícitas, entendidas de manera general en este trabajo como aquellas actividades lucrativas que se desarrollan fuera de los marcos normativos y legales oficiales, y de la economía registrada formalmente ante las autoridades (Umbría-Acosta, 2016; Gutiérrez-Sanín y Rodgers, 2020). Aunque el problema de la

criminalidad en Venezuela es de vieja data y ha tenido una fuerte presencia en la vida del país, en el colapso las economías ilícitas se convirtieron en canales privilegiados de apropiación y circulación de riqueza.

A efectos de mi trabajo, es crucial examinar cuatro aspectos de esta expansión: el tipo de economías ilícitas que predominaron en este periodo, los volúmenes que representaron respecto al conjunto de la economía nacional, el tipo de grupos criminales que han protagonizado este auge, y el impacto que han tenido en las formas sociales de apropiación de la riqueza.

El contrabando de combustible ha sido una de las economías ilícitas de mayor peso, la cual además se desarrollaba desde antes del colapso, dado que esta esta mercancía llegó a ser la más barata del mundo, y generaba importantes ingresos al mercadearla ilegalmente en otros países. Durante la crisis fue creciendo y llegó a generar unos 1.200 millones al año (Testigo Directo, 2014; Caracol, 2013; Los Informantes, 2018), fundamentalmente en los estados fronterizos de Zulia, Táchira y Bolívar. El gobierno nacional fue aumentando sus precios para llevarlos a cotización internacional en 2018, 2020 y 2021, lo que afectó el negocio. Pese a esto, para 2022 el informe 'Índice de Economías Ilícitas Venezuela 2023', señaló que el monto de la fuga ilícita de combustible, generó 760 millones US$ (Transparencia Venezuela, 2023b).

Destaca también el negocio ilícito de oro, que analizaré en profundidad en este trabajo y que Transparencia cataloga como la de más peso de todas las economías de este tipo en el país, por su expansión en la sociedad y sus amplios entramados de operación –abarcando desde la extracción, hasta el procesamiento, transporte, entre otros–, aunque no es la que mayor nivel de ganancias genera.

Es el narcotráfico, que tiene a Venezuela fundamentalmente como lugar de tránsito, la actividad que ha generado mayores volúmenes monetarios en el país, alcanzando los 5.115 millones US$ en 2022 (ídem). También debe resaltarse la corrupción en los principales puertos (La Guaira, Maracaibo y Puerto Cabello), basada en muy buena medida en la extorsión para permitir la circulación de mercancías, produciendo 1.394 millones US$ en ganancias; la trata de personas, muy vinculada a la migración; el tráfico de armas y el contrabando de mercancías; la expansión marcada entre 2017 y 2022 del lavado de dinero, haciendo del país uno de los principales lugares para esta actividad (GAO, 2023); y la implicación de funcionarios estatales en cuentas en paraísos fiscales y otros ilícitos financieros (Crisis Group, 2020a; GI-TOC, 2023).

En relación al volumen total de las economías ilícitas, TV junto a la firma Ecoanalítica han calculado que el para 2021 fue de 9.444 millones US$, y en 2022 de 9.402 millones (Transparencia Venezuela, 2023c). Esto representaría el 21,74% del PIB venezolano de 2021; casi tres veces más el valor de las exportaciones del país estimadas por CEPAL; e incluso supera en 7,12% a los 8.816 millones US$ que OPEP (2022) calculó como ingresos petroleros de Venezuela, una de las estimaciones más altas para ese año.

Respecto a los grupos que predominan se destacan bandas criminales nacionales, algunas de ellas de gran tamaño, que logran controlar amplios territorios, con esquemas organizativos más complejos y que cuentan con decenas de integrantes, llegando a poseer armamento de guerra (Mayorca, 2017). Estas han sido denominadas 'megabandas', incluso en el lenguaje policial. Ejemplos conocidos de estas han sido el Tren de Aragua, la banda de El Koki o el Cartel de Paraguaná. Por otro lado, se han desplazado e instalado en el territorio nacional grupos diversos de la guerrilla colombiana –como el ELN o las disidencias de las FARC−, y en zonas de la frontera con Brasil se registra la incidencia del crimen organizado (o facçoes) de ese país. A su vez, se ha reconocido también el rol de operadores o facilitadores que hacen labores de intermediación respecto a las operaciones delictivas, entre los que se contarían abogados, banqueros (Transparencia Venezuela, 2023b; GI-TOC, 2023) y funcionarios estatales.

Por último, el auge criminal ha impactado también en las formas y dinámicas sociales de apropiación de la riqueza, estimulando poderosamente a que la propia sociedad participe en extracciones particulares fuera de los canales regulares, y se incorpore a las economías ilícitas, buscando sustento para vivir. Esto ha ocurrido también en sectores comerciales, los cuales ante las sanciones internacionales han tenido que recurrir a canales secundarios y ventas no oficiales para continuar con sus actividades económicas (Bull y Rosales, 2020).

IV. Los nuevos escenarios de la distribución ecológica y la fragmentación del extractivismo

En La Gran Crisis no sólo se ha configurado una nueva economía política en el país, sino también una particular ecología política, que adquiere una relevancia en el sistema social nacional que ya no es subordinada, sino profundamente central. La desintegración de la renta petrolera y el salario, así como la destrucción relativa del valor del bolívar (dada la hiperinflación) y el colapso de los servicios públicos, hicieron que la apropiación directa de naturaleza haya alcanzado una posición principal en las relaciones socioeconómicas.

En la FIGURA 30 se ilustra cómo los factores desencadenantes y dinamizadores del colapso se relacionan con nuevos procesos que inciden en la distribución ecológica. Ante la pérdida de la capacidad infraestructural del Estado, por un lado, se generó una multiplicación de operaciones de extracción de naturaleza desde arriba y abajo; y por otro lado, se estimularon notoriamente las necesidades de control territorial por parte de diferentes actores, incrementando las disputas. El derrumbe de la gobernanza rentista centralizada promovió una expansión de la violencia en los procesos de distribución ecológica y una diversificación de gobernanzas, que buscaron en buena medida sustentarse en los llamados recursos naturales. Dichas gobernanzas estuvieron además impactadas por los intereses de actores internacionales y la fuerza de los flujos

comerciales globalizados, sean lícitos e/o ilícitos. Todos estos factores incrementaron la presión sobre los ecosistemas, como mostré en la sección de los impactos ambientales de la crisis. De esta manera, los conflictos ecológico-distributivos cobraron una importancia crucial.

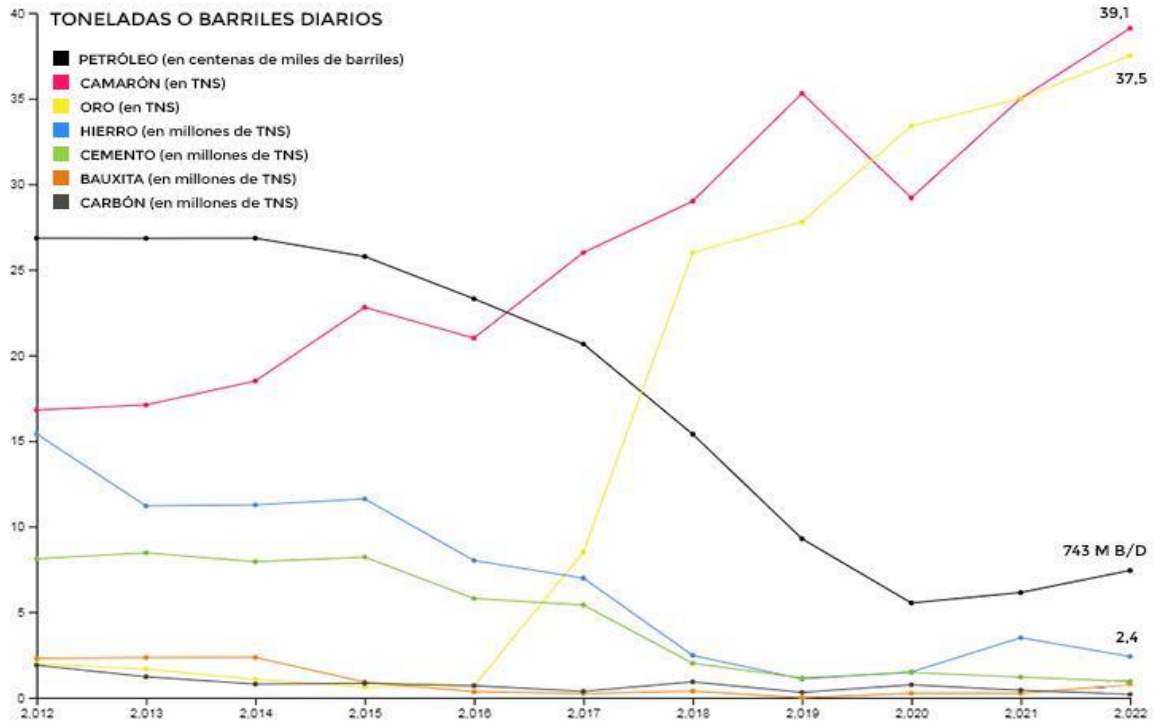
FIGURA 30. Factores desencadenantes y dinamizadores de La Gran Crisis, destacando en verde las dimensiones de la distribución ecológica. Fuente: elaboración propia



La situación de fragmentación sistémica favoreció una transformación de la morfología del extractivismo, donde cambia la jerarquía de los commodities más extraídos, así como los procesos de territorialización de este régimen. La FIGURA 31 muestra los volúmenes de extracción de buena parte de los principales commodities del país y su evolución en La Gran Crisis, y puede ilustrar este nuevo escenario. Presenciamos un notable contraste: la debacle del petróleo arrastró al grueso de los emprendimientos extractivos del país. La emblemática industria del hierro, así como la de la bauxita, que otrora estuvieron entre las más importantes de América Latina, se desplomaron. El cemento, que llegó a estar entre los 4 primeros lugares del sector en la región, en 2022 producía menos del 10% de la capacidad instalada de esta industria. O la minería de carbón, que en su momento fue la segunda de Sudamérica después de Colombia, permaneció en sus niveles más bajos. Vimos además en las secciones anteriores el hundimiento de sectores agrícolas clave como la caña, el sorgo, el arroz, el maíz, a lo que se puede agregar la palma aceitera o africana, que en varias ocasiones se había presentado como una industria prometedora para el proyecto extractivista. Muchas de estas industrias quedaron prácticamente en situación de parálisis en algunos años de la

crisis, aunque no dejaron de generar impactos ambientales y conflictos con comunidades y organizaciones sociales, como veremos en el capítulo 4.

FIGURA 31. Exportación de commodities por rubro (en Toneladas, millones de toneladas o barriles diarios). Commodities: petróleo, camarón, oro, hierro, cemento, bauxita y carbón. Período 2012-2022. Fuente: elaboración propia a partir de: Petróleo, EIA (S/F); Camarón, FAS-USDA (2022) y Hispanopost (2023); Oro, MDME (2018), World Gold Council (2022) y Transparencia Venezuela (S/Fg); Hierro, MDME (2018), USGS (2019) y World Steel Association (2024); Bauxita, MDME (2018), CIIP (2023) y USGS (S/F); Carbón, MDME (2018) y The Global Economy (S/F); y Cemento, FICEM (S/F) y Aure (2023)



Sin embargo, vemos también que en medio del declive económico emergieron y se potenciaron algunos rubros de extracción, especialmente los camarones y el oro. Sobre el primero, observamos que esta industria ha tenido un crecimiento prácticamente sostenido en el colapso, siendo que, en general los productos del mar (como cangrejo o pescado) ocuparon el primer lugar en las exportaciones agrícolas del país (con más del 54% del total), incrementando su valor económico en 2021 a 361,7 millones US$ (FAS-USDA, 2022). En este rubro, los camarones son el principal producto y tuvieron un aumento en la extracción de 132,7% entre 2012 (16,8 toneladas) y 2022 (39 toneladas). El gobierno ha alegado que esta expansión se debe a que le han sido concedidas condiciones de seguridad jurídica a los inversores; a las facilidades de extracción del producto, dado el clima adecuado durante todo el año; y a la más alta productividad que se obtiene en aguas salobres como las del lago de Maracaibo, comparado con otros países (Ministerio de Pesca y Acuicultura, 2024).

Pese a este crecimiento, no será el camarón sino el oro el que se va a colocar en lugar central en la reconfiguración del extractivismo en Venezuela. Esto ha sido así, sea por el valor estratégico que tiene el commodity en el mercado mundial; por los altos precios

internacionales del recurso, que además se han mantenido en permanente alza −incluso en tiempos de pandemia, cuando el resto de las materias primas se hundían−; por la magnitud de los depósitos minerales en suelo amazónico y algunas condiciones locales favorables para la extracción, que analizaré más adelante; o bien por los mayores ingresos que genera −contrastando los mencionados 361,7 MM US$ en ingresos de productos acuícolas con los 2.250 millones US$ estimados por comercialización de oro en 2022. Ha sido la minería ilegal de oro la que en parte ha ayudado a absorber la debacle petrolera.

Hay otros cruciales significados e implicaciones de la nueva centralidad del oro que deben ser destacados. Primero, esta expansión minera ha sido determinante en la nueva geografía del extractivismo en Venezuela, potenciando el volcamiento territorial de la extracción hacia la Amazonía –prácticamente la mitad de la superficie continental del país−, convirtiéndose en el factor de cambio social, ambiental y territorial de mayor peso en toda esta biorregión, lo que a su vez tuvo un impacto en todo el país.

Segundo, a diferencia de la extracción en la industria petrolera, que se desarrolla fundamentalmente a través de sistemas industriales, sofisticados procesos operativos y tecnologías, y que es administrada centralizadamente por corporaciones –no son comunes las extracciones de petróleo por parte de particulares informales, aunque existen−, la minería de oro puede realizarse por pequeños grupos de personas con herramientas que incluso podrían ser rudimentarias, y que pueden transportar físicamente el material sin mayores dificultades. En este sentido, la proliferación de la minería aurífera en el contexto analizado establece la predominancia de formas descentralizadas de apropiación de recursos naturales, que posibilitan la subsistencia de grupos de poder regionales y estimulan la formación de otros nuevos, los cuales se orientan en buena medida por lógicas de expolio y rapiña. Esto, en síntesis, ha configurado una clara fragmentación del extractivismo.

Tercero, y esto será tema central del capítulo siguiente, la expansión de formas ilegales de minería ha impactado el perfil general del extractivismo, ha incidido en la transformación de las gobernanzas, las estatalidades y en los procesos de remodelación del Estado, así como en las dinámicas de territorialización y los conflictos ecológico-distributivos.

IV.I Conflictos ecológico-distributivos en La Gran Crisis venezolana

Los conflictos de distribución ecológica retratan en muy buena medida las dinámicas, patrones y actores principales de estos procesos en torno a la naturaleza en el período analizado. Es el momento de hacer una primera aproximación general a los 75 casos más emblemáticos que fueron seleccionados para mi estudio, dar a conocer su perfil y tendencias más generales.

En primer lugar, en los casos se evidencia una predominancia notable de la minería, pese a que el petróleo siguió jugando un rol importante en la economía y PDVSA desarrolló una desastrosa gestión que provocó numerosos impactos en comunidades. En la FIGURA 32 presento la distribución de los conflictos de acuerdo a la actividad económica que los generó. El total de casos generados por minería fueron 30 (40% de la muestra), lo que evidencia que es la actividad más conflictiva de todas, siendo que además generó las disputas más intensas y violentas, como veremos en la FIGURA 35.

FIGURA 32. Conflictos de distribución ecológica analizados, distribuidos por la clasificación de las actividades principales que los generan. Fuente: elaboración propia



Como lo analicé en el capítulo anterior, en los territorios de predominio del Petro-estado la industria petrolera se había instaurado como un actor incontestable y se desplegaron mecanismos de asimilación para atenuar los malestares y la conflictividad, algo que se tradujo históricamente en escasas oposiciones, y generalmente débiles movilizaciones contra la industria. Aunque 10 de los conflictos analizados son originados por la extracción de petróleo y gas, las tendencias mencionadas no cambiaron significativamente en la crisis.

Las lógicas de extracción y expolio también se expresaron en torno a otras formas de naturaleza, como las especies protegidas y la biodiversidad, como en los casos de contrabando de la cotorra margariteña en Nueva Esparta o del cardenalito en el estado Lara, y la caza y comercialización ilícita de jaguares en el sur del Lago de Maracaibo. Se incluye a su vez la depredación de parques nacionales y reservas naturales.

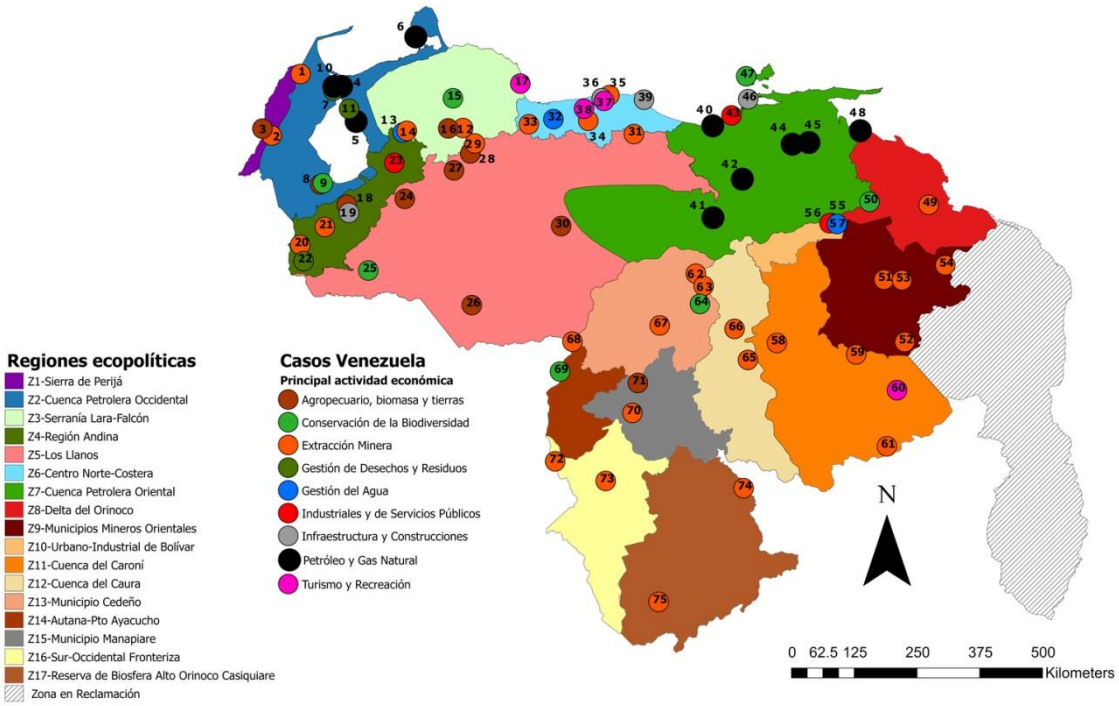
Del mismo modo, encontramos disputas por la gestión o usos de la tierra, como la ocurrida en la localidad de Los Tramojos (estado Guárico), en territorio indígena wottüja en el municipio Manapiare (estado Amazonas) o alrededor de cultivos como la malanga en la Sierra de Perijá. A su vez, varios emprendimientos formales provocaron conflictos, en el sector agroindustrial en casos como el de la palma aceitera en el sur del Lago de Maracaibo, las plantaciones de eucalipto en el estado Portuguesa o las azucareras en el estado Trujillo. En la minería se pueden mencionar las decadentes industrias del cemento (Guanta, estado Anzoátegui) y la bauxita (Los Pijiguaos, estado Bolívar). Para la actividad turística hay 4 casos también por proyectos e iniciativas formales, como el caso de Puerto Morrocoy en el estado Falcón; y respecto a la construcción de infraestructuras, he registrado 4 conflictos en lugares como el Parque Nacional Waraira Repano (Caracas), en humedales de la región de Barlovento (Tacarigua y La Reina, estado Miranda) y el proyecto del puerto de aguas profundas en la península de Araya (Sucre).

La multiplicación de extracciones también se expresó en el propio ámbito de los desechos y los vertederos (4 casos), en especial con el incremento del comercio legal e ilegal de chatarra metálica, algo comprensible ante una economía formal en el abandono. Esto no solo se refiere al reciclaje de este tipo de materiales, sino también de la extracción ilícita de los mismos, producto incluso del desmembramiento premeditado de instalaciones e infraestructuras de muy diverso tipo, como las de la industria petrolera, siderúrgica, cementera, entre otras, con el fin de generar ganancias.

Varios casos estudiados implicaron extracciones de múltiples recursos donde, además de los commodities principales en torno a los cuales giraron los conflictos, se implicaron otras actividades secundarias que reflejaron intentos de mayor enriquecimiento, o el usufructo de varios grupos de actores simultáneamente. Así fue en más de la mitad de los casos (55,7%), que involucraron en un segundo nivel la extracción de madera, la apropiación de tierras o de factores productivos agrícolas. Esto también se dio con desechos y residuos, especialmente con la chatarra, evidente en 14 casos.

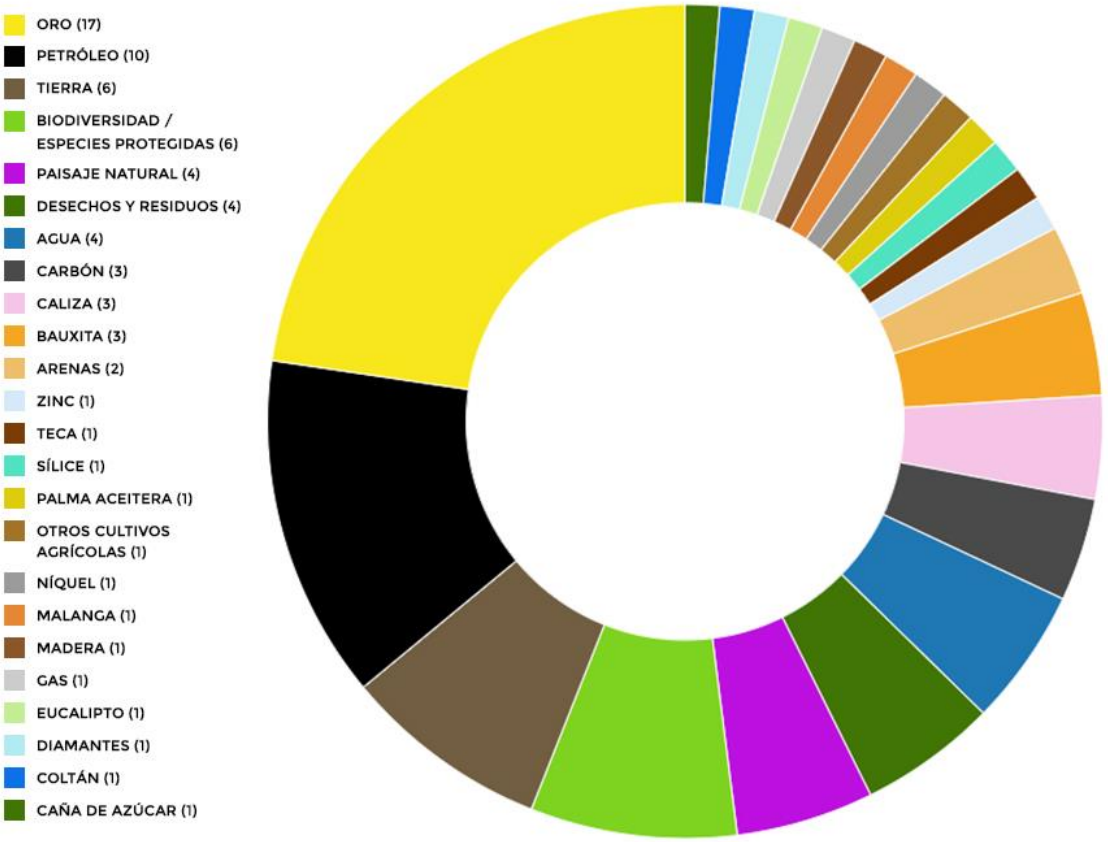
Retomo aquí la FIGURA 1 para analizar brevemente algunas tendencias de la distribución geográfica de los conflictos y destacar algunos patrones básicos de Territorialización/Territorialidad en La Gran Crisis. Se puede observar que la diseminación de casos mineros se expresa en casi todas las Regiones Ecopolíticas del país, aunque es la Amazonía la biorregión que más está determinada por esta actividad. Por otro lado, los casos de actividad agropecuaria, tierras y biomasa se despliegan fundamentalmente en el occidente de Venezuela, principalmente en la biorregión de Los Llanos (Z5). Tres de los cuatro casos de gestión de desechos se producen en áreas urbanas; los casos de gestión del agua en embalses o lagos ubicados en las periferias de las ciudades; mientras que los de conservación de la biodiversidad se distribuyen en varias regiones del país, fundamentalmente territorios de bajo impacto de los procesos de modernización o áreas bajo regímenes de administración especial.

FIGURA 1. Mapa de regiones ecopolíticas de Venezuela, con conflictos georreferenciados. Fuente: elaboración propia



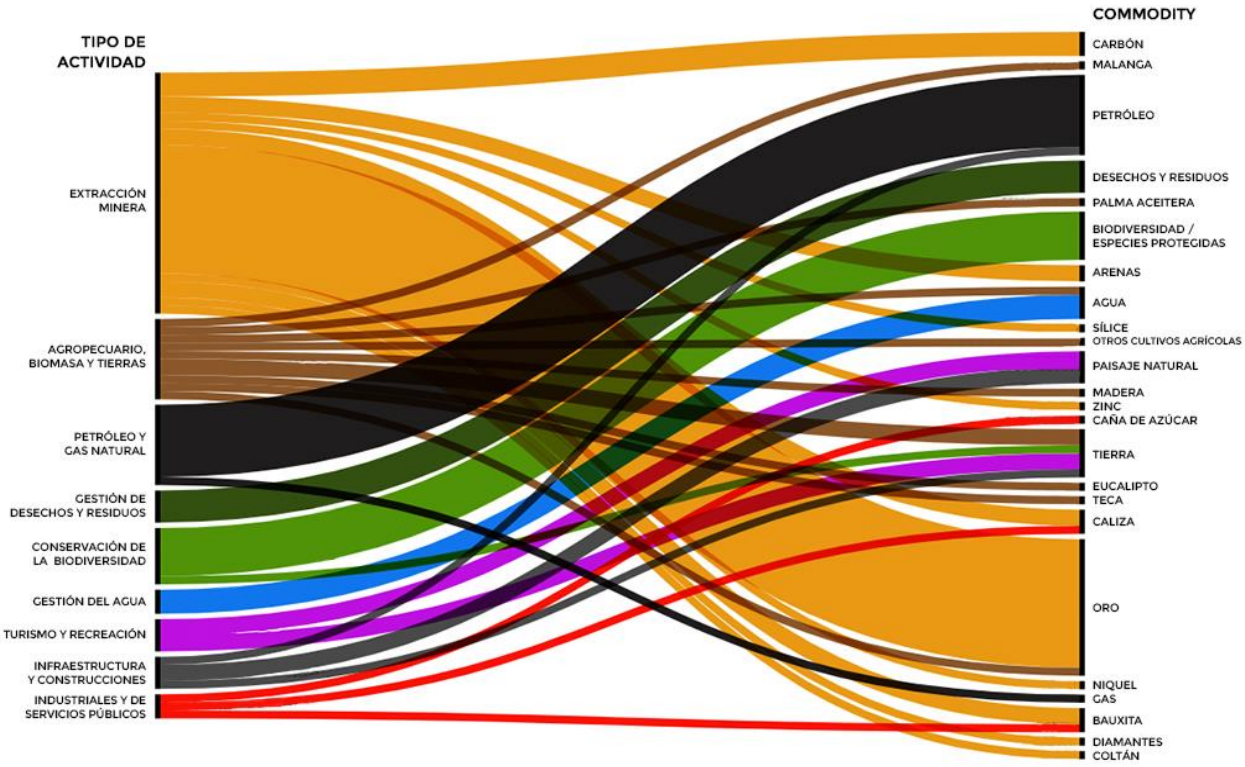
La lista de commodities en torno a los cuales giran los conflictos es amplia y la podemos ver con mayor detalle en la FIGURA 33. El oro es, de largo, el recurso más conflictivo con un total de 17 veces, casi un cuarto de la muestra (22,66%); seguidamente está el petróleo (10), la tierra (6), la biodiversidad (6), el agua (4), y el paisaje natural (4), este último convertido también en commodity por los proyectos e inversiones turísticas.

FIGURA 33. Distribución de los commodities principales involucrados en los 75 conflictos de distribución ecológica analizados. Fuente: elaboración propia.



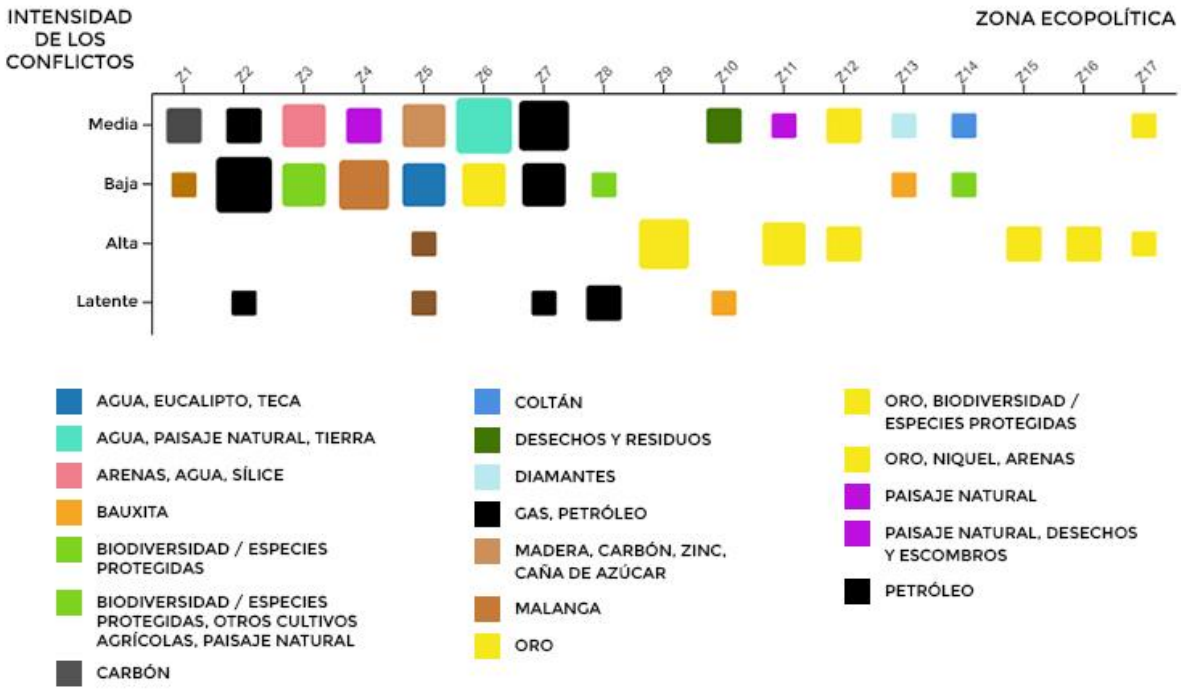
En la FIGURA 34 es posible observar la relación entre todo el concierto de commodities con las 9 actividades económicas principales que generan los conflictos. Podemos notar la amplia variedad de recursos apropiados por la minería y la explotación de la tierra. Vemos que la tierra se disputa en conflictos no sólo agrícolas sino también vinculados al turismo, la construcción de infraestructuras y la conservación de la biodiversidad. Hay otros commodities que, aunque no estuvieron en la primera línea de interés, fueron también objeto de pugnas, como ocurrió con los diamantes, que estuvieron detrás de mucha de la actividad minera ilegal de oro (en 7 casos). También, el gas secundó al petróleo 6 veces, el ganado y los peces a los productos agrícolas y la tierra en 6 oportunidades; y la madera aparece en 16 conflictos como recurso de interés alterno.

FIGURA 34. Relación entre las 9 actividades económicas principales que generan los conflictos de distribución ecológica y los principales commodities involucrados en los mismos. Fuente: elaboración propia.



Por último, quiero referirme a los niveles de intensidad de los conflictos dependiendo de la actividad económica y el tipo de commodity de cada caso, que podemos examinar en la FIGURA 35. El gráfico examina estas tendencias por cada Zona Ecopolítica, mientras que los commodities se presentan agrupados en clusters zonales para facilitar el análisis. Se evidencia que el 93% de los conflictos de alta intensidad, que pueden implicar altos niveles de violencia, y que representan un 20% del total de casos examinados, se genera en la Amazonía y tienen que ver básicamente con el oro. Los casos de media intensidad son los que más se repiten (29 veces, el 38,6% del total) y, aunque se distribuyen en casi todas las zonas, se concentran con más fuerza en el norte del Orinoco. Cuestión muy semejante ocurre en los casos de baja intensidad. Vemos que los conflictos de agricultura y biomasa se mueven en todos los rangos de intensidad, mientras que los de petróleo y gas no pasan de intensidad media.

FIGURA 35. Relación entre la intensidad de los conflictos, el commodity y la Zona Ecopolítica donde se desarrollan los mismos. Se agrupan los recursos en clusters zonales para facilitar el análisis. Fuente: elaboración propia.



Estos elementos presentados ofrecen unos primeros insumos para aproximarnos a las disputas en torno a la naturaleza en este periodo, y poder profundizar en las nuevas gobernanzas y luchas sociales que emergieron, que se examinan a continuación en los siguientes dos capítulos.

V. Algunas conclusiones

He presentado un análisis en profundidad de La Gran Crisis venezolana con perspectiva de ecología política, donde se puede constatar un importante cambio en la morfología del extractivismo y los escenarios de la distribución ecológica. La extraordinaria fragmentación sistémica se expresó en la multiplicación de extracciones de naturaleza, que se van a expresar desde arriba, en actores de poder económico y político, y desde abajo en sectores de la población y economías populares y subterráneas. En estas dinámicas, el oro y la Amazonía van a adquirir centralidad, a diferencia de la histórica prevalencia del petróleo y la región norte del río Orinoco. Todos estos procesos hicieron de lo ambiental, en primera instancia, un ámbito de intereses particulares y disputas territoriales, antes que un asunto de carácter público, lo que no significa que el Estado no haya tenido una política sobre la naturaleza.

La crisis venezolana se ha desarrollado como un colapso societal, evidenciando escenarios de drástica depresión social, institucional, económica y ambiental. He examinado, por tanto, este período como un declive de carácter multidimensional, que

además ha tenido la incidencia de los diferentes actores del conflicto político nacional que se ha dado entre gobierno y oposición, así como del ámbito internacional, como los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia, Cuba, China, Rusia, entre otros. El reconocimiento de la participación de estos actores de ninguna manera evade una jerarquización de sus variados niveles de incidencia en la crisis. De acuerdo a la evidencia que he presentado, han sido los gobiernos de Chávez y de Maduro los que mayor responsabilidad tuvieron en el desarrollo de la debacle venezolana, tanto en sus causas como en su evolución particular.

He propuesto que el Petro-estado ha colapsado en el período estudiado, ofreciendo datos sobre cómo las bases que lo constituyen fueron socavadas, a saber: la destrucción de la economía petrolera, la debacle de los ingresos y el retroceso de la participación directa en las ganancias, el fin de la hipercentralización y la desestructuración institucional. Sin embargo, aunque la debacle fue muy profunda, acelerada y se desarrolló en poco tiempo, vimos que para los 2 últimos años de mi estudio (2021-2022) hubo una leve y relativa recuperación de algunos sectores de la economía. Esto debe ser examinado tanto en relación a los años anteriores del colapso, como en el marco de una crisis histórico-estructural del modelo petrolero. El crecimiento del PIB en estos dos años mencionados representa en realidad valores absolutos minúsculos respecto al tamaño que tenía la economía antes de la crisis, dado que lo que creció fue apenas una pequeña fracción porcentual de la devastada economía de 2020 y 2021. De manera que este realce puede ser interpretado como un leve ‘efecto rebote’ y, comparándolo con todo el contexto de colapso, como un freno al proceso de derrumbe, como un cese de la tempestad, antes que como la expresión de una economía en expansión.

A su vez, este crecimiento registrado ha sido muy inorgánico, sin raíces en la economía productiva, y en cambio impulsado en buena medida por las circunstancias de un aumento de la producción petrolera luego de tocar fondo en agosto de 2020, sin que de ninguna manera se hayan abordado, ni mucho menos resuelto, los problemas de fondo que enfrenta el modelo.

Queda abierta la necesidad de un análisis prolongado que vaya más allá de 2022, de manera de examinar y comparar el comportamiento del colapso en años más avanzados. Lo que se constata en 2023 y 2024 es una continuidad de los factores de crisis y las expresiones de recuperación macroeconómica relativa de 2021-2022. El incremento del PIB bajó respecto a 2022, con 4% en 2023 y 5,3% en 2024 –usando a los mismos datos del análisis de este capítulo−, pero siguen siendo números en positivo. Este crecimiento siguió teniendo escaso impacto general, mientras continuaron los severos problemas de acceso a los medios de vida para la población, enormes desigualdades socioeconómicas y un salario mínimo que el 1 de mayo de 2024 había sido incrementado a 130 bolívares mensuales por el gobierno de Maduro, pero que equivalía apenas a 1,5-3,5 US$ −dependiendo de la tasa de cambio. La inflación de 2023 tuvo una cifra ligeramente mayor a la de 2022 (190%) y representó la cuarta más elevada del mundo, continuando

el impacto a la muy debilitada capacidad de compra de los venezolanos. No obstante, en 2024 bajó a 47%, la sexta más alta del mundo.

Las tendencias de leve y relativa recuperación económica estuvieron, nuevamente, haladas por el incremento de la producción petrolera, que en 2023 llegó a 810 mil b/d (aumento del 9% respecto a 2022) y en 2024 a 903 mil b/d (11,48% más). Este aumento ha sido vulnerable dados los vaivenes de las negociaciones internacionales y el controvertido regreso de las operaciones de Chevron en Venezuela, algo que fue suspendido en el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, y luego reanudado. Ante todas estas tendencias económicas mencionadas, no se registraron políticas que enfrenten los problemas estructurales que se han analizado en este trabajo.

En cuanto al conflicto político, el mismo ha estado lejos de resolverse, dado que para 2023 y 2024 el gobierno de Maduro continuó con su principio de no dejar el poder por ningún motivo, por lo que las negociaciones internacionales que han sido propuestas y desarrolladas no llevaron a solución alguna. El mayor control del país alcanzado por el régimen chavista y el debilitamiento de los partidos de oposición contribuyó a esta situación. De hecho, el 28 de julio de 2024 se realizaron elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro sin siquiera ofrecer resultados detallados y auditables al país y el mundo; la oposición publicó las actas de votación a través de numerosas vías; y el grueso de los observadores internacionales declararon la inconsistencia e irregularidad del evento electoral. Existen claras evidencias de un fraude electoral pero la oposición careció de la fuerza política para hacer valer el resultado, sobre todo porque el apoyo militar continuó a favor del gobierno.

Una discusión crucial, más amplia y prospectiva que se desprende de mi análisis, tiene que ver con la pregunta de si el declive del Petro-estado representa una remodelación permanente, es decir, si se ha producido un daño muy profundo y estructural, o si en cambio este tuviese algún remedio. La industria petrolera ha sufrido graves procesos de desestructuración en la crisis –sumado a los factores históricos que examiné en el capítulo anterior, como la proporción mayoritaria de crudos no convencionales, los mayores costos de producción, la insostenibilidad que alcanzó la economía rentista, así como la crisis energética global y el cambio climático, entre otros–, que dificultan una ‘vuelta al pasado’ aunque, por otro lado, las grandes reservas que posee el país y el interés foráneo en el recurso hacen contrapeso a esto. Del mismo modo, se debe reconocer que pese al hundimiento del ámbito petrolero, los otros sectores de la economía se vieron también muy debilitados, o no han adquirido una dimensión suficientemente significativa para terminar de desplazar decisivamente al primero.

Lo que ha quedado claramente en evidencia ha sido la fractura del aspecto relativamente monolítico del Petro-estado y la petroeconomía, una tendencia a la mayor diversificación de las fuentes de enriquecimiento, y un proceso de desestructuración institucional que no parece resolverse fácil ni rápidamente. El Estado venezolano perdió notoriamente sus niveles de complejidad y se configuró un sistema de poder neopatrimonial profundamente autoritario y violento. La imposibilidad, hasta el

momento, de resolver el problema a través de elecciones competitivas y transparentes deja abierta la preocupación sobre potenciales resoluciones por la vía de conflictos y confrontaciones violentas que, profundizarían la crisis venezolana.

Si se destaca que La Gran Crisis no ha representado solo un extraordinario derrumbe económico y una emergencia humanitaria, sino también un proceso que ha conllevado a un colapso del Estado, esto apuntaría a una crisis sin precedentes en la América Latina contemporánea. En este sentido, es difícil equipararlas a las Crisis de la Deuda de la década de los 80, o la crisis argentina de 1998-2002; las situaciones de Nicaragua en los 80, durante y posterior a la guerra civil, la profunda crisis económica que vivió el Perú en esa misma década, e incluso el Período Especial cubano. En todas estas, ni el declive económico tuvo tales dimensiones ni supusieron tal colapso de las instituciones estatales. En la región, si acaso un derrumbe más dramático pudiese ser el de Haití, en el marco de un proceso de formación estatal que históricamente ha sido muy frágil y, en lo coyuntural, muy debilitado por los impactos del terremoto de 2010. También se pueden cotejar con casos de otros continentes como Yemen o Libia, aunque hay diferencias cualitativas respecto a los casos africanos y asiáticos, dado que los Estados latinoamericanos tienen más longevidad (desde el siglo XIX) que los otros (siglo XX), lo que ha implicado procesos de consolidación estatal relativamente más robustos. Por otro lado, las naciones latinoamericanas no están determinadas por conflictos étnicos y religiosos significativos, que tienden a presionar a la fragmentación del funcionamiento del Estado y de la integridad territorial de las repúblicas, como es más común ver en estos otros continentes.

En todo caso, el caso venezolano reúne y sintetiza expresiones sui generis que se encuentran con otras comparables: por un lado muestra los síntomas de Petro-estados en profunda decadencia, y algunas tendencias en América Latina que fueron más vistas en África y Asia. Por otro lado, se evidencian problemas similares de muy alta fragilidad estatal en el Sur Global e incremento considerable de las economías ilícitas/criminales ante estos escenarios, lo que se articula con los cambios históricos del extractivismo, grandes desplazamientos humanos y desestructuración del tejido social que, en el siglo XXI nos remite a los conflictos globalizados en torno a los llamados recursos naturales.

CAPÍTULO 3

La emergencia de gobernanzas híbridas en el extractivismo ilícito/criminal

Habiendo examinado los factores más amplios y generales de la ecología política del colapso venezolano, me dispongo a analizar en profundidad las nuevas gobernanzas que surgen en los emergentes escenarios del extractivismo en Venezuela. Inicialmente, en la Sección I del capítulo, ofrezco un perfil general de los actores predominantes de poder que participan en los 75 conflictos de distribución ecológica, así como los tipos de emprendimientos que impulsan, y si estas actividades económicas son legales o ilegales.

Mi estudio propone un análisis multi-escalar del extractivismo (Sección II), que desarrollo a tres niveles: *Política de Estado*, *Biorregión* y *Local*. En este sentido, examino los vínculos entre las operaciones y estrategias que estos actores despliegan para construir poder en los territorios y extraer masivamente recursos de la naturaleza; y por otro lado, los entramados de poder regional y nacional, las cadenas de commodities trasnacionalizadas, las reconfiguraciones del régimen extractivista y los procesos permanentes de formación de Estado. Voy a observar en detalle las contraposiciones, pero también las acciones conjuntas y las formas de imbricación que se desarrollan entre estos grupos, orientadas a objetivos extractivos.

En la Sección III estudio en especial la configuración de gobernanzas híbridas en el extractivismo, desarrolladas entre actores estatales y criminales, a partir de lo cual propongo una conceptualización crítica sobre esta específica trayectoria. Del mismo modo, planteo una discusión en torno al concepto de extractivismo, y la necesidad de contemplar cómo los procesos de extracción de naturaleza por parte de actores criminales tienen un impacto trascendental en el propio régimen en su conjunto. Esto es, pensar en la pertinencia de un extractivismo ilícito/criminal como faceta fundamental de este modelo societal.

El análisis cierra con varias reflexiones en torno a la relación extractivismo/poder/territorialización en América Latina en el siglo XXI, incorporando aristas estructurales, históricas, políticas, geográficas y geopolíticas; abordando el problema del Estado y las estatalidades; y los desafíos que plantean las nuevas geografías extractivas en los escenarios estudiados.

I. Mapa general de actores, emprendimientos y legalidad/ilegalidad en el extractivismo en Venezuela

I.I Mapa general de actores y su peso en el extractivismo

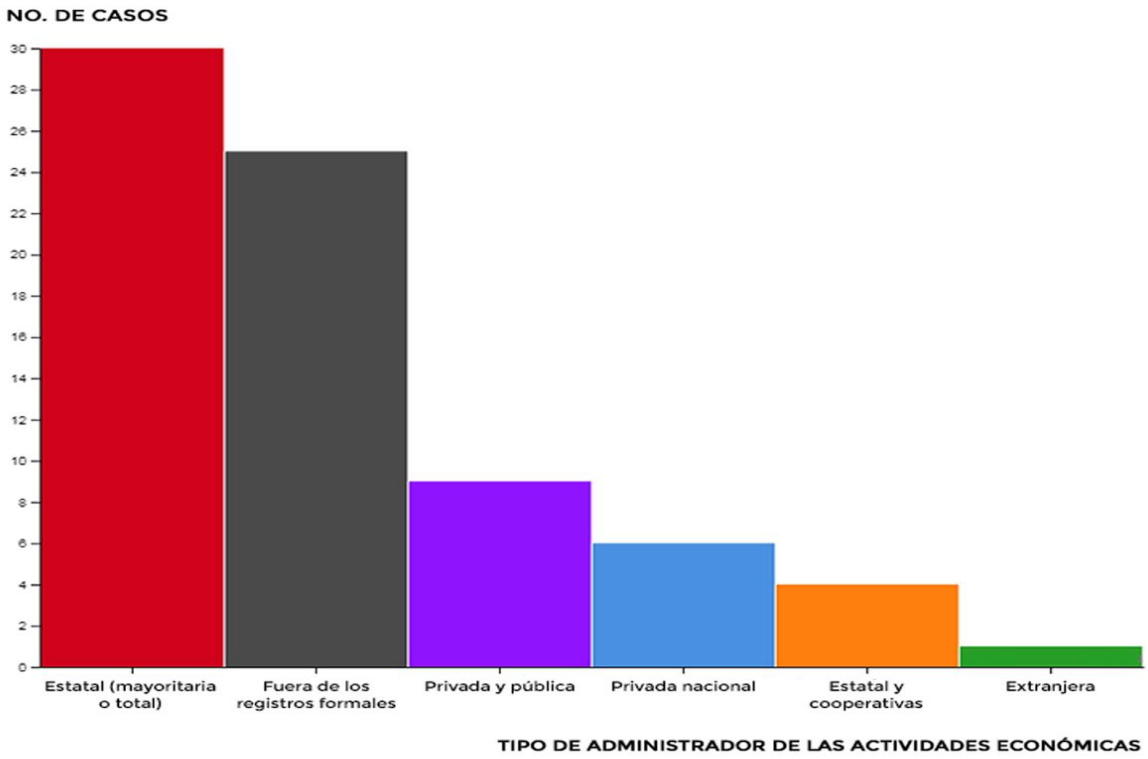
La fragmentación del régimen extractivista se ha traducido en un mapa dinámico y complejo de disputas por el poder y los recursos de la naturaleza, y de importantes reacomodos territoriales. Para construir este análisis de las gobernanzas es necesario ofrecer una primera aproximación general de los actores de poder que intervienen en estos procesos de distribución ecológica, recurriendo a los 75 conflictos estudiados. Por 'actores de poder' vamos a entender a los grupos políticos y económicos que tienen los medios y la capacidad para imponerse, dominar y prevalecer en la extracción de naturaleza y en las dinámicas de territorialización, a diferencia de los actores sociales y populares que se encuentran en situación de desventaja y vulnerabilidad en este marco –y que serán examinados en el siguiente capítulo.

Como efectos del colapso, el mapa general de actores de poder se ha transformado: primero, el orden estatal que surgió con el derrumbe del Petro-estado tiene un gran peso en el nuevo régimen, en muy buena medida por el rol protagónico del sector militar, que ejerce poder por la fuerza, junto a otras instituciones. Segundo, el derrumbe paulatino de la economía formal hizo que las empresas privadas fueran perdiendo bastante de su posición y presencia en el país, y pasaran a tener un rol más bien secundario en estas dinámicas de apropiación de riqueza y construcción de poder. Tercero, y como contraparte, dichas dinámicas fueron siendo cada vez más ocupadas por el crimen organizado, que se convierte en una de las principales fuerzas económicas. De manera que con los estatales y criminales, estamos ante los dos grupos de actores de poder predominantes en La Gran Crisis.

En la FIGURA 36 presento la distribución de los conflictos de acuerdo al operador de la actividad económica, sea llevada por empresa o institución estatal, privada, mixta o por algún agente al margen de la ley. Primeramente se destaca que la participación del Estado en los emprendimientos es preponderante: en 30 casos (40% del total) la gestión de los mismos es mayoritaria o totalmente estatal, y si sumamos los formatos de asociación Estado/cooperativas (4 casos), y los formatos de operación conjunta público/privado (9 casos), tenemos un total de 43 conflictos, más de la mitad del conjunto de los mismos (57,3%).

Las articulaciones público/privadas han consistido en alianzas determinadas por tareas compartidas entre instituciones y entes del Estado, y empresas privadas, mayormente con predominancia de los primeros. Con respecto a las empresas privadas nacionales, en el marco de una precaria presencia de capitales privados de peso –que en cambio sí es fuerte en la mayoría de los países latinoamericanos–, en los 6 conflictos de mi muestra que están protagonizados por estas, se caracterizaron por ser de pequeñas dimensiones, aunque puedan tener relevancia local.

FIGURA 36. Tipo de administrador de las actividades económicas que generan los 75 conflictos ecológico-distributivos. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos.



Factor que también destaca en el gráfico son los 25 conflictos, es decir, una tercera parte del total, que giraron en torno a actividades que no están registradas dentro de los formatos reconocidos legalmente, sean organizaciones criminales, actividades fuera de la ley o economías informales. De hecho, en el 40% de los casos estudiados la actividad económica principal que genera los conflictos es ilegal.

Todas estas expresiones descritas someramente, requieren ser examinadas con más detalle, dado que hay varias complejidades de interés que resaltar. Mi análisis se va a centrar específicamente en los dos actores principales de poder, por lo que en los siguientes apartados evalúo las formas de participación y predominio del Estado; y la transversalidad de las economías criminales. Observaré también cómo estos se cruzaron en los casos con los otros actores mencionados.

I.II Formas de participación y predominio del Estado

De la administración mayoritaria o total estatal, casi un tercio la abarcan los casos de la industria petrolera, la cual ha funcionado primordialmente bajo el formato de empresas mixtas, tal y como lo ha establecido la Ley de Hidrocarburos. Dichas empresas operaron en conjunto con corporaciones transnacionales, que tenían participación minoritaria, tanto desde Chávez como al inicio con Maduro. De estas asociaciones hay dos cuestiones importantes que destacar: primero, ha habido una tradición de PDVSA de encubrir las actuaciones de dichas empresas extranjeras en los territorios,

invisibilizando sus responsabilidades y, en cierta forma, 'estatizando' los impactos socioambientales que generaban ambas –a diferencia, por ejemplo, de Ecuador, donde Texaco-Chevron fue denunciada, incluso interviniendo el Estado. Dicho patrón continuó en el gobierno de Maduro.

Segundo, el colapso y las sanciones internacionales provocaron que, a partir de la Fase II de la crisis casi todas estas corporaciones foráneas terminaran cesando actividades en estas asociaciones, quedando el Estado en gestión de las mismas. Importantes excepciones han sido el caso del retorno de Chevron a la explotación en el lago de Maracaibo –algo que expuse en el capítulo anterior−, lo que está vinculado al Caso No. 5; y la continuidad de las operaciones de China National Petroleum Corporation (CNPC) en la FPO (Caso No. 41).

Situación como esta se replicó también en los casos de minería donde el Estado administraba mayoritariamente: con la debacle de las industrias del níquel (Caso 34), del carbón (Casos 1 y 2) o la Bauxita (Caso 66), las empresas privadas extranjeras se retiraban, aunque el gobierno intentó generar nuevas asociaciones, como ocurrió en 2020 con la empresa rusa Vostokcoal para reanudar la explotación carbonífera, algo que fue resistido por las comunidades locales; o bien con el níquel y los anuncios de pequeñas inversiones de la empresa holandesa Fondel Metals que no trascendieron en el arranque de la industria. El caso quizás más emblemático es el del Arco Minero del Orinoco, donde empresas con las que se habían anunciado acuerdos, como la canadiense Gold Reserve y la china Yankuang Group en Las Claritas (Caso 52) o Endiama de Angola para la explotación de diamantes (Caso 67), también cedieron en su participación en los proyectos a partir de la Fase II, dejando al Estado venezolano por su cuenta en la actividad. No obstante, en los ajustes y medidas paliativas impulsadas por el gobierno de Maduro para abordar la crisis, este logró al menos conformar la empresa mixta (Mibiturven) junto con la compañía turca Marilyns Proje Yatirim, S.A., para operar en la extracción de oro en El Callao (Caso 51). Nótese que, al igual que China y Rusia, Turquía ha sido otro país aliado geopolítico del gobierno venezolano para establecer alianzas empresariales en el extractivismo.

En todos los casos que analicé de las categorías 'Industrias y Servicios Públicos' y 'Gestión del Agua', la administración es del Estado, y los conflictos están determinados por el terrible funcionamiento o desplome de estas iniciativas, instituciones e infraestructuras. Esto se evidenció, por ejemplo, con la contaminación del aire que generaron la central azucarera del municipio Motatán (Trujillo) (Caso 23) o la cementera de Guanta (Caso 43); y con los impactos actuales y potenciales de las lagunas de oxidación (lodos rojos) de CVG-Bauxilum en las orillas del río Orinoco (Caso 56). Del mismo modo se dio con la falta de mantenimiento y contaminación de los embalse de Macagua (Bolívar) (Caso 57) y Los Quediches (Lara) (Caso 13), y la extraordinaria degradación ambiental del Lago de Valencia (Caso 32), fuentes de agua gestionadas por instituciones estatales del sector y gobiernos locales, entre otros.

El Estado también se asoció, como gestor y promotor principal, con pequeños y medianos productores, como ocurrió con agricultores en el caso del valle de Quíbor

(Lara) (Caso 16) y el mencionado caso de la central azucarera, que también incluye a empresas locales de producción de papelón y panela; e impulsó la organización de cooperativas para la co-gestión en la pequeña minería (como en el caso de El Callao – 51) o con recolectores de desechos en el relleno sanitario de San Josecito (Táchira) (Caso 22).

Las articulaciones público/privadas las vimos en el municipio Simón Planas (Lara) en torno a la minería de caliza, impulsada entre la Gobernación de dicho estado y empresas privadas (como la Corporación VeneLara, Minas El Altar y Canteras Aruco). Estas últimas fueron amparadas y protegidas por las instituciones estadales, tal y como fue denunciado por los grupos movilizados locales (Caso 29). En casos como el de la palma aceitera en el sur del Lago de Maracaibo, la industria había sido nacionalizada y, ante el declive, el Estado promovió una mayor participación de empresas privadas tanto para la recuperación del cultivo como para el sostenimiento de las procesadoras del fruto (Caso 8). Otros ejemplos están en el sector 'Turismo y recreación', y la 'Construcción de infraestructuras' asociadas, como en el conflicto por la defensa del Parque Nacional Waraira Repano (Caracas) (Caso 36), donde el Estado contrata a Inversiones Alfamaq C.A y la empresa austriaca Grupo Doppelmayr para la construcción de un teleférico, aunque no se realizaron las respectivas consulta a las comunidades, dejando impactos en ellas.

Entre las empresas privadas nacionales se pueden destacar las que tienen que ver con propietarios de la tierra que, en el caso de las disputas por la gestión y daño ambiental en el Predio Los Tramojos (Guárico) (Caso 30), involucran a la Agropecuaria Los Tramojos. O en la localidad de El Jarillo (Miranda) (Caso 38), donde una empresa propiedad de los hermanos Adrián generaba un conflicto con más de 300 campesinos por deforestación y aprovechamiento ilícito de cauces de agua para la construcción de un complejo turístico. En ambos casos los actores privados contaron con el apoyo de instituciones del Estado.

En suma, es posible constatar la predominancia del Estado en estas dinámicas generales de distribución ecológica, a pesar de su colapso. La gestión y participación estatal tendió a la degradación a medida que se avanzó en las fases de la crisis.

Dicho esto, es necesario precisar cuáles son los actores estatales principales que hacen parte de la dinámica de los conflictos ecológico-distributivos. En la TABLA 6 se muestra una clasificación de los mismos de acuerdo a su rango de poder real y nivel de importancia en el régimen político, donde se resalta el rol protagónico del Presidente de la República y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En una capa más baja están los gobiernos regionales, empresas estratégicas nacionales y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los cuales deben ser considerados como bisagras entre estos poderes superiores y las regiones. Más abajo están instituciones que en lo fáctico coordinan operaciones más específicas y administran ámbitos parciales de la política y la economía, tales como ministerios, institutos sectoriales, la Asamblea Nacional y las instituciones de justicia. En la tabla se describen sus perfiles y rasgos relevantes, su

evolución en las tres Fases de la crisis, así como las funciones generales que cumplen respecto a la relación extractivismo/poder/territorialización.

TABLA 6. Principales actores del Estado venezolano, clasificados por su nivel de importancia en el régimen político. Fuente: elaboración propia a partir de análisis documental sistemático

PRINCIPALES ACTORES DEL ESTADO VENEZOLANO (2013-2022)				
NIVEL DE IMPORTANCIA	**TIPO DE ACTOR**	**DESCRIPCIÓN**	**EVOLUCIÓN**	**FUNCIONES GENERALES**
1	**Presidente de la República**	-Máxima figura en una tradición política presidencialista como la venezolana	FASE I: Inestabilidad FASE II: Fortalecimiento FASE III: Consolidación	-Coordinar y comandar el conjunto del régimen político -Establecer las relaciones internacionales
2	**Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) / Cuerpos de seguridad**	-Uno de los sectores históricamente más poderosos del país -Presencia en todos los sectores del Estado y la economía (desde el gobierno de Chávez) -Alineamiento entre Presidencia de la República, FANB y, hacia abajo, otros cuerpos de seguridad del Estado - Surgimiento de Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) -Surgimiento de cuerpos especiales de seguridad (FAES, SEBIN, etc.)	FASE I: Fortaleza FASE II: Mayores atribuciones económicas FASE III: Mayores atribuciones políticas	-Garantizar control social y territorial, tanto en lo nacional como en lo regional -Coordinar y hacer parte de las operaciones extractivas -Reprimir disidencias políticas y sociales
3	**Gobiernos regionales**	-Gobernaciones y alcaldías dominadas por representantes del partido de gobierno -Instalación de gobiernos paralelos (‘protectores’) donde hubiese ganado electoralmente un candidato de la oposición	FASE I: Competencia con la oposición aunque predominio chavista FASE II: Incremento de las atribuciones económicas FASE III: Asfixia de la competencia electoral y amplio control de los gobiernos regionales por parte del gobierno nacional	-Hacer de bisagra entre los lineamientos de la Presidencia de la República y la reproducción del régimen político y el extractivismo en cada estado y municipio -Organizar localmente el extractivismo y garantizar una distribución de riquezas a los grupos de poder regionales
	Empresas estratégicas nacionales	-Se encargan de operativizar la extracción y procesamiento de recursos en sectores específicos de la economía -Más relevancia: PDVSA, Corporación Venezolana de Minería (CVM), Corporación Venezolana de Guayana (CVG). -Otras: Carbozulia, Corporación Venezolana de Azúcar (CVA); Cartones de Venezuela; Venezolana de Cementos (VENCEMOS); Empresa Nacional Forestal	FASE I: Algunas ya venían en declive antes de la crisis FASE II: debacle generalizada. Sostenimiento prioritario de PDVSA y minería FASE III: debacle generalizada, con la recuperación de la producción de unas pocas empresas. Sostenimiento prioritario de PDVSA y minería	-Facilitar y operativizar la extracción, procesamiento y comercialización de recursos naturales por parte del Estado -Seguir los lineamientos presidenciales

		S.A (ENAFOR); entre otras		
	Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)	-Partido del gobierno que se termina fusionando con este y con el resto del Estado	FASE I: Aún buen número de seguidores FASE II: declive pero mantiene operatividad con las bases de apoyo FASE III: declive pronunciando pero mantiene operatividad con las bases de apoyo que quedan	-Organizar y movilizar a las bases de apoyo acuerdo a mecanismos clientelares y de lealtad, con el fin de ganar elecciones y asistir a marchas gubernamentales -Mantener la movilidad de liderazgos para optar por cargos públicos
4	**Ministerios**	-Administradores de los lineamientos gubernamentales, sin independencia alguna - Predominancia de: Ministerio de Petróleo, Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, Ministerio de Agricultura y Tierras, además de los ministerios de defensa, interior y relaciones exteriores. -Ministerios como el de "Ecosocialismo" o de Pueblos indígenas están subordinados. -Ministerios como el de Educación, Salud o Vivienda quedan muy degradados	FASE I: Declive de funcionamiento general FASE II: Priorización de los ministerios más predominantes, y degradación de los menos. FASE III: Degradación de ministerios con enfoque social y ambiental	-Administración y ejecución de áreas fundamentales para el Estado
	Institutos sectoriales	-Instituciones que suelen estar bajo el mando de ministerios determinados y que gestionan áreas importantes. -Subordinadas a los intereses económicos y sin independencia alguna -Destaca el rol de: Instituto Nacional de tierras – INTI; Instituto Nacional de Parques Nacional − INPARQUES; los institutos regionales de gestión del agua (como Hidrocentro, Hidrolara o Hidrobolívar) y de gestión de desechos, entre otros	FASE I: declive de funcionamiento interno FASE II: Violación generalizada de normativas y abierto favorecimiento a actividades económicas FASE III: Violación generalizada de normativas y abierto favorecimiento a actividades económicas	-Facilitar la apropiación de recursos por parte del Estado y algunos privados, aplicando o irrespetando normas a discreción
5	**Asamblea Nacional**	-Sector legislativo que estuvo en disputa entre el gobierno y la oposición hasta diciembre de 2020, cuando el gobierno logró tomar políticamente el control de esta. -Fue un flanco de resistencia de la oposición durante esos años, para luego caer en la subordinación total	FASE I: Sector que la oposición ganó en elecciones. Desconocimiento de su autoridad por parte del gobierno de Maduro. FASE II: Creación de una Asamblea paralela por parte del gobierno de Maduro. Resistencias por parte de la oposición FASE III: Desplazamiento de la oposición por desgaste. Subordinación máxima a la Presidencia	-Legislar a favor del incremento del control político y social, de la progresiva reforma neoliberal y los intentos de expansión extractivista
	Instituciones de Justicia	-Instituciones que, tanto a nivel nacional como regional se encargan de seguir los lineamientos -Fiscalía General de la República; Defensoría del Pueblo. Ministerio Público; Tribunal Supremo de Justicia;	FASE I: Clara homogeneización de estas instituciones a los lineamientos del Poder Ejecutivo FASE II: Continúa homegenización aunque se produce una subordinación de la Fiscal General, que sería destituida en 2017. FASE III: Subordinación máxima a la Presidencia	- Estos organismos son más bien ejecutores legales de los lineamientos de la Presidencia de la República

I.III Las economías ilícito/criminales y su transversalidad en la economía del colapso

Examinar las formas de predominancia estatal, por sí solas, solo puede ofrecer una visión parcial de las dinámicas de distribución ecológica en la crisis. El despliegue de economías ilegales y estructuras criminales ha sido también de gran relevancia en la reconfiguración extractivista. Antes de dar detalles de esto, propongo algunas aclaraciones conceptuales que permitan abordar las complejas y borrosas fronteras y solapamientos que existen entre los ámbitos de lo informal, lo ilegal, lo ilícito y lo que se desarrolla como crimen organizado.

En primer lugar, dado que las economías informales representan un vasto y muy diverso mundo de trabajo y comercio nutrido por los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes sobreviven marginalmente a través de actividades escasamente monitoreadas y que no son cargadas con impuestos por los gobiernos (Harvey, 2014; Hudson, 2018); el foco crítico de mi análisis sobre la ilegalidad/criminalidad en este capítulo, no está puesto sobre ellas. En cambio, y como ya he mencionado anteriormente, pongo la mirada sobre los actores de poder, quienes absorben el grueso de los recursos financieros y materiales, pueden explotar la fuerza de trabajo y logran ejercer control territorial.

En segundo lugar, desde el capítulo anterior he partido de la noción general de ‘economías ilícitas’ para referirme a aquellas actividades lucrativas que se encuentran fuera de los marcos normativos y legales oficiales. Hay, en efecto, homologaciones posibles entre estas y las economías ‘ilegales’; sin embargo, estas últimas, como categoría comprehensiva, tiene las limitaciones de representar estrictamente aquellas actividades y negocios definidos alrededor de la violación de la ley que impone el Estado. En cambio, la noción de lo *ilícito* tiene una raíz sociológica que va más allá de lo normativo y permite incluir también consideraciones ético-políticas, percepciones sociales y significados culturales respecto a lo que se puede definir como actividad delictiva (Abraham y Van Schendel, 2005; Gregson y Crang, 2016; Inverardi-Ferri, 2021).

Como se ha examinado desde la economía política y la geografía económica (Hudson, 2018; Inverardi-Ferri, 2021), podemos encontrar actividades legales consideradas como ilícitas por sectores de la población –como salarios excesivos para banqueros o el propio proyecto formal Arco Minero del Orinoco en Venezuela, percibido generalmente como un nicho de corrupción y criminalidad−; o ilegales, catalogadas como lícitas, como lo muestra el trabajo de Omolade Adunbi (2020), donde jóvenes nigerianos extraen y refinan artesanalmente petróleo en el Delta del Niger, actividad señalada por el Estado y las corporaciones como ilícita, pero aquellos reivindican la recuperación de un recurso que entienden es propiedad de las comunidades locales.

Al recurrir a la noción de lo ilícito, me interesa resaltar el carácter dinámico que tienen estos procesos de catalogación normativa y valorativa de las actividades económicas, y

cómo estos son campos en disputa, definidos no solo por factores legales y materiales/económicos, sino también históricos, culturales, políticos y subjetivos; marcados también por resistencias, como veremos en el siguiente capítulo.

En todo caso, en mi análisis las economías ilícitas quedan delimitadas y definidas fundamentalmente desde los actores de poder y el marco general político-económico venezolano, la violación del cuerpo normativo nacional, la concepción social más aceptada en el país que considera, al menos desde los códigos morales y sentidos comunes colectivos, que es ilícito destruir el ambiente; y sobre todo, lo profundamente determinante que es el crimen organizado en su composición y morfología.

Sobre esto último, y en tercer lugar, se necesitan también mayores precisiones conceptuales. Queda claro que no toda actividad ilícita/ilegal está inscrita en una organización delictiva. La ilegalidad tiene gradaciones en las cuales, en su pináculo están las formas más estructuradas de criminalidad. Esta forma particular que es el crimen organizado la defino aquí como las asociaciones delictivas que pueden llegar a conformarse en estructuras amplias y con numerosos integrantes, y con perfiles organizativos que pueden ser de tipo empresarial (similar a los grandes cárteles o las 'megabandas'), clánico/familiar (clanes o pandillas como las maras), o militar (como grupos paramilitares o disidencias de la guerrilla colombiana). Se caracterizan por tener división del trabajo entre sus miembros y una proyección que puede ser solo local o bien transnacionalizada. Tienen códigos específicos de relacionamiento y valoración, y gestionan sus operaciones a través del uso de la violencia extrema para imponer sus condiciones (Zaffaroni, 1996; Levi, 2002; Fagoaga, 2014; Briceño-León y Camardiel, 2015; Umbría-Acosta, 2016; Cordini, 2017; Scheller y Lugo, 2019). Otro rasgo crucial es su orientación hacia las llamadas 'economías prohibidas' y los 'delitos graves' –como el narcotráfico, extorsión, minería ilegal, tráfico de madera, entre otras–, pudiendo manejar considerables volúmenes de negocio.

Cabe reiterar que, en línea con el enfoque teórico de mi trabajo, no examino al crimen organizado desde una perspectiva criminológica o normativa, sino en sus roles e incidencias en procesos de acumulación de capital, de producción de nuevas gobernanzas, estructuras de poder y territorializaciones, y de reconfiguración del régimen extractivista; esto es, en el marco del análisis de una economía/ecología política de la criminalidad.

Finalmente, en aras de una mayor precisión categorial, haré entonces referencia a economías y/o actores *ilícito/criminales*, como una noción compuesta, desde la cual busco: a) remarcar el foco no tanto en actividades ilícitas particulares y de escasa relevancia, sino en sus formas más estructuradas y determinantes; y b) destacar el peso general que el crimen organizado puede tener en todo el tejido de las economías ilegales y consideradas ilícitas, que incluye también a numerosas economías populares.

I.III.I Rasgos de los actores en las economías informales, ilícitas y criminales

Planteados estos elementos conceptuales, expongo los rasgos de este espectro de actores y actividades en los conflictos estudiados, desde cinco tendencias fundamentales. En primer lugar, en algunos casos aparecen actores del mundo de la informalidad, tales como individuos ejecutando manejos particulares de desechos urbanos ante la crisis de los servicios públicos en Maracaibo (Caso 7); o pequeños productores agrícolas como los cultivadores de malanga en la Sierra de Perijá (Caso 3) o las comunidades indígenas uwottüja en Guanay (Amazonas) (Caso 71). En todo caso, lo que amerita ser subrayado es que estas economías informales populares están profundamente determinadas e impactadas por la presencia y operaciones de economías ilícito/criminales en sus territorios, algo que se expresa en un 76% de los conflictos de este tipo.

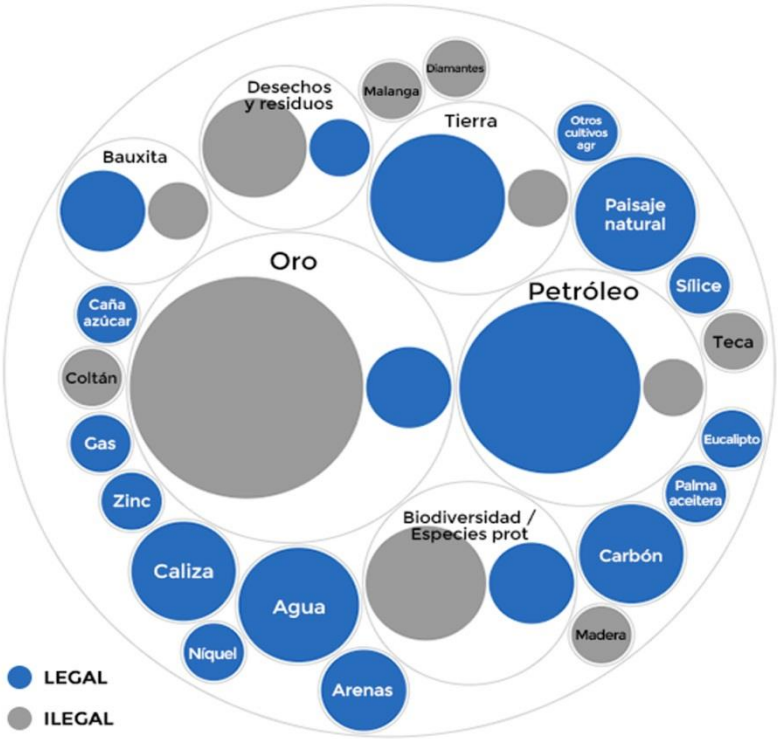
Por ejemplo, los productores de malanga y las comunidades uwottüja coexistieron con la presencia y actividad del ELN o las disidencias de las FARC, los cuales les imponen pautas en su producción y ejercen formas de autoridad; situación similar ocurre con los productores agrícolas en el sur del estado Carabobo que conviven con bandas criminales que controlan violentamente minas de oro (Caso 33). Mafias controlaron desechos estratégicos en el vertedero de Pedregalito (Zulia) (Caso 11); o incluso contrabandistas particulares de especies protegidas operaron en territorios controlados por el crimen organizado en Delta Amacuro (Caso 50).

En segundo lugar, pueden también desarrollarse actividades ilícitas en algunos casos gestionados desde el Estado (mayoritario o total), como se ve con la extracción ilegal de madera de tecas en la propia Sede Administrativa del Ministerio de Ecosocialismo por parte de funcionarios e instituciones estatales (Caso 28). O bien, en los casos en la Amazonía donde se establecieron empresas mineras estatales pero lo que prevaleció es la minería ilegal, sea por que se incurrió en ilícitos de diverso tipo (como ambientales o contra los derechos de pueblos indígenas, entre otros) o porque la zona estaba dominada por el crimen organizado (evidente en casos como El Callao [51], Tumeremo [53] o con el coltán en el municipio Cedeño del estado Bolívar [68]). Situación como esta también ocurrió en casos donde hubo asociación entre el Estado y cooperativas mineras, pero dominó la minería ilegal –como es evidente en los casos de Ikabarú, al sur del estado Bolívar y en Guaniamo respecto a la extracción de diamantes (Casos 61 y 67 respectivamente). Y prácticamente en todos los tipos de emprendimientos llevados por empresas privadas, se expresaron casos donde hubo protagonismo de la actividad ilegal, como ocurrió en el mencionado caso de El Jarillo y las deforestaciones ilícitas para la construcción de infraestructuras turísticas privadas.

En tercer lugar, podemos examinar estas tendencias de acuerdo a los commodities, lo que nos muestra que algunos recursos fueron más proclives a las actividades ilegales, dado lo lucrativos que pueden ser. La FIGURA 37 muestra la proporción de legalidad e ilegalidad que existe en la actividad de apropiación de los principales commodities involucrados en los conflictos. El oro, del que resalté su relevancia en el capítulo anterior, tiene una predominancia de la ilegalidad muy marcada (en color gris). Otros

casos similares los vemos en los desechos y residuos (con el caso del contrabando de chatarra como material que puede generar importantes ingresos económicos), las especies protegidas, la madera, los diamantes y el coltán. En cambio, recursos como los minerales no metálicos como el sílice, la caliza, las arenas o el carbón, tienen una determinante de ilegalidad menor.

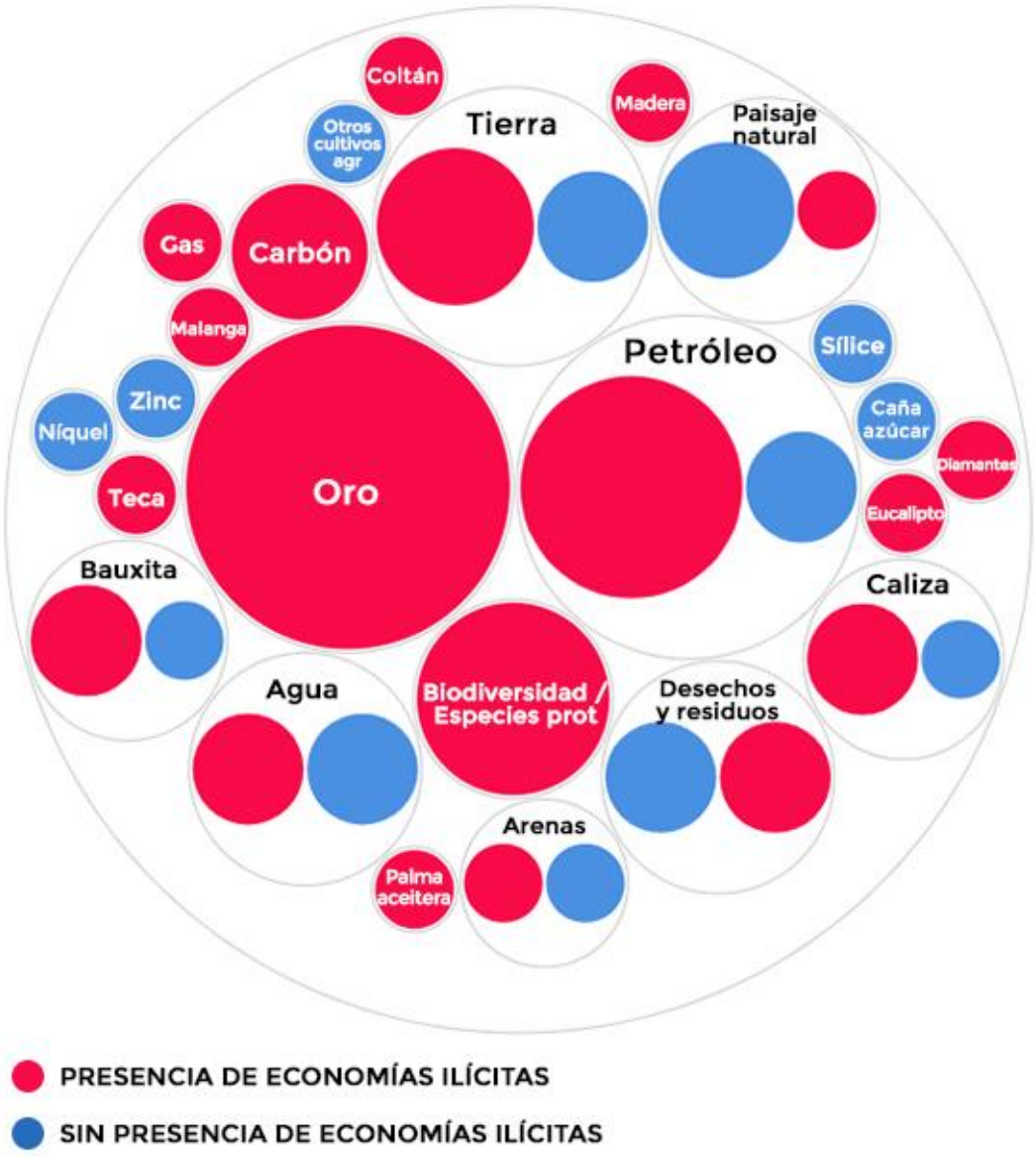
FIGURA 37. Distribución de los principales commodities involucrados en los conflictos ecológico-distributivos en relación a la condición de legalidad o ilegalidad de las actividades económicas que los generan. Fuente: elaboración propia



En cuarto lugar, aunque el principal administrador de la actividad económica determinante de un conflicto sea legal, pueden haber simultáneamente otras economías ilegales que tienen peso e impacto en el mismo. De hecho, en este tipo de casos se suelen constatar recurrentemente coexistencias entre estas diversas formas económicas. Esto se evidencia en 56 casos del total (el 74,6%), donde se registra la presencia de economías ilícitas y criminales con mayor o menor incidencia en el desarrollo de los conflictos, sin que estas necesariamente sean las protagonistas de la principal actividad económica que los genera. La FIGURA 38 muestra los principales commodities involucrados en los casos y su relación con la presencia o no de estas economías criminales en los mismos. Se evidencia que dicha presencia delictiva se hace extendida, y la misma puede determinar significativamente la distribución ecológica, los procesos de territorialización y la conflictividad. Por ejemplo, aunque la extracción petrolera se hace fundamentalmente por la vía corporativo/empresarial, todas las zonas petroleras han sido impactadas por bandas criminales que, en la gran mayoría de los casos, extraen materiales y piezas de esta industria, convertidas en chatarra para su comercialización, lo que afecta las operaciones de la misma y la gobernanza en las localidades. Esta

situación ha sido permanentemente denunciada por las autoridades y los testimonios locales, en casos como el del lago de Maracaibo (Caso 5), donde se revela fuerte presencia de esta actividad de desmantelamiento y los intentos de incorporar a la población en ella, de la cual podría obtener algunos ingresos.

FIGURA 38. Distribución de los principales commodities involucrados en los conflictos ecológico-distributivos en relación a la presencia o no de economías ilícito/criminales en los mismos. Fuente: elaboración propia



En el caso del oro, este está completamente impactado por las economías criminales dado que toda la biorregión amazónica también lo está. Por otro lado, aunque el sector de la palma africana está nacionalizado, actores irregulares armados se han también introducido en su extracción y comercialización transfronteriza hacia Colombia. A su vez, el narcotráfico domina la península de Paraguaná (donde se ubica el Caso 6) y el estado Sucre (en el oriente del país, donde se desarrolló el conflicto por el puerto de

aguas profundas en Araya [46]). De manera que, la cuestión del control territorial termina siendo un factor muy importante en el desarrollo de los conflictos.

En quinto y último lugar, la proliferación de economías ilícitas se articula con la extraordinaria corrupción estatal. La presencia de casos y actos de corrupción en los 75 conflictos analizados es prácticamente total, salvo algunas excepciones. Esto se evidenció en varias formas, sea en la creación de sociedades ficticias para la expansión de la minería de carbón (y otros sectores), a través actores y transacciones ilícitas desarrolladas en el extranjero, que terminaron siendo casos de gran resonancia en la opinión pública, como lo fue el del bróker internacional Alex Saab (Caso 1); los numerosos desfalcos en PDVSA; enriquecimientos ilícitos por parte de funcionarios del Gobierno, militares e integrantes del PSUV a través de la extracción de arenas en el valle del río Turbio (Caso 12); acaparamiento ilícito de aguas públicas para ser luego vendidas a comunidades en mercados paralelos; el impulso de iniciativas mineras sin ofrecerle información de la actividad a los pobladores locales, ni hacer estudios de impacto ambiental, como ocurrió con la extracción de yeso y caliza en los morros de Macaira (Guárico) (Caso 31); hasta asociaciones delictivas para facilitar la extracción de oro en la Amazonía. Los detalles de estas operaciones los examino más adelante para dar cuenta de los rasgos específicos de las nuevas gobernanzas en el extractivismo.

Par ofrecer detalles de dichos rasgos, examinaré a continuación estas dinámicas en los tres niveles de mi análisis (Política de Estado, Biorregión y Local).

II. Análisis multi-escalar de las gobernanzas en el extractivismo

En el nivel Política de Estado se exponen las principales leyes, decretos y políticas de orden nacional establecidas por el gobierno de Maduro con respecto a la distribución ecológica, específicamente a la relación extractivismo/poder/territorialización, con el fin de construir una caracterización del abordaje político y la orientación general del mismo en este período.

En el nivel Biorregión se examinan, por un lado, las diversas formas de estatalidad que se expresan en las diferentes Regiones ecopolíticas; por otro lado, se evalúa el despliegue simultáneo que se da por parte de los actores ilícito/criminales en los territorios del país, lo que en conjunto también permite una comprensión espacial de estas dinámicas y un más detallado entendimiento de la construcción diferenciada de gobernanzas en Venezuela.

En el nivel Local voy a analizar la especificidad de las operaciones y estrategias para la apropiación/extracción de naturaleza y para el ejercicio de autoridad territorial tanto por parte de actores estatales como de los diversos grupos criminales existentes, desde una tipología de cuatro formas dominantes (Extracción directa de naturaleza/recursos; Despojo de bienes comunes y/o públicos; Extracción y contrabando transfronterizo con Segmentación o con Hibridación). Al evaluar los rangos de acercamiento, cooperación y

articulación entre estos actores de poder, pongo el foco especialmente en los métodos y mecanismos de asociación entre ellos. Veamos.

II.I Nivel de Política de Estado (Nacional)

A pesar del colapso del Petro-estado, la fragmentación política y el caótico contexto de La Gran Crisis, hubo un conjunto de leyes, decretos y políticas que, aunque operaron en forma precaria, discontinua y accidentada, ameritan un análisis en profundidad. Estas deben ser necesariamente entendidas en el marco de los objetivos político-económicos del gobierno de Nicolás Maduro. Sobre esto último, y tomando elementos del capítulo anterior, el macro-objetivo del gobierno de Maduro no ha sido recuperar la tradicional institucionalidad del Estado y los mecanismos democráticos, sino fundamentalmente sobrellevar el colapso societal sosteniendo una estructura de poder y acumulación de riquezas que ha implicado una reconfiguración progresiva del Estado. Partiendo del análisis documental y de casos, he identificado ocho objetivos centrales de la política de Estado. Los voy a organizar usando los mismos 'dos grandes pilares' con los que analicé el proyecto bolivariano de Chávez en el capítulo 1: Poder sobre la naturaleza y Poder político.

Respecto al Poder sobre la naturaleza destaco cuatro objetivos:

1) Desarrollar una expansión territorial y en los niveles de 'producción' del extractivismo, con el fin de incrementar los volúmenes de apropiación de recursos por parte del gobierno central;
2) Ampliar mecanismos de desregulación en la economía;
3) Desarrollar un esquema más descentralizado de extracción/apropiación de naturaleza; y
4) Desplegar formas más directas y con menos mediaciones, de apropiación de recursos por parte de diversos actores estatales.

En lo que refiere al Poder Político, son también cuatro los objetivos a resaltar:

5) Incrementar considerablemente del poder gubernamental/estatal;
6) Aumentar las atribuciones y poder del sector militar en todos los ámbitos de la vida;
7) Promover el desmontaje de las funciones de asistencia social del Estado y el abandono de lo público;
8) Expandir la represión y el control social.

En conexión con estos objetivos, se presenta la TABLA 7, en la cual se condensan las principales políticas de Estado (planes de desarrollo y de empresas estatales, leyes, decretos, lineamientos institucionales, entre otros) vinculadas a la relación extractivismo/poder/territorialización. En ella he clasificado el tipo de política de acuerdo a los objetivos planteados, su ubicación en las fases de La Gran Crisis, y expongo una breve descripción sobre sus funciones respecto al régimen extractivista y político. Seguidamente analizo con más detalle cada uno de estos pilares.

PRINCIPALES POLÍTICAS DE ESTADO (EXTRACTIVISMO/PODER/TERRITORIALIZACIÓN)				
TIPO DE POLÍTICA	**POLÍTICA DE ESTADO**	**FASE DE LA CRISIS**	**PUBLICACIÓN OFICIAL / INSTITUCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
PLAN Y PROGRAMA ECONÓMICO NACIONAL	**Plan de la Patria. 2do Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019**	I	Gaceta Oficial No 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre de 2013	Plan que propuso expandir el extractivismo en todos los ámbitos posibles, así como desarrollar gran cantidad de proyectos de infraestructura e integración regional. El plan había sido concebido por Chávez
	Agenda Económica Bolivariana (2016)	I, II y III	Presidencia de la República, febrero 2016	Mecanismo propuesto como un "nuevo esquema económico" que propone el avance hacia nuevas fronteras de la extracción a través de los llamados 15 "Motores Productivos" y el objetivo de incrementar las exportaciones no petroleras
	Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica	II	Presidencia de la República, agosto de 2018	Programa que buscaba incrementar la captación de divisas a través del favorecimiento a la inversión extranjera para aumentar la "producción" de los sectores extractivos, y la creación del "Petro" como unidad de cuenta y bono (y potencial criptomoneda minable) anclado y respaldado en el petróleo y el oro
	Ley Constituyente del Plan de la Patria. 3er Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025	II y III	Gaceta Oficial N° 6.442 Extraordinario, 3 de abril de 2019	Continuación del 2do Plan de la Patria. Se insiste con propuestas de expandir producción petrolero, minería, sector forestal, pesquero, y ampliar sector industrial, entre otros. Se plantea para los primeros años la "estabilización y paz política y económica" y ampliar y consolidar el poderío militar
DESREGULACIÓN ECONÓMICA Y	**Ley Anti-Bloqueo**	III	Decretada por Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta No. 6.583	Establece una mayor y más amplia apertura de empresas estatales y activos públicos al capital privado; poderes extraordinarios al gobierno nacional y

ESTATAL			Extraordinario. Octubre 2020	severas restricciones al acceso a la información sobre proyectos públicos
EXPANSION EXTRACTIVISTA SECTORIZADA	**Plan Estratégico Socialista 2016- 2025 de Petróleos de Venezuela (PDVSA)**	I y II	Lineamiento de PDVSA, aprobado por Presidencia de la República, noviembre 2016	Plan que propone el crecimiento y recuperación de la industria. Busca el aumento de la producción de crudos pesados y extrapesados en la Faja Petrolífera del Orinoco, para aumentar su protagonismo
	Régimen especial de inversiones e incentivos para aumentar la producción en sectores extractivos	I, II y III	Lineamientos económicos varios. Exoneración ISLR a enriquecimientos de PDVSA: Decreto 3.569, agosto 2018	Desde el inicio de La Gran Crisis se ha impulsado desde PDVSA un "Régimen especial de Inversiones" que flexibiliza los marcos de negocio para favorecer a los inversores e incrementar la producción. Este formato fue referencia para otros sectores como el carbón. Destaca el decreto de exoneración del Impuesto sobre la Renta a los enriquecimientos de PDVSA y sus empresas filiales
	Plan Sectorial Minero 2019-2025	II y III	Lineamientos del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico	Documento estratégico que orienta la política del Estado venezolano del sector. Define todos los recursos metálicos y no metálicos, ubicación, reservas estimadas y planes de expansión
	Creación de la "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco"	I, II y III	Decreto Nº 2.248, febrero 2016	Enorme región con grandes reservas de oro, diamantes, coltán, bauxita, hierro, entre otros, orientadA a su explotación en el norte de la Amazonía (estado Bolívar). Área: 111.843,70 km^2
	Legalización de minería fluvial en seis ríos de la Amazonía	III	Resolución No. 0010 – Gaceta Oficial No. 6.526	A través de esta resolución, CVM o sus subsidiarias pueden designar ciertas áreas de los ríos de la Amazonía para la actividad minera, lo que implica permitir la extracción a través de balsas que impactan también los lechos de los ríos. En octubre de 2020 se dejaba sin efecto esta resolución.
	Ampliación de la explotación de carbón en el estado Zulia	I	Decreto 1.606, Gaceta Oficial No. 40.599, 10 de febrero de 2015	El decreto contempla la ampliación de la explotación de carbón en los municipios Mara y Guajira (Zulia) en un total de 24.192 hectáreas, lo que además implicaba la apertura de nuevas minas. El decreto fue 'corregido por error material' en agosto de ese año, lo que neutralizó los propósitos de dicho decreto.
DESCENTRALIZACIÓN EN LA APROPIACIÓN / EXTRACCIÓN DE	**Asignación de "minas de oro productivas" a cada**	II y III	Plan Minero Tricolor. Octubre 2019	Nuevo modelo de 'Alianzas estratégicas' para la gestión directa de la minería de minerales estratégicos por parte de entidades públicas y gobernaciones

RECURSOS	**gobernación**			
ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE ORO	**Establecimiento de 'Brigadas Mineras Socialistas' y 'Alianzas Estratégicas' con la pequeña minería**	I, II y III	Plan de Regulación, Control y Apoyo Técnico a la Pequeña Minería. MDME. Desde 2016/2017	Plan para incrementar la afiliación y organización de la pequeña minería de oro en alianza con la CVM.
	'Alianzas Estratégicas' con empresas privadas	I, II y III	Lineamientos del MDME	Se centró principalmente en el aumento de la construcción de molinos y plantas de recuperación de oro.
DESREGULACIÓN TERRITORIAL PARA EL EXTRACTIVISMO	**Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo**	I y II	Decreto Nº 1.425, noviembre 2014	Esta establece la liberalización de unidades geográficas específicas que pasan a conformarse como Zonas Económicas Especiales. Estas ofrecen extraordinarias facilidades a los capitales inversores para la apropiación de recursos, fuerza de trabajo y territorios (tales como eliminación de regulaciones laborales y ambientales; eliminación de pago de impuestos a empresas, entre otras)
	Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales	III	Gaceta No. 6.710, 20 de julio de 2022	Actualización de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de 2014
INCREMENTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECTOR MILITAR EN EL EXTRACTIVISMO	**Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG)**	I, II y III	Decreto Nº 2.231, febrero 2016	Adscrito al Ministerio de Defensa, la empresa está facultada para una prácticamente ilimitada cantidad de funciones en todos los procesos de extracción y comercialización de recursos naturales, colocando de lleno y abiertamente al sector militar en el negocio extractivista
	Zonas Económicas Especiales Militares	II y III	Presidencia de la República. Mayo 2019	Establecer actividades económicas y aprovechamiento de recursos naturales del sector militar en el marco de la Zonas Económicas Especiales
INCREMENTO DEL PODER DEL GOBIERNO DE MADURO EN EL ESTADO	**Creación de la Asamblea Nacional Constituyente 2017-2020**	II y III	Decreto Presidencial N° 2.830, 1 de mayo de 2017	Esta asamblea fue creada por Maduro para establecer un órgano paralelo a la Asamblea Nacional que, a través de una amplia victorial electoral en 2015, había sido ganada en 2/3 partes por la oposición. La ANC asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado, y tuvo vigencia por más de 3 años (hasta el 18 de diciembre de 2020). Es un reflejo del proceso de control progresivo de todo el resto de las instituciones del Estado por parte del gobierno de Maduro

INCREMENTO DE LA REPRESIÓN Y CONTROL SOCIAL	**Declaratoria de Estado de excepción (permanente) entre 2016-2021**	I, II y III	Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario, 14 de enero de 2016 Gaceta Oficial N° 6.615 extraordinario de 23 de febrero de 2021	Desde enero de 2016 se declaró un "estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional", para "enfrentar la Guerra Económica". En el Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017 se indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades. El estado de excepción se renovó continuamente hasta febrero de 2021
	Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia	II y III	Gaceta oficial Nº 41.274, 8 de noviembre de 2017	La ley, que se anunció para 'castigar delitos de odio e intolerancia en todas sus formas de expresión', terminó siendo aplicada a numerosas protestas y críticas en medios contra el gobierno de Maduro, que fueron calificados dentro de esta clasificación
	Operativos militares y policiales en territorios	I, II y III	CEOFANB, Ministerio de Relaciones Interiores y variados cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo fuerzas especiales	Múltiples y constantes operaciones de choque a través de cuerpos de seguridad en territorios específicos: en barrios populares urbanos, zonas rurales, en zonas mineras. Entre estas estuvieron la llamada "Operación de Liberación del Pueblo" (OLP), que solía tener polémicos saldos en muertes. Para el caso de minería ilegal implicó operaciones en territorio como el 'Plan Boquete' (2017), Operación Tepuy Protector (2019), entre otros.
	Militarización de territorios, incluyendo las zonas de extracción	I, II y III	CEOFANB	Despliegue militar en todo el país, especialmente en zonas de extracción de recursos naturales: militarización de zonas petroleras; en 2016 se crea una 'Zona Militar Especial' en el Arco Minero del Orinoco.
POLÍTICAS EN EL ÁMBITO AMBIENTAL	**Eliminación del Ministerio del Ambiente**	I	Decreto N° 1.227, Gaceta Oficial 40.489, 3 de septiembre de 2014	Al disolver el Ministerio del Ambiente, la Presidencia de la República creó el Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y el Ecosocialismo, integrando y degradando el primero a este, y proponiéndolo como "Viceministerio de Ecosocialismo". En abril de 2015, el presidente creó el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, como un sustituto del antiguo ministerio del ambiente
	Plan Nacional del Agua	I y II	Lineamiento de Presidencia de la República y Ministerio del Ambiente (Ecosocialismo)	Plan extraordinario para el abordaje de las diversas contingencias que afectan el acceso de la población al agua

	Creación del Parque Nacional Caura	II	Decreto Nº 2.767, marzo 2017	Su superficie total es de 7.534.000 ha. siendo el parque más grande del país y segundo en el mundo. Estos territorios han sido reclamados como propiedad por los pueblos indígenas, de conformidad con la Constitución Nacional. El PN colinda con el Área 2 del AMO. Hasta 2023 no tenía aprobado el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso
	Prohibición al uso del mercurio para la minería	I	Decreto Nº 2.412, agosto 2016	Prohibición del uso, posesión, almacenamiento y transporte de mercurio como método de obtención o tratamiento de oro (u otro mineral)

TABLA 7. Principales políticas de Estado en la relación extractivismo/poder/terriorialización. En color rosa las que abarcan el ámbito Poder sobre la Naturaleza, en añil el ámbito de Poder Político, y en verde políticas en el ámbito ambiental. Fuente: elaboración propia

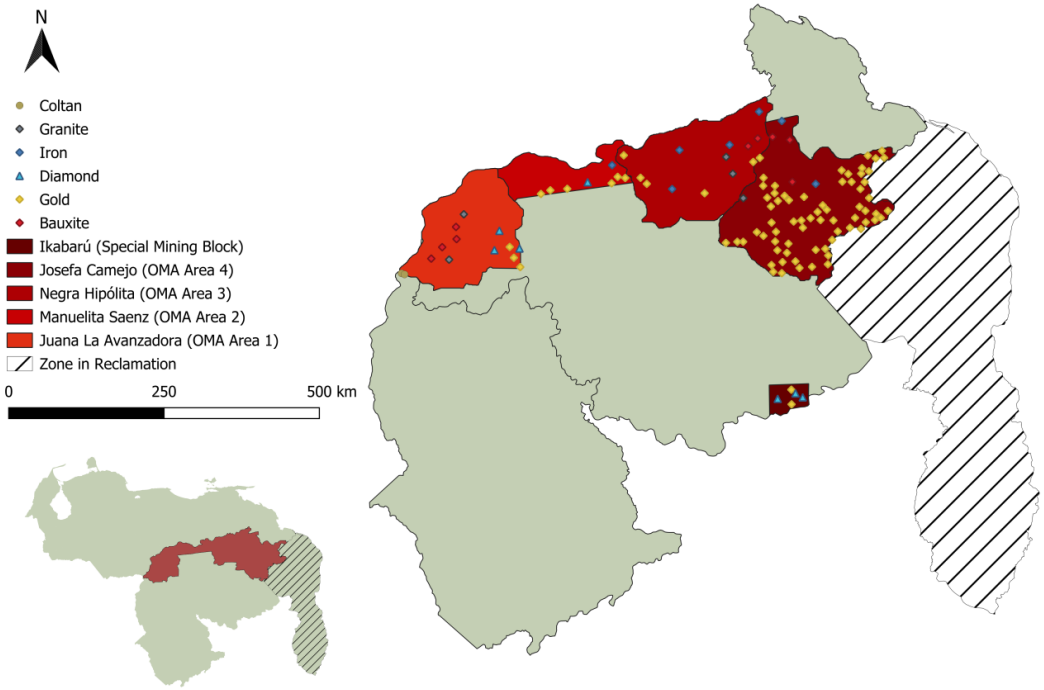
II.I.I *Poder sobre la naturaleza*

Sobre el primer objetivo, la permanente búsqueda de expandir el extractivismo se revela tanto en los planes nacionales de desarrollo (como el 'Plan de la Patria'), en los programas económicos, en las leyes y decretos, así como en los propios discursos de voceros gubernamentales. Destacan la 'Agenda Económica Bolivariana' (AEB) (2016-Fase I), que proponía '15 motores' económicos (como hidrocarburos, minería, forestal, turismo, entre otros) y un salto más nítido hacia nuevas fronteras de commodities; y el 'Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica' (PRCPE) (2018-Fase II) que hacía mucho más explícita la pretensión del aumento de la extracción de recursos naturales a través de estrategias de favorecimiento a la inversión extranjera y de mercantilización de la naturaleza (creando por ejemplo el 'Petro', como una especie de unidad financiera respaldada en las reservas de petróleo y el oro).

Existieron también planes por cada sector extractivo, pero como vimos en el capítulo anterior, en pocos de estos realmente prosperaron las pretensiones de recuperación o expansión. Por ejemplo, los objetivos del 'Plan Estratégico Socialista' 2016-2025 de Petróleos de Venezuela ni siquiera pudo paliar el colapso de la industria, incluso ofreciendo importantes incentivos a los inversores extranjeros (como el llamado 'Régimen Especial de Inversiones'). Tampoco el Decreto 1.606 de 2015 para la apertura de nuevas minas de carbón logró dicho cometido. En este marco, el 'Plan Sectorial Minero 2019-2025'definía un mapa más preciso del sector procurando el máximo aprovechamiento de todos los recursos metálicos y no metálicos.

Ha sido el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO) el más significativo, y la más grande iniciativa minera de la historia contemporánea venezolana, creado en febrero de 2016 como una 'Zona de Desarrollo Estratégico Nacional' al norte de la Amazonía a través del decreto presidencial 2.248. El AMO fue formalizado en la Fase I de la crisis, justo cuando la economía nacional estaba en plena caída libre, y representó el factor central de toda la política para la Amazonía en el gobierno de Maduro, por encima de cualquier otra actividad económica. Su superficie total es de 111.843.70 km^2 y está dividida en 4 áreas de explotación: Área 1 (Juana La Avanzadora), donde prevalece bauxita, coltán, diamantes y oro; Área 2 (Manuelita Saenz), con oro y diamantes; Área 3 (Negra Hipólita), oro, hierro y bauxita; y Área 4 (Josefa Camejo), la zona con las mayores concentraciones de oro de todo el país (Ver FIGURA 39). Existe también un bloque especial denominado 'Ikabarú', del mismo modo con importantes concentraciones de oro, que se encuentra fuera del arco, al extremo sur de la Amazonía, en la frontera con Brasil.

FIGURA 39. Superficie y áreas de explotación del AMO, junto con las principales concentraciones mineras en cada una de ellas. Fuente: elaboración propia con base en MDME (2018; S/F)



Los macro-objetivos gubernamentales también se proyectaron en el AMO, en muy buena medida en torno al oro. La propuesta fue no solo elevar considerablemente los niveles de extracción de este metal –el Plan Minero proyectó de manera bastante ambiciosa que en 2025 se alcanzarían prácticamente las 80 toneladas de producción anual–, sino ampliar el control sobre la cadena de valor y capturar las mayores cantidades posibles del recurso.

En segundo lugar, la ampliación de mecanismos de desregulación en la economía tuvo importante impacto en el extractivismo, sea por la necesidad/pretensión de eliminar obstáculos que favorecieran la recuperación o expansión del mismo; o bien para suprimir cualquier forma de escrutinio de las operaciones. Esto se fue haciendo cada vez más evidente en los programas de reforma económica –de manera muy clara en el PRCPE, con sus propuestas macro-económicas de ajuste y la narrativa ortodoxa utilizada–, pero sobre todo en la Ley Antibloqueo (Gaceta No. 6.583, octubre 2020) la cual estipula de manera simultánea una mayor y más amplia apertura de empresas estatales y activos públicos al capital privado, y poderes extraordinarios al gobierno nacional, mientras hacía que los acuerdos económicos se volvieran inescrutables y se restringía al máximo el acceso a la información sobre proyectos públicos.

Otra ley que es importante resaltar en esta línea, es la que formaliza las Zonas Económicas Especiales (Gaceta No. 6.710, 20 de julio de 2022), una figura de desregulación radical de los territorios que permite extraordinarias facilidades para los inversionistas, y una serie de medidas que contemplan, entre otras cosas, el establecimiento de una autoridad especial asignada para dicha zona, mecanismos para la

máxima apropiación de naturaleza y fuerza de trabajo, y la supresión de derechos laborales y ambientales.

Respecto a la tercera orientación, sobre el despliegue de formas descentralizadas y más directas de extracción/apropiación de naturaleza, subrayo la propuesta del Plan Minero Tricolor (octubre 2019) que establece la asignación de "minas de oro productivas" a cada gobernación del país, para que estas las gestionen directamente. Esto no sólo expresa con claridad la fragmentación del poder y la economía, sino también formas que tienden a feudalizar el extractivismo. Nótese que, nuevamente, el oro aparece como commodity referencia para las nuevas políticas de Estado, lo que nos remite a la Amazonía.

Esta lógica de feudalización del extractivismo también se evidenció en una política de 'autogestión' económica concedida a las gobernaciones y otras instituciones regionales, con el fin que pudiesen desplegar emprendimientos extractivos con nula regulación. Esto se observa con claridad en varios conflictos analizados en el estado Lara y el rol protagónico de la empresa estatal Minas Lara –como el caso de la minería de caliza en el Cerro La Vieja (Caso 29)−; el impulso a la minería de caliza y yeso en el Monumento Natural de los Morros de Macaira, promovido por la alcaldía del municipio José Tadeo Monagas y la gobernación del estado Guárico (Caso 31); o el aprovechamiento ilegal de madera de tecas en la propia sede del Ministerio de Ecosocialismo en Araure por parte de funcionarios de esta cartera para su comercialización (Caso 28).

Otro mecanismo que debe ser resaltado es el incremento de las atribuciones del sector militar en el extractivismo. Más allá de sus funciones de seguridad nacional, a través del Decreto Nº 2.231 (febrero 2016) se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual otorga facultades para una cantidad ilimitada de funciones en todos los procesos de extracción y comercialización de recursos naturales, lo que coloca de lleno, directa y abiertamente al sector militar en este negocio. Adicionalmente, por medio de un lineamiento presidencial de mayo de 2019 se instauraron las Zonas Económicas Especiales Militares, que permiten replicar el formato de estas áreas de explotación desregulada desde la gestión de este sector armado. Por ejemplo, en diciembre de 2020, se creó la Zona Económica Militar Especial de Desarrollo Forestal (Decreto Nº 4.392) en los municipios Sifontes (Bolívar) y Antonio Díaz (Delta Amacuro) para la extracción forestal e incluso minera.

Un par de mecanismos más, cruciales en las nuevas dinámicas del extractivismo, tienen que ver con las pretensiones de incrementar la captación de oro por parte del gobierno central. Uno, la formación de las "Brigadas Mineras Socialistas" y posteriormente las Alianzas Estratégicas con la pequeña minería. La inviabilidad de la expansión de la minería industrial/formal que he mencionado en secciones anteriores, provocó que el gobierno nacional cambiara posteriormente su estrategia en el AMO, buscando, desde la Fase II de la crisis, incrementar lo más posible la organización y afiliación estatal de la minería aurífera de pequeña escala, que se compone por decenas de miles de personas que ejercen la actividad en toda la Amazonía. Las Brigadas Mineras Socialistas y las 'Alianzas Estratégicas' con la pequeña minería surgieron del Plan de Regulación, Control y Apoyo Técnico a la Pequeña Minería del MDME, desde 2016/2017, y

consisten en asociaciones de personas naturales con fines mineros, en alianza con la CVM, las cuales son establecidas y reguladas por el correspondiente ministerio. Este mecanismo ha sido determinante para incrementar la captación de oro por parte del Estado. No se encuentra información oficial sobre el número total de estas alianzas mineras, y cuánto alcanza sus niveles totales de extracción de oro, a excepción de un anuncio en 2019 del para entonces ministro de minería que indicó que para ese año se habían ya establecido más de 1.000 Alianzas estratégicas, de las cuales 946 se componían de pequeños mineros (MippCI, 2019).

Dos, esta política de buscar controlar la pequeña minería y el mineral que extrae, se complementó con la construcción de nuevos molinos para su trituración, así como plantas recuperadoras para el procesamiento del oro. Estas instalaciones se propusieron para que operaran también en Alianzas Estratégicas, esta vez abiertas para la asociación con pequeñas empresas privadas, y su objetivo ha sido potenciar la mayor centralización y el máximo acopio posible del oro. De acuerdo al antiguo ministro de esta cartera, para 2020 había 21 plantas activas, la mayor parte de ellas en el municipio El Callao (Caso 51) (MDME, 2020).

Partiendo de estos dos últimos mecanismos descritos, podemos cotejarlo con las compras de oro realizadas por parte del Banco Central de Venezuela. Para 2017, la cifra registrada por este organismo es de una compra interna de 1,32 toneladas de oro, mientras que en 2018 se evidenciaba un incremento para alcanzar las 9,72 toneladas (BCV, 2018), de lo que se intuye un resultado positivo de esta estrategia. Sin embargo, los complejos entramados de corrupción del Estado han también impactado notablemente las cadenas de valor mineras, como se constató por ejemplo con la detención del vicepresidente de la empresa estatal Minerven en 2018 por contrabando de oro (Transparencia Venezuela, 2018). Hay a su vez, gran opacidad sobre los orígenes del oro acopiado y los métodos con los que se obtiene (OCDE, 2021), y en numerosas compañías vinculadas a las plantas y molinos se han revelado irregularidades en sus procedimientos o han estado involucradas en casos de corrupción (Boon et al, 2022).

II.I.II *Poder político*

Estas orientaciones para un extractivismo más bien predatorio, no podemos entenderlas sin delinear el régimen político que lo fue posibilitando y sosteniendo. La serie de leyes y políticas emblemáticas que también se destacan en la TABLA 7 para este ámbito, pueden dar cuenta de los lineamientos que fueron definiendo dicho régimen.

Primero, instituciones colapsadas y disfuncionales, carencia de legitimidad y apoyo popular, y la normalización de prácticas autoritarias en el Estado, favorecieron que el gobierno fuera imponiendo el principio de mantenimiento del poder a toda costa. Además, los riesgos que acarrearía perder ese lugar de protección planteaban escenarios en los cuales los líderes del régimen de Maduro podían ser juzgados en cortes internacionales y apresados por la violación de derechos humanos. Esto los llevó a desplegar una serie de reformas y mecanismos para incrementar al máximo posible el poder gubernamental/estatal, facilitar las operaciones políticas y económicas de una

estructura privilegiada de actores −expuesta en la TABLA 6−, restar recursos y prioridades a las instituciones de carácter social, cultural y ambiental, y lidiar con las oposiciones a través de una férrea represión.

Una expresión de esto fue la creación, por parte de Maduro en mayo de 2017 (Fase II), de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) (Decreto Presidencial N° 2.830) y la anulación de la Asamblea Nacional (AN), que la oposición había ganado electoralmente de manera amplia en 2015. La ANC, que se había establecido supuestamente para redactar una nueva constitución, algo que no hizo y ni siquiera discutió, asumió facultades plenipotenciarias, por encima de los demás poderes públicos del Estado, extendiendo su vigencia por más de 3 años (hasta el 18 de diciembre de 2020). Esta iniciativa política ha sido un reflejo del proceso de control progresivo de todo el resto de las instituciones estatales por parte del gobierno de Maduro, que para la Fase III de la crisis ya estaba muy avanzado, siendo ya subordinados, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y casi todas las gobernaciones y alcaldías. Como medida articulada a este proceso, y ante la evidencia de la derrota que había sufrido en las elecciones parlamentarias de 2015, el gobierno de Maduro fue interviniendo cada vez más en los sufragios y los partidos de oposición hasta tener un control muy amplio de los mismos, como ocurrió por ejemplo con la paralización del referéndum revocatorio en 2016, la suspensión y/o posposición sin mayor criterio de elecciones estadales y municipales, la inhabilitación de candidatos –como se dio con el opositor Freddy Superlano en noviembre de 2021, quien tan pronto ganó las elecciones regionales en el estado de Barinas le fue suspendido su derecho a ejercer cargos públicos por parte del TSJ−, o la intervención de partidos políticos, como pasó con Copei en 2015 y 2019, y Acción Democrática en 2020, lo que implicó que el TSJ le cambió su junta directiva, colocando a gente favorable al gobierno.

El nuevo Estado simplificado que se fue configurando, bajo un sistema de poder neopatrimonial, desplegó hacia la sociedad y los territorios una serie de políticas, operaciones, técnica y estrategias que he definido como un *estado de guerra* (*Warfare State*). Desde el 14 de enero de 2016, todo el territorio venezolano se rigió por un estado de excepción (Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario) que se volvió permanente por cinco años, a través de renovaciones de la declaratoria que vieron la última el 23 de febrero de 2021 (Gaceta Oficial N° 6.615 Extraordinario). La medida fue adoptada para afrontar la "guerra económica", en línea con la narrativa gubernamental que siempre adjudicó que La Gran Crisis es producto de una guerra no convencional contra este. En estos decretos se indicaba que las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución podían restringirse, con algunas salvedades (por ejemplo, ver Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017). Esto instauraba la emergencia como normalidad, y dejaba al sector militar y demás cuerpos de seguridad a sus anchas para la actuación en los territorios. Después de 2021 la normalización de la militarización de todos los ámbitos de la vida estaba ya instalada como proceso en la sociedad.

El sensible incremento de la militarización tuvo también su proyección en las zonas de extracción. En 2016 el Ministerio de Defensa creó la 'Unidad Especial de Seguridad y

Protección de la Faja Petrolífera del Orinoco'; desde 2020 el Complejo Refinador de Paraguaná fue militarizado, y situación similar ocurrió en zonas aledañas a la explotación petrolera en el estado Zulia. En 2018 el ministro de relaciones interiores ordenaba militarizar siete puntos de suministro de agua en Caracas y en 2020 el gobernador del estado Zulia hizo lo mismo con la Planta de Potabilización "Alonso de Ojeda" (Planta C). Respecto a la Amazonía, desde la formalización del AMO fue aumentando cada vez más la presencia militar, y se le otorgaron poderes especiales a las Fuerzas Armadas en la región, a través de la creación de una 'Zona Militar Especial' dentro de las poligonales del mega-proyecto. En el propio decreto del AMO se especifica que el interés minero está por encima de los intereses sociales 'privados' y se establecen sanciones para quienes obstaculicen las operaciones.

Como estrategia articulada a este proceso, persistieron y se incrementaron los operativos militares en los territorios, que también se desarrollaron en zonas extractivas, como ocurrió en la Amazonía donde prolifera la minería ilegal, con el 'Plan Boquete' (2017) o la 'Operación Tepuy Protector' (2019), entre otros. Varios de estos operativos generaron enfrentamientos, violación de derechos humanos y fallecidos, incluyendo miembros de los pueblos indígenas (Amnistía Internacional, 2018; CDH-ONU, 2022; OVV, 2018). Respecto a otros cuerpos de seguridad, aumentó notablemente el número de funcionarios policiales en el país en los años de La Gran Crisis y proliferó la creación de fuerzas especiales, como la FAES (Fuerza de Acciones Especiales) o el fortalecimiento de otras ya existentes como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Estos cuerpos, sobre todo el FAES, generaron también operativos en zonas urbanas y rurales, con polémicos saldos en muertes (Ávila, 2023). Por último hay que señalar en este esquema de seguridad el soporte de grupos paraestatales de diverso tipo (grupos urbanos politizados, funcionarios del Estado vestidos de civil, expolicías, delincuencia, entre otros) que suelen operar violentamente ante protestas contra el gobierno (Insight Crime, 2018a; UN, 2021).

Estos diferentes dispositivos de seguridad tienen, por tanto, funciones de disuadir y confrontar disidencias y manifestaciones, así como establecer mecanismos de control social que también tuvieron impacto en los conflictos ecológico-distributivos analizados, como veremos en el siguiente capítulo. En esta línea, se debe destacar la "Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" (Gaceta oficial No. 41.274, noviembre de 2017), propuesta formalmente con el objetivo de "castigar delitos de odio e intolerancia en todas sus formas de expresión", pero que en realidad terminó siendo aplicada a numerosas personas que protestaron, y a críticas realizadas en medios o redes sociales contra el gobierno de Maduro, justificando la detención de personas.

II.I.III *Abordaje de la distribución ecológica: un nuevo régimen eco-sistémico*

Es necesario revisar cómo estas orientaciones que hemos examinado, se expresaron también en una transformación del régimen eco-sistémico que previamente había

desarrollado el Petro-estado, y que he presentado esquemáticamente en la FIGURA 11 (capítulo 1). La marcada subordinación de las instituciones y políticas ambientales que he mencionado implicó en buena medida el abandono de este tipo de asistencia, pequeñas remediaciones de los daños ecológicos generados, o bien abordajes cosméticos para intentar ofrecer una imagen pública más amable con el ambiente.

Una expresión clara de estas dinámicas se evidencia con la disolución del Ministerio del Ambiente en septiembre de 2014 (Fase I), para terminar degradándolo en forma de 'Viceministerio de Ecosocialismo' perteneciente al nuevo Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y el Ecosocialismo (Decreto N° 1.227). Esto revelaba no solo una vulneración de la gestión ambiental, para un ministerio que además había estado históricamente supeditado a la industria petrolera y a los ministerios asociados a esta, sino también una extraordinaria desvalorización de este ámbito. La medida generó numerosos cuestionamientos en los sectores ambientalistas, e incluso, en términos internacionales ya no se contaba directamente con un ministerio con el que se pudieran canalizar políticas multilaterales sobre el tema. Seis meses después de la medida, en abril de 2015, Maduro creaba el 'Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas' (posteriormente Minec), que sería un sustituto de la antigua cartera de ambiente.

El nombre que adquiere el Minec era parte de la narrativa que provenía del gobierno de Chávez, que intentaba inscribir lo ambiental en la ideología del socialismo venezolano, que vimos se fundamentó en la expansión extractivista. Lo ambiental dentro del discurso político grandilocuente de los gobiernos bolivarianos se condensó, por ejemplo, en el enunciado trascendental del quinto objetivo del Plan de la Patria, que proponía "Contribuir con la preservación de la Vida en el Planeta y la Salvación de la Especie Humana". Pese a tan amplio propósito, la evidencia ha mostrado otros resultados: como veremos con más detalle en el análisis del Nivel Local, el accionar del ministerio fue, en variadas ocasiones más bien de complicidad con las dinámicas de extracción/apropiación de naturaleza, que solían ser ilícitas. El 'Plan Nacional del Agua', establecido como un lineamiento de la Presidencia de la República y el Minec para abordar los graves problemas de acceso al líquido que he reseñado en el capítulo anterior −y que impactan directamente en 4 de mis casos en estudio− no solventó las severas carencias existentes.

Por otro lado, la llamada 'Misión Árbol', un programa del Minec que tiene como objetivo recuperar bosques en el país, afirmó en junio de 2023 a través de su presidente, que habían logrado la recuperación de unas 60.000 'hectáreas forestales' (que sería un criterio más amplio que el de bosque) en los últimos 17 años (Swiss Info, 2023); es decir, para el período 2006-2023. Si cotejamos la cifra ofrecida por la institución, con la pérdida de cobertura arbórea de 1.113.100 hectáreas que registra Global Forest Watch para Venezuela entre 2013-2022, podríamos decir que lo recuperado representa apenas el 5,4% de todo lo perdido (2,7% si lo comparáramos con las 2.219.400 hectáreas pérdidas desde 2002 hasta 2022), evidenciando que las dinámicas de deforestación son abrumadoras en comparación con lo que pueden ser las políticas de restauración.

En lo que el Estado ha podido ser más cooperativo, ha sido con ciertos proyectos e iniciativas de conservación, tal y como ha ocurrido con el apoyo de instituciones ambientales y la alcaldía del municipio Alberto Adriani (Mérida) a organizaciones

ambientalistas locales para salvar la Laguna de Urao (Caso 19); o como ocurre con la alcaldía del municipio Brión (Miranda) y su respaldo a la iniciativa de recuperar la Laguna La Reina (Caso 39).

En marzo de 2017, el presidente Maduro creaba el 'Parque Nacional Caura' en la Amazonía (Decreto Nº 2.767), con una superficie total de 7.534.000 hectáreas −siendo el parque más grande del país y segundo en el mundo−, el cual además comparte frontera directamente con el Área 2 del AMO. Se trata probablemente de la medida de mayor dimensión respecto a lo ambiental. No obstante, no se desarrolló la demarcación de territorios indígenas en dicha cuenca, que es un mandato de la Constitución, generando un conflicto con las comunidades indígenas de la zona (Caso 64). Hasta 2023 no se había aprobado el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), fundamental para el ejercicio de las medidas de protección que rigen el PN. Y, sobre todo, la minería ilegal en esta cuenca no hizo sino crecer en La Gran Crisis, evidenciando la inconsistencia efectiva de la medida ambiental. Misma situación se dio con la 'Prohibición del uso, posesión, almacenamiento y transporte de mercurio como método de obtención o tratamiento de oro' (Decreto Nº 2.412, agosto 2016), que ha sido ignorada, dado que este componente es imprescindible para la práctica de la actividad.

IMAGEN 11. Ministro de Desarrollo Minero Ecológico de ese período, Víctor Cano, junto a integrantes del pueblo wottuja, anuncia inicio de operaciones de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista "Parguaza" (9 de septiembre de 2017). Esta se orienta a la minería de coltán (municipio Cedeño, Bolívar). Fuente: http://www.minpi.gob.ve/noticias/noticias/362

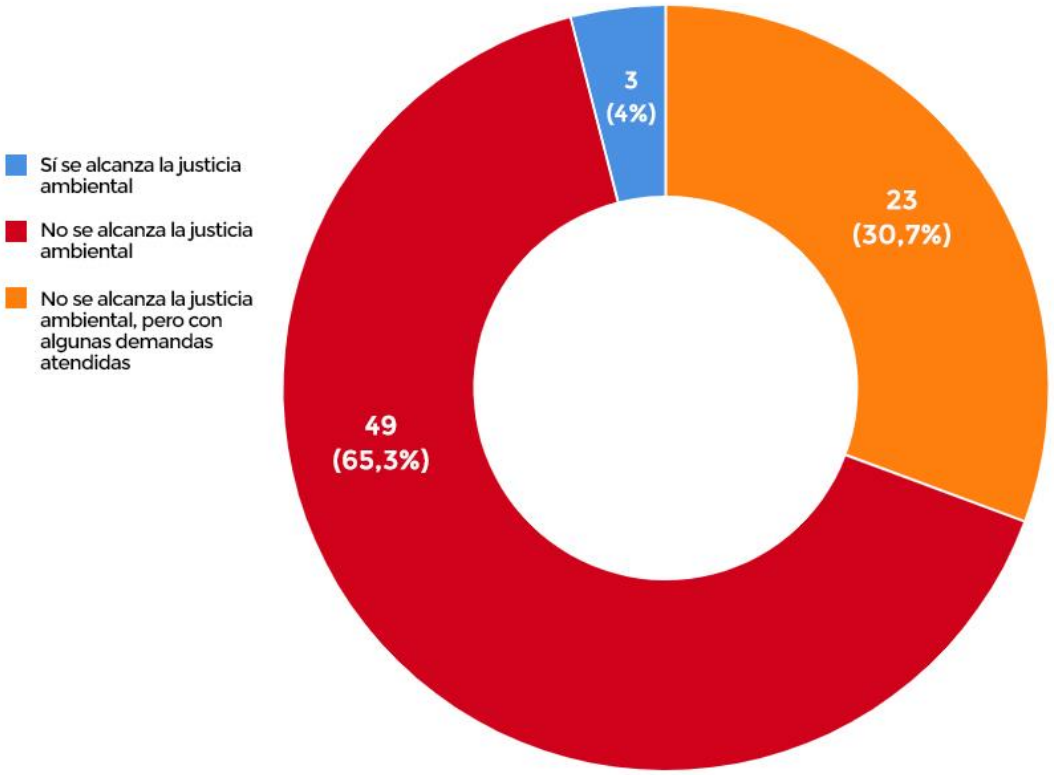


Ante los múltiples y crecientes impactos socioambientales, el gobierno de Maduro presentó diferentes discursos justificativos, a través de representantes de varias instituciones estatales. En conflictos como el que se dio en torno a los embalses Los Quediches (Lara) (Caso 13) o Macagua (Bolívar) (Caso 57), insistieron en señalar que éstos eran producto del cambio climático o del fenómeno de El Niño, despachando otras causas vinculadas a las propias responsabilidades por la mala gestión, la desidia o la corrupción administrativa. También se alegó que estos problemas ambientales eran

sencillamente el efecto de las sanciones internacionales o de supuestos sabotajes a instalaciones por parte de la oposición. Adicionalmente, acusó a grupos sociales y luchas territoriales de hacer parte de operaciones subversivas y/o conspiraciones financiadas por los Estados Unidos, como lo hizo contra las resistencias de los indígenas pemón en el municipio Gran Sabana (Bolívar) y la campaña ciudadana contra el proyecto del AMO.

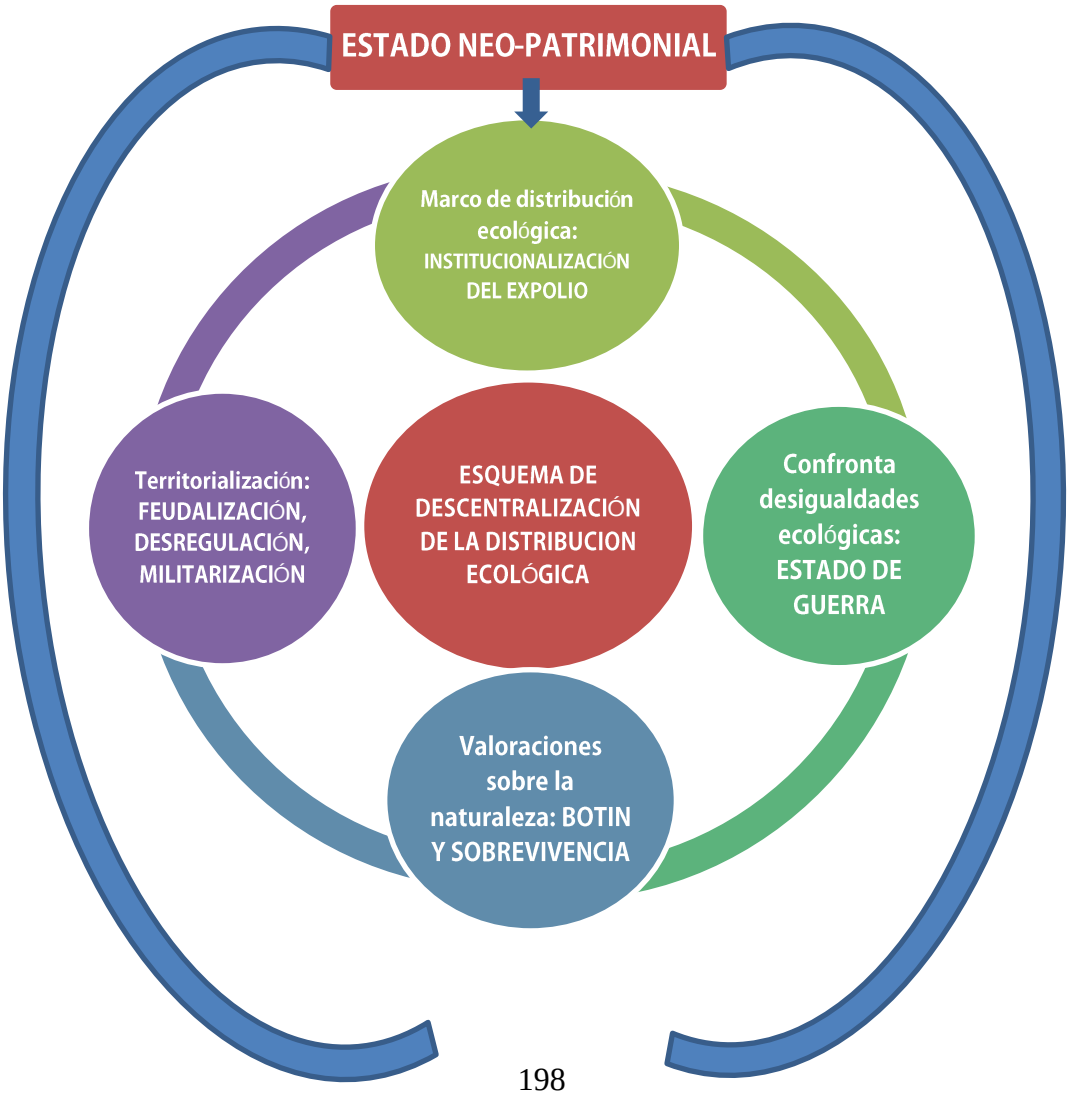
Se puede añadir un dato más en este diagnóstico: las respuestas generales que ha dado el Estado ante las demandas ambientales de los grupos movilizados en los 75 conflictos de mi estudio. Como vemos en la FIGURA 40, el análisis ha arrojado que en el 65,3% de los casos (49) se impone una situación de injusticia ambiental, esto es, no se detiene la actividad que genera el conflicto; ni se reparan todos, gran parte o algunos de los daños generados; ni las demandas principales de los grupos movilizados son atendidas. En un 30,7% (23 casos) tampoco se consigue la justicia, pero algunas demandas son atendidas y/o se detiene parcialmente la actividad generadora del conflicto. Solo en 3 casos se alcanza una situación positiva: en la resistencia comunitaria contra la minería en Bailadores, que fueron atendidas por las autoridades regionales (Mérida - Caso 21); en el caso de la Reserva Forestal de Caparo (Barinas), donde Maduro firmó una sentencia para desalojar las ocupaciones ilegales de la misma que se realizaron en 2018 (Caso 25); y en el de la defensa de la Cotorra Margariteña, aunque este triunfo se debe más al accionar de las organizaciones conservacionistas, las cuales incluso lograron incrementar el apoyo de las instituciones y la policía (Caso 47). En conclusión, la gestión estatal ha mostrado estar muy reñida la justicia ambiental.

FIGURA 40. Verificación si se alcanza o no la justicia ambiental en los 75 conflictos de distribución ecológica. En azul, SI se alcanza; en naranja NO se alcanza, pero algunas demandas son atendidas; en rojo NO se alcanza. Fuente: elaboración propia



Con los varios elementos examinados, se constata una transformación en el previo régimen eco-sistémico del Petro-estado, para dar paso a la emergencia de uno encabezado por nuevo Estado regido por un sistema neo-patrimonial. Como vemos en la FIGURA 41, al dejar de ser la renta petrolera el mecanismo central de mediación entre la sociedad y la distribución ecológica, se pasa a un esquema descentralizado que permite al gobierno central que los poderes regionales y locales puedan sacar provecho directo de la naturaleza y así mantener un sistema de alianzas y lealtades de abajo hacia arriba. Podemos observar los cambios en cada uno de los 4 pilares del ecorégimen: (1) el gobierno central se mantiene en comando del 'Marco de distribución ecológica', pero lo reparte con actores provinciales e ilícito/criminales; se institucionaliza con claridad el expolio, de manera formal y fáctica. (2) Los proceso de 'Territorialización' se desregulan y feudalizan, pero mantienen niveles de articulación entre ellos. (3) La 'Confrontación de desigualdades ecológicas', así como los conflictos y disputas por y en torno a la naturaleza, quedan atravesados por el estado de guerra (Warfare State). Y (4) las 'Valoraciones sobre la naturaleza' quedan muy impactadas por estas lógicas de expolio y sobrevivencia, poniendo en entredicho las perspectivas ambientales.

FIGURA 41. Pilares del Régimen eco-sistémico del nuevo Estado neo-patrimonial en La Gran Crisis. Fuente: elaboración propia



II.II Nivel Biorregión (Regional)

Luego del análisis de espectro nacional, es necesario ahora examinar algunos rasgos diferenciados a Nivel de Biorregión, donde se puede observar la predominancia estatal e ilícito/criminal en el geografía nacional, en las rutas comerciales y en el control territorial, elementos clave para una más amplia comprensión de las gobernanzas en este período. Evalúo los tipos de estatalidad que se desarrollaron en La Gran Crisis y los rasgos fundamentales de las geografías criminales.

II.II.I *Estatalidades*

Partiendo de la noción crítica de estatalidad desde la que desarrollo mi análisis, estudiaré las variaciones geográficas del Estado, poniendo el foco tanto en su capacidad/disposición para desplegarse sobre el territorio, como de predominar sobre la sociedad, imponerse sobre otros actores territoriales y proveer a la población de elementos básicos de vida. Examino cómo estas disposiciones están en relación con las dinámicas regionales del extractivismo, de los commodities más determinantes y de la geografía política que se configura entre zonas céntricas y periféricas.

Para ello, planteo una clasificación con 6 Tipos de Estatalidad. Los criterios para definirlos los he establecido a partir de la literatura sobre el Estado en América Latina que analicé en el capítulo 1, que he combinado con análisis sobre Capacidad Estatal y Estudios sobre Conflictos por Recursos Naturales, con el fin de tener una caracterización amplia de las mismas, más allá de enfoques normativos. Son seis los indicadores fundamentales de esta tipología que presento abajo en la TABLA 8:

TABLA 8. Indicadores para la definición de la tipología de estatalidades. Fuente: elaboración propia a partir de Oszlak (1978); O'Donnell (1993; 2004); Urteaga-Quispe (2017); The Fund for Peace (2017); Le Billon (2001); y Buhaug (2002).

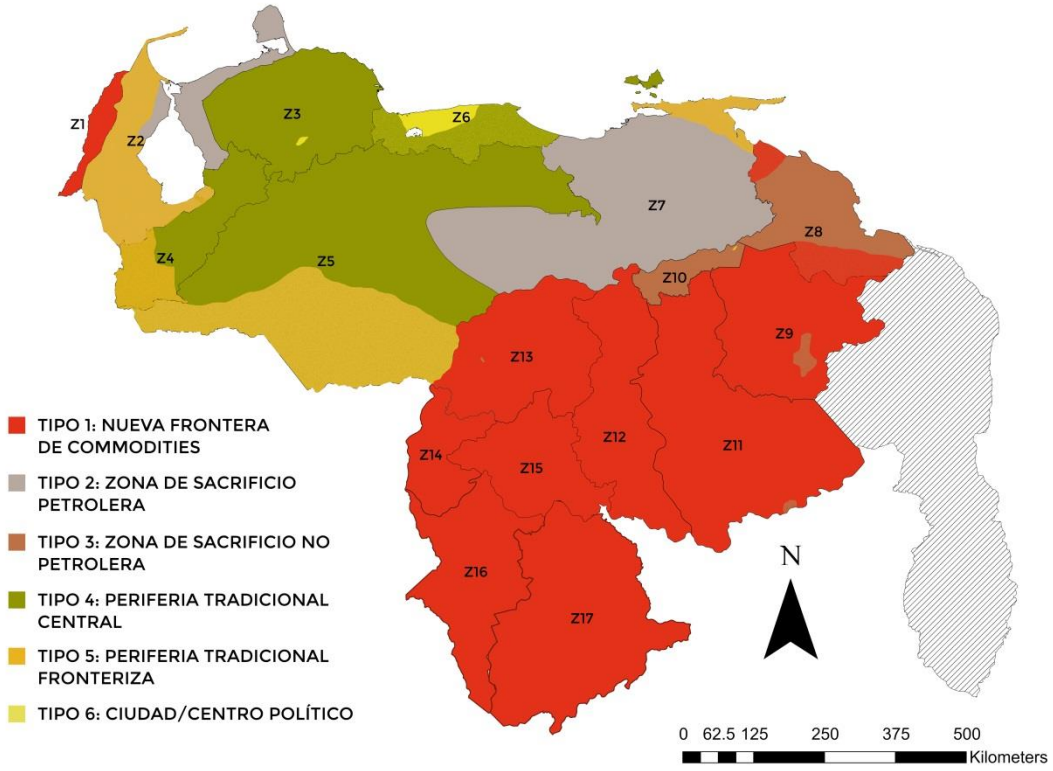
INDICADORES PARA DEFINIR LA TIPOLOGÍA DE ESTATALIDADES			
INDICADOR	**ABREVIATURA**	**DESCRICIÓN**	**NIVELES DE MEDICIÓN**
1. Alcance territorial y predominio sobre la población	ATPP o Alcance Territorial	Nivel de establecimiento territorial del Estado (en relación con otras regiones) y de predominio sobre la población	Alto Medio Bajo Nulo
2. Capacidad de pacificación y de monopolización de la violencia	CPMV o Capacidad de Pacificación	Nivel de controlar o atenuar el conflicto y de desplazar a otros actores armados	Alto Medio Bajo Nulo
3. Presencia y eficiencia institucional y de provisión	PEIP o Presencia Institucional	Mayor o menor presencia de las instituciones estatales, infraestructuras y la capacidad de provisión de bienes y servicios públicos	Alto Medio Bajo Nulo
4. Perfil extractivismo / commodities	PEXC o Perfil Extractivista	Orientación extractivista dominante, perfil de la misma y	Actividad(es) y commodities predominantes

		commodities sobre los que se centra la dinámica económica regional	
5. Conexión con la economía nacional	CEN o Conexión Economía	Nivel de conexión de la economía predominante regional con la nacional	Alto Medio Bajo Nulo
6. Responsividad al poder central (Caracas)	RPC o Responsividad	Nivel de subordinación y cumplimiento al gobierno central alojado en Caracas	Alto Medio Bajo Nulo

Como resultado, los seis tipos de Estatalidad se expresan en un mapa que podemos ver en la FIGURA 42. He partido del Mapa de Regiones Ecopolíticas, y a cada una de estas se le ha asignado uno o más tipos de estatalidades. En la figura podemos notar, en primera instancia, que se expresa una cierta continuidad con la histórica geografía del extractivismo en Venezuela, que marca una distinción entre el norte del Orinoco y la Amazonía. Tenemos un Tipo 1 de estatalidad, 'Nueva Frontera de Commodities' (NFC), que se desenvuelve en vastas zonas alejadas de Caracas, varias de ellas incluso de difícil acceso, que hacen parte de amplias y complejas regiones fronterizas. Son Tipo 1 prácticamente todas las zonas de la Amazonía, donde la dinámica extractivista determinante es la minería ilegal orientada al oro, coltán y diamantes, recursos que motivan un muy alto interés en los actores y agresivas lógicas de expolio; y la Sierra de Perijá (Z1), aunque las actividades determinantes están vinculadas a las tierras y la actividad agropecuaria, y a una minería de carbón industrial colapsada. El Tipo NFC se caracteriza por tener un Bajo/Nulo 'Alcance Territorial', aunque este es llevado en buena medida por el sector militar. Una Baja 'Capacidad de pacificación' –sea por desidia, falta de recursos y efectivos, acciones que tienen poca continuidad, por el poder de fuego de los grupos armados irregulares o bien por la complicidad estatal−, a pesar de haber un gran despliegue de la militarización y de que la gestión de la seguridad se genera con altos niveles de violencia. Y una prácticamente Nula 'Presencia Institucional', a excepción de zonas muy puntuales, en realidad orientada a la provisión minera.

En la Amazonía, el rasgo geográfico de dispersión del oro en toda la biorregión, así como la característica de ser un recurso más fácilmente apropiable, a través incluso de técnicas artesanales, promueve al mismo tiempo una fragmentación de la propia estatalidad. Por otro lado, en general, en las NFC prevalecen economías transfronterizas y de contrabando, saliendo gran cantidad de recursos del país. Son estas expresiones de la fragmentación del extractivismo; pero esto no implicó insubordinación al poder central por parte de los actores estatales regionales (hay Alta/Media 'Responsividad'). Este criterio se repite en todos los Tipos de estatalidad debido a que en ningún caso algún grupo militar o poder regional se rebela contra el gobierno de Maduro –no hay, por ejemplo, fragmentación de las Fuerzas Armadas en relación a su unidad de mando central−, o desarrolla alguna actividad que implique separación de este; mientras que algunos niveles de recursos extraídos deben llegar a los poderes en Caracas (Media Conexión Económica.

FIGURA 42. Mapa de estatalidades de Venezuela en La Gran Crisis (2013-2022). Se presentan 6 tipos identificados por color, que se ubican en las Regiones Ecopolíticas establecidas para este estudio. Nótese que una región puede tener más de 1 estatalidad. Fuente: elaboración propia



Otra tipología de estatalidades se da en las zonas de sacrificio. Hay dos tipos: Tipo 2 ‘Zona de Sacrificio Petrolera’ (ZSP) y Tipo 3 ‘Zona de Sacrificio no Petrolera’ (ZSNP). Estos se ubican primordial pero no únicamente en el norte del Orinoco. Las ZSP se desarrollan en las principales cuencas hidrocarburíferas (Regiones Ecopolíticas 2 y 7, en color gris en el mapa), zonas más céntricas respecto al poder central donde la dinámica ha sido extraordinariamente marcada por el crudo. No obstante, mientras que con el Petro-estado estas zonas sufrían todos los costos socioambientales de la industria pero al mismo tiempo recibían ciertas formas de atención y compensación rentista, en las actuales ZSP el nuevo Estado neopatrimonial gestiona enclaves petroleros profundamente deprimidos por el colapso del sector (con Alto/Medio ‘Alcance Territorial’), en los que se instaló un patrón de abandono tanto de la gestión social y ambiental de la industria como de la propia asistencia a la población que habita en los territorios petroleros (Baja/Nula ‘Presencia Institucional’).

A diferencia del Tipo NFC y recursos como el oro, diamantes o coltán, el petróleo no es un recurso territorialmente disputado y continuó con gestión única de la precaria PDVSA (y las empresas privadas que quedaron), por lo que no se caracteriza por la fragmentación extractiva, y en cambio sí por su Alta/Media ‘Responsividad’ y ‘Conexión Económica’. En este sentido, estas estatalidades tienen un nivel de Media/Baja ‘Capacidad de Pacificación’, con un ejercicio de violencia escasa en la distribución ecológica, aunque como ya he explicado tienen un alto nivel de militarización, dado lo sensible del recurso para el gobierno central.

IMÁGENES 12 y 13. A la izquierda, Comunidad R1 de la ciudad petrolera de Cabimas (Costa Oriental del Lago de Maracaibo), donde se muestra que el petróleo está en las propias calles de la misma. Fuente: Emiliano Teran Mantovani, visita de campo, noviembre 2022. A la derecha, imagen del Complejo refinador de Paraguaná, que genera extraordinaria contaminación, afectando la salud de los habitantes de la península. Fuente: Emiliano Teran Mantovani, visita de campo, noviembre 2022.





El Tipo 3 ZSNP nos remite a áreas donde el Estado también instala altos niveles de abandono de gestión y poblacional (Nula 'Presencia Institucional') y además tiene Bajo/Nulo 'Alcance Territorial'. Zonas como estas son el Delta del Orinoco (Región Ecopolítica 8), dejada a su suerte en perjuicio del pueblo indígena warao, donde además convergen varios procesos de contaminación que se generan aguas arriba de este importante río. Otras ZSNP son las áreas de vertederos –como Cambalache en la Región Ecopolítica 10, donde también están las enormes piscinas de lodos rojos−, que también representan economías bastante deprimidas. La no existencia de recursos estratégicos acentúa el abandono estatal en estas zonas, lo que moldea este tipo de estatalidad. En este sentido, se registra una Baja 'Capacidad de Pacificación'.

En el mapa podemos apreciar que una Región Ecopolítica no necesariamente está determinada por un solo tipo de estatalidad. Por ejemplo, en el caso de la Zona Delta del Orinoco, a pesar de ser considerada una ZSNP, en sus extremos norte y sur prevalece la estatalidad NFC. Al sur esto es así pues posee depósitos de oro contiguos al proyecto del AMO, y se inserta en las dinámicas de las nuevas fronteras de commodities, como una zona a expoliar, aunque para este período estaba aún poco intervenida. Al norte, se encuentra la zona petrolera de Pedernales aún por desarrollar –aunque se ha iniciado explotación en bajos niveles, desde los años 90.

Por otro lado, vemos que en la Región Ecopolítica 'Municipios Mineros Orientales' (Z9), catalogada como estatalidad Tipo 1 NFC, existe una ZSNP en Las Claritas, una amplia área de devastación para extraer oro, en el que sí hay mayor nivel de 'Alcance Territorial'–por ejemplo, mayor presencia de instituciones mineras y de instalaciones como plantas de cianuración− y la violencia estatal es muy alta. Se trata de una zona de sacrificio que en realidad opera bajo las lógicas de las estatalidades Tipo 1. Esto, a diferencia de la ZSNP Los Pijiguaos, en la Región Ecopolítica 'Municipio Cedeño' (Z13), otra área de devastación de vieja data para la extracción de bauxita, que también

está localizada dentro de una estatalidad Tipo 1, pero en la cual no se ejerce esta violencia estatal, y sí prevalece el abandono social del Estado.

Dos tipos más tienen que ver con las regiones periféricas del país: Tipo 4 'Periferia Tradicional Central' (PTC), de color verde en el mapa, y Tipo 5 'Periferia Tradicional Fronteriza' (PTF) de color naranja. En primer lugar, se denominan periferias tradicionales porque se han configurado en el marco del proceso histórico de territorialización del Petro-estado, como zonas subordinadas al norte del Orinoco ubicadas en los alrededores de las zonas principales urbanas y económicas. En este sentido, se distinguen de las NFC, ya que estas últimas representan 'nuevas' zonas para incorporar a la expansión de la explotación y expolio extractivo. El Tipo 4 Periferia podríamos decir que está determinado por un nivel intermedio de intensidad extractivista y de disputas en la distribución ecológica. Esto es así, por los commodities de interés en estas regiones, como la tierra, la biomasa (madera o cultivos forestales), cultivos agrícolas; la conservación y las especies protegidas; o bien los de la minería no metálica (caliza, sílice, etc) o metálica de menor relevancia (níquel, zinc, etc). Este tipo se ubica fundamentalmente en las Regiones Ecopolíticas Serranía Lara-Falcón (Z3), Región Andina (Z4) y Los Llanos (Z5), aunque también se despliega en los márgenes de Centro Norte-Costera (Z6) y en el estado Nueva Esparta (que hace parte de la Zona Cuenca Petrolera Oriental [Z7]).

Para el caso de Venezuela, los commodities descritos para este tipo representan intereses económicos más que todo regionales ('Conexión Económica' de nivel Medio, pero con 'Responsividad' Alta), ya que son el petróleo o el oro los recursos de mayor interés para exportación (y los mercados internacionales), sea por parte del gobierno nacional o los grupos que puedan apropiárselo. De ahí la relativa importancia económica de estas zonas, donde la PEIP es Baja, el ATPP es de nivel Alto/Medio y la CPMV es Media/Baja, aunque se registra violencia estatal de medio nivel, en buena medida orientado al despojo de tierras a campesinos o la represión contra algunas luchas ambientales.

Lo que distingue estas de las PTF, es que estas últimas son estatalidades que se despliegan en zonas calientes y conflictivas, algunas recónditas o con poco despliegue estatal, y aunque no se caracterizan por poseer importantes reservas de recursos estratégicos, sí predominan economías ilícitas transfronterizas. Esto implica las disputas entre actores por control del territorio y de rutas de comercio internacional es de mayor intensidad. Como vemos en la FIGURA 42, importantes extensiones geográficas de las Regiones Ecopolíticas Cuenca Petrolera Occidental (Z2), Región Andina y Los Llanos está determinada por este Tipo 5. En el estado Zulia, la palma africana, y en el estado Táchira el carbón, ambos recursos que han hecho parte de emprendimientos formales/estatales, son insertados en economías de contrabando donde actores armados irregulares participan para la salida de estos recursos hacia Colombia. Tanto en estas áreas del Zulia como en del Táchira el 'Alcance Territorial' es de nivel Bajo, y en la región sur de Los Llanos (específicamente del estado Apure) y en amplias zonas del estado Sucre –zona de península marcada en naranja de la Zona Cuenca Petrolera Oriental−, este es prácticamente Nulo. Del mismo modo, el nivel de 'Capacidad de Pacificación' es de Bajo a Nulo, siendo que en Sucre el control del narcotráfico es muy

extendido. Algo parecido ocurre en las demás zonas de este tipo con grupos irregulares del conflicto colombiano, donde se pueden también desplegar formas de intensa violencia estatal en las disputas. Evidentemente, la 'Presencia Institucional' es Baja en Zulia y Táchira, y Nula en las áreas marcadas de Apure y Sucre; mientras que la 'Conexión Económica' y 'Responsividad' es Alta para los primeros y Media/Baja para los segundos.

Por último, tenemos el Tipo 6 'Ciudad/Centro Político', donde la estatalidad está marcada por la centralidad de la sede del gobierno nacional y la instalación física de las principales instituciones estatales, por lo que se registra un Alto/Medio 'Alcance Territorial', así como una Media/Baja 'Presencia Institucional' (pero es la mejor provisión de todo el país). Aunque este tipo nos puede remitir a las principales ciudades venezolanas, lo cierto es que en La Gran Crisis la mayor parte de ellas colapsaron, como es el caso de Maracaibo o Valencia, prácticamente convertidas también en otras zonas de sacrificio. Esto acentuó considerablemente la relevancia política de Caracas (Región Ecopolítica Centro-Norte Costera - Z6). Es crucial destacar que este tipo no se caracteriza por regiones de actividad extractivista de peso ni reservas destacadas de recursos estratégicos, por lo que las disputas en torno a la naturaleza son más del tipo distributivas, y la violencia estatal en torno a la distribución ecológica es más Baja y acotada; y la 'Capacidad de Pacificación' es Media/Baja.

TABLA 9. Tipología de estatalidades de Venezuela en La Gran Crisis. Niveles de valoración de acuerdo a los seis indicadores establecidos. Fuente: elaboración propia

TIPOLOGÍA DE ESTATALIDADES DE VENEZUELA EN LA GRAN CRISIS NIVELES DE VALORACIÓN POR CRITERIO							
TIPO	**Ubicación**	**ATPP**	**CPMV**	**PEIP**	**PEXC**	**CEN**	**RPC**
1 NFC	Amazonía, Sierra de Perijá	Bajo/Nulo. Vastas zonas alejadas de Caracas. Zonas fronterizas, algunas de difícil acceso	Baja. Altos niveles de violencia	Nula	Amazonía: Minería ilegal (oro, coltán y diamantes). Alta expoliabilidad. Dispersión extractivista. Sierra de Perijá: tierras actividad agropecuaria, minería de carbón industrial colapsada	Media	Alta/Media
2 ZSP	Principales cuencas petroleras	Alto/Medio. Norte del Orinoco. Zonas más céntricas	Media/Baja. Violencia escasa en la distribución ecológica	Baja/Nula	Gestión única y precaria de PDVSA. No hay disputa territorial por el petróleo	Alta/Media	Alta/Media
3 ZSNP	Delta del Orinoco, Zonas de vertederos urbanos. Las Claritas, Los Pijiguaos, Ikabarú	Bajo/Nulo. Zonas alejadas del centro político	Baja. Escasa violencia	Nula	No prevalecen operaciones de extracción de recursos sino el sacrificio de áreas	Media/Baja	Media/Baja
4 PTC	Serranía Lara-Falcón, Región Andina y Los Llanos. Márgenes de Centro Norte-Costera y estado Nueva Esparta (Z7).	Alto/Medio. Zonas subordinada norte del Orinoco	Media/Baja Violencia estatal de medio nivel	Baja	Prevalece: tierra, biomasa, cultivos agrícolas de diferente importancia; conservación y especies protegidas; o bien la minería no metálica o metálica de menor relevancia. Intereses económicos más que todo regionales	Media	Alta

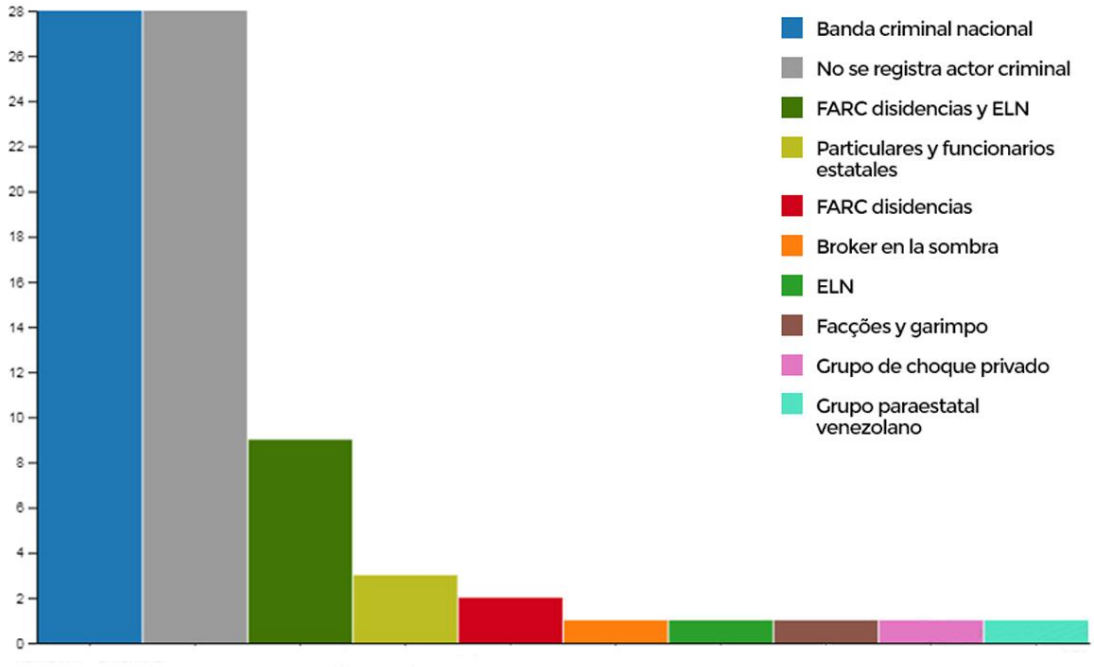
5 PTF	Zonas fronterizas de Cuenca Petrolera Occidental, Región Andina y Los Llanos. Estado Sucre (Z7)	Bajo/Nulo. Zonas calientes y conflictivas, algunas recónditas o con poco despliegue estatal	Baja/Nula. Intensa violencia estatal en las disputas territoriales	Baja/Nula	No poseen importantes reservas de recursos estratégicos. Prevalecen violentas economías de contrabando transfronterizas	Alta (Zulia y Táchira). Media/Baja (Apure y Sucre)	Alta (Zulia y Táchira). Media/Baja (Apure y Sucre)
6 CCP	Considerable relevancia política de Caracas (Región Ecopolítica Centro-Norte Costera), y algunas de las principales ciudades	Alto/Medio. Centralidad de la sede del gobierno nacional	Media/Baja Violencia estatal en la distribución ecológica Baja y acotada	Media/ Baja	Regiones sin actividad extractivista de peso, ni reservas de recursos destacadas	Alta	Alta

II.II.II *Geografías ilícito/criminales*

Pese al extraordinario despliegue de la militarización en el país, las economías ilícitas y criminales desarrollaron también una crucial expansión y consolidación territorial que es necesario evidenciar con mayor claridad. Primeramente, podemos mirar, de manera panorámica, cuáles son los grupos específicos que destacan en los 75 conflictos ecológico-distributivos en estudio, para posteriormente dar más detalles sobre ellos. En la FIGURA 43 se presenta la distribución porcentual de los actores ilícito/criminales protagónicos en los casos, aunque en cada uno de estos últimos pueden involucrarse varios grupos al mismo tiempo, en variadas ocasiones coexistiendo o hasta cooperando entre ellos.

Hay que señalar que en el 62,7% de los conflictos (47 casos) se registra la participación directa o indirecta de estos actores: en 37,3% del total encabezan bandas criminales nacionales, de variado tipo y dimensión. El segundo de estos grupos con mayor impacto es la guerrilla colombiana, presente en un total de 12 casos de manera protagónica, desplegados en numerosas regiones del occidente del país. El establecimiento de los ‘Acuerdos de Paz’, firmados en Colombia en 2016 entre estos grupos armados y el gobierno, implicó desplazamientos geográficos de aquellos actores que no se plegaron a estos, intensificando aún más su presencia en Venezuela. En 9 de estos casos se combina la presencia de disidencias de las FARC con el ELN, que han también llegado a asociarse y/o cooperar entre ellos en las iniciativas extractivas. Sin embargo, si sumamos otros conflictos donde la guerrilla estuvo también como actor secundario, pero con incidencia en ellos, el total escala a 19 (25,3%).

FIGURA 43. Distribución de los principales actores ilícito/criminales involucrados en los 75 conflictos ecológico-distributivos. Fuente: elaboración propia



Otro grupo de estos actores son las organizaciones criminales brasileñas, denominadas *Facções*, las cuales pueden operar a través de mineros ilegales (garimpo), fundamentalmente en las extensas regiones fronterizas en el sur de Venezuela. Aunque solo protagonizan en un conflicto, están presentes en 7 de ellos. A su vez, en casos excepcionales se verifica la presencia (secundaria) de paramilitarismo colombiano (2 conflictos en el estado Zulia); y grupos de choque privados (irregulares) que responden a intereses ganaderos (1 caso, también en Zulia).

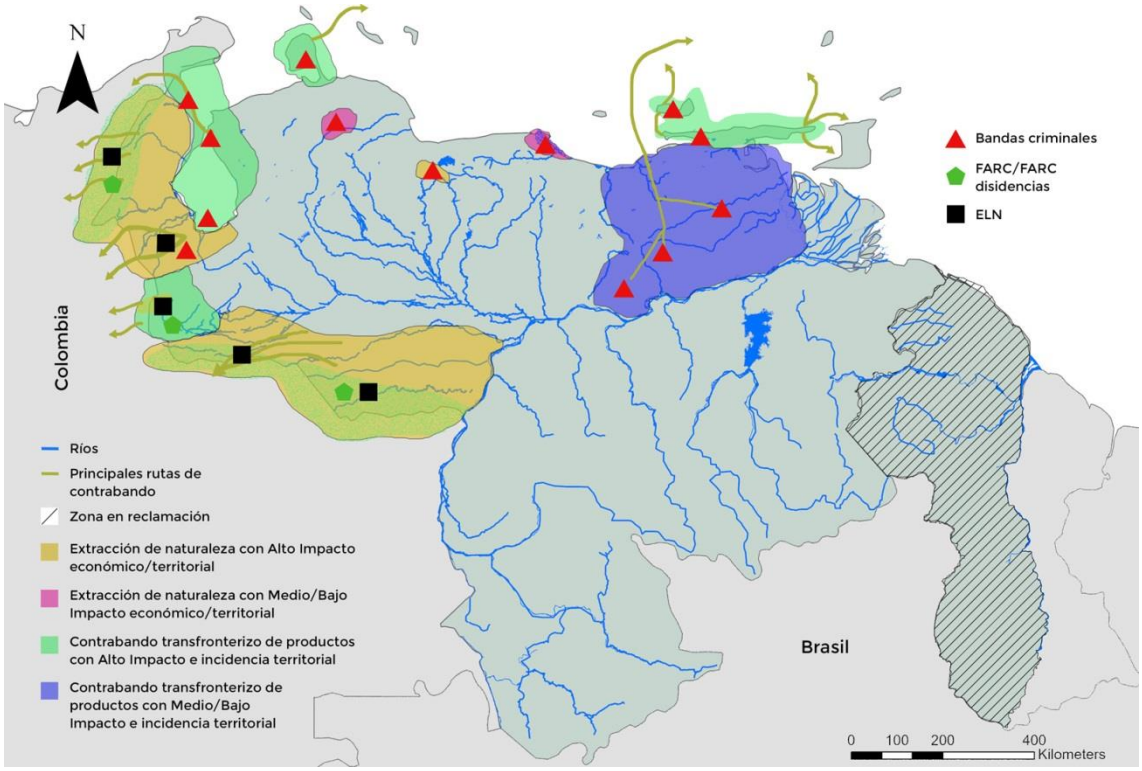
Por último hay actores particulares que desarrollan actividades ilícitas (como la extracción de agua) que se alían a funcionarios estatales en 3 casos como protagonistas, y 2 casos con un rol secundario. A su vez, existe la figura de 'Brokers en la sombra', aunque no son actores de operación territorial, inciden con sus inversiones e intermediaciones comerciales internacionales ilícitas, en un total de 6 casos (1 de protagonista y 5 con un papel secundario).

A continuación, se presentan más amplios detalles del perfil de estos grupos, específicamente su tipología, y sobre todo, su despliegue en la geografía nacional. Voy a analizar este posicionamiento territorial de manera diferenciada: una mirada al norte del Orinoco y otra a la Amazonía.

II.II.II.I Norte del Orinoco

He realizado un análisis (resumido en la FIGURA 44) donde distingo las geografías ilícito/criminales de la zona septentrional del país, según i) la orientación principal de estos actores (sea con orientación hacia la distribución ecológica o la económica) y ii) el peso territorial que pueden tener. Se determinan 4 tipos.

FIGURA 44. Ubicación geográfica de los principales actores ilícito/criminales involucrados en los conflictos ecológico-distributivos en el Norte del Orinoco. Se establecen zonas a partir de 4 tipos: a) Grupos orientados a la extracción de naturaleza (distribución ecológica) con Alto Impacto económico/territorial (color naranja); b) Grupos orientados a la extracción de naturaleza (distribución ecológica) con Medio/Bajo Impacto económico/territorial (color rosa); c) Grupos orientados al comercio ilícito de productos (distribución económica) con Alto Impacto e incidencia territorial y en los conflictos ecológico-distributivos (color verde); d) Grupos orientados al comercio ilícito de productos (distribución económica) con Medio/Bajo Impacto e incidencia territorial y en los conflictos ecológico-distributivos (color azul). Fuente: elaboración propia.



Los grupos ilícito/criminales de Alto Impacto tienen la capacidad de controlar o ser dominantes en amplias extensiones de territorio, así como de manejar grandes volúmenes (monetarios y de recursos) de las economías regionales. En el caso de aquellos incorporados a la extracción de naturaleza, toda la frontera norte occidental del país, desde La Guajira hasta el estado Apure (en la Región Los Llanos), está atravesada por el poder de la guerrilla colombiana. En la Sierra de Perijá (Z1), biorregión muy conflictiva tanto del lado de Colombia como crecientemente de Venezuela, junto a grupos armados irregulares de diverso tipo que proliferan en la zona, se despliegan disidencias de las FARC y el ELN, desarrollando estrategias de control territorial y economías de contrabando. Por ejemplo, en el conflicto 'Deforestación por la producción de malanga en la Sierra de Perijá' (Caso 3), se señala que el crecimiento del cultivo en la zona se estableció por la introducción del mismo a través de las FARC y las alianzas que estos establecieron con productores locales y desplazados colombianos, para lograr control territorial. Con la prohibición de la malanga (en 2014) y el progresivo freno a la expansión de dicho cultivo, estos y otros grupos criminales potenciaron el comercio ilícito de ganado o gasolina, e incluso se incrementaron cultivos ilícitos como la marihuana (Villafañe, 2017; La Tabla, 2020).

Como vemos en el mapa, esta biorregión, junto con la Costa Occidental y el Sur del Lago de Maracaibo, comparten estas dinámicas, algo que por ejemplo se evidencia en el Caso 8 'Impactos socio-ambientales de las plantaciones de palma aceitera', desarrollado en la muy conflictiva zona del sur del lago, atravesada en muy buena medida por violentas disputas por tierras. En este caso, tanto la guerrilla como el paramilitarismo colombiano y bandas criminales nacionales, ampliaron control del contrabando de la fruta de la palma hacia Colombia, así como de la propia actividad de productores y plantaciones (Urdaneta, 2019a; Crisis Group, 2020b).

Si bien en esta amplia zona norfronteriza los grupos criminales no se involucran con la extracción de carbón que, como ya se ha explicado, se consolidó a través de la industria formal (en declive), esto sí ocurre en la Región Andina, específicamente en la zona Lobatera (Táchira), donde se ha desarrollado minería industrial y artesanal en forma de cooperativas y particulares. Con el colapso, también se paralizó la actividad industrial de este sector, pero creció la artesanal, lo que sirvió al ELN y otros grupos irregulares para, desde 2019, intensificar su presencia en esta minería con el fin de financiar sus actividades. La guerrilla se introduce con fuerza en el contrabando del commodity hacia Colombia y busca controlar lo más posible la actividad de los mineros artesanales (La Opinión, 2022; La Patilla, 2022). Este estado andino es de importancia, tanto por la presencia de grupos irregulares como para el comercio lícito e ilícito no sólo de recursos naturales, sino primordialmente de bienes económicos como la gasolina, alimentos, drogas, entre otros.

Otra extensa zona a resaltar está en el sur de la Región Los Llanos, que además colinda con los departamentos colombianos de Arauca, Vichada y Casanare, donde hay fuerte presencia guerrillera. Estas áreas se caracterizan por la avidez que existe sobre tierras y madera (además de control territorial), lo que incrementa disputas en torno a estos recursos. Destacan, por un lado, la guerrilla, y por el otro, hacendados y ganaderos que, en las disputas pueden también recurrir a cuerpos privados de seguridad armados. En el conflicto 'Desplazamiento forzado del pueblo Pumé en el estado Apure' (Caso 26), los indígenas sufren una situación denigrante y la agresión por parte de estos dos grupos mencionados. Se señala la presencia del Frente 10 liderado por alias "Gentil Duarte" (disidencias) y la Segunda Marquetalia (FARC-EP), además del ELN, quienes controlan las economías transfronterizas de la zona, ocupan fincas y aplican extorsión a productores, y también obtienen beneficios económicos de la tala ilegal (Fundaredes, 2021a; Insight Crime, 2021a; Transparencia Venezuela, S/Fd).

En esta misma zona, y para el caso de 'Disputas en torno a los últimos relictos de la Reserva Forestal de Caparo' (Caso 25) en el estado Barinas, se da una situación similar ante las dinámicas de extracción de madera y ocupación de tierras ilícitas. No obstante, no se remite especialmente a la guerrilla, sino a un conjunto de actores irregulares que comercializan con la tierra, lo que incluye a grupos de personas pagadas por terratenientes para impulsar las tomas de las mismas de manera ilícita (y posteriormente

convertirlas en fincas), como se especifica que ocurre en la reserva forestal (Armando Info, 2018; OEP, 2018; Transparencia Venezuela, S/Fe).

Más hacia el centro del país, donde las estatalidades pueden tener niveles de ATPP más elevados, pero sobre todo donde el PEXC no se vincula con recursos tan estratégicos y con demanda internacional, el impacto y despliegue de los grupos criminales en los conflictos y la distribución ecológica se acota mucho más, como se evidencia en el mapa. Casos como el del 'Tráfico del pájaro "Cardenalito" en Lara' (No. 15), los 'pajareros' capturan las especies, y contrabandistas se encargan de comercializarlas, pero estos no establecen control territorial ni predominio económico o de poder, ni tampoco tienen mayor incidencia en el conjunto de la economía regional, lo que nos muestran los menores impactos de estos actores.

No obstante, el conflicto en torno a la 'Minería ilegal (de oro) en el sur de Carabobo' (No. 33), actividad que fue creciendo y provocando que bandas criminales de ese estado se fueran involucrando en el control de la misma, muestra una tendencia diferente para la región. Las bandas que operan están coordinadas por los "pranes" de las minas de Tocuyito, vinculados a su vez al Centro Penal con el mismo nombre (Impacto Venezuela, 2021; Mozo, 2023; Transparencia Venezuela, S/Ff). Un 'pran', término popularizado en Venezuela, es un líder criminal de una estructura delincuencial que controla una cárcel y, por tanto, todas las actividades que desde ella se coordinan. El pran y el 'pranato', como la forma de organización que éste encabeza, se han colocado en la cúspide de las estructuras criminales venezolanas (Crespo, 2015), mucho más en los tiempo de La Gran Crisis.

Por otro lado, tenemos a los grupos orientados al comercio ilícito de productos procesados (distribución económica), que también generan altos o medios impactos en los territorios. Primero, la zona que abarca al Lago de Maracaibo, la Costa Oriental del mismo, y las áreas que van hacia el norte, dirigiéndose a La Guajira en las fronteras con Colombia, están profundamente impactas por el crimen organizado que vive de las economías del contrabando, y que al mismo tiempo tiene efectos en los conflictos ecológico-distributivos. Un ejemplo de esto es el caso de 'La contaminación de la Laguna de Sinamaica por el contrabando transfronterizo de combustible' (No. 10), donde este ecosistema estuarino de bosques de manglar se constituyó en un paso clave para el traslado ilícito de este mercancía hacia Colombia, en un negocio millonario que involucra grupos de ambos países (Alto Impacto). Dados estos niveles de ganancias, las dinámicas del contrabando son muy determinantes en los territorios donde transita la mercancía, haciendo además que los habitantes se vean incorporadas a ellas.

Otro ejemplo lo vemos en las zonas petroleras, donde casi siempre hay presencia de grupos criminales. Como ya he mencionado, en casos muy excepcionales se da extracción de petróleo ilícito, pero generalmente estos actores tienen la capacidad de ejercer poder territorial y apropiarse de otros bienes. En El Tablazo, donde se encuentra el Complejo Petroquímico Ana María Campos (Caso 4), en debacle ante la crisis, bandas criminales se fueron adueñando del territorio, desplegando actividades delictivas

y erosionando el tejido social, debilitando aún más cualquier disidencia que surja ante las injusticias ambientales petroleras. Situación similar ocurre en la zona petrolera oriental, en Cabrutica (Caso 41), zonas aledañas a Tascabaña (Caso 42) o Jusepín (Caso 44), donde los grupos criminales tienen importante presencia y se dedican, entre otras cosas, a extraer chatarra y "material estratégico" de los campos petroleros. En el Lago de Maracaibo (Caso 5 y 9) se registra la presencia de los llamados 'piratas del lago', grupos muy agresivos que poseen armas de largo alcance, roban a pescadores y localidades, además de extorsionar (Frangie, 2020), e incluso varias de estas bandas se han dedicado a la captura de delfines y otras especies para traficarlas (Gutiérrez, 2018).

En un nivel de impacto más acotado tenemos 'El conflicto en torno al vertedero a cielo abierto Pedregalito en Cabimas' (No. 11), en el cual se han incorporado grupos criminales también interesados en la chatarra y otros desechos, así como en el control territorial. No hay extracción de naturaleza como actividad económica central y foco de conflicto, se registran impactos en el ambiente y la salud de las comunidades aledañas, pero el poder de estos grupos no suele trascender el territorio del vertedero.

También se destaca el despliegue del narcotráfico, presente en numerosas de las zonas señaladas como Perijá, El Tablazo, y los alrededores del Lago de Maracaibo, los estados Táchira, Apure y Nueva Esparta (insular). En Paraguaná, a pesar de ser una región petrolera militarizada, el Cartel de Paraguaná ha controlado la actividad económica en la misma y establece gran influencia política y en la población (Transparencia Venezuela, 2020). Aunque el narcotráfico no tiene una participación directa en las causas y dinámicas del conflicto en torno al complejo refinador de la zona (Caso 6), evidentemente tiene peso en la gobernanza de la península, donde numerosos pescadores han protestado por las afectaciones de los continuos derrames petroleros. Similarmente, en el caso de Sucre, donde se ubica el conflicto por 'El proyecto del puerto de aguas profundas en la península de Araya' (No. 46), el narcotráfico también controla amplios sectores del territorio. Se resalta su peso en la gobernanza e influencia en los pescadores locales.

Como he resaltado y se observa en el mapa, los principales flujos de commodities y economías transfronterizas se proyectan en muy buena medida hacia la amplia frontera con Colombia −sea por rutas terrestres y fluviales−, que abarca desde La Guajira hasta el extremo suroriental del estado Apure, el cual a su vez conecta con el Orinoco y la Amazonía. Mientras que la salida al Caribe desde la fachada norte es crucial para el contrabando de drogas y otros productos, que pueden incluir especies protegidas.

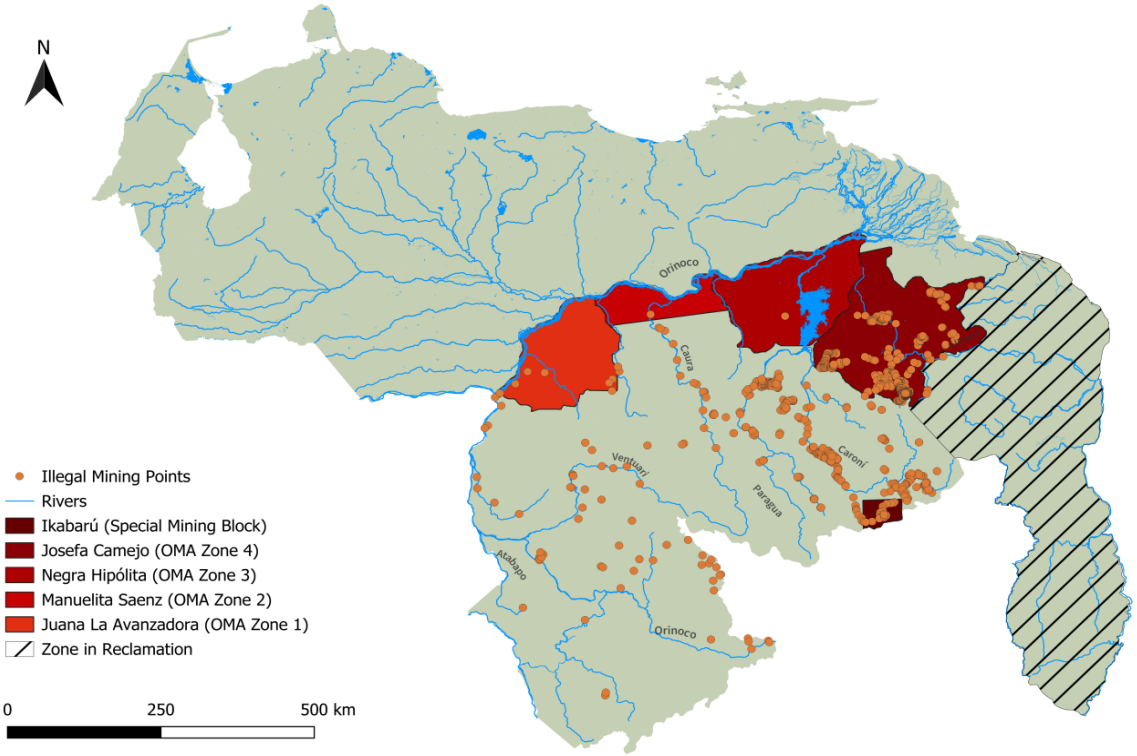
II.II.II.II Amazonía

En la biorregión amazónica, profundamente determinada por la minería ilegal y las particulares geografías del oro, predominan ampliamente los Grupos orientados a la extracción de naturaleza con Alto Impacto económico/territorial. Una excepción es la Región Ecopolítica Urbano-industrial de Bolívar (Z10) donde, al igual que en casos al

norte de Venezuela, se replica la presencia de grupos criminales locales vinculados al vertedero de Cambalache (Ciudad Guayana) y al comercio ilícito de chatarra (Caso 55); o bien al contrabando de agua que afecta a pobladores de la ciudad de San Félix (Caso 57).

El extraordinario despliegue de la minería ilegal amerita un examen más detallado de la actividad. A pesar del peso del AMO y la militarización en la biorregión, los marcos formales de este proyecto son insuficientes para comprender las dinámicas de reconfiguración del extractivismo y la construcción de poder territorial que allí se desarrollan. Más allá del AMO, la actividad minera se ha expandido a todos los rincones de la Amazonía, como lo podemos ver en la FIGURA 45. Mediante un análisis espacial minucioso, he identificado un total de 831 puntos mineros[10] que involucran a cada Región Ecopolítica. La actividad es ilegal en prácticamente toda la Amazonía, por varias razones: a) por la amplia presencia de grupos criminales a niveles incluso superiores a los del norte del Orinoco; b) por realizarse en áreas protegidas o donde está prohibida la minería; c) o por su condición de violación de normas constitucionales o leyes, como las flagrantes transgresiones a la prohibición del uso de mercurio para la minería, que en cambio se utiliza masivamente (Valverde, 2020; la no realización de consultas previas con comunidades indígenas (GTAI et al, 2016), y la ausencia de estudios de impacto ambiental (UN, 2021); por mencionar ejemplos.

FIGURA 45. Ubicación de puntos mineros ilegales en la Amazonía y del proyecto AMO. Fuente: elaboración propia a través de análisis espacial con la herramienta Google Earth, datos de los conflictos y otras fuentes secundarias



[10] Otros análisis más exhaustivos desarrollados con herramientas de análisis espacial más sofisticados han señalado la existencia de un número mucho mayor de puntos mineros en la Amazonía, que van desde 1.423 puntos (RAISG, 2020) a 3.718 (Poliszuk et al, 2022a).

Aunque hubo antecedentes en las décadas de los 80 y 90, desde inicios del siglo XXI comienza un crecimiento de esta actividad ilícita en el bioma, aunque aún estaba localizada y los grupos que la practicaban eran menos estructurados. La minería se va a acelerar y expandir agresivamente en La Gran Crisis, avanzando hacia nuevas fronteras de la extracción y arrasando numerosas hectáreas de bosque –que observamos en el capítulo anterior. El número total de personas involucradas en la actividad ha sido estimado en alrededor de 200 mil (Antillano et al, 2018; ORPIA et al, 2020), y las formas de organización y operación se hicieron más sofisticadas y consolidadas, con un gran peso de grupos criminales.

Este crítico escenario general ha sido reconocido por el propio gobierno venezolano (MDME, S/F), organismos internacionales (Consejo de Derechos Humanos ONU, 2020; HRW, 2020) y organizaciones no gubernamentales del país (FundaRedes, 2022a; SOS Orinoco, 2022a).

El mapa muestra cómo los principales sitios mineros del estado Bolívar, a saber, Las Claritas, Ikabarú, Caroní, Paragua and Caura, desbordan el área del AMO, aunque también se encuentran dentro de ella. Como 'Bloque Especial' de dicho proyecto, Ikabarú es probablemente uno de los ejemplos más ilustrativos de estas dinámicas de entrecruzamiento legal/ilegal. La actividad extractiva también se ha desplegado en el estado Amazonas, donde por decreto está totalmente prohibida desde 1989: en las cuencas de los ríos Ventuari, Atabapo y Sipapo, o en las propias cabeceras del Orinoco, produciendo fuertes impactos en la vida de los diversos pueblos indígenas que habitan esos territorios (como los yanomami, yabarana, hoti y e'ñepa).

IMAGEN 14. Mina de oro "Cuatro Muertos" cerca de Las Claritas. Fuente: Casey, Nicholas (2016). Hard times in Venezuela breed malaria as desperate flock to mines. New York Times. https://www.nytimes.com/2016/08/15/world/venezuela-malaria-mines.html

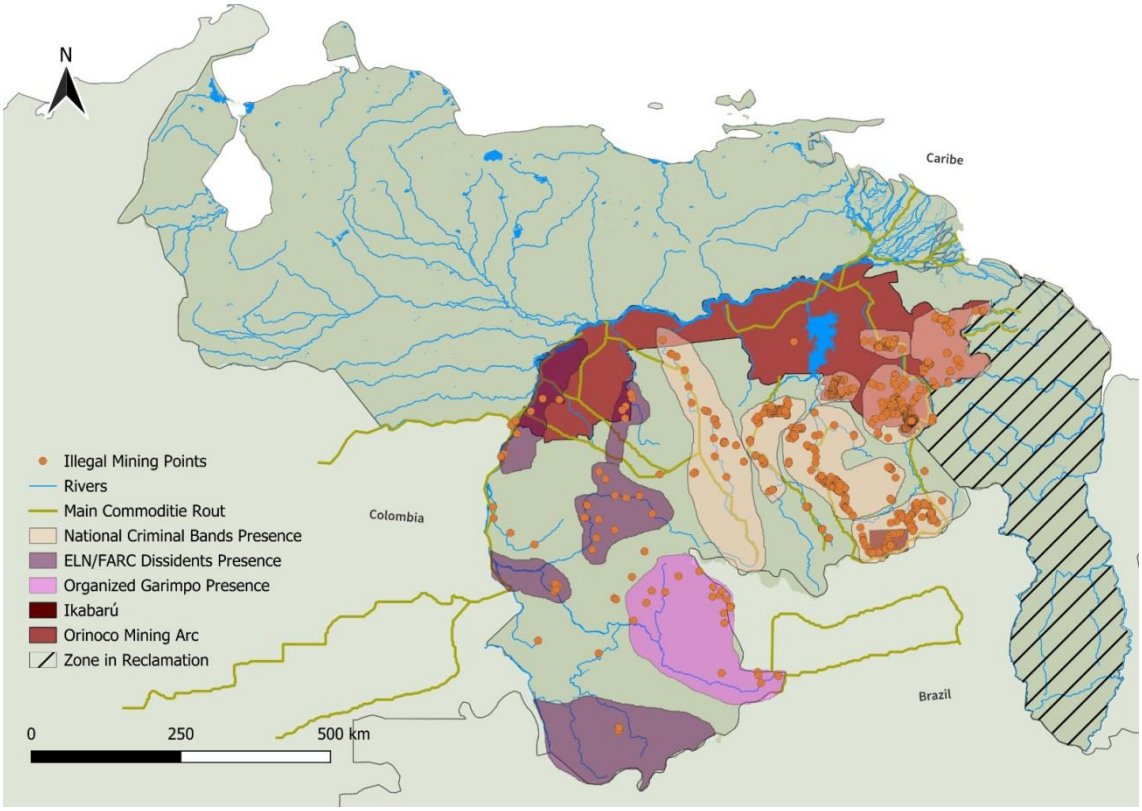


En casi todos los casos amazónicos, la minería está liderada y/o impulsada por grupos irregulares: bandas criminales nacionales denominadas "sindicatos", que pueden ejercer control armado sobre las minas y otras actividades relacionadas. También opera el ELN, disidencias de las FARC y el garimpo proveniente de Brasil, patrocinado por poderosas Facções. La predominancia territorial de uno u otro puede ser cambiante, con enfrentamientos y asociaciones entre ellos, por lo que la supremacía analizada representa la fotografía de un espacio-tiempo específico.

La presencia y actividad de estos actores delictivos puede desarrollarse tanto dentro como fuera del área del AMO, como podemos observar en la FIGURA 46. En el Área 4 de este proyecto, donde se encuentran las mayores concentraciones de oro del país, hay un marcado control de la minería ilegal y violentos regímenes territoriales liderados por grupos como el "Sindicato de Las Claritas" (Caso 52), la "Banda El Perú" en El Callao (Caso 51), y la "Organización R" en Tumeremo (Caso 53). En Ikabarú (Caso 61), desde la creación del AMO, que representó un extraordinario incentivo para la intensificación de la minería en la zona, también se registra la presencia de varios sindicatos, entre ellos la banda de "El Ciego" y, en menor medida, garimpeiros (Ramírez-Cabello, 2023). Esta banda ha operado más de 10 años y desarrolló varios tipos de actividades ilícitas, con un amplio despliegue de insumos y colaboradores, principalmente en los municipios Piar y Angostura (Ostos, 2021). Sin embargo, estos sindicatos no controlan Ikabarú debido a la resistencia organizada de las comunidades indígenas pemón, que también reivindican y practican la minería (SOS Orinoco, 2020a).

Fuera del Arco Minero la banda de "El Ciego" controla la actividad minera en Alto Paragua (Caso 58), aunque existen varias minas que también eran manejadas por comunidades pemón. Del mismo modo, Sindicatos dominan la cuenca del Caura, como ocurre en la parte alta de la misma (Caso 65); aunque no es el caso de la mina El Silencio (Caso 63) –ubicada en la parte baja−, donde estos han disputado el territorio, y extorsionan y confrontan violentamente a los indígenas que practican la minería (Vitti, 2016; Kapé-Kapé, 2022). A su vez, el "Sindicato de Barrancas" establece supremacía en amplias áreas del Delta del Orinoco (Caso 50), controlando no solo el contrabando de especies protegidas, sino también el traslado de insumos para la minería hacia otras zonas de la Amazonía, y las rutas de tránsito hacia las costas marinas del Atlántico (Transparencia Venezuela, 2022).

FIGURA 46. Ubicación de los principales grupos criminales, eje extractivos ilícitos (de acuerdo a los puntos mineros geolocalizados) y proyecto AMO, biorregión Amazonía. Se señalan también las principales rutas ilícitas de commodities transfronterizas (terrestres y fluviales). Fuente: elaboración propia



La participación protagónica del ELN y/o las disidencias de las FARC en la minería ilegal se ha desarrollado principalmente en el estado Amazonas, aunque también se señala su presencia e involucramiento en algunos casos en el estado Bolívar, como los de la cuenca del Caura. En Amazonas, los casos registrados en el municipio Manapiare (No. 70 y 71) y en el río Atabapo (Caso 72) han sido liderados por el 'Frente Acacio Medina' (FAM) de las disidencias de las FARC. El FAM nunca se plegó a los Acuerdos de Paz en Colombia y continuaron desarrollando varias actividades ilícitas, siendo la minería ilegal su principal fuente de ingresos (Insight Crime, 2023a). Estos han usado la fuerza de trabajo indígena para la extracción de oro en los casos mencionados (Véliz, 2019; Fundaredes, 2022b).

Otro caso emblemático es el del PN Yapacana (Caso 73), un área protegida de 320.000 hectáreas donde se ha desarrollado una extraordinaria expansión de la minería ilegal desde 2012. La actividad y el territorio han sido dominados mayormente por el ELN, mientras que esta se ha extendido en 2.227 hectáreas del parque para el año 2020 (SOS Orinoco, 2020b), articulando la zona a los circuitos comerciales transfronterizos ilícitos que giran en torno a los departamentos colombianos de Vichada y Guainía (Guarnizo, 2022). Se estima que el número de personas involucradas en la minería en Yapacana está entre 15.000 a 25.000, y esta zona se convirtió en el principal hotspot minero de todo el estado Amazonas (Kapé-Kapé, 2023; El Estímulo, 2023).

La guerrilla también ha jugado un rol crucial en el corredor extractivo configurado entre el municipio Cedeño (Bolívar) y el "Eje Carretero" (Amazonas), vinculado a la minería ilegal de coltán (Caso 68) y diamantes (Caso 67).

Respecto al garimpo organizado, este ha tenido un impacto significativo en los conflictos ubicados en territorio yanomami (zona fronteriza con Brasil), principalmente en los casos que han impactado a las comunidades indígenas del río Ocamo (Caso 74) y las del Cerro Aracamuni y río Siapa (Caso 75). En estas áreas que colindan con el estado brasilero de Roraima, la minería es promovida por grupos como el "Primeiro Comando da Capital" (PCC), que tiene fuerte presencia en dicho estado (Pereira-Chagas, 2024) y un gran peso transnacional.

Del mismo modo que con el norte del Orinoco, se hace mención a la presencia del narcotráfico. En casi todas las regiones mencionadas, esta actividad ilícita tiene importante presencia y hace parte del conjunto de actividades lucrativas de los grupos criminales, lo que evidencia incluso vínculos entre ésta y la minería. Esto es así, por ejemplo, en el municipio Atabapo, donde se ha revelado la relación entre puntos de minería y una red de pistas clandestinas utilizadas para traficar oro y drogas (Poliszuk et al, 2022a). Atabapo es además un corredor fluvial crucial tanto por su conexión con el Orinoco, para ir desde Colombia hacia Venezuela, como con Río Negro para vincularse con Brasil (Moncada, 2020). Otro ejemplo clave de una relación similar la vemos en el llamado "narcogarimpo", que muestra cómo desde el narcotráfico –impulsado por las facções− se invierten recursos para impulsar la actividad minera ilegal (Pereira-Chagas 2024), lo cual tiene impacto en los casos examinados en territorio yanomami.

Casos excepcionales son la minería ilegal en el río Carrao (Caso 59) dentro del emblemático PN Canaima, actividad llevada a cabo por comunidades indígenas pemón y no por grupos criminales, aunque el parque está rodeado por estos últimos actores. A su vez, aunque en el Caura predominan estas organizaciones ilícitas, el conflicto 'Habitantes del bajo Caura protestan por la instalación cerca de Maripa de balsas para explotación de oro en el lecho del río' (Caso 62) es generado primeramente por la CVM. Algo similar se da en el caso de la bauxita, que está gestionada por Bauxilum-CVG, aunque como ya mencioné en Los Pijiguaos se resalta la presencia de grupos irregulares, especialmente la guerrilla colombiana.

IMAGEN 15. FANB anuncia desmantelamiento de "campamento militar TANCOL" en Los Pijiguaos, e incautación de armas de guerra, municiones y otros pertrechos. Diciembre 2022. Fuente: https://twitter.com/dhernandezlarez/status/1600299883663003649/photo/1



Este entramado de extracciones ilícitas puede también ser comprendido desde una perspectiva comparativa continental: la red RAISG (2020), que lleva un sólido proceso de investigación y monitoreo en todo el bioma Panamazónico, ha señalado que para el año 2020, 32% de los puntos mineros que se despliegan en este se encontraban en Venezuela, aunque el país solo posee el 5,6% del total de bosques amazónicos. Esto corrobora que el extractivismo que se desarrolla en la Amazonía venezolana se caracteriza por una particular intensidad, voracidad y absoluta impunidad, generando quizás, los niveles más altos de 'expoliabilidad' (*lootability*) (Le Billon, 2001) de toda la biorregión.

Como se ha mencionado anteriormente, el oro está en el centro de este proceso, aunque los diamantes, el coltán, las especies protegidas y la madera hayan también tenido presencia en algunos conflictos. Esta masividad de los puntos de extracción (ilícito) de oro es la base de la expansión de los niveles de producción del metal que ha logrado ubicar a Venezuela en el puesto 30 a nivel mundial en 2022, con cifras similares a las de Chile (33,9 tons/año) o Níger (34,5 tons/año) (World Gold Council, 2022). Sin embargo, apenas el 25-30% de lo extraído logra ingresar al Banco Central de Venezuela (OCDE, 2021; Transparencia Venezuela, S/Fg), siendo que el grueso del oro se fuga por los canales ilícitos internacionales de commodities o a grupos criminales o corruptos.

La extensión que alcanza la minería ilegal puede dar cuenta de los rasgos profundamente ilícitos del régimen extractivista en su conjunto, además de evidenciar espacios y dinámicas de coexistencia y/o articulación entre los ámbitos de lo legal e ilegal que requieren mayor profundización en el análisis de Nivel Local, con el fin de entender su funcionamiento específico.

II.II.III Nivel Local

Llegados a este nivel, examino con mayor detalle la especificidad de las operaciones y estrategias para la apropiación/extracción de naturaleza y el ejercicio de autoridad territorial que configuran las gobernanzas en el extractivismo, tanto por parte de diversos grupos criminales como de actores estatales.

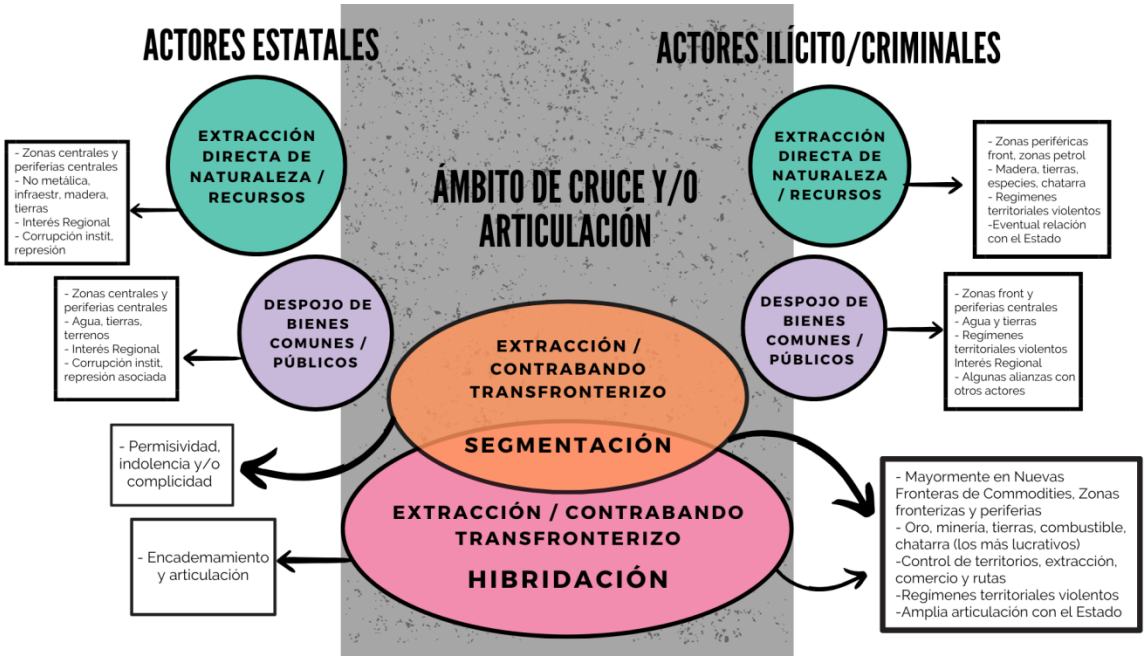
Hemos visto que ambos grupos de actores de poder han impulsado fundamentalmente economías de despojo, en un marco de colapso, prevalencia de la ilegalidad y búsqueda de sostenimiento del poder a toda costa. Esta orientación general es determinante en las operaciones y estrategias desarrolladas por los mismos. Por otro lado, dado el amplio despliegue territorial de estos dos tipos de actores, destaco la existencia de un importante espectro de unión entre ellos, por lo que pongo el foco especialmente en las formas de asociación y cooperación conjunta, cruciales en estas nuevas configuraciones de gobernanza.

Partiendo del análisis de casos, he propuesto un esquema que presento en la FIGURA 47, en el que se muestran las 4 formas dominantes en las que se desarrollan dichas operaciones y estrategias:

a) Extracción directa de naturaleza/recursos;
b) Despojo de bienes comunes y/o públicos;
c) Extracción y contrabando transfronterizo SEGMENTACIÓN; y
d) Extracción y contrabando transfronterizo HIBRIDACIÓN.

Desde la noción de gobernanza utilizada para esta investigación, se analizan sus funciones en torno al control territorial y la imposición de autoridad; su manejos de los recursos (naturales o mercancías); la gestión de la población (conflictos, descontentos o búsqueda de legitimidad y consensos); y los niveles de articulación cooperativa, negociada o disputada que pudiesen desarrollarse entre los actores involucrados en los conflictos. Como veremos en la exposición, estas expresan diferenciaciones que también están muy determinadas por las regiones/commodities y tipos de estatalidad.

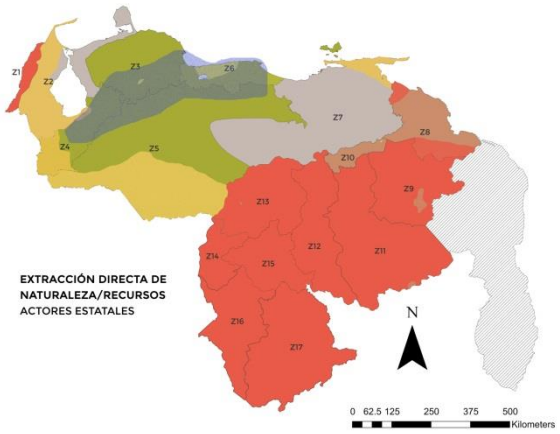
FIGURA 47. Formas de operaciones y estrategias territoriales de los actores de poder en las gobernanzas del extractivismo en La Gran Crisis. A la izquierda el ámbito estatal, a la derecha el de los actores ilícito/criminales, en el medio se contempla un espectro de cruce y articulación entre ellos. Cada forma posee un cuadro donde se sintetizan los principales rasgos de gobernanza. Fuente: elaboración propia



II.III.II.I *Extracción directa de naturaleza/recursos*

Esta categoría nos remite a operaciones y estrategias de extracción en la que los actores participan directamente de las mismas, con niveles de asociación nulos, escasos o débiles con otros actores de poder.

<u>II.III.II.I.I Predominio de actores estatales</u>



Esta forma particular la desarrolla e impulsa el Estado básicamente en territorios de periferias tradicionales centrales y Ciudad Centro Político (Estatalidades Tipo 4 y 6), sin articulación con algún grupo criminal. Esto se observa en regiones con ATPP Alto/Medio, donde los commodities involucrados tienen importancia media (como los minerales no metálicos, madera, tierras, etc), menor atractivo para poderosas economías criminales –a diferencia del oro, el combustible o la cocaína–, y están vinculados a intereses regionales.

En el caso ‘Conflictos campesinos en torno a las plantaciones de eucalipto en Ospino’ (No. 27 - Portuguesa), y ante la debacle de la empresa Cartones de Venezuela, tomada por el gobierno nacional en septiembre de 2018 (antigua Smurfitt Kappa Cartón de Venezuela), trabajadores y líderes sindicales señalaron que se había instalado un proceso de extracción ilícita de madera y/o el desvío de la misma por parte de integrantes de la propia empresa estatal, y denunciaban a su directiva de participar en ello (Chapellín, 2022; Figueroa, 2022). En otro caso en el estado Portuguesa, grupos movilizados también indicaron que funcionarios estatales estaban ejecutando extracción ilícita de madera de tecas en la Zona Protectora Mitar Nakichenovich e incluso en la Sede Administrativa del Minec en Araure (Caso 28) para dirigirla hacia aserraderos privados.

En el Caso 12 ‘La minería no metálica (areneras) en el marco del conflicto en torno al Valle del Turbio’, esta actividad se ha expandió desde 2014/2015 promovida desde el gobierno regional, a pesar de las oposiciones comunitarias y del hecho que la misma viola los parámetros del Área Bajo Régimen Especial (ABRAE) donde se desarrolla. En la extracción se produce el involucramiento del PSUV, militares y funcionarios del gobierno, e incluso grupos movilizados, diputados y concejales regionales señalaron la compra de la empresa Pedrera Santa Rosa, la principal en la ejecución minera, por parte de familiares de políticos oficialistas (El Impulso, 2017; Blanco, 2019). En el conjunto de actuaciones estatales destaca también la inacción del Minec para resguardar la ABRAE o la desestimación de las medidas cautelares introducidas en 2018 por grupos ambientalistas para remediar y detener los impactos que se generan en ese valle, la cual fue ejecutada por el Tribunal Superior Agrario en 2021.

Estos patrones se repiten en el grueso de los casos de este tipo. La minería de sílice se termina imponiendo pese a las oposiciones de los actores sociales y ambientalistas del municipio Torres (Lara), abriendo la explotación en el Cerro El Plan bajo un esquema de asociación con la empresa Inesco, en la cual se constataba falta de consulta a las comunidades, estudios de impacto ambiental amañados e indolencia a las peticiones de auditoría ambiental (Caso 14). Algo similar permitió la apertura de la minería en el Monumento Natural Morros de Macaira por parte de la alcaldía del municipio José Tadeo Monagas (Guárico – Caso 31), y los primeros avances de la propuesta de minería de caliza en el Parque Municipal Cerro La Vieja (Caso 29).

Tomando en cuenta estos últimos casos mencionados, se resalta la tendencia hacia la conversión de áreas protegidas, incluyendo los parques nacionales, en nuevos nichos de negocio y zonas de mercantilización de la naturaleza, a través de actividades sin permisos ni estudios de impacto, y violando las normativas del parque y leyes ambientales. Esto se evidenció en el caso 36 ‘Movilizaciones en Defensa del Parque Nacional Waraira Repano/El Ávila’, aunque no implicaba una actividad de extracción de recursos sino de despliegue territorial de infraestructuras para el aprovechamiento de la naturaleza. El nuevo proyecto del teleférico de Caracas a La Guaira, o la construcción de casas de lujo (actividad prohibida en el área protegida), varias de las cuales eran para funcionarios de alto nivel del Estado, implicó actividades inconsultas que fue generando

incendios, el agrietamiento de casas y peligro de desplazamiento de las mismas, el arrase de cultivos para poder llegar a las zonas donde serían instaladas las nuevas torres, y el traslado de materiales de construcción en camiones militares que dañaban las vías, los cuales eran escoltados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado que terminaban prestando servicios privados en uniforme (Camargo, 2019; Segovia, 2020). Además, Inparques impulsó varios intentos para reformar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), con el fin de que actividades que no están permitidas puedan estarlo, y así favorecer algunos negocios en el área.

Por último, la gestión de la población y los conflictos tendió primordialmente hacia la represión, aunque también se registraron otros mecanismos de dominación, y el cumplimiento de algunas demandas puntuales para los grupos movilizados. Ante los 'Conflictos en torno a la explotación de cantera en el río Naiguatá' (Caso 35), las movilizaciones que iniciaron desde 2013 fueron castigadas con la imputación de varios vecinos por protestar en 2014. En 2015, el mediador de Hidroven y activista social, Santiago Arconada, era arrestado. En el caso de las resistencias contra la minería de sílice, integrantes de comunidades y organizaciones denunciaron el amedrentamiento y maltrato por parte de funcionarios de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad como el FAES hacia quienes protesten contra la actividad, lo que ha incluido también a grupos paraestatales armados (Hernández, 2017; El Pitazo, 2022). Respecto a las movilizaciones contra la minería en los morros de Macaira, los grupos involucrados señalaron mecanismos de intimidación a los vecinos; y para el caso del parque nacional Waraira Repano/El Ávila, integrantes de la comunidad de Galipán que se opusieron al proyecto del teleférico denunciaron que fueron objeto de amedrentamientos, amenazas, asedio jurídico, presión psicológica y destrucción de propiedades para imponer el mismo (Habitantes del poblado autóctono de Galipán, 2019; Camargo, 2019).

La represión también se desplegó en otros conflictos donde la Extracción directa estatal no fue central debido a su declive (formal), pero por diversos episodios tuvieron contestación social. Esto se vio en casos como el de trabajadores de la cementera estatal Vencemos (Caso 43), algunos de los cuales han sido detenidos por protestar por las terribles condiciones de la industria, mientras que se han implantado grandes temores en las comunidades para denunciar. En el caso de la minería de carbón en el estado Zulia, comunidades locales han afirmado que las presiones para la reactivación/expansión de la actividad en la zona han venido de la mano del despliegue de militares y varios cuerpos policiales en los poblados de las parroquias Luis de Vicente (municipio Mara) y Elías Sánchez Rubio (municipio Guajira), con prácticas de amedrentamiento a los pobladores (Portillo, 2020). No obstante, al mismo tiempo surgieron iniciativas contrastantes, en este caso por parte del Alcalde del municipio Mara, quien en febrero de 2021 junto a la Cámara edilicia, declaró los ríos Socuy, Maché y Cachirí zonas de protección ambiental y valor cultural con las comunidades wayuu que allí habitan (González, 2021).

Pese a lo generalizado de la represión, otras expresiones de reivindicación y demandas puntuales pudieron también registrarse en otros casos; de hecho es dentro de esta forma

de operación y estrategia donde se puede hallar el mayor rango de concesiones a las luchas por parte del Estado. Ya se ha mencionado que en el caso de Reserva Forestal de Caparo, la cual había sido invadida por grupos que buscaban introducir esas tierras en mercados ilícitos o en favor de terratenientes, en enero de 2018 se lograba respuesta positiva del Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, al decretar medida de protección ambiental de la Estación Experimental Caparo de la Universidad de Los Andes –la zona de bosque que aún queda de toda la muy deforestada RF−, lo que fue corroborado posteriormente por el presidente Maduro. En el caso 21 'La memoria histórica en el valle de Mocotíes y su vigencia para el rechazo a la minería en Bailadores', gracias a la movilización de las comunidades se lograba detener la construcción de una carretera que sospechaban era para abrir nuevamente la minería en la zona, al tiempo que el Minec iniciaba procedimientos sancionatorios a la empresa Estancia Valle Plateado C.A. por construcción ilegal y desacato a la suspensión de la construcción.

Una última mención a estas expresiones de concesiones estatales tienen que ver con las iniciativas de conservación, con muchas de las cuales las instituciones del Estado se han sentido más cómodas para cooperar, sea porque estas no presentan un cuestionamiento fuerte y frontal a los procesos de extracción de recursos, sea porque les permite 'enverdecer' su imagen, o bien por el carácter más negociador y propositivo de las organizaciones conservacionistas. Esto se ha evidenciado en el conflicto 'Las luchas para salvar y regenerar la Laguna de Urao' (Caso 19), donde las instituciones estatales se han involucrado con las organizaciones locales en la salvación del lago. Ejemplo de ello es la medida oficiosa cautelar de 2014 por parte del Juzgado Superior Agrario de Mérida ordenando detener las construcciones, la deforestación, el desvío y contaminación de afluentes que perjudican el cuerpo de agua; o planes de acción que impulsaba la Alcaldía del municipio Alberto Adriani desde 2017 para su recuperación, paralización de obras civiles, el dragado de sedimentos y la reforestación periférica. A estas acciones se les sumaron las FANB para potenciar medidas de vigilancia.

II.III.II.I.II Predominio de actores ilícito/criminales estatales

En algunos pocos casos encontramos iniciativas de extracción de recursos por parte de grupos criminales que escasamente se asocian con actores estatales. Esto es así tanto por darse en las zonas de ATPP Bajo/Nulo −en algunos casos en zonas recónditas de la geografía nacional, fundamentalmente en áreas de Estatalidad Tipo 5− como por los commodities de nivel de interés intermedio (aunque los actores puedan tener un carácter transfronterizo). Ejemplos de esto lo vemos en el sur de la región de Los Llanos, como en la Reserva Forestal de Caparo, donde los grupos irregulares de la zona extraen madera; y en el estado Apure, donde la guerrilla colombiana realiza tala ilegal en grandes extensiones de tierra, tanto para comercializar el recurso como para la construcción de pistas clandestinas dedicadas al narcotráfico (Fundaredes, 2021a). En

ambos casos el alcance de la intervención del Estado, al ser de bajo nivel, deja con mayor margen de libertad el accionar de estos grupos.

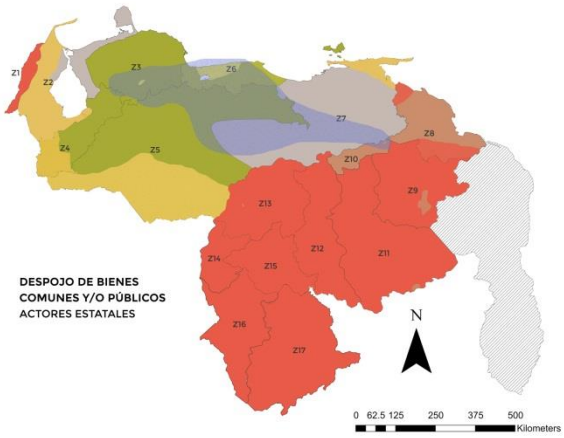
En esta región, los grupos logran establecer poderes territoriales y autoridad, sobre todo en el estado Apure, aunque en el caso específico del área de bosque de la Reserva Forestal mencionada, estos no se instalan. Por otro lado, dicha disposición territorial la logran a través de las armas, la violencia y prácticas como la extorsión (cobro de 'vacunas'), el desplazamiento de productores agrícolas y hasta el reclutamiento de integrantes de los pueblos indígenas (Fundaredes, 2021b; Transparencia Venezuela, S/Fd).

II.III.II.II *Despojo de bienes comunes y/o públicos*

Esta forma nos remite a operaciones y estrategias de despojo de bienes comunes o públicos como el agua y la tierra para el enriquecimiento de los actores estatales y criminales, generalmente en asociación también con algunos actores privados. Los niveles de articulación entre los grupos de poder se incrementan levemente respecto a la forma Extracción directa de naturaleza/recursos.

<u>II.III.II.II.I Predominio de actores estatales</u>

Se desarrolla en varias regiones, fundamentalmente en periferias tradicionales centrales y Ciudad Centro Político (Estatalidades Tipo 4 y 6). El foco del despojo es el agua y la tierra, esta última sea como factor de producción o como terreno para ejecutar otros intereses económicos, y el interés de enriquecimiento es regional.



Respecto al agua, lo que ha operado es un proceso de desvío o acaparamiento del líquido de origen público, para crear mercados paralelos del mismo, lo cual se repite en varios casos. En el conflicto 'La defensa del embalse Los Quediches' (No. 13), se muestran varias formas en que esto ocurre. Una, tomas de agua que son controladas por representantes de la institución hídrica de la región (HidroLara), quienes se articulan con camiones cisternas privados para desviar el agua, acapararla, y obligar a la población a recurrir a estos para abastecerse, permitiendo tanto a los distribuidores ilícitos como a los funcionarios estatales enriquecerse con su venta –estos últimos recibiendo pagos de los primeros. Dos, el conflicto por el embalse se produce por el desvío de ríos adjudicado a intereses económicos particulares y militares (usufructo en

tierras y fincas privadas), contando con la complicidad institucional, lo que afectó el acceso al agua en el municipio Torres. Tres, proliferan llenaderos ilegales de agua tomados de la aducción (sistema de conducción que conecta zonas del municipio Torres) establecidos por hoteles, agropecuarias, fincas, clubes, complejos turísticos entre otros, cuyas tomas estarían custodiadas por milicianos del Estado (El Impulso, 2015; El Informante, 2018; Rodríguez, 2022).

En el caso 57 'Los impactos socio-ambientales de la contaminación del embalse Macagua', en el norte de la Amazonía y la única área urbano-industrial de la misma, se desataron del mismo modo conflictos tanto por la gestión del embalse como de la distribución del agua. En esta última también se creó un sistema paralelo de suministro del líquido a través de su desvío desde los sitios de recarga y la entrega irregular a camiones cisternas, motorizado por la corrupción de funcionarios de Hidrobolívar (Faoro, 2016a; 2016b).

En cuanto a las tierras, en la disputa por la gestión y 'ecocidio' en el Predio Los Tramojos (Guárico – Caso 30), se producía un despojo en la medida en la que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) le entregaba parte de las mencionadas parcelas al gerente general de la Agropecuaria Los Tramojos, José Elias Chirimelli, desconociendo las cartas de garantía de permanencia que se le habían otorgado a varias familias campesinas en 2010. A partir de esta acción del INTI, en 2016 el gerente ejecutó un desalojo con apoyo del tribunal agrario, la alcaldía de Camaguán y las fuerzas de seguridad del Estado. Posteriormente, se emitían nuevos documentos de usufructo de las tierras para el terrateniente. En el conflicto por el Cerro La Vieja, de interés para el gobierno del estado Lara, se aplicó una medida similar, en el sentido que los representantes de la Corporación Industrial Venelara recibieron de manera exprés e irregularmente títulos de tierras (también a través del INTI) e incluso la movilización para usos particulares de carpas militares y soldados, con el fin de que, posteriormente, estos desarrollaran la iniciativa minera de caliza, arcillas y arenas. Campesinos de la zona señalaron que se han cercado lugares de acceso al cerro, y se han usado estrategias de amedrentamiento para forzar a parceleros locales a vender sus tierras y expandir las áreas del proyecto, mientras que varios campesinos fueron desplazados (De Sousa Infante, 2018; 2019; Solano, 2019).

En el desarrollo de estos mecanismos de despojo, las gobernanzas siguieron determinadas por formas de represión asociadas a los mismos. En el conflicto en el PN Waraira Repano/El Ávila, a los integrantes de las comunidades que se opusieron a entregar sus tierras para la instalación de las torres del teleférico recibieron amenazas a través de empleados de las empresas AlfaMaq (privada) y VENTEL (estatal), advirtiéndoles de "lanzarles al FAES" si no cedían sus tierras sin que estos reciban indemnización y reubicación. En una reunión en 2015 organizada por la empresa y el Gobernador del estado La Guaira, Jorge García Carneiro, también llegaron escoltas y colectivos armados, lo que generó gran intimidación en los asistentes y frustró cualquier posibilidad de crítica en dicha asamblea (Segovia, 2020). En el caso de Los Tramojos,

se impusieron medidas de judicialización contra las familias campesinas que habían sido despojadas y la Jueza superior agraria del estado Guárico en 2017 calificó a estas como 'ocupantes irregulares'. En 2019, ante la toma de este predio por parte de 40 de estas familias campesinas, se ejecutaba el desalojo a través de efectivos de la DGCIM, la policía del municipio Camaguán y las FAES, además de amedrentar a estas familias y retener a un vocero de las mismas (OEP, 2019a). No obstante, ante la persistencia de las movilizaciones campesinas, en abril de 2022 el INTI anuncia la devolución de las tierras a los campesinos.

Situación similar vivieron los campesinos desplazados en el conflicto en torno al Cerro La Vieja. Voceros del Comité Pro Defensa del Parque Municipal Cerro La Vieja denunciaron que cuerpos de seguridad estatales como el CONAS (de la Guardia Nacional Bolivariana – GNB), 'sembraron' armas y abrieron procesos penales contra varios campesinos que se oponían a la explotación minera, los cuales estuvieron arbitrariamente detenidos y bajo régimen de presentación (González-Plessmann, 2019). Además, señalaron que hombres encapuchados les amenazaron para que vendieran sus tierras.

Las protestas contra las formas de acaparamiento de agua tuvieron respuestas estatales similares, con la detención (y posterior liberación por presiones de las comunidades) del activista y líder de las movilizaciones en defensa del embalse Los Quediches, Wiston Montes, quien posteriormente se vio obligado a salir del país. Como contraparte, el gobernador del estado Lara anunciaba en 2021políticas respecto al embalse, como la reactivación de los cuatro motores y la reparación de filtraciones y válvulas que habrían recuperado 200 litros por segundo; sin embargo, los problemas de acceso al agua siguieron siendo muy serios en el municipio. En San Félix, estado Bolívar, las persistentes y numerosas protestas populares por la falta de agua, producto de la crisis de funcionamiento del embalse de Macagua y los acaparamientos del líquido que hemos mencionado, también tuvieron varios episodios de represión de las mismas.

II.III.II.II.II Predominio de actores ilícito/criminales

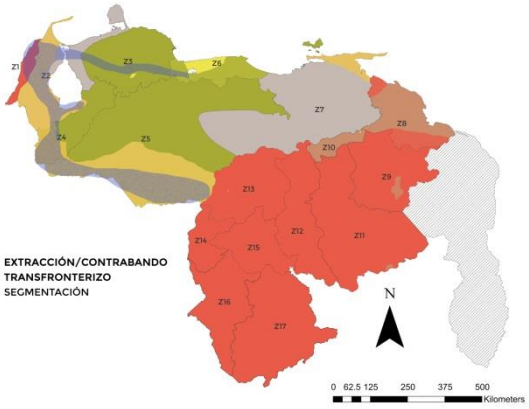
En cuanto a los actores criminales, los casos de este tipo se presentaron en regiones de Estatalidad Tipo 1 y 5, pero también en zonas periféricas centrales, todos vinculados a la tierra. En esta categoría la expresión general fue de asociación de grupos de choque o de vigilancia privada armados con terratenientes, que a su vez pudieron estar de alguna forma en relación con actores estatales.

En el caso 'Indígenas yukpa de los ríos Yaza y Tukuko luchan por sus territorios y contra la minería de carbón en la Sierra de Perijá' (No. 2), se desarrolló un conflicto emblemático por tierra y territorio por parte de estas comunidades originarias que también supuso un enfrentamiento con ganaderos zulianos, quienes tienen considerable poder en la región. El líder de esta lucha, el cacique Sabino Romero, fue asesinado por

un sicario en 2013, al inicio de La Gran Crisis, siendo que los principales grupos movilizados señalan que el acto fue encargado por ganaderos (Meléndez, 2019). Para 2016 ya se registraban al menos 10 yukpas asesinados y organizaciones locales en defensa de los indígenas, como la Sociedad Homo et Natura, denunciaron que muchos de estos asesinatos fueron realizados por criminales a sueldo presuntamente vinculados a estos sectores poderosos de la zona (Sociedad Homo et Natura, 2015; 2016a; 2016b). Sabino Romero era al mismo tiempo asediado por militares y policías municipales, y su familia declaró que esta situación continuó dándose contra ella luego de su asesinato (Amnistía Internacional, 2017).

Situación parecida se vio en el conflicto de Los Tramojos, donde en 2022 los campesinos denunciaron el uso de grupos armados privados y actos de violencia dirigidos por los terratenientes que disputan estas tierras, siendo señalado que estos actores podían operar en cooperación con funcionarios del Estado. En el caso de la violencia sufrida por los indígenas pumé en Apure, también se señala la existencia de estos grupos que trabajan para latifundistas y ganaderos.

II.III.II.III *Extracción y contrabando transfronterizo - SEGMENTACIÓN*



Las dos siguientes modalidades tienen que ver con economías más complejas que insertan la extracción de recursos en circuitos de comercio ilícito transfronterizo, lo que implica cadenas de valor más intrincadas y un mayor número de actores involucrados. Esto a su vez supone que los niveles de relación entre los actores estatales y criminales son más altos. En esta, modalidad que denomino de Segmentación, se trata de formas de relacionamiento pasivo, dado que los actores mantienen la separación de sus espacios y, sobre todo, el Estado sabe de la actividad ilícita pero ‘deja hacer’.

Esta forma particular se desarrolla en territorios periféricos fronterizos aunque también pueden darse en periferias centrales y nueva frontera de commodities, con un abanico más variado de recursos (carbón, oro, especies silvestres, madera y productos agrícolas). Además, se resalta el hecho que estas operaciones responden a intereses tanto nacionales como internacionales.

Debido a los niveles de relacionamiento, analizo los actores de manera integrada a partir de tres casos: minería de carbón en Lobatera (Caso 20 – Táchira), minería ilegal de oro al sur de Carabobo (Caso 33) y algunos casos agrupados de tráfico de especies protegidas.

II.III.II.III.I Minería de carbón en Lobatera (Táchira)

En este conflicto, grupos irregulares como el ELN han desarrollado el contrabando del mineral hacia Colombia. Un mecanismo ha sido el de obligar a los mineros artesanales a venderle el recurso a bajo precio. Se cuenta el control de la actividad extractiva en sectores como Minas del Carbón de Lobatera, Los Predios del tanque del Agua del Desvío, El Rodeo y La Capilla; y el trazo de la ruta de salida del recurso por 'caminos verdes' hacia el país vecino (Fundaredes, 2020; La Opinión, 2022; La Patilla, 2022). Además, el contrabando de carbón se articula con otras actividades como la extorsión y el narcotráfico, y las amenazas y ataques a productores locales si estos no ceden a sus peticiones. Todo esto ocurre en una zona donde también está emplazada la industria formal estatal de carbón, pero como ya fue dicho, quedó paralizada y lo que opera fundamentalmente es la extracción a través de cooperativas.

En cuanto al Estado, el accionar de la guerrilla puede desarrollarse dado que las instituciones no intervienen ni suponen restricción alguna a ella en este caso, a pesar del público conocimiento de esta presencia en el estado Táchira. Esto expresa un comportamiento estatal de permisividad con estos grupos irregulares, que debe ser entendido en el marco de una relación que ha sido generalmente de colaboración a escala nacional entre las guerrillas colombianas y las autoridades venezolanas, que en lo regional se ha expresado en vínculos de estos grupos armados con líderes políticos locales para poder operar con impunidad (Malamud, 2019; Ebus, 2021; Insight Crime, 2022a); algo que tampoco está exento de contradicciones y tensiones.

No obstante, esta permisividad no ha sido la misma para los mineros artesanales, quienes han denunciado que funcionarios estatales armados los amedrentan y amenazan por protestar por reivindicaciones laborales, además de su queja por las condiciones deplorables de vida en el municipio (La Opinión, 2022b).

II.III.II.III.II Minería ilegal de oro en el sur del estado Carabobo

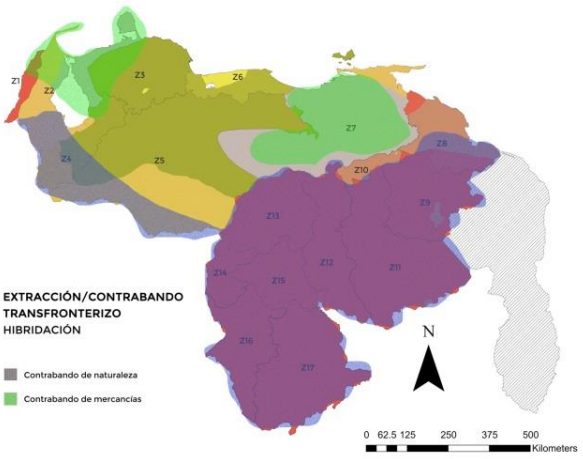
Otro ejemplo de permisividad/complicidad que se da como una relación pasiva la encontramos en el caso de la minería ilegal de oro en Carabobo, en el que bandas criminales han pugnado por mantener el control de la compra y venta del mineral extraído en varias zonas de la entidad, como el municipio Libertador. Entre dichas bandas se señalaron 'pranes de las minas de Tocuyito' que lideran los internados judiciales de la misma localidad, lo cual, como hemos mencionado, pueden tener gran poder e influencia en la zona. Estos grupos obligan a las personas que extraen el oro a vendérselo, o bien les cobran 'vacuna' para permitirles que puedan practicar la actividad (Castellanos, 2018; Impacto Venezuela, 2021; Transparencia Venezuela, S/Ff). Los grupos ejercen violencia contra la población, y practican otras actividades delincuenciales como robos y extorsión, lo que ha provocado que agricultores hayan

vendido sus tierras. La posición estatal regional ha sido de una cierta permisividad, particularmente por parte de policías y otros cuerpos de seguridad, pero no se registra un involucramiento estatal claro en las operaciones de extracción. Las escasas concentraciones de oro de la zona y su centralidad geográfica en relación a la estatalidad (muy cerca de la importante ciudad de Valencia) disminuyen el atractivo de dichas operaciones en la región, a diferencia de lo que ocurre en la Amazonía. Aunque se han producido diversos operativos militares que desmantelaron minas, la actividad ha persistido aunque con intermitencias.

II.III.II.III.III Tráfico de especies protegidas

Los casos de contrabando de especies pueden, en el grueso de las veces, estar también determinados por permisividad/complicidad pasiva del Estado, como se ha evidenciado en el conflicto 'La defensa de especies animales en riesgo en el Sur del Lago de Maracaibo (Zulia)' (No. 9). Ciertamente, hay por un lado detenciones puntuales a quienes han traficado con dichas especies, se registran algunas denuncias publicadas por la fiscalía general, y se ha dado la colaboración institucional con actores locales, como ha ocurrido con el caso de Inparques y su apoyo al proyecto de conservación Sebraba. No obstante, en realidad se registraron pocas penalizaciones al volumen creciente de ilícitos ambientales en la zona y al aumento de la cacería y el tráfico de especies, numerosos casos han ocurrido en la impunidad, el Minec ha sido reacio a la hora de reportar alguna denuncia, y se puede constatar la venta de partes y piezas de animales como el jaguar en sitios públicos, sin consecuencias. En el caso del tráfico del Cardenalito (Caso 15), la cadena que va desde quienes los capturan hasta los contrabandistas se desarrolla en las redes existentes de distribución de otros bienes ilícitos y dados los escasos controles que existen para la actividad, lo que ha contribuido a su crecimiento. Las aves se ofrecen en grupos de Facebook, en la carretera Lara-Zulia o en los alrededores de algunas áreas protegidas. Incluso, además de la permisividad e indolencia, se ha señalado que entre los contrabandistas pueden estar militares, y que los traficantes han podido operar con certificados falsificados del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), aunque no se especifica si estos fueron obtenidos con ayuda de funcionarios del Estado (Castro y Asuaje, 2013; Gutiérrez, 2017; Sánchez, 2018). Como expliqué anteriormente, las especies silvestres no son objeto prioritario de vigilancia y codicia por parte de los actores estatales, lo que le otorga un margen un poco mayor de acción criminal que otros recursos.

II.III.II.IV *Extracción/contrabando transfronterizo - HIBRIDACIÓN*



Esta cuarta forma es crucial porque supone niveles de integración y asociación fuertes y profundos entre actores estatales y criminales (relacionamiento activo), en el marco de estas complejas e intrincadas economías de extracción/contrabando transfronterizo. Se desarrolla primordialmente en las determinantes nuevas fronteras de commodities, en especial en la Amazonía y en torno a recursos como el oro, y en menor medida los diamantes y el coltán (Estatalidad Tipo 1). No obstante, también la vemos en torno a la palma aceitera y otros recursos que, aunque no son commodities sino productos procesados, como el combustible o la chatarra, tienen un rol protagónico en algunos conflictos ecológico-distributivos y en el conjunto de la economía nacional. La importancia de una región como la amazónica y de los recursos enumerados nos habla de formas de extracción/apropiación de gran atractivo para los actores, y de intereses en juego que son simultáneamente regionales, nacionales e internacionales. Ante el nivel de imbricación que pueden alcanzar los actores en sus operaciones, llamo a esta forma Hibridación. Comencemos examinando la Amazonía.

II.III.II.IV.I Amazonía y oro

A pesar de la diversidad de grupos criminales desplegados en toda la biorregión para ejercer operaciones mineras ilegales, existen patrones generales compartidos que han sido también identificados, específicamente tres mecanismos fundamentales de operación/estrategia territorial: el control de territorio y rutas de commodities; la gestión y supervisión de parte de las cadenas ilícitas de extracción; y el establecimiento de autoridades locales violentas, con sus respectivas normas y políticas territoriales.

1) Control de territorio y rutas de commodities: sobre este primer mecanismo, como pudimos observar en el análisis del Nivel Biorregión, y específicamente en la FIGURA 46 referido a la ubicación de los principales grupos criminales, el control territorial de estos actores está considerablemente extendido, estableciendo incluso amplios ejes de extracción de recursos conectados a rutas de commodities internacionales (terrestres y fluviales, aunque hay una amplia red de aeropuertos clandestinos que no he examinado en este trabajo). Esto lo hemos visto por ejemplo en el caso de la minería ilegal en la cuenca del Atabapo (Caso 72), río que también se conecta con la minería en el PN Yapacana (Caso 73), y hacia Colombia, junto al Orinoco, constituyen un punto de conexión clave

con ríos como el Inírida y Guainía. Otros ejemplos de estas amplias territorializaciones criminales lo vemos en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare (territorio yanomami), donde la extracción de oro originada en el cerro Aracamuni y en el río Siapa se articula con las rutas económicas proyectadas hacia San Carlos de Río Negro, a la región del Casiquiare (Colombia) y a San Gabriel de Cachoeira en Brasil. O bien, se puede también destacar el ya mencionado control del Sindicato de Barrancas en parte del Delta del Orinoco y sus rutas hacia el Atlántico.

2) Gestión y supervisión de parte de las cadenas ilícitas de extracción: en este segundo mecanismo, los grupos criminales establecen diferentes operaciones y estrategias en torno a los procesos de extracción de naturaleza, como lo vemos con los 'sindicatos' que definen regímenes laborales en relación a los mineros que trabajan para las minas que estos controlan. Por ejemplo, los sindicatos en El Callao (Caso 51), como la "Banda El Perú", organizan la extracción y el procesamiento de oro, al mismo tiempo que ponen un impuesto a quienes trabajan en la actividad (Jones et al, 2022). En la cuenca del Caura los sindicatos también establecieron un régimen de vacunas y pagos relacionados con la actividad minera (Estraño, 2015; Vitti, 2016); y en la disputada mina El Silencio (Caso 63), ante la apertura de nuevas minas por parte de algunos indígenas, estos grupos les imponen un régimen de vacunas, pese a no ejercer un control directo sobre ellos. Algo similar ocurre en el municipio Manapiare con la guerrilla colombiana (Casos 70 y 71), donde esta exige un porcentaje del oro extraído a los propietarios de los equipos mineros, al tiempo que permite que los indígenas que hacen minería de pequeña escala se queden con lo que encuentran (Ebus, 2021).

   El caso del Sindicato de Barrancas, este también se ha encargado de la distribución de insumos químicos y mano de obra para las minas aledañas a sus zonas de control (Insight Crime, 2022b). Además, de entre sus variadas actividades, entre las cuales se cuenta el contrabando de combustible, narcotráfico y la extorsión, este grupo también facilita la extracción y comercio de especies protegidas, principalmente hacia las rutas de Trinidad y Tobago que se dirigen al Caribe, y un poco más al sur hacia Guyana (Transparencia Venezuela, 2020; Fundaredes, 2022c).

3) Establecimiento de autoridades criminales locales que usan extrema violencia: el establecimiento de violentos regímenes de autoridad territorial (armada) se evidencia en casi todos los casos amazónicos. Tanto en el del río Paragua, en El Callao, Tumeremo o en Manapiare, por mencionar ejemplos, se observan métodos de control social tales como castigos físicos, asesinatos y desapariciones a aquellos que irrespeten el poder criminal (OVV, 2022a, Siverio, 2022). Se registra también sobreexplotación de mineros y reclutamiento de niños y jóvenes para trabajar en las minas, como se ve en el caso de Atabapo

y en los de la cuenca del Caura; así como desplazamientos forzados, como ocurrió con comunidades indígenas ante la actividad minera y de la guerrilla en Guaniamo.

Sin embargo, hay que agregar que en algunas de estas gobernanzas se dieron formas de 'asistencia' social. Por ejemplo, en Tumeremo (Caso 53) la "Organización R", además de controlar y coordinar la actividad minera ilegal, ofreció distribución de alimentos, asistencia médica e incluso la construcción de canchas deportivas para la población (Insight Crime, 2023b). A su vez, estos grupos pueden ofrecer protección a la misma, como se ve en varios casos de la guerrilla colombiana y con el Sindicato de Las Claritas. Adicionalmente, su instalación en los territorios fortalece una cultura minera y criminal en las comunidades, que se acostumbran y se hacen más proclives a esta.

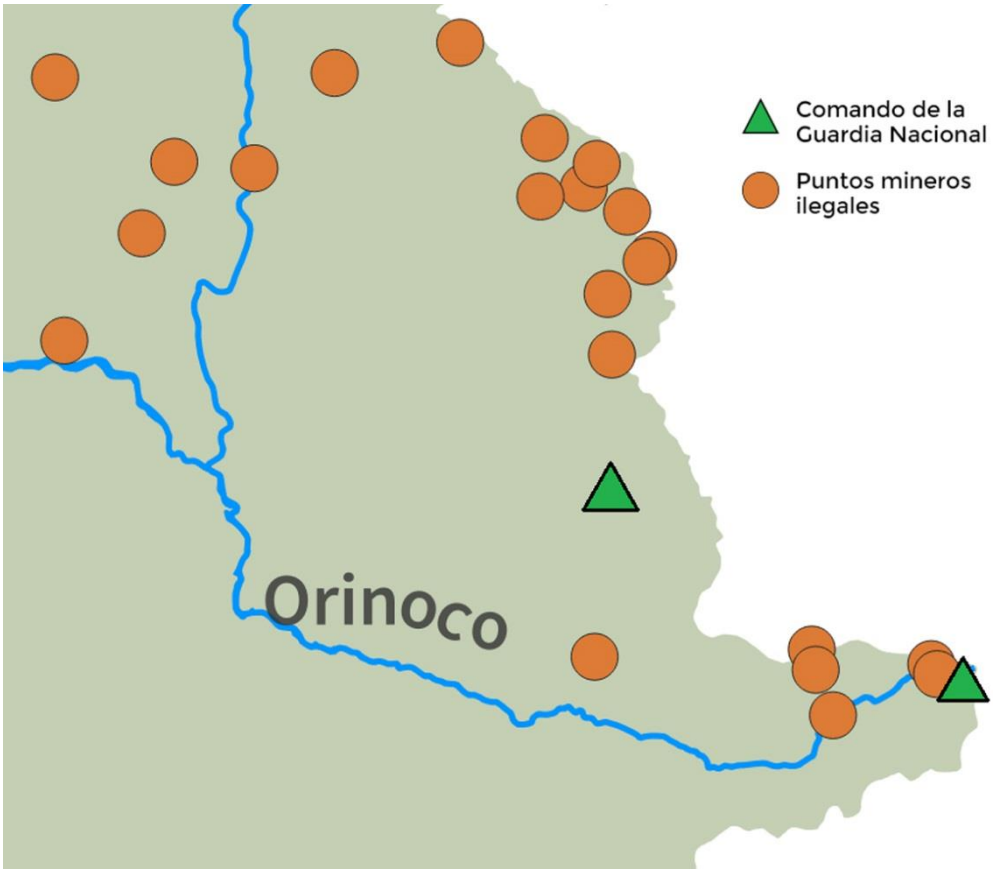
En relación al ámbito del Estado, se han identificado también algunos patrones generales de participación activa en estas expresiones del extractivismo. De hecho, para esta forma de Hibridación, lo que se revela es una serie de operaciones conjuntas y mecanismos de asociación estrecha que se desarrollaron entre actores estatales y criminales. Evidentemente, estas operaciones pueden ser variadas y diferenciadas debido a condiciones territoriales y el tipo de pacto establecido con los grupos criminales. Dada las características de la región, es el sector militar quien tiene la mayor participación en las actividades y capacidad para desplegarse por toda la Amazonía, a diferencia de las instituciones mineras que actúan primordialmente en el AMO. Como he mencionado anteriormente, las gobernaciones y alcaldías sirven como bisagra entre las decisiones locales y las orientaciones nacionales del gobierno central. Los mecanismos que se han identificado son seis: Permisividad activa/cooperación; Establecimiento de un esquema de ganancias compartidas; Control y distribución de insumos para la minería; Captura y centralización del oro extraído; Uso de la violencia a través del sector militar y otros cuerpos de seguridad; y Políticas complementarias que contribuyen a la expansión y consolidación de la minería ilegal.

1) Permisividad activa/cooperación: existen varias formas en las que se expresó este mecanismo. Primero, a través de la instalación de puntos de control en lugares clave, el sector militar permite y monitorea las operaciones mineras ilegales, además de resguardar las rutas de paso del oro y sus insumos. Esto se señala en todos los casos, como por ejemplo lo apuntan las organizaciones indígenas del Caura para el punto de control de "Pie de Salto", donde los militares permiten el paso de armas, combustible y drogas hacia las minas de la zona (Kapé-Kapé, 2020).

   En la zona oriental del territorio yanomami, sector Alto Ocamo (Caso 74), la minería ilegal impulsada por garimpeiros y el crimen organizado de Brasil se desarrolla tanto por tolerancia de las fuerzas armadas como por acuerdos establecidos entre ellos. Comunidades indígenas han denunciado que los

mineros penetran el territorio venezolano pasando por el propio comando de la GNB ubicado en la Sierra Delgado Chalbaud, y que se les permite la instalación de campamentos mineros (Ver FIGURA 48). También se ha indicado que en estos acuerdos se ha pautado llegada de vuelos y suministros desde ese país (Silva, 2013; Narbaiza, 2016; Provea, 2020; SOS Orinoco, 2022b).

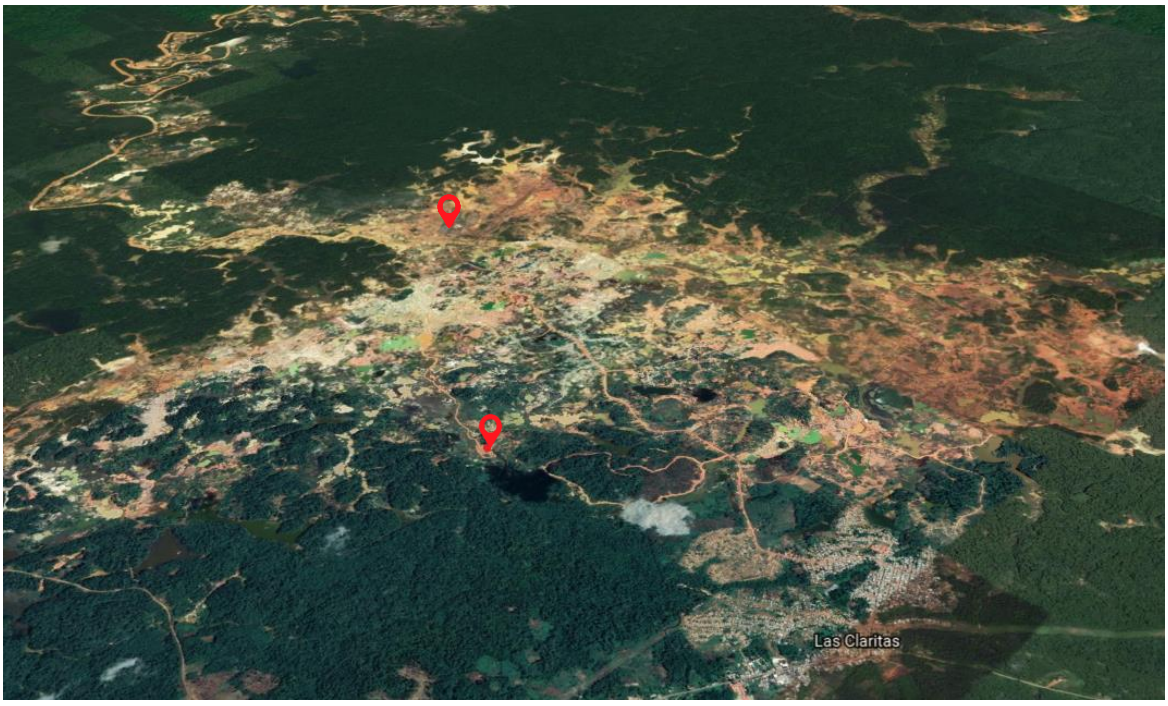
FIGURA 48. Ubicación de los Comandos de la Guardia Nacional Bolivariana junto a la ubicación de puntos mineros ilegales en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare (territorio yanomami). Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos.



Este mecanismo de permisividad/cooperación ya ha sido especialmente subrayado en este capítulo para los casos en los cuales la guerrilla colombiana protagoniza la actividad extractiva, siendo muy representativo el caso del PN Yapacana, lo que contribuyó a un acelerado y extraordinario crecimiento minero en esta área protegida en los años de La Gran Crisis, así como ocurrió con la expansión de la extracción de coltán (Caso 68) y de diamantes (Caso 67) en el municipio Cedeño (estado Bolívar). Se destaca un lineamiento estatal que va desde la cohabitación para no afectar los negocios hasta las necesidades de cooperación con la guerrilla para contribuir a controlar y resguardar territorios fronterizos, aunque se insiste en que la relación no está exenta de contradicciones y episodios de tensión entre estos (SOS Orinoco, 2020c; Crisis Group, 2020b).

En Las Claritas se señala que los militares están encargados de supervisar las minas ilegales y el contrabando de oro hacia otros países, además de la protección que le brindan a algunos grupos criminales que controlan directamente las operaciones mineras, esto último en conjunto con la gobernación del estado Bolívar (Ebus, 2018a; Diario Las Américas, 2021; Transparencia Venezuela, 2022c). Las Claritas, donde están las principales concentraciones de oro del país, fue la localidad donde se desarrollaron los principales emprendimientos formales/industriales de minería aurífera desde principios de los 90, a saber, las minas Las Cristinas y Brisas, las cuales pasaron posteriormente a ser parte del AMO, específicamente del Área 4. Esto implica que es uno de los lugares donde existe uno de los principales despliegues de instituciones e instalaciones mineras, incluyendo las fallidas participaciones de empresas transnacionales antes y durante La Gran Crisis. Pero como se ve en la FIGURA 49, dichas instituciones y territorializaciones estatales de minería se solapan y entrecruzan con un extraordinario despliegue de minas ilegales y criminales en la zona.

IMAGEN 16. Imagen satelital de Las Claritas, donde se marcan en rojo la ubicación de las minas Las Cristinas y Brisas, los principales emprendimientos formales auríferos del país (emplazados en el Área 4 del AMO). La imagen evidencia los solapamientos que existen entre la institucionalidad minera formal y el extraordinario despliegue de la minería ilegal. Fuente: modificado de Google Earth



En el caso en río Paragua, las comunidades indígenas pemón han indicado el involucramiento directo de militares con los grupos criminales de la zona, algo que se corrobora con la detención de ocho efectivos, incluyendo comandantes, coroneles y capitanes, acusados por facilitar directamente las operaciones mineras de la banda de El Ciego (Siverio, 2020a; Barráez, 2021), entre lo que se cuenta controlar la salida desde el aeródromo local de insumos hacia las distintas

áreas de extracción; además del libre tránsito de estos grupos en las poblaciones del municipio Angostura. Por último, puede también mencionarse que en El Callao, también dentro del AMO, predominan minas ilegales controladas por bandas criminales que incluyen la mina La Isidora, un área restringida de la empresa mixta Mibiturven (Venezuela-Turquía), antigua CVG Minerven, donde se ha emplazado un campamento minero ilegal administrado por estos grupos (Siverio, 2020b).

2) Establecimiento de un esquema de ganancias compartidas: este mecanismo es ampliamente usado por parte de los funcionarios militares, a través del cobro de "vacunas", que son una especie de pago por permiso de ejecución de la actividad minera ilegal o por el tránsito del oro de contrabando. Generalmente, la vacuna es cobrada en oro, como por ejemplo se evidencia en los casos del Caura (Kuyujani, 2015), o en el mencionado caso de Paragua, donde los militares reciben el recurso aurífero a cambio de permitirle a la banda de El Ciego el traslado de combustible y materiales utilizados para la actividad minera.

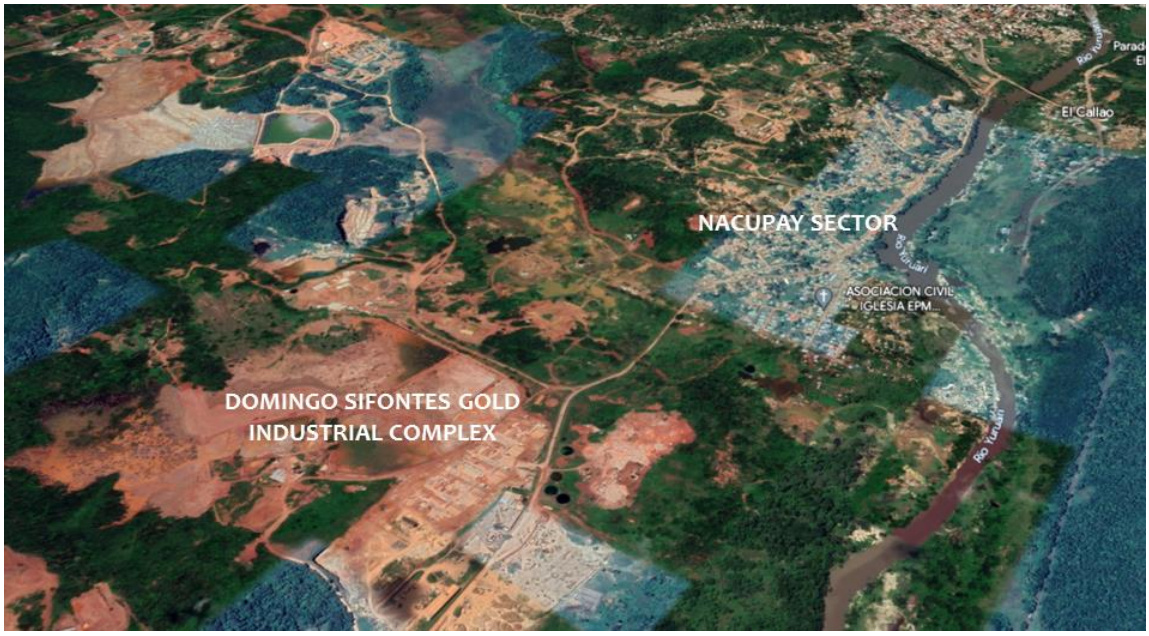
3) Control y distribución de insumos para la minería: este mecanismo es también ampliamente utilizado por actores estatales en todos los casos, dada la importancia de que lleguen estos insumos para que la actividad sea posible. El insumo clave es el combustible, que en el caso de Venezuela es producido y posteriormente distribuido en estaciones de servicio estatales por parte de PDVSA, mientras que la GNB resguarda el recurso y su suministro en dichas instalaciones, dado los graves problemas de escasez y el contrabando del recurso. El desvío de combustible se registra en todos los conflictos, como por ejemplo en 'Las luchas de las comunidades wottüja para salvaguardar la producción agrícola en el municipio Manapiare' (Caso 71), donde se genera un conflicto entre minería ilegal y agricultura indígena, ambas necesitadas del recurso, pero la segunda prácticamente quedándose sin ese insumo por el creciente desvío del mismo para la minería ilegal, creándose un 'mercado negro' de este. Esto fue señalado tanto por voceros de organizaciones indígenas como por el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, quien indicó que actores estatales corruptos contrabandean la gasolina para dirigirla a las minas de Manapiare que están vinculadas con la guerrilla colombiana y/o mineros colombianos (PanamPost, 2015; Provea, 2017). Misma situación también se evidencia en Las Claritas, El Silencio y los casos mencionados en el Caura. Incluso este mecanismo lo ejecutan actores estatales con respecto a grupos sociales que practican la minería ilegal, como pequeños mineros en El Callao o indígenas en el río Carrao (Parque Nacional Canaima – Caso 59), especulando con sus precios para el enriquecimiento de particulares (Boon y Meléndez, 2019; Ramírez-Cabello, 2020; Cuentas Claras Digital, 2021).

   La situación se ha corroborado con detenciones de funcionarios estatales, incluso de alto nivel, por contrabando de combustible. Por ejemplo, en enero de

2022 era arrestado el Fiscal Superior del estado Delta Amacuro, Jorge Peña, por su implicación en el desvío de gasolina para abastecer a grupos irregulares que se dedican a la minería ilegal. Junto con este arresto fueron también apresadas por el mismo delito 17 personas, entre las que se encontraban los exalcaldes de los municipios Independencia y Pedro María Freites (Anzoátegui), el exfiscal superior del estado Bolívar y un funcionario de PDVSA (El Universal, 2022; Penuela, 2022).

4) Captura y centralización del oro extraído: este mecanismo lo analizamos brevemente en la sección de Nivel Política de Estado, dadas las necesidades de captura de oro ante la debacle de emprendimientos formales industriales con capitales privados. El mismo se desplegó a través de la instalación de molinos de material aurífero y plantas de recuperación en los territorios del AMO, por la recolección en lugares de acopio por parte de la CVM, o incluso por vías corruptas por parte de militares, siendo que en todas estas formas se compró oro ilegal. En El Callao, donde se encuentran el Complejo Industrial Aurífero "Domingo Sifontes" (CIADS) (el más importante del país, inaugurado en 2018 en el sector Nacupay), la Planta Procesadora Caratal y en general cerca del 80% de las instalaciones de este tipo en Venezuela (Delgado, 2019), mineros particulares y personal de Minerven han afirmado que buena parte del oro que compra la empresa estatal proviene de la minería ilegal (Ebus, 2018b). En la FIGURA 50, podemos ver la ubicación del CIADS, haciendo parte de sector Nacupay, el cual es controlado por grupos criminales y donde laboran cerca de 10.000 mineros.

IMAGEN 17. Imagen satelital de una parte de El Callao (Área 4 del AMO). En esta se puede ver la ubicación del Complejo Industrial Aurífero "Domingo Sifontes" en el sector Nacupay, controlado por grupos criminales donde laboran cerca de 10 mil mineros. Se señala que buena parte del oro comprado y procesado proviene de minas ilegales. Fuente: modificado de Google Earth



En el conflicto en torno a la mina El Silencio, voceros indígenas locales han indicado que la CVM ha promovido una serie de medidas tales como la apertura de una carretera que va, desde Maripa (Bajo Caura, Área 2 del AMO) hacia las minas ilegales de El Silencio (PN Caura), en aras de poder sacar de esta última las arenas auríferas para su procesamiento y trasladarlas en camiones hacia la zona del AMO. Del mismo modo, se señaló la instalación de molinos para el procesamiento de material aurífero en la vecina comunidad de Aripao (Sánchez, 2021) y en la mina La Colonial, que se encuentra al lado de El Silencio (Sánchez, 2022a). En general, estas prácticas deben ser entendidas como estrategias de lavado de oro.

5) Uso de la violencia a través del sector militar y otros cuerpos de seguridad: los intereses mineros, la militarización de la Amazonía y la ausencia de democracia, instauraron de manera generalizada mecanismos de gobernanza que se tradujeron principalmente en prácticas violentas y represivas en los territorios de la biorregión, mucho más en un contexto de disputas en torno a la actividad extractiva. La medida que estuvo en el centro de este mecanismo fue el operativo militar en terreno, anunciado para desarmar los campamentos y minas ilegales. No obstante, estos operativos deben ser entendidos no tanto como un combate contra la minería ilícita, que vimos expandirse, sino como parte de las disputas por el control de minas, recursos, territorios y rutas. Esto incluye: reafirmar el poder del Estado/gobierno en la actividad ante la proliferación de otros grupos; poner coto a un incremento de poder considerable que pueda tener algún grupo criminal; desplazar a alguno de estos actores ilícitos cuando el pacto con ellos pudiese haber caducado; o bien controlar e imponerse ante pequeños mineros o comunidades indígenas que hacen minería por su cuenta o se niegan a seguir las pautas que hemos descrito.

   Ya se han mencionado en la sección Nivel Política de Estado algunos de los diferentes operativos militares (‘Operación de Liberación y Protección de Pueblo’ [2016], ‘Plan Boquete’ [2017], Operación Tepuy Protector [2019], ‘Operación Militar Escudo Bolivariano Autana 1’ [2022], entre otros). Estos lograron algunas incautaciones y la destrucción de insumos para la actividad, así como la captura puntual de mineros, aunque en realidad pocas de las estructuras criminales más determinantes fueron tocadas. Se registró un incremento de enfrentamientos con disidencias de las FARC hacia la Fase III de La Gran Crisis, con la Banda El Perú en El Callao, y dado el costo mediático que tiene la degradación del PN Canaima, este se mantuvo relativamente resguardado de grupos criminales. Hacia el final de nuestro período de estudio (segundo semestre de 2022) aumentó el número e intensidad de los operativos militares.

   Por último, se debe destacar que las agresiones a comunidades indígenas y pequeños mineros se manifestaron desde la represión, como se registra en Tumeremo, donde los mineros han denunciado sistemáticamente atropellos por

parte de la GNB, e incluso desapariciones y asesinatos (OEP, 2019b; Alerta Venezuela, 2022). Debilitamiento de las organizaciones indígenas a través de la cooptación, el hostigamiento y la precariedad que viven estas comunidades, como se evidencia en los casos del Caura o del río Carrao, siendo en este último donde un capitán pemón que lideró emblemáticas movilizaciones contra la minería prefirió comenzar a guardar silencio (Boon y Meléndez, 2019). Criminalización de líderes indígenas, como ocurrió con las acusaciones que el General de Brigada, Roberto González Cárdenas, profirió contra la activista pemón Lisa Henrito, señalándola de 'encabezar un movimiento secesionista en el sur' de Venezuela (Boon y Meléndez, 2020). Hasta la ocurrencia de enfrentamientos con fallecidos, como el ocurrido en diciembre de 2018 cuando un grupo de funcionarios de la DGCIM ingresaron al sector Campo Carrao e hirieron con armas de fuego a cuatro indígenas pemón, de los cuales Carlos Peñaloza fallecería.

6) Políticas complementarias que contribuyen a la expansión y consolidación de la minería ilegal: algunas medidas concretas de las instituciones y actores estatales en los territorios profundizaron estas dinámicas descritas. Por ejemplo, en el estado Amazonas la CVM ha construido instalaciones mineras para gestionar y promover la actividad, como el 'Centro de Insumos Mineros', en el norteño Eje Carretero de Puerto Ayacucho (Vitti et al, 2022). Sin embargo, como fue dicho, toda forma de minería está prohibida en este estado desde 1989. Por otro lado, en el Bajo Caura la CVM ha ofrecido incentivos (como insumos y facilidades) a comunidades indígenas y criollas para ejercer la minería fuera de las áreas permitidas del AMO, y dentro del propio PN Caura (Sánchez, 2022a). Este tipo de políticas tienen además la capacidad de incentivar el fortalecimiento de la cultura minera, incluso en comunidades indígenas que previamente rechazaban la actividad, al tiempo que debilita sus resistencias, como fue ocurriendo con las fuertes oposiciones a la minería en las comunidades yekwana en el Caura.

II.III.II.IV.II Palma aceitera, combustible, chatarra

Aunque las dinámicas del oro y la Amazonía tienen sus particularidades, esta forma híbrida de Extracción/contrabando transfronterizo también la pudimos ver con otros recursos cruciales como la palma aceitera, el combustible y la chatarra.

Palma aceitera

Respecto a la palma, pese a que la producción había descendido considerablemente, incluso antes de La Gran Crisis, el cultivo siguió siendo comercialmente atractivo, sobre todo para los mercados colombianos, donde este se podía comprar más barato respecto al precio en el país vecino, y se podía recibir mucho más que lo que pagaban en Venezuela. Esto por tanto hizo que el fruto (corozo) fuese objeto de un contrabando que

fue incrementándose durante el colapso. Productores, trabajadores de las industrias estatales del sector y representantes del PSUV plantearon varias denuncias sobre los niveles de desvío del producto: indicaron, por ejemplo, que para el mes de noviembre de 2018 la producción de una de las empresas alcanzó las 220 toneladas y apenas habían llegado a la procesadora del municipio Jesús María Semprúm 36 toneladas. Por otro lado, también se denunció que alrededor del 50% de la cosecha en este municipio terminaba saliendo para Colombia. Para ese año, el Estado mantenía trabajando cinco plantas extractoras en Santa Bárbara del Zulia (Caso 8), con las cuales se buscaba concentrar la mayor cantidad posible de racimos de la palma para la obtención del aceite. En este marco, varios trabajadores señalaron en repetidas ocasiones que se estaba produciendo una 'fuga' del corozo por parte de funcionarios corruptos de estas plantas extractoras, lo que también ocurría en predios de producción (Urdaneta, 2019b).

Se recalca que los grupos criminales de fuerte presencia en la zona, entre ellos la guerrilla colombiana, se han movilizado desde hace años para lograr un control más amplio posible en esta cadena ilícita del commodity: control de las rutas irregulares hacia Colombia por donde pasa el fruto, que en buena medida son vías para el contrabando de otros productos clave. Estas rutas cruzan no sólo el municipio Jesús María Semprúm, sino también el Catatumbo y el Colón. El ELN y grupos paramilitares cobran también 'peaje' (impuesto de paso) para poder trasladar la materia prima por pasos informales o 'caminos verdes' de la región, por medio de camiones hasta el departamento vecino del Norte de Santander en Colombia. La presencia territorial de estos grupos supone a su vez el cobro de vacunas a productores de este cultivo a cambio de protección (o no agresión), la intimidación de la población, e incluso locales indicaron que el ELN posee algunas hectáreas que ha comenzado a cultivar en Semprúm, aunque se señaló que no eran numerosas (Urdaneta, 2019a).

Aunque esta investigación no logra ahondar en cómo se realizan estos desvíos o qué volúmenes del fruto, desde plantas y predios estatales, pasa a integrar esta actividad económica de los grupos criminales hacia Colombia, es conveniente destacar algunos informes que, por ejemplo, corroboran la incidencia del ELN en la selección de los alcaldes de los municipios mencionados, y la detención en enero de 2022 de la alcaldesa de Semprún por narcotráfico (Despacho de la Presidencia, 2022; Fundación Paz y Reconciliación, 2024; Connectas, 2025). Adicionalmente, se menciona también que cuerpos de seguridad instalan puestos de control o alcabalas donde cobran dinero para permitir el paso del contrabando, o bien exigen una parte del cargamento.

Otras respuestas ante el incremento de esta actividad ilícita, más del tipo institucional, se evidencian en medidas tales como: expropiaciones y control a los productores particulares; priorización de la comercialización con las empresas que han sido estatizadas; establecimiento de tasas de circulación de cargamentos del fruto (de precario cumplimiento) como un intento de aumentar las recaudaciones que se aminoran por el contrabando; operativos y algunas incautaciones; y represión a los trabajadores de

la industria cuando protestan por la situación laboral y de las empresas, así como por los casos de corrupción, lo que ha incluido amenazas y hostigamientos a algunos de ellos.

Combustible y chatarra

El peso que tienen estos recursos en el conjunto de la economía nacional, los hacen objetos clave en las disputas en Venezuela. Además de la incidencia territorial directa e indirecta que han tenido en varios conflictos de distribución ecológica examinados, analizo también al combustible y la chatarra dado que también encarnan, de manera emblemática, las cadenas multiescalares de hibridación de actores de poder.

El contrabando de combustible es una actividad ilícita que se generalizó en todo el país, al generar extraordinarias ganancias (como pocos negocios ilegales), al menos hasta que se dio el alza progresiva de sus precios en el país. Además, como vimos, es recurso clave para el desarrollo de la minería ilegal, así como para el procesamiento de pasta base de coca, todo lo cual permitió que el contrabando de esta mercancía se haya expandido durante La Gran Crisis. En esta actividad se han articulado desde funcionarios del Estado (de alto, medio y bajo nivel) hasta una amplia variedad de grupos del crimen organizado en Venezuela y Colombia. Con el análisis de la minería ilegal de oro que he planteado más arriba, ya hemos visto que, desde PDVSA, empresa que produce y distribuye la gasolina hacia centros de servicio, junto a funcionarios de otras instituciones estatales, se generó el desvío de millones de litros de combustible para ser incorporados a las cadenas de contrabando, cuestión que incluso ha salido a la luz pública en varias de las tramas de corrupción de la industria petrolera (Reuters, 2021). Se analiza con un poco más de detalle esta cadena ilícita transfronteriza y los roles asociados entre los actores de poder en los territorios, partiendo del Caso 10 ‘La contaminación de la Laguna de Sinamaica por el contrabando transfronterizo de combustible’.

En primer lugar, desde las estaciones de servicio la GNB establece la entrega preferencial de la gasolina a contrabandistas, a cambio de dinero en efectivo, afectando a la población que pasa horas en largas filas para surtirse del producto. Se señala también que en otros casos el desvío del combustible ocurre al acordar con los tractocamiones o ‘gandolas’ de PDVSA que llevan entre 30.000 a 40.000 litros de gasolina para abastecer las gasolineras, para que en cambio se trasladen a centros de acopio ilegal para su contrabando (El País, 2017).

La salida de la gasolina desde las estaciones hacia las rutas ilícitas implica una logística compleja que suele también involucrar militares y población. Se indica que las redes de contrabandistas cuentan con más de 3.000 camiones para transportar la mercancía, además de depósitos y laboratorios. En el caso de la laguna de Sinamaica, esta constituye una ruta de contrabando desde sitios como Maracaibo, que incluye pasos fluviales que conectan con zonas clave como La Guajira, que a su vez articula el paso hacia Colombia. El traslado del combustible por vías acuáticas se hace recolectándolo en ‘pipas’, que son grandes recipientes plásticos que la gente usa para recolectar agua, y

que pueden almacenar unos 220 litros. Las pipas son amarradas en hileras de 12, y flotan con la embarcación que las arrastra, llegando desde Sinamaica por el río Limón hasta la Guajira venezolana. Al ser esta laguna un lugar con extrema pobreza y muy desasistido socialmente por el Estado, la población participa en el negocio y encubren a los contrabandistas, siendo esta la actividad que genera más dividendos en la zona. Aunque exista patrullaje de la armada y el ejército la 24 horas, el traslado de la gasolina se realiza en plena hora del día, lo que evidencia el funcionamiento conjunto de todos los actores. La GNB exige una parte de las ganancias por el traslado, por medio de las numerosas alcabalas instaladas en las rutas del estado Zulia y hacia las zonas fronterizas, donde se le debe pagar en efectivo. Las incautaciones y detenciones que las fuerzas de seguridad han realizado, no afectan significativamente la continuidad de estas operaciones ilícitas, sobre todo si se toma en cuenta las elevadas ganancias que se obtienen (Cobos, 2014; Cuestión Pública, 2018; Los Informantes, 2018).

IMAGEN 18. Fotografía aérea del contrabando de combustible por el río Limón, principal afluente de la laguna de Sinamaica. Fuente: Ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López. Septiembre 2014. Cuenta de Twitter: https://x.com/vladimirpadrino/status/515563542687526912



En el caso de la chatarra, existen similitudes pero también algunas diferencias respecto al combustible. La fuente de la actividad no depende del procesamiento de un recurso, sino de la recolección tanto de material desechado (evidente en los casos analizados de vertederos), como del que se puede obtener de obras de construcción y de instalaciones de emprendimientos paralizados (y sin mantenimiento) en La Gran Crisis. Como ya se ha mencionado, entre estos emprendimientos se incluyen los de la industria petrolera, siderúrgica y otras empresas básicas del Estado. En el marco de esta crisis, la chatarra se ha convertido en un producto disputado por las ganancias que puede generar, y ha venido exportándose en grandes cantidades desde 2019. Entre los actores involucrados tenemos desde pequeños recicladores –generalmente personas en situación de pobreza–,

grupos criminales, y empresas y actores estatales. Estos pueden articularse o también confrontarse entre sí.

La forma que más peso ha tenido tiene que ver con el desmantelamiento de instalaciones de las industrias estatales en declive, por los volúmenes de material que pueden obtenerse de él. La cadena ilícita va desde la extracción, la venta a intermediarios, y el traslado hasta puertos desde donde se exporta a otros países. La extracción llevada adelante por actores criminales (que se dedican a varias actividades delictivas, aunque algunos solo se orientan a esta) la vimos en casos como el de la Faja Petrolífera del Orinoco (No. 41) o en el lago de Maracaibo (No. 5), donde grupos que pueden estar compuestos por 10-15 personas se encargan de desmontar parte de las piezas de la instalación de pozos (como tuberías, válvulas, cabillas de balancín y taladros, algo que se hace preferiblemente en la noche); incluso la actividad la hacen en las plataformas dentro del propio lago (Tal Cual y Connectas, 2021; France 24, 2022). Habitantes de la costa oriental han señalado que militares están al tanto de la extracción y la permiten a cambio de beneficios económicos. En el estado Anzoátegui, en detenciones por contrabando de material ferroso (láminas de tuberías) se apresaron a integrantes del ejército (Tal Cual, 2022).

En casos de corrupción que salieron a la luz pública, el propio gobierno nacional reconoció que gerentes de PDVSA estaban involucrados con el desguace de instalaciones petroleras, algo que se vio también con la directiva de otros sectores como la siderúrgica y el aluminio, lo que favoreció enriquecimientos ilícitos. Se ha señalado también que el material férreo extraído se le asigna de manera corrupta documentación legal (Insight Crime, 2023c). En febrero de 2021, el gobierno de Maduro declaró como ‘material estratégico’ a una serie de metales susceptibles de reciclaje (hierros, aluminio, cobre, bronce, acero, níquel y en general las chatarras) e impuso que su comercialización, compra y procesamiento sería competencia exclusiva del Estado. Con esto intentaba centralizar al máximo la actividad, y sobre todo el acopio de estos materiales, para lo cual operaría la Corporación Ezequiel Zamora (Corpoez).

Esta última estrategia permitió también ‘lavar’ las chatarras ilegales, no solo la extraída por funcionarios estatales o particulares, sino las que se pudieran adquirir provenientes de extracciones de grupos criminales. En estados como Monagas se indica la existencia de intermediarios, que reciben el material ferroso de distintos actores, incluyendo delincuenciales, para luego picar el material con estándares internacionales y ofrecerlo al mayorista autorizado en los puertos que luego exporta (OVV, 2022b). Se menciona, al igual que los otros casos de contrabando examinados, que en las alcabalas militares se permite la circulación ilícita del producto si se paga un monto determinado a los funcionarios. Los puertos, como el de Guanta (oriente del país) o Puerto Cabello, son los principales puntos de salida del material al exterior –primordialmente hacia Turquía, y en mucha menor medida a India, Taiwán, Tailandia, entre otros−, aunque también se ha mencionado la salida del material por la frontera colombiana.

Finalmente, en estas dinámicas de contrabando se suelen imponer normas y códigos basados en la fuerza y la intimidación, algo que aplican tanto los actores criminales como los estatales, aunque también podemos ver que estas actividades implican altos niveles de integración con sectores de la población, sea en tareas de extracción, vigilancia o logística, lo que implica diversos mecanismos de inclusión económica y organizacional a cambio de beneficios y protección. A modo de síntesis, en la TABLA 10 presentamos los mecanismos y estrategias conjuntas en la gobernanza que se desarrollan en esta forma de Hibridación entre actores estatales y criminales, específicamente para los casos Amazonía-oro, Palma aceitera y combustible.

TABLA 10. Mecanismos y estrategias conjuntas de los actores estatales y criminales en las operaciones de contrabando transfronterizo – Hibridación. Casos: Amazonía-oro, Palma aceitera y combustible. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos.

AMAZONÍA - ORO					
ACTORES ILÍCITO/CRIMINALES			**ACTORES ESTATALES**		
No.	**Mecanismo**	**Principales características**	**No.**	**Mecanismo**	**Principales características**
1	**Control de territorio y rutas de commodities**	• Control sobre amplias áreas geográficas (incluyendo minas) a través del uso masivo de la violencia • Establecimiento y desarrollo de rutas de contrabando transfronteriza	1	**Permisividad activa/cooperación**	• Establecimiento de acuerdos tácitos o explícitos para la instalación de minas y traslado de insumos • Establecimiento de puntos de control militar que protegen y monitorean minas ilegales y rutas • Facilitación e involucramiento en actividades a grupos criminales • Protección de grupos criminales que controlan minas
2	**Gestión y supervisión de parte de las cadenas ilícitas de extracción**	• Establecimiento de los regímenes laborales en las minas • Establecimiento de impuestos que se les cobra a los mineros por trabajar • Distribución de fuerza de trabajo e insumos para las minas	2	**Establecimiento de un esquema de ganancias compartidas**	• Cobro de "vacunas" (impuesto por permitir la actividad ilegal)
			3	**Control y distribución de insumos para la minería**	• Desvío o tráfico de combustible para dirigirlo a las minas
			4	**Captura y centralización del oro extraído**	• Compra de oro ilegal a través de molinos de material aurífero y plantas de recuperación en los territorios del AMO, por la recolección en lugares de acopio por parte de la CVM, o por vías corruptas por parte de militares
3	**Establecimiento de autoridades locales violentas, normas y políticas territoriales**	• Control social a través de: castigos físicos y asesinatos. Sobreexplotación del trabajo; reclutamientos y desplazamientos forzosos • Formas de asistencia a la población y protección • Consolidación de una cultura minera y criminal	5	**Uso de la violencia a través del sector militar y otros cuerpos de seguridad**	• Operativos militares en las minas como parte de las disputas amazónicas por los minerales • Agresiones a comunidades indígenas y represión a protestas de pequeños mineros
			6	**Políticas complementarias que potencian la minería ilegal**	• Incentivos a comunidades para practicar minería ilegal • Construcción de infraestructura minera en zonas prohibidas, como el estado Amazonas

PALMA ACEITERA – SUR DEL LAGO DE MARACAIBO

ACTORES ILÍCITO/CRIMINALES			ACTORES ESTATALES		
No.	**Mecanismo**	**Principales características**	**No.**	**Mecanismo**	**Principales características**
1	**Control de territorio y rutas de commodities**	• Fuerte presencia y/o control sobre territorios a través del uso de la violencia	1	**Permisividad activa/cooperación**	• Cohabitación y/o cooperación para no afectar el negocio • Pautas entre poderes locales y el ELN
2	**Participación y control de parte de las cadenas ilícitas del fruto**	• Control del contrabando y las rutas irregulares hacia Colombia por donde pasa el fruto • Extorsión a productores de palma • ELN posee incluso algunas hectáreas que ha comenzado a cultivar	2	**Establecimiento de un esquema de ganancias compartidas**	• Captura de parte de ganancias por desvío del fruto por parte de funcionarios • Pago establecido a militares por entregar gasolina en estaciones, y en alcabalas por permitir el paso ilegal del recurso
			3	**Suministro del fruto para el contrabando**	• Desvío del fruto de palma por parte de integrantes de la empresa estatal para ser integrada al contrabando hacia Colombia
			4	**Captura y centralización del fruto**	• Funcionamiento de plantas extractoras de aceite de corozo
3	**Establecimiento de autoridades locales violentas, normas y políticas territoriales**	• Control social a través de: intimidación de la población, extorsión, amenazas asesinatos • Incidencia del ELN en los poderes municipales	5	**Uso de la violencia a través del sector militar y otros cuerpos de seguridad**	• Extendida militarización de los territorios de paso formales

COMBUSTIBLE

ACTORES ILÍCITO/CRIMINALES			ACTORES ESTATALES		
No.	**Mecanismo**	**Principales características**	**No.**	**Mecanismo**	**Principales características**
1	**Control de territorio y rutas de commodities**	• Dominio de las rutas a través de formas de predominio territorial y la consolidación de una red de colaboradores en las localidades	1	**Permisividad activa/cooperación**	• Desde las estaciones de servicio la GNB entrega de manera preferencial la gasolina a contrabandistas • Complicidad en alcabalas militares
2	**Participación y control de parte de las cadenas ilícitas del combustible**	• Control y sostenimiento de la logística del contrabando (miles de camiones, depósitos, laboratorios)	2	**Establecimiento de un esquema de ganancias compartidas**	• Captura de parte de ganancias por desvío de la gasolina por parte de funcionarios • Instalación de alcabalas militares donde se cobra un 'impuesto' para permitir el paso del combustible
			3	**Suministro ilícito del combustible**	• Desvío de millones de litros por parte de funcionarios de PDVSA y otras instituciones para comercializarse vía contrabando (ej. Tracto camiones)
3	**Establecimiento de autoridades locales violentas, normas y políticas territoriales**	• Instalación de economías criminales que usan la violencia y la intimidación de la población • Integración de sectores de las localidades en la distribución de las ganancias	5	**Uso de la violencia a través del sector militar y otros cuerpos de seguridad**	• Extendida militarización de los territorios de paso formales

III. La emergencia de gobernanzas híbridas en el extractivismo ilícito/criminal

Hemos visto, en un contexto muy fragmentado como el de La Gran Crisis, cuatro formas dominantes, pero diferenciadas, de operaciones y estrategias territoriales de los actores que, sin embargo, deben ser comprendidas también en su conexión con la Política de Estado, las nuevas orientaciones del régimen extractivista y con procesos de territorialización más amplios. Se destaca en el análisis que, ante el despliegue dominante de actores estatales e ilícito/criminales en el territorio nacional, se manifiestan diversas, y en numerosos casos, profundas articulaciones desarrolladas entre estos dos grupos de actores.

No es de interés en este trabajo plantear una taxonomía de distintos tipos de gobernanza con enfoque normativo –como se ha presentado en otros trabajos, en torno a gobernanzas corporativas (Khan, 2011; Monks y Minow, 2011), democráticas (Bevir, 2010), jerárquicas o incluyentes (Kooiman, 2005; Annahar et al, 2023), digitales (Erkut, 2020; Hanisch et al, 2023), globales (Zürn, 2010), entre muchas otras− que poco pueden contribuir a analizar el marco no convencional de proliferación de estructuras criminales de diverso tipo y de lógicas de expolio. Propongo en cambio, desde las perspectivas críticas que inspiran este análisis, y dentro del marco de la teoría del extractivismo, poner el foco en las gradaciones de relacionamiento y niveles de imbricación que se da entre actores estatales y criminales, las cuales pueden configurar *gobernanzas híbridas*. Esto es, cómo este tipo de gobernanzas, antes que marginales o solo 'subterráneas', pueden estructurar poderosos encadenamientos transfronterizos ilícitos de commodities (y de recursos altamente lucrativos), y ser factor decisivo en las reconfiguraciones del conjunto del régimen extractivista, pese a que las teorizaciones sobre este último tópico han centrado prácticamente toda su atención en el rol de las empresas privadas (nacionales e internacionales) y estatales.

Para hacer este balance más detallado de relacionamientos y niveles de imbricación estatal/criminal, es necesario poner de nuevo la mirada, de forma comparativa, en las cuatro formas dominantes de operaciones y estrategias territoriales de los actores en el extractivismo. En primer lugar, la forma 'Extracción directa de naturaleza/recursos' llevada por actores estatales, se pudo desarrollar sin asociación alguna con grupos criminales debido a varios factores: el menor interés que despierta en estas organizaciones delictivas, recursos como las arenas, el sílice, la caliza, entre otros; o que estas extracciones se desarrollaron en territorios donde el despliegue institucional/estatal es mucho más fluido y desarrollado en el tiempo (Estatalidades 4 y 6). El patrón de gobernanza que por tanto se expresa en esta forma, es una gobernanza estatal autoritaria. Sin embargo, hay que subrayar que los bajos niveles de producción que en general se podían alcanzar con estos emprendimientos, y en consecuencia, las pequeñas rentas que de estos se podían captar, revelan que poco lograba aportar económicamente a la administración del gobierno central ubicado en Caracas. En cambio, sí podían hacerlo con los intereses regionales (gobernaciones, divisiones regionales militares, alcaldías, instituciones estadales), contribuyendo al menos a alimentar el esquema de descentralización de la distribución

ecológica que he examinado en secciones anteriores (nuevo régimen eco-sistémico del Estado neopatrimonial).

Hay similitudes respecto a la forma 'Despojo de bienes comunes y/o públicos' de actores estatales, en la medida en la que, en general, no se desarrolló de la mano de economías criminales estructuradas, sino encabezada por las instituciones del Estado (incluyendo cuerpos de seguridad) en alianza, en el caso de las tierras, con terratenientes. En varios de estos casos, el uso de grupos armados privados que amedrentaron a campesinos y fungían como seguridad particular de propietarios de la tierra, nos muestra que a pesar de ser una gobernanza liderada por la forma estatal-autoritaria, tuvo la participación complementaria de actores ilegales. Los desvíos ilícitos de agua por parte de funcionarios estatales a camiones cisternas privados para vender el líquido de forma ilegal, también dan cuenta de formas de conexión estatal/ilícita que podemos entender como de baja intensidad, debido a que no encarnan ni economías millonarias, ni productos de exportación o encadenamientos de commodities de amplia escala, ni la articulación con estructuras criminales de mayor nivel y sofisticación. Partiendo de esto último, esta forma también responde fundamentalmente a intereses regionales, y es insuficiente para sustentar económicamente la administración del gobierno central.

En segundo lugar, tenemos ámbitos en los que se despliegan lo que podemos entender como 'gobernanzas criminales'. Recurro a la definición de Lessing (2021) para señalar órdenes paralelos basados en la imposición de reglas sobre la población por parte de organizaciones delictivas. Esto implica pues, no solo el desarrollo de sus actividades ilícitas, sino también de códigos y pautas territoriales de autoridad y gobierno. Para Lessing esta gobernanza se puede 'incrustar' en los espacios estatales, contar a menudo con la colaboración de actores de este ámbito y conformar 'duopolios de violencia'. Se trata de un concepto que se concibe desde el actor ilícito/criminal, no solo para evidenciar sus capacidades de gobernar, sino sus mecanismos de articulación con el Estado.

Esta gobernanza la vemos en los casos de la forma 'Extracción directa de naturaleza/recursos' motorizados por actores ilícito/criminales, en los cuales estos pudieron desarrollar gobernanzas territoriales (como en la zona sur de Los Llanos) y operar con un mayor rango de acción, con el Estado asumiendo un rol de permisividad pasiva. Los casos del nivel 'Extracción/contrabando transfronterizo - Segmentación' también pueden ser incluidos en esta categoría. Hemos visto que con el contrabando transfronterizo de carbón y varios casos de especies protegidas también ha prevalecido una permisividad pasiva del Estado; mismo patrón que se evidenció con la minería ilegal de oro en Carabobo. El grado de relevancia de esta forma de contrabando/Segmentación es mayor dado que estas economías pueden tener más amplias dimensiones, o al menos estar inscritas en espectros de economía mucho más extensos (como el narcotráfico, que se enlaza con otras expresiones del extractivismo).

Sin embargo, el patrón de permisividad/pasiva del Estado tiene que ver con al menos tres aspectos fundamentales:

a) aunque los negocios son de mayor importancia, sigue siendo aún de nivel relativo, como el caso del carbón o las especies protegidas. El caso del oro sí está en la cúspide de los intereses extractivistas aunque, como ya ha sido mencionado, las concentraciones auríferas en el sur de Carabobo son escasas y se trata de una zona muy céntrica –y cercana a Caracas− como para convertirse en un enclave minero ilícito de importancia;
b) zonas fronterizas como las del sur de Los Llanos no solo poseen un ATPP Nulo/Bajo, sino que en lo comercial tienen también menor importancia respecto a otras regiones; y
c) el mayor margen de operación de estas gobernanzas criminales está vinculado con pactos de cohabitación con el Estado –como ocurre en regiones con la guerrilla colombiana−, o por la priorización de este último hacia otras zonas, aunque la situación se puede volver inconveniente, haciendo que se produzca una intervención estatal directa e intensa que produce confrontaciones entre los actores.

En tercer y último lugar, la forma de operación y estrategia 'Extracción/contrabando transfronterizo - Hibridación' representa la configuración de gobernanzas híbridas, las cuales tienen un rol central no sólo en la extracción de naturaleza en el país, sino también en todo el modelo de poder nacional. Los imperiosos objetivos de captura de recursos por parte de los actores de poder pudieron generar disputas entre estos, pero el costo de confrontaciones permanentes puede ser alto. Por esto, al mismo tiempo presenciamos complejos ensamblajes de operaciones estatales/criminales que posibilitaran procesos conjuntos de apropiación de riqueza y protegieran en la mayor forma posible el negocio. Se trata de formas de articulación profunda e imbricación entre grupos criminales y estatales, que se desarrolló en el despliegue de las cadenas ilícitas de commodities de carácter transnacionalizado.

La alta relevancia de esta gobernanza puede evidenciarse tanto en su alcance geográfico como económico. Como vimos, abarca y se expande por toda la Amazonía, prácticamente la mitad del territorio continental venezolano. Incluye parte de las zonas fronterizas con Colombia, y atraviesa prácticamente el resto del país con sus cadenas de contrabando de mercancías como el combustible y la chatarra. Por otro lado, tal y como se analizó en el capítulo 2, se hace referencia al oro, que adquirió un rol protagónico en los ingresos del país, rondando entre 2.500-1.500 millones de dólares al año; el combustible de contrabando generó ganancias entre 1.200-750 millones; y la chatarra alcanzó los 658 millones de dólares en 2022, ubicándose entre los primero cinco rubros exportación (OEC, S/F). Todos estos recursos acompañaron a los inestables ingresos petroleros que, como ya he explicado, se explota territorialmente en el marco de una gobernanza estatal autoritaria que optó por una política de abandono social de las localidades (Zonas de sacrificio Petroleras). En esta

línea, es esta forma de gobernanza híbrida la que puede ofrecer los más copiosos ingresos económicos, que además pueden nutrir la administración del gobierno central, al tiempo que también lo hace con los poderes regionales.

Con los elementos presentados, subrayo la relevancia de esta forma de gobernanza híbrida en la propia constitución del régimen extractivista. Me interesa proponer una conceptualización de la misma, buscando ofrecer aportes en una literatura que escasamente ha profundizado en las formas en las cuales grupos estatales y criminales participan de manera imbricada en las gobernanzas del extractivismo como régimen. Esto, al mismo tiempo, supone ofrecer el repensar algunos aspectos de la propia teoría del extractivismo. Veamos.

III.I Ampliando las dimensiones de análisis sobre poder y naturaleza: gobernanzas híbridas en el extractivismo

Para desarrollar con más detalle el concepto sobre gobernanzas híbridas en el extractivismo, es necesario primeramente examinar la literatura existente sobre el tópico. Al igual que se analizaba en el capítulo 1 respecto al concepto de gobernanzas, el grueso de los trabajos existentes sobre gobernanzas híbridas se han desarrollado desde la perspectiva de los estudios del desarrollo, la participación social y los nuevos modelos de gestión de negocios. Desde estos se han estudiado los roles de la sociedad y el llamado 'tercer sector' en las gobernanzas, así como las asociaciones que pueden ocurrir entre actores no estatales (Manganelli et al, 2020); o bien la co-gestión realizada entre el Estado y compañías privadas (Bair, 2017; Makadok & Coff, 2009). Enfoques similares también han sido comúnmente aplicados en el campo específico de las gobernanzas híbridas sobre los recursos naturales, en estudios sobre la gestión de las cadenas de commodities de la agricultura (Larsen et al, 2018), pagos por servicios ambientales (Higgins et al, 2014) o sobre diferentes niveles de gobernanza institucional y organizacional en una perspectiva nacional sobre la gestión de recursos (Lockwood & Davidson, 2010), por mencionar algunos ejemplos.

Desde la década pasada, el análisis del ámbito y dimensiones de las gobernanzas híbridas se amplió para comenzar a abordar el rol de los grupos irregulares armados en ellas (Meagher, 2012; Colona & Jaffe, 2016; Meagher et al, 2014). Atanasijevic (2016), a partir del caso de la minería en el Congo, examina cómo un conjunto de actores, entre los cuales están también agrupaciones irregulares, obstaculizan la trazabilidad y transparencia de la actividad, así como la gestión pacífica de los minerales preciosos. Sin embargo, escasa literatura – especialmente desde los Estudios sobre Paz y Seguridad– han profundizado en las formas en las cuales las organizaciones criminales participan en la construcción de gobernanzas híbridas: South (2017) lo hace en relación al conflicto armado en Myanmar y

la ‘construcción de paz’; Duarte-Villa et al (2021) examinando el Primeiro Comando da Capital y las Bandas Criminales ‘Bacrim’ (Colombia), y sus capacidades para ejercer gobernanza en seguridad; o Souza-Pimenta et al (2021) quienes también estudian grupos criminales brasileros, esta vez en las favelas de Río de Janeiro y su coexistencia con actores estatales. Solo López-Vallejo y Fuerte-Celis (2021) analizaron los vínculos entre cárteles de la droga e inversiones económicas formales, y su relación con la expansión extractivista, específicamente respecto a proyectos de combustibles fósiles en el noreste de México. De hecho, la literatura que analiza casos de participación del crimen organizado desde el enfoque del extractivismo es también escasa, y solo en los últimos años se ha incrementado el interés y los estudios al respecto: Lapierre y Aguasantas (2019), y Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva (2023) para el caso del Ecuador; Ruiz y Ramonetti (2020) y Rodríguez-Ugalde y Chávez-González (2024) para el caso de México; y Terán-Mantovani (2021), De Marinis y Fuentes-Díaz (2023), y Terán-Mantovani y Scarpacci (2024) para América Latina.

Los análisis que han estudiado esta específica trayectoria de las gobernanzas híbridas entre actores criminales y estatales –sea en contextos de ‘Estados frágiles’ o donde más bien hay estabilidad política pero de igual manera prolifera el crimen organizado– se han enfocado en los procesos que evolucionan, desde las dinámicas de solapamiento hasta una estrategia de coordinación causal entre estos actores (Duarte-Villa et al, 2021); la identificación de “patrones de cooperación” (Souza-Pimenta et al, 2021); la “mezcla de símbolos de autoridad” (Cuvelier et al, 2014), o incluso la configuración de “órdenes políticos híbridos” (Boege et al, 2008). En estos procesos se pueden articular mecanismos formales e informales (López-Vallejo & Fuerte-Celis, 2021) en torno a dimensiones específicas, y pueden dar como resultado prácticas institucionalizadas, rutinas de interacción o incluso dinámicas conflictivas; todo lo cual se examina en marcos donde las asociaciones están profundamente marcadas por la violencia y las economías del despojo que prevalecen en estos contextos particulares.

Partiendo de estos elementos analizados, planteo un concepto de gobernanzas híbridas en el marco del extractivismo que, por un lado, pone el foco en las dinámicas de imbricación entre actores criminales y estatales en torno a la configuración y despliegue de cadenas ilícitas de commodities y poderes territoriales; y por otro lado, las examina como un factor clave en la propia composición y recomposición del régimen extractivista.

Entenderemos gobernanzas híbridas como los conglomerados de poder territorializados, dinámicos y estratégicos, basados en las operaciones conjuntas entre actores estatales e ilícito/criminales, con el fin de impulsar procesos de extracción de naturaleza (recursos naturales) y, en última instancia, consolidar un régimen extractivista. En estos procesos de hibridación, las extracciones legales e ilegales pueden fusionarse, aunque en estas gobernanzas el Estado tiene un rol privilegiado para mediar entre estas, al tiempo que busca legitimar las operaciones. Sin embargo, más que un conjunto de alianzas estables, las

gobernanzas híbridas deben ser entendidas como un *método estratégico de asociación en el extractivismo*.

En este sentido, la gobernanza híbrida se distingue de la noción de gobernanza criminal, siendo que esta última es concebida desde el actor delictivo y las formas en que puede desarrollar mecanismos de articulación con el Estado; mientras que la primera pone de relieve el papel central que puede jugar el ámbito estatal y los co-protagonismos que se expresan en las economías ilícitas.

Planteado como un concepto crítico, este aborda un tipo de gobernanzas que usualmente opera de manera oculta y representa un extractivismo que se desarrolla 'en las sombras'. En este sentido, antes que buscar medir niveles de coherencia institucional, persigue develar y dejar al descubierto este tipo de construcciones de poder y autoridad, mostrando las variantes híbridas que potencian el avance hacia nuevas fronteras extractivas, la violencia y el despojo, y la expansión de la degradación y la injusticia ambiental.

Las gobernanzas híbridas en el extractivismo tienen cinco dimensiones fundamentales:

i. *Composición y estructura de las cadenas de commodities*: la cadena multi-escalar de extracción de naturaleza está compuesta de una serie de funciones y procesos que dan vida al mercado internacional de commodities. En estas cadenas, las gobernanzas híbridas se expresan como un tipo de división organizacional de funciones, que facilitan y potencian la extracción masiva ilegal. En este sentido, se configura una estructura de tareas en la cual se establece una relación de interdependencia y complementariedad entre las esferas estatales e ilícito/criminales, crucial para que además estas actividades extractivas puedan alcanzar grandes niveles de apropiación de recursos y de extensión geográfica. Como vimos en la TABLA 10, que examinó las acciones y estrategias conjuntas entre estos actores para las economías ilícitas transfronterizas (Amazonía-oro, Palma aceitera y combustible), el Estado usualmente usa mecanismos, medios e infraestructuras institucionales, así como su legitimidad y autoridad formalizada, con el fin de impulsar y/o favorecer estas operaciones extractivas. Al mismo tiempo, los grupos criminales suelen hacer el 'trabajo sucio', tomando en cuenta lo contraproducente que puede ser que los actores estatales se involucren públicamente en las actividades de extracción ilegal, lo que socava la legitimidad nacional e internacional tanto del gobierno central como del propio Estado.

ii. *Dinámicas de mimetización/mutación*: hay dos dinámicas importantes que destacar en los procesos de asociación en las gobernanzas híbridas. Primero, actores legales e ilegales pueden hacer uso de los métodos y mecanismos del otro, lo cual es evidente por ejemplo, cuando grupos del Estado usan rutas ilícitas de commodities controladas por grupos criminales para su propio beneficio, o bien cuando estas

organizaciones irregulares operan en minas estatales, o incluso en molinos, como vimos en el caso de El Callao. Esta especie de mimetización entre actores puede generar una aproximación mucho más profunda entre ellos.

Segundo, pueden también producirse transformaciones más profundas en los actores, dando lugar a procesos de mutación en la propia naturaleza de los mismos. Esto se ha expresado más claramente en varios actores estatales, los cuales pueden asumir formas de acción criminal, o incluso hacer parte de estructuras del crimen organizado, como se evidenció en los varios casos judicializados de funcionarios de alto nivel que se mostraron anteriormente, donde estos operaban en el contrabando de oro, combustible, especies protegidas y narcotráfico. Estas dinámicas de mutación ofrecen además elementos para una discusión más amplia acerca de procesos de "rutinización" de prácticas criminales en las instituciones estatales (Bayart et al, 1999), que incluso se conecta con la literatura que aborda la emergencia de 'Estados criminales'.

iii. *El imperativo extractivista y el Estado como promotor de gobernanzas híbridas*: la captura y explotación de recursos naturales tienen una extraordinaria importancia para los Estados del Sur Global, principalmente para aquellos sostenidos por el extractivismo, lo que ha configurado una dependencia estructural de estos Estados en torno a ello (Acosta, 2019), y un imperativo extractivista histórico. Como vimos para el caso venezolano, la incapacidad para desarrollar emprendimientos formales generó extraordinarios incentivos para la expansión de un nuevo régimen basado en muy buena medida, en operaciones extractivas ilícito/criminales. Este marco hace del Estado un importante promotor de gobernanzas híbridas, destacando también su iniciativa estratégica en la formación de este tipo de estructuras conjuntas.

iv. *La perspectiva del tipo de commodity*: la relación entre la emergencia de diversos conflictos y el tipo de commodity sobre el que giran estos (Martínez-Alier, 2003; Martínez-Alier & Walter, 2016), o bien entre los niveles de concentración de recursos en un territorio y las facilidades materiales para su apropiación (Le Billon, 2001; Buhaug, 2002) han sido destacadas desde la literatura de la ecología política, conflictos por recursos naturales y geografía crítica. Esta trayectoria de gobernanzas debe también ser analizada desde estos aspectos. Por ejemplo, hemos visto que el enorme grueso de las actividades extractivas en la Amazonía venezolana se centran en el oro, un commodity de gran valor internacional –mucho más en tiempos de crisis económica global−, que han mantenido precios altos y posee una logística transfronteriza consolidada para su contrabando, muy vinculada a las rutas de la cocaína (Insight Crime, 2021b). Además, las grandes reservas del metal en la biorregión −que crea una especial geografía de la extracción−, y el tipo de Estatalidad que caracteriza esta zona, son otros de los factores cruciales que

contribuyen a la convergencia e hibridación de actores, poderes e intereses que conformar redes de operación y ejecutan violentos métodos de apropiación del recurso.

Esto contrasta, por ejemplo, con la bauxita: a pesar de la proliferación de grupos irregulares armados en el municipio Cedeño, donde están las principales concentraciones del mineral, prácticamente no se produce extracción ilegal del mismo, ni se generan disputas en torno a su apropiación. Esto es así debido a que su rentabilidad no se acerca mínimamente a la del oro, y su uso está vinculado fundamentalmente a la producción de aluminio, la cual requiere complejos y costosos procesos industriales para su obtención. Si hacemos otro contraste con las especies silvestres o protegidas, aunque se produce el tráfico de estas en varias partes del país y la actividad puede generar ingresos destacables, no representa un 'commodity' que pueda ser extraído masivamente, y por tanto no posee los atributos materiales para sostener estas gobernanzas híbridas. En este marco, el tráfico de especies aparece en un segundo plano en estos procesos de extracción, como una especie de valor complementario que usualmente es usado para diversificar las fuentes de ingreso económico o alimentar a grupos más pequeños de las cadenas de contrabando. En todo caso, estos varios factores materiales que giran en torno a los commodities, y que pueden variar dependiendo de la región del mundo, son también factores determinantes en la emergencia o no de gobernanzas híbridas.

v. *Geografía política y procesos de territorialización de las gobernanzas híbridas:* en términos geográficos, hay al menos dos factores decisivos en la configuración y consolidación de gobernanzas híbridas. Primero, estas pueden crear procesos de territorialización que insertan zonas específicas en cadenas de valor internacional y economías ilícitas transfronterizas. La minería ilegal en torno al río Ocamo en territorio yanomami está integrada en un eje económico ilícito basado en el norte del estado brasileño de Roraima; el PN Yapacana queda articulado a las rutas del río Guaviare y una amplia territorialidad guerrillera en el sudeste de Colombia; y el Delta Orinoco en canales de contrabando del Caribe, que a su vez conectan con el Atlántico. Esto evidencia que, las dinámicas de operación de las gobernanzas híbridas desbordan los marcos de los Estados-nación y nos muestra las notorias limitaciones que pueden tener unidades de análisis acotadas sólo a los países. Por tanto, estas territorializaciones transfronterizas deberían también poder ser estudiadas independientemente, como una propia unidad compleja de análisis.

Segundo, como pudimos apreciar en el estudio desarrollado en tres niveles, los diferentes grados de alcance y participación en los procesos de extracción por parte del Estado, muestran al mismo tiempo variaciones de la Estatalidad y, por tanto, de las gobernanzas híbridas. Por ejemplo, la institucionalidad del CVM y de la

gobernación del estado Bolívar tiene más presencia y enraizamiento socioterritorial en El Callao, lugar además de larga tradición minera, lo que contribuye a un involucramiento e incrustación más profunda del Estado en las gobernanzas híbridas. Esto, a diferencia del municipio Atabapo, en el estado Amazonas, donde esta Estatalidad tiene un alcance territorial y social más bajo, el Estado participa de las extracciones ilícitas con menos recursos y mucha más representación relativa de militares, y donde además las economías transfronterizas del ELN y las disidencias de las FARC puede ser predominantes. La geografía política de la Estatalidad determina considerablemente los balances de poder en cada forma de gobernanza híbrida.

III.II Sobre gobernanzas híbridas en otras latitudes

La extraordinaria expansión de la presencia y actividad de grupos criminales en los territorios del país; de economías ilícitas transfronterizas como la del oro, que alcanzó niveles nunca vistos en la historia de Venezuela; los altos niveles de 'expoliabilidad' que se desarrollaron en la Amazonía respecto al resto de la biorregión sudamericana; la persistencia y consolidación a lo largo del tiempo de estos grupos y actividades criminales; todos estos elementos, como vimos, no serían posible a esta escala sin amplios grados de complicidad, articulación e incluso participación directa del Estado. De hecho, como se analizó a lo largo de esta exposición, el involucramiento estatal ha sido fundamental y en numerosas ocasiones con funciones directivas, para la conformación de estos escenarios.

Podría alegarse que un marco como este es más bien propio de un contexto sui generis como el del colapso venezolano, donde se da un profundo y extendido derrumbe de la institucionalidad estatal y la economía formal. No obstante, aunque en el caso de Venezuela estas dinámicas se manifiestan de manera notablemente generalizada, al mismo tiempo las podemos ver en grados diversos o al menos en algunos sectores, en otros países, por ejemplo en América Latina y el Caribe. Algunas cifras pueden dar cuenta de esto.

En primera instancia, hay que decir que, a nivel global en el siglo XXI, los actores criminales están participando cada vez más y de formas más sofisticadas en la extracción de naturaleza y, en general, en la distribución ecológica. La apropiación de los llamados recursos naturales se ha convertido en la principal fuente de ingreso para grupos armados irregulares: los delitos ambientales, como un todo agrupado, representan el 38% de la financiación de las operaciones de estos actores y de los conflictos armados, más que lo que aporta el tráfico de drogas (Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2016; Nellemann et al, 2018).

El particular contexto latinoamericano del presente siglo ha sido de una extraordinaria expansión, complejización y sofisticación del crimen organizado en la región en el presente

siglo (Salinas y Riquelme 2017; Cajiao et al, 2018; McDermott, 2019; Sampó y Alda-Mejías, 2019), que ha incluido un crecimiento notorio en su participación en la extracción de recursos naturales –principalmente desde el narcotráfico, como estrategia de diversificación económica. Esto, por cierto, se ha articulado con otro fenómeno no exclusivo de Venezuela, que tiene que ver con el auge de la corrupción en América Latina (Pastrana-Valls, 2019; Zysman-Quirós, 2019; Lagunes & Svejnar, 2020). Los impactos y expresiones de estos procesos en los regímenes extractivistas latinoamericanos son notables: por ejemplo, el porcentaje de oro ilegal extraído en comparación con el total nacional no es sólo alto en Venezuela. En Colombia puede alcanzar el 80%, en Ecuador 77% (Verité, 2016; Hecht et al, 2021), países donde no hubo un colapso, aunque hay patrones compartidos de fragilidad estatal en zonas de concentración de oro, corrupción y presencia fuerte de grupos criminales. En Brasil alcanza el 36%, y en la región amazónica de Madre de Dios, en Perú, se ha estimado en 97% (Sampó y Alda-Mejías, 2019).

Con respecto al tráfico de madera, sus niveles han sido calculados en 70% del total en México (Enciso, 2024); 82% in Perú (Mujica et al, 2024); y alrededor del 75% si se calcula en Sudamérica (López-Tarabochia, 2018). Tendencias como estas también impactan commodities como el coltán, los diamantes, tierras (despojos y acaparamientos), productos agrícolas –como el aguacate– o especies protegidas, entre otros recursos. Son las estructuras criminales transnacionalizadas las que han potenciado la configuración de estas cadenas de extracción ilícitas de naturaleza, que conlleva además el control de numerosos territorios, el manejo de grandes volúmenes de ingresos y una creciente incidencia en las instituciones de los Estados (Teran-Mantovani & Scarpacci, 2024).

Dadas las extraordinarias escalas que ha adquirido este fenómeno, las gobernanzas híbridas juegan un rol crucial en este. Es importante volver a recalcar que la formación de conglomerados de poder territorializados estatales e ilícito/criminales que conforman las gobernanzas híbridas, con el fin de desplegar cadenas ilícitas de commodities transnacionalizadas, es aquí entendida como un método estratégico de asociación en el extractivismo. Esto implica que son también respuestas que gobiernos nacionales o locales, o sectores del Estado, dan no solo ante el imperativo extractivista, sino también a las crisis cíclicas que viven los países dependientes de la exportación de materias primas, y a las disputas por el poder político que se desarrolla en regiones como Latinoamérica, que dependen y se definen por la captura de recursos.

En consonancia, la noción de gobernanza híbrida en el extractivismo puede aplicarse para analizar detalladamente y desmenuzar la hibridación en las cadenas del extractivismo en otras latitudes en el siglo XXI, y además comprender los importantes cambios que, de la mano de estas, se van produciendo en el conjunto del régimen.

Respecto a su aplicabilidad, hay por tanto dos puntos sobre los cuales es necesario profundizar: uno, explicitar las condiciones para que se dé la emergencia de gobernanzas

híbridas en el extractivismo; y dos, mencionar algunos casos en otros países y regiones que muestren y ejemplifiquen dinámicas de hibridación a ser analizadas.

En relación al primer punto, a partir del análisis planteado podemos identificar cinco condiciones generales, relacionadas entre ellas, para que se desarrollen gobernanzas híbridas en el extractivismo:

a) Estados con fuertes entramados de corrupción, fragilidad institucional y sistemas de impunidad consolidados: se ha analizado la formación de gobernanzas híbridas en casos donde hay Estados atravesados por conflictos armados –como los propuestos desde los Estudios sobre Paz y Seguridad y literatura sobre Conflictos por Recursos Naturales−, y colapsados, como hemos visto con el venezolano. No obstante, también se pueden desarrollar en contextos de (relativa) estabilidad política aunque en Estados en los que se incrustan poderosos entramados de corrupción –en buena medida consolidados− que se articulan con sistemas institucionales de justicia muy determinados por la impunidad y la ineficiencia, y/o regímenes autoritarios. También pueden emerger en regiones donde las estatalidades poseen escasa diversidad institucional (con gran sesgo a favor del sector militar) y pocas capacidades de actuación y provisión, y sobre todo mínima contraloría y escrutinio de sus operaciones, como lo es la Panamazonía.

b) Estructuras criminales fuertes y complejas: al mismo tiempo, se reconoce que estos procesos de hibridación para que sean posibles requieren la presencia y participación de estructuras criminales que tengan la capacidad organizativa y poder de fuego para controlar territorios; asumir (parte) de la logística de las cadenas ilícitas transfronterizas de commodities; y tener incluso la incidencia en las instituciones y actores estatales, lo que conminaría u obligaría de una u otra manera a estos últimos a articularse con aquellos.

c) Crisis y oportunidad económica: pueden surgir gobernanzas híbridas en sectores del extractivismo donde la explotación formal están en declive, pero la gestión ilícita/criminal tiene la capacidad de reactivarlo y levantarlo. También las crisis económicas nacionales, al precarizar las gestiones formales de las empresas del Estado y sus instituciones, favorecen a la emergencia de estas formas híbridas en la extracción de naturaleza. A su vez, aunque la explotación formal de un rubro pueda estar en desarrollo, la extracción criminal del mismo puede ofrecer mejores oportunidades de enriquecimiento, no solo a los grupos irregulares, sino también a sectores estatales y a la propia población, que puede ser incorporada a esta economía ilícita.

d) Commodity/Negocio lucrativo: se examinó el hecho que commodities con niveles de rentabilidad considerable (como lo es el oro, que en algunos países es mayor que

la de la cocaína), o bien mercancías que pueden ofrecer altos márgenes de ganancia, como lo fue la gasolina subsidiada de Venezuela, que se vendía en Colombia y Brasil con diferencias enormes de precio, incentivan la convergencia de actores estatales y criminales que, aunque podían disputarse con violencia el negocio, también podían terminar de imbricarse por el bien del desarrollo de esta economía ilícita.

e) Expoliabilidad y ventajas geográficas: es un factor de importancia la geografía específica donde se desenvuelven las gobernanzas híbridas, sea porque los niveles de expoliabilidad de esta pueden ser altos y favorables a estas asociaciones, generando oportunidades de captación de recursos y rentas; o bien sea porque se dan en zonas como nuevas fronteras de commodities, regiones fronterizas o periferias, propicias para la extracción, para un margen relativamente amplio de actuación, y conectadas a rutas ilícitas internacionales de commodities que pueden estar relativamente consolidadas.

Respecto a algunos ejemplos para ser analizados desde la perspectiva de la gobernanzas híbridas en el extractivismo, ya vimos varios de los commodities sobre los que estas han tenido propensión a desarrollarse (oro, cultivos de coca, madera, coltán, entre otros). Las dinámicas y geografías del oro en la Amazonía venezolana nos han mostrado también que estas hacen parte de procesos que desbordan las fronteras nacionales y están en desarrollo en otros países, incluso no solo en la Panamazonía, sino también en otras regiones latinoamericanas. Si tomamos los ejemplos de Ecuador y Colombia, con estos muy altos porcentajes de extracción de oro ilegal respecto al total, pero que al mismo tiempo representa el cuarto y tercer rubro de exportación de cada país respectivamente en 2023, podemos destacar de manera sintética lo siguiente. En Ecuador, que ha experimentado en los últimos años un sensible auge del crimen organizado y de la minería ilegal de oro, se registra la presencia de organizaciones delictivas vinculadas a la actividad, las cuales ejercen control territorial, determinan el régimen laboral y la interacción con los gobiernos locales. Se señala al mismo tiempo el involucramiento directo o indirecto de funcionarios estatales locales y nacionales en todos los niveles de la cadena minera ilícita. Entre estos actores están prefectos, asambleístas y exfuncionarios de las agencias de regulación de la actividad, quienes ejercen autoridad política en esos territorios, y habilitan y supervisan la minería; entregan concesiones a particulares para legalizarla, además de permitir la operación de compañías dedicadas al lavado de activos derivados del comercio ilícito de oro; todo lo cual les genera beneficios (OEA, 2021; Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva, 2023).

En el caso de Colombia, aunque en un entorno mucho más caótico y con estructuras criminales mucho más proliferadas, se señala que estas últimas ejercen operaciones de ‘blanqueamiento’ de la minería ilegal por medio del registro ficticio, pero formal, de personas que estarían dedicadas a la extracción de oro, lo que les permitiría hacer pasar mineral extraído como legal. Funcionarios públicos juegan un papel importante, por

ejemplo, devolviendo maquinaria minera incautada a grupos ilegales de extracción de oro, cobrando por las operaciones fraudulentas de registro de productores, permitiendo el lavado de dinero por parte de empresas, facilitando el contrabando del material en aduanas y fronteras, y generando facturaciones falsas. Entre los funcionarios detenidos por este tipo de delito se ha mencionado personal de la alcaldía de El Bagre (Antioquia) o inspectores de la policía. Como resultado, las cifras de exportación de oro de Colombia, entre 2012 y 2023 superaron en 69 toneladas a su propio registro de producción, lo que revela esa significativa extracción por fuera de los márgenes formales/legales (OEA, 2022; Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto, 2024).

La extracción ilegal de madera en el Perú puede también ofrecer elementos para un análisis de gobernanzas híbridas. Aunque como vimos los niveles de ilegalidad en la actividad maderera peruana son muy altos, ciertamente no es uno de los principales productos de exportación del país (su impacto ha sido más territorial), pero se destaca como un negocio ilícito que puede generar anualmente en el mundo unos 152.000 millones de dólares (Interpol, 2022). Es importante destacar que, en general el comercio de madera implica equipos pesados y redes de transporte amplias, lo que apunta a la necesidad de que la actividad ilegal cuente incluso con la colusión de sectores de alto nivel del Estado. En el caso peruano, la notoria condición de ilegalidad generalizada del negocio maderero justamente tiene que ver con actos de corrupción sistemáticos e institucionalizados que atraviesan todos los niveles de la cadena del commodity (extracción, traslado y comercialización). La extracción se produce fundamentalmente con actores que van desde grupos de la informalidad, empresas, hasta el crimen organizado. Sin embargo, ha sido el Estado peruano quien abrió las puertas para la exploración, colonización y explotación de la madera en la Amazonía (entre otros recursos). Las normativas y controles planteados para el sector no tienen prácticamente incidencia en lograr el desenvolvimiento regular del mismo; en cambio, se señala involucramiento directo e indirecto de actores estatales en procesos como fraudes en la emisión de títulos habilitantes y el establecimiento de zonas de explotación ficticias que serían suplidas por madera extraída ilegalmente de áreas no autorizadas (Indaga, 2022; Mujica et al, 2024). En el departamento de Ucayali, se indica la participación de la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (DIGEFFS), la cual otorga certificados de origen legal de la madera cuando esta no lo es, lavando el recurso; genera inspecciones y verificaciones fraudulentas de rutas de tránsito del recurso; y deja la acción de funcionarios que cometen estos ilícitos bajo altos niveles de impunidad. La dirección del DIGESFFS la asigna el gobernador del departamento y se establecen alianzas con los poderes madereros privados regionales, lo que evidencia entramados de corrupción complejos (Bargent, 2019). Este conjunto de ilícitos viene de la mano de incentivos económicos a funcionarios. La secuencia llega hasta la concesión de permisos de comercio y exportación de la madera de origen ilícito.

Es posible transpolar estos análisis a regímenes extractivistas de otras latitudes, como en el continente africano, donde incluso se pueden corroborar también algunos patrones

compartidos hacia formas de gobernanzas híbridas. De hecho, numerosos casos africanos pueden ser incluso más parecidos al caso venezolano, dado el carácter neopatrimonial de los gobiernos que rigen esos Estados –familias que hacen usufructo personal de las instituciones públicas y los recursos naturales. En el tráfico de madera, en países como la República Democrática del Congo, los diversos tipos de organizaciones criminales que participan de la actividad penetran toda la cadena, en la cual también están imbricados actores estatales, junto a extranjeros. Los actores irregulares, además de controlar territorio, lo hacen sobre el comercio de los madereros artesanales y su actividad, sobre quienes pesan pocas regulaciones. Los grupos criminales compran concesiones comerciales a través de sus conexiones con actores del Estado, o bien adquieren permisos falsos, lo que evidencia que desde los más altos niveles estatales se facilita el tráfico de madera. Esta articulación continúa hasta el proceso de salida del producto por zonas fronterizas. Se corroboran también involucramientos estatales directos en la actividad, como ocurrió en Guinea-Bissau en 2013 con el caso de los vínculos de oficiales militares de alto nivel con el tráfico de drogas y madera; o en 2019 en Gabón con el vicepresidente y el ministro de Silvicultura, vinculado al contrabando de palo de rosa (Browne et al, 2022).

Por último, esta transpolación en el continente africano se puede llevar evidentemente también hacia las cadenas mineras, que tienen mucho más peso en estos regímenes extractivistas de este continente. Si tomamos nuevamente al caso del Congo como uno emblemático, vemos estos procesos de imbricación estatal/criminal en la importante cadena del cobalto −el segundo rubro de exportación del país−, donde mineros artesanales, bandas criminales y actores estatales se articulan en ella. Se genera esta colusión en la certificación de cobalto ilegal llevado a yacimientos autorizados, a través de su aprobación por el Ministerio de Minas. Militares y policías ingresan ilegalmente a las minas, sobre todo en zonas más remotas, para obtener cobalto de los mineros artesanales, que luego revenden. El paso del mineral por parte de contrabandistas a través de las fronteras (de Zambia, Burundi y Tanzania), se produce con la cooperación de la policía regional, e incluso se señala que estas fuerzas del orden pueden brindar seguridad a aquellos (Ojewale, 2024).

En todo caso, se subraya que en cada país se pueden presentar variaciones vinculadas al tipo de commodity, la valoración económica particular que este pueda tener en cada región, los diferentes balances de poder entre los actores en juego, el perfil de los Estados y las estatalidades en cada país y continente, así como de cada régimen extractivista, que finalmente se expresa en variaciones de las gobernanzas híbridas. De acuerdo a esta variabilidad, por ejemplo, vemos que la expoliabilidad ilícito/criminal del petróleo en Venezuela era en realidad insignificante (apenas algunos barriles extraídos por la guerrilla), si la comparamos con un país como Nigeria, donde se extraen ilícitamente decenas de miles de barriles diarios a través de grupos delictivos y la colusión con funcionarios estatales, fuerzas militares y operadores de las agencias petroleras del país (Ojewale, 2022). Por otro lado, hemos visto que en general el rol de los actores privados en el caso venezolano era poco determinante, aunque en otros casos suelen tener un peso mayor en las cadenas ilícitas

de commodities, por lo que pueden ser también un actor relevante en la configuración de estas gobernanzas híbridas.

En todo caso, y para cerrar esta sección, para estos casos expuestos como ejemplos, y otros que seguramente podrían examinarse, se recalca la conveniencia de un análisis más a profundidad en varias escalas, de manera de poder vincular el examen de los entramados híbridos territoriales de extracción de naturaleza, no solo con el recorrido complejo de sus cadenas de valor, sino también con las políticas de Estado. Esto con el fin de intentar obtener conclusiones más del tipo sistémica, y sobre todo, comprender cómo estas gobernanzas están vinculadas con las más amplias esferas de poder.

III.III Gobernanzas híbridas y cambios sistémicos: la configuración de un extractivismo ilícito

El caso venezolano nos ha mostrado que la emergencia de gobernanzas híbridas expresa en realidad un cambio profundo en el régimen extractivista. No obstante, la teoría del extractivismo no ha concebido hasta el momento que dicho régimen, modelo o sistema (dependiendo de las aproximaciones conceptuales planteadas en la literatura) pueda también estar configurado por las poderosas estructuras criminales que se han examinado. Como he mencionado brevemente, el grueso de las teorizaciones han concebido la composición de este régimen de acumulación por empresas privadas nacionales o internacionales, gobiernos nacionales y/o locales, así como empresas e instituciones del Estado. Estos actores son evidentemente determinantes en el análisis, pero quedan vacíos para comprender cómo las tramas, agrupaciones y economías de la criminalidad pueden estar también teniendo un peso considerable en las nuevas configuraciones históricas del extractivismo.

Partiendo de la identificación de este vacío en la literatura, propongo examinar una variante de este régimen histórico, que la denomino *extractivismo ilícito/criminal*. Me interesa plantear una doble argumentación al respecto: una histórica y una contemporánea. Comencemos por la histórica.

En el capítulo 1 he planteado que debe entenderse al extractivismo también como un modelo histórico de más de cinco siglos, articulado y subordinado a la evolución del capitalismo y el colonialismo. Es crucial subrayar que la historia del extractivismo, y por tanto, de América Latina y el Caribe, ha estado atravesada por diferentes expresiones de economías ilícito/criminales, las cuales, por supuesto, deben ser interpretadas desde su particular contexto temporal. De forma muy sucinta, podríamos trazar una línea de continuidad de estas expresiones forajidas: desde el rol de emprendimientos privados armados como la Casa Welser en Venezuela; la Compañía de Levante para conquistar Perú, o las Bandeiras en Brasil, entre otros, quienes desde los inicios de la conquista de América

penetraban territorios, con una relativa relación de asociación con la Corona española, movidos por la búsqueda de botines y la extracción de recursos, y ejerciendo gran violencia y esclavización de indígenas.

Pasando por los siglos XVI y XVII, de auge comercial transatlántico y de la demanda de materias primas, donde piratas y corsarios, antes que solo ser criminales que amenazaban a la economía legal, tuvieron también un papel crucial en el desarrollo del régimen extractivista/colonial. Esto se evidenció, por ejemplo, con la extraordinaria expansión de la economía azucarera en Jamaica en el siglo XVII, financiada con las grandes riquezas que generó la piratería, a partir del saqueo y el contrabando; o con la extracción y el tráfico del palo de tinte hacia Europa, que piratas realizaron en la Laguna de Campeche en los siglos XVI y XVII. El contrabando muchas veces lo promovía las propias coronas que, además, ofrecían ayuda militar para la actividad pirata, y los ataques y saqueos de corsarios recibían autorización de sus gobiernos con la 'patente de corso' (Teran-Mantovani y Scarpacci, 2024)[11].

Con la consolidación del régimen colonial se entrelazaron y, en ciertas formas, se fusionaron, con más sistematicidad, la rapacidad privada e inmediata con la necesidad creciente de organizar el trabajo, la extracción y la producción, tal como exigen, por ejemplo, la plantación de caña de azúcar, la cría de ganado o la explotación de minas, entre otras, lo que dio sustento al modelo extractivista. Dicho entrecruzamiento perforó los límites temporales de la conquista, y avanzó hacia la constitución del proyecto de nación.

Luego de la independencia de los países de América Latina y el Caribe, el siglo XIX es marcado por fenómenos como el caudillismo, el caciquismo, el gamonalismo o el coronelismo, que constituían poderes regionales y de la tierra –producto de la precaria centralización del poder de los Estados−, los cuales eran sostenidos por la conformación de bandas, montoneras y/o guerrillas armadas, que en general han sido vistos por parte de la historiografía dominante como una amenaza para el Estado, o como simples bandoleros que actúan al margen de la ley. No obstante, a parte de sus métodos de apropiación de riqueza donde operaban bajo lógicas de rapiña y despojo, este tipo de liderazgos regionales carismáticos también se vincularon con el poder hacendal, fueron herramientas clave para la consolidación de variadas oligarquías extractivistas, sobre todo, las más conservadoras; o bien pudieron ser bisagras que articulaban el poder regional con el nivel nacional, como se vio con el caciquismo mexicano y su rol en la propia formación del Estado-nación de ese país.

[11] Recupero algunos fragmentos de mi artículo, escrito con Martín Scarpacci, "Economías criminales, extractivismo y acumulación entrelazada: un análisis multiescalar de los nuevos escenarios latinoamericanos" para exponer el carácter histórico del extractivismo ilícito criminal. Este artículo fue publicado en el marco de la investigación doctoral. Ver en referencias bibliográficas: Teran-Mantovani y Scarpacci, 2024.

En esta línea de continuidad histórica, tenemos fenómenos más contemporáneos (siglo XX) como el paramilitarismo en Colombia, que encuentra parte de sus fundamentos en las prácticas de las élites de índole rural/regional de recurrir a grupos armados privados para ejercer violencia y defender sus intereses particulares, algo que se dio en connivencia con el Estado. O el narcotráfico, que emergió en México desde las primeras décadas del siglo XX como una extensión tutelada del ámbito del poder político. Esta línea de historicidad puede ser conectada con los procesos que hemos examinado en el siglo XXI, no solo por el rol de figuras ilícito/criminales en la construcción de poder territorial y sobre la tierra y los recursos, sino incluso por los diversos niveles de relacionamiento conflictivo y de cooperación que existió entre estas y el poder político establecido (reconocido como el ámbito de lo legal).

Planteados estos elementos, se puede afirmar la existencia de tres vertientes entrecruzadas e interrelacionadas como pilares de la configuración histórica del extractivismo: la primera, que fue desarrollando el largo proceso para su legalización, formalización e institucionalización como régimen dominante; la segunda, que operó, y aun lo hace, a la par de la primera, siendo funcional y articulada con esta, y desplegó un aparataje político de despojo violento y de explotación de naturaleza, cuerpos y territorios; y una tercera vertiente, que representa a la economía paralela, ilegal, subterránea y parasitaria, forajida y pirata, que ha sido asociada históricamente con la criminalidad, pero que también pudo ser recurrentemente aprovechada por el modo de acumulación.

Los balances y pesos relativos que tienen cada una de estas tres vertientes del extractivismo varían históricamente, dependiendo de las formas de ejercicio del poder predominantes (fundamentalmente las formas de la colonialidad global y de la estatalidad) y de las fases de acumulación capitalista en un período temporal determinado (mercantilista/colonial, latifundio, economías de enclave, economía relativamente industrializada y sustitución de importaciones, entre otras). A este balance lo llamo la *composición del extractivismo*.

Esto me lleva a la segunda argumentación, la contemporánea. Las tendencias recientes que han sido examinadas aquí, no solo para el caso venezolano, sino también de buena parte de América Latina, revelan nuevos cambios en la composición del extractivismo. Así como, por ejemplo, la fiebre del caucho y sus violentas gobernanzas impactaron la morfología del extractivismo en la Amazonía, en el último cuarto del siglo XIX; o como ocurrió con la emergencia del Petro-estado en Venezuela o el salto hacia la minería de cobre de gran escala en Chile, ambos en el primer cuarto del siglo XX; del mismo modo los procesos en desarrollo en el siglo XXI nos colocan ante nuevas configuraciones históricas del extractivismo, esta vez en el contexto de estructuras criminales con formas de organización y operación muy sofisticadas, Estados con vulnerabilidades de gran complejidad y redes globalizadas de commodities e intrincadas cadenas de valor transnacionalizadas.

Planteo que, en este marco es crucial resaltar la re-emergencia de esta variante de extractivismo ilícito/criminal, como una expresión de transformaciones sistémicas, más allá de la percepción de las operaciones de extracción ilegal como actividades 'subterráneas' o 'en los márgenes'. O bien, concebir esta variante como una modalidad que está de lleno incrustada e hibridada en la economía, instituciones, prácticas, logísticas y hasta culturas del régimen extractivista actual.

A pesar de estas transformaciones mencionadas, en la literatura sobre extractivismo muy escasamente se ha analizado una variante ilícita de este régimen. En trabajos como el de Ulloa (2016) se menciona un 'extractivismo ilegal' para hacer alusión a la minería de este tipo y la violencia que genera, aunque no se desarrolla el concepto. Cuestión similar la encontramos en el artículo de Soberón-Garrido (2024), donde el término 'extractivismo ilícito' es referido aunque no es precisado. Del mismo modo, Trujillo-Ospina et al (2018) examinan la evolución minera que deviene en el auge de la minería ilegal con grupos armados en el Cauca, vinculando este proceso a lo que denominan un 'desbordamiento del extractivismo'. En el trabajo de Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva (2023) se alude a las gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal como "una relación similar de neoextractivismo", lo que ofrece cierto acercamiento a una configuración criminal de tipo sistémica, aunque esta en realidad queda de forma paralela al concepto. Y en Gudynas (2019) se analizan varias dimensiones de la ilegalidad y 'a-legalidad' en el extractivismo, aunque no se propone una distinción conceptual como tal.

En sentido, se propone un concepto de extractivismo ilícito/criminal definido como la variante en la cual: a) se desarrollan operaciones de extracción masiva de naturaleza (o recursos naturales) impulsadas fundamentalmente por estructuras criminales que generalmente operan con varios grados de articulación con actores estatales, y que están insertos en formatos de economías delictivas de considerable dimensión; b) se despliegan procesos extractivos y cadenas ilícitas de commodities que, en general, gestionan recursos que están también orientados a la 'exportación' (sea en rutas nítidas de contrabando o bien mezclados con otros que sí están legalizados y que salen por puertos regularmente) e insertos en mercados internacionales, como ocurre con los cultivos de coca para la producción de cocaína o el oro ilegal); c) se instauran gobernanzas territoriales que establecen métodos de gobierno y procesos de territorialización que moldean geografías funcionales a este; y d) se establecen sus propios volúmenes de extracción a gran escala, sus propias formas de intervención en las instituciones del país, y los diferentes niveles y mecanismos de relacionamiento con los poderes políticos y económicos instaurados.

La noción de extractivismo ilícito/criminal busca ampliar y robustecer las conceptualizaciones y entendimientos sobre el régimen extractivista, destacando el rol determinante que los entramados delictivos y sus articulaciones e hibridaciones con el resto de los poderes, tiene en los permanentes procesos de reconfiguración del mismo. A su vez, intenta resaltar la historicidad de la composición del extractivismo y sus variaciones, en las

cuales pueden tener cabida facetas más predatorias, fragmentadas o violentas, como ocurría en siglos como el XVIII o XIX.

Si bien el caso venezolano del período de La Gran Crisis es uno muy evidente de extractivismo ilícito/criminal, podemos también tener expresiones parciales del mismo, como se puede evidenciar en las estructuras de extracción/comercio de commodities específicos muy determinados por la criminalidad, como lo vimos con la minería de oro en Colombia o Ecuador, o los cultivos de coca en Perú; en segmentos de las rentas nacionales que tienen estas procedencias extractivo-ilícitas; o bien en el análisis y el reconocimiento crítico de entramados de hibridación en las asociaciones entre actores estatales y criminales para la extracción de naturaleza, aunque estos puedan ocultarse detrás de mecanismos de legalización de las operaciones. Con esto último, se destaca el importante papel que juegan las gobernanzas híbridas en la consolidación de un extractivismo ilícito/criminal.

III.IV Extractivismo/poder/territorialización en el siglo XXI: nuevas aristas del problema del Estado y las estatalidades en América Latina

El estudio sobre gobernanzas híbridas y extractivismo ilícito/criminal nos arroja también elementos sobre su relación con los procesos permanentes de formación y reconfiguración de los Estados, que tiene aristas estructurales, históricas, políticas, geográficas y geopolíticas que están en juego y son relevantes para proponer un análisis más amplio.

En el recorrido de este trabajo hemos visto que, previo a La Gran Crisis, aún prevalecía la gobernanza rentista centralizada del Petro-estado, la cual todavía lograba precarios equilibrios políticos y procesos de distribución de riqueza que sostenían el régimen histórico en su conjunto. No obstante, he afirmado que esta gobernanza sustentada tan fuertemente en torno a la renta petrolera había creado muy altos niveles de dependencia de esta, no sólo en lo económico sino también en lo institucional y político, configurando un régimen societal con notables asimetrías y vulnerabilidades. Al desplomarse el petróleo y la renta, ha quedado un extraordinario vacío que potenció tremendamente el caos sistémico y las disputas sociales y políticas, con gran impacto en las gobernanzas y los procesos de distribución ecológica. Esto evidentemente puede abrir o conectarse con una discusión sobre los rasgos de los Petro-estados en declive o decadencia histórica, y los nuevos entornos extractivos, gobernanzas, los nuevos escenarios ambientales y conflictos ecológico-distributivos que de esto se derivan, aunque no está entre mis propósitos extenderme sobre este específico tópico de los Petro-estados. La discusión no ha sido aún extendida, aunque se reconocen elementos sistémicos –más allá del caso venezolano− que nutren la misma, como el trabajo de Kaldor et al (2007), que mostró cómo la evolución del típico modelo insostenible de los Petro-estados podía apuntar a posteriores fases predatorias, ‘Estados fallidos’ y la emergencias de “las nuevas guerras del petróleo”. En Bridge y Le Billon (2013) se alude a las “nuevas realidades del petróleo” y el “dilema

energético global" basados un entorno de crisis, con volatilidad de los precios del crudo, limitaciones en los desarrollos de fuentes no convencionales, cambios en los balances de poder internacional, entre otros factores, que generan un "déficit de gobernanza" en torno a este recurso. En un tono más reciente, se han destacado los extraordinarios desafíos que representa la transición energética global para los Petro-estados, orientada a desescalar la producción de combustibles fósiles (Prince et al, 2023; Van de Graaf, 2023; Sarkar y De Waal, 2024).

En todo caso, me interesa resaltar el hecho que, el paso de esta gobernanza centralizada dominante al predominio de un marco de gobernanzas más bien fragmentadas que nos dejó el colapso del Petro-estado, no supuso una desintegración estatal sino importantes cambios en su morfología y naturaleza. La tradicional y recurrente idea de que dinámicas como las analizadas se producen por una 'ausencia de Estado' deben ser discutidas a la luz, por ejemplo, de las evidencias presentadas en este trabajo. Lo que ocurrió con el surgimiento de un Estado regido por un esquema neopatrimonial fue una simplificación de su estructura institucional que, como lo expuse en mi análisis, degradó sus operaciones sociales, ambientales, de servicios y democráticas para crear una asimetría a favor de las instituciones militares y extractivas. Esto básicamente produjo el despliegue territorial de una forma de Estado más bien militarista.

De manera que no se puede hablar de ausencia de Estado como una idea que explique el contexto examinado. De hecho, se debe hacer énfasis en dos aspectos que se evidenciaron con la emergencia de las gobernanzas híbridas: primero, vimos que el Estado pudo en ocasiones ser promotor del extractivismo ilícito. A través de funcionarios regionales y locales pudo estar a la cabeza de operaciones de extracción de recursos, sea por su cuenta o en articulación con grupos criminales o privados. Segundo, las operaciones locales y regionales no pueden entenderse solo de manera aislada, y de hecho contaron con niveles de coordinación desde las orientaciones generales del gobierno central. A partir de las políticas de Estado y complejas cadenas de mando que funcionaban de arriba hacia abajo –actores estatales de bajo rango que son autorizados a participar en las actividades ilegales, pero debían reportar una parte de las ganancias a sus superiores–, se pudo lograr niveles de articulación multi-escalar de estas operaciones de extracción, de manera que una proporción de recursos clave y rentas ilícitas pudieran llegar también a la administración del gobierno central.

El proyecto Arco Minero del Orinoco puede ser emblemático en este sentido: implicó un incentivo desde arriba a todo tipo de minería en el conjunto de la Amazonía, supuso un despliegue de actores y mecanismos estatales que patrocinaron y resguardaron la minería ilícita/criminal, y en general, sirvió para amalgamar las formas de operación legales con las ilegales. En este sentido, el AMO no debería ser entendido solo como un mega-proyecto minero formal, sino fundamentalmente como un mecanismo para la articulación y legitimación de operaciones de extracción y despojo de recursos naturales de variadas

escalas, modalidades y tipos, haciendo del Estado el ámbito privilegiado de esa mediación. El AMO es la más nítida expresión de las gobernanzas híbridas en el extractivismo.

Dicho esto, mi análisis no se adhiere a muy difundidas nociones como la del 'Estado fallido', al menos desde las perspectivas más conservadoras y normativas, que señalan expresiones disfuncionales o insuficientemente funcionales respecto al tipo de 'Estado adecuado' que se inscribe en la tipología ideal del modelo occidental. El foco de estas perspectivas suele medir las 'capacidades' en relación a los estándares internacionales del 'Estado adecuado' vinculado a las instituciones democráticas de Occidente. No obstante, escasamente han podido explicar con mayor claridad las nuevas configuraciones de poder que surgen de estos procesos de derrumbe. En el caso venezolano, los 'fallos' del Estado en la ejecución de los aspectos fundamentales de ofrecimiento de canales democráticos o de provisión, se dieron mientras se desarrollaron variados dispositivos de apropiación de naturaleza/riqueza, de uso institucionalizado de la violencia y de dominación regional y nacional, al tiempo que se mantuvieron niveles relativos de supremacía respecto a otros actores nacionales (sociales, políticos y/o armados), lo que explica el devenir de un régimen dictatorial. Nótese incluso que, pese al colapso, el gobierno de Maduro mantuvo el control del Estado, y en buena medida esto se alcanzó gracias a las reconfiguraciones estatales descritas.

Lo planteado nos lleva a algunas consideraciones teóricas sobre la relación Estado/extractivismo en América Latina y el Caribe, que puedan sustentar una interpretación crítica e histórico-estructural de la misma, más allá de la lectura de la disfuncionalidad normativa. Desde estas perspectivas preceptivas y en cierta forma desarrollistas, que fueron identificadas en el capítulo 1, se parte de la idea del Estado fundamentalmente como un ente rector y regulador de la sociedad, como un instrumento de institucionalización, orden y construcción de progreso para la misma, siendo entonces la corrupción, la criminalidad, el despojo o la fragilidad institucional, anomalías o desviaciones de la estructura funcional de aquel. Sin embargo, esta idea es muy insuficiente para comprender la evolución de esta relación Estado/extractivismo que durante siglos, y hasta nuestros días, ha estado marcada permanentemente por el expolio, la ocupación de nuevos territorios, la violencia y la dependencia.

Voy a sustentar una interpretación alternativa a partir de tres factores fundamentales que están en juego en esta relación, y que examinaré en detalle a continuación. A saber: el peso de los legados coloniales, las diversas expresiones de la violencia organizada y la geopolítica del extractivismo.

Sobre el primer factor, hablo de legados coloniales para hacer referencia a las continuidades de la colonialidad del poder y la naturaleza que persisten en el siglo XXI. El Estado latinoamericano, en general, puede tener facetas polivalentes, y administraciones diversas – como se ha visto incluso con la llegada al poder de gobiernos de corte nacionalista, popular, progresista y/o de izquierda revolucionaria. No obstante, la política, prácticas e

instituciones estatales siguen estando muy estructuradas por la colonialidad (Quijano, 2000; Acosta, 2016; Svampa, 2019), lo que es evidente en una orientación generalizada hacia la extracción masiva de naturaleza que es dirigida al mercado global, como parte de la división internacional del trabajo; planes, proyectos y políticas para continuar la colonización hacia nuevas fronteras de commodities; la marcada dependencia y subordinación internacional; narrativas y culturas extractivistas muy promovidas desde los ámbitos oficiales; o bien el racismo estructural, que además sigue apareciendo recurrentemente en los conflictos ecológico-distributivos.

La historia de la relación extractivismo/colonialidad en Latinoamérica es también la historia de Estados estructurados para posibilitar la persistencia de dicha relación a lo largo de los siglos: Venezuela en torno al cacao, luego al café, el petróleo y su evolución actual tendiente hacia el oro (sin que desaparezca el petróleo); Bolivia evolucionó desde la plata, el estaño a los hidrocarburos; Brasil del café y el caucho, luego hierro y soja, aunque en un esquema mucho más diversificado de exportaciones. Esto, en pocas palabras, nos habla de Estados constituidos y atravesados por relaciones de poder estrechamente vinculadas a esta extracción masiva de naturaleza. De ahí que tengamos algunas categorías de análisis históricas que revelan esta condición estructurante: Petro-estados, Repúblicas bananeras o sojeras, Estados terratenientes, élites del cacao (que tuvieron impacto en la formación de Estado), entre otras; todas ellas revelando relaciones de poder muy presentes que han sobrepuesto (y lo siguen haciendo) los imperativos de extracción de naturaleza al conjunto de las relaciones sociales de un país.

Por tanto, hay que subrayar que, si dichos imperativos se encuentran en el pináculo de los objetivos de esta colonialidad del poder, es evidente que deben realizarse a toda costa, incluso desplegando dictaduras o regímenes autoritarios, continuos mecanismos de despojo, entramados de corrupción, y hasta estructuras criminales dentro o fuera del ámbito estatal. Más allá de la idealización normativa y funcional del Estado en perspectivas más tradicionales, no es posible comprender dinámicas como las que hemos analizado sobre gobernanzas híbridas y extractivismo ilícito/criminal sin poner de relieve este marco de relaciones de poder estructurante.

En línea con dicho, recurro al trabajo de Charles Tilly para subrayar el rol central que el ejercicio de la violencia organizada ha tenido en la formación histórica de los Estados modernos. Para Tilly (2006), antes que el establecimiento de un ‘contrato social’, desde sus períodos fundacionales los *war makers* y gobernantes recurrieron a la extorsión (o el “negocio de la protección”), la violencia y la “explotación coactiva” para desarrollar el largo proceso de construcción de Estado en Europa, todo lo cual se planteó como una forma de administración de la guerra. Estas estrategias de amenazas extorsivas/protección, de acuerdo con Tilly, comparten las lógicas del crimen organizado. Para el autor la delincuencia, la piratería, la rivalidad criminal, el mantenimiento del orden público y la guerra han sido factores en juego en el mismo proceso de construcción de Estado; aunque

reconoce que, a diferencia del crimen organizado, son los gobiernos quienes se han caracterizado por su tendencia a monopolizar la violencia.

A pesar que la evolución de la construcción de Estado en América Latina no fue exactamente igual a la de Europa –antes que la guerra, el determinante subyacente de este proceso ha sido el legado colonial–, estuvo también configurada por el ejercicio de la violencia organizada, esta vez orientada a la conquista e inserción de territorios, y la organización de la extracción masiva de naturaleza y de la fuerza de trabajo racializada, en función de las demandas de las metrópolis del sistema mundial. En todo caso, me interesa poner de relieve no solo este rol crucial del ejercicio de la violencia organizada para una entidad histórica que, en su naturaleza, busca imponerse y concentrar el poder como lo es el Estado. También es importante destacar que el establecimiento de mecanismos de coerción/aprovechamiento de recursos/control de la población no son exclusivos de las formaciones estatales, sino que pueden ser también de actores privados forajidos, de rapiña y despojo. Esto último lo vimos desde las gobernanzas caudillistas del siglo XIX, que establecían liderazgos regionales, relaciones clientelares y apropiación violenta de recursos, operando con ejércitos particulares, montoneras o guerrillas armadas; hasta las denominadas gobernanzas criminales del siglo XXI, que con grupos delincuenciales establecen autoridades territoriales y mecanismos de extracción de naturaleza.

La lectura tillyiana permite destacar la faceta predatoria que puede desarrollarse en los permanentes procesos de reconfiguración estatal, y evidenciar puntos de homologación que existen entre los actores estatales (de los poderes formalmente constituidos) y los denominados como criminales, de rapiña o forajidos; algo vigente hasta nuestros días y que hemos podido observar en el caso venezolano. Aunque entre estos actores pueden producirse cruentas disputas, ya vimos que al mismo tiempo pueden articularse. Hay una línea de continuidad temporal que vimos en las relaciones entre violentas empresas privadas armadas de conquista, piratas y Coronas; entre montoneras y líderes de la independencia, entre paramilitares y élites de la tierra, hasta llegar a las gobernanzas híbridas en el extractivismo del siglo XXI. Se trata de la articulación funcional de violencias organizadas, interpretadas desde una economía/ecología política, que también nos deja con espacios grises y problemáticos para establecer claras distinciones entre poder legal e ilegal, o entre violencia legítima e ilegítima.

Un tercer factor de esta interpretación crítica de la relación entre Estado y extractivismo tiene que ver con la crucial dimensión geopolítica. Las causas de la emergencia de gobernanzas híbridas en un extractivismo ilícito/criminal deben también ser entendidas en el marco histórico-estructural de desigualdades internacionales (Quijano, 2000; Harvey, 2004; Wallerstein, 2004), en el cual la fragilidad institucional y la dependencia económica son mucho más marcadas y evidentes en los Estados del Sur Global. La colonialidad no solo implica formas de dominación social y ecológica, sino también un sistema de subordinación global que, por un lado, acota los márgenes de actuación de Estados como

los latinoamericanos –mediante mecanismos financieros, tecnológicos, militares, entre otros−, y por el otro, los constriñe a sus funciones de bisagra o interfaz entre el capital global y la naturaleza (Escobar, 2007), con el fin supremo de suplir recursos al mercado mundial.

De esta manera, los imperativos extractivistas que pesan en la política y la economía latinoamericana son también producto de las presiones internacionales que se ejercen desde grandes capitales y Estados centrales, o de las llamadas 'potencias' emergentes, orientadas a la captura del mayor nivel de recursos posible (y en las mejores condiciones posibles), contribuyendo a ampliar los niveles de extracción y nuevas fronteras de commodities. Visto desde la contemporaneidad del caso venezolano, la proliferación de gobernanzas híbridas también está vinculada con los impactos que tuvieron las sanciones internacionales sobre la industria petrolera y el incentivo que representó esto para un vuelco más fuerte hacia la minería ilegal de oro; los Acuerdos de Paz en Colombia firmados en 2016, y sus efectos en el desplazamiento de más integrantes de los grupos armados disidentes a territorio venezolano; la presencia de capitales canadienses o chinos para intentar desarrollar el AMO en los primeros años de La Gran Crisis, aprovechando las facilidades que ofrecía el gobierno de Maduro; la inserción del oro en los intercambios comerciales con Turquía, como aliado alternativo para el gobierno chavista; la política exterior del gobierno colombiano respecto a Venezuela, que en el caso del expresidente Iván Duque planteo un 'cerco diplomático' y fuertes presiones políticas y confrontaciones con Maduro, con los respectivos impactos que implicó para el comercio y seguridad en la extensa frontera de más de 2.219 kilómetros entre ambos países; o los propios intentos del primer gobierno de Donald Trump de derrocar a Maduro; por mencionar ejemplos emblemáticos. Estos factores tuvieron también su peso en la evolución de estas formas de Estado, gobernanzas y extractivismo, y deben ser necesariamente incorporados al análisis.

En torno a la discusión nacional e internacional sobre el caso de Venezuela, se ha planteado también el surgimiento de un 'Estado Criminal' (Evan-Ellis, 2017; Insight Crime, 2018b; López-Maya, 2018; McCarthy-Jones y Turner, 2022), en la cual, a pesar que reconocerse elementos que aportan para ampliar una reflexión que tiene ya varios años en desarrollo sobre este tipo de Estados (Bayart et al, 1999), en ocasiones no deja de estar cargada de intereses geopolíticos que promueven las intervenciones extranjeras de los países considerados 'paria'. En general, la discusión sobre Estados criminales ha estado enfocada en los países del Sur Global, sobre lo cual es necesario también plantear algunos matices, básicamente desde una perspectiva de la geopolítica del crimen organizado.

Hemos visto el carácter internacionalizado que han adquirido las estructuras criminales más poderosas, articuladas a muy lucrativos negocios trasnfronterizos que conforman además cadenas de valor que trascienden incluso continentes. Esto implica al menos dos cuestiones importantes: una, que estos poderes criminales transnacionalizados son también actores de incidencia extranjera en la disposición nacional del extractivismo y en las dinámicas de

funcionamiento estatal. Dos, que las cadenas criminales transnacionalizadas, sea del narcotráfico o de otros importantes negocios, generan conexiones entre organizaciones delictivas locales y regionales, por ejemplo, de América Latina, con otras que pueden incluso estar ubicadas en los estados y economías del Norte Global, como ocurre en el caso de Europa (OEDT, 2022). Esto nos muestra que se registra un auge criminal en regiones centrales del sistema mundial, como lo muestra el caso europeo –especialmente en países como Bélgica, Reino Unido o España− (Europol, 2025); que involucra determinados niveles de corrupción estatal que posibilita este auge (García-Bueno, 2022); y que incluso se señala la presencia del crimen organizado europeo en América Latina (Brombacher, 2025). En este sentido, es conveniente desbordar la mirada nacional del Estado Criminal, para en cambio reconocer que las estructuras subyacentes de estas economías son cadenas mucho más descentralizadas que operan transnacionalmente. Nuevamente, se privilegia la necesidad de análisis multi-escalares. La relación crimen/corrupción que articula el Sur y el Norte Global amerita ser examinada con mayores detalles.

III.IV.I *Las nuevas geografías del extractivismo: debates sobre, neocaudillismo, re-feudalización y economías de enclave*

Hay una dimensión más de suma importancia sobre la que es necesario profundizar: las nuevas geografías del extractivismo que se configuran en estos procesos y que, además del caso venezolano, nos abre a escenarios latinoamericanos y de otras latitudes sobre los que conviene reflexionar.

He examinado en clave histórica el proceso de evolución en Venezuela de la geografía del extractivismo donde se pudo apreciar que, previo a la instauración del Petro-estado (siglos XVIII y XIX), lo que prevalecía era una clara fragmentación del poder, el Estado y el régimen económico; y una territorialización ‘nacional’ partida en regiones que se conformaban a partir de intereses extractivos, de élites provinciales erigidas en torno a commodities particulares, y sobre todo, impactadas por el poder de los caudillos. Este escenario fragmentado estaba atravesado por cruentas disputas por tierra, recursos y poder, incluyendo la confrontación entre caudillos y poderes centrales del Estado.

Esta situación cambiaba significativamente con el surgimiento del Petro-estado, y la progresiva centralización del poder, un incremento importante del poder infraestructural y el desplazamiento del lugar privilegiado que tenía la violencia extendida en el régimen político. Sin embargo, los escenarios que abrió La Gran Crisis y el colapso desestructuró estos precarios dispositivos de cohesión, colocando al país de nuevo ante escenarios de fragmentación territorial y estatal, de expansión y generalización de la violencia, y la multiplicación de disputas territoriales y políticas, incluyendo de grupos armados no estatales.

En el capítulo 1 se resaltaba que además de Venezuela, América Latina ha compartido también estos patrones de limitadas o precarias capacidades en el poder infraestructural de los Estados; además de antecedentes de encarnizados conflictos internos y disputas internacionales por territorios y recursos, y la continuidad de procesos de re-colonización. El siglo XXI ha plantea extraordinarios desafíos territoriales en este proceso histórico, con los impactos del neoliberalismo y la globalización, que involucran nuevas formas de penetración transnacional de los países y la aún mayor borrosidad de las fronteras.

En este marco, la emergencia y proliferación de estructuras criminales instaurando poder en amplias extensiones geográficas en la Venezuela del siglo XXI, no es una realidad sólo de este país, pudiendo corroborarse esta expansión considerable en numerosas regiones de México y Centroamérica, o en la Amazonía, entre otras cosas para la minería ilegal de oro, especialmente en Colombia, Brasil y Perú (Asner y Tupayachi 2016; Siqueira-Gay y Sánchez, 2021). Millones de personas en América Latina viven bajo algún tipo de gobernanza criminal (Lessing, 2021); a la vez que, de acuerdo a la Corporación Latinobarómetro, el 54% de los hogares en la región informan la presencia de grupos criminales locales (en Rodríguez-Pinzón y Ramos-Rollón, 2025).

El peso de estas dinámicas en los actuales procesos de disputa/control territorial y en la propia territorialización de los Estados latinoamericanos es notable. De hecho, si se quiere, nos retrotrae también a escenarios más propios del siglo XIX: si el caudillismo (o *warlordism* en literatura anglosajona) se configuró como una forma de organización política personalista, regionalizada, armada, en muchos sentido forajida y bandolera, que podía desarrollar su propia estructura de coerción/aprovechamiento de recursos/control de la población; entonces el crimen organizado hoy presenta importantes semejanzas con este. Las figuras carismáticas de caudillos de entonces y líderes de cárteles o grandes bandas criminales en la actualidad dan también señales de similitudes en lo que respecta a otras formas de construcción de legitimidad social. No obstante, esto no apunta a una simple vuelta al pasado. El contexto de los caudillos decimonónicos no solo era el de un sistema capitalista diferente, sino también el de sociedades y Estados diferentes. En este sentido, lo que se abre en nuestra actualidad es una línea de reflexión sobre formas neocaudillistas en el extractivismo del siglo XXI, algo que es pertinente de analizar en el contexto de procesos globales de "refeudalización" (Kaltmeier, 2019; Neckel, 2020) y socavamiento de los sistemas democráticos.

Los importantes niveles de sofisticación en las estrategias y mecanismos de las estructuras delictivas para, además de impulsar sus economías ilícitas, establecer gobierno en los territorios –lo que motivó el crecimiento de estudios sobre 'gobernanzas criminales'−, mezclando violencia con algunas formas de asistencia y construcción de legitimidad y consenso, evidencian que estos son actores con capacidades políticas –y de hacer política− y, por tanto, para plantear serias disputas de poder a los Estados.

Sin embargo, si el caudillo decimonónico, además de competir con los poderes centrales de los incipientes Estados, pudo también tener un rol importante en la consolidación de proyectos de Estado-nación con su liderazgo político; por otro lado, el crimen organizado ha podido construir poderosas redes económicas transnacionalizadas en conjunto con sectores del Estado, como lo hemos examinado con el desarrollo de gobernanzas híbridas. De hecho, como vimos en algunos casos analizados, ante el poder de gobernar que podían ejercer varios de los grupos criminales, el Estado se ha tenido que asociar con estos para que contribuya en labores de control territorial y vigilancia que no está en capacidad de llevar a cabo, a cambio de delegar el manejo de negocios locales. Esto, en última instancia, ha podido contribuir con un relativo sostenimiento del poder territorial estatal-nacional, esta vez de manera indirecta, a través de la tercerización de la vigilancia de territorios delegada en actores no estatales. Analizando estos elementos, se puede incluso afirmar que el crimen organizado puede también construir estatalidad con actores del Estado, aunque esta no se parezca a la idea del 'Estado adecuado'.

Con los elementos examinados, quisiera destacar dos tendencias regionales que pueden también ser evaluadas en clave histórica: la formación de economías de enclave y los peligros a la integridad territorial de las repúblicas. Respecto a las economías de enclave, estas fueron estudiadas por la teoría de la dependencia para indicar un "estilo de desarrollo" que se dió en varios países latinoamericanos entre el último cuarto del siglo XIX y primero del XX, y que remitía a la actividad de extracción de recursos que terminaba desvinculada del conjunto de la economía nacional, ya que estaba controlada directamente desde afuera (Cardoso y Faletto, 1979). Esto implicaba fundamentalmente la configuración económica de un territorio primordialmente como surtidor de recursos (o fuerza de trabajo) de forma exclusiva para mercados externos, con emprendimientos relativamente desconectados de las poblaciones locales y del marco político-económico nacional, mientras que las rentas se transfieren en su gran medida hacia afuera de la jurisdicción. Fue el fortalecimiento del Estado latinoamericano y de su capacidad negociadora y de ejercicio de soberanía en el segundo cuarto del siglo XX el que hizo caducar este estilo, para en cambio hacer prevalecer un modelo de control nacional, donde las actividades extractivas estarían integradas a la economía, con mayor involucramiento estatal, así como una mayor participación en las rentas que de ellas se obtenían.

Sin embargo, con las transformaciones que se han examinado en este trabajo, se señala la configuración de una especie de nuevas economías de enclave del siglo XXI. Estas instalan territorios de extracción violentos administrados en buena medida por el crimen organizado para la inserción de los recursos directamente en mercados internacionales, sin que esto tribute a la economía nacional formal. Esto puede producirse en conjunto con actores estatales y de igual manera no tributar a la economía nacional, sino a los entramados de corrupción que participan en el negocio. No obstante, las gobernanzas híbridas en el extractivismo, vistas desde una perspectiva de régimen, persiguen poder tener control y

participación en las economías ilícitas, y que al menos una parte de los beneficios del negocio pueda ser captado por altas esferas de poder, o por el propio gobierno central, e ingrese a la macroeconomía nacional, lo que en última instancia es lo que sostiene al Estado, y sobre todo al gobierno nacional.

En todo caso, las tendencias de auge criminal y corrupción estatal abren a las posibilidades de expansión y/o consolidación de esta forma radical de extracción que son las economías de enclave, que no solo nos remiten a expresiones latinoamericanas del siglo XIX –o a una cierta desestructuración del Estado y la economía nacional erigida en el siglo XX−, sino a escisiones económico-territoriales que pueden apuntar a geografías totalmente desreguladas, o bien a economías de guerra que se han desplegado en otros continentes, como África (Watts, 2003). Estos escenarios no solo son otra expresión de refeudalización global, sino que conforman territorializaciones donde las democracias y el marco de derechos quedan de facto suspendidos, representando un extraordinario desafío para las sociedades latinoamericanas.

La segunda tendencia, vinculada a la primera, tiene que ver no solo con el problema de las limitadas capacidades infraestructurales de los Estados, sino un incremento de la vulnerabilidad de la integridad territorial de las repúblicas. Aunque América Latina no está impactada por disputas interétnicas o religiosas como ocurre en otros continentes como África y Asia, y pese a que los Estados de la región en general son más antiguos y relativamente más consolidados que en estos otros continentes, las dinámicas analizadas contribuyen notoriamente a una mayor fragmentación territorial. En el caso de África estas condiciones y la fragilidad estatal, en el marco de disputas multi-actorales e internacionalizadas de recursos naturales, han llegado a desembocar en intentos o concreciones de partición o secesión de Estados vinculado a zonas de grandes concentraciones de recursos, como hemos visto desde Biafra respecto a Nigeria, Cabinda respecto a Angola, Eritrea respecto a Etiopía, hasta llegar más recientemente a Sudán del Sur respecto a Sudán. Evidentemente, una serie de condiciones tendrían que darse para que la región latinoamericana llegara a situaciones de deterioro tan avanzado, aunque se analizan casos como el de la formación de un régimen de tipo neopatrimonial en Venezuela como una expresión de simplificación de estructuras estatales, que posee semejanzas más bien con casos africanos. Por otro lado, se enfatiza el marco global de disputas por recursos naturales –hidrocarburos, oro y minerales críticos, biomasa y agua, entre otros−, auge de autoritarismos y crisis climática que añaden factores a un contexto general crítico.

IV. Conclusiones

En este capítulo se ha examinado detalladamente los procesos de construcción de gobernanza en el extractivismo que prevalecieron ante los nuevos escenarios que emergen

en La Gran Crisis venezolana. La debacle de la gobernanza centralizada rentista del Petro-estado, nos dejó ante una geografía fragmentada de poderes y economías muy impactada por el extraordinario auge de las economías ilícito/criminales. Aunque se produjo un colapso de las instituciones, no se produce una desintegración del Estado, sino una importante reconfiguración de su morfología y naturaleza, hacia una forma mucho más simplificada, militarista y neopatrimonial, lo que creó las condiciones para una forma más bien predatoria de extractivismo.

Pese al colapso, los actores del Estado continuaron siendo en Venezuela uno de los dos principales grupos de poder, junto a la diversidad de estructuras del crimen organizado, desde bandas criminales, guerrilla colombiana o expresiones del garimpo asociado a las poderosas facções brasileras. En este marco, pudimos examinar un espectro de gobernanzas en la cual se expresaron diversas gradaciones de relacionamiento entre estos actores estatales e ilícito/criminales, que iba desde la separación y la confrontación, hasta formas de cooperación, asociación, integración e imbricación que he analizado en detalle.

El capítulo enfatiza que fueron las formas de gobernanza más profundamente articulada entre Estado y grupos criminales, las que tuvieron mayor impacto en las reconfiguraciones del régimen extractivista, así como las que movieron mayor volúmenes de negocios ilícitos, siendo parte de los principales ingresos que captó el gobierno central liderado por Nicolás Maduro, junto a los deprimidos ingresos petroleros.

Partiendo de estos elementos, he analizado la emergencia de gobernanzas híbridas en el extractivismo, que subraya la conformación de complejas operaciones conjuntas entre estos dos tipos de actores de poder para dinamizar cadenas ilícitas transfronterizas de commodities y construir formas de poder y autoridad territorial que le han dado forma al régimen venezolano en La Gran Crisis.

Se ha destacado que la noción de gobernanzas híbridas debe ser entendida no tanto como un conjunto de alianzas estables, sino como un método estratégico de asociación en el extractivismo. El análisis presenta la evidencia del crecimiento de las organizaciones criminales en la región, de su incidencia en la distribución ecológica, y de los importantes roles que pueden estar jugando en un tiempo de transformaciones trascendentales. No obstante, también se apunta a un análisis crítico de las lecturas normativas sobre el Estado en América Latina, inspiradas en la ecología política, la economía política, la geografía crítica y los estudios sobre conflictos por los recursos, para en cambio abrir una discusión sobre su estructuración en el marco de la colonialidad del poder.

En este sentido, a diferencia del concepto de gobernanza criminal, que ha sido construido desde el actor delictivo, gobernanza híbrida pone de relieve el papel central que puede jugar el ámbito estatal y los co-protagonismos que se expresan en las economías ilícitas. De hecho, el Estado no solo puede participar activamente en economías ilícitas, sino asumir

roles de protagonismo y dirección en estas, por lo que puede aparecer como el principal promotor de gobernanzas híbridas en el extractivismo. De manera que, el problema de la expansión de las extracciones ilícitas de naturaleza debe ser entendido no a pesar del accionar del Estado, sino más bien gracias a él. Temas como el auge de la corrupción estatal en el siglo XXI, no solo ilustra el nivel de implicación que puede tener este ámbito en el crecimiento de economías ilícitas, sino debe invitar a plantear reflexiones sobre problemas estructurales de los Estados latinoamericanos, como las prácticamente inexistentes vías para controlar el accionar de los mismos por parte de la ciudadanía, el imperativo extractivo y la dependencia, entre otros.

He ofrecido también una lectura histórica sobre las complejas relaciones de solapamiento y cooperación entre los poderes constituidos y actores forajidos y criminales en América Latina, que ven una línea de continuidad desde los propios períodos de conquista y colonización, hasta el siglo XXI con fenómenos como las gobernanzas híbridas. La fortaleza del crimen organizado en la actualidad lo ha colocado en posición incluso de poder controlar algunas cadenas vitales del extractivismo, así como ámbitos del Estado (gobiernos regionales, jueces y sistema de justicia, policía y sectores militares, sistema carcelario, entre otros), incluso siendo un factor de importancia en los propios procesos de formación y reconfiguración estatal, lo que se constituye como un problema de gran significación regional. Los Estados latinoamericanos se encuentran probablemente ante encrucijadas históricas y está en juego sus procesos contemporáneos de avance en el poder infraestructural y control de la economía, constatándose en cambio notables retrocesos.

Por otro lado, el análisis ha implicado también una problematización en relación con las borrosas fronteras que separan lo legal de lo ilegal. El caso de la minería nos ilustra algunos de estos aspectos. El capítulo ha podido mostrar no solo que la minería legal e ilegal pueden estar profundamente entrelazadas, sino también que una puede basarse en la otra. Los elementos analizados ponen en entredicho la idea de la "legalización" de las actividades extractivas —como ocurre con la minería ilegal—, o la necesidad de aumentar la presencia estatal y planes de seguridad militar más amplios, ya que, como pudimos apreciar, no necesariamente representan soluciones automáticas a estos problemas, e incluso podrían contribuir a profundizarlos. Además, el extractivismo legal también ha generado numerosos e importantes impactos socioambientales y no debe considerarse la única posibilidad de uso del suelo o alternativa económica, mucho menos para un bioma tan delicado como la Amazonía. Nuevamente, sin abordar problemas estructurales difícilmente se puedan conseguir soluciones a fenómenos de tal complejidad.

Por último, he propuesto una ampliación del concepto y análisis del extractivismo, que reconozca una variante ilícito/criminal, que deje de ser considerada como actividades ilegales al margen y se asuma como un componente fundamental del régimen de

acumulación que está teniendo gran peso en la morfología de lo que hemos presenciamos como extractivismo del siglo XXI.

CAPITULO 4

Colapso, naturaleza y acción colectiva: del movimiento socioambiental a una ecología política de la sobrevivencia

Es momento de examinar los roles y respuestas de los diferentes grupos del ámbito de la sociedad civil, sean organizaciones sociales, comunidades locales, campesinos, pueblos indígenas, trabajadores, entre otros.

Como pudo verse en los capítulos 2 y 3, el contexto específico del colapso venezolano encarna un escenario que ha planteado extraordinarios desafíos a estos actores. Esto ha implicado el desenvolvimiento de la acción social dentro dinámicas de convulsión, violencia, caos y grandes contradicciones, que tuvo como resultado una vasta multiplicidad de luchas que serán analizadas en este capítulo.

Dichas expresiones, como veremos, desbordan un marco binario que presenta una fórmula simplificada de 'extractivistas vs ambientalistas', para en cambio abrirnos hacia arenas de conflictividad donde pueden también prevalecer la contingencia, los imperativos de sobrevivencia, y las respuestas resolutivas, contradictorias, pragmáticas y de negociación por parte de los grupos sociales.

En este sentido, he explorado diferentes formas del ecologismo y de luchas en torno a la naturaleza, sus formas de abordar el colapso; sus estrategias, orientaciones y motivaciones; sus nociones de naturaleza; y sus formas de relacionamiento ante el auge de extracciones ilícito/criminales, el autoritarismo estatal y las gobernanzas híbridas. Mi análisis necesariamente va más allá de la teoría de los movimientos sociales y la justicia ambiental para proponer una más amplia ecología política del conflicto, que abarca también otras luchas más utilitarias y ambiguas que no pueden ser evaluadas desde perspectivas románticas e idealizadas, colocando en el centro la crucial cuestión de la sobrevivencia.

La exposición se desarrollará de la siguiente manera. En la Sección I se presenta un preámbulo teórico sobre ecologismos en el colapso societal. Primeramente, exploro los aportes y limitaciones de diferentes enfoques que han abordado la estrecha y determinante relación entre acción colectiva y contextos, con el fin de plantear mi análisis en el marco de una crisis no convencional. Seguidamente se propone una tipología de 5 orientaciones principales de las movilizaciones, hacia una ecología política del conflicto: ambientalismos fuertes y débiles, luchas por el acceso básico a los medios de vida, extracción de recursos y sobrevivencia.

En la Sección II se presenta un perfil general de los grupos movilizados en los 75 conflictos de distribución ecológica, con el fin de distinguir qué tipos de actores se involucraron, sus territorialidades, demandas y reivindicaciones. Dado el contexto crítico en el que se desenvuelven, se examinan especialmente las fortalezas y debilidades de sus estructuras organizativas y movilizaciones, sus capacidades de sostenerse y/o sobreponerse al colapso, y los niveles de incidencia en la consecución de justicia ambiental.

En la Sección III, se examinan a profundidad las motivaciones de las luchas en el colapso, sus estrategias de sobrevivencia y perspectivas de naturaleza, con el propósito de ampliar la comprensión de los ecologismos en estos contextos. Se estudian los 5 tipos de orientaciones de las luchas, destacando las seis principales tendencias que se expresaron en las mismas: valoraciones ambientales resistentes; minería (ilegal) indígena; arraigos culturales y tradiciones locales de lucha; factores subjetivos; el rol fundamental de la politización; y las facetas de la resolución de las necesidades más elementales al norte del Orinoco.

Finalmente, en la Sección IV, partiendo de estos ricos insumos analizados, desarrollo una reflexión y conceptualización hacia una *ecología política de la sobrevivencia* (EPS), en la cual se articula este conjunto amplio, polivalente y contradictorio de luchas con el fin de proponer aproximaciones teóricas que contribuyan a comprender sus limitaciones y potencialidades, e incrementar el conocimiento de la respuesta socioambiental en tiempos de declive societal. En esta sección examino y problematizo la noción de sobrevivencia y sus diferentes enfoques, con miras a recuperar aproximaciones críticas y políticas en torno a ella. Se propone una definición del campo de análisis de la EPS y cuatro dimensiones clave que la componen.

I. Sobre ecologismos en contextos de colapso societal

I.I El colapso como sobredeterminación societal: teorías sobre movimientos sociales y acción colectiva en contextos no convencionales

Al analizar los niveles de incidencia y las capacidades de los actores sociales de sostener las luchas en un contexto como el del colapso venezolano, es posible constatar que, más allá de las intenciones de dichos actores y sus agenciamientos, más allá de sus fortalezas y heroísmos, estos escenarios pueden tener un extraordinario peso en sus dinámicas de movilización, en sus expectativas y en las propias posibilidades de reproducción de la vida cotidiana. Estos factores merecen especial atención al estudiar las formas de acción colectiva que se despliegan en los conflictos ecológico-distributivos.

Primeramente, es necesario proponer una distinción entre crisis convencionales y no convencionales para pensar en el peso de estos determinantes contextuales. La noción de crisis, que ha sido quizás la más popular para señalar períodos de turbulencia y cambio contemporáneos, ha tenido históricamente un carácter polisémico, tal y como lo ha indicado Reinhart Koselleck (2016), aunque en la modernidad va a ser utilizada fundamentalmente como un concepto que diagnostica la evolución histórica de los sistemas societales, marcados por la idea de progreso. Desde esta visión, y con las continuas oleadas de expansión y contracción del desarrollo capitalista, la historia se iría revelando como una crisis continua. Apuntaba Koselleck que la idea de crisis es generalmente asociada con "inseguridad, padecimiento y prueba, y remite a un futuro desconocido" (ídem). En la actualidad, puede tener usos extendidos y frecuentes para abordar temas de economía, política interior y exterior, ambiente, el estado de la sociedad y la cultura, paradigmas de conocimiento, entre muchos otros, aunque de manera general, sigue indicando la turbulencia o perturbación importante que sufre un sistema, modelo o institución, lo que puede decantarse en su recuperación o reconstitución, o bien poner en peligro su propia existencia (Beinstein, 2005).

En todo caso, la noción de crisis sigue estando más fácilmente asociada a episodios recurrentes y/o cíclicos en las sociedades contemporáneas. En este sentido, me interesa establecer una distinción entre estas crisis cíclicas, que voy a categorizar como crisis convencionales; y aquellas que se expresan como un desplome generalizado, sea de las condiciones más elementales para sostener la vida, o bien de la más mínima situación de convivencia, que termina desatando conflictos armados de diferente tipo. Estas últimas las categorizo como crisis o contextos no convencionales, y en ellas se incluyen los colapsos societales (localizados o generales), los colapsos de ecosistemas y ecológicos, o las diversas formas de guerra.

En esta línea, los impactos de un colapso en la sociedad, la economía, el ambiente y en el sistema político son estructuralmente más profundos y marcadamente superiores que en el caso de las crisis convencionales: remiten a desintegración, fragmentación, desarticulación estructural, incapacidad para sostener medios de vida y declive poblacional. El colapso por tanto, puede ser entendido como "sobredeterminación" societal, en el sentido que le otorga al concepto el economista Asdrúbal Baptista (2010), en sus análisis sobre la muy notoria predominancia de la renta petrolera en el modelo venezolano: un factor determinante superior, que logra impactar extraordinariamente en todos los ámbitos del conjunto del sistema social.

Si revisamos las teorías de los movimientos sociales y la justicia ambiental, es posible afirmar que estas, en general, han desarrollado sus análisis dentro de contextos o crisis contemporáneas convencionales. Esto va desde regímenes democráticos, sean estables o precarios, hasta períodos de mayor convulsión y crisis, como por ejemplo se muestra en el

análisis de Harper (2006) sobre los nuevos discursos y movilizaciones ambientales que emergieron en la Hungría post-socialista; los repertorios de acción usados por movimientos sociales en el Norte Global en el tiempo de la crisis financiera (2008-2009), donde prevalecieron los recortes al gasto social y se reducían las posibilidades de incidir en las instituciones (Della-Porta, 2020), similar al trabajo sobre los activismos jóvenes en la Portugal de la crisis 2011-2013 (Cairns et al, 2014); o las nuevas subjetividades, perspectivas políticas y valoraciones sobre la naturaleza que surgieron de las movilizaciones ambientales durante la crisis en Grecia (desde 2008) (Calvario et al, 2016).

Otros artículos han reflexionado sobre las respuestas que organizaciones sociales dieron en tiempos de la pandemia de COVID19 (Daphi et al, 2024), incluyendo la movilización de recicladores en Brasil (Gutberlet, 2023). Para el caso de América Latina, varios autores han reflexionado sobre la irrupción de movimientos sociales diversos en el período de crisis económicas y políticas que se configuró entre 1980-2000, que vino de la mano de una ola de medidas neoliberales que agudizaron las contradicciones (véase la revisión de literatura de Murga, 2006).

Si en cambio ponemos de relieve este elemento de sobredeterminación propio de contextos no convencionales, se hace necesario escrutar algunos enfoques teóricos que analizan particularmente esta relación contexto-acción colectiva. En este sentido, examino tres de las teorías más difundidas sobre el tópico, con miras, por un lado, a una más amplia comprensión de cómo estos marcos contextuales inciden en los actores sociales, y qué respuestas ofrecen estos, qué tipos de agenciamiento surgen; y por otro lado, contrastar estos aportes y limitaciones para la aproximación y construcción de una ecología política de la sobrevivencia. Estas son: la teoría de Estructura de Oportunidad Política, la teoría de la Resiliencia y la literatura sobre Conflictos por los Recursos Naturales y Estudios sobre Paz y Conflictos.

Dentro del análisis de los movimientos sociales y los actores de protestas, la Teoría de Estructura de Oportunidad Política (EOP) ha sido un enfoque muy popularizado, la cual señala que las demandas, objetivos y estrategias de estos grupos están influidos, y en muy buena medida determinados, por el contexto político-institucional y las relaciones políticas, que generalmente son definidas por los poderes dominantes (Eisinger, 1973; Kitschelt, 1986; McAdam, 1999; Meyer, 2004; Tarrow, 2011). Dicho marco de poder, que puede ser abierto o cerrado, define entonces una ‘estructura de oportunidades políticas’ de la que disponen los grupos movilizados en un espacio-tiempo determinado, con el fin de alcanzar objetivos, cambiar la estructura institucional, así como la disposición que tienen los actores de poder ante sus demandas. Por estas razones, la EOP pone el foco tanto en el ambiente político predominante como en los patrones de conducta (expectativas, creencias, elecciones, etc.) de los movimientos y grupos de protesta.

Aunque se destacan estos particulares aportes sobre el peso de lo contextual, el EOP tiene un alcance limitado para aproximarnos a una ecología política de la sobrevivencia. Esto es así al menos por tres razones estrechamente relacionadas entre sí. Primera, esta perspectiva teórica ha partido de un enfoque racional-instrumental de la acción colectiva, basada en supuestos relativamente mecánicos, que además han solido dejar de lado factores culturales, emociones, o la iniciativa autónoma de los grupos movilizados más allá del régimen político. Pero es precisamente en estos aspectos subjetivos e interiores de los actores donde podemos también encontrar algunas valoraciones ambientales que pueden estar vinculadas con dimensiones espirituales y trascendentales, las cuales no pueden ser explicadas solo desde una perspectiva de la racionalidad de los actores (Rodríguez-Arechavaleta, 2010; Jasper, 2012).

Segunda razón: aunque las oportunidades políticas pueden ser un aspecto importante para comprender el accionar de los movimientos y las protestas, este último no se puede reducir solo a dicha estructura. Los argumentos dados en la primera razón aplican también para sustentar esta crítica, dado que las motivaciones de estos grupos trascienden este marco, siendo además que la acción colectiva suele preceder a la acción política (Melucci, 2015), y puede ser entendida como un ámbito que en sí mismo podría tener relativa independencia de esta última.

Tercera razón: el EOP ha estado en muy buena medida orientado a los contextos políticos nacionales de las democracias liberales occidentales, y el foco fundamental de estas estructuras de oportunidad está en las instituciones políticas formales (Kriesi, 2004). Se han desarrollado trabajos con casos de América Latina desde esta perspectiva, y en general han continuado estando dentro de esta orientación (véase por ejemplo Favela-Gavia, 2002; Gómez-Suárez, 2003; Alles, 2007; Argüello-Cabrera, 2019). Sin embargo, en escenarios como el de La Gran Crisis venezolana, en buena parte de los casos, los grupos movilizados lidian con complejas estructuras criminales y gobernanzas híbridas, instituciones fallidas y profundamente corrompidas, escenarios fragmentados, mientras que la disputa en muchas ocasiones ni siquiera se desenvuelve en la tradicional arena pública. Los conflictos pueden haberse desarrollado como protestas con demandas al Estado, o bien como acciones territoriales localizadas y dinámicas más autónomas de extracción/apropiación de recursos naturales. Fuera de un modelo estructurado de análisis de las movilizaciones, mi foco está en buena medida en luchas que se caracterizan por tener un dinamismo extraordinario y volátil, determinado por la contingencia y la atomización que produce la crisis. Muchas veces, las oportunidades están dentro de lógicas de sobrevivencia y resolución de la vida cotidiana, ámbito político que excede la arena de lo público. Mi análisis intenta abordar también estos diferentes espacios de politicidad que el EOP no logra abarcar.

Con respecto a la teoría de la Resiliencia, esta ha venido ganando cada vez mayor atención para estudiar las formas de abordaje de situaciones y contextos que pueden ser impactantes

o perturbadores para actores sociales. El concepto de Resiliencia ha sido aplicado desde campos de las ciencias sociales como la psicología, la sociología o la economía, pasando por ciencias naturales como la ecología, hasta la ingeniería, entre otras, y se define como la capacidad de un sistema de absorber perturbaciones, experimentar cambios y mantener la misma estructura, identidad y procesos de retroalimentación (Longstaff et al, 2010), aunque también se ha contemplado cómo puede adaptarse o incluso transformarse para tomar nuevas vías de desarrollo ante cambios dinámicos (Folke, 2016). La perspectiva de la 'resiliencia social' hace referencia específica a la habilidad de individuos y comunidades para adaptarse, perdurar y prosperar a pesar de enfrentarse a presiones y cambios significativos (Rachmad, 2022).

Esta perspectiva ha sido útil para examinar cómo la gente sobrevive y sobrelleva procesos muy adversos y hasta traumáticos, y cómo puede crecer luego de ellos, reconociendo no solo la capacidad que pueden tener los grupos sociales para abordar estas situaciones, sino también determinando los mecanismos que contribuyen a fortalecerlos para seguir adelante –como el apoyo mutuo, el desarrollo de estrategias sociales, entre otros.

Es importante destacar que esta teoría ha tenido un importante crecimiento en las últimas décadas en el campo específico del manejo de riesgos y desastres, instalándose como categorías explicativas tanto en lo académico como en lo institucional (Sandoval-Díaz, 2020). Con el avance del cambio climático, la teoría de la Resiliencia ha tenido aún más difusión institucional y oficial a escala global, como uno de los enfoques preferenciales para abordar el mismo desde la orientación hacia la adaptación (UN, 2016; Hallegatte et al, 2020; UNFCCC, 2023); y durante la pandemia de COVID19 el término también fue adoptado por gobiernos e instituciones internacionales como enfoque para enfrentar la emergencia sanitaria (Sagan et al, 2021).

La teoría de la Resiliencia va directo a la cuestión de los impactos socioambientales y los mecanismos de respuesta social que pueden generarse de la emergencia de un contexto extremo –como incluso podría ser un colapso societal–, y es, por tanto, útil para examinar las estrategias de sobrevivencia de estos actores. No obstante, uno de los principales cuestionamientos que suele hacérsele a esta teoría es que, aunque propone intervenciones sobre los sujetos, comunidades e instituciones (psicológicas, sociológicas, económicas, de infraestructura, etc), no aborda las causas de los problemas que los originan, ni mucho menos las relaciones de poder que están detrás de estas. Cannon y Müller-Mahn (2010) han señalado que con el crecimiento del discurso de la resiliencia en el marco de la crisis climática, se han venido desplazando los análisis de vulnerabilidad social, poniéndose el énfasis en los ecosistemas y no en los sistemas socioeconómicos, que son los que exponen a las personas a diferentes niveles de riesgo. Estos señalamientos han inspirado un incremento en la producción de una literatura crítica a esta perspectiva (Peterson, 2000; Bocco, 2019; Sandoval-Díaz, 2020), incluyendo autores que han indicado que el discurso y

las políticas en torno a la resiliencia representan mecanismos de dominación y perpetuación de las injusticias sociales y ambientales (Franco, 2016; Carril y Rivera, 2017). Me interesa, en cambio, comprender estas respuestas y estrategias desde una perspectiva política, no solo por el análisis de las nuevas gobernanzas extractivas que emergieron en el colapso, sino también por las variadas resistencias y potencialidades transformativas de los grupos sociales que participan en los conflictos.

Finalmente, se examina la prolífica literatura de Conflictos/gobernanza Sobre los Recursos Naturales (CSRN) y Estudios sobre Paz y Conflictos (EPC), una perspectiva que aborda numerosos análisis en contextos de guerras civiles, proliferación de grupos armados insurgentes y extendida violencia, con enfoques más políticos sobre estos contextos no convencionales. En general, estudian los factores causales de los conflictos y su relación con los recursos naturales –generados por abundancia o escasez de los mismos, codicia, desigualdades, ubicación y concentración, entre muchas otras variables determinantes−, primordialmente desde una mirada estructural o de macro-nivel (Homer-Dixon, 1994; Le Billon, 2001; Collier y Hoeffler, 2004; Ross, 2004; Humphreys, 2005; Janus, 2012). Sin embargo, me interesa destacar una perspectiva particular que se ha desarrollado en esta literatura que, como afirman Cuvelier et al (2014), ha sido minoritaria: la forma cómo áreas y comunidades han sido afectadas por los conflictos violentos, cómo estos últimos reconfiguran el tejido social y los territorios, y especialmente, cómo la gente en estos contextos puede desarrollar diversas estrategias de sobrevivencia y adaptarse a actividades que les permitan sostener su vida.

Desde el estudio de los conflictos de Sudán, Congo y Sri Lanka, Mampilly (2007) analizó las diferentes estrategias que plantearon los habitantes locales ante la instauración de gobernanzas comandadas por rebeldes armados, lo que contempló negociar con estos, establecer acuerdos y reglas de coexistencia, e incluso plantearles sus demandas a los irregulares. Por su parte Goodhand (2004), examinando la guerra en Afganistán, señaló que esta clase de conflictos configura tres tipos de interacciones económicas, que se solapan considerablemente entre ellas: a) la economía de guerra o de combate (que sostiene el conflicto y es llevada principalmente por militares y grupos armados irregulares); b) la economía en las sombras o especulativa (basada en la economía ilegal y llevada por fuerzas armadas y especuladores); y c) la economía de afrontamiento (*coping economy*) o sobrevivencia (la cual involucra a la vasta mayoría de la población y está basada en el uso de sus elementos básicos disponibles para sostener la vida). Tanto el análisis de Goodhand, que muestra cómo la economía más elemental termina entrecruzada con economías ilícitas y de guerra para poder sobrevivir, como el de Mampilly, reflejan diversos recursos para estudiar contextos de alto impacto, así como el potencial repertorio de respuestas sociales acordes a los mismos, que pueden ser contingentes y adaptativas, y no necesariamente seguir códigos morales, normativos o idealizados.

Estos elementos planteados ofrecen insumos valiosos para sustentar una ecología política de la sobrevivencia, aunque las perspectivas de CSRN y EPC han estado orientadas fundamentalmente a aspectos de seguridad y economía política. En el siglo XXI, algunos trabajos han intentado conectar dichas perspectivas con la ecología política, a partir de lo cual se ha venido desarrollando una 'ecología política de la violencia' (en buena medida centrada en casos del Sur Global) y una 'ecología política de la guerra'. Peluso y Watts (2001) abrieron una línea de discusión que fue popularizándose, con su trabajo "Ambientes Violentos" (*Violent Environments*), desde el cual plantearon una crítica a los determinismos que señalaban que los conflictos por recursos se daban básicamente por abundancia o escasez de los mismos. Los autores, en cambio, destacaron la necesidad de incorporar a estos análisis otras importantes dimensiones, como la sociocultural, la histórica y la geográfica, vinculadas a los procesos de transformación ambiental y las relaciones de poder, que están en el trasfondo del despliegue de la violencia. En buena medida, desde la ecología política se ha promovido la inserción de la variable 'cambio ambiental' en estos análisis, en la medida en la que este siempre ocurre mediado de una forma u otra por dinámicas sociales y de poder; que el cambio ambiental puede contribuir a la generación de conflictos armados por recursos; y al mismo tiempo, estos conflictos puede generar nuevos cambios ambientales y patrones de explotación de recursos, y nuevas desigualdades, injusticias y condiciones para el surgimiento de futuros conflictos (Le Billon y Duffy, 2018). Son estos elementos los que definen una ecología política de la guerra (Le Billon, 2001).

Estas últimas perspectivas reconocen el agenciamiento de los sujetos sociales y la pluralidad de valoraciones ambientales que pueden estar presentes y en juego en estos conflictos aunque, nuevamente, estos grupos sociales tienen que lidiar y adaptarse a la extrema violencia presente. Bohle y Funfgeld (2007) examinaron la guerra civil en el este de Sri Lanka, que implicó la destrucción ambiental de la laguna de Batticaloa y de la pesca para los habitantes locales, lo que afectó severamente su alimentación e implicó una reorganización política de sus actividades de subsistencia para sobrellevar la situación. En el caso de los conflictos en la Melanesia postcolonial (específicamente en Bougainville, las Islas Salomón y las sierras de Papúa Nueva Guinea) analizados por Allen (2012), mucha de la población involucrada en ellos desarrolló varias formas de pragmatismo y adaptación en la relación con las industrias extractivas presentes en el país, combinando perspectivas de desarrollo moderno con los sistemas de tenencia local de la tierra y las economías tradicionales. Similarmente, en la guerra entre el gobierno de India y la insurgencia maoista, Miklian (2012) muestra cómo las comunidades indígenas ubicadas en zonas de conflicto han podido ser capaces de expoliar sus propios recursos, y cómo habitantes locales han tenido incentivos para continuar o exacerbar el conflicto a cambio de ventajas económicas y/o políticas.

Aunque destaco los aportes de la literatura de CSRN y EPC para mi análisis, especialmente aquellos que han sido reformulados y enriquecidos desde la ecología política de la violencia y la guerra, es importante subrayar que la noción de sobrevivencia es amplia y polisémica, y no solo está asociada a escenarios de conflictos armados por recursos y guerras. En los casos que son estudiados en este capítulo, aunque en varios de los grupos sociales se enfrentaron a grupos criminales fuertemente armados y economías de guerra, y tendencias predatorias del Estado y sus fuerzas armadas, también entraron en juego en otros conflictos la pobreza extrema, la búsqueda de la perduración ambiental, la lucha por el acceso al servicio de agua, o hasta la sobrevivencia política, sin que necesariamente se haya desarrollado un combate o guerra convencional en el territorio.

En este sentido, una ecología política de la violencia y de la guerra, aunque útil y crucial, sigue siendo un aspecto parcial de un marco contextual no convencional más amplio, de una totalidad muy precarizada del conjunto de dimensiones de la existencia. El colapso como sobredeterminación societal implica que las lógicas de sobrevivencia se vuelven transversales, se hacen presentes en cada aspecto de la vida. Mi propuesta de análisis busca incorporar esta ecología política de la violencia y la guerra, aunque en realidad plantea una variedad más extensa de escenarios y respuestas sociales que contemplen la polivalencia que se ha podido recoger en el estudio de mis casos, lo que además puede incluir la persistencia de luchas comprometidas con la justicia ambiental.

I.II Hacia una amplia ecología política del conflicto

Mi interés principal en este capítulo es examinar y caracterizar qué formas toma la lucha en torno a lo ambiental en un marco como el de La Gran Crisis venezolana, independientemente de si estas son o no expresiones ideales, 'fuertes' o emblemáticas; qué variaciones y mutaciones experimenta; y qué aristas y ramificaciones, sean progresivas o regresivas, se desarrollan desde las acciones colectivas para la reproducción más elemental de la vida. El abanico muy fluido y heterogéneo de luchas examinadas abarca, por ejemplo, el despliegue en la arena pública del movimiento socioambiental, la protesta contingente movida por la necesidad de acceder a los más elementales medios ecológicos de vida, las respuestas y estrategias que grupos sociales desarrollan en las más duras condiciones de sobrevivencia, o los vaivenes que se pueden dar simultáneamente en estos actores, entre la defensa de los recursos naturales/territorios y las prácticas de extracción/predación de los mismos.

En este sentido, mi estudio reivindica la necesidad de adoptar una más amplia ecología política del conflicto para este tipo de escenarios de profunda crisis, en la cual esta polivalencia de expresiones sociales es objeto privilegiado del análisis. El desarrollo de esta perspectiva ampliada ha implicado la combinación de variados enfoques teóricos y la

construcción de una tipología de las orientaciones de las luchas que se evidenciaron en el conjunto de los conflictos ecológico-distributivos examinados. Esta tipología planteada desborda, por tanto, las diversas clasificaciones propuestas por teorías de los movimientos socioambientales y por la justicia ambiental que observamos en el capítulo 1: reformistas y radicales (Acosta y Machado, 2012); movimientos fuertes y débiles (Svampa, 2019); culto de la vida silvestre, credo ecoeficientista y movimiento de justicia ambiental (Martínez-Alier, 2003); entre otras.

Sin dejar de considerar estas formas más organizadas y politizadas de movilización y activismo, la tipología que propongo abarca simultáneamente luchas en torno a la naturaleza que pueden ser más bien resolutivas, parciales, utilitarias y contradictorias; determinadas también por el repliegue de la acción colectiva, estrategias de carácter defensivo e imperativos de sobrevivencia; mecanismos temporales para sobrellevar el colapso, desarrollados en los escenarios más adversos, que no entran en las categorías clásicas del ambientalismo, pero que representan otros abordajes sociales a estas situaciones fuera de una catalogación ideal de movilización, otras formas de defender la vida, e incluso otros lugares desde donde plantear la transformación de la sociedad.

En la TABLA 15 presento esta tipología compuesta de 5 tipos: Ambientalismo de Alta Intensidad (AAI), Ambientalismo de Baja Intensidad (ABI), Lucha por el Acceso Básico a Medios de Vida Ecológicos (LABMVE), Extracción de Recursos Naturales (ERN), y Sobrevivencia (S).

Las categorías AAI y ABI las voy a usar desde un sentido similar a la ya mencionada distinción de Svampa (2019) entre movimientos sociales fuertes y débiles (Capítulo 1). En AAI se priorizan y ponen en el centro las valoraciones y narrativas de defensa y reivindicación de la naturaleza, el ambiente y/o el territorio, desplegadas a partir de las culturas locales, territorialidades y/o perspectivas políticas de los grupos movilizados. Dichas narrativas suelen ser más elaboradas, con visiones sistémicas de las causas de los impactos ambientales, y motorizadas desde agendas de lucha más críticas y politizadas que interpelan al poder, que recurren además a posiciones éticas que puede apelar a nociones trascendentales como la justicia ambiental, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, el ecosocialismo, entre otros.

El ABI comparte con esta la asunción y difusión de valoraciones y narrativas ambientales, aunque se diferencia en que las plantea desde una perspectiva más bien correctiva, de control y remediación de los impactos ambientales, con discreta difusión y búsqueda de disputa mediática, y débil y/o escasa crítica al poder político y económico.

En cuanto a LABMVE, esta se refiere a las acciones colectivas y movilizaciones que tienen en el centro la defensa de la capacidad de usar, gestionar o preservar los llamados recursos naturales fundamentales para la reproducción de la vida cotidiana (agua, alimento, energía,

tierra, territorio, etc), y está estrechamente vinculada con el sostenimiento de las economías de subsistencia. Se distingue de AAI y ABI en al menos dos aspectos fundamentales: primero, contempla, desde expresiones sociales puramente reactivas y poco organizadas ante las carencias, degradación o despojos de estos medios de vida esenciales –que se encuentran en los ecosistemas o bien como recurso distribuido a través de los servicios públicos− hasta los "ecologismos populares" (Martínez-Alier, 2003) que examinamos en el capítulo 1, sectores de las clases desfavorecidas que luchan por mantener sus elementos de subsistencia más básicos. Segundo, aunque algunas veces puede generar fuertes movilizaciones, no suelen aspirar a tener influencia política o posicionar agendas y narrativas en la arena pública, y sí disputar más en el orden micropolítico –que puede ser otra forma de politicidad (Bohle y Funfgeld, 2007; Federici, 2013)−, o alcanzar la resolución urgente de sus problemas de acceso.

El tipo ERN básicamente se centra en la disposición social a extraer y apropiarse significativamente de recursos naturales (fundamentalmente para la comercialización), aunque esto suponga generar importantes impactos socioambientales en un territorio, incluyendo la propia localidad en la que se habita. Este tipo de orientaciones de lucha salen del rango de análisis de la teoría de los ecologismos populares (Martínez-Alier, Sejenovich y Baud, 2015), por lo que se recuperan otros enfoques teóricos más acordes. La actividad social de extracción puede ser legal o ilegal, y si es esta última, quienes la ejercen pueden de igual manera reivindicarla como lícita, desde una perspectiva de derecho al trabajo, al territorio propio, y/o por la necesidad de subsistencia (véase la discusión sobre lo lícito y lo ilícito en el capítulo anterior, desde la economía política y geografía económica, antropología ambiental, en Hudson, 2018; Adunbi, 2020; Inverardi-Ferri, 2021). Por otro lado, las respuestas variantes de estos actores y sus acciones más pragmáticas y utilitarias pueden enmarcarse en la literatura recientemente examinada de Ecología Política de la Violencia y Conflictos por los Recursos Naturales, donde se contemplan formas de adaptación a las dinámicas extractivas o predatorias imperantes (Allen, 2012), incentivos para el expolio de los propios recursos (Miklian, 2012), o el establecimiento de acuerdos y reglas de coexistencia con grupos armados irregulares (Mampilly, 2007), entre otros.

Los actores sociales orientados a la ERN pueden trabajar autónomamente o estar insertos en cadenas de valor más amplias, por lo que el producto de su trabajo, o parte de este, pueden quedar en manos de las estructuras de poder económico que las controlan. Al ser una orientación social, la ERN no puede ser comparable a los procesos extractivos masivos llevados por empresas estatales y/o privadas, o a las que desarrollan las gobernanzas híbridas analizadas.

Por último, la categoría Sobrevivencia (S) remite particularmente a las acciones de los actores sociales dirigidas a sostener las mínimas condiciones para vivir, estando en las condiciones más adversas, lo puede implicar sobrellevar situaciones de carestía extrema de

medios de vida, depresión territorial, trabajo sobreexplotado y violencia de grupos armados. Este tipo específico describe por tanto, la acción colectiva en las situaciones materialmente más comprometidas, por lo que pueden examinarse desde la combinación de la mencionada literatura de ecología política de la violencia y la guerra, economía política y geografía económica, y diversos análisis críticos sobre Estrategias de Sobrevivencia (Ramírez, 1991; Rocheleau, 1991; Osorio, 2001; Bourdieu, 2011; Stoll, 2014; McLafferty et al, 2019; McCool et al, 2022).

TABLA 11. Clasificación de la orientación de las luchas en los conflictos ecológico-distributivos. Se añade breve descripción. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los casos

TIPOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN DE LAS LUCHAS EN LOS CONFLICTOS ECOLÓGICO-DISTRIBUTIVOS	
TIPO	**DESCRIPCIÓN**
Ambientalismo de Alta Intensidad (AAI)	- Priorizan y ponen en el centro las valoraciones y narrativas de defensa y reivindicación de la naturaleza, el ambiente y el territorio. Apelan a nociones trascendentales - Perspectivas y agendas más políticas y sistémicas
Ambientalismo de Baja Intensidad (ABI)	- Asunción de valoraciones y narrativas ambientales - Perspectivas de control y correctivas de los impactos ambientales - Discreta difusión y débil y/o escasa crítica al poder político y económico
Lucha por el Acceso Básico a Medios de Vida Ecológicos (LABMVE)	- Estrechamente vinculada con el sostenimiento de las economías de subsistencia - Ponen en el centro la defensa de la capacidad de usar, gestionar o preservar los llamados recursos naturales más elementales para vivir - Va desde expresiones reactivas hasta ecologismos populares - Incidencia más bien a escala micropolítica
Extracción de Recursos Naturales (ERN)	- Centrada en la disposición social a extraer y apropiarse de recursos naturales para la comercialización, aunque genere impactos socioambientales y territoriales - Suelen enunciarse reivindicaciones económicas y laborales -Puede ser una actividad autónoma o inserta en cadenas de valor
Sobrevivencia (S)	- Centrada en acciones dirigidas a sostener lo mínimo para vivir estando en las condiciones más adversas y extremas

Estas categorías hacia una amplia ecología política del conflicto, no deben interpretarse de ninguna manera como un tipo de identidad o conjunto de prácticas rígidas o fijas, sino como expresiones sociales particulares que se desenvuelven en procesos sumamente dinámicos, contradictorios, cambiantes y contingentes. Por otro lado, las categorías tampoco tienen límites cerrados entre ellas, existiendo en cambio grises, cruces, hibridaciones y polivalencias en estas; además, en un mismo conflicto pueden coexistir y/o confrontarse varios tipos al mismo tiempo, como veremos más adelante.

II. Mapa general de grupos sociales movilizados: perfiles, territorialidades, demandas e incidencia

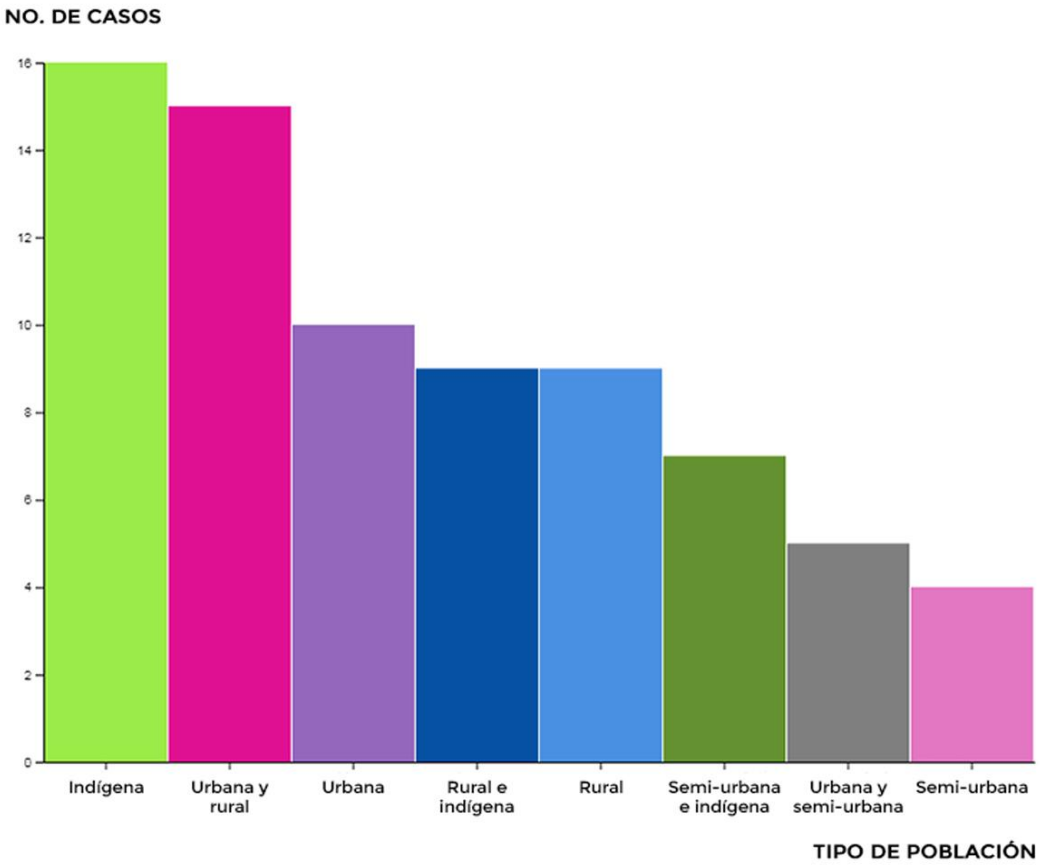
II.I Tipo de población y territorialidades

Los 75 conflictos de distribución ecológica analizados revelan una gran riqueza no solo en términos de las respuestas sociales ante la crisis, sino también de sus particularidades territoriales y culturales, la variedad de agrupaciones de la sociedad civil que participan en ellos, sus historias de lucha y resistencias en torno a la naturaleza; y por otro lado, de tensiones y contradicciones que incluso se pueden expresar en confrontaciones entre estos grupos.

Primeramente podemos agrupar los actores protagonistas de los casos en 8 categorías generales, por 'Tipo de población': las primeras 4 son Urbana; Semi-urbana (ciudades más bien pequeñas y cercanas a zonas rurales); Rural (primordialmente actores campesinos); e Indígena y sus combinaciones.

En la FIGURA 49 se advierte que los indígenas encabezan el mayor número movilizaciones, con 16 casos (21,3%). Si sumamos su participación en conflictos junto con actores rurales (9) y semi-urbanos (7), la cifra llega a cerca de la mitad del total (32 casos, 42,67%). Se debe destacar que la población indígena representa apenas el 2,8% de la población venezolana (INE, 2014), pero se despliega en vastos territorios como la Amazonía y varias zonas del norte del Orinoco. Los 16 casos mencionados están casi todos en la región amazónica y dos de ellos en la Sierra de Perijá, ambos Nueva Frontera de Commodities (ver FIGURAS 50 y 51). En la primera biorregión mencionada se registraron 4 conflictos protagonizados por comunidades del pueblo indígena pemón, uno de los que ha planteado las resistencias más duras ante el auge de la minería ilegal. Estos casos se desplegaron en la Región Ecopolítica 'Cuenca del Caroní' (Z11), ubicados en los municipios Gran Sabana y Angostura (Bolívar), e incluye las disputas que desarrollaron en el Alto Paragua, en el río Carrao dentro del PN Canaima, o en Ikabarú, donde se ubica el bloque especial del AMO.

FIGURA 49. Distribución de los tipos de actores sociales que protagonizan en los 75 conflictos de distribución ecológica, de acuerdo a su Territorialidad (Urbana, Semi-urbana, Rural e Indígena; y sus combinaciones). Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos



Otros pueblos indígenas que también mostraron importantes resistencias territoriales ante el avance minero en Bolívar han sido el yek'wana en la cuenca del Caura (Z12), resaltando el rol de la organización Kuyujani, creada desde 1996 para garantizar los acuerdos de convivencia entre comunidades y establecer el relacionamiento con el mundo no indígena; y el e'ñepa, que se pronunció en rechazo al AMO y había desarrollado su propio proceso de autodemarcación de territorios ancestrales, siendo que ante el silencio de las instituciones solicitaron en 2015 respuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia, sin éxito.

En el estado Amazonas destacan pueblos como el wottüja, que viene de una larga tradición productiva agrícola muy relevante para el municipio Manapiare y que ha articulado comunidades en la Organización Indígena del Pueblo Wottüja del Sipapo (Oipus), donde también asumen estrategias para enfrentar la minería; el yabarana en el municipio Manapiare (Z15), que confluye en la Organización Indígena Yabarana del Parucito OIYAPAM y que ha impulsado denuncias e intervenciones en zonas mineras; o el yanomami en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare (Z17). En general, las comunidades y organizaciones indígenas de este estado han avanzado hacia una confluencia regional, lo que se ha traducido en la formación en 1993 de la Organización

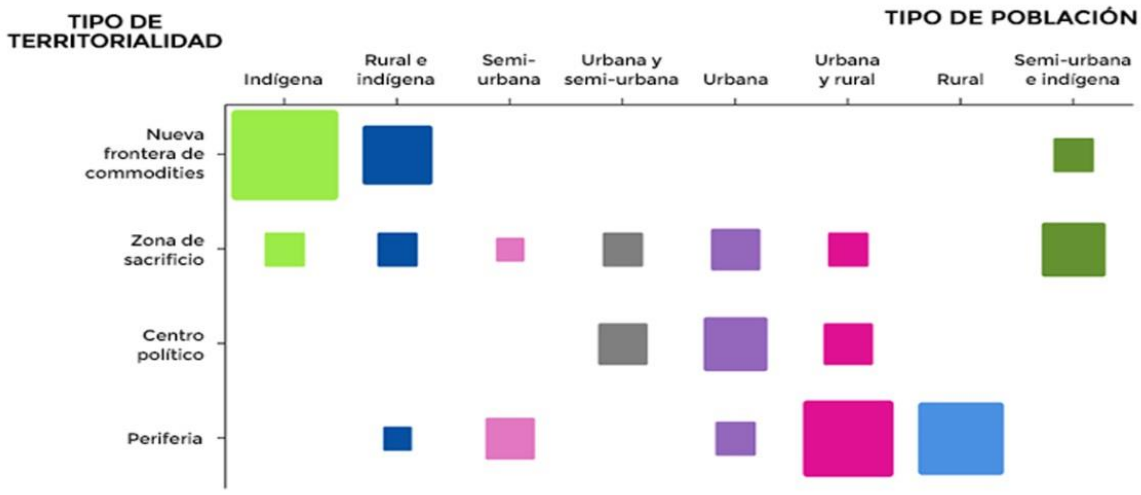
Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) en 2012.

Se debe mencionar también las movilizaciones de las comunidades wayuú del Socuy contra la minería de carbón, y las yukpa de Tukuko y Yaza, ambas en la Sierra de Perijá (estado Zulia, Z1). La lucha yukpa se convirtió en una de las más emblemáticas del país desde antes de la emergencia de La Gran Crisis aunque, como fue explicado en el capítulo anterior, su líder, el cacique Sabino Romero, fue asesinado por sicarios en marzo de 2013.

FIGURA 50. Ubicación del Tipo de población que protagoniza los 75 conflictos de distribución ecológica de acuerdo al tipo de Estatalidad. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos



FIGURA 51. Relación entre el Tipo de población que protagoniza los 75 conflictos de distribución ecológica y las Estatalidades (Nueva Frontera de Commodities, Zona de Sacrificio, Centro político y Periferia). Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos



Comunidades indígenas pueden habitar con otro tipo de población en un mismo territorio, manteniendo separaciones entre ellos, o bien realizando intercambios y hasta relaciones de cooperación. Por ejemplo, en zonas petroleras como Tascabaña (en la cuenca oriental), donde conviven indígenas con campesinos, fueron las comunidades kariña quienes desarrollaron años de acciones y denuncias ante la contaminación de sus aguas (Caso 42), aunque la cierta visibilidad que había alcanzado su lucha fue decreciendo con la evolución de la crisis. Por otro lado, en Ikabarú, una comunidad mixta donde indígenas conviven y coexisten con 'criollos'[12], predomina la población originaria y la actividad minera ilegal. La población es mixta en buena medida debido a las importantes concentraciones de oro y diamantes que favorecieron la migración criolla a la zona, y a que se practicó una minería de 'libre aprovechamiento' desde la década de los 40 del siglo XX. En 2013, el Estado otorgó Ikabarú a 15 comunidades pemón como título de propiedad colectiva (con una extensión de 597.982,87 hectáreas), lo que les permitió asumir la administración del territorio, aunque desde el decreto del AMO en 2016, se incrementaron las disputas entre actores por el control de las minas.

En cambio, en conflictos como los del Bajo Caura, donde la población también es mixta, las comunidades indígenas de la cuenca (mayoritariamente yek'wana, sanema y hotï) sí desarrollaron una articulación con los afrodescendientes y criollos. En las protestas por la instalación de balsas para explotación de oro en el lecho del río por parte de la CVM (Caso 62), cerca de la localidad de Maripa, se produjo en 2020 por primera vez una alianza entre estos diferentes grupos, lo que generó una serie de movilizaciones (en plena cuarentena) para oponerse a la medida, pero también para reclamar por las deficiencias de los servicios públicos y la falta de gasolina por más de 70 días –desviada hacia zonas mineras.

[12] Un criollo es una persona nacida en el territorio nacional racialmente mezclada, en buena medida con blancos, propio del histórico proceso de colonización.

IMAGEN 19. Protestas en Maripa por servicios básicos y la instalación de balsas mineras. Mayo 2020. Fuente: Correo del Caroní. https://correodelcaroni.com/region/en-maripa-reclaman-servicios-basicos-y-protestan-contra-la-extraccion-minera-en-el-caura/



En otros casos, la situación de los indígenas ha sido más bien de franca desventaja y/o subordinación, como se vio con el desplazamiento de los pumé en el estado Apure, que vieron muy debilitadas sus acciones reivindicativas ante el abandono estatal, la proliferación de enfermedades, la violencia de los terratenientes locales y los grupos armados, entre otros factores (No. 26). En la laguna de Sinamaica, las condiciones son similares teniendo a indígenas como los añú y wayuú en posición sumamente frágil, e incluso participando de una u otra forma en la actividad de tráfico de combustible hacia Colombia (No. 10). La integración de indígenas en otras actividades de contrabando también se ve, por ejemplo, con el caso de las especies silvestres, lo que ha estado determinado no solo por la seria degradación de las condiciones de vida de los warao en el Delta del Orinoco, sino también por las presiones de actores ilícitos sobre ellos (No. 50). Y en el caso 'El cierre del vertedero de Cambalache y la situación de desechos en Ciudad Guayana' (No. 55) se evidencia la existencia de población criolla e indígena trabajando en labores de recolección, además de ser objeto de explotación por parte de mafias de la chatarra que los usaron como mano de obra para el desmantelamiento de instalaciones de empresas estatales.

Los sujetos de zonas rurales también jugaron un rol importante, encabezando las movilizaciones en 9 conflictos, mientras que en 15 casos participaron con actores urbanos y en 9 con comunidades indígenas, para un total de 33 casos (44%). Como es posible apreciar en las FIGURAS 50 y 51, los grupos rurales están distribuidos prácticamente en todo el país, aunque el grueso de ellos está en Estatalidades de tipo 'Periferia'. Algunas de las movilizaciones más potentes registradas en la crisis provienen de este sector, como se ha apreciado en Las luchas en defensa del Cerro La Vieja (Lara – Caso 29), donde se generó

una confluencia entre habitantes de Sarare, La Miel y otras localidades del municipio para oponerse a la actividad minera, creando el Comité Pro-Defensa del Parque Municipal Cerro la Vieja. Guardaparques, docentes, ambientalistas locales, profesionales, el cronista municipal, agricultores, comuneros, sectores de la iglesia, líderes políticos municipales, medios alternativos, entre otros, se articularon por esta causa y recibieron además el apoyo de organizaciones ecologistas y de derechos humanos de otras partes del país, y la Plataforma de Lucha Campesina –un movimiento de nivel nacional−, por mencionar algunos ejemplos.

IMAGEN 20. Grupos movilizados realizaron una caminata en defensa del Parque Cerro La Vieja, Día Mundial de la Tierra, junio 2019. Al fondo, se puede percibir el cerro. Fuente: Emiliano Teran Mantovani, visita de campo. Sarare, estado Lara.



En los Andes venezolanos se dieron también movilizaciones de cierta resonancia, como en el poblado agrícola de La Azulita (Mérida – Caso 18), donde consejos comunales de la aldea de San Luis, vecinos de la Comuna El Tambor y habitantes del casco central de ese poblado realizaron varias acciones para evitar que se siguiera construyendo una carretera en la zona de Urumal, área del Parque Nacional Sierra de La Culata. Dicha actividad estaba vinculada a la expansión agrícola y la extracción ilegal de madera, y afectó cuencas y humedales que surten de agua a varias comunidades locales. Por su parte, en la región central del país, específicamente en El Jarillo (Miranda – Caso 38), la deforestación generada por una empresa privada para una iniciativa turística fue enfrentada por agricultores, consejos comunales y comunas del Sector El Cedral, que también contaron con el apoyo de la Plataforma de Lucha Campesina, denunciando la afectación de fuentes de agua que surten la siembra en la zona.

En la biorregión Los Llanos, fueron conservacionistas de la Estación Experimental de Caparo (EEC), establecida desde los años 70 por la Universidad de Los Andes (ULA) dentro de Reserva Forestal homónima, los que han defendido las más de 7.000 hectáreas de bosque que abarca esa zona, permanentemente amenazada y agredida por ocupaciones de sus tierras por parte de actores orientados al comercio ilícito de las mismas. Estos son los

últimos relictos de bosque de toda esta reserva, muy deforestada por décadas de explotación. En 2018 se generó un nuevo intento de ocupación que fue rechazado por un conjunto de actores que acompañaron a los conservacionistas, como estudiantes y autoridades de la ULA, consejos comunales y comunas, campesinos y organizaciones ambientalistas, que lograron el desalojo de estas tierras, aunque las ocupaciones persistieron en años posteriores.

No obstante, en otros casos la fortaleza de estos actores se vio afectada, como ocurrió en el conflicto campesino contra las plantaciones de eucalipto en Ospino (Portuguesa – Caso 27), una lucha emblemática desde los años 90 que tuvo una muy fuerte perspectiva ambiental y política, y que vino difuminándose hasta orientarse en el período de estudio hacia una reivindicación por tierras. Caso similar es el de la simbólica lucha de pescadores y habitantes locales contra la construcción del puerto de aguas profundas en la península de Araya, muy fuerte en los 90 y los años de Chávez, pero que prácticamente despareció en la crisis (Caso 46).

Los actores semi-urbanos suelen ser pobladores de localidades donde se han desarrollado industrias extractivas y una modernización territorial más bien precaria y muy desigual, con altos niveles de pobreza y una gran asimetría de poder en la relación de estas comunidades con dichos sectores extractivistas. Vemos conflictos de este tipo en localidades aledañas a la industria petrolera, como en la Faja Petrolífera del Orinoco, específicamente en San Diego de Cabrutica (Anzoátegui – Caso 41), cuyos pobladores se han movilizado ante la escasez de agua generada por empresas de servicios que laboran para PDVSA. Las protestas se han realizado principalmente por parte de habitantes y consejos comunales, aunque de manera más desarticulada han participado integrantes de partidos políticos, productores agropecuarios y sindicatos del sector petrolero. Estos últimos ha asumido un rol de movilización más organizado y constante, articulando reivindicaciones laborales con los reclamos por los impactos socioambientales que genera la industria. Una situación similar las vemos en las localidades donde se emplaza la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que explota bauxita en Los Pijiguaos (Caso 66) y la procesa en Matanzas, donde se ubican las piscinas de lodos rojos producto de la obtención del aluminio (Ciudad Guayana – Caso 56). En ambos casos, son habitantes locales quienes intervienen, aunque con mucha menos fuerza en sus movilizaciones, las cuales suelen ser más reactivas y atomizadas, y muy determinadas por sus precarias condiciones de vida.

En cuanto al papel de los actores urbanos, este ha sido igualmente relevante en comparación con los indígenas y grupos de sectores rurales, debido a su numerosa participación en los conflictos ecológico-distributivos, a sus capacidades de mayor incidencia en los centros políticos del país, y a sus perfiles organizativos más profesionalizados, que aportan mayores experticias técnicas y estructura a las iniciativas y movilizaciones. En 10 casos el actor urbano encabeza las movilizaciones, pero si se suman

los 15 casos en los que actúan con grupos rurales y los 5 con población semi-urbana, tenemos un total de 30 casos (40%). No obstante, en la FIGURA 50 podemos advertir que estos actores se despliegan fundamentalmente en una franja de la zona norte-costera del territorio nacional –a excepción de su presencia en los casos de San Félix-Puerto Ordaz y El Callao, la zona urbanizada de la Amazonía. Evidentemente la categoría 'urbano' es amplia, pues equipara a grandes ciudades como Caracas, Valencia o Maracaibo, con otras mucho más pequeñas como Guanta, Araure, Altagracia de Orituco o El Callao.

En los casos de protagonismo exclusivo de actores urbanos, estos se movieron generalmente por problemas de acceso al agua, contaminación, y por asuntos de deforestación de sus zonas verdes. En Ciudad Guayana, en relación a 'Los impactos socio-ambientales de la contaminación del embalse Macagua' (Bolívar – Caso 57), las protestas por carencias de agua han sido persistentes durante la crisis –y desde antes–, sobre todo en sectores más pobres y en la ciudad de San Félix. Ante lo sensible del problema, estas movilizaciones suelen tener el apoyo de medios de comunicación locales, así como de representantes del sindicato de Hidrobolívar y expertos de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, quienes realizaron estudios y mesas de trabajo con representantes vecinales. Esto se repite como patrón en otras ciudades, como se vio en los municipios Bolívar y Barinas, con movilizaciones por la contaminación del río Santo Domingo (Barinas – Caso 24), la cual, además de socavar el acceso al líquido fue generando enfermedades en la población.

IMAGEN 21. Protestas de calle en la ciudad de Puerto Ordaz (Ciudad Guayana) por falta de agua. Abril 2018. Fuente: Watcher. https://twitter.com/Watcher_Ven/status/982328192500297729



Este perfil de movilización se evidenció también ante la contaminación del aire en la ciudad de Maracaibo, generada por el colapso del servicio de aseo y la extraordinaria multiplicación de focos de incineración de la basura (Caso 7). En casos como el de la 'Contaminación del aire en Guanta por la Cementera Vencemos' (Caso 43), y el de 'Los impactos socioambientales del Complejo Industrial Petrolero José Antonio Anzoátegui' (Caso 40), ambos en el estado Anzoátegui, antes que las comunidades afectadas, fueron los trabajadores (sindicalizados) de estas industrias quienes generaron las movilizaciones más activas y persistentes. Al igual que lo vimos en el caso de San Diego de Cabrutica, los trabajadores articularon sus reivindicaciones laborales con la crítica al estado deplorable de estas industrias, que pone en riesgo su vida y salud, y las de las comunidades aledañas. Ambos casos también comparten el hecho que actores de partidos políticos de oposición hayan tenido un rol activo en las denuncias de estos problemas socioambientales.

Respecto a temas de deforestación urbana, en el estado Portuguesa se registró el involucramiento de organizaciones sociales de la ciudad de Araure como el Frente Ecológico de Portuguesa, para defender la Zona Protectora Mitar Nakichenovich. Además de la extracción ilícita de madera, las acciones buscaron enfrentar problemas como la contaminación de las aguas del área protegida y la proliferación de incendios (Caso 28) y, aunque lograron cierta respuesta de las instituciones ambientales, los problemas mencionados no se resolvieron. En la ciudad de Caracas, vecinos y consejos comunales del barrio de Sebucán, a los que se le unieron profesores y estudiantes universitarios, y organizaciones ambientalistas, se movilizaron desde 2018 para oponerse a la deforestación de un espacio de recreación natural ubicado en la escuela de enfermería de la emblemática Universidad Central de Venezuela, el cual sería asignado para la construcción de un centro deportivo. A pesar que no se logró detener el proyecto, el caso tuvo resonancia mediática y hace parte de un interesante conjunto de iniciativas sociales que se desarrollaron en la ciudad capital en defensa del arbolado urbano.

Finalmente, de destacan las mucho más potentes movilizaciones en las que se desarrollaron acciones conjuntas entre actores urbanos y rurales, o bien urbanos y semi-urbanos. Por ejemplo, en el municipio Torres (Lara), en 2015 surgía el Movimiento Salvemos el embalse Los Quediches, compuesto por habitantes de la ciudad de Carora, organizaciones sociales, pobladores de caseríos de la región (como Las Palmitas o La Bárbara), consejos comunales, algunos productores locales y voceros cristianos, con el objetivo de defender esta fuente de agua, afectada por el desvío de ríos y una pésima y corrupta gestión institucional regional.



IMAGEN 22. Comunidad de Veracruz junto a otras comunidades campesinas, organizaciones ambientalistas e individualidades, en asamblea sobre situación del proyecto de minería de sílice en sus territorios. 2017. Fuente: Emiliano Teran Mantovani, visita de campo

Estas movilizaciones comenzaron a articularse con la lucha contra la minería de sílice en el cerro El Plan, el cual está cercano al embalse, en el mismo municipio. Los grupos consideraban que ambas luchas están unidas dado que los impactos que tendría el inicio de la actividad minera afectarían al embalse y el suministro de agua. Las movilizaciones antimineras comenzaron siendo impulsadas por la alianza entre los más de 30 productores afectados de las comunidades de Veracruz y La Bárbara, con grupos ambientalistas locales, profesores universitarios y académicos, grupos religiosos, entre otros. Con el incremento de la resonancia de estas luchas, que alcanzaron otras regiones del país, se unieron integrantes de partidos políticos, el Colegio de Ingenieros del estado Lara y otras organizaciones como el Movimiento Unidos por el Agua o Provea, esta última la más importante del país sobre el tema de derechos humanos.

Otro conflicto que refleja la acción conjunta entre actores urbanos y rurales es el de las Movilizaciones en Defensa del Parque Nacional Waraira Repano / El Ávila (Caracas – Caso 39), también con una gran resonancia en el país, e incluso cobertura de medios internacionales. En este caso incluso confluyen varios conflictos al mismo tiempo, producto de las diferentes iniciativas y actividades económicas que se desarrollaron desde 2015, y que han violado las normativas del PN, tales como el reimpulso del proyecto del teleférico hacia La Guaira, competencias de ciclismo de alto nivel, una serie de construcciones de viviendas de lujo y otras infraestructuras en pueblos autóctonos como Galipán, entre otras. Esto provocó la reacción de habitantes locales del parque, que se articularon con el Sindicato de Trabajadores de Inparques, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, medios de comunicación, entre muchos otros, con el fin de impulsar un conjunto de acciones en oposición a estas actividades.



IMAGEN 23. Protesta en la entrada del PN Waraira Repano en San Bernardino, contra el anuncio de una "ciudad comunal" controlada por el PSUV en esta área protegida. Octubre 2021. Fuente: Observatorio de Ecología Política de Venezuela.



IMAGEN 24. En visita de campo (junio 2019) constatamos el arrase de cultivos de eucalipto de pobladores de Galipán por las obras del teleférico. Fuente: Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

Las luchas para salvar la laguna de Urao (Mérida - Caso 19), afectada por construcciones, contaminación, ampliación de frontera agrícola, entre otros factores, se activaron ante la clara disminución de la superficie de este cuerpo de agua. Aquí, también se produce una amplia y rica confluencia de actores movilizados, la cual incluye grupos ecologistas/conservacionistas, consejos comunales, vecinos de la ciudad de Lagunillas (donde se ubica la laguna), comunidades indígenas, estudiantes, docentes e investigadores universitarios, y comunicadores sociales, entre otros, los cuales demandaron tomar una serie de acciones para la recuperación de la laguna. Esto produjo que las autoridades tomaran las medidas solicitadas y contribuyeran a mejorar la situación del ecosistema.

II.II Demandas y reivindicaciones

Con esta primera panorámica de los tipos de actores sociales movilizados, podemos ahora dar más detalles de las principales demandas y peticiones planteadas en los conflictos

ecológico-distributivos, a modo de comprender, de manera general, los ejes reivindicativos sobre los que giraron estas luchas.

Las demandas se extraen del análisis de casos, específicamente de las diferentes declaraciones y comunicaciones de estos actores. Es importante subrayar que estas peticiones suelen ir dirigidas hacia el Estado, por lo que generalmente se orientan hacia la necesidad de una mejor gestión institucional y la reivindicación de derechos consagrados en la constitución y las leyes. No obstante, y como veremos más adelante, estas en realidad representan una parte de sus orientaciones y perspectivas de movilización. Sea por la ausencia total de democracia y canales institucionales, por la violencia imperante o su gran precariedad, existen otros muchos intereses y pretensiones de estos grupos sociales que se dirimen fuera de la arena de lo público –como el acceso directo a los recursos o acciones autónomas de seguridad comunitaria. Hay ciertas cuestiones comunes en el reclamo social venezolano, al tiempo que existen particularidades de acuerdo al Tipo de población (Urbana, Semi-urbana, Rural e Indígena). Se evalúa primero la información de manera diferenciada y luego ofrezco algunos elementos destacados de estas demandas comunes.

Respecto a pueblos indígenas, como vemos en la TABLA 11 sus demandas han girado de manera predominante en torno a tres ejes reivindicativos: la tierra/territorio; el combate contra grupos armados que hacen minería en sus territorios; y el asunto de la salud. El primero tiene una gran fuerza pues es elemento central en la gran mayoría de sus conflictos. Se exige realizar y/o completar la demarcación, titulación y entrega de tierras indígenas tal como está consagrado en la Constitución de 1999. Dicho mandato ha sido en muy buena medida fallido si tomamos en cuenta que la entrega no supera el 13% del total establecido (Wataniba y GTAI, 2021). De ahí que aparezca como la primera demanda indígena, además de ser considerada por estos como la vía para la realización de la autodeterminación y solución a sus problemas. En casos como los del Caura, por ejemplo, los indígenas han planteado como un reclamo el reconocimiento y titularidad de 4 millones de hectáreas en la cuenca, clave para enfrentar a los grupos predominantes de la minería ilegal, y en contraposición a la creación del PN Caura en sus territorios ancestrales (Organización Kuyujani, 2014).

El otro eje aparece ante la extraordinaria y violenta expansión minera ilegal que para las comunidades indígenas ha sido experimentada como una invasión progresiva de sus territorios. La expulsión de los grupos armados vinculados a la actividad ha generado peticiones de protección al Estado –incluso proponiendo patrullajes conjuntos−, ante las notables dificultades para responder a la capacidad de fuego de estos actores criminales. En 3 casos se solicitan indemnizaciones y la aplicación de la justicia para diversas situaciones, como las masacres de indígenas que se han generado en las disputas por las minas, de las que se pueden mencionar las ocurridas en 2018 y 2021 en El Silencio (Caso 63).

TABLA 12. Principales demandas y reivindicaciones de los Pueblos Indígenas en los casos en los que participan. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos

Tipo de población: Indígena	
DEMANDA	**No. de Casos en los que aparece**
Demarcación y entrega de tierras	16
Expulsión de grupos irregulares/mineros de sus territorios	14
Atención en salud	8
Protección del Estado ante los grupos armados	7
Cierre de minas/cese de la expansión de nuevas minas	6
Consulta previa, libre e informada	6
Saneamiento/restauración ambiental	5
Apoyo para alternativas económicas al extractivismo	5
Respeto por el Territorio/autodeterminación	4
Cese de la agresión y abusos militar/militarización	4
Carreteras, infraestructura y servicios	4
Abastecimiento de combustible	3
Indemnización y aplicación de justicia	3
Respeto por la actividad minera practicada por los indígenas	2
Estudios de Impacto Ambiental	2
Mejorar gestión de las empresas o instituciones	1
Acompañamiento de organizaciones de derechos humanos	1
Reubicación en minas permitidas/compensaciones	1

Nótese, no obstante, que en 4 casos aparece también la demanda del cese de la agresión y abusos por parte de militares, situación que se repite en numerosos casos debido a la participación estatal en este tipo de minería, y que provocó enfrentamientos entre los efectivos y las comunidades originarias. En 6 conflictos se solicita también el cierre y desalojo de minas, así como la negativa de que se expandan más estos sitios de extracción. Este rechazo está vinculado tanto a la minería ilegal como a la legal pues en varios casos las organizaciones indígenas se pronunciaron en contra del decreto del AMO de 2016 y el Decreto No. 0010 de 2020 que autorizaba la minería en el lecho de ríos de la Amazonía. Fuera de esta biorregión, en la Sierra de Perijá, los wayuú y los yukpa han insistido en que se no ampliaran minas de carbón en esa región, específicamente en la cuenca del Socuy, lo cual ha sido una demanda planteada desde varios lustros atrás. En todo caso, como veremos en siguientes secciones, el rechazo a la minería no es un consenso entre los pueblos indígenas amazónicos.

La cuestión de la Atención en salud aparece en tercer lugar debido no solo a los efectos sociales de La Gran Crisis, sino también de la propia expansión minera, que contribuyó a la notable proliferación de casos de malaria y paludismo. A esto se une la pandemia del COVID, los desplazamientos y la violencia sufrida por estas comunidades.

IMAGEN 25. Indígenas yanomami de la organización Horonami se movilizan en Puerto Ayacucho (2016) solicitando la demarcación y entrega de tierras indígenas. Fuente: HORONAMI Organización Yanomami, cuenta de Twitter. https://x.com/horonami14/status/710527230892482561



Respecto a los actores rurales, sus demandas principales giraron en torno a los impactos ambientales, el apoyo institucional y el asunto de la tierra. En la TABLA 12 podemos observar que la petición más común ha sido detener la actividad que causa destrucción ambiental, o evitar que se expanda, lo que generalmente está vinculado a evitar la afectación de sus medios de vida y siembra. Esto lo vimos, por ejemplo, en las mencionadas luchas campesinas de El Jarillo; con los productores agrícolas de la zona de Palmarote (sur del estado Carabobo – Caso 33) que señalaron cómo la minería ilegal de oro estaba poniendo en peligro la principal fuente de agua de la zona; con los movimientos de campesinos y comuneros que solicitaron la prohibición de la minería de arenas en el Valle del Turbio, con el fin de trabajar en la recuperación de esta ABRAE; o con la reacción que tuvieron las comunidades rurales del municipio Rivas Dávila (Mérida – Caso 21) entre 2018-2019 ante las sospechas de reactivación de las históricas pretensiones de impulsar la minería en el Valle de Mocotíes, que hicieron que se organizaran variadas asambleas y se estableciera la exigencia de paralizar la construcción de una carretera y aclarar si existía un proyecto minero para la zona.

TABLA 13. Principales demandas y reivindicaciones de Actores Rurales en los casos en los que participan. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos

Tipo de población: Rural	
DEMANDA	**No. de Casos en los que aparece**
Detener actividad destructiva/No expansión de nuevas actividades	9
Protección / Saneamiento/ Restauración ambiental	8
Protección ante los ilícitos/ Expulsión de ocupantes irregulares y grupos armados	6
Apoyo institucional	4
Verificación, entrega, regularización, restitución de tierras	4
Castigo a quienes destruyen el ambiente	3
Respeto/defensa por su producción y las tierras de uso agrícola	3
Infraestructura, servicios, vialidad	3
Indemnización a agricultores por daños	3
Acceso a la información del proyecto	2
Mejorar gestión de las empresas e instituciones	2
Respeto/reconocimiento de Área Protegida	1
Educación Ambiental	1
Apoyo para alternativas económicas al extractivismo	1
Estudios de Impacto Ambiental	1
Cese de la agresión militar/policial	1

En línea con esto, se solicitó también la protección, saneamiento y/o restauración ambiental ante los daños provocados (reforestaciones, recuperación de cauces de agua, saneamiento de costas y aguas marítimas para recuperar la pesca, entre otras); los pedidos de castigo a quienes degradan los ecosistemas, y la solicitud de indemnizaciones a agricultores por dichos daños.

En cuanto a las solicitudes de apoyo y asistencia institucional, estas pueden ser variantes – no necesariamente enfocadas a peticiones ambientales. Por un lado, se pidieron medidas de protección para los campesinos que estuvieron en la lucha por el predio Los Tramojos (cese del acoso a estos) y el desalojo del terrateniente que se instaló en el mismo; mientras que los profesionales de la conservación de la Estación Experimental Caparo, junto con comuneros y campesinos, también exigían a la Guardia Nacional que ejecutara la desocupación de los invasores irregulares de la misma (Caso 25). Los campesinos de Los Tramojos denunciaron que la intimidación venía de grupos armados particulares (en cooperación con funcionarios del Estado), lo que se puede asemejar a las demandas de

protección que presentaron los indígenas, aunque estos últimos enfrentaron organizaciones más estructuradas, que controlaban territorio y se dedicaban directamente a la extracción de recursos.

Por otro lado, en algunos casos se demandó apoyo institucional para contribuir con la restauración ambiental de zonas afectadas, aunque también algunos productores agrícolas solicitaron apoyo económico para su actividad, como ocurrió con los palmicultores en el conflicto en torno a la palma aceitera en el sur del lago de Maracaibo, quienes pidieron sinceración de los precios del fruto para que fuese sostenible la producción; o los agricultores de Quíbor (Caso 16) que le pedían al Estado suministros de insumos biológicos.

En relación al asunto de la propiedad o la tenencia regular de la tierra, en algunos casos donde no estaba definido a favor de los campesinos, esta reivindicación apareció de manera central en los conflictos. Movimientos de este tipo en Ospino (Portuguesa – Caso 27) demandaron más tierra, así como el reconocimiento, regularización y titulación de las mismas, mientras quedaban relegadas las reivindicaciones ambientales. Los campesinos desplazados bajo amenazas para la imposición del proyecto minero de cal en Cerro La Vieja exigieron la restitución de las tierras, así como aclarar la situación de otros títulos que había sobre las mismas. En el caso del auge de la malanga en la Sierra de Perijá (Caso 3), los campesinos se oponían al desplazamiento o erradicación del cultivo, y reivindicaban su derecho a cultivar, pese a los impactos ambientales que estuvieron en el centro del conflicto.

IMAGEN 26. Comunas y campesinos de la comunidad de Caparo (Barinas) viajaron a Caracas para introducir un documento en la Fiscalía (Ministerio Público) solicitando protección del bosque invadido en la Reserva Forestal. Junio 2018. Fuente: cedida por Diana Duque (Proyecto Mono Araña desarrollado en Caparo) al Observatorio de Ecología Política de Venezuela.



En el caso de los actores urbanos, como se puede observar en la TABLA 13, sus demandas tienden a orientarse hacia un mejor abordaje de los protocolos y gestiones institucionales respecto al funcionamiento de empresas privadas o estatales, así como de organismos del Estado encargados de ámbitos de la vida social. Varias de las comunidades afectadas por la industria petrolera y trabajadores de la misma han insistido en que se recuperen las inversiones y la gestión mínima en PDVSA para evitar derrames, fallas y explosiones; y se observan demandas similares sobre la gestión de la cementera de Guanta. Los conflictos por agua nos remiten a peticiones sobre la regularización de las instalaciones para su procesamiento –como en los casos de Barinas/Barinitas (No. 24) y del trasvase de aguas del Lago de Valencia (No. 32)− o de embalses como los de Macagua (No. 57) y Los Quediches (No. 13); y en los conflictos en torno a vertederos se repite con frecuencia la petición de mejorar los planes de recolección de desechos y saneamiento. Del mismo modo, en cuanto a las áreas protegidas, en casos como el de los parques nacionales Waraira Repano (No. 36) y Laguna de Tacarigua (No. 39) se han solicitado urgentes mejoras para el personal de Inparques –en muy precaria situación− y la infraestructura de estas áreas protegidas.

TABLA 14. Principales demandas y reivindicaciones de Actores Urbanos en los casos en los que participan. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos

Tipo de población: Urbana	
DEMANDA	**No. de Casos en los que aparece**
Mejorar gestión de las empresas e instituciones	21
Detener actividad destructiva/ No expansión de nuevas actividades	20
Protección / Saneamiento/ Restauración ambiental	16
Consulta a comunidades / consulta previa a los pueblos indígenas	6
Estudios de Impacto Ambiental	4
Atención en salud	4
Indemnización y aplicación de Justicia	3
Respeto por reglamentos y leyes de protección ambiental	3
Educación Ambiental	3
Cese de la violencia militar/policial	2
Castigo a quienes destruyen el ambiente	2
Infraestructura, servicios, vialidad, combustible	2
Permitir trabajo de los mineros/recolectores	1
Legalizar minería con estrictos controles ambientales	1
Protección a comunidades ante los grupos armados	1
Mejorar las condiciones de trabajo	1

Apoyo para alternativas económicas al extractivismo	1

Al igual que los actores rurales, las peticiones de Protección / Saneamiento/ Restauración ambiental, así como las de Detener actividad destructiva/ No expansión de nuevas actividades, tiene un lugar muy importante entre las principales demandas. La población de Altagracia de Orituco y otras localidades del municipio José Tadeo Monagas (Guárico – Caso 31) convocaron a reuniones públicas y asambleas de ciudadanos, realizaron campañas e interpelaron a funcionarios públicos para rechazar la minería en el Monumento Natural Morros de Macaira, pidiendo detener toda actividad en esta área protegida. Desde antes y durante la crisis, población organizada de Amuay, en la península de Paraguaná, se ha opuesto al proyecto de expansión del enorme Complejo Refinador que existe allí, indicando los grandes impactos que esto generaría (Caso 6). Adicional a estos ejemplos, ha existido un activismo urbano que se ha involucrado en campañas, denuncias y movilizaciones en torno a conflictos que ocurren en otros territorios, como es el caso de la gran diversidad de organizaciones y personalidades que se han manifestado en contra del proyecto del AMO, solicitando su derogación y la protección tanto de los ecosistemas amazónicos como de los pueblos indígenas que allí habitan. Esto también ayuda a explicar que la cuarta demanda más común de este tipo de grupos movilizados sean las consultas previas a pueblos indígenas y otro tipo de localidades.

Finalmente, el contraste de las demandas de los actores urbanos con los semi-urbanos es que estos últimos, al ser pobladores de contextos un poco más deprimidos y dominados por industrias extractivas y zonas de sacrificio, ponen el foco en factores más de remediación y de servicios, y no tanto de oposición a los emprendimientos. De ahí que sus solicitudes tienden hacia las infraestructuras, vialidad y aseo, entre otros; o el saneamiento de vertederos y la ubicación adecuada de otros nuevos que se fueron proponiendo (ver TABLA 14). También se pueden constatar reivindicaciones del trabajo de los mineros y recolectores, como en Lobatera (Táchira – Caso 20), donde estos reclaman libertad para comercializar y exportar el producto, o en Cambalache (Ciudad Guayana – Caso 55) donde quienes laboran en el vertedero piden oportunidades de trabajo o de regularización de su actividad allí. Adicionalmente, se menciona la petición de justicia por parte de familiares de mineros muertos en masacres en las minas, como se ha visto en el caso de Tumeremo (Caso 53).

TABLA 14. Principales demandas y reivindicaciones de Actores Semi-urbanos en los casos en los que participan. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos

Tipo de población: Semi-urbana	
DEMANDA	**No. de Casos en los que aparece**
Protección / Saneamiento/restauración ambiental	6
Mejorar gestión de las empresas e instituciones	4
Infraestructura, servicios, vialidad	4
Permitir el trabajo de los mineros/recolectores	3
Justicia para las víctimas de las masacres y sus familiares	2
Apoyo institucional	2
Apoyo para alternativas económicas al extractivismo	2
Protección ante los ilícitos / grupos armados	1
Cese de la violencia militar/policial	1
Detener actividad destructiva/ No expansión de nuevas actividades	1
Mejorar las condiciones de trabajo	1
Atención en salud	1
Castigo a quienes destruyen el ambiente	1

IMÁGENES 27 y 28. Foro público: Riesgos y consecuencias de la extracción minera en el Monumento Morros de Macaira. Septiembre 2019. Fuente: Orituco Propone, cuenta de instagram. https://www.instagram.com/p/B18sB3OH8_o/?img_index=10





A modo de síntesis, se puede destacar que la petición de Protección / Saneamiento/restauración ambiental es la que está presente en todos los tipos de población. En medio del colapso económico venezolano, es generalizada la necesidad de recuperar las condiciones mínimas de los ecosistemas de los que se surten los diferentes grupos sociales para vivir. Es en los indígenas donde la demanda no tiene un lugar principal debido a que estos suelen sobreponer la autogestión y autodeterminación en sus territorios, antes que solicitar la administración de las instituciones estatales en ellos.

Esta centralidad del territorio en las valoraciones indígenas ayudan a comprender la primacía de sus exigencias por la demarcación y titulación del mismo, algo que puede asemejarse levemente a las demandas campesinas por la propiedad y administración de la tierra. Sin embargo, en el caso de los actores rurales, esta petición no está en primer lugar por dos razones: una, porque las adjudicaciones de tierra para los campesinos (pequeñas unidades de producción) en el caso venezolano han tenido mayores avances que en el caso de los indígenas; y dos, porque la valoración de la tierra tiene más el sentido de recurso para aquellos, en comparación con los indígenas donde prácticamente este es un factor material que le da sentido a la comunidad.

Las peticiones de detener o evitar la expansión de las actividades que generan los impactos y los conflictos están presentes en casi todos los tipos de población, a excepción de los semi-urbanos, y se le otorgó una importancia muy alta. Estas han solido estar vinculadas a las actividades mineras (pero no únicamente), reconocidas como una de las más perniciosas, la cual puso en riesgo la reproducción de la vida en estos sectores de la población.

Por último, las demandas para un mejor abordaje de los protocolos y gestiones institucionales se vieron básicamente en grupos urbanos y semi-urbanos, debido a que son las zonas donde las Estatalidades tuvieron mayores niveles de Alcance Territorial, Eficiencia Institucional y Provisión, y por tanto, tenía mayor cabida los intentos de interlocución o el seguimiento de protocolos de actuación para con el Estado.

II.III Fortalezas y debilidades de las estructuras organizativas y movilizaciones

La data examinada respecto a los perfiles de los actores, sus territorialidades y las principales demandas planteadas, debe también ser comprendida en relación con las fortalezas/debilidades políticas de sus acciones, de estructuras organizativas y movilizaciones, así como sus capacidades de incidencia tanto en el régimen político como en la situación en general. Para ello planteo mirar con más detalle tres aspectos: por un lado, la Masividad y la Escala de las Luchas, y por el otro, la evolución de la Intensidad de

los conflictos a lo largo de La Gran Crisis (esta última se desarrollará en la siguiente sección).

Respecto a la 'Masividad', esta categoría va a definir de manera general qué tan numeroso logró ser el o los grupos sociales que impulsaron y promovieron la movilización en La Gran Crisis. Esta se clasifica en tres tipos:

A. Atomización/Liderazgo Particular: se refiere a una lucha desarrollada por unas pocas personas, que pueden también ser uno o dos líderes locales, o bien por una confluencia circunstancial de individuos.
B. Comunidad: cuando la lucha está encabezada y tiene participación generalizada de una o más comunidades locales. Posee mayores niveles de integración y organización que Atomización/Liderazgo Particular.
C. Masivo: remite a una lucha que logra aglomerar un conjunto numeroso de personas en torno a ella, más allá de los grupos directamente afectados. Este aglomeramiento no necesariamente indica que los actores sociales estén articulados entre ellos, pudiendo producirse por solidaridades o simpatías con la movilización.

En los 75 conflictos examinados, se puede constatar que 48 de estos son impulsados primordialmente por 'Comunidad' (64%), y 19 de ellos por 'Atomización/Liderazgo Particular' (25,33%), mientras que solo 8 logran un nivel de masificación.
Para examinar con mayor detalle estas tendencias, se explora su relación con la 'Escala de las Luchas', que define las escalas del impacto que pueden generar las movilizaciones (locales, regionales, nacionales) y los niveles de alianzas entre grupos involucrados en las mismas. Esta se clasifica en 5 tipos:

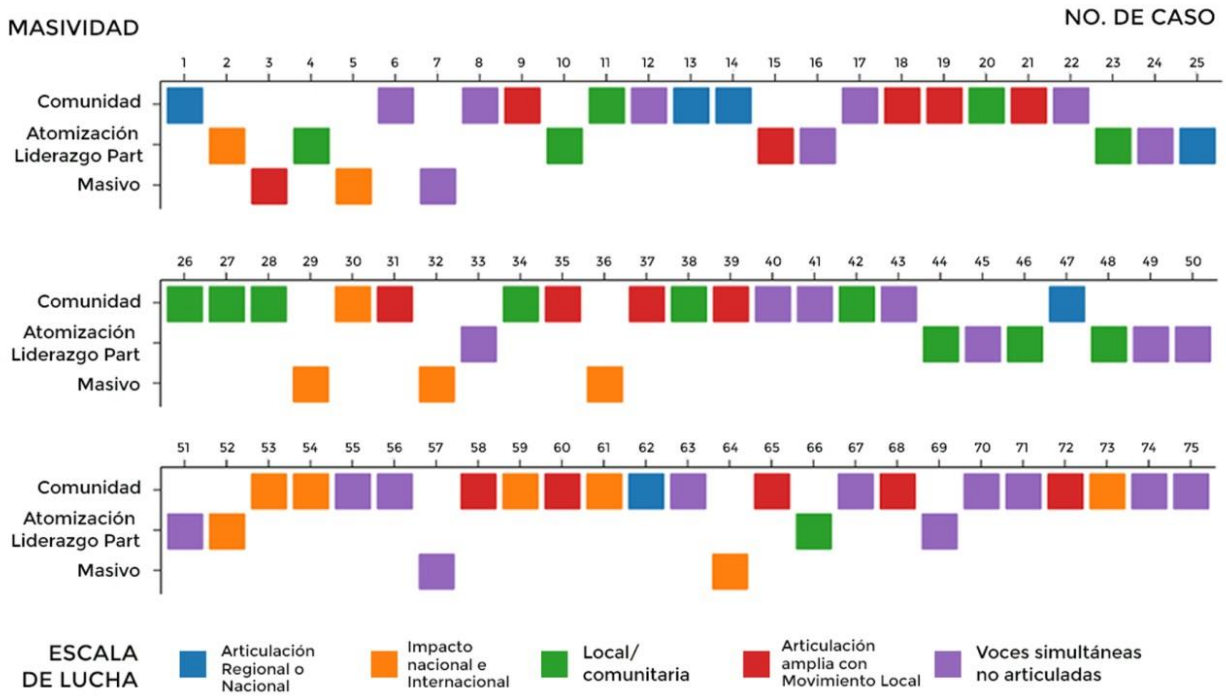
A. Local/comunitaria: indica que la movilización no trascendió más allá de lo local.
B. Voces simultáneas no articuladas: junto a los grupos locales, intervienen otros actores sociales en el conflicto, aunque provengan de otros gremios o regiones del país, y no se produzca ninguna o escasa articulación entre ellos. Esto puede ocurrir por compartir los mismos intereses o por solidaridades a la distancia, pero hace que el conflicto trascienda lo local.
C. Articulación amplia con Movimiento local: señala la conformación de una estructura de actores más amplia, motorizada por un movimiento local más organizado, teniendo agendas e identidades más definidas, por lo que puede tener un mayor alcance.
D. Articulación regional o nacional: se refiere a alianzas de organizaciones y actores que alcanzan nivel municipal, regional o nacional, y que suelen tener peso en el desarrollo de un conflicto.

E. Impacto nacional e internacional: señala un caso que tiene resonancia en el país y puede involucrar a la opinión pública, al gobierno nacional e incluso actores internacionales.

En los 75 casos predomina la existencia de Voces simultaneas no articuladas, con el 34,67% (26 conflictos); Local/comunitaria 20% (15); Articulación amplia con Movimiento local 20% (15); y las Articulaciones Regionales y Nacionales solo se registran en 6 casos, mientras que las movilizaciones que alcanzaron Impacto Nacional e Internacional fueron 13 (17,33%). En la FIGURA 52 podemos ver cómo se expresa la relación entre Masividad y Escala de las Luchas en una matriz detallada para cada caso. Examino estas tendencias desde lo más local hasta las de mayor alcance.

Los conflictos encabezados por 'Atomización/Liderazgo Particular' pueden generalmente expresar fragmentación de las comunidades y las luchas, pero no necesariamente implican la intrascendencia de estas últimas. Casos como los de la comunidad de El Tablazo ante los impactos de la industria petroquímica (No. 4) o el de las comunidades de la Península de Araya (No. 46) vieron muy afectadas y fracturadas sus tradicionales luchas debido a la crisis. O bien, las condiciones de depresión social llevaron a que en lugares como la Laguna de Sinamaica (No. 10) o en la localidad minera de Los Pijiguaos (No. 66) muy pocos tuvieran la disposición de movilizarse. Sin embargo, en algunos conflictos, esa atomización comunitaria no impidió que hubiese movilización, como se vio en las protestas vecinales en Barinitas por los problemas de acceso al agua que generó la contaminación del río Santo Domingo, siendo que estas se daban más como una confluencia coyuntural y reactiva de actores descontentos, antes que el producto de una organización colectiva (Caso 24). De hecho, cuando la situación de escasez del líquido se hace tan generalizada, como en el caso de Ciudad Guayana (Bolívar - No. 57), aunque la escala sea de 'Voces simultáneas no articuladas', estas puede alcanzar un rango 'Masivo' en su volumen de lucha; algo que también se vio con la crisis del aseo y la contaminación del aire en toda la ciudad de Maracaibo (Caso 7).

FIGURA 52. Niveles de Masividad y Escala de las Luchas en los 75 conflictos de distribución ecológica analizados. Se presenta la secuencia de los casos por número y su cruce con la variable Masividad. Se identifica al mismo tiempo en cada caso la Escala de las Luchas por color. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos



Por otro lado, las acciones de calle ante los derrames petroleros en el río Guarapiche (Monagas) se dieron también como reacciones puntuales de unos pocos vecinos y ambientalistas, pero lograron tocar en ese momento la sensibilidad ambiental de algunos sectores de la sociedad venezolana, teniendo resonancia mediática en otras partes de Venezuela, incluyendo la ciudad de Caracas (Caso 45). En casos como El Callao, con una larga tradición minera y donde predominan violentas gobernanzas híbridas, muy pocos se atreven a manifestarse, sobre todo por la severa contaminación del río Yuruari, aunque actores de otras partes del país denuncian la situación de contaminación y violación de derechos humanos que allí ocurre (Caso 51).

En el caso del tráfico del Cardenalito, aunque no hay una estructura comunitaria en la base de la defensa de esta emblemática especie, la causa de su conservación ha promovido la formación de una especie de movimiento nutrido por actores de diverso tipo como conservacionistas, ONGs y grupos de científicos, además de periodistas (Caso 15). Es crucial destacar también que algunos Liderazgos Particulares pueden incluso contribuir a la emergencia de una lucha que trasciende lo local y genera gran resonancia e impacto, como ocurrió en la defensa de la Reserva Forestal de Caparo y el rol de la bióloga Diana Liz Duque, directora del Proyecto Mono Araña que se desarrolla en la zona, y que ha sido muy persistente en el posicionamiento mediático nacional e internacional de esta causa,

facilitando una articulación amplia en torno a ella (Caso 25). O bien, con la figura del cacique yukpa Sabino Romero en su lucha por sus tierras y contra el carbón en la Sierra de Perijá, que incluso llegó a alcanzar un Impacto Nacional durante el gobierno de Chávez y convertirse en ícono indígena latinoamericano, aunque luego de su asesinato ese impacto disminuyera (Caso 2).



IMAGEN 29. Reportaje sobre la bióloga Diana Liz Duque en el diario español El País, 07 junio 2024. Fuente: https://elpais.com/america-futura/2024-06-08/la-cruzada-de-una-biologa-para-salvar-el-refugio-del-mono-arana-en-venezuela.html

Las luchas encabezadas por 'Comunidad', aunque generalmente de bases más fuertes que las de 'Atomización/Liderazgo Particular, tuvieron en realidad manifestaciones muy variadas. En 8 casos (una sexta parte de los de este tipo) las movilizaciones no trascienden la escala 'Local/comunitaria', sea porque estas son más discretas, porque se mueven por demandas más bien paliativas o bien porque la falta de fuerza no les permite tener mayor impacto. En el caso de las comunidades de Tiara y Altagracia de la Montaña contra los efectos de la minería de Níquel (Aragua – Caso 34), lo que había sido años atrás una lucha más fuerte, en el desarrollo de La Gran Crisis evidenció un proceso de debilitamiento comunitario. El declive económico sufrido por la población y una cierta normalización de la situación creada desde que la empresa minera Lomas de Níquel fuese nacionalizada, provocó que las exigencias ambientales fueran quedando desplazadas y las demandas estuvieran más orientadas a pedir la incorporación de la población a la compañía, así como peticiones a la misma de infraestructura, asistencia, servicios, entre otros.

En el caso del conflicto en torno al vertedero a cielo abierto de Pedregalito en Cabimas (Zulia – No. 11), aunque hay una comunidad dentro de este que vive de la venta de materiales reciclados, y que el conflicto contra vecinos por la incineración de basura llego a

la violencia, desde 2013 las movilizaciones comenzaron a mermar, dejando el caso con un foco más bien local.

En cambio, conflictos como el del Jarillo, aunque tuvo sólo carácter local, evidenció una buena base organizativa comunitaria, algo semejante a las movilizaciones de organizaciones locales en Portuguesa para defender la Zona Protectora Mitar.

La mayoría de los casos 'Comunidad' tienen como Escala de las Luchas la participación de 'Voces Simultáneas no articuladas', que pueden también tener expresiones variadas, e incluso contrapuesta entre sí. Por ejemplo, en el conflicto por los impactos del Complejo Refinador de Paraguaná, por un lado se movilizaron habitantes de las ciudades petroleras de Amuay y Punta Cardón por la contaminación generada por la industria, y mientras esta fue perdiendo fuerza, se intensificó por otro lado las protestas de pescadores por la afectación de su fuente de trabajo por los derrames petroleros (Caso 6). En las resistencias yanomami (Casos 74 y 75), a parte de sus propias acciones territoriales y mecanismos de organización local y regional, otros actores tales como defensores de los derechos indígenas, de derechos humanos, ambientalistas o representantes políticos –todos los cuales no habitan esos territorios−, se han manifestado críticamente sobre la situación de estas comunidades haciendo peso político en sus demandas, aunque esto no suponga una articulación directa entre estos grupos y los indígenas.

En el caso de La minería no metálica (areneras) en el marco del conflicto en torno al Valle del Turbio (Lara – Caso 12) se tuvo, por un lado, las organizaciones campesinas y comunales de la zona oponiéndose a la actividad, muchas de ellas con afección al proceso bolivariano y de identificación 'ecosocialista'; y por otro lado, las denuncias persistentes de diputados y concejales de oposición, por los efectos perniciosos de las areneras y los irregulares manejos administrativos de las mismas. Pese a las coincidencias en sus críticas, no eran actores articulados. De hecho, otros grupos también tenían intereses y posiciones diferentes en el conflicto, e incidencia en este: desde los mineros artesanales, que operaban de manera ilegal e independiente sacando arena para comercializarla, reivindicando su derecho al trabajo y agudizando aún más las contradicciones. O los finqueros del valle, que se oponían a las políticas del gobierno bolivariano –debido a que este expropió años atrás parte de sus tierras−, e incluso a la perspectiva agroecológica enarbolada por los movimientos campesinos locales.

Otro ejemplo de los niveles de contradicción que pueden alcanzarse en estas voces simultáneas lo vemos en el conflicto por proyectos de desarrollo turístico en el Parque Nacional Morrocoy (Falcón - Caso 17). En lo específico, con el Proyecto Turístico Urbanismo Lake Blue, que implicó la construcción de un canal de navegación que afectó al Refugio de Fauna Silvestre Cuare, numerosas organizaciones ambientalistas como Caribe Sur, Fundación para la Defensa de la Naturaleza (Fudena), Azul Ambientalista, Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental, entre otras, se pronunciaron en contra de este e

hicieron presión para que se cerrara dicho canal. No obstante, vecinos del área, específicamente de Tibana, Granjas de Tibana, Sanare, Boca de Tocuyo y El Marite, junto a representantes de siete consejos comunales del municipio Monseñor Iturriza, se opusieron a este cierre, alegando que el mismo le había 'devuelto la vida' al refugio y les permitía sostener a sus familias con la pesca realizada allí.

IMÁGENES 30 y 31. A la izquierda, integrantes de la organización Azul Ambientalistas denunciando in situ un 'ecocidio' en el Refugio de Fauna de Cuare. Marzo 2020. Fuente: https://blogazulambientalistas.wordpress.com/2020/03/16/el-ecocidio-en-cuare-es-un-hecho/. A la derecha, vecinos de Tibana, Granjas de Tibana, Sanare, Boca de Tocuyo y El Marite, exigen paralización inmediata del cierre del canal. Mayo 2022. Fuente: https://valenciainforma.over-blog.com/2022/05/en-el-refugio-de-cuare-en-falcon-denuncian-ecocidio-por-parte-del-ministerio-de-ecosocialismo-fotos.html





Como vimos más arriba, una quinta parte de los casos logra alcanzar una Articulación amplia con Movimiento local, evidente en la confluencia de actores que han defendido la laguna de Urao en Mérida, que lograron la consolidación de la movilización, con un rol muy importante de la Fundación Ecologista Salvemos Nuestra Laguna De Urao (Fundalaguna). Esta última ha contribuido a la articulación de grupos, el trabajo permanente con comunidades para promover el cuidado de este monumento natural y las labores de cabildeo con instituciones estatales. Similar cuestión se ve en la iniciativa en defensa de la laguna La Reina en Barlovento (Miranda – Caso 39), donde el trabajo sostenido de la Fundación Ecobrión ha logrado estructurar una lucha sistemática que ha venido contribuyendo a la protección del ecosistema. Esto ha sido así al oponerse a la construcción de nuevas infraestructuras en el humedal, promoviendo la creación de una figura de protección municipal del ecosistema, desarrollar relaciones con las instituciones regionales, además de crear fuertes vínculos con la población local e impulsar iniciativas de ecoturismo y gastronomía autóctona. A su vez, se puede mencionar el caso de los indígenas de la cuenca del Caura, específicamente de la organización Kuyujani, la cual ha sido el principal canal y vocería pública de los indígenas en todo el proceso de conflicto minero y por sus territorios.

Finalmente, se constata un grupo de casos que lograron tener un impacto mucho mayor, incluso a escala nacional, y articular más grupos de actores. Como se expuso anteriormente, las luchas en Lara por el embalse Los Quediches y contra la minería de sílice en el Cerro El Plan fueron articulando actores desde lo comunitario hasta organizaciones más grandes que están fuera de dicho estado, incluyendo actores políticos, principalmente de la Asamblea Nacional. Estos grupos incluso se integraron en redes más amplias que buscan tener impacto nacional, como el Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos (‘Articulación regional o nacional’).



IMAGEN 32. Movimiento Unidos por el Agua demandó a la estatal HidroLara por el deficiente servicio de agua en la entidad. Barquisimeto, mayo 2023. Fuente: https://provea.org/actualidad/movimiento-unidos-por-el-agua-demando-a-la-estatal-hidrolara-por-el-deficiente-servicio-de-agua-en-la-entidad/

Algo similar ocurrió con las comunidades wayuú que se han movilizado por años contra la expansión de la minería de carbón en el Socuy (Caso 1). La organización indígena local “Maikiraalasalii” y la Asociación Cultural Indígena Wayuú Yalayalama’ana se formaron desde 2005 como respuesta a la presencia de las empresas mineras en sus territorios, y progresivamente fueron desarrollando importantes articulaciones. Entre estas, con la organización ambientalista y defensora de los derechos indígenas Sociedad Homo et Natura, con un rol central en el apoyo e impulso de estas luchas; la Organización Intercultural Indígena Wainjirawa, la Asociación de Consejos Estudiantiles Indígenas de la Universidad del Zulia (ACEINLUZ), La Guarura, Provea, el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia (FREZ), el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Fe y Alegría, y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ). Han sido Homo et Natura y el FREZ quienes potenciaron junto a estas comunidades las campañas y movilizaciones contra el decreto 1.606 (2015) que formalizaba la expansión minera en sus territorios, logrando su neutralización con otro decreto. Las campañas contra el carbón tuvieron mucho impacto y repercusión en la opinión de muchos venezolanos, aunque como ya fue mencionado, fue la lucha yukpa encabezada por Sabino Romero la que alcanzó impacto nacional e internacional.

Las movilizaciones en defensa del PN Waraira Repano pudieron juntar a muchos grupos de muy diverso tipo sensibilizados con las amenazas que se cernían sobre el área protegida. Algunos ciudadanos preocupados asistieron a las actividades convocadas por los promotores de la lucha; otros participaron como parte de organizaciones, que además pudieron articularse en el "Movimiento por el Ávila", que impulsó una serie de foros y conversatorios para la defensa del PN. Otros se unieron sin desarrollar acciones conjuntas con los demás grupos, tales como actores políticos, medios de comunicación nacionales e internacionales, artistas, entre otros, pero con simultaneidad en sus críticas y protestas. El impacto del caso fue nacional debido al valor simbólico del parque, al hecho que haya ocurrido en la ciudad de Caracas, y a la politización del conflicto, dado el rol del gobierno de Maduro en varios de los negocios que allí se desarrollaron y, sobre todo, al anuncio de este en 2021 de la constitución de una 'ciudad comunal' en el área protegida, que generó una reacción de rechazo muy significativa.

En el caso de las movilizaciones en defensa del Cerro La Vieja, la amplia articulación de actores que mencionamos más arriba desplegó una campaña coordinada y sistemática para avanzar en esta causa, lo que incluyó el intento de influencia en instituciones estatales. Estos factores contribuyeron a un alto impacto de esta lucha.

Un último ejemplo clave lo tenemos en la Amazonía: varios conflictos que se desarrollaron en la biorregión lograron resonancia en todo el país. Esto por varias razones: los emblemáticos y delicados ecosistemas amazónicos, las demandas de respeto por los derechos de los pueblos indígenas y el polémico proyecto del Arco Minero del Orinoco. El hecho que este último representase el proyecto minero más grande de la historia de Venezuela, que generara tan devastadores impactos socioambientales, que se hayan desplegado numerosos grupos criminales en sus territorios, y que representara nuevos ingresos para el cuestionado gobierno de Maduro, contribuyó a que fuese la iniciativa económica que más grupos aglutinó en su contra, la más controversial y mediática, y que se convirtiese en el conflicto socioambiental de mayor trascendencia el país. Además, el conflicto en torno al AMO también hizo parte de las disputas entre gobierno y oposición, en buena medida vinculado a los cuestionamientos internacionales que se le hicieron al gobierno de Maduro por la violación masiva de derechos humanos en esa zona (Consejo de Derechos Humanos – UN, 2020).

IMÁGENES 33 y 34. Concentración realizada en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (Caracas) el 31 de mayo de 2016 para acompañar la entrega de un recurso de Nulidad contra el Decreto 2.248 que formaliza el Arco Minero del Orinoco. Fuente: Sergio Álvarez, publicadas en https://www.aporrea.org/actualidad/n291547.html . Más abajo, varias organizaciones sociales asistimos al Tribunal Supremo de Justicia solicitando respuesta después de 3 años de introducido el recurso de nulidad contra el decreto 2.248 del AMO (junio 2019). Fuente: Organizaciones presentes





De manera que la lucha de los grupos sociales amazónicos se dio en escenarios muy sensibles, por los intereses económicos, ecológicos, políticos y geopolíticos en juego en la biorregión. Por ejemplo, el conflicto en torno al PN Canaima provocado por la minería ilegal en sus ríos, produjo un gran revuelo en el país, no solo porque se trataba quizás del

área protegida más emblemática de Venezuela –y patrimonio mundial natural de la Unesco−, sino también por varias matanzas que se dieron dentro de este, vinculadas a la actividad extractiva. Una de estas fue el asalto armado por parte de agentes encubiertos del DGCIM en el sector Arenal del río Carrao (Caso 59), donde falleció un indígena y otros dos quedaron heridos, lo que incluso provocó que el gobierno nacional se pronunciara (Boon y Meléndez, 2019). Pero ha sido la llamada "masacre de Kumarakapay" la que tuvo aún mayores repercusiones, la cual se produjo en territorio pemón en febrero de 2019 (con impacto en las comunidades movilizadas del Caso 60, vinculado a la defensa del turismo en el PN), junto a otro ataque simultáneo que se dio en la localidad fronteriza de Santa Elena de Uairén. En este suceso, efectivos militares abrieron fuego contra los indígenas, asesinando en ambos poblados a 8 personas e hiriendo a 15 más (Siverio, 2021). El caso fue muy sonado debido a que ocurrió en el marco del conflicto político nacional de 2019, específicamente con los intentos de introducir ayuda humanitaria en Venezuela desde Colombia y Brasil por parte de la oposición y actores internacionales, acción que fue apoyada por los pemón y repelida violentamente por el ejército, lo que además conllevó a arrestos masivos y la fuga de cientos de indígenas de sus territorios.

Estos niveles de violencia, en este y en numerosos otros casos amazónicos más –como en El Callao (Caso 51) y Tumeremo (Caso 53), ubicados en los dos municipios más violentos del país (OVV, 2023), donde además las masacres son más numerosas e incluso se registran fosas comunes en las zonas mineras (Rangel, 2019; OVV, 2022)− han sido también un factor importante para que los conflictos tengan amplia visibilidad mediática e impacto nacional. Sin embargo, dicha visibilidad y juego de intereses al mismo tiempo fue un aliciente para que tantos grupos sociales y políticos de diversa índole, se unieran a campañas, acciones de incidencia, cobertura en medios, movilizaciones y apoyos a las comunidades indígenas, haciendo del reclamo en torno a la grave situación de violación de derechos humanos en la Amazonía, un asunto de múltiples voces en todo el país, sean articulados o no.

II.IV Incidencia y las capacidades de sostener las luchas en el colapso

Examinar los niveles de incidencia y la tenacidad de las luchas de los grupos movilizados ante el colapso, nos aproxima a cuestiones fundamentales de nuestras preguntas de investigación sobre cómo se relacionan estas diferentes disputas en torno a la naturaleza con un escenario tan complejo como el estudiado. La incidencia la vamos a entender como la capacidad de estos grupos de impactar y repercutir positivamente en los conflictos en relación a sus demandas, y poder de alguna manera (total o parcialmente) alcanzar la justicia ambiental. Por su parte, por tenacidad me refiero a la intensidad que alcanzan las luchas en estos conflictos y la persistencia que estas pueden tener en el tiempo, a pesar de las adversidades.

En el capítulo anterior, al analizar el régimen ecosistémico que evolucionó en el gobierno de Maduro, pudimos constatar (FIGURA 40) cómo prevalece una marcada situación de injusticia ambiental en Venezuela en el período analizado. En el 65,3% de los casos (49) esta no se logra alcanzar de ninguna manera (no se detuvo intencionalmente la actividad que generaba el conflicto, ni se repararon los daños socioambientales provocados, ni las demandas de los grupos movilizados fueron atendidas); y en un 30,7% (23 casos) tampoco se consigue la justicia, pero algunas demandas son atendidas y/o se detiene parcialmente la actividad generadora del conflicto. De manera que solo en 3 casos se alcanza la justicia ambiental.

La situación de ausencia casi total de justicia ambiental es reflejo no solo del colapso de las instituciones estatales, sino también de las orientaciones del régimen ecosistémico bajo un gobierno de tipo neopatrimonial, movido fundamentalmente por imperativos extractivos y de expolio, y con escaso miramiento hacia lo ambiental. También refleja los extraordinarios desafíos y dificultades que enfrentaron estas variadas luchas en torno a la naturaleza para defender sus intereses, territorios, ecosistemas y medios de vida.

En estos 49 casos mencionados se aprecian grupos sociales que, como ocurre por ejemplo en zonas de sacrificio petroleras y no petroleras (como en El Tablazo, Sinamaica o el Delta del Orinoco), solo pueden desplegar sus demandas en un marco de abandono estatal y extrema precariedad de la vida en general. La impunidad en el delito ambiental por parte del Estado, se combina con los impactos y efectos que los enormes niveles de pobreza, prevalencia de desnutrición y desintegración del salario, que he examinado en el capítulo 2, tienen evidentemente sobre estas luchas. Estas realidades no son exclusivas a estas zonas de abandono, sino que son transversales a la cotidianidad de la gran mayoría de la población, lo que se expresa en grandes obstáculos para la movilización.

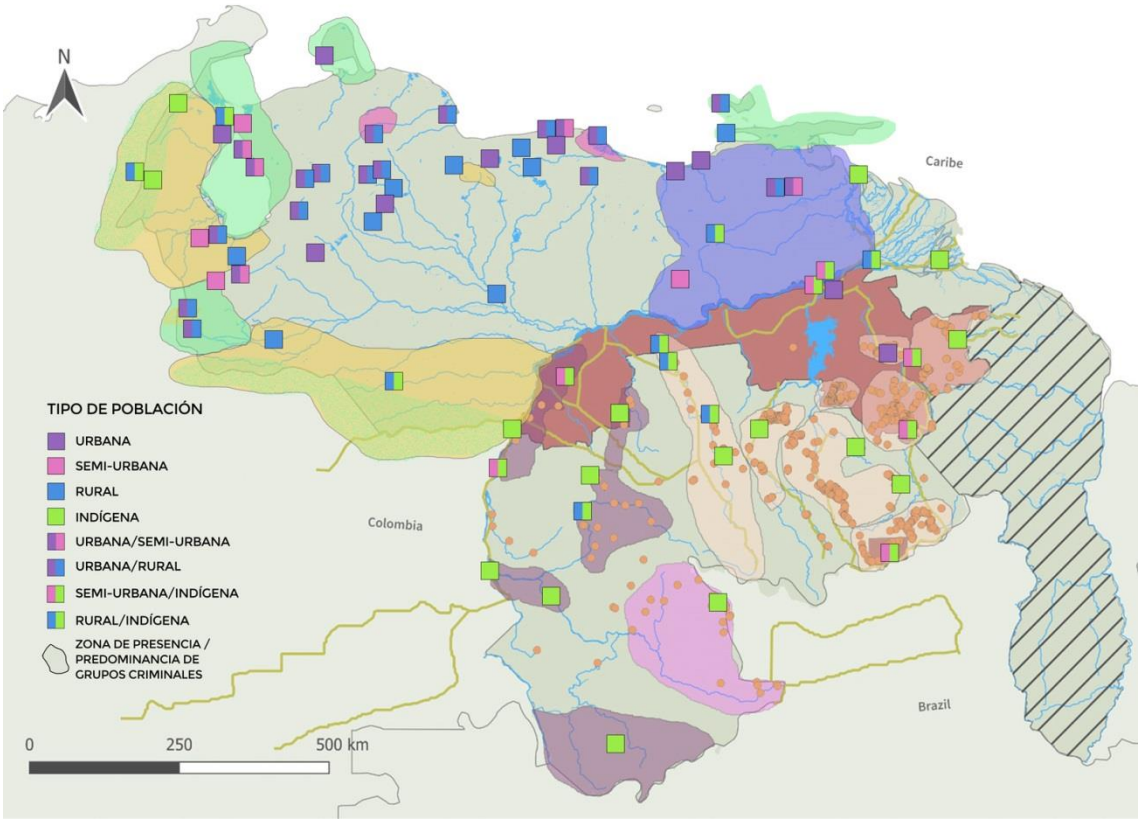
A su vez, el colapso y la indolencia institucional supusieron, por ejemplo en el caso de la contaminación del aire en Maracaibo –ciudad que ha tenido los peores indicadores de todo el país−, protestas ciudadanas en terribles condiciones generalizadas de insalubridad y una ausencia casi total de provisión estatal de servicios.

En casos con movilizaciones más robustas, la impunidad y el imperativo extractivista pasaron por encima de variadas expresiones sociales de este tipo: la actividad de las areneras en el valle del Turbio continuó y la minería de sílice en el Cerro El Plan se iniciaba pese a las movilizaciones; algo similar a lo ocurrido en el conflicto por la minería en los morros de Macaira, aunque las autoridades señalaron que habían iniciado la explotación fuera de los linderos del monumento natural. Del mismo modo, en el PN Waraira Repano se continuaron desarrollando buena parte de las actividades prohibidas y conflictivas que impactan el área protegida.

La conformación de un ‘estado de guerra’ que he examinado en el capítulo anterior, tuvo impactos concretos en las movilizaciones, en términos de una intensa disuasión, control y represión directa que se aplicó sobre las propias luchas, como ocurrió en el caso contra el sílice, donde las comunidades y organizaciones fueron intimidados por guardias nacionales y encapuchados (Hernández, 2017; Provea, 2022); o de los trabajadores de la cementera nacional Vencemos en Guanta, que en sus luchas contra la contaminación generada por las emanaciones de polvillo y gases contaminantes de la planta, fueron objeto de amenazas y detenciones por parte de los cuerpos de seguridad por protestar (Rivero, 2019). Como fue mencionado en el apartado anterior, estas estrategias represivas se tornaron mucho más cruentas en zonas de extracción de recursos estratégicos como la Amazonía, con masacres, desapariciones y desplazamientos de comunidades indígenas. Escenarios violentos como estos fueron factor transversal en la evolución de los conflictos ecológico-distributivos, y lograron instalar un miedo generalizado en la población.

Además, los grupos sociales tuvieron también que lidiar con el extraordinario despliegue de los grupos criminales en todo el país. En la FIGURA 53 vemos como se solapan las zonas de presencia/predominancia de estas organizaciones delictivas que vimos en el capítulo anterior, con la ubicación de los actores sociales que intervienen en los conflictos. La imagen da cuenta de cómo buena parte de estas dinámicas de movilización y resistencia se desarrollan en los espacios de economías criminales, con los impactos en la distribución ecológica y la extracción de recursos, y en la imposición de regímenes de extrema violencia y formas de sobreexplotación del trabajo que ya evaluamos con anterioridad. Si miramos los 49 casos donde no se alcanza de ninguna manera la justicia ambiental, podemos constatar que poco más de la mitad de estos están en la Amazonía (25 conflictos), lo que es casi la totalidad de los 28 casos que he registrado para esta biorregión. De estos 25, en 21 hay una presencia determinante de estructuras criminales.

FIGURA 53. Mapa en el que se solapan las áreas de presencia/predominancia de grupos criminales en el extractivismo y la ubicación de los actores sociales (por tipo) que intervienen en los 75 conflictos de distribución ecológica en estudio. El mapa toma las zonas criminales analizadas en las FIGURAS 44 y 46, junto a la locación de grupos sociales de la FIGURA 50. Fuente: elaboración propia



Hay dos factores transversales más que es conveniente resaltar. Primero, ante los aspectos descritos, las expectativas de que se produzca una respuesta positiva a los problemas y demandas sociales planteados al Estado y sus instituciones, quedan considerablemente afectadas, lo que tiene efectos posteriores. Por ejemplo, se pueden ver disminuidas esas demandas por un profundo descreimiento en las autoridades y protocolos democráticos, al tiempo que se fortalecen otras vías para el abordaje y solución de dichos problemas, tales como asumir la justicia por cuenta propia, impulsar formas más autogestionadas de reproducción de la vida, integrarse con más fuerza a economías ilegales, o abandonar el país.

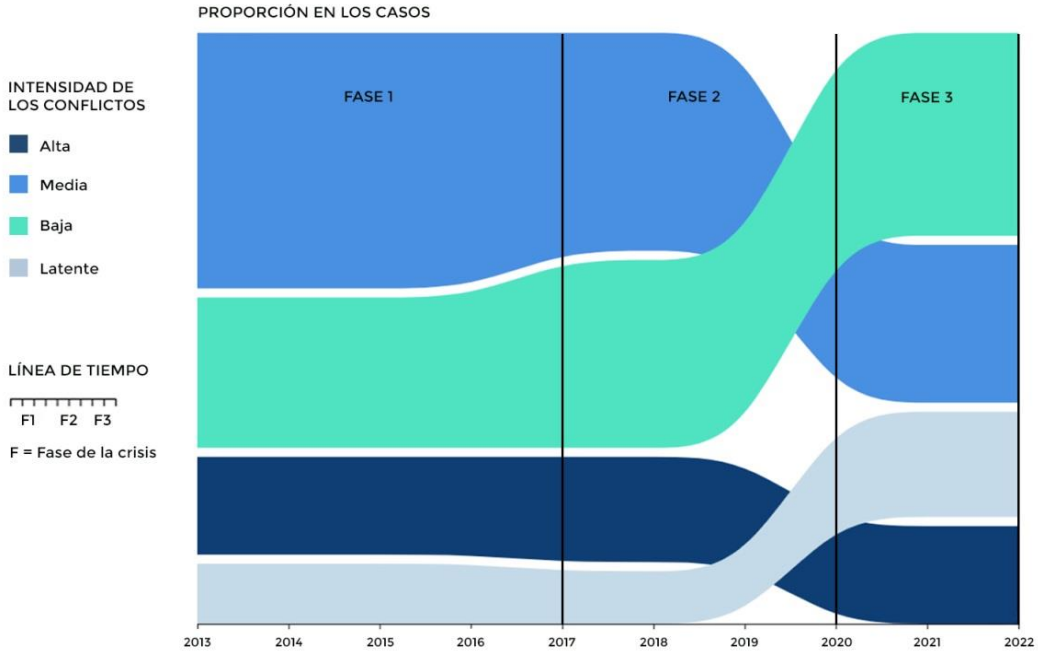
Esto último nos lleva al segundo factor a subrayar: ante el colapso una proporción importante de la población ha decido que la mejor opción es salir del país. Esto también refleja cambios en las perspectivas políticas de ese sector de la sociedad: la movilización deja de ser una opción para buena parte de ellos, quienes abandonan sus expectativas políticas y de cambio en Venezuela, y priorizan en sus acciones los preparativos para migrar. Incluso, estas perspectivas pueden probablemente compartirse también en la

población que permanece en Venezuela y está preparándose para irse. Estos factores sobre las expectativas subjetivas son también de crucial importancia para una más amplia interpretación de la evolución que ha tenido la tenacidad de las luchas.

Vistos estos aspectos ineludibles del marco venezolano, podemos ahora examinar cómo reaccionaron estas luchas ante todos estos factores de contexto expuestos; y con qué tenacidad lo hicieron, a lo largo de los años en La Gran Crisis. Para tratar de acercarnos a una aproximación general de este proceso, voy a analizar la intensidad que tuvieron los 75 conflictos ecológico-distributivos de manera diferenciada. Esto es, evaluar si sostuvieron la fuerza de sus movilizaciones con el avance del colapso, si en cambio se fueron deprimiendo, o bien si se intensificaron.

Para esto, examino los niveles de intensidad en cuatro categorías: Alta (con movilizaciones fuertes, que pueden ser masivas o con número importante de participantes, tener confrontaciones y violencia, y donde hay persistencia de las luchas); Media (con movilizaciones y campañas impulsadas por comunidades locales o grupos que no necesariamente alcanzan masividad, con cierta constancia en ellas, y con acciones que no suelen escalar a confrontaciones y violencia); Baja (escasas movilizaciones, generalmente con poca participación, con acciones de bajo impacto y apariciones esporádicas); o bien si entraron en estado Latente (sin movilización). La observación se enfoca a entender cómo evolucionó esta intensidad de los conflictos en cada una de las tres fases de la crisis. En la FIGURA 54 se presenta una síntesis de este proceso en todos los casos juntos, lo que nos permite tener una mirada panorámica del mismo; mientras que en la FIGURA 55 podemos apreciar cómo se dio esta evolución en cada uno de los 75 casos por separado.

FIGURA 54. Evolución de la intensidad del conjunto de los 75 conflictos de distribución ecológica, en las tres fases de La Gran Crisis (Fase de Depresión (I) (2013-2016); Fase De Mutación (II) (2017-2019); y Fase De Consolidación Predatoria (III) (2020-2022). En colores se distingue cada nivel de intensidad (Alta, Media, Baja y Latente). Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos.

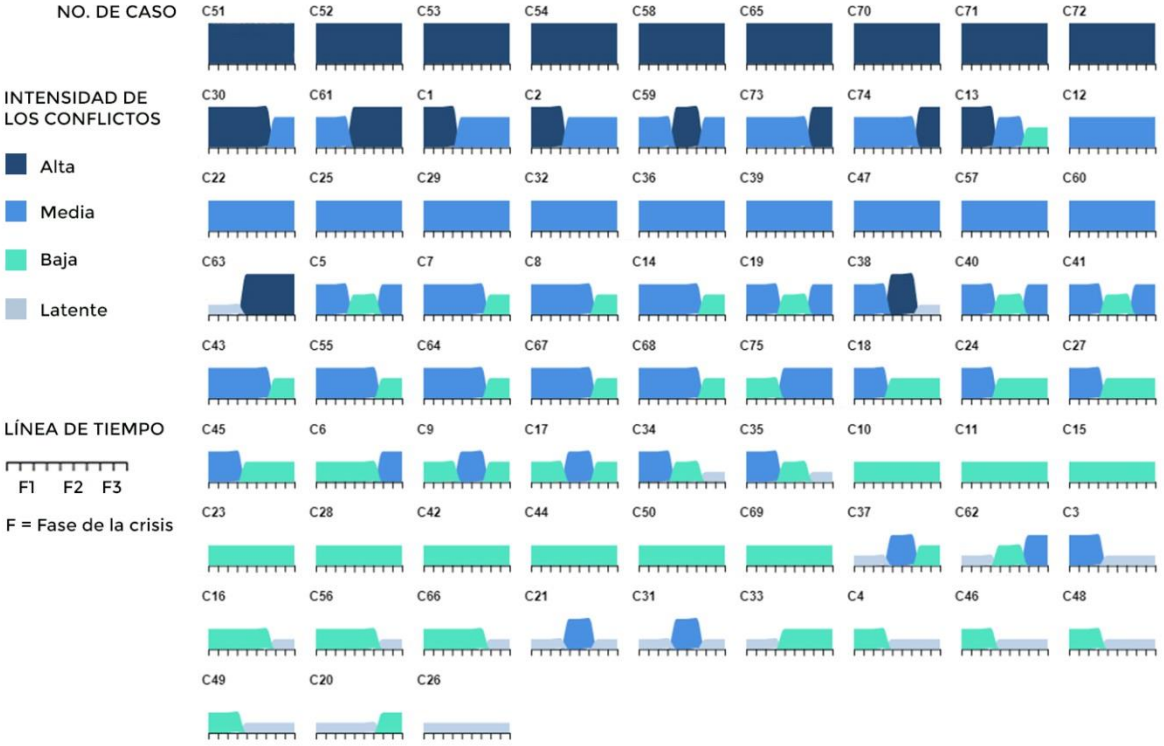


La primera aproximación general que tenemos es que la intensidad más común para las dos primeras fases de la crisis, fue Media; y en segundo lugar estuvo la Baja. Sin embargo, la tendencia Baja se fue haciendo más frecuente en la Fase II, en detrimento de la Media. Lo más resaltante de este análisis es que se evidencia un impacto general en las movilizaciones analizadas para la Fase III de la crisis, con una tendencia marcada y predominante hacia la Baja, e incluso en menor medida hacia la Latencia. Esta última creció en la mencionada fase para aparecer en 14 casos (18,67%), lo que sumado a los casos de Baja intensidad (27), da un 54,67% del total. Esta clara evidencia de la contracción de la movilización tiene cierta coincidencia con el análisis de la evolución de la conflictividad general en Venezuela en el período 2013-2022, que he presentado en el capítulo 2 con datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ver FIGURA 25). En este se mostró cómo la cantidad de protestas en el país comenzó a descender desde 2020, aunque las cifras de 2020-2021-2022 eran superiores a algunos años de la Fase I.

Es crucial subrayar que en la Fase III, la deriva dictatorial del gobierno de Maduro y el 'estado de guerra' alcanzaron un notable nivel de consolidación e intensificación, que debe ser vinculado a la retracción de la movilización. Esto se une a otros factores como los efectos tardíos de la migración (despoblamiento de localidades, fuga de sectores jóvenes de la sociedad, entre otros), los impactos de las medidas de confinamiento por la cuarentena de COVID19, la situación de desgaste general de la protesta luego de las derrotas del ciclo de movilizaciones políticas nacionales de 2014, 2017 y 2019; y una pequeña mejora de la capacidad estatal para distribuir ingresos económicos en la población y ofrecer provisión y servicios en las principales ciudades del país, posible gracias al leve alza del crecimiento de la economía en 2021-2022, que vimos en el capítulo 2.

Pero es necesario mirar con más detalle estas tendencias, evaluándolas en la especificidad de los casos (FIGURA 55). A grandes rasgos se pueden destacar tres grupos de luchas: unas que decayeron o se mantuvieron permanentemente bajas, unas que fueron constantes en sus movilizaciones con intensidad media o alta, y otras que incluso crecieron en intensidad.

FIGURA 55. Evolución de la intensidad de los conflictos por casos (serie del 1 al 75), diferenciado por Fase de La Gran Crisis. La secuencia se expone desde las más altas intensidades hasta las más bajas, de arriba hacia abajo. En colores se distingue cada nivel de intensidad (Alta, Media, Baja y Latente). Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos.



La tendencia al decaimiento de las movilizaciones hacia la Fase III, se evidenció en 41 conflictos (54,67%), principalmente debido a cinco factores: la represión estatal, paralización de la actividad económica, incremento de la presencia y violencia de grupos criminales, ofrecimientos económicos a los grupos movilizados por parte de las empresas involucradas, y el descreimiento de estos a que el Estado responda a sus demandas.

Hay algunas diferencias y particularidades entre casos que deben ser mencionadas. En varios conflictos las protestas pasaron de Media a Baja intensidad hacia la última fase, como ocurrió con las protestas por el agua en Barinitas (Caso 24); y con el caso de la cementera en Guanta (Caso 43), producto no solo de la represión a los trabajadores, sino también a la paralización de la industria y el descreimiento a que se solventen los problemas de contaminación. Algo similar ocurrió con el conflicto en torno a la palma aceitera (Caso 8) donde la industria nacional decayó y contribuyó a la reducción de protestas de trabajadores, las demandas ambientales tuvieron constantemente una posición marginal, y las comunidades de localidades como Santa Bárbara del Zulia, donde han crecido los cultivos, se encuentran azotadas por el control territorial que ejercen grupos armados irregulares.

En la Amazonía, las comunidades wottüja (Caso 68), que vivieron violencias extremas y el asesinato en Puerto Ayacucho del líder fundador de la organización indígena OIPUS (13 de mayo de 2017), Freddy Menare, también ven decaer sus luchas hacia la Baja intensidad en la última fase. A este caso se le debe añadir la criminalización de la protesta indígena contra el extractivismo y algunos ofrecimientos de empresas mineras de coltán ofrecidos a estos grupos originarios (viviendas, electricidad, carros, trabajo).

Incluso, movilizaciones más robustas como las de Los Quediches (Caso 13), contra el sílice (Caso 14) y en La Azulita (Caso 18), experimentaron igual tendencia, peso a que la de Los Quediches había tenido Alta intensidad en la Fase I.

Algunos conflictos llegaron incluso a pasar a estado de Latencia, como el de El Tablazo (Caso 4) y en territorios warao (Casos 48 y 49), entre otros. La nutrida movilización (Media) por parte de habitantes de Naiguatá y Camurí Chico (La Guaira – C35) contra la extracción de piedras y arena, que había causado el represamiento y paulatino desecamiento del río Naiguatá, pasó a Baja intensidad en la Fase II, quedando acotada a denuncias de vecinos y expertos, y a Latente en la Fase III, sin movilizaciones comunitarias, tanto por el declive de la minería como por la integración de integrantes de la comunidad a las actividades de la empresa mixta Conluvar, propiedad de la Gobernación de ese estado.

Un total de 14 casos se mantuvieron en nivel bajo durante toda la crisis, 9 de ellos de manera constante, y los otros 5 cinco con variaciones temporales, aunque terminaron en baja. Esto ha sido así, mayormente por la falta de fortaleza de sus estructuras organizativas y comunitarias, o bien por impulsar movilizaciones más bien discretas. Ejemplos de ello lo vemos en el caso de varias comunidades del municipio Maturín que habitan en torno a la zona petrolera de Jusepín (Monagas – Caso 44), afectadas por los ‘mechurrios’ (gas flares), quienes realizan protestas más reactivas y esporádicas; de habitantes de la ciudad andina de Motatán y de caseríos aledaños, afectados por la contaminación del aire provocada por el Central Azucarero Fabricio Ojeda (estatal) (Trujillo – Caso 23), quienes junto con la prensa y actores políticos, realizan eventualmente denuncias, determinadas por los ciclos anuales asociados con la temporada de zafra y molienda de caña, aunque muchos de estos pobladores tienen una cierta relación de dependencia con la economía que genera esta industria. También, organizaciones ambientalistas y de conservación como Provita llevan por años un trabajo sostenido de rescate y reproducción del Cardenalito, y de ‘cambio de comportamiento’ de los habitantes locales para evitar que participen del tráfico de esta especie, aunque estas no entran en disputa con la actividad ilícita ni con las autoridades, por lo que el conflicto se mantiene en una situación de estabilidad.

Algunos casos tuvieron períodos de movilización puntuales o fugaces, debido a que respondieron a coyunturas conflictivas particulares. Las movilizaciones por los morros de Macaira (Caso 31) fueron fundamentalmente en la Fase II y, sin negar su fortaleza particular, pasaron a Latencia en la siguiente fase. Y en las movilizaciones ambientales por

la proliferación de cultivos de malanga en la Sierra de Perijá (Caso 3), esta tuvo intensidad Media en la Fase I y con la prohibición de su comercialización en 2014 se fue apagando el conflicto hacia 2015.

Por otro lado, y en contraste con estos casos que tendieron al declive, tenemos unas vigorosas luchas sociales que evidenciaron una mayor tenacidad en el tiempo. En 10 casos, la intensidad de las movilizaciones se mantuvo siempre en nivel Medio, y en 5 casos más hubo fluctuación pero la tendencia retornó a dicho nivel (Medio-Alto-Medio o Medio-Bajo-Medio). Las movilizaciones en defensa del Cerro La vieja (Caso 29) es uno de los casos que tuvieron intensidad Media permanente, con acciones constantes cada año. De hecho 2019 es un año muy intenso para estas luchas y en la Fase III continuaron con sus iniciativas, tales como un plantón en el cerro para protestar por la prohibición del acceso al mismo, una caminata ecológica antiminera o denuncias ante las autoridades competentes. La actividad extractiva fue paralizada en dicho ecosistema en esta última fase, y los habitantes y organizaciones señalaron esto como un logro producto de sus esfuerzos, aunque la minería se trasladó a la serranía El Altar, un poco más hacia el este. En 2023 también consiguieron, como resultado del trabajo de cabildeo, una resolución unánime de las autoridades municipales para proteger esta zona, la cual estipula la paralización de toda actividad que la perjudique ambientalmente, aunque son necesarias presiones para que esto se cumpla.

Pese a que vemos que la minería ha continuado en el municipio y muchas de las demandas sociales no han sido atendidas –como por ejemplo el resarcimiento a los campesinos afectados−, el caso de Cerro La Vieja es un reflejo de la tenacidad de la movilización en contextos como este, y además hace parte de esos 23 conflictos (30,7% del total) donde no se consigue plenamente la justicia ambiental pero se obtienen algunos logros y, sobre todo, hay continuidad de las estructuras sociales de movilización.

Del mismo modo, la defensa del PN Waraira Repano (Caso 36) comenzó en la Fase I y desarrolló movilizaciones continuamente, habiéndose desarrollado en 2019 una buena cantidad de iniciativas, campañas y protestas. Ciertamente la cuarentena por la pandemia de COVID19 bajó la movilización, pero esta retomó su fuerza en 2021, sobre todo a raíz del muy repudiado anuncio del gobierno de la posible constitución de una ciudad comunal en el PN, lo que desató campañas en redes sociales, plantones y comunicados desde muy diversos actores.

Por su parte, las luchas por la laguna de Urao (Caso 19) comenzaron en 2013, fueron sumando actores a las movilizaciones e impulsando estimulantes iniciativas sociales y culturales que también se enfocaron en la incidencia institucional, todo lo cual llegó a un clímax en 2016. Mientras en los períodos más duros de la crisis, habitantes de los alrededores de este ecosistema excavaban acuíferos en busca de agua, e incrementaban la tala y la siembra afectando la cuenca, las organizaciones involucradas en la lucha

impulsaban acciones en su defensa. Pese a que las movilizaciones bajaron en intensidad en la Fase II, para el siguiente período retomaban su fuerza, con amplias articulaciones, mesas de trabajo, labores de saneamiento y reforestaciones en torno a la laguna, y presiones a las autoridades para ejecuten acciones de restauración ambiental. Para 2022 se anunciaba que este cuerpo de agua se había recuperado en un 80% debido a las precipitaciones, aunque los factores causales de su degradación no se habían abordado.



IMAGEN 35. Organizaciones como la Fundación Salvemos la laguna de Urao impulsaron un trabajo educativo y de movilización con comunidades, participando en un desfile junto a una institución educativa en la ciudad de Lagunillas, mayo 2022. Fuente: https://www.facebook.com/LagunadeUraoLagunillas/

Las protestas por la situación del agua en Ciudad Guayana (Caso 57) se han dado desde inicios del siglo XXI y vieron continuidad con alta recurrencia en La Gran Crisis, incluyendo en la propia pandemia, con cierres y manifestaciones de calle. Cuestión similar la vimos con el conflicto generado en torno al relleno sanitario de San Josecito (Táchira – Caso 22), el cual provoca ciclos anuales de protesta dados los grandes incendios desatados allí y el colapso del vertedero, con la consecuente contaminación y crisis sanitaria que ello genera. Los recicladores y recolectores impiden el acceso al relleno, los habitantes de localidades aledañas también trancan vías por la situación, los centros educativos se ven obligados a suspender clases; y actores políticos, vecinos, prensa y grupos organizados protestan para alcanzar una solución, lo que provoca que se declare la emergencia sanitaria y se tomen medidas paliativas, sin abordar las causas del problema. Y en el conflicto por los impactos socioambientales del Complejo Industrial Petrolero José Antonio Anzoátegui (Caso 40), pese a que las movilizaciones que se dieron en la Fase I, sobre todo por los impactos del polvillo que se desprendía de las acumulaciones de coque en los patios de sus instalaciones, bajaron en la Fase II, fueron los trabajadores organizados quienes intensificaron las demandas y protestas por reivindicaciones laborales, de salud y por contaminación en la Fase III.

Algunas luchas como la de los wayuú y los yukpa (Casos 1 y 2) en la Sierra de Perijá, plantaron fuertes resistencias en la Fase I de la crisis, y aunque bajaron a nivel medio en las Fases II y III, sostuvieron logros en sus reivindicaciones. Los grupos movilizados contra el carbón han tenido incidencia gracias a sus persistentes campañas y sus labores de cabildeo para la modificación del decreto 1.606; y en la Fase III, específicamente en febrero de 2020, Maikiraalasalii denunciaba la penetración y operaciones de maquinaria pesada por parte de la minera rusa VostokCoal, lo que ponía en riesgo el río Socuy, mientras que comunidades locales reaccionaban a esto movilizándose para detener el paso de dicha maquinaria. Estas acciones lograrían su cometido.

IMÁGENES 36 y 37. A la izquierda, indígenas wayuú se movilizan hasta la ciudad de Caracas, exigiendo derogatoria del decreto 1.606. Fuente: http://clorofilazul.blogspot.com.es/2015_04_01_archive.html. A la derecha, comunidades wayuú logran parar las máquinas de la empresa militar Caminpeg y la rusa VostokCoal, defendiendo los ríos Socuy, Mache y Cachiri. Febrero 2020. Fuente: Venezuela Originaria. https://twitter.com/VzlaOriginaria/status/1229146088420073478





En el conflicto por el predio Los Tramojos (Caso 30) desarrollado entre campesinos y un empresario de la agroindustria, este tuvo intensidad Alta en Fase I y II de la crisis, siendo que en 2019 las tierras habían sido tomadas por más de 40 familias campesinas, lo que desató violencia y represión contra estos. Aunque en la Fase III la intensidad bajó a Media, las organizaciones campesinas fueron desarrollando estrategias para conservar el control de esas tierras −campañas en redes sociales y la articulación con la Plataforma de Lucha Campesina, que apoyó sus acciones−, lo que finalmente desembocaría en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de formalizar la devolución de las tierras a estos grupos. Se asignaron un total de 3.080 hectáreas, aunque 680 de estas quedaron en posesión del empresario, se deforestó una parte del predio, y continuaron las agresiones contra los campesinos, siendo incluso asesinado uno de sus líderes, Carlos Bolívar, en marzo de 2023.

Es en la Amazonía donde encontramos el grueso de los conflictos de Alta intensidad, como ya se había mostrado en la FIGURA 35 (Capítulo 2), la cual ilustraba la relación entre este factor, el commodity involucrado y la Región Ecopolítica, y donde además se advertía sobre los estrechos vínculos entre violencia y oro. Los casos que se examinaron dentro del

PN Canaima (No. 59 y 60), en la primera fase mostraron movilizaciones emblemáticas contra la minería ilegal en el río Carrao de nivel de intensidad Media, como la toma del aeropuerto de esta área protegida por parte de la comunidad pemón de Kanaimö, en reclamo a la falta de respuestas a sus llamados para detener la minería ilegal. La Fase II ve la continuidad de sus acciones, como el bloqueo en 2018 de la carretera que une a la ciudad de Puerto Ordaz con la frontera con Brasil, para protestar por el alto costo de los alimentos, la falta de medicinas para enfrentar el paludismo y el acoso de las mafias locales de la minería que hostigan y desplazan a las comunidades. Sin embargo, al mismo tiempo escala la violencia y el conflicto alcanza la Alta intensidad, entre otras cosas, por eventos como el asalto armado por parte de cuerpos de seguridad en río Carrao que he narrado anteriormente. Esto produjo enfrentamientos entre los oficiales y los indígenas, pero también fue generando un retraimiento de la fuerza de las luchas en la Fase III, que baja de nuevo a nivel Medio, la cual se va a enfocar al fortalecimiento del turismo como alternativa a la minería, y encontrándose con menos indígenas unidos a la causa antiminera.

IMÁGENES 38 y 39. A la izquierda, la comunidad pemón cierra la pista de aterrizaje en el aeropuerto del Parque Canaima. Fuente: Jorge Victoria. https://runrun.es/nacional/205844/fotos-continua-protesta-de-los-pemones-en-canaima-contra-la-mineria-ilegal-3/. A la derecha, indígenas de Kanaimö rechazan ataque de funcionarios de la DGCIM contra los pemones mineros de Arenal. Fuente: Runrunes https://www.youtube.com/watch?v=1OoJjl3FMqs





En 7 casos la tendencia fue al incremento de la intensidad del conflicto, 6 de ellos en la Amazonía. En la mina El Silencio en el Bajo Caura (Caso 63) se agudizaron disputas violentas y masacres por el control de la misma en las Fases II y III. En este marco, se tomaron diversas acciones por parte de las comunidades indígenas de la zona, como la ocupación de la plaza de Maripa por los jivi, quienes exigieron intervención de las autoridades y la desarticulación de las bandas criminales que operan allí. Aunque la intensidad se mantuvo Alta durante estas fases, al igual que vimos en el caso del río Carrao, las causas antimineras perdieron fuerza. Dinámicas semejantes se observan en el conflicto en Ikabarú (Caso 61), donde también se escala la intensidad del conflicto a Alta en las Fases II y III producto fundamentalmente de la disputa por minas con grupos armados, siendo que los indígenas desarrollan estrategias para enfrentar la situación pero no rechazaron la minería.

El caso del PN Yapacana (Caso 73) también comparte estas dinámicas, solo que tuvo una exposición mediática aún mayor, al ser un área protegida de considerables dimensiones; debido a las denuncias de organizaciones ambientales, defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos, ubicadas fuera de este territorio; y por ser objeto desde 2022 de variados operativos militares del Estado que también contaron con cobertura en medios de comunicación.

Por último, hubo un total de 9 conflictos que estuvieron permanentemente en Alta intensidad, nuevamente, todos en la Amazonía, y muy determinados también por la violencia extrema de las gobernanzas híbridas en el extractivismo. Casos como las resistencias pemón en el río Paragua (Caso 58), de los yek´wana en el Alto Caura (Caso 65) y los yabarana, hoti y e'ñepa en el municipio Manapiare (Caso 70), son ilustrativos de esto. Primeramente, se debe destacar que estas luchas son previas a La Gran Crisis, debido a que los impactos de la minería ilegal preceden al colapso –se puede recordar la retención en 2011de 22 efectivos de la Armada y el Ejército por parte de pemones del Alto Paragua, quienes los acusaron de estar practicando la minería en el área−; por tanto, son comunidades que tienen una experiencia y recorrido en el abordaje de estos conflictos. Sin embargo, la crisis supuso nuevos e intensificados desafíos para estos pueblos. En la Fase I se dieron incluso enfrentamientos directos entre los indígenas y militares o grupos criminales, como se vio en 2015 cuando yek´wanas y sanemas de El Playón y Salto Pará retuvieron a 9 efectivos de las fuerzas armadas en represalia por los atropellos y la quema de sus viviendas. En 2016, indígenas yabarana y de otros pueblos capturaron a mineros ilegales y sus maquinarias en Majagua (Manapiare) y los entregaron a militares de la Zona de Operaciones y Desarrollo Integral respectiva.

Este tipo de acciones tuvieron repercusiones para los indígenas, en términos de amenazas de muerte contra las comunidades y sus líderes por parte de actores criminales, y por otro lado, una práctica mucho más violenta hacia ellos por parte de militares. Al instalarse e intensificarse estas dinámicas violentas, la conflictividad se mantuvo Alta durante todos los años siguientes y, de parte de las comunidades originarias, se tuvo respuestas diferenciadas. Indígenas de Manapiare continuaron sus denuncias y la intervención en zonas mineras con la intención de resguardar sus territorios; mientras que OIPUS ha realizado asambleas en las comunidades afectadas no solo de Manapiare, sino también de los municipios Atabapo y Autana, con el objetivo de establecer estrategias para interrumpir la actividad. Mientras los yek´wana han visto afectadas sus organizaciones con el paso de los años de la crisis, los pemones han recurrido al fortalecimiento de guardias indígenas para la protección territorial, al tiempo que varias de sus comunidades practican la minería. Un patrón que se repite en la evolución de estas dinámicas analizadas es la división de comunidades, entre aquellos que cuestionan la minería y los que la defienden e incluso reivindican.

En el caso de los habitantes de localidades primordialmente criollas como El Callao, Tumeremo, Bochinche o Las Claritas, la intensidad de los conflictos fue también siempre alta, aunque en contextos tan violentos y con tan poderosa presencia de la minería como estos, la acción social muy poco se orientó a reivindicaciones ambientales, y sí más laborales y de subsistencia.

Con todos los elementos expuestos en esta sección, tenemos un retrato más detallado de los perfiles generales de los grupos sociales involucrados en los conflictos y las movilizaciones en torno a la naturaleza. Se hace más claro que, por un lado, por más fuertes y heroicas que puedan ser estas luchas, se enfrentaron a los extraordinarios desafíos que conlleva vivir en una sociedad colapsada y atravesada por la violencia, con una población conmocionada y profundamente afectada los numerosos impactos que produce este proceso. Pero, por otro lado, evidenciaron también las respuestas, adaptaciones y persistencias que pueden surgir de ellas, ofreciendo una multiplicidad de expresiones que dan cuenta de algunas rutas que transitan los ecologismos en tiempos donde prevalece la sobrevivencia. Por tanto, el foco se dirige ahora a las motivaciones, orientaciones y perspectivas de naturaleza de estas variadas expresiones sociales, para poder avanzar en aportaciones sobre una ecología política en escenarios críticos.

III. Ambiente, medios de vida, extracción y sobrevivencia: hacia una amplia ecología política del conflicto

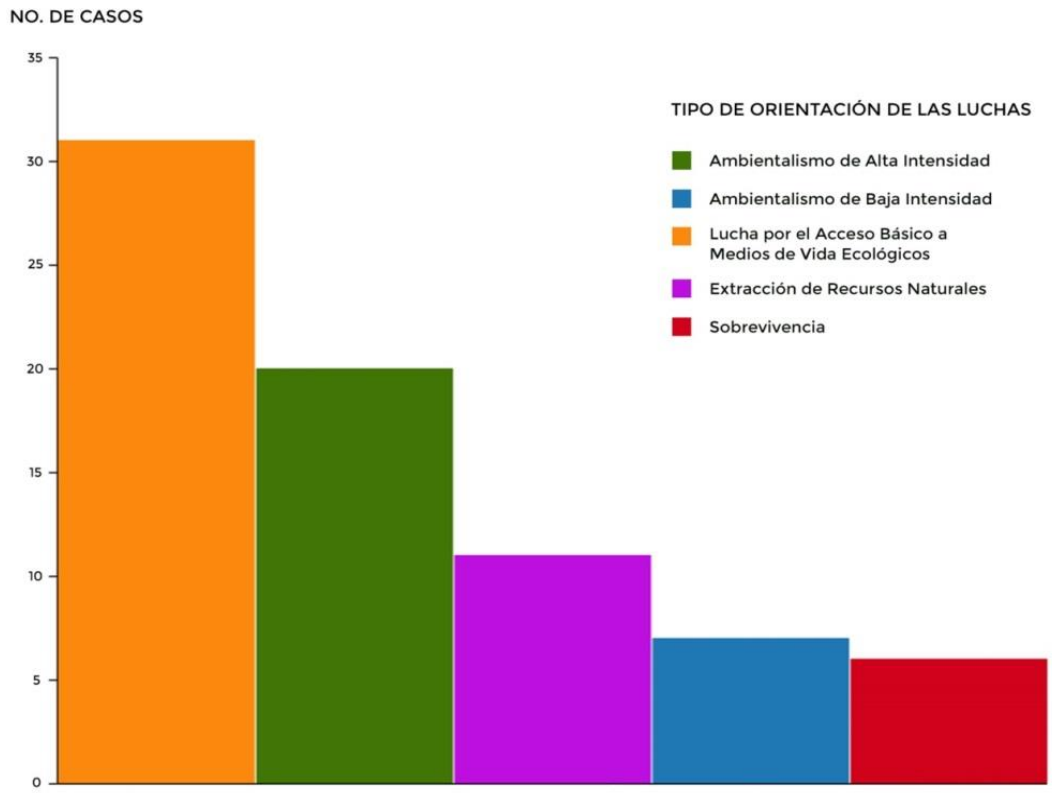
Una gran riqueza de respuestas, sentidos y significados que afloran de las luchas sociales estudiadas nos ofrecen insumos cruciales para profundizar en la relación ecología-sociedad en contextos como el del colapso venezolano.

Se presenta primeramente una mirada macro de las orientaciones de estas luchas en el conjunto de los conflictos ecológico-distributivos. Como ya fue explicado, estas fueron organizadas en los 5 tipos estipulados en la TABLA 15: Ambientalismo de Alta Intensidad (AAI), Ambientalismo de Baja Intensidad (ABI), Lucha por el Acceso Básico a Medios de Vida Ecológicos (LABMVE), Extracción de Recursos Naturales (ERN), y Sobrevivencia (S). Posteriormente, se examinan en detalle dichas motivaciones en las narrativas y el accionar de estos actores, a partir de 6 aspectos particulares que reflejan los fenómenos y tendencias más relevantes de estas luchas, y que alimentan una reflexión hacia una ecología política de la sobrevivencia. Veamos.

III.I Tendencias generales y Tipología de la orientación de las luchas en los conflictos ecológico-distributivos

En la FIGURA 56 presento cómo se distribuye la frecuencia de cada tipo en el total de los 75 casos. El dato que aparece reflejado es la principal tendencia en las movilizaciones de cada conflicto, aunque se subraya que puede no ser la única –por ejemplo, puede predominar ERN en un caso pero existir en menor medida otros grupos sociales orientados hacia un ABI. Se puede apreciar que, de largo, la LABMVE es el tipo que más repite con 31 casos (41,33%), lo cual, como veremos más adelante en la exposición, refleja en muy buena medida las dinámicas de lucha por las formas más básicas de reproducción de la vida en el colapso. De manera contrastante a esto, en segundo lugar está el AAI con 20 casos (26,67%), y si le sumamos los casos donde prevalece el ABI (7), tenemos la presencia del tipo ambientalista en el 36% del total. Se destaca como tercera tendencia la predominancia de ERN en 11 conflictos, y en 6 la disposición es a Sobrevivencia (S).

FIGURA 56. Frecuencia del tipo predominante de orientación de la lucha en los 75 conflictos de distribución ecológica. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de casos

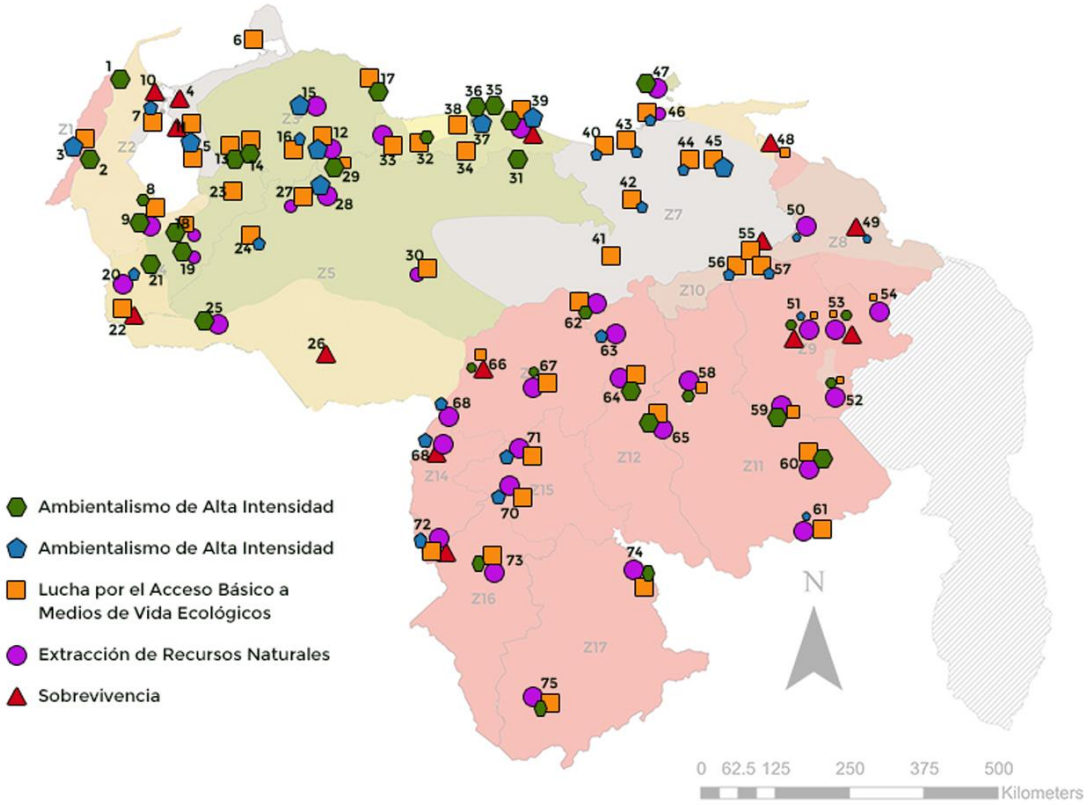


En la FIGURA 57 podemos observar la distribución geográfica de estas tendencias, donde se incluyen tanto la principal como las secundarias, que también integraron el conjunto de orientaciones que cada caso podía tener. La LABMVE, sea de forma predominante o secundaria, está presente en cada Región Ecopolítica y en casi todos los conflictos. Los

casos donde el AAI es predominante tienden a estar mayormente en las Estatalidades ‘Periferia’, aunque también podemos ver numerosas de estas expresiones en otras regiones venezolanas. De igual manera, la ERN expresada como primera o segunda orientación, aparece en un total de 36 casos, lo que representa cerca de la mitad del total (48%), siendo que la mayor parte está en la Amazonía. Sobrevivencia, en cambio, se expresa como forma predominante en Estatalidades ‘Zonas de Sacrificio’, y en general se registra en 14 casos distribuidos en varias regiones del país, pero casi sin presencia en zonas céntricas.

La diversidad de orientaciones que puede notarse en cada caso, expresa en buena medida la polivalencia y la fragmentación social y económica que fue analizada en los capítulos 2 y 3, así como el notorio dinamismo de los contextos y los actores involucrados −los cuales están en procesos de constante adaptación− y la intensificación de las contradicciones sociales.

FIGURA 57. Mapa de ubicación de los diferentes tipos de orientación de la lucha en los 75 conflictos de distribución ecológica. Se coloca no sólo la tendencia predominante en cada caso, sino también las secundarias, que coexisten o disputan con las otras en el mismo conflicto. Íconos de menor tamaño expresan menor relevancia de la orientación. Se presenta la tipología por color y se ubican en el mapa base de estatalidades. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de caso

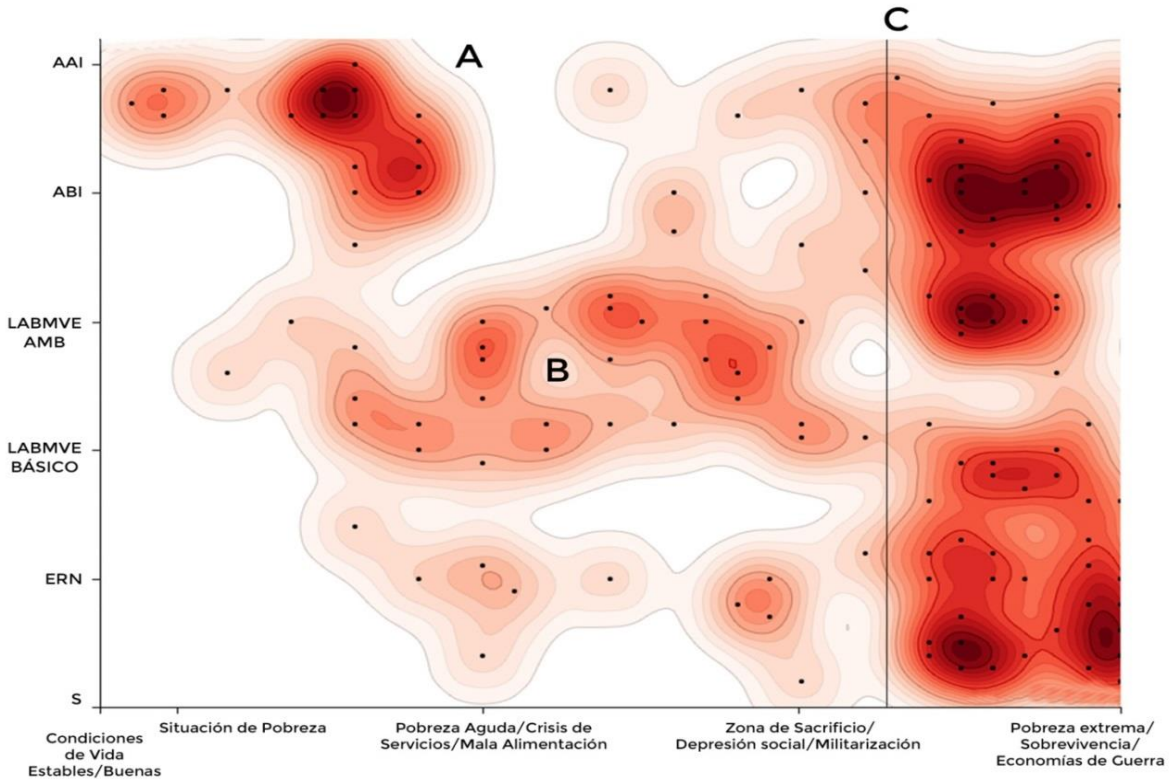


Hay una tercera aproximación panorámica que nos puede ofrecer también algunas tendencias del desenvolvimiento de los Tipos de orientación de las luchas, de acuerdo al nivel de Estabilidad o del deterioro del contexto en el que se dan. En la FIGURA 58 se presenta un diagrama que cruza estos 5 Tipos con una escala de situación social que va

desde condiciones de vida estables hasta escenarios más extremos donde prevalece la sobrevivencia y las economías de guerra.

De esta gráfica se pueden destacar al menos tres grandes tendencias. La primera, un grupo de Ambientalismos que van desde ABI a AAI –marcado en la FIGURA con la letra A−, que se desenvolvieron en zonas del país donde los impactos del colapso se han expresado en menor grado en comparación con otras regiones. En este grupo tenemos casos en lugares más privilegiados como la ciudad de Caracas, como el de la Escuela de Enfermería de la UCV y la defensa del PN Waraira Repano. No obstante, movilizaciones como las que se dieron en estados como Lara (contra el sílice, Cerro La Vieja, contra la minería en el Valle del Turbio, entre otros), Carabobo (conflicto por el trasvase de aguas del Lago de Valencia) y en la región de Los Andes (en defensa de la laguna de Urao y de los humedales de La Azulita), si las comparamos con el contexto de Caracas, se dieron en situaciones mucho más críticas producto del colapso de servicios públicos (ausencia de transporte, cortes eléctricos de varias horas al día, entre otros ejemplos).

FIGURA 58. Diagrama que cruza los 5 tipos de orientaciones de la lucha en los 75 conflictos ecológico-distributivos, con el tipo de contexto donde se desenvuelven, medido en un escala que va desde el nivel de condiciones de vida estables/buenas, hasta los escenarios determinados por pobreza extrema, sobrevivencia y la presencia de economías de guerra. Se reflejan tanto las tendencias predominantes como las secundarias en cada conflicto. Los tonos más oscuros señalan mayor concentración de casos en dichos niveles. Fuente: elaboración propia a partir de análisis de los casos.



Un segundo grupo que se ubica en la franja central del diagrama –marcado con la letra B−, donde se desarrollan protestas y luchas en zonas mucho más deprimidas, periferias más desasistidas que las del primer grupo, hasta zonas de sacrificio, siendo que lo que está en el centro es generalmente el acceso básico a los medios ecológicos para sostener la vida. En este grupo están casos como los del estado Zulia, un estado mucho más afectado por el colapso que los mencionados anteriormente; o en zonas petroleras o de vertederos, siendo en general que no se desenvuelve una violencia de alta intensidad expandida, ni se dan grandes disputas por recursos.

Finalmente, un tercer grupo que es toda la franja final del diagrama –marcada con la C− nos evidencia un conjunto amplio de actores sociales que participan en conflictos desarrollados en regiones donde las condiciones de vida son muy adversas y/o donde se despliegan economías de guerra que ponen en serio riesgo la existencia. La vasta mayoría de este tipo de casos se da en la Amazonía y el resto en regiones donde también prevalece la presencia de grupos armados e imperativos de sobrevivencia. Pese a esto, vemos algunos casos de ABI y AAI que se expresan en las organizaciones y resistencias indígenas que han sido más fuertes en su posición contra la minería, aunque también muchos otros grupos que aportan una perspectiva ambiental en esos conflictos y no se encuentran necesariamente siempre en el territorio (sino en las ciudades). De manera contrastante en esa misma franja del gráfico, se registraron también resistencias comunitarias dentro de la categoría LABMVE, y por otro lado actores sociales (fundamentalmente indígenas) plegados a la ERN, y algunos otros ejecutando estrategias para preservar su vida y subsistencia (S). Estas diferencias serán examinadas en la próxima sección.

Partiendo de estos escenarios de contradictoria coexistencia y/o disputa entre los diferentes tipos de orientaciones de lucha, y los drásticos escenarios donde los actores sociales tienen que procurar la reproducción de su vida, es necesario ahora profundizar, a partir de un análisis más cercano de sus motivaciones, en dos aspectos centrales de este capítulo: uno, por qué algunos de estos actores defienden el ambiente, a pesar del desplome generalizado de la vida que provocó el colapso; y dos, qué matices, sentidos y opciones encontramos en los grupos que, sobrellevando sus luchas en estos contextos de sobrevivencia, se sumergen en prácticas contradictorias como la extracción masiva de recursos en sus propios territorios. Veamos.

III.II Ecologismos en tiempos de sobrevivencia: motivaciones, estrategias y perspectivas

Para ampliar la comprensión de estas orientaciones y resignificaciones que hacen los actores sociales respecto a la defensa de la naturaleza y su acceso a medios de vida ecológicos en estos contextos, voy a examinar seis aspectos que destacan del análisis de los

casos. Estos son: las resistentes valoraciones ambientales que persisten en el colapso; la expansión de la minería (ilegal) indígena en la Amazonía; el rol de los arraigos culturales y tradiciones locales de lucha; los factores subjetivos (vocación y liderazgos inspiradores); el rol fundamental de la politización; y las facetas de la resolución de las necesidades más elementales al norte del Orinoco. Cada uno de estos aspectos sintetiza algunas tendencias clave expresadas en los casos, y están estrechamente interrelacionados unos con otros, aunque se analizan por separado para enfatizar algunos fenómenos particulares de interés. A parte del estudio de casos, el análisis presentado a continuación se ha nutrido de ricos testimonios de actores clave directamente involucrados en los conflictos, obtenidos a partir de entrevistas en profundidad.

III.II.I *Subsistir con la naturaleza: valoraciones ambientales que resisten cuando el mundo se viene abajo*

Muchos de los ambientalismos más robustos, así como los de baja intensidad que se han examinado, estuvieron motivados e inspirados por valoraciones y nociones de naturaleza resistentes, de fuerte raigambre social. Desde las luchas en defensa del Cerro La Vieja se difundieron narrativas sobre la crucial significación de esta montaña para la vida de los habitantes de Sarare y La Miel, que incluso lograron resonar en otras partes del país. El cerro es su símbolo ambiental y paisajístico, su indicador de lluvias, surte agua a la zona y es considerado un 'pulmón vegetal'; es referente histórico regional, así como un lugar de paseo, encuentro y culto religioso. "El cerró prácticamente nació con nosotros", afirmó Jesús Herrera, habitante de Sarare y miembro del Comité Pro-Defensa de este Parque Municipal (J. Herrera, comunicación personal, 22 de abril de 2019), mientras que Aida García, también local, señaló que Cerro La Vieja "significa la vida" (A. García, comunicación personal, 22 de abril de 2019), cuando le he preguntado el porqué de esta lucha, a pesar de la situación de depresión social que también había impactado sus localidades.

Los testimonios de los actores involucrados y las narrativas de sus campañas muestran la profunda conexión del sarareño con su cerro, el cual hace parte de la forma en que se representa la subjetividad e identidad local. En este sentido, la idea de que esta es una 'lucha por la vida' refleja que el sostenimiento de la misma es entendido de una forma integrada, y que enfrentar el colapso ha implicado inexorablemente también defender el entorno ecológico –no uso la noción de territorio porque no aparece en el discurso de estos grupos. Además, ayuda a entender no solo la persistencia de sus movilizaciones en los años de la crisis, sino también el hecho que estas se nutrieron de la articulación de grupos de identificación chavista y de oposición simultáneamente, quienes pusieron su posición política en segundo lugar para unirse en esta lucha, algo muy poco común en Venezuela debido a la intensa polarización que dominó en el país.

Imagen 40 y 41. A la izquierda, caminata al Cerro La Vieja, donde también se celebra la procesión del Santo Patrono de la zona, "San Nicolás de Bari". Diciembre 2018. Fuente: https://www.facebook.com/parroquiasanicolasdebarisarare/posts/pfbid02eH2VPYMzALuQw2PMVkHC6KLaRNiGkpfsVZxSdYEtNg5Ac6Uo12HbtgbReGzAXTJAl. A la derecha, Cueva de la Estefanía, dentro del cerro, posee múltiples altares donde se realizan rituales espiritistas. Los santeros y espiritistas también se sumaron a la defensa del cerro. Fuente: Iván Piña. https://ecopoliticavenezuela.org/2018/12/25/san-nicolas-bari-pueblo-simon-planas-caminaron-defensa-del-parque-municipal-cerro-la-vieja/





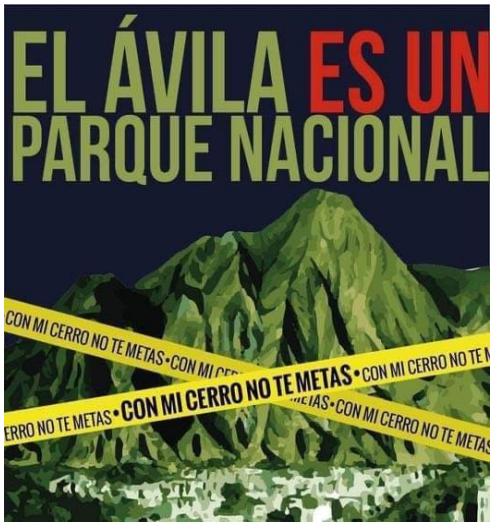
Manifestaciones similares, en las cuales habitantes de una localidad o ciudad se sienten representados por sus montañas, las vimos también en las luchas en defensa de los morros de Macaira o del PN Waraira Repano/El Ávila. Para los habitantes de Altagracia de Orituco, los morros son representativos y transversales en la cultura e historia local, son considerados un "orgullo" y tienen también un valor sentimental para estos, quienes han construido un gentilicio ya muy afianzado en torno a este monumento natural.

En el caso de los caraqueños, el conjunto de montañas que hacen parte de El Ávila representa una serie de valores fundamentales para estos, siendo paisaje emblemático e ícono de la ciudad –que suele usarse en logotipos de la misma−, el 'pulmón' de la gran y contaminada metrópolis, con una cultura de valoración ambiental y de conservación asentada por décadas, y lugar de escape y realización de diversas actividades, como caminatas, ejercicio, turismo, actos culturales, entre otros. Entre estas últimas se incluye las de culto religioso, como la de los "palmeros de Chacao", donde hombres y niños ascienden al PN en días cercanos a la Semana Santa para recolectar palmas reales, que luego serán bendecidas y distribuidas en las iglesias de la parroquia.

IMAGEN 42. Concentración de organizaciones sociales por el día de la Tierra, que puso en el centro el conflicto por el PN Waraira Repano y situación en la Amazonía. (Caracas), 2019. Fuente: https://cronica.uno/el-avila-y-la-amazonia-venezolana-tienen-quien-los-defienda/



IMÁGENES 43 y 44. A la izquierda, poster que realizado como parte de la campaña en defensa del PN Waraira Repano, junio 2022. Fuente: https://www.instagram.com/proveaong/p/CVTyh7WFlDY/?locale=my. A la derecha, palmeros de Chacao bajando del PN con las hojas de palma para el Domingo de Ramos. Fuente: Carolina Alcalde, VOA https://www.vozdeamerica.com/a/en-fotos-los-palmeros-de-chacao-una-tradicion-con-mas-de-200-anos-de-historia/7035639.html





Los impactos generados en El Ávila tocaron las sensibilidades sociales descritas en torno al cerro, con las consecuentes movilizaciones, que además se dieron a pesar de las intimidaciones que sufrió la población, tanto los habitantes autóctonos del área protegida en resistencia, como aquellos que protestaron en la ciudad de Caracas –el hombre con el brazo levantado y camisa vinotinto en la IMAGEN 23, el líder comunitario Carlos Julio Rojas,

fue detenido en abril de 2024 y hace parte de los cientos de presos políticos que hay durante el gobierno de Maduro.

En el caso de la defensa del embalse Los Quediches también se expresa esa idea de una subjetividad profundamente articulada al entorno ecológico. El líder comunitario Wiston Montes, quien además de ser uno de los principales promotores de las movilizaciones, tuvo que exiliarse para resguardar su vida, afirmó: "esta lucha es para recuperar lo que una vez nosotros fuimos, porque recuperando el agua lo recuperamos todo, si recuperamos el agua automáticamente estaríamos recuperando nuestra cultura, lo que nosotros heredamos de nuestros ancestros, que era el trabajo de la tierra, la cría de animales" (W. Montes, comunicación personal, 10 de noviembre de 2018). La idea de una comunidad que no puede ser ella misma sin el agua, de ser desde y con el agua, algo que trasciende la simple necesidad de un 'recurso', da cuenta de componentes existenciales en la lucha ambiental que contribuyen a comprender algunas perspectiva de naturaleza que perduran ante grandes contrariedades.

Además, el agua se revelaba como un factor más de articulación comunitaria, en una región semiárida donde la sequía presenta altos niveles de intensidad y prolongación en el tiempo. Montes mencionó: "…por eso se tuvo la mayor cantidad, la mayor suma de voluntades, de personas y de organizaciones, porque todos sin exclusión de nadie, todos, dependíamos de esa agua, tanto los que dependían por tuberías de una manera superficial, como también de una manera subterránea; todos, todos, todos dependíamos" (Ídem).

En las luchas contra el sílice aparecen componentes similares. En una asamblea en la que estuve en abril de 2017 en la Comunidad de Veracruz (municipio Torres) para discutir los riesgos de la minería en la zona, junto con varias comunidades campesinas y ambientalistas, uno de los habitantes locales enfatizó: "Para nosotros, lo primero es el agua, lo segundo es el agua y lo tercero es el agua". El activista Edgardo Lugo, que ha encabezado estas luchas en Carora, me señaló, en referencia a las comunidades campesinas en resistencia contra la minería: "…ellos saben el peligro que están enfrentando, pero igual se enfrentan, igual están ahí resistiendo" (E. Lugo, comunicación personal, 15 de febrero de 2024). Lugo destacó el significado del Cerro El Plan:

> "Imagínate lo que representa para nosotros ese cerro, ese cerro que los vientos calientes chocan ahí en ese cerro, con los vientos fríos, y son los que producen la lluvia para nosotros. Entonces, el que destruyan ese cerro, la gente no se está dando cuenta que nosotros vamos hacia un punto de desertificación demasiado fuerte, porque se van ahí las únicas lluvias que tenemos, las únicas lluvias entran por esa zona, entonces ese cerro debe ser un símbolo para todos nosotros, para la supervivencia, para el porvenir " (Ídem).

No obstante, a esto agregó: "…ese vínculo de nosotros con la tierra, de que venimos de ahí, de que es nuestra hermana, no ha desaparecido nunca y mientras eso se mantenga va a haber pelea y confrontación con quienes traten de acabar con ella. Y no creo que puedan acabar con ella" (Ídem).

Por su parte, las luchas de las comunidades indígenas wayuú del Socuy contra la minería de carbón, que como vimos también han persistido, se han inspirado en una fuerte cosmovisión de cercanía con la naturaleza, en una región mucho más deprimida que Lara como es el estado Zulia, donde además proliferan considerablemente los grupos armados irregulares y la violencia. Estas comunidades han declarado dar la vida por el agua y destacado que el carbón hay que entenderlo como un elemento que ayuda a sostener el suelo y a mantenerlo estable, lejos de la concepción de este como un commodity.

IMAGEN 45 y 46. A la izquierda, comparsa contra la minería y en defensa del agua (luchas contra el sílice y por el embalse de Los Quediches) en la Cabalgata de Carora, junio 2022. Fuente: cedida por Movimiento social Torrense. A la derecha, integrantes del Movimiento Salvemos el Embalse Los Quediches intervienen en la quebrada La Ribera para reencauzar sus aguas que alimentan el embalse. 2016. Fuente: Wiston Montes https://www.youtube.com/watch?v=Bngc4gYtM5U





Entre otros casos donde la persistencia y los logros en la lucha ambiental se dan sobre la base de una fuerte vinculación socioecológica, está la defensa de la laguna de Urao, ecosistema que también posee una gran significación histórica y cultural para los habitantes de Lagunillas, en particular de la población indígena de la zona. Niñas de la brigada ecológica infantil de Fundalaguna, una de las organizaciones que como vimos es de las más activas en la defensa de Urao, han afirmado: "Veo a la laguna como una hermana y una madre" (Rodríguez y Gutiérrez, 2023). Además de generar un gran sentido de pertenencia en esa población, y ser lugar para numerosas actividades de disfrute para sus habitantes (caminatas al aire libre, excursiones, paseos en botes, entre muchas otras), con este monumento natural también se ha establecido una relación espiritual, desde la cual se realizan rituales de gratitud arrojándole fruta al agua, u oraciones para solicitar cosechas abundantes.

Otro caso interesante ha sido el del surgimiento en 2021 de la "Coalición Plantados en Defensa de los Árboles de Caracas". He mencionado que el conflicto contra la deforestación en la sede de la Escuela de Enfermería de la UCV en el barrio de Sebucán, se

dio en el contexto de variadas iniciativas ciudadanas y vecinales contra la tala indiscriminada del arbolado urbano. En este marco ha surgido esta coalición, en la cual se congregaron varias organizaciones sociales y ciudadanos independientes que impulsaron marchas, acciones de cabildeo para incidir en políticas públicas, plantones y pancartazos, monitoreo y acciones para detener una tala indebida y campañas por redes sociales, logrando posicionar la situación de deforestación en la ciudad en la discusión pública.

IMÁGENES 47 y 48. A la izquierda, comunidades indígenas en manifestación solicitando protección a la laguna de Urao. Fuente: Fundalaguna, en https://news.mongabay.com/2023/01/locals-fight-to-save-a-piece-of-the-sea-in-venezuelas-andes/. A la derecha, marcha "Nos plantamos en defensa de los árboles de Caracas" organizada por la Coalición Plantados. Noviembre de 2021. Fuente: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vNuN7PZaaovLzVJ9b5LPntUJmCHRyZLhViVAJNEvDFCx35eQLuNHyi3rxUzT8rXLl&id=100011619960877





Lo resaltante es la notable sensibilidad de sus integrantes respecto al árbol/bosque urbano, que motivó a que la situación ya se volviese intolerable para ellos, desembocando en la formación de la organización para tratar de incidir favorablemente en ese contexto. José "Cheo" Carvajal, activista por los derechos de la ciudad y uno de las voces más fuertes de este movimiento, señaló que el árbol es "la expresión más fundamental y a la vez más vulnerable de la vida" y que en Plantados han propuesto la visión "de entender el árbol como el centro de la comunidad de la vida" (J. Carvajal, comunicación personal, 3 de mayo de 2024).

Dicha visión no solo se manifestó con la motivación de la confluencia de estos activistas, sino también en las sensibilidades de muchos ciudadanos que se vieron identificados en esta lucha, y que siguieron, acompañaron y participaron de las actividades convocadas. Como expresión de estas sensibilidades, el manifiesto que publicó Plantados en noviembre de 2021 expresaba lo siguiente:

> Casi a diario el sonido de la motosierra nos perturba cerca de casa o desde el altavoz del celular denunciando una nueva tala en algún lugar de la ciudad. Suele ser este ruido feroz un alerta que nos conmina a defender nuestros árboles (…) Más allá de lo meramente reivindicativo, habría que

> comenzar a ver los árboles, no como simple factor que beneficia a los seres humanos —con oxígeno, alimento, sombra—, sino como elementos constitutivos de un sistema que exige nuestro respeto, incluso en un contexto tan antropocéntrico como la ciudad (…) Más allá del malestar ante la arrogancia de quienes creen que podemos subsistir sin árboles, estamos convencidos en el poder ciudadano para reforestar. (…)
>
> Pero en medio de esa lógica depredadora también tenemos el legado de notables defensores de una vida urbana en la que los árboles son mucho más que paisaje: son garantes del equilibrio, de los ciclos del agua, del ciclo de la vida. Tanto en la escala de la esquina y la calle que habitamos, como en la escala planetaria, en la que son evidentes los estragos por el cambio climático, del que no estamos a salvo. Esta coalición que hoy se planta en defensa de los árboles de Caracas humildemente se inscribe en esa otra corriente: la de la lucha contra el cambio climático, la de quienes protegen como contrapeso a la fuerza del arrase, acá y en muchos rincones del planeta (Coalición en defensa de los árboles de Caracas, 2021).

Estas manifestaciones sociales dan cuenta, en parte, de cómo y porqué persisten luchas ambientales durante el colapso, de perspectivas de naturaleza con fuertes raigambres subjetivas, sociales y culturales, y sobre todo, de nociones de Vida y su persistencia, de sobrevivencia, que no se individualizan ante la extrema precariedad, y conciben la continuidad vital como un todo.

Caso aparte son los pueblos indígenas y sus luchas, que abordo a continuación, en el marco de la extraordinaria y violenta expansión minera en la Amazonía.

III.II.II *La expansión de la minería (ilegal) indígena en la Amazonía y sus variadas dimensiones*

Como he expuesto en este capítulo, desde antes de la emergencia de La Gran Crisis se desarrollaron diversas y numerosas resistencias indígenas ante el avance de la minería ilegal en la Amazonía, las cuales continuaron durante el colapso, el despliegue del AMO y las gobernanzas híbridas. Las oposiciones a toda forma de minería tuvieron más fuerza y masividad en la Fase I de la crisis. He mencionado cómo se dieron variadas acciones territoriales por parte de comunidades originarias de diferentes regiones amazónicas, tanto con la expulsión de mineros ilegales y grupos armados irregulares de sus territorios, como la retención y el enfrentamiento con militares, entre otras. Organizaciones indígenas como Kuyujani difundió varios comunicados no solo contra la minería ilegal, sino tomando abierta posición contra el AMO. Incluso, las organizaciones regionales del estado Amazonas COIAM y ORPIA, además de también generar comunicados a la opinión pública nacional con estas mismas posiciones, se dirigieron a Caracas para solicitar audiencia a Maduro sobre el tema.

Sin embargo, también he analizado la evolución de sus capacidades para sostener las luchas y destaqué la afectación general de éstas en las Fases II y III. Esto tuvo varias

implicaciones. Primero, aunque algunas comunidades han mantenido una consistente resistencia, también se ha producido el repliegue de otras, de sus activismos y agendas, que previamente habían estado muy enfocados en la disputa por la orientación de las políticas del Estado y en posicionar sus denuncias en la opinión pública. Sobre esto, el politólogo y abogado especializado en derecho indígena, Vladimir Aguilar, quien además es el coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes –involucrado en el fortalecimiento de las comunidades originarias en varios de los conflictos examinados−, señaló que el movimiento indígena amazónico ha tenido que reinventarse ante estas circunstancias, siendo que en los últimos congresos de ORPIA predominó la tesis de la defensa de los derechos territoriales en los propios territorios y no ya en las ciudades (V. Aguilar, comunicación personal, 28 de marzo de 2024). Esto implicaba reducir considerablemente la disputa con las instituciones estatales y el posicionamiento mediático de sus reivindicaciones, y poner el foco en el trabajo hacia dentro por parte de COIAM y ORPIA, buscando fortalecer las organizaciones territoriales y favorecer el sostenimiento de la defensa de la Amazonía, tal y como también lo indicó Eligio DaCosta, líder del pueblo baniva y presidente de ORPIA (Arellano, 2022).

Segundo, se tradujo en una mayor debilidad de las posiciones antimineras, un aumento del involucramiento de integrantes de comunidades indígenas en la minería (ilegal), y el incremento de disputas cada vez más violentas entre grupos indígenas, criminales y cuerpos de seguridad del Estado, en torno al control de minas y territorios. Por ejemplo, en el caso de la mina El Silencio, los testimonios locales e informaciones de prensa indican que esta ha estado controlada por indígenas de forma intermitente, debido a las intensas disputas generadas en torno a ella. En el marco de las masacres que he mencionado anteriormente vinculadas a este caso, en agosto de 2018 se produjo un enfrentamiento armado que involucró a estos grupos originarios, principalmente a los jivi (que controlaban la mina en ese momento), los sanema, y miembros de un sindicato.(Kapé Kapé, 2022a). Los jivi reivindicaban que la mina debía estar bajo su mando y acusaron a grupos sanema de haber hecho alianzas con los líderes de una organización criminal que buscaba el control de la misma. Desde principios del siglo XXI, los sanema comenzaron a desplazarse hacia las áreas mineras para trabajar como cargadores o "caleteros" –quienes llevan los insumos requeridos hasta las minas−, por lo que se introducían en relaciones de explotación laboral (Vitti, 2016a). En octubre de ese año, 18 capitanes de diferentes comunidades indígenas de la zona emitieron un comunicado en el cual, además de exigir una investigación judicial ante la muerte de varios indígenas, solicitaron la reapertura de la mina –que había sido cerrada luego de los enfrentamientos− y la autorización para asumir la administración del yacimiento. En abril de 2022, otra comunidad indígena local, esta vez la de los pemón de Pawipa, decidió iniciar trabajos de minería en la zona (Kapé Kapé, 2022b), en articulación con indígenas piapoco. Dados los niveles de violencia que imponen los grupos armados, las comunidades originarias han también tenido que desarrollar formas de coexistencia con ellos (Sánchez, 2022).

En la parte baja del Caura, en general, buena parte de los habitantes indígenas, afrodescendientes y criollos de la zona se han visto obligados a ceder parte de su autonomía e involucrarse de alguna forma en el negocio de la minería. A su vez, en la parte alta, comunidades como Fedekuniña y Adawaña, principalmente la última, se han convertido en mineras, donde además se ha abandonado la siembra y la economía tradicional (Silva, 2018). En otros pueblos se registra situación similar: en municipios como Cedeño (Bolívar) o Manapiare (Amazonas) participan en la minería ilegal, siendo mayoritariamente indígenas wottüja (Véliz, 2020; Meléndez, 2023). Por su parte, entre las 15.000 a 25.000 personas haciendo minería en el PN Yapacana están comunidades indígenas de diversos pueblos –además de mucha población criolla y migrantes de otras partes, incluyendo de Colombia–, y se han dado resistencias contra operativos militares para defender las minas y el trabajo extractivo. Incluso, en comunidades yanomami, donde este fenómeno no se veía, o se daba de manera más bien escasa, también se ha registrado un incremento, siendo que además capitanes de las mismas hicieron acuerdos con garimpeiros para que se desarrolle esta actividad en sus territorios (SOS Orinoco, 2022).

Pero el caso más emblemático es probablemente el del pueblo pemón, no solo por lo extendido de la actividad en numerosas de sus comunidades y territorios, sino también por la fuerza de sus organizaciones y las formas particulares de abordaje de la actividad. Preliminarmente se debe mencionar que el territorio pemón abarca unos 86.000 kms^2 (Arias, 2009) y, con el fin de lograr reconocimiento, comunicarse e incidir en la política pública del Estado, desde la década de los 70 la Federación Indígena del Estado Bolívar promovió su división en ocho sectores[13], basados en el funcionamiento de las Capitanías Comunitarias, que sostenían a las Capitanías Generales, todo lo cual se organiza según sus respectivos estatutos de convivencia (Martens, 2018). En marzo de 2013 se va a fundar el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón (CCGPP), un cuerpo representativo de los distintos sectores y comunidades de este pueblo, que surgió con el objetivo de defender sus intereses autónomamente, y marcar distancia de las absorbentes lógicas de polarización política en Venezuela.

En relación a la minería en sus comunidades, el CCGPP ha señalado que el 30% de los habitantes de las mismas son mineros y que 36 de los 119 poblados practican la actividad (Ramírez-Cabello, 2020). Una lideresa de la etnia pemón, que para este trabajo llamaremos María Martínez, nos ha planteado al respecto una realidad más compleja: "…de las 119 comunidades, yo digo que entre 70 a 80 comunidades ya están dentro de áreas intervenidas [por la minería], o sea, donde hay mina". Martínez plantea la distinción entre una comunidad que es minera y una que está dentro de un área minera. Aunque un porcentaje minoritario de comunidades se asumen abiertamente como practicantes de la actividad, un

[13] Los ocho sectores del territorio pemón son: Sector I La Paragua, Sector II Kamarata-Kanaimo; Sector III Urimán; Sector IV Kuyuní; Sector V-Kavanayén; Sector VI- Santa Elena de Uairén; VII-Ikabarú y Sector VIII-Wonkén.

60-67% han sido integradas a sus dinámicas y coexisten con ellas. Esto representa un estímulo para atraer a más indígenas a la minería dado que son muy pocas las comunidades que han establecido su prohibición (M. Martínez, comunicación personal, 6 de abril de 2024).

Es importante destacar que en los propios objetivos de la fundación del CCGPP estuvo también asumir una posición más activa y autónoma respecto a la minería, proponiéndose impulsar la organización de la explotación del oro en sus territorios, sin tener mayor interés por la conservación (Boon y Meléndez, 2019). Un rol importante en estas decisiones lo ejerce el capitán o cacique que es la autoridad y representación en la comunidad. Las tendencias promineras del Consejo dan cuenta de una mayoría de capitanes orientados hacia la actividad, aunque esto no ocurre sin grandes contradicciones.

En el caso del PN Canaima, desde principios de 2010 ya se registraban minas en el área protegida, aunque es desde 2013 cuando comienza su expansión, y para 2017 se ha señalado que existían 97 balsas y dragas que se distribuyen en el río Caroní medio, desde el Salto Las Babas hasta el Salto Parupa, con presencia de equipos también en los sectores de Arekuna y Las Bonitas (SOS Orinoco, 2018). Lo destacado en este caso es que las minas son controladas y gestionadas por los propios pemón sin que haya despliegue de grupos criminales en el parque. Los indígenas desarrollan la extracción de oro desde balsas o en campo abierto, y también recurren a equipamiento, motobombas y mercurio, con el acuerdo de las comunidades y el CCGPP, lo que ha generado conflictos con los defensores del PN, y una relación contradictoria y conflictiva con el Estado, que se ha visto interpelado incluso internacionalmente por la situación, sobre todo por la condición de ‘Patrimonio Mundial de la Unesco’ de esta área protegida.



En el caso de Ikabarú, la cultura de ‘libre aprovechamiento’ minero que prevaleció por años en la zona, también incidió en las tendencias de las comunidades indígenas locales en favor de la actividad. En noviembre de 2016, el CCGPP se pronunciaba exigiendo a las autoridades que los únicos que podían ejercer la minería en las tierras colectivas de Ikabarú eran los pemón y mestizos, y solicitaron la eliminación del Bloque

Especial del AMO que se había delimitado allí, lo que les restaba autonomía. Hasta el año de la formalización de este proyecto, se pasó de una minería dispersa y de pequeña escala a una mediana que recurría a la técnica aluvional de extracción de oro con monitores hidráulicos (Starchevich, 2017; SOS Orinoco, 2020a).

IMAGEN 49 (pagina anterior). Mina Parkupi, cerca de Ikabarú (2020). Fuente: SOS Orinoco, https://sosorinoco.org/es/informes/mineria-en-icabaru-cuenca-alta-del-caroni-de-la-incoherencia-a-la-anarquia-criminal-de-estado/

Por su parte, en el caso de la cuenca del Paragua, la minería tiene también décadas de antigüedad –se estima desde los años 50 del siglo pasado−, inicialmente para la búsqueda de diamantes y luego la de oro, experimentando períodos de auge, como el de los años 90, con una política de apertura a la actividad, y posteriormente desde inicios del siglo XXI, donde siguió creciendo hasta la actualidad. Esto convirtió a esta zona en el tercer foco minero más grande de la Amazonía, después de Las Claritas e Ikabarú. En este marco, al igual que el caso anterior, se dio una mayor extensión de la minería a pequeña escala en comunidades indígenas, recurriendo también a técnicas de tipo aluvial con predominio del uso de máquinas de bombeo y mercurio. A partir de 2006, los indígenas entran en una fase más conflictiva de su práctica minera, cuando los grupos criminales entraban progresivamente en las disputas por las minas (SOS Orinoco, 2020b).

Es necesario observar estos procesos, plagado de contradicciones, en toda su complejidad y matices para intentar comprender sus múltiples aristas. Para ello, voy a examinar las expresiones y motivaciones más relevantes de tres formas de relación que se dieron entre las comunidades indígenas y la minería: a) aquellas que se metieron de lleno en la actividad; b) otras que establecieron una relación que puede ser más bien circunstancial con ella; y c) aquellas que se opusieron. Como veremos, no hay necesariamente posiciones nítidas o estáticas, lo que muestra las tensiones y contingencias que atraviesan las prácticas cotidianas de estos grupos originarios, determinadas por la sobrevivencia.

Respecto a las *comunidades metidas de lleno en la minería*, han existido integrantes de las mismas que asumieron la actividad desde lógicas de poder y enriquecimiento particular. Algunos indígenas y líderes pemón han señalado sus desacuerdos con, e incluso han denunciado, acciones corruptas por parte de algunos capitanes, que además han llegado a establecer acuerdos con actores estatales y privados, interesados en el despliegue minero (Boon y Meléndez, 2019; M. Martínez, ibíd.).

Hay otros ejemplos, sin embargo, que nos ofrecen muchos más elementos de complejidad para el análisis. Un caso emblemático lo tenemos en el Alto Paragua. Los 22 militares retenidos en 2011 en esta zona por indígenas pemón y de otras etnias, se encontraban haciendo minería en la mina Tonoro, una de las más importantes del sector donde participan cientos de personas, incluyendo los indígenas. Antes de este suceso, los efectivos

militares la habían desalojado. Las comunidades señalaron que estaban cansados de los abusos y atropellos de los militares, la no demarcación y titulación de tierras que les corresponde, y rechazaban la política minera del Estado, que amenazaba con prohibirles esta práctica y por tanto, quitarles su fuente de sustento. Este levantamiento generó que posteriormente los indígenas tomaran el control de Tonoro y fundaran en ella la comunidad independiente de Musuk Pa, basada en sus propias leyes, las cuales ordenaban todos los aspectos de la vida, incluyendo las pautas del trabajo minero y el ingreso de visitantes (Poliszuk et al, 2022). Al igual que en los ejemplos anteriores, se usa maquinaria y mercurio para la extracción, con altos impactos ambientales (ver IMAGEN 50) y en este caso las ganancias obtenidas de la actividad se dirigen a cubrir las necesidades básicas de la comunidad, como salud y alimentación, construir viviendas y escuelas, entre otras. Voceros de Musuk Pa como el cacique pemón Alexis Romero, ha declarado que este pueblo ha sido 'proambientalista', pero al mismo tiempo ha expresado que el asunto ambiental no es prioritario en esas circunstancias, y que "luego se ocuparán de él". Han afirmado que las violentas disputas por sus territorios los han llevado a explotar ellos mismos estos recursos, procurando alcanzar la forma menos dañina para el ambiente, y que beneficie al máximo a los habitantes locales (López, 2012; El Libertario, 2013). Como vemos, una actividad ilegal, pasa a ser considerada lícita por estas comunidades indígenas.

En este caso, el territorio aparece como factor primario de la acción colectiva, el cual, como vimos anteriormente, ha sido la principal reivindicación de los pueblos indígenas en sus luchas. No obstante, en Musuk Pa esta noción aparece estrechamente vinculada a la cuestión de la autodeterminación, y en un lugar secundario queda la idea del territorio como totalidad cósmica, donde la naturaleza –o la Madre Tierra− cobija la vida en su conjunto y se protege el equilibrio con ella, que es el propio equilibrio para la comunidad (Agredo-Cardona, 2006; Molina-Bedoya, 2015). Esta última perspectiva está vinculada con la idea de *ser desde y con la naturaleza*, en la que la subsistencia se lleva a cabo en comunión con esta, como la vimos con los ambientalismos del apartado anterior.

La posición secundaria de la naturaleza en el caso de la comunidad minera de Musuk Pa, se ha traducido en una resignificación de su valoración, probablemente más en la forma objetivada de 'recurso', lo que refleja claras diferencias con las perspectivas de ser y subsistir con la naturaleza ya mencionadas. El cambio de 'pro-ambientalismo' a la idea de que "de los asuntos ambientales nos tendremos que ocupar luego", expresa las reformulaciones pragmáticas sobre las perspectivas de naturaleza y territorio que suelen aparecer en contextos de extrema violencia y sobrevivencia (Allen, 2012; Miklian, 2012; Mampilly, 2007). En todo caso, hemos visto que ha aparecido la referencia a una minería indígena, que se presenta supuestamente como la 'menos dañina' para los ecosistemas, algo que, como veremos, es problematizado por otros indígenas pemón.

IMÁGENES 50 y 51. A la izquierda, campamento minero en Musuk Pa (2015). A la derecha, asamblea de indígenas de Musuk Pa, planificando estrategias para enfrentar a los grupos armados criminales. Fuente de ambas fotografías: Germán Dam, https://armando.info/las-autodefensas-indigenas-se-levantan-al-sur-de-venezuela/





La idea de la autodeterminación es fuerte en el pueblo pemón. En el caso de Musuk Pa, para poder realizar dicha idea no sólo había que recuperar el territorio, plagado de mineros, grupos criminales y militares; también había que apropiarse de los 'medios de producción' en ese contexto, lo que implicó apoderarse de la mina; y defenderla. El tomar las ganancias de la minería para sostener todos los aspectos de la vida de la comunidad (alimentación, educación, vivienda, etc), y gestionarlas colectivamente, puede también analizarse como una sustitución del Estado, lo que tiene al menos dos implicaciones importantes:

a) La autodeterminación se emparenta estrechamente con la idea de autonomía. Las usuales demandas al Estado pidiendo compensación por el desalojo de minas, seguridad en la zona, asistencia social, entre otras, que pudimos ver entre las más comunes peticiones de los grupos movilizados, pasan a un segundo plano, mientras que la propia comunidad toma partido directamente para realizarlas. Desde este enfoque, lo que se le pide al Estado es que los 'deje tranquilos'.
b) Esta autodeterminación conlleva otras nociones de 'soberanía sobre los recursos', diferentes a la forma rentista del Estado, que ha estado basada en un extractivismo centralizador. Varios actores indígenas han reivindicado en sus testimonios un principio de derecho sobre sus recursos que entra en contradicción con la concepción tradicional del Estado como propietario de los mismos, algo que está contemplado en la Constitución bolivariana de 1999:

> ARTÍCULO 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.

> ARTÍCULO 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico.

La capitana de la comunidad de Maurak y reconocida líder indígena, Lisa Henrito, ha afirmado: "Los pueblos indígenas tenemos derecho a decidir y participar en la administración y utilización de los recursos naturales existentes en nuestros territorios" (en Vitti, 2021). Kapé Kapé, una organización orientada al acompañamiento a pueblos indígenas, aunque ha cuestionado la proliferación minera, al mismo tiempo ha defendido el derecho de los indígenas a practicar la minería artesanal, recordando la existencia de los artículos 20 y 53 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas donde se establece el derecho originario a la propiedad colectiva, al uso, administración y aprovechamiento sustentable de estos pueblos sobre sus hábitats y tierras (en Runrunes, 2018). Esta reivindicación en buena medida se sostiene sobre la premisa, sostenida por ellos, de que bajo una gestión del territorio basada en las reglas y manejos indígenas, la dramática situación que se ha desarrollado en la Amazonía no hubiese ocurrido, y que incluso las comunidades originarias están en capacidad para abordarla y solventarla.

En esta relación 'recuperar el territorio, apropiarse de los 'medios de producción' y defenderlos', se produce la conformación de guardias territoriales indígenas, como ocurrió en Musuk Pa desde 2014. Sobre este fenómeno Henrito afirmó: "Si los órganos de seguridad de esta nación no tienen la capacidad o la voluntad de hacer su trabajo, nosotros sí lo vamos a hacer porque somos los más interesados en mantener la paz" (en Poliszuk et al, 2022). El primer referente de una experiencia de seguridad de pueblos originarios en la Amazonía venezolana se dio con la llamada "policía civil indígena" en la comunidad pemón de Maurak en 2001. La iniciativa de Musuk Pa tuvo gran resonancia en el resto de los territorios indígenas amazónicos, logrando que se difundiera en otras comunidades.

En San Martín de Turumbán y San Luis de Morichal (municipio Sifontes, Bolívar), ante el asedio permanente de sus territorios, las comunidades pemón establecieron guardias indígenas. Lo mismo ocurrió en Ikabarú desde que comenzó la invasión de mineros, por lo que la guardia territorial fue tomando la forma de autodefensa, se aplicaron esquemas de control del acceso a la zona y puntos de control estratégicos (Ramírez, 2023), Esto no ha podido evitar del todo amenazas, e incluso hechos como la masacre ejecutada por un grupo de hombres armados en noviembre de 2019, que dejó al menos ocho personas fallecidas y una herida.

Del mismo modo, en el Caura se crearon dos cuerpos de Seguridad Indígena para monitorear quien entra y sale de las localidades, estableciendo las llamadas 'oficinas' ubicadas en sitios de paso como El Playón (Vitti, 2016b); en el municipio Autana del estado Amazonas, la comunidad wottüja de Pendare ha también implementado una iniciativa como esta. Y en Atabapo, las guardias indígenas han creado espacios de

negociación y acuerdo con la guerrilla colombiana, establecido límites a la minería en el PN Yapacana para aminorar sus impactos, intentado que la mayor parte de los ingresos generados queden para las comunidades locales, impulsado mecanismos de vigilancia y puntos de control para verificar quienes circulen por sus territorios y transiten hacia las minas, además de retener embarcaciones e incautar equipos y maquinarias en el río Atabapo, si las pautas establecidas por ellos para la actividad no se cumplieran (SOS Orinoco, 2020c).

En 2022 se contaron 86 comunidades solo en el municipio Gran Sabana (territorio principalmente pemón, Bolívar) que tienen algún tipo de guardia territorial (Poliszuk et al, 2022).

IMÁGENES 52 y 53. A la derecha, Oficina de Seguridad Indígena en El Playón, creada por los yekwana de El Caura con el fin de monitorear quien sale y entra del pueblo y de la mina. 2016. Fuente: Minerva Vitti, https://revistasic.org/mineria-sindicatos-y-arco-minero-del-orinoco-combinacion-mortal-para-los-indigenas-de-el-caura/. A la izquierda, encuentro entre Capitanes indígenas con 300 «flecheros» en el campamento de «JJ», comandante del Frente "Acacio Medina" de las FARC (disidencias). Fuente: Correo del Caroní, disponible en https://sosorinoco.org/es/hechos/soberania-nacional/enfrentamiento-entre-indigenas-y-farc-disidencia-en-el-municipio-atabapo-amazonas-venezuela/





La segunda forma de relación, las comunidades que realizan una *práctica minera parcial y hasta circunstancial*, refleja una relación conflictiva de los indígenas con la actividad debido a los impactos múltiples que genera y por el choque con sus perspectivas culturales tradicionales y de naturaleza. Hay sectores pemón que han vivido del turismo por décadas, y experimentaron el derrumbe de esta actividad en lugares como Canaima debido al colapso económico. El impacto fue tal, que incluso llegó a escasear la alimentación, mientras que la producción de pequeñas unidades locales agrícolas era insuficiente para cubrir todas las necesidades. Esto implicó que guías turísticos indígenas se fueran a las minas, aunque en algunos casos esto se hizo de manera puntual o momentánea.

Mario Rodríguez, guía y porteador pemón del tepuy Roraima, se fue a la mina El Esqueleto (sector oriental de Canaima) con su familia en 2019 para poder tener ingresos y llevar alimento a su hogar. Rodríguez narra el impacto que le generó excavar y romper la tierra, abrir huecos con pico y pala, y entrar en un túnel donde se escapa el aire. Confiesa que le fue difícil aprender a hacer minería y que él no es minero: "Para mí la mina no es factible, no es un buen trabajo, nosotros aquí en la comunidad no somos mineros, solo trabajamos con turismo" (en Ramírez-Cabello, 2020). Ese mismo año, apenas tuvo una oportunidad para guiar a un grupo de turistas hacia Roraima, volvió a casa y no regresó más a la mina. Algunos voceros y caciques pemón han afirmado que, pese a que practican la minería, un gran porcentaje de los indígenas está en contra de hacerlo, y que si la situación del país cambiara y se rescatara la actividad turística, estos abandonarían la mina para retomar a aquella (Boon y Meléndez, 2019; Celi, 2019). Esto evidencia que no estamos necesariamente ante indígenas con vocación e identidad minera, aunque la practiquen, sino que en variadas ocasiones es la contingencia un factor determinante en las prácticas, que pueden ser sencilla y llanamente circunstanciales.

Finalmente, tenemos las expresiones de *indígenas que se oponen a la minería*. Ya he señalado que en cada etnia de la Amazonía hay desacuerdos, críticas e interpelaciones por parte de quienes contrarían la actividad hacia quienes la realizan. María Martínez ha señalado: "…hemos explotado, hemos destruido, sí, hemos destruido (…) en algún momento perdimos la perspectiva, comenzamos mucho a dejarnos llevar por las necesidades" (M. Martínez, comunicación personal, 6 de abril de 2024). Similar idea la ha expresado el propio presidente de ORPIA, Eligio DaCosta para hacer referencia al estado Amazonas: "La destrucción del territorio también la hace nuestra misma gente" (en Meléndez, 2023).

Martínez, como lideresa, le ha tocado interpelar y confrontar a otros capitanes, solicitándoles que rectifiquen, aunque afirma que estos no ceden. En todo el territorio pemón han sido fundamentalmente comunidades de los Sectores II (principalmente de Kamarata-Kanaimö) y V los que han asumido la posición más fuerte contra la minería. En el PN Canaima (Sector II), vimos que indígenas desarrollaron la toma del aeropuerto, comunicados, denuncias públicas y campañas, entre otras acciones contra la actividad. En medio de las tensiones que afloraron tanto por las contradicciones internas como por las amenazas de actores externos, la comunidad de Kanaimö ha interpelado a otras comunidades pemón que practican o convalidan la minería dentro de estas áreas protegidas, tratando de concientizarlos para que desistan de hacerlo.

Han existido intentos de reimpulsar el turismo en el parque, sobre todo de comunidades del Sector V como Kavanayen o Liboribo, que han reivindicado esta actividad como la principal para la subsistencia (Oronoz, 2024). El turismo ha sido visto no solo como un

ingreso económico para las familias, sino también un mecanismo de resistencia contra el crecimiento de la minería entre los pemón.

Por otra parte, la lideresa Martínez ha trabajado para ampliar las alternativas económicas y culturales para las comunidades, impulsando la creación de empresas indígenas que puedan crear empleo, recuperar la pequeña producción agrícola, además del turismo comunitario. Además, Martínez ha creado una escuela de futbol con jóvenes indígenas, para incentivarlos a alejarse de las minas que, a su juicio, le ha dejado logros:

> Claro, no totalmente, o sea, puede ser que (ellos) no vayan para la mina, porque ellos van a seguir yendo a la mina, pero que no lo vean como algo permanente, que voy a la mina y ahí me voy a quedar, ¿me entiendes? (…) Con todo lo que está pasando, son muy pocas personas (de la comunidad) que tengo en la mina, la mayoría por supuesto son jóvenes. Pero son muy pocas, y tenemos casi dos mil habitantes, ¿me entiendes? O sea yo me siento que por lo menos estamos haciendo algo (M. Martínez, ibíd.).

IMAGEN 54. Indígenas Pemón Kamarakoto y turistas que visitan Canaima protestan contra la minería en el río Carrao. Junio 2015. Fuente: Twitter de Capitania Kanaimö https://x.com/Capkanaimo13_16/status/605432794605600770.



Por su parte, las organizaciones indígenas regionales de Amazonas han promovido intensos debates en las comunidades donde se ha manifestado la gran preocupación que existe por el auge minero en los territorios. Desde sus organizaciones de base, en el marco del repliegue de buena parte del activismo indígena, se han hecho grandes esfuerzos para revertir dichas tendencias con un trabajo hacia adentro que también ha buscado fortalecer proyectos socioproductivos y la disposición de los medios de vida, que ofrezca otras posibilidades económicas (V. Aguilar, comunicación personal, 28 de marzo de 2024).

Evidentemente, detrás de la persistencia de estas luchas están también perspectivas de naturaleza que han logrado ser resistentes a los embates de estas economías de guerra y gobernanzas híbridas. Cuando he consultado a Martínez sobre porqué persisten en sus acciones, a diferencia de otras comunidades me señaló que, aunque se planteara la discusión de hacer minería entre ellos, dicen:

> "No. Tenemos una reserva de agua, hay que proteger el agua (…) todavía tenemos territorios, todavía tenemos una cultura muy milenaria que hay que defender y somos un pueblo con identidad que todavía la conservamos, y esa es nuestra fortaleza (…) eso es lo que nos permite por lo menos mantener como esta esperanza, o mantener eso que estamos trabajando, tenemos que cuidar esto". "Vamos a preservar esa cero minería (…) Entonces, es como que una conciencia, eso sería la diferencia".

Lo dicho deja claro nociones que vinculan territorio, naturaleza e identidad cultural (ser desde y con la naturaleza, subsistir con ella) que, como ideas profundas de vida dan motivo suficiente para resistir, persistir y mantener la esperanza de una manera activa. La capitana Lisa Henrito sigue esta línea, insistiendo en una idea más integral de las guardias territoriales: "Es una guardia porque somos guardianes de nuestro territorio, de nuestra familia, las aguas, el ambiente y todo en el territorio; y no se trata de resguardar solo el territorio de los indígenas, sino el planeta" (en Poliszuk et al, 2022).

En pueblos del Caura hay nociones similares, siendo que la organización Kuyujani ha señalado que la tierra para los ye´kwana y sanema es fundamental, pues es donde nace su patrimonio cultural: educación propia, cultura y la garantía de seguridad alimentaria, la de sus hijos y futuras generaciones. Desde perspectivas profundamente espirituales, han enunciado: "Yaajö Sawedi, nos dijo que cuidáramos a Atukaadoda (hierro), Adeumoiyana (agua), Enuujukuñamana (aire) como él los cuidó". El cacique general Cayetano Pérez hacía referencia a la minería: "La minería no es nuestro trabajo. Wanadi (dios creador para los ye'kwana) nos está viendo desde arriba, estamos haciendo maldad, maltratando a nuestros compañeros. Yo no puedo maltratar mi tierra porque eso pertenece a mis nietos. Ellos van a sufrir" (Vitti, 2016a).

Todas estas diversas expresiones que se han analizado, que chocan entre ellas, se solapan, coexisten unas con otras, y se cruzan, reflejan dilemas estructurales y existenciales para los pueblos indígenas, que al menos los podemos sintetizar en tres formas: una, la contradicción que se da entre la reproducción de la vida en el territorio y la destrucción del ambiente en el lugar donde se habita, generada por los propios integrantes de la comunidad; dos, la contradicción entre la autodeterminación indígena en los territorios y los intereses mineros de grupos foráneos y actores estatales; y tres, la notable contradicción entre perspectivas de naturaleza que se da en el seno de las propias comunidades indígenas.

Como vemos, los dilemas presentados, sobre todo el primero, que expresa la contradicción entre subsistencia minera y devastación ambiental del propio hábitat, estuvieron cruzados

por un factor fundamental, que estuvo presente como una idea común en el grueso de las comunidades indígenas y organizaciones que hacen acompañamiento territorial a estas: *nos obligan a recurrir a la minería*. Ciertamente la depresión económica de La Gran Crisis hizo estragos también en los territorios indígenas amazónicos, socavando fuentes de ingreso económico y servicios básicos, mecanismos de asistencia social y los medios más elementales de vida. Por otro lado, la propia expansión minera agravó la situación, con la contaminación de las aguas y peces (alimento principal para numerosas comunidades) con mercurio, expandiendo enfermedades como la malaria y, sobre todo, imponiendo la violencia criminal extrema en los territorios. Pero numerosos indígenas pemón, así como el CCGPP, han también subrayado la imposición minera y la brutal represión de la que han sido objeto por parte del gobierno de Maduro. No se debe olvidar que los pemón ha sido un pueblo muy politizado, el que más autodeterminación ha ejercido para recuperar y administrar minas, el que mayores resistencias ha planteado a la política gubernamental y, por tanto, el que mayores confrontaciones con el gobierno ha tenido, lo que ha sido respondido muy duramente por este último.

Partiendo de esto, entre varios capitanes, algo también mencionado por la lideresa Martínez, se percibe la idea de que esta situación a la que se ha llegado es un 'sistema' impuesto por el gobierno: "Yo diría, y me atrevo a decirlo, que es una política del Estado, es una política de este gobierno, es un sistema impuesto" (M. Martínez, ibíd.). Dicho sistema precisamente impone la minería, la cual absorbe a integrantes de las comunidades indígenas, y las divide y corrompe. De hecho, Martínez afirmó: "…le dije a los militares, o sea, este es un sistema tan corrupto, permitido por usted mismo, que hasta yo me voy a volver corrupta; o sea, como capitana, empiezo a hacer cosas y pienso que es normal, o pienso que es legal, porque todo el mundo lo está haciendo, entonces yo también lo hago, tú no me puedes decir nada, porque tú también lo haces…" (ídem).

Del testimonio de Martínez se desprende una idea del colapso venezolano, pero sobre todo de las gobernanzas híbridas facilitadas por el gobierno de Maduro, como mecanismos corruptores de las comunidades indígenas, y en general, del tejido social. A esto se debe sumar el hecho de ser habitantes de territorios que tienen bajo sus pies grandes reservas de oro y diamantes, lo que impone extraordinarias presiones nacionales e internacionales que no pueden desconocerse.

De manera que los indígenas han señalado que la minería ha sido una respuesta y una estrategia de sustento económico y de seguridad territorial. En este sentido, Martínez ha sido enfática en señalar que:

> "…al final todas las comunidades queremos lo mismo, queremos una atención buena en salud, una escuela, porque nos enseñaron que seguro tenemos que ir a la escuela, una iglesia, zonas recreativas, una casa comunal para las reuniones, empleos, algo que me genera plata, y eso es todo, eso es todo. De todo lo demás, no estamos buscando cada uno tener un carro de último modelo, no hay nada de

> eso, ¿ves? Entonces, realmente es muy simple lo que quieren las comunidades indígenas (…) Nosotros los indígenas sólo queremos lo necesario para vivir, ningún lujo" (ibíd.).

Estas circunstancias también ayudan a explicar las contrariedades que se le generan a numerosos pemones ante las críticas ambientalistas a sus prácticas extractivas, principalmente en el escrutado PN Canaima. En un comunicado de octubre de 2018, el CCGPP ante la denuncia realizada por 'terceros' sobre la actividad minera en el río Carrao, señalaron:

> "¿Dónde estaban los ambientalistas, conservacionistas, operadores u operadores turísticos cuando en Canaima se estaba construyendo infraestructuras de 2 a 3 pisos al frente de la Laguna de Canaima? ¿Acaso eso no es causal para derrocar la certificación de Canaima como PN? ¿O solo porque los indígenas hayan iniciado una actividad para paliar la crisis que para nadie es secreto con la pequeña minería aparecen las denuncias?" (sic.) (CCGPP, 2018)

Y a esto, añadieron en el mismo pronunciamiento:

> "Dejamos claro nuestra recomendación como pueblo Pemón que la actividad minera no puede ser la única actividad económica que solvente las situaciones difíciles; nosotros nos dirigimos a profundizar en la revisión de las potencialidades alternas de nuestra economía y en ese plan el estado venezolano debe garantizar mecanismos viables para macrofinanciamientos, para macro proyectos; sin ese plan no podremos avanzar como organización por ende como país".

En la compleja práctica de una sobrevivencia que prescinde, aunque sea parcialmente, de la naturaleza como elemento de la comunidad de vida, y que hace coexistir caminos divergentes en el propio pueblo pemón, queda claro que esta es habitada por la contradicción, y por dilemas que requerirán algún tipo de abordaje o desenlace, si no se quiere evitar una muy severa degradación ambiental de los hábitats indígenas. Adicionalmente, el avance de estas dinámicas en el tiempo van generando brechas generacionales en las cuales los más jóvenes tienden a sentirse más atraídos por la minería, algo que está ocurriendo en todos los pueblos amazónicos. Esto tiene implicaciones progresivas que podrían hacer cada vez más favorables las preferencias por la minería en los pueblos, agudizando el problema socioambiental.

III.II.III ***La persistencia de arraigos culturales y tradiciones locales de lucha***

Varias de las movilizaciones examinadas no solo venían de una lucha de muchos años, sino también hacen parte de una historia de organización popular que puede tener raíces muy profundas, y fuertes arraigos respecto a la cultural local.

El estado Lara es conocido por una fuerte cultura de reciprocidad y ayuda mutua, que se ha expresado en un vigoroso movimiento de cooperativismo, junto a otros de pequeños productores agrícolas, ambientalismos populares, y activismos por los derechos humanos, entre otros. Esto se da también en el marco de unas muy ricas y diversas culturas locales,

con patrones de preservación y vigencia de saberes, tradiciones y creencias (Freitez, 2007), último que incluye celebraciones muy populares y que tienen gran capacidad de aglutinar masas y crear identidad regional, como el "Tamunangue", originado desde la colonia a partir de la unión de las culturas indígenas jirajara, española y africana, y que combina música, danza y canto en honor a San Antonio de Padua. O bien la multitudinaria peregrinación de la Virgen de la Divina Pastora, considerada una de las más grandes a nivel mundial. Para el sociólogo, profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y defensor de derechos humanos, Nelson Freitez, toda esta tradición de organización social larense está enraizada en "el trabajo sistemático de seres que tuvieron que enfrentar las exigencias de una naturaleza esquiva o carenciada" (ídem), en buena parte determinadas por las características del semiárido, de manera que bajo estas condiciones históricas surgieron prácticas de solidaridad y apoyo mutuo.

Este marco histórico de acción colectiva ayuda en buena medida a comprender la sensibilización y disposición de los variados grupos que se involucraron en luchas larenses como las de la defensa del embalse Los Quediches, del Cerro El Plan o del Cerro La Vieja, y el amplio abanico de acciones y estrategias que emplearon en sus movilizaciones. Ante las desoladoras condiciones de vida que se experimentaron en ciudades como Carora, he preguntado al activista político y ambientalista Edgardo Lugo qué ha permitido trascender esta situación y continuar con la lucha:

> "…quizás pesa sobre nosotros la cuestión de nuestros ancestros. Yo pienso que todavía nos queda ese vínculo con la madre naturaleza que siempre nos ha acompañado, siempre nos ha brindado muchas cosas, ¿no? Y todavía eso es lo que mantiene y nos mantiene a muchos (…) Y te digo, Camacho, que él prácticamente ha sido amenazado con armas largas y armas cortas, y él sigue en esa pelea (…) y como esa es una zona que es un pueblo de indios, (las parroquias) Camacaro y Reyes Vargas, son pueblos de indios, ¿entiendes?" (E. Lugo, comunicación personal, 15 de febrero de 2024).

Lugo en este sentido apela a la ancestralidad indígena que aún está presente en muchas de esas comunidades, que remite a las fuertes e históricas resistencias contra la conquista y colonización, y a un espíritu combativo e insumiso.

Respecto al Cerro La Vieja, estas movilizaciones ya habían surgido en los años 90 y se evidencia en los testimonios de los grupos involucrados una cultura de lucha. El Cronista Municipal de Simón Planas e integrante del Comité Pro Defensa del cerro, Mario Querales, ha afirmado:

> "Estamos pasando una crisis económica fuerte, una crisis política, y que emplea la parte social. Pero nosotros eso no nos ha amilanado. A veces hacemos los sacrificios en nuestro hogar, o si hace falta el pan, falta el gas, falta la luz, falta los servicios públicos. Y para nosotros es parte, nos alimenta seguir luchando por lograr los objetivos (…) La lucha y el sentido de pertenencia del cerro La Vieja nos alimenta y nos fortalece. Y es por eso que, como tenemos tantos años en esto, nosotros es parte de nuestra vida, la lucha por la defensa del patrimonio" (M. Querales, comunicación personal, 22 de abril de 2019).

El relato de Querales evidencia un estrecho vínculo entre vida y lucha: se lucha por la vida, mientras se vive luchando, se convierte en un "alimento", en un modo de vivir, lo que aparece como un motivo trascendental para movilizarse por el ambiente y abordar la crisis nacional.

En el caso del estado Zulia también ha existido una tradición de lucha ambiental fuerte, siendo por ejemplo que las oposiciones a la minería de carbón comenzaron desde el momento en que surgió la explotación, desde la segunda mitad de los 80. En aquel momento, las organizaciones principalmente vinculadas a las universidades zulianas, plantearon las alertas y comenzaron a desarrollar investigación sobre los impactos de la minería; posteriormente, iniciaron acciones de movilización y a construir articulación con indígenas, ecologistas, estudiantes, profesores, campesinos, investigadores, entre otros. El proceso organizativo continuó en los 90 y fue hermanando la lucha ambiental con la indígena, poniendo también el foco en reivindicaciones más sistémicas, como la crítica al modelo de desarrollo energético y por la recuperación de los territorios ancestrales de los pueblos originarios (Muñoz, 2018).

Las comunidades indígenas de la región, específicamente las wayuú, provienen de una cultura que ha sido resistente ante siglos de colonización, con un sistema de sociedad organizado por clanes que existe bajo particulares códigos de actuación social y principios cosmogónicos y míticos. Además, han persistido en ecosistemas desérticos como La Guajira, por lo que el politólogo Philippe Burin des Roziers ha resaltado que "La grandeza de los wayuu viene precisamente de esta capacidad de sobrevivir en un medio hostil sin estar afectado por eso. Si se han vuelto guerreros, es por necesidad." (en Hostein, 2010).

IMAGEN 55. Indígenas wayuu en oposición a la construcción de la planta carboeléctrica en el Guasare. Fuente: Lusbi Portillo https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/mining-guajira-peninsula-wayuu-communities-fight-against



Esto de ninguna manera significa que su cultura no haya sufrido los importantes impactos de la colonialidad y los procesos de modernización, siendo que existen sectores de la numerosa población wayuú en Venezuela que están mucho más 'criollizados' –esto es, mucho más asimilados a la cultura occidental y urbana–, por lo que se dan

diferenciaciones entre ellos, y existen élites de este pueblo que han acumulado riqueza. En este contexto, las comunidades wayuú del Socuy y organizaciones indígenas que han estado en resistencia contra el carbón, como Wainjirawa y Aceiluz, han marcado distancia de los wayuú que se han enriquecido en puestos de gobierno (Wainjirawa y Aceinluz, 2014). Desde esta mirada, el nombre de la organización 'Maikiraalasalii' significa en castellano "los que no se venden". Estas comunidades han apostado por la construcción de formas autónomas de economía y organización con el fin de preservar la vida y poder tener fuerza propia. Incluso, aunque no es parte de la narrativa política y social dominante en Venezuela –como sí lo ha sido por ejemplo en Bolivia−, estos han planteado como horizonte la construcción de un Estado Plurinacional y una Venezuela Post Petrolera, comenzando desde los espacios locales (Maikiraalasalii, 2012).

Otro caso ilustrativo de estos entroncamientos históricos de las luchas en el colapso lo tenemos en las resistencias contra la minería en Bailadores (estado Mérida), una localidad agrícola que es al mismo tiempo uno de los centros poblados más grandes de la zona. La movilización de la comunidad y otros actores articulados entre 2018-2019 se daba en el contexto de una región muy deprimida en términos económicos, del severo declive de los servicios públicos, lo que conllevó a indicadores decrecientes en términos de esperanza de vida, e incluso un dramático aumento en las tasas de suicidio, entre las más altas del país (Páez et al, 2022). Sus movilizaciones se explican por una doble identidad vinculada a su arraigo territorial y a una historia de lucha contra la actividad minera que lleva décadas. Por un lado, el vínculo del bailadorense con la tierra y los sistemas de producción agrícola es muy estrecho, siendo un determinante de sus relaciones económico/sociales. Además, León Moraria, quien fuese uno de los líderes históricos de estas resistencias, destacó en su libro "El fantasma del Valle" –un libro referente sobre este caso−, que también existe una actitud aguerrida para defender la tierra en este pueblo, lo que tiene su origen en la cultura indígena, la cultura mucu (Moraria, 1998). Por otro lado, la explotación minera se registra desde el siglo XIX, aunque con vaivenes, y el interés contemporáneo ha girado en torno al zinc, y en menor medida al cobre, el plomo y la plata. En 1966 cesa la explotación pero diez años después, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos se propone reanudar la actividad, lo cual generó que la comunidad organizada junto con el cabildo de Bailadores buscaran impedir el avance de esta propuesta, logrando su objetivo. En 1977, el diario Panorama de Maracaibo afirmaba: "Es la primera vez, en la historia del país, que un pueblo levanta una protesta frente a lo que muchos venezolanos consideran una bendición, este arraigo a la tierra es honroso y habrá de quedar como gesto frente a un país vendido al Diablo de la codicia" (en ídem).

Con el nuevo intento de reanudar la minería, en 1992 los habitantes de Bailadores junto a grupos ecologistas, docentes y estudiantes de la región, resistieron al proyecto impulsado por la empresa Águila Blanca −representante del consorcio Cominco Resources & Aritmetco (actual Teck Resources Limited)−, logrando nuevamente paralizar estos intentos (La Cruz, 1992; Rivero, 2001). Lo resaltante es que las reacciones de la comunidad y

grupos ambientalistas entre 2018-2019 no tuvo nunca la certeza en ese momento que la carretera que se había construido fuese para un proyecto minero en el Valle de Mocotíes, sino que las movilizaciones se basaron en sospechas, debido a estos antecedentes de intento de reactivación de la actividad. Pese a ello, la respuesta fue rápida y anticipada, y logró convocar a medios y autoridades. Dicha respuesta se sustentaba en la persistencia de la memoria histórica de esta lucha, un acicate y elemento central no solo para movilizar a la población, sino para unificarla en torno a una motivación socioambiental común.

III.II.IV *Factores subjetivos: vocación y liderazgos inspiradores*

En varios casos el factor motivacional estuvo también determinado por el rol de liderazgos inspiradores, y su particular vocación ambiental y de trabajo. Algunas experiencias de conservación que he analizado, se desarrollaron y persistieron en contextos muy complejos, con contrabando de especies donde participan grupos armados irregulares, o mucha precariedad en las condiciones de vida; pero donde el rol de este tipo de liderazgos fue crucial.

En el caso de La defensa de especies animales en riesgo en el sur del Lago de Maracaibo (No. 9), son varias las experiencias de este tipo, como el Proyecto Sebraba (en defensa del jaguar), Sotalia (en defensa de las toninas en el lago), Mapache Ecoaventura o el Grupo de Tortugas Marinas del Golfo de Venezuela, las cuales lograron consolidar un trabajo local y tejer redes de acción con comunidades, empresas, y organismos y fondos internacionales. Se debe recordar que, como se explicó en el capítulo anterior, la zona del sur del lago está plagada de actores armados irregulares y bandas criminales quienes ejercen gobernanzas que condicionan extraordinariamente la vida en estos territorios.

La iniciativa del Proyecto Sebraba, compuesta de un grupo de científicos que está liderado por la bióloga María Fernanda Puerto Carrillo, generó abordajes interesantes en estos contextos. Para ejecutar su trabajo, este equipo lidió con la guerrilla y grupos paramilitares, quienes les imponían las reglas, horarios y áreas donde pueden movilizarse, para no tener que terminar en un fuego cruzado o irrumpiendo en sus actividades ilícitas (Frangie, 2020). En este marco, el grupo fue consolidando un trabajo de investigación y monitoreo de la población de jaguares, campañas y difusión de información sobre su protección, haciendo crecer la visibilidad del problema e incluso logrando su reconocimiento por parte de algunos ganaderos, la disminución de la caza, y el establecimiento de acuerdos con ellos para una gestión más cuidadosa de estos felinos (Carrere, 2020). En diversas entrevistas, Puerto Carrillo ha evidenciado una gran vocación y convicción por su labor, a pesar de este complicado contexto, las cuales están sustentadas en un "amor a primera vista" con la naturaleza (Uribe, 2022) y la necesidad de proteger al jaguar de las numerosas amenazas que enfrentan. "Hemos creado una huella y no podemos parar", ha afirmado en 2022 (en

García, 2022). Su práctica no se basa en ningún modo en la confrontación, sino más bien en el diálogo, la negociación con los actores armados y económicos de la zona, y en una forma más bien pedagógica de abordar el problema –no se registra por tanto, denuncias, protestas o enfrentamiento con los causantes del impacto. Además, tanto Puerto Carrillo como Sebraba han venido alcanzando un cierto nivel de resonancia mediática nacional e internacional, siendo que la bióloga en 2020 fue galardonada con el premio 'Future For Nature', lo que ha reforzado su liderazgo nacional en conservación y ha potenciado el alcance del proyecto.

En otras de estas experiencias se evidencian también estos rasgos de persistencia basados en la vocación y el liderazgo inspirador. La estimulante iniciativa para salvar la Laguna La Reina que ha impulsado la Fundación Ecobrión, a través de su presidenta Bárbara Ordoñez, ha logrado un mayor impacto en medios de comunicación, incluyendo internacionales. Al igual que señaló Puerto Carrillo, Ordoñez indicó que viene de una tradición educativa ambiental que también se dio en su participación por años en diversas organizaciones ligadas a la conservación. Ella nos narraba:

> "…cuando nos tocó migrar de Caracas a Higuerote, sentimos la necesidad de brindarle un poco de ese amor que tenemos por la naturaleza al pueblo que nos estaba abriendo los brazos y cobijando como nuestro nuevo hogar. Por eso, cuando vi la valla publicitaria de un proyecto de construcción en Laguna La Reina, decido junto a mi familia actuar en favor de ella. Y hasta hoy el amor sigue igual y creo que más grande porque ahora también tenemos un compromiso moral con las personas que han creído en las acciones que realiza Ecobrión" (B. Ordoñez, comunicación personal, 8 de abril de 2024).

IMÁGENES 56 y 57. A la derecha, María Fernanda Puerto Carrillo en trabajo de campo en el sur del Lago de Maracaibo. Fuente: Jeanfreddy Gutiérrez (2020). https://efectococuyo.com/la-humanidad/maria-fernanda-puerto-carrillo-jaguar-venezuela/. A la izquierda, miembros de la Fundación Ecológica Brión (Ecobrión) en el humedal costero La Reina. La persona a la derecha es su presidenta, Bárbara Ordóñez. Fuente: Federico PARRA AFP. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221113-la-lucha-para-salvar-a-la-reina-en-venezuela





La vocación ambiental se expresa también como compromiso y afectividad social, los cuales se traducen en efectiva y persistente acción en defensa de la naturaleza y las comunidades, siendo que estas últimas, como se explicó en secciones anteriores, se insertaron en la economía del proyecto de conservación en forma de prestadores de servicios ecoturísticos, gastronomía local y producción artesanal. Esta combinación de vocación con enfoque social, tradición de lucha y liderazgo la pude constatar en otras movilizaciones más allá de la conservación. Por ejemplo, tenemos el caso del Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos (MUADH), que surgió en diciembre de 2021, nutrido fundamentalmente por activistas barriales y organizaciones de derechos humanos. Dicho movimiento, del que hablaré en detalle más adelante, surge en el estado Lara, ha desplegado varias acciones y protestas de calle por el derecho al agua, y fue creciendo hasta articular con colectivos de 10 estados del país. El MUADH ha tenido como uno de sus principales líderes (coordinador del movimiento) y motor de movilización a Alcides Pérez, un activista y educador que ha tenido un rol constante y persistente en las luchas por el agua en la entidad larense. Pérez, ha afirmado:

> "Nos movilizamos para motivar a la gente y sensibilizarla en esta lucha, que su objetivo es construir sentido de pertenencia y tener claro que el agua es vida y un derecho humano (…) Persistimos en esta lucha porque nos damos cuenta que hemos crecido, que nuestro mensaje llega a otras personas y lo más importante, esas pequeñas victorias que logramos motivan a más personas a persistir en esta lucha por el agua". (A. Pérez, comunicación personal, 15 de febrero de 2024).

Al igual que señaló Ordoñez de Ecobrión, nuevamente aparece una vocación de lucha como compromiso con la sociedad, y al mismo tiempo como una motivación para crecer en la lucha. El caso de José 'Cheo' Carvajal, como uno de los integrantes con mayor liderazgo en la Coalición Plantados por los árboles de Caracas, también refleja estos aspectos. Carvajal encarna un tipo de activismo urbano y ciudadano que también se fue consolidando en Venezuela y que, a través de campañas, sistematización de información, acciones de calle, expresiones artísticas, entre otras, persigue cambiar prácticas perniciosas en las ciudades y "exigirles (a las instituciones) que cumplan con sus obligaciones, con su rol" (J. Carvajal, comunicación personal, 3 de mayo de 2024). El vacío institucional, antes que un disuasivo para exigir derechos, es una mayor motivación para la búsqueda de recuperación de la presencia y asistencia del Estado, y sobre todo de los derechos. Para Carvajal, las razones para persistir en esta lucha a pesar de la degradación del sistema político y la vida en general tienen que ver con:

> "…una convicción que va más allá de lo político, es una convicción en relación con la vida, con el respeto a los demás, a los demás seres vivos, a las demás personas, a la sociedad, el pensamiento hacia el futuro, pero también hacia el presente, los hijos, los riesgos que pueda suponer no frenar la acción, porque si uno dejara que siguiera este curso de las cosas, bueno, pronto no vamos a tener posibilidades de revertir muchas cosas (…) esa convicción puede más que cualquier amenaza creo yo" (Ídem).

Liderazgos como el de Carvajal, Bárbara Ordoñez, Alcides Pérez, María Fernanda Puerto Carrillo, los ya mencionados del cacique yukpa Sabino Romero y la bióloga Diana Liz Duque en Caparo, o el fallecido Gustavo Montes, un biólogo y especialista en fisiología y ecología vegetal que logró difundir las alertas por la situación de las piscinas de lodos rojos en Ciudad Guayana, a pesar de que las comunidades locales no tuvieron la disposición para denunciarla públicamente, representan importantes acicates de lucha y acción colectiva. Estos líderes han contribuido a aglutinar y movilizar personas en torno a estas reivindicaciones, contrarrestando las tendencias desmovilizadoras del colapso, e inyectando en cambio fuerzas de inspiración social.

III.II.V *La incidencia de la política y la politización*

En numerosos conflictos, el factor político nacional y las formas de politización que se han desarrollado en la población han tenido una importante incidencia en las orientaciones y motivaciones de las movilizaciones sociales en torno al ambiente. Ciertamente, varios de los ejemplos que he citado en los párrafos anteriores también expresan formas de politización, en la medida en la que los actores sociales trasladan sus problemas y demandas a la esfera política, y asumen posición activa, conciencia y responsabilidad en asuntos políticos, relacionados con lo público (Zürn, 2019), pero también con lo comunitario, los derechos, la justicia y el cuidado de la sociedad y la naturaleza. Sin embargo, me voy a referir en este apartado especialmente a las identificaciones sociales tanto con ideas universales e ideologías del espectro político predominante –desde las izquierdas, centros, derechas y posiciones más extremas− como con los partidos políticos, así como a los posicionamientos que estos grupos movilizados asumen respecto a la disputa entre el gobierno de Maduro y sectores de oposición; y cómo esto está vinculado con las motivaciones para movilizarse en La Gran Crisis.

Voy a destacar primero la persistencia de los sindicatos. Como vimos, en varios casos como los de la industria petrolera o la cementera, los trabajadores organizados tuvieron roles activos e importantes en los conflictos, y en ocasiones pasaron a la cabeza de la lucha. De hecho, a diferencia de las tendencias respecto a la intensidad de las movilizaciones que he presentado, que en general fueron decrecientes hacia la Fase III de la crisis, las protestas y el activismo de los trabajadores se fueron incrementando progresivamente hacia la segunda y tercera fase. Como antecedente histórico, el sector sindical comienza realmente a crecer y estructurarse a partir de 1936, luego de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, viviendo posteriormente varios períodos en su evolución, que consolidaron una tradición política de lucha (Díaz, 2009). En el siglo XXI, estos siguieron muy influidos por ideologías fundamentalmente del espectro de izquierda, aunque en el proceso bolivariano los sindicatos fueron impactados por la polarización política, sea que se dividieron, por un lado quienes dieron un apoyo irrestricto al gobierno, otros que se hicieron disidencias

independientes, o bien los que estuvieron aliados al campo de la oposición tradicional. Su orientación estructural hacia la lucha y el hecho que estén curtidos para enfrentar conflictos con altos riesgos, sus formas de actuación organizada, y sus perspectivas de diagnóstico crítico y transformación de carácter más sistémico, los hicieron un actor combativo en la lucha social.

El factor que va a intensificar los antagonismos tiene que ver con la extraordinaria depresión del salario que hemos analizado en el capítulo 2, que fue haciendo prácticamente insostenible la reproducción de la vida cotidiana; lo que se dio junto a la degradación de las condiciones laborales, la pérdida de derechos, la creciente represión, así como la crítica situación de las comunidades donde se emplazaban las industrias. Estos factores provocaron que se iniciara un ciclo de luchas desde 2018 que se va a agudizar en la Fase III. Las movilizaciones de 2018, además de reclamar por las condiciones salariales, cuestionaron las medidas de corte neoliberal del gobierno de Maduro; continuaron en 2019 junto a protestas por servicios públicos y libertades políticas; y durante 2020 y 2021 fueron movilizaciones de jubilados y de otros sectores como el de la salud. En 2022 incluso crecen hasta convertirse en una oleada de protestas en casi todas las ciudades del país, iniciadas por el sector industrias (abril) y continuada por el magisterial (mayo-agosto), todo lo cual obligó al gobierno a honrar compromisos contractuales y establecer nuevas escalas salariales, lo que tuvo un gran significado dado que se estaban obteniendo victorias en tiempos de dictadura (Bonilla-Molina, 2023; LIT-CI, 2023).

Las movilizaciones de trabajadores se habían convertido en la principal expresión de la protesta en el país, e incluso continuaron en todo el primer semestre de 2023, lo que revelaba una recomposición de las organizaciones y el activismo de este sector. Esto no niega los impactos y secuelas sociales y de salud que el colapso ha dejado en él, que además tuvo a 120 líderes sindicales detenidos y 3.479 casos de amenazas u hostigamiento a trabajadores en el período 2013-2023 (Provea, 2024).

IMAGEN 58. Marcha de trabajadores del sector público, específicamente de la salud y educación, además de personal jubilado. Caracas, marzo 2023. Fuente: REUTERS/Leonardo Fernández Viloria. https://www.infobae.com/venezuela/2023/03/23/trabajadores-publicos-retomaron-sus-protestas-en-caracas-por-los-bajos-salarios/



La disputa política nacional entre el gobierno y la oposición ha estado en el centro de todo el ámbito de conflictividad que se ha desarrollado en el país, y es definitivamente un factor muy determinante en la movilización social. Esto tienen también raíces históricas en la centralidad política que tuvo el Petro-estado como el principal agente de progreso y de dinamismo económico; en una cultura presidencialista fuerte, esto es, con gran concentración de poder y legitimidad en la figura del presidente de la república, que predomina en el país desde el siglo XIX (Márquez, 2004); y en el peso de los partidos políticos como agentes de movilización, que perduró en la crisis aunque con el desgaste que ya venía desde finales del siglo XX. Por estas razones, la disputa gobierno-oposición también suele expresarse de una u otra forma en los conflictos socioambientales analizados, y con frecuencia, el posicionamiento de los grupos movilizados respecto a esta aparece como otra motivación de peso para continuar en la lucha a pesar de las condiciones de la crisis.

Hay variadas formas en que esto se evidencia. Primero, si bien la sociedad venezolana en general se pudo ver desalentada en sus movilizaciones ante la depresión económica, las derrotas de las movilizaciones nacionales de 2017, la represión y la consolidación del régimen de Maduro, por otro lado, el descontento popular se fue incrementando notablemente, buscando ocasiones y canales para expresarse, lo que general, pero no únicamente, ocurría en período de elecciones (presidenciales, regionales, entre otras). Sin embargo, luchas como la defensa del arbolado urbano de Caracas fue uno de esos canales de posibilidad de expresión y desahogo social, esta vez articulada a una causa ambiental. Sobre las razones políticas que motivaron a la gente a unirse espontáneamente al movimiento, José Cheo Carvajal nos dice:

> "…la animadversión hacia las autoridades municipales por su evidente complicidad con los intereses económicos que promueven estas acciones, hizo que se aglutinaran muchos descontentos que van más allá de lo ambiental. Y creo que, luego de una larga frustración en el ámbito político, la irrupción de una causa común tan noble e irrefutable, hizo que muchos se sumaran (…) casi que descargar la rabia o la sensación de ¡esto hay que denunciarlo! y Plantados apareció e irrumpió en la escena como con esa impronta de recibir información, centralizar información regada por allí y darle difusión" (J. Carvajal, ibíd.).

Evidentemente, la conflictividad por la defensa del arbolado de una ciudad como Caracas presenta muchas menos tensiones y controversias que los conflictos por oro, tierras o petróleo, y emergió como una causa común de más fácil convergencia, lo que posibilitó que se haya convertido en un espacio propicio para canalizar el descontento.

Por otro lado, hubo varios grupos de actores movilizados que fueron parte de los procesos de politización impulsados por el gobierno de Chávez. Esto se tradujo en iniciativas y acción colectiva de estos actores inspirados en los ideales del ecosocialismo y el '5to Objetivo del Plan de la Patria' de contribuir a la preservación de la vida en el planeta, en el proyecto político bolivariano de Chávez y/o en la motivación de 'defender la revolución". En el caso de los movimientos campesinos y comuneros que se movilizaron en defensa del

Valle del Turbio, estos estuvieron muy influidos por los procesos organizativos que se desarrollaron en el proceso chavista, que devinieron en figuras como los consejos comunales, consejos campesinos y comunas. Además, cuando Chávez ejecutó las expropiaciones de fincas productoras en dicho valle en 2006, por un lado, propuso un plan agrícola y de recuperación ecológica de la zona que fue tomado como bandera por estos movimientos, incluso posterior a la muerte del presidente. Por otro lado, ante el malestar de los terratenientes expropiados, la zona quedó mucho más marcada por la polarización, lo que implicaba la petición del gobierno a sus seguidores a plantear una leal 'defensa de la revolución'.

Estos campesinos y comuneros, además de reivindicar el 'legado de Chávez', estuvieron movidos por la idea del ecosocialismo y la agroecología, con una reivindicación de las culturas locales y su propia ancestralidad indígena (Movimiento Popular Ecosocialista en Defensa del Valle del Río Turbio, 2022). Francisco Cañizales, ambientalista larense vinculado a estas luchas, explicó las motivaciones de las mismas: "…se trata de defender los Derechos de la Madre Tierra, restaurar un valioso ecosistema traumatizado por el capitalismo extractivista, porque es un deber moral enfrentar los delitos ambientales y porque debemos cultivar un mundo donde el pueblo disfrute del 'Vivir Bien', bajo el enfoque agroecológico" (F. Cañizales, comunicación personal, 17 de febrero de 2024).

Se debe agregar que sus movilizaciones también entraron en cierta contradicción con la política del gobierno de Maduro, por lo que la defensa del "legado de Chávez" incluyó cuestionar los 'desvíos' en los que aquel habría incurrido respecto al proyecto original. Pese a que estos movimientos plantearon varias acciones para oponerse a la expansión de las areneras, esto en realidad nunca implicó una confrontación directa con el gobierno.

Las organizaciones campesinas en Venezuela también surgieron luego de la muerte del dictador Gómez, en muy buena medida bajo la tutela de los partidos políticos, por lo que tuvieron poco margen para desarrollar autonomía. Entre los principales partidos que tuvieron incidencia en estas estuvo el Partido Comunista de Venezuela, aunque el que predominó fue Acción Democrática (Moneada, S/F). De manera que había una cierta tradición organizativa, pero esta tenía menores fortalezas en comparación con otros gremios del país. Con la llegada de Chávez, las organizaciones campesinas se afiliaron masivamente al proceso bolivariano y, al igual que ocurrió con los grupos sociales movilizados en el caso del Turbio, con los ambientalistas que promovieron la creación del PN Caura, y otros más de tendencia chavista, estas entraron en los esquemas organizativos del Estado y asumieron el proyecto político bolivariano como suyo. Algunas reivindicaciones vinculadas al acceso a la tierra y la asistencia a los campesinos se materializaron con Chávez; sin embargo, muchas de estas fueron revertidas por Maduro, lo que generó también contradicciones con estos sectores sociales (Teran-Mantovani y Jiménez-Lemón, 2022).

Varias de las comunidades y organizaciones campesinas que han sido examinadas en los conflictos socioambientales en estudio, tuvieron el apoyo de la Plataforma de Lucha

Campesina (PLC), un ámbito de articulación nacional que fue formado en 2018 para evitar la disgregación de los diferentes colectivos, consejos y cooperativas del sector, y enfrentar "el retorno del latifundio". Además de las motivaciones particulares que pudimos analizar en las luchas campesinas territoriales, y a pesar de las contradicciones mencionadas que pudo haber entre este sector y el gobierno de Maduro, la PLC ha reivindicado con claridad su apoyo al proceso bolivariano, con el compromiso de defenderlo, así como la ideología enarbolada por los voceros del mismo.

Uno de los líderes más visibles de la PLC, Jesús Osorio, señalaba en una marcha en enero de 2019: "Nosotros el pueblo campesino, nuevamente sale a la calle para decirle al mundo entero que nosotros escogimos un sistema de gobierno (el chavista) y nosotros estamos dispuestos a defenderlo en el escenario que sea" (Tatuy Televisión, 2019). También señaló: "…estamos construyendo un equipo allí, con conciencia, bastante significativo. Cae (muere) el camarada Osorio, no importa, nos cantamos la canción de Bella Ciao, si me entiendes, otro agarrará el fusil y eso fue lo que enseño Chávez, me entiendes" (J. Osorio, comunicación personal, 3 de julio de 2019). De acuerdo a Osorio, esto implica desplegar una lucha desde una conciencia nacionalista y revolucionaria, contra el imperialismo y la burguesía, por "Bolívar, por una Venezuela donde nosotros vivimos", y para alcanzar la productividad, en "la pelea por la Venezuela potencia" (ídem.). Ideas como estas constituyen formas de politización que otorgaron sentidos trascendentales a las luchas, en este caso vinculadas a la supervivencia del proyecto político, y por ende, del gobierno de Maduro. Sobrevivencia política está, en este caso, asociada a la sobrevivencia del movimiento.

IMAGEN 59. Integrantes de la Plataforma de Lucha Campesina, en el marco de la 'Marcha Campesina Admirable', julio 2018. Fuente: ALBA TV https://www.resumenlatinoamericano.org/2018/07/25/venezuela-el-campesinado-apoya-la-revolucion-y-a-maduro-pero-se-rebela-contra-latifundistas-y-sus-sicarios/



En cuanto al campo de la oposición tradicional, el salir del gobierno de Maduro ha sido un objetivo supremo, y evidentemente esto tuvo impacto en las orientaciones de muchas de las movilizaciones evaluadas. En numerosos de los conflictos, representantes de partidos políticos de oposición participaron e incidieron en estos, como se vio con las activas denuncias de los diputados Carlos Andrés Michelangeli (partido Primero Justicia y Mesa de la Unidad Democrática) y Antonio Barreto Sira (Acción Democrática) por la acumulación de montañas de coque en el Complejo Jose A. Anzoátegui. En el caso de la defensa de los morros de Macaira, el partido Voluntad Popular estuvo entre los impulsores de las denuncias y las movilizaciones; en el caso del embalse Los Quediches, varios integrantes del movimiento han sido activistas políticos de partidos de oposición; y en el conflicto por la contaminación que genera la cementera de Guanta, aunque no estuvieron liderando la lucha, partidos como Voluntad Popular y Primero Justicia son los que tomaron las acciones más fuertes y constantes en el tiempo –como la persistente denuncia de la situación ante entes públicos como la Fiscalía, Ministerio del Ambiente, Gobernación de Anzoátegui o la Vicepresidencia de la República, entre otros.

Podemos también, brevemente, volver a mencionar el significado existencial que para los pemón tuvo la confrontación con el gobierno de Maduro en los conflictos territoriales que analizamos, y cómo esto se tradujo en la participación de los indígenas en acciones como los intentos de introducción de ayuda humanitaria a Venezuela, en el marco de la declaración de la Presidencia Interina de Juan Guaidó y los intentos de la oposición de derrocar al régimen chavista, con apoyo del gobierno de Donald Trump.

Finalmente, hay que mencionar el rol de la Asamblea Nacional (AN), la cual representó el segundo espacio de conflicto más relevante entre el gobierno y la oposición, y que finalmente Maduro terminaría desconociendo. Desde la AN se recogieron numerosas de las denuncias de los grupos movilizados, específicamente en la Comisión de Ambiente, donde se hacían audiencias y se registraban los testimonios y la documentación correspondiente, para luego generar declaraciones públicas y tratar de incidir en la situación. El partido "Movimiento Ecológico de Venezuela" canalizó el caso del muy precario servicio de agua en Ciudad Guayana a través de la AN; Luis Gil, ex concejal opositor en la cámara municipal, presentaba ante dicha comisión informes y pruebas del daño ambiental causado por la cementera de Guanta; y en casos como el de Los Quediches y Cerro La Vieja, los actores de las luchas lograban que diputados se presentaran en territorio y constataran sus denuncias.

Fue una constante el denunciar al gobierno de Maduro a través de asambleístas muy mediáticos, y de la labor de la Comisión de Ambiente, lo cual sirvió tanto a los grupos movilizados como apoyo a sus luchas, como para nutrir la crítica al régimen chavista, en medio las disputas por el poder. El muy controversial proyecto Arco Minero del Orinoco entró en niveles altísimos de politización, por las razones que he mencionado en secciones anteriores, y en el conflicto se involucró la AN con múltiples pronunciamientos

condenando el decreto que lo creó; Juan Guaidó pedía que fuese denunciada la situación a nivel internacional; incluso sectores críticos del chavismo y exministros de Chávez también se movilizaron en contra; y en julio de 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un informe sobre "las violaciones de los derechos económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco", lo que dio aún más resonancia internacional al caso. De manera que, estos actores y acciones políticas fueron también factores de peso en las movilizaciones en el colapso.

IMAGEN 60. Representantes locales de Altagracia de Orituco llevan denuncia sobre la minería en el Monumento Natural Morros de Macaira a la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional. Fuente: Infórmate Altagracia. https://www.facebook.com/InformateAltagracia/photos/a.255056668194729/951210321912690/?type=3&theater



III.II.VI *Reacción y resolución de las necesidades más elementales al norte del Orinoco: extracción, intersección y politización de la sobrevivencia*

Un sexto y último aspecto a analizar en profundidad tiene que ver con los grupos sociales que están inmersos en dinámicas de muy intensa precariedad respecto al acceso a los elementos más básicos de subsistencia −alimento, agua, salud, aire limpio, etc.−; y que reaccionan y priorizan la resolución inmediata de estos urgentes problemas que impiden el sostenimiento de su vida cotidiana. Estos grupos están dentro de los tipos de orientación 'Lucha por el Acceso Básico a Medios de Vida Ecológicos' (LABMVE), 'Extracción de Recursos Naturales' (ERN), y 'Sobrevivencia' (S) y, habiendo ya examinado la minería ilegal en pueblos indígenas en la Amazonía, evalúo estas dinámicas ahora en los grupos movilizados al norte del Orinoco (generalmente no indígenas).

Pongo el foco en varias facetas, aristas, respuestas, perspectivas y ramificaciones que se desprenden de dichas dinámicas, que van desde actitudes predatorias, hasta resistencias y algunos canales de posibilidad transformativa; desde disputas muy precarias hasta otras que lograron llevar sus demandas a la arena pública y política. Examino específicamente tres formas generales en que esto se desarrolló, de menor a mayor impacto en los conflictos: una, la extracción/predación por subsistencia y sus matices; dos, la manera en la que lo ambiental se cruzó o intersectó con luchas de otra índole; y tres, cómo en algunos casos se pasó de la precariedad extrema a politización de la sobrevivencia.

III.II.VI.I Matices en la extracción/predación por subsistencia

Cuando se analizaron en secciones anteriores el tipo de orientación de las luchas pudimos constatar una proporción importante de iniciativas sociales de ERN que podían tener variados objetivos. Si bien, por ejemplo, algunos individuos buscaron formas de enriquecimiento con el contrabando del cardenalito (Caso 15); proliferaron llenaderos ilegales de agua aprovechados por hoteles, agropecuarias, clubes y complejos turísticos en el municipio Torres (Caso Los Quediches – No. 13); o como vimos en el caso de la RF Caparo, varias familias participaron en la ocupación ilegal de tierras, lo cual estaba coordinado por traficantes del recurso; lo cierto es que la gran mayoría de estas iniciativas tuvieron como propósito la sobrevivencia. Los extractores artesanales de arena y granzón que operan en el Turbio, también llamados ‘paleros’, a pesar que su actividad era ilegal, afirmaban que es el único sustento que tienen para vivir y sostener a sus familias (El Impulso, 2018), y que son perseguidos y detenidos por la Guardia Nacional. Situación similar la presenciamos con los mineros artesanales de carbón en Lobatera (Táchira), actividad que aumentó debido a la crisis, sumándose fundamentalmente las familias más pobres de esta zona y otras aledañas; o bien, con los campesinos que sembraron malanga en la Sierra de Perijá.

No obstante, se constataron casos más extremos y contradictorios. Varias iniciativas de extracción de especies animales la realizaron integrantes de la población no para la comercialización, sino para sortear el hambre, sobre todo en el período de hiperinflación, como por ejemplo ocurrió con las toninas en el lago de Maracaibo, o con flamencos, tortugas marinas, burros, entre otros (Gutiérrez-Torres, 2018). En esos mismos años, el PN Laguna de Tacarigua se vio abarrotado de habitantes locales y de zonas aledañas que produjeron una situación de sobrepesca en el ecosistema, básicamente para poder llevar alimento a sus casas (Murolo, 2018). Por otro lado, y ante las muy severas carencias de gas que predominaban en todo el país, se multiplicaron extracciones de madera para poder cocinar por parte de comunidades, como se vio en la Zona Protectora Mitar Nakichenovich, la cual fue usada por los vecinos como fuente de abastecimiento (Torres y Castillo, 2022). Y en el municipio Torres, donde predomina el ecosistema semiárido y la escasez hídrica presenta mayor gravedad, los grupos movilizados en defensa de Los Quediches también

fueron confrontados por otros integrantes de la población local que se aprovecharon del desvío de ríos que había provocado el conflicto (W. Montes, comunicación personal, 10 de noviembre de 2018).

Hay casos donde la contradicción fue aún más evidente en la medida en la que el acto de sobrevivencia atentaba contra la propia salud personal y colectiva. Por ejemplo, la terrible crisis sanitaria que se dio en Maracaibo por el colapso del servicio de aseo público había provocado que se acumularan grandes montones de basura en toda la ciudad, generando una situación muy difícil para los habitantes. Como respuesta ante esto, numerosos vecinos comenzaron a quemar la basura en sus barrios para tratar de deshacerse de alguna manera de ella, lo que ha sido uno de los principales factores de la contaminación del aire en la ciudad, con los consecuentes impactos a la salud. Por otro lado, algunos de los habitantes que recurrieron a la incineración, también lo hicieron en forma de protesta de calle, y señalaron que de esa forma podían obtener respuesta de las autoridades, dado que la policía se acercaba a sofocar el incendio y retirar los escombros (Pérez, 2018; Salas, 2018). Al mismo tiempo, otros vecinos protestaron por cómo el aire se volvía irrespirable en sus barrios.

IMÁGENES 61 y 62. A la izquierda, se documenta la matanza de flamencos en la laguna de las Peonías, Maracaibo (Zulia), probablemente para consumo humano. Fuente: Ingeniero Alexis Quintanillo, https://news.mongabay.com/2018/05/venezuelas-hungry-hunt-wildlife-zoo-animals-as-economic-crisis-grows/. A la derecha, quema de basura en la ciudad de Maracaibo. Fuente: Mariela Nava, https://cronica.uno/quema-de-basura-se-agrava-en-maracaibo/





En el caso de Guanta, también se presentaba un dilema similar: la población local, que sufría los impactos de la contaminación del aire por la actividad de la cementera, también afirmaba que esta podía generar empleo e ingresos, y muchas personas cuestionaban una posible reubicación de la planta porque decían traería impactos económicos negativos a los habitantes (Santillana, 2016). Y en el valle de Quíbor, una de las regiones donde se han

registrado los mayores niveles de contaminación por agrotóxicos –con serias secuelas a la salud, como el nacimiento de niños con malformaciones− las iniciativas agroecológicas que cuestionaban el uso de estos químicos quedaron muy relegadas en la crisis, haciendo que se perpetúe la situación de degradación sanitaria.

III.II.VI.II Intersección o 'Luchas cruzadas'

En contextos tan complejos como el del colapso venezolano, por un lado, la depresión económica ha representado extraordinarias presiones para posponer o desplazar las demandas ambientales, ante las urgencias de atender requerimientos inmediatos de alimentación y servicios públicos en buena parte de la población –que estuvieron entre los factores que más movilización generaron en La Gran Crisis. Por otro lado, cuando la protesta es por elementos de la sobrevivencia, las fronteras entre demandas gremiales y sectorizadas tienden a hacerse más borrosas, o quizás integrarse más entre ellas, ya que, por ejemplo, sectores de trabajadores necesitan imperiosamente también acceder al agua o tener aire limpio, y no pueden obviar estas peticiones. En este sentido, existen movilizaciones donde se yuxtaponen y/o combinan varias reivindicaciones o demandas simultáneamente, siendo que la demanda ambiental o en defensa de la naturaleza puede quedar entremezclada, difusa, o ser secundaria en estas. A este tipo de mezcla las llamaré 'Intersección' o 'Luchas cruzadas'.

Los ejemplos en el caso venezolano son muy numerosos dada la muy generalizada carestía de elementos para la reproducción de la vida. En el caso de pescadores en la península de Paraguaná, en el conjunto de sus reclamos estuvo del acceso a la gasolina y reclamos por la degradación de los servicios públicos, además de las denuncias por contaminación por derrames petroleros –algo similar a lo que vimos en Maripa con habitantes criollos, indígenas y afrodescendientes, que articularon y conectaron estas demandas con sus reclamos contra la instalación de balsas mineras. En estos casos, lo ambiental no estuvo a la retaguardia e incluso representó una de las principales reivindicaciones de los grupos en lucha.

Se debe señalar que la gasolina, aunque es un combustible fósil asociado al cambio climático y la contaminación, es un bien crucial para que campesinos, indígenas y pescadores continúen con su trabajo de subsistencia. En los períodos donde la escasez de la misma ha sido más aguda, se convierte en una reivindicación principal, sin que esto implique que, en algunos casos, desaparezca la demanda ambiental.

En otros conflictos, las peticiones orientadas a lo ambiental aparecieron más bien de manera secundaria o subyacente, pero integrada, debido a los impactos del colapso. En la fase de mayores protestas contra la actividad de la cantera en Naiguatá, estas se unieron a peticiones por la falta de alimentos y agua. Ante los impactos por la contaminación del aire que provocaba la quema de basura en el vertedero de San Josecito (Táchira), vecinos

trancaban calles para pedir la atención urgente del lugar, mientras que comunidades aledañas como 'Walter Márquez' y 'Hugo Chávez' cerraban la vía de acceso al vertedero por varios días, como medio de presión para exigir los servicios de agua potable, gas doméstico y electricidad (Diario Los Andes, 2020). Y pese a la extraordinaria contaminación que reina en la laguna de Sinamaica, prevalecen denuncias de sus habitantes sobre la ausencia de servicios públicos, las enfermedades que predominan en la zona, la inflación y la falta de empleos, lo que se dio junto a los señalamientos más bien secundarios de contaminación del cuerpo de agua y la disminución de especies para la pesca (Montiel, 2016).

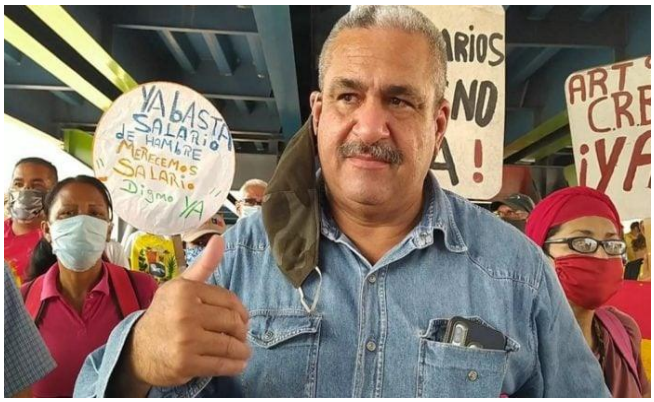
En las protestas de los trabajadores también se evidencian numerosas intersecciones o luchas cruzadas. Los empleados de la cementera Vencemos pusieron en primer lugar en el orden de prioridades las reivindicaciones de tipo salarial y de mejoras en las condiciones laborales, pero se debe reconocer que también exigieron que se aborde la severa contaminación que genera la industria, en muy buena medida porque los estaba impactando directamente a ellos, y a sus familiares que habitan en Guanta. Similar situación vimos en los trabajadores de la empresa forestal estatizada Cartones de Venezuela, que demandaron permanentemente el reconocimiento de salarios y bonos adeudados, que se investigaran casos de corrupción dentro de la empresa y que se recuperaran los niveles de producción de años anteriores, pero también denunciaron la extracción ilícita de madera (Figueroa, 2022).

Respecto a la industria petrolera, es importante subrayar que en la tradición sindical del sector, lo ambiental ha tenido un lugar bastante marginal, pero el colapso de la industria abrió y expandió múltiples fuentes de impacto (laboral, sanitario, socioambiental) que favoreció una mayor diversificación de demandas. El caso del dirigente sindical y director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Eudis Girot, es emblemático. Además de su influencia en la organización de manifestaciones para la exigencia por mejoras salariales y denuncias por corrupción en la producción de gasolina, Girot se convirtió en una de las voces más agudas y persistentes en lo que tiene que ver con la denuncia y la movilización por los impactos sociales y por contaminación ambiental que generó PDVSA. El dirigente había señalado que el Complejo Industrial Petrolero de Jose podría ser la instalación más contaminante del nororiente de Venezuela, afirmó que los trabajadores petroleros de esta región son lo que tienen la más alta incidencia de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis, además de enfermedades coronarias y cáncer (Connectas, 2020), pero indicó que en realidad "Todos los trabajadores petroleros están enfermos, sin excepción (…) Los trabajadores de la industria están condenados a muerte" (Camacho, 2020). Como resultado de su intenso activismo, el gobierno de Maduro detuvo a Girot en noviembre de 2020, convirtiéndolo en un preso político por sus denuncias socioambientales. A pesar de que Girot no asumió la identidad de ambientalista, en un espacio donde coincidí con su esposa, Rosario Ríos, mientras Girot estuvo preso, ella comentó: "su lucha es también ambiental".

En todo caso, es posible afirmar que en estos contextos lo ambiental también puede persistir y/o coexistir con otras demandas sociales, que incluso pueden parecer contradictorias entre sí; pueda tomar otras formas, presentarse con otra intensidad, o bien aparecer subyacente en otras reivindicaciones.

IMÁGENES 63 y 64. A la izquierda, trabajadores de Vencemos Guanta protestan frente la alcaldía exigiendo más inversión y menos contaminación. 10/01/2018. Fuente: Israel Caraball. https://twitter.com/IsrraelCaraball. A la derecha, Eudis Girot en una manifestación en 2020. Fuente: https://elpitazo.net/oriente/perfil-eudis-girot-el-sindicalista-que-ha-develado-desfalcos-en-pdvsa/





III.II.VI.III De la precariedad extrema a la politización de la sobrevivencia

Una tercera forma se dio más allá de la extracción/predación, de la incorporación social a las economías ilícitas, o de la migración, entre otras respuestas similares ante la extrema precariedad, para en cambio construir acción política y tratar de transformar la situación. Tres casos pueden ser mencionados y analizados al respecto: las protestas de los indígenas yukpa en Caracas; las de los pescadores en la península de Paraguaná contra PDVSA; y las diversas luchas por el agua en Venezuela junto a la realización de los Encuentros Nacionales en Defensa del Agua.

Como fue expuesto en otras secciones, la violencia contra los yukpa, en especial con el asesinato del cacique Sabino Romero, y los impactos de la crisis en la Sierra de Perijá, fueron afectando seriamente sus luchas por acceso a sus tierras y contra la minería de carbón. Las comunidades fueron quedando en el abandono, siendo azotadas por graves problemas de salud, con alta incidencia de malaria, leishmaniasis, hepatitis, tuberculosis, enfermedades gastrointestinales, de la piel, respiratorias, así como desnutrición infantil, entre otras. A esto se suma la inexistencia de servicios públicos mínimos; los severos impactos que les ha dejado la ocurrencia de inundaciones y deslaves en la zona, con saldo

en fallecidos; el colapso o destrucción de las vías de acceso y comunicación de la zona –lo que además les dificulta sobremanera comerciar sus productos−; o la presencia del ELN, quienes pueden utilizar a integrantes de las comunidades para el contrabando de ganado (Camargo, 2020). Ante este contexto, sus luchas, que tuvieron inicialmente un perfil ambiental, pasaron a ser una resistencia fundamentalmente para sostener la vida y no desaparecer, además de conservar sus territorios.

Sin embargo, esto no supuso una completa retracción de sus luchas. De hecho, se mostraron acciones aguerridas que no solo se dieron en sus territorios, sino disputando directamente con los principales actores políticos y estatales de la región y a nivel nacional. Mientras a lo interno, en 2021, los indígenas ocupaban varias fincas en las faldas de la Sierra de Perijá (municipio Machiques) para presionar al gobierno de Maduro para que culmine la demarcación de tierras en las cuencas de Yaza y El Tokuko (Angulo, 2021); desde 2018 realizaron varias acciones directas que incidieron en los poderes públicos. Ese año tomaron la carretera Machiques-Colón por demandas sobre la situación de salud (Codhez, 2018); realizaron marchas en la ciudad de Maracaibo, obligando al Gobernador a que atienda a los indígenas (Antía, 2020); y en noviembre de 2020, más de 300 yukpas se presentaron en Caracas exigiendo ser atendidos por el Presidente Maduro (Radio Fe y Alegría, 2020), concentrándose en una importante avenida cercana al palacio presidencial, lo que generó además la represión policial y revuelo mediático nacional.

IMAGEN 65. Indígenas de la Sierra de Perijá se concentran en la av. Baralt de Caracas (cercanías al palacio presidencial) y exigen hablar con el presidente Maduro, por sus condiciones de salud. Nov. 2020. Fuente: https://twitter.com/BertilioPerezCH/status/1329211154493829121



El activista indígena Juan Carlos La Rosa, que estuvo por años vinculado a las luchas contra el carbón en esa región, afirmó sobre esa toma de Caracas por parte de los indígenas:

> "Los yukpa si bien no vinieron a traer un mensaje político claro, trajeron un espejo en el que difícilmente la capital, copada por la polarización mediática, se ve. En mucho, es la primera oleada de movilización por hambre, salud y servicios que llega a Caracas. Vinieron como acostumbran, con sus niños, hombres, mujeres, todos hablan a la vez y todos cuentan lo que les pasa (…) El hambre y la enfermedad por hambre que viene en su cuerpos es nuestra hambre y la de los nuestros en todas partes, solo que a ellos no les da vergüenza mostrarla y la traen como bandera" (Camargo, 2020).

Las protestas de los pescadores de Paraguaná tiene algunas similitudes con el caso yukpa. Como examiné anteriormente, por años han sido las comunidades de Amuay y Punta Cardón quienes se movilizaron tanto por los impactos de la contaminación petrolera del Complejo Refinador de esta península, como en oposición al proyecto de expansión del mismo. Estas fueron perdiendo fuerza con la evolución de la crisis, pero simultáneamente se intensificaron dramáticamente los derrames petroleros en el mar –específicamente en el golfete de Coro−, y en consecuencia se fue socavando la actividad de cientos de pescadores de la zona. La combinación de los efectos del colapso con esta situación fue generando un escenario muy crítico para estas familias, en la que algunos pescadores señalaron la ausencia de ingresos económicos, 'escasez de especies' (de peces), desesperación y hambre (VPI Tv, 2024). El pescador artesanal de la zona, Jefferson Pacheco, afirmó:

> "Yo tengo 30 años trabajando en la pesca y nunca había vivido esto que estoy viviendo ahorita, nunca, ni mis hijos, porque cuando la pesca, yo, este derrame antes de que llegara, mis hijos nunca había pasado esta necesidad, que hoy en día se está viviendo. Ahorita lo que hacemos es medio comer, porque no comemos completo (…) Ese daño acabó con ese golfo, que no da la producción que tiene que dar (…) Pescamos 5 días a la semana, son 10 dólares que uno se gana a la semana. ¿Qué alcanzarían 10 dólares para sustentar una familia de 8 personas?" (Ídem.).

La reacción de los pescadores ha sido la de desarrollar fuertes protestas, por lo que tomaron la batuta de las movilizaciones en la península en la Fase III, que además se hicieron persistentes. Ya desde 2017 se daban acciones directas de estos, como el bloqueo con sus lanchas del canal de entrada y salida de buques de los muelles de la refinería de Amuay, para exigir indemnizaciones a PDVSA debido a las afectaciones a la pesca que generó la colocación de tuberías en el mar (Guanipa, 2017). Pero es en 2022 cuando se produce una serie de fuertes protestas, destacando el bloqueo de la entrada de camiones de carga a la localidad de Río Seco en el mes de julio, que se dirigían a la refinería. Los manifestantes señalaron la insostenible situación de los derrames que, como expliqué anteriormente, se mezclaba con la depresión de los servicios públicos y la carencia de combustible (Revilla, 2022). Las protestas fueron de alta intensidad, y resalta el hecho que la península se encontraba militarizada y la represión en su máximo nivel –algo que he constatado en mi visita de campo a la zona, donde había que moverse con suma cautela por la vigilancia de varios cuerpos de seguridad.

En noviembre de ese año se produjo otra protesta destacada, con unas 60 embarcaciones de pescadores de los sectores Punta Cardón, Tiguadare, Médano Blanco y Tacuato, que se concentraban en Punta Cardón para exigir a PDVSA detener el derrame de crudo y gas que se estaba produciendo en el golfete (Villalobos, 2022). La situación no mejoró y las movilizaciones persistieron en 2023 y 2024, con cortes de rutas principales y la retención de vehículos de carga para reclamar indemnización a la petrolera (Notifalcón, 2024). Una aguerrida mujer pescadora artesanal de Río Seco que estaba participando en un corte de ruta en junio de 2023 declaró a medios de comunicación:

> "…el pueblo está arrecho, ya nos cansamos del gobernador, nos cansamos del alcalde, no sirven para hacernos enlace con nadie. Nosotros exigimos: ¡PDVSA da la cara! da la cara, porque están pasando los días y las cosas se van a poner más trinca (más tensas). PDVSA da la cara. Conchale hasta nos tienes pasando con necesidad. Queremos el documento que nos haga el saneamiento de nuestro golfete, que es nuestro trabajo, ese es nuestro implemento de trabajo. ¡Queremos el saneamiento, y queremos respuesta ya!" (en López, 2023a)



IMAGEN 66. Pescadores de varias comunidades de Paraguaná realizan protesta en Punta Cardón, exigiendo a PDVSA atienda situación de los derrames en el golfete de Coro. Noviembre 2022. Fuente: https://elpitazo.net/occidente/falcon-l-desde-el-muelle-de-la-refineria-cardon-pescadores-exigieron-atencion-ante-derrames/

En ambos casos podemos encontrar situaciones manifiestas de desesperación social que no se expresaron en acciones de extracción/predación, ni tampoco en tímidas protestas de baja intensidad, sino en cambio en la irrupción de una movilización que se desarrolló en ámbitos de los más sensibles de la disputa política: los yukpas se aproximan al palacio de gobierno en Caracas, mientras que los pescadores se atreven a bloquear el traslado de insumos de la más poderosa industria del país, en una zona militarizada y en el período donde el régimen de Maduro había consolidado su faceta más represiva y violenta. En ambos casos, se recorrió un camino que fue desde el riesgo de hambre y declive de la reproducción de la vida, al riesgo de enfrentar al poder y vulnerar la propia integridad física. Ambos grupos procuraron protegerse desde una acción colectiva concertada y organizada. En el caso yukpa, sus acciones estaban nutridas también de la tradición y herencia de lucha que he expuesto para el caso de las organizaciones ambientalistas e indígenas del estado Zulia. En

el caso de los pescadores, se combinó su hartazgo con una serie de antecedentes de acciones conjuntas desde varios años atrás que desembocó en las protestas de 2022-2023.

Se evidencia con claridad una más estrecha relación entre sobrevivencia y politización, una forma de politización de la sobrevivencia que además nos muestra otros caminos que pueden tomar las resistencias en condiciones tan deprimidas.

Finalmente, examino las diversas luchas por el agua en Venezuela y la realización de los Encuentros Nacionales en Defensa del Agua como una expresión de cómo luchas fragmentadas o reactivas, que estuvieron básicamente orientadas al acceso más elemental a los recursos necesarios para la vida (en forma de servicios), pueden también evolucionar hacia visiones más sistémicas y formas de organización más estructuradas.

En la variedad de conflictos ecológico-distributivos que se han examinado, hemos podido constatar, por un lado, que el agua es un elemento transversal en los mismos, sea por que suele estar entre los factores impactados por las actividades económicas predominantes, o bien por su alta valoración social. Por otro lado, hay una amplia diversidad de valoraciones y respuestas ante las afectaciones al agua que van, desde las protestas por su acceso y el reclamo por una prestación adecuada del servicio público, como se ve en los casos de comunidades en San Diego de Cabrutica, Barinitas o Ciudad Guayana; defensores de embalses como Los Quediches; protectores de aguas de uso común como los campesinos de El Jarillo o los indígenas kariña de Tascabaña; defensores de reservorios de especies acuáticas como los pescadores en el golfete de Coro o las comunidades de Maripa; hasta los amantes de ríos y lagunas como los wayuú del Socuy, o los conservacionistas en Lagunillas (laguna de Urao) e Higuerote (laguna La Reina).

En un país tan urbanizado como Venezuela el grueso de la población se ha relacionado con el agua en muy buena medida a través del colapsado sistema institucionalizado de distribución a través de tuberías, por lo que es comprensible que la mayoría de las protestas en todo el país tengan que ver con la valoración del líquido como un servicio –carente de su sentido ecológico–, y la asociación que haga la población con el recurso sea fundamentalmente con el grifo que está en hogares y negocios. Por otro lado, como lo mencioné en secciones anteriores, estas protestas, además de ser reactivas, solieron estar poco o nada articuladas entre ellas, por lo que prevalecía la fragmentación.

Sin embargo, hubo algunas interesantes excepciones. Las luchas locales por el acceso al agua que estaban más politizadas, fueron encontrándose en los contextos de lucha política y por los derechos humanos: activismos barriales y comunidades, junto a ONGs, compartían en diversos encuentros su situación crítica respecto al acceso al líquido, además de los otros problemas que los aquejaban, e iban generando reflexiones e ideas para su abordaje. El movimiento por los derechos humanos en Venezuela era un ámbito propicio para ello: en los años de la crisis se expandió y fortaleció, constituyéndose como un frente de asistencia

social, a medida que la situación humanitaria se hacía más grave; y de resistencia, a medida que el gobierno de Maduro se hacía más represivo. De hecho, ha sido uno de los sectores más combativos y desafiantes para el régimen, pudiendo contar además con apoyo de organismos internacionales. Dentro este tejido organizativo se promovieron articulaciones entre organizaciones y una cultura de apoyo mutuo ante los peligros que estas enfrentan en el contexto de un gobierno autoritario. Todo esto favoreció y potenció a varias luchas locales por el acceso al agua, que además fueron incrementando su politización al interpretarla como una lucha por el derecho al agua.

Se fue recurriendo a la exigencia de la obligación constitucional del Estado a proteger el ambiente (Art. 127) y las aguas, que son consideradas de dominio público (Art. 304); además del artículo 5 de la Ley de Aguas (2007) que reconoce que "El acceso al agua es un derecho humano fundamental"; a lo que hay que agregar las normativas internacionales que también reconocen el derecho al agua y al saneamiento, y exigen a los Estados garantizarlos; con lo que se fue dotando de mayor politicidad a las demandas por este recurso, y sobre todo fortaleciendo la exigibilidad de las comunidades y organizaciones que se movilizan por el mismo.

Es en este marco que surgió el Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos (MUADH), del que ya he mencionado que, desde una articulación en el estado Lara, fue creciendo hasta tener proyección en varios estados del país. Desde sus narrativas han insistido en poner en el centro la reivindicación de "el acceso al agua como un derecho" y en 2023 presentaron una demanda contra la institución regional encargada del agua, Hidrolara, ante tribunales administrativos por su deficiente prestación de servicio de agua potable (Camargo, 2024). El objetivo de dicha demanda era también posicionar esa exigibilidad de los derechos consagrados en la normativa nacional, tratando además de crear precedentes para otras iniciativas de este tipo. La organización de derechos humanos Provea ha jugado un rol importante en este proceso y, aparte de acompañar esta acción jurídica, ha venido haciendo un trabajo de monitoreo y generando informes anuales desde 2018 sobre la situación del derecho al agua y al saneamiento, en conjunto con el Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja, el cual está conformado por varias organizaciones sociales, académicos, expertos y miembros de comunidades en riesgo[14].

Es en este contexto que surgía la idea de impulsar un encuentro nacional en defensa del derecho al agua, que estuviese nutrido por líderes sociales y comunitarios de varias partes del país. El primero fue organizado por MUADH junto con Provea para ser realizado en noviembre de 2022 en Barquisimeto, contando con la participación de defensores del agua de los estados Anzoátegui, Caracas, Carabobo, Zulia y Lara. El objetivo trazado fue debatir sobre las diversas aristas del problema de suministro y acceso al agua potable, y buscar

[14] Véase: Reporte derecho al Agua y al saneamiento 2022. https://provea.org/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Agua-21.03.pdf

fortalecer las iniciativas que desde las comunidades se llevan para abordar la situación. El éxito de la propuesta, y la necesidad de seguir incorporando organizaciones y comunidades a la misma, llevó a la realización del segundo encuentro en noviembre de 2023, nuevamente en Barquisimeto, donde se incrementó la participación.

IMAGEN 67. Segundo Encuentro en Defensa de Agua, Barquisimeto (Lara), noviembre de 2023, en el que he participado con una presentación sobre la ecología política del agua. Fuente: Provea



Aunque el grueso de los participantes en el encuentro tenía una perspectiva más enfocada hacia el agua como servicio y el derecho humano a su acceso, hubo un grupo pequeño de ambientalistas que enriquecieron el espacio al plantear visiones más ecosistémicas sobre este elemento, e incluso proponiendo cuestionamientos a la mirada antropocéntrica. En esta línea, se plantearon en los intercambios otras valoraciones del agua basadas en perspectivas ambientales, y sus expresiones en los territorios venezolanos, y algunas de estas comunidades fueron invitadas a participar en el segundo encuentro. Esto fue enriqueciendo mucho más la discusión y ampliando los análisis sobre el asunto del agua. En el largo proceso de intercambio entre organizaciones se fue formando el lema “de la cuenca al grifo”, que integra lo ambiental con el derecho al agua como recurso, reconociendo el ciclo vital y la hidrografía de este elemento, más allá de los servicios públicos. De manera que este proceso de articulación y discusión social ha favorecido una evolución de la movilización que ha ido desde la necesidad a la exigibilidad del derecho humano, y del derecho humano a la ecologización, lo que potencia otras posibilidades de politizar la sobrevivencia y ofrecer perspectivas integrales a problemas locales.

IMAGEN 68. Cierre del Segundo Encuentro en Defensa de Agua, Barquisimeto (Lara), noviembre de 2023. Fuente: Provea



IV. Hacia una ecología política de la sobrevivencia

Como hemos visto, los casos estudiados nos han mostrado una vasta variedad de estrategias y respuestas que pueblos, comunidades y gremios pueden desarrollar para sostener la vida en contextos como el del colapso societal venezolano. Los perfiles y características de los grupos movilizados y sus acciones colectivas, y en particular, los seis aspectos estudiados que componen las principales tendencias de sus orientaciones y motivaciones, nos sirven de insumos para reflexionar, profundizar y construir una más amplia ecología política para estos marcos no convencionales de acción.

Partiendo de este marco, me voy a enfocar específicamente en reflexionar acerca de una *Ecología Política de la Sobrevivencia (EPS)*. En ella, por un lado, se busca poner en el centro esta particular condición para la reproducción de la vida; y por otro lado, explorar el espectro de luchas tan diverso y contradictorio, sus limitaciones y posibilidades, así como otras formas de resistencia, politización y sostenimiento de la vida que, aunque puedan ser reactivas y pragmáticas, también ameritan ser tomadas en cuenta y examinadas, para incrementar el conocimiento sobre la respuesta socioambiental en tiempos de declive societal. En este sentido, la EPS es una perspectiva que navega minuciosa y críticamente en la contradicción.

Para avanzar en la construcción de una EPS, primero presento una aproximación a las interpretaciones que desde la literatura se han desarrollado sobre la noción de

sobrevivencia, con miras a reivindicar una lectura crítica y política de la misma. Exploro cuatro sentidos simultáneos que, desde las luchas sociales y en torno a la naturaleza, están en juego alrededor de la idea de sobrevivencia. Seguidamente propongo una definición y delimitación de la EPS, y qué aportes teóricos puede ofrecer para pensar estas luchas, que nos remiten también a los escenarios del antropoceno. Profundizo en sus pilares y aristas a través de 4 dimensiones de análisis interrelacionadas: los factores de persistencia del ambientalismo en el colapso, la centralidad de la contingencia en las luchas socioecológicas, la economía moral del colapso, y el foco privilegiado en la micropolítica de la reproducción de la vida.

IV.I Contrastando enfoques y perspectivas sobre la sobrevivencia: hacia un abordaje crítico y político

La sobrevivencia es una faceta de la reproducción de la vida que es central para millones de personas a nivel global, mucho más con el notable aumento de las desigualdades sociales en la evolución de la globalización (Harvey, 2001; Galbraith, 2002; Navarro, 2007), y en tiempos más recientes con incrementos de la inseguridad alimentaria, la pobreza multidimensional y la precarización general de la vida, que se agudizó notablemente desde la pandemia (OCDE, 2022; Adler et al, 2023; UNDP, 2024a). Sin embargo, además de ser una situación material para una parte importante de la población, ha sido objeto de estudio para diferentes enfoques teóricos y disciplinas académicas, así como un ámbito que también ha sido politizado en diversos discursos de intelectuales, organizaciones sociales y activistas.

Voy a examinar brevemente estas diversas aproximaciones con miras a esbozar una noción más amplia e integral de la sobrevivencia y, sobre todo, reivindicar una perspectiva crítica y política de la misma. Primeramente, debo destacar que la noción de sobrevivencia que deseo abordar es polisémica, y en ella están en juego al menos cuatro sentidos simultáneos, que pudimos ver de una manera u otra en los actores sociales que he analizado en los conflictos de distribución ecológica.

En el primer sentido, se entiende sobrevivencia como *subsistencia* en la vida cotidiana. La acepción de subsistir se vincula, literalmente, con ‘permanecer, durar o conservarse’, y la subsistencia con el “Conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana” (RAE, S/F). Esta forma es de escala micropolítica –enfocada en personas o familias− y al estar asociada a la cotidianidad, se expresa como un aspecto ontológico de la reproducción de la vida, que se experimenta permanentemente como un imperativo en contextos convencionales, y con más claridad en las clases sociales más desfavorecidas y precarizadas. Por ejemplo, en las protestas urbanas por el acceso al agua en Venezuela, o en la actividad de los ‘paleros’ artesanales de arena y granzón en el Turbio, se evidencia este

sentido de sobrevivencia. Esto además nos revela que, esta particular forma preexiste a La Gran Crisis, por lo que millones de venezolanos ya la tenían internalizada en sus prácticas y estaban parcialmente curtidos para los escenarios que tuvieron que experimentar posteriormente en el colapso.

El segundo sentido de la sobrevivencia tiene que ver con *seguir existiendo* a pesar de alguna circunstancia que pueda causar la muerte, la ocurrencia de algún evento impactante, o ante medios escasos o en condiciones adversas (RAE, S/F). Esta forma también es fundamentalmente de escala micropolítica, y se podría asociar más a contextos no convencionales, donde la vida está en un riesgo mucho mayor e inmediato –mantenerse vivo se convierte en una prioridad. Por ejemplo, la pudimos ver con la conformación de guardias indígenas en la Amazonía para enfrentar a los actores armados legales y criminales, y las periódicas masacres que ocurrían en sus territorios; o con la situación de los pescadores de la península de Paraguaná ante la situación de hambre.

Estos dos primeros sentidos que he descrito, han sido el objeto de campos de estudio en ciencias muy diversas. En la ecología humana se ha estudiado la relación entre la supervivencia de especies, el cambio ambiental y el comportamiento humano. Dornstreich (1977), a partir de su análisis del caso de los Gadio Enga en Nueva Guinea, examinó los vínculos fundamentales que hay entre los sistemas de acceso al alimento, las características ambientales y los rasgos de las sociedades tropicales de pequeña escala, todo lo cual configura una diversidad de patrones de subsistencia que varía, dependiendo de cómo se da dicha relación. McCool et al (2022), desde la combinación de la antropología ecológica con la arqueología, estudiaron cómo la variabilidad en las condiciones ambientales y las economías de subsistencia tenían incidencia en el surgimiento de formas de violencia, lo que han caracterizado como una 'ecología conductual de la violencia'.

En medicina se desarrolló el "análisis de supervivencia", orientado a buscar la probabilidad y tiempo de ocurrencia de un 'evento' (que puede ser la muerte, una enfermedad o la recuperación) a partir de estadística aplicada.

Para mi análisis, voy a profundizar especialmente en el abordaje de la subsistencia/sobrevivencia desde las ciencias sociales y políticas. Desde una mirada más amplia, este aspecto ha sido uno de los objetos de problematización en obras referentes como las de Karl Marx –entendido como base y orientación material del trabajo, que ha sido capturado por el capital–; del politólogo James Scott (1977), quien estudió la subsistencia como un mínimo vital que representa el principio ético de acción política colectiva del campesinado–; o del economista Karl Polanyi, quien la abordó como un ámbito vital y una 'relación social' fuera del mercado, vinculado a su idea de 'economía sustantiva' (1977); por mencionar ejemplos emblemáticos.

En todo este espectro de estudio, quisiera poner el foco especialmente en el rol de los sujetos en las dinámicas de sobrevivencia, por lo que voy a recurrir a los diversos análisis

orientados a las "estrategias de sobrevivencia". Trabajos sobre el tópico han sido desarrollados fundamentalmente desde la sociología y la sociodemografía, los estudios rurales, la psicología, la economía política, las ciencias políticas, la historia económica o la antropología.

Los estudios que abordan estrategias de sobrevivencia, también denominadas 'estrategias de reproducción' o 'estrategias familiares de vida' –entre otros términos−, han generado durante muchos años una amplia literatura, aunque esta se ha desarrollado en buena medida desde visiones convencionales de la sociodemografía, los estudios sobre la pobreza o del desarrollo, o bien desde una antropología más tradicional. Estos enfoques se orientaron a examinar 'comportamientos', esfuerzos y/o soluciones de actores rurales –donde tradicionalmente la miseria fue más intensa− u otros que no lograban cubrir las necesidades familiares o 'insertarse en la estructura productiva nacional', con el fin que pudiesen ejecutar medidas paliativas y administrativas ante la situación de pobreza, o maximizar los recursos económicos con los que contaban (Lacabana y Cariola, 2003; Pellegrino y Vigorito, 2004; Alderete et al, 2009; Vargas-Jiménez, 2022). Desde estas perspectivas, el campo de análisis restaba politicidad a los sujetos, que quedaban acotados a las mejores estrategias de sobrevivencia que podrían mostrar en un caso determinado, y generalmente subordinados al rol de empresas, organismos multilaterales o instituciones del Estado, sin que se planteara algún cuestionamiento a las relaciones estructurales de poder (véase esta discusión en Hintze, 2004; Moguel-Viveros y Moreno-Andrade, 2005; Arredondo-Velázquez y González-Alcalá, 2014).

No obstante, existen también un conjunto de trabajos que desarrollaron relevantes perspectivas críticas en el análisis de las estrategias de sobrevivencia. En este esfuerzo, los Estudios Rurales críticos –en combinación con otros enfoques− tuvieron un rol muy importante y ofrecieron extraordinarios aportes que cuestionaron las visiones convencionales que colocaban al campesino como un sujeto pasivo, "atrasado" y poco proclive a la acción política. Leslie Anderson (1994) ha propuesto la existencia de una ecología política campesina (moderna) que dio lugar a la emergencia de una mentalidad ecológica particular que impulsa a los campesinos a actuar políticamente, evitando ser tragados por los procesos de modernización. Al estar la sobrevivencia vinculada a sus medios de vida, estos establecieron un conjunto de métodos y estrategias políticas adaptativas y cambiantes ante las circunstancias –similar a la 'ética de la subsistencia' en James Scott−, tales como la diversificación productiva, variadas formas de uso de la tierra, empleo flexible del trabajo familiar, negociación con los procesos de modernización, entre otros.

Del trabajo de Anderson puede desprenderse una idea fundamental que encontramos en otros autores: *la sobrevivencia es también una forma de resistencia*. Esta idea se halla en análisis como el de Steven Stoll (2014), quien desde la historia ambiental y la economía política del capitalismo, analiza cómo los huertos de subsistencia, pese a estar 'capturados'

por la clase capitalista británica y estadounidense (entre 1880 y 1930) para externalizar salarios, fueron también un mecanismos de autonomía, autoabastecimiento y resistencia para los trabajadores, ante el avance de las políticas de dueños de tierras y empresas mineras. Del mismo modo, Flor Edilma Osorio (2001), al estudiar los desplazamientos de población campesina por parte de actores armados en Colombia, rompe con concepciones de pura victimización de estos grupos rurales para en cambio reconocer el esfuerzo y la capacidad de estos para desarrollar una serie de estrategias de sobrevivencia, con el fin de resguardar sus vidas. Para Osorio esto expresa la resistencia concebida como una categoría multidimensional, que también contempla la resistencia a la muerte en la guerra, a la miseria, a la injusticia, y con apuestas a la transformación de situaciones, lo que va más allá de la supervivencia más elemental. En Ramírez (1991) no solo se ponen de relieve estas estrategias de sobrevivencia llevadas adelante por mujeres en Colombia, sino también cómo desde este accionar fue componiendo el movimiento de mujeres en ese país.

El trabajo de Mora (2008) va en la misma línea, al reconocer que las estrategias de vida campesina y sus conocimientos tradicionales son fuentes de resistencia no solo para sobrevivir, sino también para enfrentar las dinámicas de despojo y homogeneización cultural que por décadas los han asediado.

Desde la geografía feminista, en Gilbert (1998) se reconocieron las resignificaciones que las mujeres trabajadoras pueden hacer en la relación entre enraizamiento espacial y estrategias de sobrevivencia; y Rocheleau (1991) detalla cómo comunidades kenianas, especialmente de mujeres, desarrollaron una serie de estrategias –como la diversificación de cultivos, el uso de técnicas agrícolas sostenibles y el fortalecimiento de redes de apoyo comunitario− para adaptarse a los cambios ambientales que se dieron en el país. En este mismo sentido, McLafferty et al (2019) examinaron cómo comunidades oprimidas, antes que respuestas individuales, desarrollaron estrategias de cuidado y protección mutua para garantizar su sobrevivencia colectiva, basados en sus tradiciones culturales y arraigo con el lugar.

Estos trabajos donde el sujeto es concebido con un rol activo, proactivo y de resistencia; y las relaciones de poder que generan estas dinámicas son escrutadas y disputadas, son cruciales para la construcción de una ecología política de la sobrevivencia.

A efectos de mi análisis, me interesa hacer énfasis en la noción de *estrategia* que se desprende del trabajo del sociólogo Pierre Bourdieu (2011) sobre “las estrategias de la reproducción social”. En Bourdieu, esta no está determinada por automatismos de los sujetos que solo ejecutan tareas y/o buscan cumplir con una mejor administración de los recursos para sobrevivir, sino por lo que él llama el *conatus*, esto es, el agonismo subjetivo que hace que estos busquen zafarse el sistema de poder. El sujeto por tanto, tiene voluntad, capacidad de elección y puede incluso actuar sobre las reglas del juego. La noción de estrategia saca a la sobrevivencia fuera del plano de victimización para reconocerla como

“respuestas activas” ante el contexto. Esto evidentemente deja la puerta abierta a la politización de esta acción-condición.

La reivindicación de la capacidad reactiva, creativa y potencialmente transformadora de los sujetos, por más potente que esta pueda ser, debe ser siempre entendida en su relación dinámica con el contexto. Esto lo analizó Bourdieu, que contempló un marco contextual-relacional donde las estrategias también fluían de acuerdo a los códigos y prácticas de los sistemas familiares, de clase social y del “espacio social global”. De manera que se debe subrayar esta especie de dualidad, donde las decisiones de los actores sociales son atravesadas por factores externos determinantes, por lo que no se puede definir a estos como sujetos con elecciones completamente libres. A pesar de ello, el foco analítico preferencial de Bourdieu está en la perspectiva del actor social.

En esta línea, un tema crucial hacia una ecología política de la sobrevivencia tiene que ver con cómo este ‘conatus’ se expresa en un marco contextual-relacional configurado por la sobredeterminación societal propia del colapso. Mi análisis destaca esta dualidad dinámica, donde tanto el factor subjetivo como el de contexto son cruciales, sin tener interés alguno en prescindir de ninguno de ellos. En este caso, conviene hacer un balance para determinar el peso que puede tener uno u otro factor, lo que puede ser variante dependiendo de condiciones materiales, ambientales, sociales y culturales específicas de cada territorio donde se configura un contexto no convencional; y comprender mejor el alcance que puede tener el accionar social en este.

Sobre este último asunto, a partir de algunos indicadores y análisis de variables, se puede intentar determinar el peso del colapso venezolano en las dinámicas de movilización y reproducción de la vida: vimos los dramáticos índices de pobreza, desnutrición y algunas cifras sobre la represión gubernamental que dan cuenta de dicho peso, reflejado en la sociedad en millones de migrantes que salieron del país por las fronteras, en territorios atravesados por el abandono estatal, en tendencias generales al debilitamiento de la movilización en la Fase III de la crisis, o en el favorecimiento de las prácticas sociales de extracción predatoria de recursos naturales.

No obstante, como vimos, no desaparecieron ni la movilización, ni la lucha en los territorios, ni el conatus –como se evidenció en la narrativa de numerosos grupos sociales que examiné en la sección sobre la orientación y motivaciones de las luchas. En cuanto al alcance del accionar y las respuestas sociales para defender la naturaleza y los medios de vida, el concepto crítico de estrategias subraya que, el sujeto colectivo, ante el peso del contexto y los condicionantes sociales, esquiva factores constrictivos; resignifica situaciones; lidia con la inestabilidad, volatilidad y la incertidumbre propia de los contextos delicados; negocia, transforma, e intenta anticipar consecuencias futuras de sus decisiones (Fontaine y Schlumbohm, 2000). Son estos componentes, en el nivel micropolítico, que contribuyen a una interpretación crítica y política de la sobrevivencia.

Falta mencionar los dos últimos sentidos que están en juego en la noción de sobrevivencia desde la que parto, y que contemplan otros rasgos de politización de la misma. El tercer sentido es de mayor dimensión y escala, y tiene que ver con las perspectivas de sobrevivencia *colectiva*, y ya no sólo individual y familiar. Quizás el caso más emblemático al respecto sea el de las reivindicaciones por la supervivencia de los pueblos indígenas y su lucha por no desaparecer. Esto lo vimos en varios conflictos en los que estos estaban involucrados, como el caso de los yukpa, que ante la delicada situación en la que viven han puesto en sus narrativas la defensa de su supervivencia como comunidad. En las variadas declaraciones de Kuyujani (indígenas del Caura) se hizo también esta referencia, incluyendo la de sobrevivencia cultural. En la entrevista que le realicé a la lideresa indígena María Martínez, vimos que esa noción de perdurar y sobrellevar la situación que se da en sus territorios, también fue reivindicada como una sobrevivencia eminentemente colectiva.

Este sentido tiene, al menos dos aristas importantes que subrayar: primero, la sobrevivencia de uno pierde sentido si se aniquila al colectivo, que cobija al individuo, y representa la identidad subjetiva y del territorio. Si el ámbito que debe sobrevivir es colectivo, esto entonces implica una respuesta colectiva, lo que favorece considerablemente su politización (en términos de organización y resistencia). Segundo, la irrupción de los pueblos indígenas en la arena política (en América Latina desde la década de 1990) y el fortalecimiento de las demandas por más derechos humanos a través de los años, han favorecido a que la supervivencia cultural, económica y social de los pueblos indígenas sea reconocida como derecho, lo que se ha consagrado en normativas internacionales de instancias como ONU, CIDH-OEA, OIT, entre otras. Además, los peligros de desaparición de pueblos, la vulnerabilidad de minorías étnicas, o el incremento de la importancia de la categoría jurídica y política de ‘genocidio’, han contribuido a la proliferación de mecanismos de vigilancia respecto a la integridad de los mismos. Estos factores han incrementado considerablemente la politización de esta demanda de sobrevivencia, involucrando a numerosos actores en los conflictos relacionados con pueblos indígenas.

Esta idea de sobrevivencia colectiva también se puede vincular a comunidades no indígenas, como lo vimos con habitantes urbanos y rurales del estado Lara, que hicieron referencia a evitar que ‘desaparezca lo que somos’, y que fue factor de movilización. Adicionalmente, se pueden contemplar ideas de sobrevivencia colectiva de carácter político, que vimos con claridad en el caso de Venezuela, por ejemplo, en las declaraciones de la Plataforma de Lucha Campesina, donde se hacía hincapié en dar la vida por la perduración del proyecto bolivariano. La intensa confrontación en el marco del conflicto político venezolano –que mostró algunas expresiones sobre la aniquilación del otro−, implicaba para muchos la idea de que para sobrevivir en lo particular, debía perdurar el proyecto político chavista. De manera que se pueden trascender las escalas más pequeñas de la idea de sobrevivencia para también llegar a pensarla, siempre, como una sobrevivencia del conjunto.

Por último, el cuarto sentido tiene que ver con la sobrevivencia *de la especie humana* en el planeta, ante fenómenos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, los peligros de guerra nuclear, y en un sentido más amplio, el "antropoceno", catalogado como una nueva era geológica en la cual la principal variable de cambio planetario es la actividad humana (Crutzen, 2006) y remite a la drástica modificación de las condiciones de vida en la Tierra. Esta expresión es claramente macropolítica y geopolítica y, a medida que se ha agravado la crisis ambiental global, se ha convertido tanto en una idea más generalizada y masificada –todos en el planeta estamos a lo interno del problema, y la sobrevivencia nos atañe a todos–, como un campo en disputa sobre su interpretación, marcado por perspectivas en contradicción como la de los negacionistas, ecomodernistas, partidarios del desarrollo sustentable, ecofascistas, la ecología política, entre otros. Este sentido, además, remite a una proyección temporal de futuro –colapso planetario, sexta extinción masiva, cambio climático catastrófico, entre otras ideas–, por lo que se cruza con las temporalidades más cortas de la sobrevivencia cotidiana.

Esta mirada la pudimos ver en varios de los ambientalismos movilizados en los conflictos analizados, tales como las comunidades en defensa del Cerro La Vieja, la confluencia de organizaciones en la Coalición Plantados y en lucha por el PN Waraira Repano, o aquellos que defendieron el valle del Turbio. Sin embargo, como ya se mencionó, esta perspectiva se ha conformado como un sentido común en numerosas organizaciones ecologistas en todo el mundo y otras que, aunque no se identifican como tales, están también preocupadas por el rumbo de la especie humana. Ejemplos emblemáticos de esta narrativa las conseguimos en los discursos de Greta Thunberg y el movimiento juvenil de Huelga por el Clima, o en el movimiento internacional Extinction Rebellion, que recurre a la desobediencia civil no violenta para intentar que los gobiernos tomen medidas urgentes ante la crisis climática. Desde el campo intelectual crítico, varios autores han hecho llamamientos similares (Fernández-Durán y González-Reyes, 2018; Svampa y Viale, 2020) y los sociólogos John Bellamy Foster y Brett Clark han propuesto poner en el centro el asunto de la sobrevivencia para plantear un movimiento político que responda a esta situación de peligro para la humanidad (Bellamy Foster y Clark, 2022).

Algunos voceros de varios gobiernos del mundo han asumido este discurso, y el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho repetidos llamamientos ante la situación climática, señalando que nos encontramos ante una nueva "era de la ebullición global" y una "bomba de tiempo climática" (en Pérez-Gallardo, 2023; UNDP, 2024b). Grupos de científicos han señalado los riesgos para la sobrevivencia humana y de muchas especies ante el avance de la crisis climática (Markham, 2018), y algunos trabajos en ecología han señalado la necesidad de un cambio de enfoque orientado a la sobrevivencia (Gardner y Bullock, 2021).

En suma, estos cuatro sentidos de la sobrevivencia no solo expresan el carácter polisémico que tiene un aspecto tan central para la reproducción de la vida, sino al mismo tiempo nos

muestran sus diferentes vías de politización, y las diversas disputas materiales y simbólicas que la rodean, algo muy pertinente en los tiempos actuales de crisis global.

IV.II Ecología política de la sobrevivencia: significados y fundamentos

Llegados a este punto, y habiendo ya puesto sobre la mesa algunos elementos cruciales que nos aproximan a un más claro entendimiento de qué significa e implica una *Ecología Política de la Sobrevivencia (EPS)*, me dispongo a ofrecer una definición de la misma. Podemos entender la EPS como una perspectiva crítica sobre las relaciones poder-sociedad-naturaleza que pone en el centro la cuestión de la sobrevivencia, en los diferentes sentidos económicos, culturales, políticos y ambientales que se le pueden otorgar en los conflictos ecológico-distributivos (sea de subsistencia cotidiana, para mantenerse vivo ante las amenazas, colectiva o de la especie humana en el planeta), y que son analizadas fundamentalmente en el marco de contextos críticos, los cuales también pueden ser no convencionales (colapsos societales y/o ecológicos, conflictos armados, antropoceno).

Trabajos como el de Krokfors (1991) recurrió al término "the political ecology of survival" para analizar cómo hogares pobres en África se ven obligados por sus condiciones socioeconómicas a generar más altos impactos ambientales; mientras que Basu et al (2018) también apelaron a esta categoría para estudiar específicamente los conflictos, dilemas y estrategias que habitantes de las riberas de varios ríos en el este de India desplegaron ante diversas situaciones ambientales y económicas que precarizaban su vida. Stoll (2014) reivindicó una "ecología política de la subsistencia" para estudiar los conflictos en torno a paisajes y usos de la tierra, como vimos específicamente en torno a los huertos familiares en Reino Unido y Estados Unidos, lo que tenía perspectivas similares a la ecología política del campesino moderno de Leslie Anderson.

No obstante, como ya he mencionado, la EPS que propongo contempla un espectro más amplio, considerando la extraordinaria diversidad de escenarios y sentidos de la sobrevivencia, un ancho rango de expresiones, valoraciones y relacionamientos con la naturaleza –desde formas sacralizadas de concebirla, hasta su uso como recurso inmediato de subsistencia−; y una diversidad de estructuras organizativas –desde movimientos sociales hasta pequeños grupos barriales con escasa organización−; donde el elemento central de análisis no está tanto en la idoneidad de la lucha –qué tan 'fuerte' o radical es el movimiento'−, sino principalmente sus estrategias y recursos para buscar la persistencia de la vida socioecológica, a pesar de la degradación del entorno.

Como expuse a inicios de este capítulo, es desde este perspectiva comprehensiva que la EPS ha buscado ensamblarse a partir de enfoques diversos que han sido incorporados en mi análisis: la teoría del ecologismo popular de Martínez-Alier (2003), que reconoce la

articulación intrínseca de estas luchas ecologistas con las economías de supervivencia; y la mirada ontológica de la relación sociedad-naturaleza de Enrique Leff, que pone en el centro de la cuestión ecológica el problema de los imperativos de la sobrevivencia −entendida esta como persistencia de la vida en el planeta, tal y como la conocemos− (Leff, 2015); se combina y articula con la teoría de los movimientos sociales y el concepto de justicia ambiental, el encuentro entre la literatura de Conflictos/gobernanza Sobre los Recursos Naturales y Estudios sobre Paz y Conflicto y la ecología política de la violencia y la guerra, así como con los análisis críticos sobre estrategias de sobrevivencia (estudios rurales críticos, economía política, la sociología de Bourdieu, geografía económica y geografía feminista), que contemplan nociones de sujeto activo y proactivo ante el contexto, así como un potencial agente de transformación y politización, distanciándose de visiones puramente victimistas y pasivas.

Se resaltan pues, que los objetivos fundamentales de la EPS son comprender la evolución y expresiones que adquieren las luchas ambientales en contextos no convencionales (que incluye la perspectiva global del antropoceno); profundizar sobre la politicidad que pueden tener las acciones para garantizar la reproducción de la vida cotidiana; y contribuir a entendimientos más dinámicos, políticos y matizados sobre la sobrevivencia y el colapso.

Es crucial dar profundidad a esta definición de la EPS. Para ello es necesario sintetizar, articular y desarrollar en torno a esta conceptualización, los diferentes aspectos expuestos en este capítulo, que voy a presentar a continuación en cuatro dimensiones fundamentales.

IV.II.I *Colapso y ambientalismo: factores de persistencia*

Existe una percepción proveniente desde ciertas perspectivas teóricas deterministas, que en los contextos económicos más duros las reivindicaciones y luchas ambientales no tienen cabida. Algunos de esos enfoques, que han sido muy cuestionados por un cierto fatalismo de clase, han señalado que en zonas deprimidas o en países del Sur Global, los habitantes suelen ser “muy pobres para ser verdes” (*too poor to be green*) (véase la crítica a esta idea en Martinez-Alier, 1995; Guha, 2002), y más bien desarrollarían tendencias a la predación ambiental.

En otro enfoque, algunos autores de la literatura de Conflictos sobre los Recursos, Estudios sobre Paz y Conflictos, Estudios Rurales, y Feminismo que examinamos anteriormente, mostraron el avasallamiento de comunidades y poblaciones por la violencia extrema de la guerra, muchas de las cuales se vieron obligadas a ceder en varias de sus prácticas territoriales habituales y recurrir a estrategias de adaptación para sobrevivir (Osorio, 2001; Mampilly, 2007; Bohle y Funfgeld, 2007; Allen, 2012; Miklian, 2012; Glockner et al, 2024). En un escenario de colapso societal como el venezolano, para muchos ha podido ser

difícil imaginarse que hayan podido persistir o emerger ambientalismos en semejantes condiciones. Sin embargo, y como vimos en este capítulo, esto sí ha podido ocurrir.

La EPS subraya las posibilidades de persistencia del ambientalismo –entendido este en su versión más crítica y política, o bien en la correctiva y reformista, condensados en las categorías que he presentado de Ambientalismos de Alta y Baja Intensidad− e incluso de su surgimiento, en contextos no convencionales donde las condiciones de vida han sido severamente destruidas, tal y como vimos en el análisis de los conflictos en La Gran Crisis venezolana.

Las movilizaciones y acciones en defensa de Los Quediches y contra la minería de sílice en el Cerro El Plan, y por el rescate de los morros de Macaira, fueron evidencia de esto. Las luchas por el arbolado de Caracas y por el PN Waraira Repano lograron tener continuidad; aunque mucho más destacadas fueron las luchas por el Cerro La Vieja, por la laguna de Urao en Mérida y de las comunidades wayuú del Socuy que, además de mantenerse en el tiempo del colapso, obtuvieron logros sobre sus demandas y reivindicaciones.

El análisis de los casos que he desarrollado ha ofrecido insumos valiosos para identificar varios factores de persistencia, de índole sociocultural, política y económica, que fueron determinantes en las orientaciones y motivaciones de los grupos movilizados. Hemos visto, por ejemplo, que valoraciones ambientales sacralizadas y/o trascendentales han podido resistir en este período crítico, aunque es crucial profundizar un poco más en cómo y porqué ocurre esto en este contexto.

Preliminarmente, se reconoce que marcos de sobrevivencia tan drásticos como estos pueden generar grandes presiones fragmentadoras e individualizantes en los grupos sociales –del tipo "sálvese quien pueda"−, así como tendencias a la inmediatez y a la resolución pragmática de corto plazo. No obstante, no en todos los casos se producen estas respuestas atomizadas: se reconoce en varios de estos ambientalismos mencionados que el colapso no logró fracturar ese vínculo estrecho con la naturaleza. De ahí que pudimos observar una noción de *sobrevivir con la naturaleza*, y no a costa de ella. Esta se basa en un principio de enfrentar el colapso defendiendo el entorno ecológico, no solo desde la idea de la 'naturaleza como símbolo de subsistencia' –como señalaron los ambientalistas de Carora−, sino primordialmente porque en este caso estamos ante actores sociales que han construido sus identidades territoriales, han constituido sus subjetividades, en consonancia con su preservación.

Quizás el caso más emblemático al respecto lo encarnaron los ambientalistas urbanos y las comunidades campesinas del municipio Torres que lucharon por Los Quediches y contra el sílice, lo que pudiese estar recogido en la idea de *ser desde y con el agua*. La sobrevivencia estaba en riesgo no solo por el desespero de no tener agua, sino porque sin este elemento,

su propia comunidad ligada a la tierra y la agricultura quedaba desvirtuada, sin poder ser ella misma.

Desde estas varias perspectivas, se entiende que no solo sobrevive el ser, sino que fundamentalmente sobrevive el todo. Se trata también de una noción de sobrevivencia colectiva, no solo entre humanos sino también no-antropocéntrica. Leslie Anderson (1994) llamaría a esto la 'comunidad ecológica', estando en el centro de la acción política campesina procurar la supervivencia de toda ella. Estos elementos además dan cuenta de otros componentes existenciales en la lucha ambiental que pueden perdurar en el tiempo ante grandes contrariedades.

Sin embargo, como vimos en el análisis de los 6 aspectos de las orientaciones de lucha, el fundamento ambientalista de sobrevivir con la naturaleza no necesariamente es suficiente para entender las variadas respuestas que pueden generarse. Las diversas aristas y sentidos de la sobrevivencia no solo tienen que ver con la materialidad de la subsistencia (agua, energía, alimento, etc.), sino también con ideas de dignidad, políticas, con tradiciones culturales de organización, entre otras.

Respecto a las tradiciones culturales, los ejemplos de la cultura de varios siglos de resistencias de las comunidades indígenas wayuú, desde un acervo del vivir en contextos críticos y de sobrevivencia; o la tradición de resistencia de los ambientalistas por el Cerro La Vieja, condensada en la idea de 'vivir desde la lucha, porque la lucha es por la vida'; fueron una clara expresión de estos otros componentes existenciales de movilización. Si podemos imaginarnos el colapso como un huracán que degradó, e incluso llegó a destruir una parte de las estructuras sociales del país, del mismo modo, otras agrupaciones y bases comunitarias lograron quedar en pie, en muy buena medida debido a este entroncamiento cultural que favoreció formas de resiliencia territorial histórica, con un manejo más sólido de las adversidades que nos remite a un importante factor de persistencia del ambientalismo.

Del mismo modo, debe también destacarse el aspecto o componente político en las movilizaciones como otro crucial factor de persistencia en las luchas en estos contextos. Esto puede variar dependiendo de cada contexto: países donde la resolución de los asuntos o conflictos políticos nacionales se vuelven cruciales, o donde se han desarrollado procesos de intensa politización de la sociedad –como es el caso de Venezuela−, esto puede ser especialmente determinante. Junto con las valoraciones ambientales, pudimos ver que los deseos sociales de cambio político para el país, así como el descontento por la corrupción y la situación general, se canalizaron en un movimiento por el arbolado urbano en Caracas. La oposición al proyecto del Arco Minero del Orinoco se impulsó también como una confluencia de actores que defendían la Constitución nacional y se enfrentaban a la deriva autoritaria del gobierno de Maduro. Y esto se constató también del lado del apoyo al

chavismo, con movimientos campesinos que afirmaban dar la vida en defensa de la revolución, y que se inspiraron el proyecto político de Chávez.

Este tipo de iniciativas no solo encarnaron fuerzas que contrarrestaron los procesos de retracción y desmovilización que suelen tener peso en contextos de sobrevivencia, y sobre todo de intensa represión como en el de Venezuela; sino también una disposición 'heróica' de los actores sociales a asumir riesgos políticos, por ideales históricos y trascendentales de compromiso social, liberación, justicia, derechos, revolución, democracia; y nociones de sobrevivencia colectiva y política, en las que también pueden estar presentes las de sobrevivencia como especie en el planeta.

Como observamos, los liderazgos comunitarios, de organizaciones sociales, indígenas, políticos, entre otros, pudieron fungir como bisagra entre estos factores simbólicos mencionados y la capacidad de movilización y masificación de las luchas. Por un lado, rasgos como la convicción y la vocación subjetiva pueden persistir ante el colapso, como un empecinamiento, un no claudicar o una motivación para reconstruir la sociedad –como vimos por ejemplo con la conservacionista María Fernanda Puerto Carrillo o el activista urbano Cheo Carvajal, de la Coalición Plantados. Por otro lado, al ser liderazgos motivantes, pueden ser factores de compensación de la depresión social y política que conllevó el colapso, y detonantes de lucha y acción donde prevalece la inercia, la inacción y la atomización.

Para proponer un análisis lo más completo posible de esta dimensión de la EPS, finalmente deben ser reconocidas algunas limitaciones de estos factores de persistencia. En primer lugar, dado que este estudio ha tenido un alcance temporal de diez años (2013-2022), quedan abiertas interrogantes sobre si el colapso prolongará una grave crisis de las condiciones de vida en el país por mucho más tiempo y, por tanto, cuál sería la evolución y el impacto de esto en los grupos sociales. Desde mi perspectiva, no queda excluida una mayor tendencia al declive de las movilizaciones, pero tampoco la emergencia de nuevas iniciativas, luchas y actores que encabezan las mismas.

En segundo lugar, se deben reconocer cambios generacionales que implican también transformaciones en las perspectivas políticas y ambientales. Destaca que la gran mayoría de los actores analizados en mi estudio han sido adultos, siendo que en general los sectores juveniles, han tenido poca participación en las luchas. Es importante resaltar que el grueso de los venezolanos que ha salido de Venezuela para migrar hacia otros países son jóvenes (OIT y PNUD, 2021), lo que puede ser interpretado como una desconexión de este sector en relación a los asuntos políticos inmediatos y una proyección de sus intereses hacia el exterior. En la entrevista que hice a María Martínez se expresó la preocupación, que he escuchado en otros testimonios, de la cada vez mayor participación de jóvenes indígenas en la minería legal. De manera que los cambios generacionales pueden apuntar a modificaciones en los factores de persistencia del ambientalismo en contextos críticos.

IV.II.II *Temporalidades del colapso y el ambiente: la centralidad de la contingencia en las luchas socioecológicas*

En sus conocidos análisis sobre la historiografía como campo de estudio, Fernand Braudel planteó que no existe uno, sino variados tiempos sociales, desde las escalas más amplias (larga duración), hasta los tiempos cortos, los del acontecimiento efímero, los cuales se solapan entre ellos. Todos estos tiempos sociales, son susceptibles a "mil velocidades, de mil lentitudes", afirmaba el autor (Braudel, 1970). Partiendo de estas premisas, podemos afirmar que la naturaleza está también atravesada por una multiplicidad de tiempos y velocidades. Una de las nociones contemporáneas más popularizadas, la idea de *ambiente*, ha sido generalmente interpretada dentro de una temporalidad política amplia. Lo ambiental se ha vinculado predominantemente con el entorno macrosocial, desde el cual se enmarca la relación 'sociedad-naturaleza'; desde las políticas de los Estados y los organismos supranacionales, es el 'medio' a administrar ante los planes de desarrollo (Escobar, 2007); en las narrativas institucionales, publicitarias, e incluso en los imaginarios sociales, es el objeto de 'sostenibilidad'. Para el mundo del activismo y el pensamiento ecologista crítico, ha sido el ámbito para un proyecto de liberación y utopía: la consecución de la justicia ambiental, la Ecotopía de Callenbach, el ecosocialismo, el Buen Vivir, los derechos de la naturaleza. En todos estos ejemplos, lo que suele prevalecer es el macro-tiempo político, y visiones sobre el ambiente que nos remiten a tiempos futuros.

Sin embargo, como aspecto contrastante, tenemos al otro extremo los tiempos más cortos e inmediatos de la reproducción de la vida cotidiana, que toman un aspecto muy particular en los contextos no convencionales como el colapso: tiempo fragmentado, inestabilidad y volatilidad, dinámicas marcadas por la desestructuración institucional y económica, y por las emergencias. Se configura un marco caótico que crea una multiplicidad de tiempos sociales desacompasados, donde hace fuerte presencia un cortoplacismo radical, o parafraseando a Braudel, una velocidad frenética del tiempo.

Esto tiene extraordinarios impactos en las luchas en torno a la naturaleza. En contextos de sobrevivencia generalizada, la *contingencia* se establece como normalidad, y va desplazando a la predominancia del macro-tiempo político y ambiental (en mi estudio muy poco aparecieron las narrativas el 'desarrollo sostenible' y la gestión ambiental como política). Esto último, aparece sostenido por la idea de que 'No me puede importar el futuro si no sé qué pasará hoy, si estaré vivo hoy'. En este sentido, resolver y garantizar la subsistencia cotidiana adquiere centralidad, y con ella la relación con la naturaleza queda marcada: el día a día se fractura ante el imprevisto permanente, la eventualidad y los riesgos; puede emerger con más fuerza el uso de los recursos sin poder contemplar su sostenibilidad en el tiempo; y, sobre todo, lo ecológico puede perder 'futuribilidad', y las valoraciones de naturaleza se transforman, se hacen mucho más inestables y fragmentadas,

en un sentido muy similar a lo señalado por Bruno Latour cuando explica cómo la naturaleza en el antropoceno es mucho más convulsionada e inasible (Latour, 2017).

La contingencia, por tanto, es un factor central en la EPS. Esto implica una perspectiva de análisis que contempla como elemento fundamental el intenso dinamismo de los actores sociales, el cambio de rumbo, la acción resolutiva, la respuesta de sobrevivencia, y última instancia, el ejercicio por parte de los grupos en lucha de una política de la contingencia. Esto de ninguna manera implica que la EPS pone solo el foco sobre estas temporalidades cortas y volátiles. En cambio, reconoce las variadas temporalidades sociales en juego en el ámbito de las luchas por y en torno a la naturaleza y su importancia, e intenta comprender y poner de relieve la relación que puede existir entre la cuestión ecológica de las urgencias de sobrevivencia inmediata y las nociones proyectivas de sostenibilidad, gestión ambiental y ecoutopías.

Este análisis sobre las diversas temporalidades en juego tiene variadas aristas, de las que voy a mencionar con un poco más de detalle dos de ellas. Primera, no se analizan las orientaciones y motivaciones de los actores solo como un rasgo estable y propio de una elección consciente, o únicamente como la expresión de sus propias valoraciones ambientales o 'lenguajes de valoración', sino también como un posible resultado circunstancial y relacional con el contexto. De los conflictos ecológico-distributivos que he examinado, quizás los casos de minería ilegal practicada por comunidades indígenas sean los que mejor reflejan estas dinámicas circunstanciales. Además del crecimiento de la participación de integrantes de estos grupos étnicos en la actividad, también se resalta aquellos que entraron a la minería y luego la abandonaron para no volver; otros la ejercieron esporádicamente, aunque con recurrencia; otros que habían resistido terminaron de lleno en la actividad; y otros establecieron acuerdos con otros integrantes de su propia comunidad para permitirla, pero buscaron revertir la situación a través del diálogo y la educación.

De manera que: a) se pueden dar dinámicas regresivas o predatorias en los actores sociales, pero estas también pueden revertirse debido a factores subjetivos, colectivos y de contexto; y b) las orientaciones y motivaciones de ellos pasan por ajustes respecto a su relación con el marco contextual, y pueden incluso experimentar hibridaciones o ambigüedades, por lo que en ocasiones una etiqueta moral de 'ambientalista' o 'depredador' poco dice de lo que está ocurriendo en un determinado escenario contingente.

Segunda arista: las temporalidades cortas y las dinámicas de la sobrevivencia cotidiana de los actores sociales, nos ofrecen también insumos para una comprensión más cercana y material sobre los colapsos societales –al menos los parciales o localizados−; esto es, ampliar el conocimiento sobre una micropolítica del colapso. El abordaje predominante que ha existido sobre este tipo de fenómenos, como lo expuse en el capítulo 2, ha aludido a una perspectiva macro que habla de la quiebra o ruina a gran escala de un sistema

socioecológico y sus instituciones, con enormes impactos estructurales. Además, existen imaginarios sociales sobre el colapso que se vinculan a relatos del 'fin del mundo' y la desaparición de un día para el otro de la civilización, al estilo de la cinematografía hollywoodense (Svampa, 2018). Como contraposición a esto, el análisis del accionar, agenciamiento y estrategias de sobrevivencia de los actores sociales inmersos en contextos como estos, nos ofrecen una perspectiva de continuidades de la reproducción de la vida en los colapsos, del detalle de su devenir visto desde la experiencia concreta de los sujetos y colectividades, que puede ampliar la comprensión de sus formas en las temporalidades más cortas de la reproducción social. El colapso es un escenario donde básicamente la vida continúa, aunque en otras formas.

Estos elementos pueden contribuir a un abordaje epistemológico y político más propicio de este tipo de contextos no convencionales, así como una mayor claridad sobre los rangos de acción dentro de ellos.

IV.II.III *La economía moral del colapso*

Joan Martínez-Alier (2003) ha destacado que las movilizaciones del 'ecologismo popular' deben ser entendidas dentro de una 'economía moral' de las clases populares (o de los pobres), la cual está mediada por sus propias pautas colectivas, en la que dichas clases luchan por sacar los recursos naturales de la esfera del mercado –y mantenerlos dentro de sus propios dominios−, y no se alinean con la crematística del capital. Desde estos perfiles, se fue gestando la emergencia de un importante movimiento ecologista que se iría globalizando. A partir de estos elementos, Martínez-Alier ha planteado que la economía moral viene a ser lo mismo que una economía ecológica.

Pese a la importancia de la teoría del ecologismo popular en mi análisis, la EPS intenta generar aportes más allá de los marcos de la pobreza convencional y los movimientos por la justicia ambiental, por lo que estos argumentos requieren ser matizados. En la perspectiva que he propuesto, se reconoce la existencia de un ámbito de economía moral –o diversas economías morales− de las clases populares, pero también el hecho que la sobrevivencia, mucho más en contextos no convencionales, puede ser una condición en la cual los análisis con perspectivas morales, romantizadas, o que ponen el foco en defensas de la naturaleza ideales, ofrecen aportes muy limitados.

Para profundizar sobre este punto, primero hago referencia a la definición de economía moral de Edward Thompson. En su estudio sobre las revueltas sociales por hambre en la Inglaterra del siglo XVIII, el historiador británico evidenció que, además de las cuestiones de sobrevivencia material, los sectores populares estallaron contra las clases dominantes por lesionar los códigos y valores culturales de aquellos –la economía de mercado contra

los principios de una economía moral más antigua (Thompson, 1971). Este concepto después se convirtió en una categoría de análisis general, más allá del caso inglés (Thompson, 1995), donde economía moral de las clases populares es definida como el conjunto de normas, códigos y criterios, y de mecanismos de regulación y autorregulación, que modulan y determinan las acciones y comportamientos de las multitudes ante los agravios de las clases dominantes, y que establece los límites de lo tolerable y lo intolerable en cada situación social específica (Thompson, 1971; Aguirre-Rojas, 2010). En este sentido, la economía es 'moral' no porque tenga un sentido normativo rígido, sino porque, por un lado, está determinada por la ética de la reproducción social, entendida como pautas de funcionamiento cotidiano de los sectores populares que les sirven para subsistir; y por otro lado, porque se contrapone al poder establecido desde sus intereses de clase, rehusándose además a los agravios y al accionar incorrecto y corrupto que pueden tener las clases dominantes.

Tomando esta definición del trabajo de Thompson, aunque se reconoce y resalta la perspectiva crítica a los modelos de desarrollo predominante (al extractivismo) y la ética socioambiental por parte de los ambientalismos más sólidos que pueden persistir en estos contextos, la EPS pone un foco analítico especial en luchas sociales en torno a la naturaleza que, siguiendo sus propias pautas de funcionamiento consensuado, pueden también explotar e insertar los recursos naturales en esferas o cadenas de explotación transnacional, contaminar sus propios territorios y cuerpos, alinearse a formas económicas capitalistas o negociar de alguna manera con estructuras de poder; en fin, ejercer prácticas que podrían ser consideradas éticamente contradictorias o reprobables.

En la EPS, se propone pensar en una específica *economía moral del colapso*, donde no solo se toma en cuenta la interacción que se da entre estos códigos y mecanismos populares de comportamiento y funcionamiento, por un lado, y la actividad económica por el otro, sino también los variados impactos que la contingencia y convulsión de este contexto generan en los actores sociales. Dichos impactos pueden no solo cambiar drásticamente estos comportamientos, sino también estremecer las pautas morales que rigen la vida de estos grupos, llevándolos a ejercer respuestas de sobrevivencia que las pueden relativizar o dejar de lado. Esto último, incluye las mencionadas prácticas consideradas éticamente contradictorias o reprobables, y por tanto, puede abrir un proceso de conformación de nuevos códigos y pautas colectivas con resultados que se adaptan al contexto.

Probablemente sea la experiencia de las numerosas comunidades pemón que practican minería ilegal en la Amazonía, la que mejor ilustra esta particular economía moral del colapso. Partiendo de estos casos, voy a precisar cuatro factores que nos ayudan a salirle al paso a interpretaciones maniqueas (bueno/malo) de las orientaciones de lucha y las economías populares, e intentar profundizar, matizar y amortiguar las tensiones, contradicciones y dilemas que se genera en lo interno de esta economía moral.

Primero, en el caso que analizamos de la comunidad autónoma de Musuk Pa, esta no solo instauró una serie de normativas colectivas para el desarrollo de la minería en sus territorios como fuente de subsistencia, sino también lo hizo sobre una particular economía moral que irrumpía con la economía moral tradicional de la mayoría de las comunidades pemón que no practican la actividad. La destrucción ambiental genera ganancias para el sostenimiento de la vida; estos códigos de funcionamiento no pueden ser interpretados como actitudes predatorias de carácter caótico e individualista. Como factor fundamental, un *pragmatismo,* como una actitud tendiente a lo práctico u orientada a la utilidad de las acciones y la satisfacción de necesidades, atraviesa esta economía moral. Como vimos, los juicios morales externos a los indígenas fueron rechazados por el Consejo de Caciques del Pueblo Pemón, quienes alegaron incomprensión sobre su situación de sobrevivencia. La ilegalidad de la actividad, y la ilicitud percibida por la población foránea, quedaba desplazada por la consideración de licitud del consejo de caciques.

El proyecto de Musuk Pa representa un ideal de autonomía y autodeterminación, así como una expresión local de soberanía sobre los recursos naturales que podría ser vista como ejemplar, si se habla de empoderamiento de los actores territoriales; pero vemos que de ninguna manera podemos hablar de un ecologismo popular ni una economía que esté fuera de un mercado transnacionalizado de commodities –como sí ocurre con la extracción de oro. Los dilemas éticos que se generaron en otras comunidades pemón evidenciaron que la fragmentación también puede impactar una economía moral –pongamos por ejemplo, la de un pueblo indígena con tradición de lucha unificada entre sus comunidades−, y que diversas economías morales pueden entrar en contradicción entre sí.

Segundo, la reformulación de los códigos de la economía moral puede ser entendida como una forma de "*negociar naturaleza*" (Basu et al, 2018), lo cual nos remite a pactos, cesiones y acuerdos en relación a las propias valoraciones ambientales y la gestión de los recursos naturales de los actores sociales, que en el caso analizado se pudo también traducir en cesiones otorgadas por varias comunidades indígenas en favor de la minería, y en detrimento de sus perspectivas y prácticas tradicionales. Esto se vincula con estrategias de *coexistencia*, que implica la cohabitación (contradictoria) de comunidades indígenas con otros actores de la extracción y el despojo, o entre las diferentes economías morales que pueden existir entre los indígenas.

Tercero, en los pemón se expresó la contraposición al poder establecido propio de la economía moral, rebelándose y confrontándose contra el Estado venezolano (y los grupos criminales) a partir de una ética pemón de la autodeterminación y denunciando el agravio y los perjuicios que este ha causado contra las comunidades indígenas (principalmente por la violencia y el Arco Minero), aunque muchas de ellas contraponiéndose desde sus propios intereses mineros.

Cuarto y último, pero no menos importante: así como se subraya que la economía moral del colapso debe también tomar en cuenta el resultado de los extraordinarios impactos que generan contextos como estos en la reconfiguración de los códigos de comportamiento, del mismo modo destaco cómo estructuras y relaciones de poder pueden imponer formas de dominación y determinadas condiciones adversas a estos grupos sociales, lo que también incide de forma relevante en dicha reconfiguración. En los casos de las violentas disputas mineras en la Amazonía, estos grupos predominantes tenían la capacidad para administrar la economía y apropiarse de recursos y territorios. La idea indígena recurrente de 'nos obligan a hacer minería' señala cómo estas relaciones de poder, configuradas en este caso por el gobierno de Maduro y las organizaciones criminales, representaron un factor determinante en la situación en sus territorios, sin contar con otros factores materiales, como el de las abundantes concentraciones del apetecido oro en sus hábitats.

En condiciones de mucha más precariedad económica y social, los actores se hacen aún más vulnerables tanto al contexto de crisis, a las estructuras de poder dominante, como al debilitamiento de los propios códigos éticos, como lo vimos en los casos de extracción de especies para alimentarse, o en la inserción de indígenas sanema como fuerza de trabajo explotada de la minería ilegal/criminal. La relación pragmatismo/negociación de naturaleza/coexistencia, en estos contextos, representa fundamentalmente un conjunto de mecanismos de sobrevivencia que, dependiendo de las condiciones, puede tener poco o nulo miramiento a premisas éticas.

Todos estos factores descritos que conforman la idea de una economía moral del colapso tienen también matices y límites, vinculados, por ejemplo, al potencial desplazamiento de las valoraciones ambientales y códigos éticos colectivos o universales, que permiten el sostenimiento en el tiempo de las estructuras comunitarias y los ecosistemas. La actitud pragmática en relación a dinámicas sociales de extracción de recursos naturales, puede también instalar inercias y la normalización de las mismas, planteando enormes desafíos para su reversión. Se resalta que en la Amazonía, los efectos de la perpetuación de estas prácticas en el tiempo pueden ser devastadores para la perduración de los medios ecológicos de vida, lo que, en el caso de los indígenas de esta biorregión, pone paradójicamente en riesgo su propia sobrevivencia.

IV.II.IV *El foco privilegiado en la micropolítica de la reproducción de la vida*

Como última y cuarta dimensión de la EPS, se resalta el lugar central que adquiere en esta perspectiva la escala geográfica micropolítica de la reproducción de la vida, lo que contrasta con el protagonismo que los más grandes y emblemáticos movimientos sociales y por la justicia ambiental han tenido en el análisis de los conflictos de distribución ecológica en contextos convencionales.

Esta tradicional predilección se ha dado por razones lógicas: estos movimientos, en general, han logrado tener un impacto positivo en la opinión pública y en los imaginarios políticos, en la defensa de derechos sociales y de la naturaleza, en las políticas públicas, en las posibilidades de ampliar la democracia y en las formas en que pensamos alternativas sistémicas para nuestras sociedades (Leff, 2004; Svampa, 2011). En América Latina y el Caribe esto se tradujo en victorias contra proyectos mineros e hidroeléctricos, el desarrollo de consultas populares exitosas, narrativas ambientales que tuvieron resonancia, y la influencia en leyes, políticas públicas y programas de gobierno −desde la consagración de los derechos de la naturaleza en Bolivia y Ecuador hasta la Ley contra el fracking y el plan de descarbonización en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

No obstante, la EPS pone en el centro las diversas expresiones de la micropolítica de la reproducción de la vida, al menos por tres razones: la primera, las tendencias a la desintegración y fragmentación institucional, económica y política propias del colapso, apuntan a la atomización de la sociedad. Esto se corrobora para el caso venezolano, como vimos, con un desplome de la arena pública y una notable predominancia de la orientación de 'Lucha por el Acceso Básico a Medios de Vida Ecológicos (LABMVE) en los conflictos ecológico-distributivos. Estos factores le otorgan mucha mayor relevancia a la escala micropolítica, objeto de más intensas disputas por recursos naturales y control territorial en estos contextos, así como lugar privilegiado para la resolución de la sobrevivencia.

La segunda razón, que se deriva de la primera, tiene que ver con los probables y potenciales procesos de politización de la sobrevivencia –vista en los dos primeros sentidos micropolíticos que he examinado en relación a esta noción, subsistencia/sobrevivencia. Esto va más al interior de la politización tradicional ambientalista; me refiero a cómo los componentes más elementales para la reproducción de la vida cotidiana, como el agua, el alimento, la energía más básica, que hacen parte del espacio más íntimo de las familias y comunidades, pasan a ser objeto urgente de politización, en la medida en la que estos actores sociales se ven obligados a insertarlos en estrategias de sobrevivencia, defensa de los recursos ante otros actores del despojo, establecimiento de mecanismos de seguridad y de negociación, entre otras acciones (Bohle and Fünfgeld, 2007). Vimos como ejemplos de esto, el salto de la falta de agua vecinal a su conversión en una lucha por el derecho al líquido; o varias de las llamadas 'luchas cruzadas' o combinadas que examiné, que introdujeron o mezclaron las demandas por los medios de vida ecológicos (como la salud o el alimento) con luchas políticas preexistentes, como las que impulsaron los sindicatos. Todos estos procesos implican una nueva escala organizativa y de conciencia de la gestión de estos elementos básicos para vivir, los cuales toman otra connotación, como asuntos más claramente de orden político.

La tercera razón tiene que ver con que, al igual que puede ocurrir con los movimientos sociales más estructurados y de amplio impacto, se reconocen también las potencialidades

de transformación de abajo hacia arriba, y de maneras transversales, que pueden tener estas formas de politización a microescala; o cómo desde las estrategias de sobrevivencia se pueden construir procesos de cambio social, incluso con incidencia de más amplia dimensión. La multiplicación de guardias indígenas en la Amazonía, o la conformación de un movimiento nacional por el agua evidenciaron la materialidad de estas potencialidades. Formas comunitarias de propiedad y gestión de los recursos, educación, estrategias de seguridad, entre otras, trazan al menos algunas rutas alternativas para abordar contextos en colapso o de crisis muy profunda. Desde la perspectiva de la EPS, se resalta pues el rol de otras formas de politicidad, que no necesariamente disputan el poder del Estado –aunque pueden hacerlo−, sino fundamentalmente el ámbito más elemental de la reproducción de la vida, que además tienen la capacidad para proyectarse hacia la confluencia más amplia de actores, y hacia la masividad.

El foco micropolítico ha sido nutrido desde campos del pensamiento crítico como el feminismo marxista, el comunitario y el ecofeminismo, desde los cuales se ha reivindicado la centralidad de este ámbito de la reproducción de la vida para plantear un análisis del sistema capitalista, más allá de la predominante macroeconomía, el mundo del trabajo asalariado y las mercancías, y la política de Estado. La riqueza de dicho ámbito está también en su contenido ontológico: no solo los medios de reproducción de la vida son capturados y aprovechados por el sistema, sino que también, en este convergen lo humano y lo no humano, vinculado no solo a la gestión social y comunitaria de dichos medios esenciales para vivir y la economía de subsistencia, sino también al mundo de los cuidados, y a las relaciones de interdependencia entre especies (Federici, 2013; Gutiérrez-Aguilar et al, 2016; Rivera-Cusicanqui, 2018).

El foco privilegiado en la escala micropolítica de la reproducción de la vida en contextos de sobrevivencia y no convencionales parte pues, de la idea que, ante un marco de caos sistémico, esta se convierte en principio de orden, y señala la necesidad y posibilidad de que el sostenimiento de la misma tenga un carácter colectivo, basado en el principio del cuidado de la otredad (Federici, 2013). Además, como ha señalado Immanuel Wallerstein en su análisis de sistemas (1997), toda acción pequeña tiene grandes impactos en una situación de caos sistémico, o bien tiene la potencialidad de irradiación hacia otras experiencias y latitudes, de hacer “constelación”, como lo ha planteado Silvia Rivera Cusicanqui (2018).

Como potenciales limitaciones, se reconoce que actores sociales e iniciativas de lucha muy acotadas a esta escala micro, pueden no lograr trascender la fragmentación, o el localismo, ni avanzar hacia una perspectiva integral y sistémica, vinculada a las causas de las desigualdades en la distribución ecológica y el incremento de la violencia, lo que dificulta que se lleven adelante cambios sustantivos. No obstante, esta lógica de desconexión o relativo aislamiento de las luchas no es condición natural de estas micropolíticas, y depende

de las capacidades y disposición de articulación de los actores, y de condiciones materiales favorables, para que procesos de vinculación y masividad puedan producirse en el ámbito de las sociedades.

V. Conclusiones

He presentado un amplio análisis de las luchas sociales por y en torno a la naturaleza en La Gran Crisis venezolana (2013-2022), en la que fundamentalmente se examina cómo se desenvolvieron estas en un marco tan particular como el colapso, dominado por lógicas de convulsión, precariedad de la vida, violencia, desestructuración institucional y caos. Los datos presentados nos ofrecieron perspectivas a nivel macro y micro, elementos cuantitativos y cualitativos, tendencias y un análisis más detallado de sus narrativas, que intentaron ofrecer un panorama lo suficientemente integral, pero a la vez poniendo el ojo en las particularidades, de manera de poder llegar a comprensiones sustanciales de estas luchas.

Mi perspectiva, hacia una Ecología Política de la Sobrevivencia, ha intentado captar el extraordinariamente diverso mosaico de movilizaciones y disputas llevadas adelante por actores sociales muy variados, tratando de renunciar al uso exclusivo de criterios de fortaleza e idoneidad de estas iniciativas, para poder ofrecer una aproximación más nutritiva de sus rasgos contradictorios en un marco tan particular como el examinado.

Esto ha implicado, explorar los más estimulantes movimientos ambientales del período, pero al mismo tiempo protestas de habitantes barriales, indígenas, campesinos, trabajadores, entre otros, que demandaron el acceso mínimo a los recursos más indispensables para sostener su vida, así como grupos sociales que se dedicaron a la extracción de recursos naturales y otros que ejercieron algunas acciones extremas para garantizar su sobrevivencia.

De esta polivalencia, me he nutrido para construir un análisis de lo que he llamado ‘una amplia ecología política del conflicto’, donde el elemento transversal ha sido la condición de sobrevivencia. La EPS encarna una perspectiva sobre las relaciones poder-sociedad-naturaleza en el marco de contextos críticos convencionales y no convencionales (colapsos societales o ecológicos, conflictos armados, antropoceno). Esta perspectiva intenta ir más allá de la teoría de los movimientos sociales y la justicia ambiental, aunque toma varias de sus ideas, con el objetivo de avanzar en miradas no romantizadas o idealizadas que nos ofrezcan insumos para pensar el ambientalismo y las luchas por los medios ecológicos de subsistencia con las altas dosis de realismo que ameritan contextos muy precarizados y violentos. Para ello, se nutre también de otras perspectivas como las teorías del ecologismo popular, la literatura sobre conflictos por recursos naturales y estudios de paz y conflictos,

la ecología política de la violencia y la guerra, y los análisis críticos sobre estrategias de sobrevivencia.

He presentado un análisis que se ha enfocado especialmente en la relación de estas luchas con el complejo y caótico entorno; en las motivaciones y orientaciones de los grupos movilizados, para buscar comprender el porqué de sus luchas cuando todo su contexto está tan deprimido; y las numerosas aristas, contradicciones, ambigüedades e hibridaciones que se dan en las acciones colectivas para garantizar la supervivencia.

Para profundizar en estos aspectos, mi análisis se paseó por las formas de persistencia del ambientalismo en el colapso y la idea de 'subsistir con la naturaleza'; el complejo fenómeno de la expansión de la práctica de la minería ilegal por parte de comunidades indígenas, y todas las aristas que tiene; el entroncamiento de las luchas en tradiciones históricas de organización, culturas, así como los diferentes rasgos de politización que se expresaron en estas; y en las variadas formas y vías que se expresan en la precariedad y la subsistencia.

Los insumos presentados han sido extraordinariamente ricos para nutrir una teorización de la ecología política de la sobrevivencia. He presentado una discusión sobre las teorías que relacionan la acción colectiva y luchas sociales con los contextos, para ampliar un análisis de lo que implica evaluar estas iniciativas de la sociedad cuando el sistema societal colapsa. Por otro lado, he presentado un examen del concepto de sobrevivencia y sus abordajes académicos y políticos, para plantear el carácter polisémico de esta y sus diferentes sentidos, que van desde la subsistencia y el mantenerse vivo, hasta conceptos colectivos de sobrevivencia, y la preocupación global por la supervivencia de la especie humana, ante la crisis climática y ambiental, de pérdida de biodiversidad, potenciales guerras nucleares, entre otros factores.

En sus pilares y fundamentos, además de los factores que permiten la persistencia de los ambientalismos en contextos críticos como el venezolano, la EPS abraza la contingencia como elemento crucial para comprender el dinamismo de las luchas en estos marcos, las diversas temporalidades en juego, la economía moral del colapso, y la micropolítica de la reproducción de la vida como ámbito central donde surgen otras formas de politicidad.

Mi análisis ha intentado ofrecer ideas y elementos para comprender las luchas en un contexto global caótico y de profunda crisis, que serán determinantes en los escenarios actuales y por venir. La idea de sobrevivencia cobra una creciente importancia, y tendrá cada vez mayores implicaciones políticas y geopolíticas. Se trata de una ecología política para los tiempos del antropoceno.

CONCLUSIONES

I

He presentado un amplio estudio de La Gran Crisis venezolana, el cual ha sido examinado desde una perspectiva de ecología política, poniendo el foco tanto en los significativos cambios que se produjeron en el perfil de las gobernanzas, el Estado y el régimen extractivista ante el colapso del Petro-estado; como en el mosaico extraordinariamente diverso de luchas sociales por y en torno a la naturaleza que se dieron en este marco.

Con el análisis de las gobernanzas híbridas en el extractivismo ilícito/criminal y la Ecología Política de la Sobrevivencia, el trabajo ha intentado aportar elementos para la comprensión de las relaciones sociedad-naturaleza-poder en contextos no convencionales donde prevalecen muy duras condiciones y violencia generalizada: desintegración de marcos institucionales e impunidad extendida, profunda debacle de la economía formal y descomposición ética de los actores políticos y estatales, predominancia de la criminalidad organizada y economías ilícitas, generalización de operaciones de expolio y rapiña ante la abundancia de recursos estratégicos, y lógicas de sobrevivencia en la sociedad. La Gran Crisis venezolana, vista al menos en el marco de la historia mundial desde el siglo XX hasta la actualidad, posee uno de los peores indicadores sociales, económicos e institucionales en este lapso de tiempo. Sin embargo, varios de los fenómenos que he estudiado para este caso, no solo están presentes en Venezuela, sino que los podemos encontrar, en variados grados de intensidad y extensión, en otros países, sobre todo de América Latina y el Caribe, y en general del Sur Global.

Me refiero, por ejemplo, a la expansión y sofisticación del crimen organizado transnacionalizado, y sus crecientes vínculos con las operaciones de extracción masiva de los llamados recursos naturales; a la expansión de la corrupción en los Estados, con regímenes democráticos debilitados y tramas delictivas que articulan grupos estatales con organizaciones criminales; incremento de conflictos armados o economías de guerra localizadas, que suelen involucrar disputas por recursos naturales; y la precarización de la vida de millones de personas en estos contextos, lo que además se agrava con el crecimiento de eventos climáticos extremos. La crisis venezolana, como se ha referido en el trabajo, debe también ser entendida como parte y expresión de una crisis global vinculada a las ‘nuevas realidades del petróleo’ y la crisis energética, la crisis climática y la agudización de los conflictos por recursos. En este sentido, y en última instancia, la investigación ha buscado aportar interpretaciones eco-políticas acordes a los nuevos tiempos que conlleva el antropoceno.

Por otro lado, he procurado construir un análisis integral y multi-escalar de espectro nacional (basado en una ecología política comparativa), y de ofrecer explicaciones causales, estructurales e históricas de la emergencia de La Gran Crisis, de las gobernanzas

híbridas y de los escenarios fragmentados de disputas por la naturaleza que prevalecieron en este período. El petróleo, en efecto, tiene una gran centralidad en mi estudio, pero no tanto como recurso sino como configurador societal, capaz de conformar en torno a él todo un sistema sobre los humanos y la naturaleza; de moldear profundamente la historia social, política, económica, geográfica y ambiental de un país. En este sentido, he planteado una discusión con los enfoques economicistas y algunos otros centrados en determinismos sobre la abundancia de recursos (en este caso del petróleo), que han prevalecido en el abordaje sobre Venezuela, para incorporar elementos de ecología política y geografía crítica. Vimos que la hipercentralización y la gran asimetría de poder generada históricamente por el Petro-estado; la muy marcada dependencia de toda una economía, sociedad y cultura alrededor de la renta petrolera (que es un factor exógeno), las marcadas desigualdades geográficas a favor de los territorios de predominio del Petro-estado, y la subordinación de la naturaleza y la distribución ecológica a la distribución rentista, habían configurado un modelo societal muy vulnerable e insostenible. Dicho modelo, aunque ya había entrado en crisis a fines del siglo XX, se continuó e intensificó en el proceso bolivariano liderado por Chávez. Al desintegrarse sus pilares, dejó un país partido en pedazos que facilitó el caos e intensificó considerablemente las disputas políticas y territoriales. Esto creó un nuevo escenario histórico y eco-político en Venezuela: se multiplicaron las operaciones de extracción de naturaleza y la distribución ecológica se puso en el centro de los procesos de captura de riqueza. Emergió una nueva configuración del extractivismo y su respectiva geografía política, que hizo que pasáramos de la hegemonía de la relación petróleo/norte del Orinoco/extracción estatal-formal, a la fórmula oro/Amazonía/extracción ilegal-criminal. Es dentro de estos escenarios que deben comprenderse las nuevas formaciones de poder y las luchas sociales por la reproducción de la vida.

Entre los varios tópicos e implicaciones que se desprenden del análisis de esta crisis, es posible también poner sobre la mesa el problema de los impactos sistémicos y los nuevos escenarios ambientales que configuran los Petro-estados en sus tendencias a la insostenibilidad en el tiempo. ¿Están los Petro-estados condenados a su declive o decadencia histórica, mucho más en un contexto global de cambio climático, crisis y transición energética? Y si es así, ¿qué regímenes, situaciones y conflictividad ambientales traerá consigo este proceso? Aunque esta reflexión ha tenido aún pocos adherentes, creo que los insumos que ofrece este trabajo aportan a una ampliación de ella.

He destacado también en mi investigación que la extraordinaria expansión del crimen organizado en regiones como América Latina y el Caribe no solo ha implicado su creciente participación en operaciones y procesos de extracción de naturaleza, y en la logística de las cadenas de valor de numerosos commodities, sino también su capacidad moldear al propio régimen extractivista. Esto saca a los poderosos grupos criminales de una supuesta posición marginal en el sistema socioeconómico-ecológico –partiendo de la idea de que se tratarían de grupos ‘anómicos’ que están ‘al margen de la ley’, y que operan como ‘economías a las

sombras'− para en cambio comprenderlos como actores y factores de gran relevancia en los procesos de reconfiguración histórica del extractivismo. Mi trabajo destaca que debe prestarse mayor atención a las organizaciones criminales en los conflictos socioambientales y en los análisis de la distribución ecológica: son agentes importantes de deforestación, de acaparamiento de agua y tierras, de pérdida de biodiversidad, de avance de fronteras de la extracción; impactan en el problema del cambio climático y el deterioro ecológico de biomas como la Amazonía; inciden en la violencia contra defensores ambientales; conforman regímenes y gobernanzas sobre el ambiente, y geografías funcionales a sus actividades ilícitas. Deben pues, ser integrados con más decisión a los análisis de tipo socioambiental.

II

Es en este marco que cobra mayor relevancia el análisis de las gobernanzas híbridas en el extractivismo. Organizaciones delictivas de diverso tipo y peso (bandas nacionales, guerrilla colombiana, garimpo patrocinado por facções desde Brasil) se erigieron como uno de los dos actores principales de poder en La Gran Crisis, junto a los actores estatales (militares y cuerpos de seguridad, alcaldías y gobernaciones, instituciones mineras, entre otras). He estudiado especialmente los mecanismos y estrategias conjuntas, y las dinámicas de articulación e hibridación que se produjeron territorialmente entre estos dos grupos de actores, para favorecer procesos de extracción masiva de naturaleza. Esto se expresó particularmente en algunas cadenas de commodities y contrabando transfronterizos (como la palma aceitera y el combustible), pero en especial con el avance hacia nuevas fronteras de la extracción en torno al oro y la Amazonía, todo lo cual facilitó la estructuración de estas gobernanzas híbridas.

En síntesis, he propuesto una conceptualización de esta trayectoria de las gobernanzas, entendida como un método estratégico de asociación para posibilitar dichos procesos amplios de extracción de recursos, el cual se configura a través de una específica división de tareas que componen parte de estas cadenas de valor.

Además de las crecientes apetencias de organizaciones criminales y entramados de corrupción en torno a los recursos naturales, las gobernanzas híbridas están también movidas por el imperativo extractivo, siendo que este último es mucho más presente y decisivo precisamente en el Estado, ante su dependencia de las materias primas. En este sentido, el rol estatal puede ser incluso protagónico, como lo vimos en el caso de La Gran Crisis venezolana. Estas asunciones tienen al menos tres implicaciones: en primer lugar, se reconoce que el Estado no es necesariamente una víctima de la criminalidad o sufre una 'captura', como lo pueden plantear algunos análisis, sino que puede ser parte de ella, e incluso organizadora de las operaciones de extracción ilícita. En segundo lugar, estas gobernanzas deben ser entendidas como un co-protagonismo estratégico para la extracción.

Y tercero, las gobernanzas híbridas no son expresiones marginales del sistema, sino que incluso pueden darle forma al propio régimen extractivista.

Mi investigación ha procurado también señalar algunas condiciones particulares que favorecen el desarrollo de estas gobernanzas, que tienen que ver con la fortaleza que pueden alcanzar los entramados de corrupción dentro de las estructuras estatales, que además suelen estar en relación con los niveles de fragilidad o permeabilidad institucional, así como la instalación de sistemas de impunidad que contribuyen a los mencionados procesos de apropiación/extracción de recursos. A su vez, destaqué que el robustecimiento y complejización de las organizaciones criminales ha incidido en estas tendencias, algo que se expresa con claridad en el paisaje de actores de poder en América Latina y buena parte del Sur Global. Adicionalmente, he señalado factores materiales vinculados a la dimensión económica y geográfica, donde he hecho referencia a diversas oportunidades económicas que se generan en las crisis, lo lucrativo que pueden llegar a ser algunos commodities en particular –atrayendo a actores estatales y criminales a ellos−, o bien qué tan expoliables pueden ser determinados territorios, lo que facilita el despliegue impune, o con pocas resistencias, de estas gobernanzas híbridas.

Los procesos analizados nos otorgan insumos para una comprensión más amplia del extractivismo. He expuesto el sesgo en la conceptualización y los objetos de estudio desde esta teoría, la cual ha estado enfocada fundamentalmente en empresas privadas nacionales o transnacionales, y empresas e instituciones públicas y estatales. Los grupos criminales muy escasamente han sido incorporados en los análisis, y no son reconocidos como factores estructurantes de este tipo de regímenes, lo cual, desde la perspectiva trabajada en mi investigación, constituye un error de análisis. Con el concepto de extractivismo ilícito/criminal que he presentado, se enfatiza que, por un lado, puede haber un régimen de este tipo que se perfile casi completamente de esta forma, como ha sido el caso venezolano; o de manera parcial y mezclada, como se evidencia en casos como el del oro, mayoritariamente ilícito/criminal en países como Colombia o Ecuador, o en regiones como la Amazonía peruana, donde coexisten o se pueden articular estos actores, e incluso sectores industriales-formales, facilitando cadenas de extracción de recursos como la madera.

Mi análisis ha propuesto comprender estos procesos también en clave histórica. Por un lado, la existencia de economías ilegales, forajidas y piratas, asociadas con la criminalidad han estado siempre presentes en la evolución durante siglos del extractivismo y, dependiendo de sus formas, han tenido roles importantes en el crecimiento y consolidación de operaciones de control de naturaleza y territorios. Hablamos de una especie de modo ‘bandolero’ –si usáramos la referencia de Eric Hobsbawn− de apropiación de recursos naturales, basados en el saqueo, la violencia organizada y el asalto, que ha tenido continuidad a través de los siglos.

Por otro lado, uno de los elementos que he querido resaltar en mi trabajo es que, aunque las formas criminales del extractivismo pueden ser combatidas por los actores e instituciones formales –partiendo del problemático principio weberiano de la búsqueda del Estado de monopolizar el uso de la violencia−, la realidad es que estos últimos a su vez han podido asociarse y articularse con el crimen, para favorecer la apropiación masiva de recursos. En secuencia histórica, he destacado el rol de la tercerización de la conquista de territorios y recursos en la colonia, a través de compañías privadas armadas que operaron con violencia y desde lógicas de saqueo, y que estaban amparadas por las Coronas. Se cuentan las 'patentes de corso' otorgadas a los piratas por aquellas; o las relaciones que pudieron tener caudillos regionales y sus montoneras armadas, con oligarquías y los incipientes Estados en América Latina. En nuestras sociedades del siglo XXI, la expansión del crimen organizado no hubiese sido posible a estos niveles sin la complicidad y participación del Estado.

En esta línea, y como una forma de comprender el basamento histórico de estas gobernanzas híbridas, he desarrollado el concepto de *composición del extractivismo*, para resaltar que este régimen se constituye simultáneamente de vertientes legales y de regularización, de despojo violento pero relativamente institucionalizado, y de economías forajidas, bandoleras y piratas. De esta manera, la composición del extractivismo define los balances y pesos relativos que tienen cada una de estas tres vertientes, los cuales varían históricamente dependiendo de condiciones determinadas y de las fases del desarrollo capitalista.

He propuesto también una discusión crítica sobre el Estado, ante las perspectivas normativas que han asumido que el horizonte en América Latina es la consecución de un 'Estado adecuado', dentro de los paradigmas del modelo occidental. Mi enfoque enfatizó la conformación y reconfiguración estatal permanente en la región en su relación con la consolidación del extractivismo y su instalación en los territorios –o lo que llamé la relación histórica extractivismo/poder/territorio. Como tal, este proceso ha estado profundamente determinado por relaciones de poder, sean las de la colonialidad como lo planteó Quijano, o su constitución como violencia organizada, como lo propuso Charles Tilly. Esta línea histórica ve continuidad en mi análisis del colapso venezolano en el que, antes que solo un Estado frágil o 'fallido', se examinaron las reconfiguraciones del poder en las estatalidades, funcionales a los procesos de despojo, apropiación y extracción de naturaleza y control territorial.

He examinado algunas posibles tendencias o desafíos que se le presentan a los Estados de la región en el siglo XXI, al calor de estas reconfiguraciones del régimen extractivo. Las gobernanzas híbridas, o las economías de guerra llevadas por el crimen organizado o insurgencias armadas, tienen la capacidad de crear territorializaciones que pueden fortalecer formas de fragmentación geográfica de los Estados-nación. He intentado recuperar el análisis histórico de los caudillismos regionales o los 'warlords' (en literatura anglosajona) para señalar una potencial re-emergencia de poderes provinciales en el siglo

XXI, sostenidos por configuraciones descentralizadas de extractivismo, en el marco de procesos de refeudalización global. A su vez, he retomado el concepto de 'economías de enclave', que estudia formaciones económicas más bien de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, para destacar las implicaciones actuales del establecimiento de regiones de extracción de recursos que terminan desligadas de las economías nacionales, dirigiendo los productos directamente al mercado mundial. Se trata de reestructuraciones históricas de gran trascendencia que conviene mirar para intentar entender el sentido de los cambios en curso en el régimen extractivista.

III

Como contraparte a estos complejos y desafiantes escenarios, he intentado construir un retrato lo más amplio posible de las respuestas que grupos de la sociedad civil dieron ante su búsqueda de defender la naturaleza, los medios ecológicos de subsistencia y la propia reproducción de la vida cotidiana. Mi propósito ha sido hacerme a un lado de las interpretaciones puramente ideales de la lucha ambiental, o bien que solo ponen el foco en la movilización social más estructurada, política y con visiones sistémicas, para en cambio aproximarme con mayor énfasis a las formas contradictorias y adaptativas de luchas que se dan en un contexto de convulsión, precariedad de la vida, violencia, desestructuración institucional y caos como en el colapso venezolano.

He examinado cómo y porqué se movilizaron activistas urbanos, comunidades indígenas, campesinos y pescadores, trabajadores y líderes sindicales, integrantes de partidos políticos y periodistas, entre otros; cuáles fueron sus capacidades de organización, de masificar sus luchas, de incidencia política y de sostener las movilizaciones en el colapso. Los resultados nos mostraron tendencias generales a la baja en las movilizaciones hacia la Fase III de la crisis, con la respectiva reformulación de las estrategias de lucha; pero también, otras expresiones de las mismas que persistieron y hasta crecieron, y que registraron varios logros con respecto a sus exigencias.

Partiendo de la extraordinaria heterogeneidad, atomización y volatilidad que generó el colapso, mi análisis estableció un rango de 5 orientaciones de lucha que abarcó desde ambientalismos de alta y baja intensidad, luchas por el acceso básico a los medios de vida, iniciativas sociales de extracción de recursos naturales, hasta acciones de pura sobrevivencia. En mi estudio hubo, por ejemplo, tanto grupos sociales defendiendo un parque nacional, como otros haciendo minería ilegal para subsistir, cerrando calles en una ciudad por no tener acceso al agua, talando un bosque para obtener madera para cocinar, y otros generando movilizaciones y campañas contra la minería en el cerro más importante de su pueblo.

Mi indagación de las motivaciones, estrategias y perspectivas de naturaleza de estos actores en lucha reveló una muy rica multiplicidad de aristas de la relación entre ecología y

sobrevivencia: ‘subsistir con la naturaleza’, ‘el derecho indígena a la administración y utilización de los recursos naturales existentes en sus territorios’, ‘nos alimentamos de la lucha’, ‘los trabajadores de la industria petrolera estamos condenados a muerte’, ‘las circunstancias nos obligan a hacer minería’, entre otras ideas que resonaron en sus testimonios. Estas visiones nutrieron el análisis con numerosos matices, ambivalencias, elementos de complejidad y reinterpretaciones de estas contradicciones sociales, que rompen con lecturas moralistas o deterministas en relación a lo que es o deben ser las luchas por el ambiente o la naturaleza, ofreciendo en cambio elementos de comprensión de las luchas tal y como se expresaron cuando lo que estaba en juego era la sobrevivencia.

Desde estos insumos construí una perspectiva de Ecología Política de la Sobrevivencia (EPS), como un enfoque de análisis crítico que busca abordar esta polivalencia y multiplicidad de expresiones sociales y acción colectiva que luchan en torno a la naturaleza en contextos que he identificado como ‘no convencionales’. La EPS coloca en el centro la cuestión de la sobrevivencia; observa sus diferentes sentidos (materiales, culturales, políticos, ideológicos); procura una lectura política y de las relaciones de poder que atraviesan la misma; e incorpora consideraciones analíticas del intenso dinamismo, la contingencia, la contradicción, la ambigüedad, y lo que he llamado ‘la economía moral del colapso’, que expresan los grupos sociales en sus luchas en estos marcos societales. Me he propuesto, por tanto, explorar otras formas de politicidad que surgen de la micropolítica de la reproducción de la vida; las posibilidades de resistencia y transformación de estas expresiones sociales en torno a la naturaleza, que reaccionan, se repliegan y se adaptan, negocian y despliegan estrategias para garantizar la persistencia de la vida.

Con la EPS, por un lado, he intentado ofrecer insumos y contribuciones para una comprensión más aterrizada sobre los colapsos parciales o localizados, al abordarlos desde la experiencia concreta de los sujetos y colectividades, y así entenderlos como una continuación de la vida desde otras formas y dimensiones. Por otro lado, mi propuesta de análisis se ha inspirado en la búsqueda de respuestas a la pregunta sobre cuál es el futuro del ambientalismo en un sistema global que, al parecer, está reestructurándose. Si este es un movimiento social histórico, que responde a las condiciones particulares de un período que pudiésemos acotar entre fines del siglo XIX y el XXI, surge la interrogante sobre qué nuevos significados pueden emerger de las luchas por la naturaleza, la idea de ‘ambiente’, de la ‘sostenibilidad’ o las ‘eco-utopías’, en el marco de esta profunda transformación sistémica actual. Para millones de personas en condiciones muy difíciles, las respuestas parecen estar acotadas en escalas localizadas y en la microtemporalidad de la vida cotidiana y la sobrevivencia. Mi planteamiento, por tanto, insiste en poner especial foco en esta escala más pequeña, para una comprensión de la relación sociedad-naturaleza-poder de nuestros tiempos.

IV

Finalmente, este trabajo, por falta de tiempo, no ha podido desarrollar alguna sección sobre alternativas a los escenarios y tendencias descritas, cruciales para una apreciación, al menos general, de las posibilidades de transformar la situación. Apenas se pueden mencionar de manera general algunas cuestiones sobre acciones a tomar respecto al conflicto político, opciones para abordar el extractivismo ilícito/criminal y, sobre todo, las acciones e iniciativas que, por más pequeñas que sean, pudieron surgir desde la sociedad civil, y que se extrajeron de este estudio.

Si se piensa en posibles políticas estatales que ayuden a cambiar la situación y mejorar la incidencia en actores gubernamentales, se debe reconocer que el irresuelto conflicto político venezolano, y la posición muy poco transigente del régimen de Maduro, han sido una de las principales trabas para ello. Los liderazgos de la oposición y otros grupos sociales y políticos que están fuera del ámbito del gobierno, han tenido muy poca repercusión en darle un giro al preocupante rumbo que tomó el país. Este escaso impacto se expresó primordialmente hacia la Fase III de la crisis, cuando Maduro se consolidó mucho más en el poder y la represión interna se hizo aún más cruenta. Ante tal situación, el rol de las negociaciones internacionales permanentes representa una de las principales ventanas de posibilidad. Las evidencias han mostrado los recurrentes fracasos de esta estrategia en los años de la crisis, lo que llegó a su clímax con el fraude electoral de julio de 2024, que revelaba que el gobierno de Maduro no tenía una real disposición de dejar el poder, por ninguna vía o motivo. Pero, ante las enormes dificultades que los actores sociales y políticos de oposición han tenido para que sean respetadas sus opciones de asunción del poder por la vía electoral, el rol de negociadores internacionales puede intentar balancear más el escenario doméstico, en pro de lograr mayores posibilidades de elecciones transparentes y competitivas.

Para el caso venezolano las negociaciones deben ser audaces y persistentes, y quizás, recuperar algunas lecciones de otras complejas experiencias del pasado, como las que lograron detener la confrontación en El Salvador, Sudáfrica o Irlanda del Norte.

En todo caso, las negociaciones por sí solas no podrán abordar los problemas de fondo de sociedades como la venezolana. El caso de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 en Colombia es una muestra de ello, ya que, aunque fue concretado este pacto entre las partes en conflicto, la violencia en el país continúa, en buena medida vinculada al extractivismo. El caso venezolano también evidencia graves problemas estructurales que van más allá de la disputa entre el gobierno y la oposición, muchos de los cuales están en estrecha relación con el modelo extractivista y las pugnas por los llamados recursos naturales. Mi trabajo ha intentado demostrar la estrecha ligazón que hay entre violencia y extractivismo, y cómo este último también se asocia con dependencia, pobreza y destrucción ambiental.

Hay probablemente una amplia discusión por desarrollar sobre medidas y estrategias postextractivistas posibles de aplicar para Venezuela, y existe una interesante literatura

sobre el tema con casos de América Latina, la cual puede contribuir a abordar estos problemas históricos y actuales. No obstante, sea por circunstancias históricas o coyunturales, la Venezuela del período estudiado está determinada por un fuerte consenso extractivista, y semejantes propuestas encuentran obstáculos y desafíos extraordinarios. En primera instancia, hay una perduración de la histórica cultura petrolera sobre la que políticos e intelectuales siguen anclados para pensar el país, aunque esta está desgastada y debilitada por el colapso. Por otro lado, la depresión económica hizo que los grupos políticos y económicos predominantes, así como gran parte de la sociedad se enfocara en la búsqueda de ingresos económicos a toda costa, dejando aún más de lado cualquier consideración de reflexionar y debatir modelos alternativos de sociedad.

En relación al gobierno de Maduro, vimos que su apuesta ha sido la de una expansión e intensificación de la extracción de recursos naturales a toda costa, y sin miramientos a leyes, normativas y derechos humanos y ambientales. Además, al este haber cerrado la interlocución con el resto de actores sociales y políticos que no están a su favor, se dificultan aún más las vías para transitar hacia otro modelo, o al menos atenuar la dinámica depredadora existente. Por otro lado, los sectores de oposición tradicional también han insistido en un proyecto económico de expansión extractivista, con un estilo neoliberal más ortodoxo. Lo más reciente en este período, fue el caso de María Corina Machado, la candidata de oposición más popular para competir en las elecciones presidenciales de 2024, que ofreció a inversores extranjeros amplias facilidades para maximizar la explotación petrolera y minera.

Como contraparte, los grupos que han llegado a proponer políticas diferentes (partidos y organizaciones más pequeñas), sin sesgos extractivistas, han sido minoritarios, y con muy escasa capacidad de congregar masivamente votantes, o lograr mayor impacto en el sistema político. El fortalecimiento de estos sectores, y su potencial articulación, no solo permitiría tener opciones alternativas a la polarización política, sino también al consenso extractivista. Aunque hay síntomas de agotamiento de dicha polarización, y hartazgo en la sociedad, que está buscando otras figuras políticas, el entorno represivo dificulta sobremanera que movilizaciones masivas y articulaciones más amplias puedan darse.

En lo que concierne al debate sobre políticas de seguridad ante la proliferación de economías ilícito/criminales, se requieren también abordajes sistémicos que puedan poner el foco en factores causales de la violencia, ya que la política gubernamental se ha orientado a incrementar el despliegue de cuerpos de seguridad y la represión. Si hablamos por ejemplo del auge de la minería ilegal y sus impactos socioambientales, se debe insistir en que este no se resuelve solo con la ‘legalización’ de la actividad minera o la militarización de la Amazonía. La evidencia ha mostrado que desde esta fórmula los problemas quedaron lejos de resolverse y la idea de la legalización del extractivismo no representa ninguna solución automática a ellos. De hecho, paradójicamente podrían

contribuir a empeorarlo, como vimos con la activa participación de actores e instituciones estatales venezolanas en el blanqueamiento de operaciones de extracción ilícita.

En todo caso, ha sido desde los actores de la sociedad civil donde han surgido las iniciativas y propuestas más estimulantes de abordaje de la situación. Además de sus luchas y movilizaciones, se impulsaron una serie de acciones que buscaban crear modos de vida, territorialidades, economías, que fuesen una alternativa al colapso. Por ejemplo, múltiples iniciativas de reforestación intentaron recuperar y restaurar ecosistemas, como lo hicieron ambientalistas en defensa de la Zona Protectora Mitar Nakichenovich, las comunidades de Urumal ante la deforestación en La Azulita, o las organizaciones que protegían la laguna de Urao. Estas últimas, crearon además viveros comunitarios para continuar con estos objetivos, y establecieron canales de trabajo con el gobierno local (alcaldía y gobernación, así como representantes ministeriales), lo que contribuyó a que se mejorara las condiciones de la laguna.

Los ambientalista del municipio Torres en Lara llevaron adelante acciones de protección ambiental con visión de cuenca, lo que estuvo presente de manera permanente en sus discursos. Los integrantes de la Coalición Plantados en Caracas crearon toda una estrategia para monitorear y salvar árboles, y plantar otros más junto a vecinos de varios barrios de la ciudad. Interpelaron y procuraron tener una interlocución constante con representantes de las alcaldías, para educarlas y prevenir en pro del cuidado del 'bosque urbano'.

Otras propuestas tuvieron impactos más amplios, como las de conservación de ecosistemas que incorporaban a la población en iniciativas económicas alternativas. El ejemplo de la lucha en defensa de la laguna La Reina es emblemático al respecto, pues fueron desarrollando acciones de protección del humedal, pero simultáneamente de impulso de proyectos ecoturísticos, artesanales, gastronómicos, entre otros, que además ayudaban a crear una economía local más fuerte y sostenible, contrarrestando el contexto de empobrecimiento que había generado el colapso. En general, las más exitosas experiencias de conservación que he abordado en este trabajo apelaron a la negociación con los actores de poder locales, antes que la confrontación, lo que incluyó hacerlo con grupos criminales. Esto les permitió seguir operando en el tiempo, e incluso incidir en sectores económicos locales para que contribuyeran con las iniciativas ecológicas, como lo vimos con los conservacionistas del sur del Lago de Maracaibo y su rol con los productores y ganaderos para la protección del jaguar.

Luchas como las del Cerro La Vieja persistieron en la creación de una figura de área protegida para esta montaña, que ya se había logrado categorizar previamente como Parque Municipal. Estos grupos se movilizaron para que el nivel subiera hacia una forma más restrictiva, como la de Parque Nacional o Monumento Natural, y que abarcara toda la serranía de la región. En las luchas contra el proyecto Arco Minero del Orinoco, ambientalistas de larga tradición como Alexander Luzardo propusieron insertar toda la Amazonía en la figura de la "Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del

Orinoco y la Amazonía Venezolana", siendo que la propuesta fue acogida por la Asamblea Nacional, aunque sin poder ejecutarse por las disputas políticas entre gobierno y oposición.

En el Zulia, grupos de ambientalistas en sus luchas contra la expansión de la minería de carbón, desarrollaron la propuesta de los 'Territorios Energéticamente Sustentables' (TES), que planteaba un cambio de la matriz eléctrica regional que abandonara este combustible fósil, aprovechara mucho más los potenciales de energía eólica de la zona –que son importantes en la parte norte− e impulsara formas más descentralizadas de generación eléctrica a través del favorecimiento de proyectos de escala comunitaria.

Por último, se deben mencionar las acciones de comunidades indígenas que disputaron directamente los procesos de territorialización del extractivismo y las gobernanzas híbridas, como las iniciativas de autodemarcación de territorios que realizaron, por ejemplo, los e´ñepá o los yukpa, estos últimos continuando la recuperación de tierras para establecer sus modos de vida en ellas. Hacia lo interno de sus procesos organizativos, ORPIA y COIAM desarrollaron espacios de formación con las comunidades en temas como la Jurisdicción Especial Indígena, y planes para reimpulsar la producción agrícola para su comercialización. OIPUS planteó asambleas permanentes en las comunidades afectadas por la minería ilegal para llevar adelante estrategias para detener la actividad, y en sectores del territorio pemón como el II y el V, los indígenas desarrollaron acciones para recuperar el turismo como alternativa. He destacado también el trabajo que ha impulsado la lideresa María Martínez en comunidades indígenas donde trabaja con jóvenes para alejarlos de las minas a través del deporte, y promueve la creación de empresas indígenas de diverso tipo, procurando alternativas económicas para todos sus integrantes.

Destaco especialmente la iniciativa de las guardias territoriales indígenas, que propusieron métodos de seguridad y vigilancia comunitaria, en contrapeso a las políticas de militarización, con el fin de enfrentar la violenta presencia de los actores armados, sean criminales o incluso cuerpos estatales de variado tipo, que implicó un enfoque integral de (auto)gestión del territorio, y que no descartó proponer un acompañamiento de los efectivos del Estado para mejorar la eficiencia de la iniciativa.

Estas variadas acciones, a pesar de lo deprimido y violento del entorno, representaron rutas alternativas a la situación, que tuvieron en muy buena medida que funcionar de manera independiente, con escaso apoyo estatal, y evidencian los permanentes gérmenes de transformación que pueden persistir en el tejido social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abente-Brun, D (2012) Estatalidad y calidad de la democracia en Paraguay. *América Latina Hoy*, *60*, 43-66.

Abraham, I. Van Schendel, W (2005) Illicit Flows and Criminal Things: States, Borders, and the Other Side of Globalization. Indianápolis: Indiana University Press.

Acosta, A (2011) Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición, en: Lang, M. Mokrani, D (comps). *Más allá del desarrollo.* Quito: Ediciones Abya Yala. 83-118.

Acosta, A (2016) Aporte al debate: El extractivismo como categoría de saqueo y devastación. Negotiating Nature: Imaginaries, Interventions and Resistance, 9(2): 25-33.

Acosta, A (2019) La renovada dependencia extractivista. Violencia sobre cuerpos, territorios y visiones. In: Silva Santisteban R (ed.), Mujeres indígenas frente al cambio climático. IWGIA, Lima.

Acosta, A. Machado, D (2012) Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina. *OSAL*, *13*(32): 67-94.

Adler, Gustavo. Chalk, Nigel. Ivanova, Anna (2023) América Latina enfrenta un crecimiento más lento e inflación alta en medio de tensiones sociales. IMF. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2023/02/01/latin-america-faces-slowing-growth-and-high-inflation-amid-social-tensions

Agredo-Cardona, GA (2006) El territorio y su significado para los pueblos indígenas. *Luna Azul*, (23): 28-32.

Aguirre-Rojas, CA (2010) Economía moral de la multitud. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto De Investigaciones Sociales. https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/424trabajo.pdf

Aharonian, A (2018) EEUU, el petróleo venezolano y la piedra en el zapato de Tillerson. https://www.cadtm.org/EEUU-el-petroleo-venezolano-y-la

Aharonian, A (2024) Es el petróleo, estúpido (parafraseando a Clinton). https://rebelion.org/es-el-petroleo-estupido-parafraseando-a-clinton/

Alderete, A. Plaza, S. Barrault, O. Berra, C. Díaz, I (2009) La política como estrategia de sobrevivencia. *Perspectivas en Psicología Edición*, (12): 27-35.

Alerta Venezuela (2022) El sur de Bolívar entre dos fuegos. https://alertavenezuela.org/blog/2022/11/10/el-sur-de-bolivar-entre-dos-fuegos/

Alimonda H (2011) La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología Política Latinoamericana, en: Alimonda H (coord) La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Buenos Aires: Clacso, Ciccus. pp.21–58

Allen MG (2012) Melanesia's violent environments: Towards a political ecology of conflict in the western Pacific. *Geoforum*, 44:152–161

Alles, S (2007) ¿Hacia la consolidación política? Cambios en la "estructura de oportunidades electorales" de las mujeres en Argentina. *América Latina Hoy*, *47*.

Altez, R (2019) Poder, negocios y destrucción. Los apagones de Venezuela en marzo de 2019 y la cartelización del Estado. *Estudios Públicos*, (156): 7-45.

Álvarez, JA. Arena, M. Brousseau, A. Faruqee, H. Fernández-Corugedo, EW. Guajardo, J. Peraza, G. Yépez, J (2022) Regional Spillovers from the Venezuelan Crisis: Migration Flows and Their Impact on Latin America and the Caribbean. IMF – Departamental Paper. https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2022/12/01/Regional-Spillovers-from-the-Venezuelan-Crisis-Migration-Flows-and-Their-Impact-on-Latin-525729

Amigransa (2003) La reserva forestal de Imataca (Venezuela): Un bosque insustituible en peligro de desaparecer. Ecología Política, 26: 152-155.

Amnistía Internacional (2018) Acción urgente. Comunidades indígenas atacadas y en riesgo. https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR5395842018SPANISH.pdf

AN (2019) Elías Matta: Recuperar PDVSA tardará hasta 10 años y una inversión cercana a los 200 mil millones de dólares. https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/elias-matta-recuperar-pdvsa-tardara-hasta-10-anos-y-una-inversion-cercana-a-los-200-mil-millones-de-dolares

Anderson, L (1994) The Political Ecology of the Modern Peasant: Calculation and Community. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Andreani, F (2018) Las vías enmarañadas del autoritarismo bolivariano. *Nueva sociedad*, 274: 44-58.

Angulo, N (2021) Yukpas han invadido cinco fincas productivas en Machiques durante 2021. https://elpitazo.net/occidente/zulia-yukpas-han-invadido-cinco-fincas-productivas-en-machiques-durante-2021/

Annahar, N. Widianingsih, I. Paskarina, C. Muhtar, EA (2023) A bibliometric review of inclusive governance concept. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2168839.

Antillano A, Fernández-Shaw JL, Castro D (2018) No todo lo que mata es oro. La relación entre violencia y rentas mineras en el sur del estado Bolívar. In: Gabbert K, Martínez A (comps.). Venezuela desde adentro. Ocho investigaciones para un debate necesario. Fundación Rosa Luxemburg, Quito.

Antía, Y (2020) Los yukpa llegan a Maracaibo a reclamar ser atendidos por situación en la sierra de Perijá. https://www.eluniversal.com/politica/83565/los-yukpa-llegan-a-maracaibo-a-reclamar-atencion-a-su-situacion-en-la-sierra-de-perija

Aponte-Blank, C (2016) El gasto público social durante la gestión de Maduro: Vulnerabilidad y descenso (2013-2015). *SIC*, 783: 110-113.

Aray, H. Vera, D (2024) A tale of oil production collapse. *Resources Policy*, 93, 105044.

Arcila Farías, E (1985) Las estadísticas de Castro. Primera década del siglo xx. Caracas: Academia Nacional de Historia.

Arellano, A (2022) ENTREVISTA | "La minería es comida para hoy y hambre para mañana": Eligio DaCosta, líder indígena baniva. https://es.mongabay.com/2022/03/entrevista-eligio-dacosta-lider-indigena-mineria-en-venezuela/

Arenas, N (2010) La Venezuela de Hugo Chávez: rentismo, populismo y democracia. *Nueva Sociedad*, *229*(5): 76-93.

Argüello-Cabrera, L (2019) Desaparición de personas en México: las organizaciones de familiares y la estructura de oportunidades políticas. *Revista Mexicana de Ciencias Penales*, *2*(8): 3-35.

Arias, E (2009) La gobernanza territorial indígena y los conflictos de uso de la tierra en el perímetro noreste del Parque Nacional Canaima, Venezuela. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, *34*(68): 19-56.

Arias, ED (2006) The dynamics of criminal governance: Networks and social order in Rio de Janeiro. *Journal of Latin American Studies*, *38*(2), 293-325.

Armando Info (2018) Invasores acaban con la última reserva boscosa del occidente venezolano. https://armando.info/invasores-acaban-con-ultima-reserva-boscosa-del-occidente-venezolano/

Arredondo-Velázquez, M. González-Alcalá, J (2014) Las estrategias de sobrevivencia de los pobres: Un repaso a su estudio en las ciencias sociales (concepto, perspectivas teóricas

y acciones que implican). *Realidades: Revista de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Universidad Autónoma de Nuevo León*, 3(2):19-31.

Asamblea Nacional de Venezuela (2022) Diputados legítimos denuncian que expropiaciones por Chávez y Maduro originó descenso de producción nacional y caída en inversión extranjera. https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/diputados-legitimos-denuncian-que-expropiaciones-por-chavez-y-maduro-origino-descenso-de-produccion-nacional-y-caida-en-inversion-extranjera

Asner, GP. Tupayachi, R (2017) Accelerated losses of protected forests from gold mining in the Peruvian Amazon. Environmental Research Letters, 12(9), 094004.

Astorga, P (2003) La economía venezolana en el siglo XX. *Revista de Historia Economica-Journal of Iberian and Latin American Economic History*, *21*(3), 623-653.

Atanasijevic, L (2016) Natural resource governance in hybrid political orders: the cases of North Kivu and Katanga. Centre on Conflict, Development and Peacebuilding. Working Paper.

Aula Abierta (2020) Primer informe diagnóstico situacional de los servicios públicos en Venezuela. http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/05/A.A.-PRIMER-INFORME-DE-DIAGNOSTICO-SERVICIOS-PUBLICOS.pdf

Aure, Y (2023) La industria del cemento dejó de producir el 90% de su capacidad en 2022. https://rb.gy/pfec2j

Averbuch, M (2022) Venezuela's Soaring Migration Creates Need for Remittance Firms. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-05/how-venezuelans-can-get-more-remittance-money-through-legal-payments

Ávila, K (2020) ¿Hay una oposición armada en Venezuela? https://www.opendemocracy.net/es/hay-una-oposicion-armada-en-venezuela/

Ávila, K (2023) La multitud de actores armados estatales en Venezuela, en: Caldera, A. Kurtenbach, S (Eds.) (2023) Venezuela: de la pax malandra a la paz ciudadana. Ildis, GIGA. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/20932-20240311.pdf

Bahar, D. Bustos, S. Morales-Arilla, J. Santos, M (2021) Impact of the 2017 Sanctions on Venezuela: Revisiting the Evidence. *Global Economy and Development*. Policy Brief. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/05/impact-of-the-2017-sanctions-on-venezuela_final.pdf

Bair, J (2017) Contextualising compliance: hybrid governance in global value chains. *New political economy*, 22(2):169-185.

Balladares, C (2016) El Surgimiento de los Caudillos en el Proceso de Independencia de Venezuela (1808-1817). Tesis de Maestría, Universidad Católica Andrés Bello.

Banco Mundial (2018) Población urbana (% de la población total). https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2018&start=1960

Banco Mundial (2024) Tendencias Recientes de Pobreza y Desigualdad Abril 2024. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099071124100538621/pdf/P179518120b5e207b1a6761685beee7d2d5.pdf

Baptista, A (Coord.) (2000) *Venezuela siglo XX*. Libro 1. Caracas: Fundación Polar.

Baptista A (2004) El relevo del capitalismo rentístico: hacia un nuevo balance de poder. Fundación Polar, Caracas.

Baptista, A (2005) El capitalismo rentístico. Elementos cuantitativos de la economía venezolana. *Cuadernos del CENDES*, 22(60): 95-111.

Baptista A (2010) Teoría económica del capitalismo rentístico. Banco Central de Venezuela, Caracas.

Bardi, U (2020) Before the collapse. A Guide to the Other Side of Growth. Cham; Springer.

Bardi, U. Falsini, S. Perissi, I (2019) Toward a general theory of societal collapse: a biophysical examination of Tainter's model of the diminishing returns of complexity. *BioPhysical Economics and Resource Quality*, 4(3): 1-9.

Bargent, J (2019) Blanqueo de madera en Perú: la mafia en el interior. https://insightcrime.org/es/noticias/blanqueo-de-madera-en-peru-la-mafia-en-el-interior/

Barráez, S (2021) Comunidades indígenas venezolanas aprobaron retomar sus tierras enfrentando a los grupos irregulares armados. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/02/23/comunidades-indigenas-venezolanas-aprobaron-retomar-sus-tierras-enfrentando-a-los-grupos-irregulares-armados/

Basu, M. Roy, RJ. Samāddāra, R (Eds.) (2018) Political ecology of survival: life and labour in the river lands of East and North-East India. Hyderabad: Orient BlackSwan.

Bautista-Urbaneja D (1992) Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo XX. Cepet, Caracas.

Bautista-Urbaneja D (2007) La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días. Caracas: Publicaciones UCAB.

Bayart, J. Ellis, S. Hibou, B (1999) The criminalization of the state in Africa. Bloomington: Indiana University Press.

BBC (2019) Venezuela suspende clases y trabajo por un apagón que dejó a medio país sin energía y que el gobierno denuncia como una "guerra eléctrica". https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47492204

BCV (2018) Compras de oro en el mercado interno. https://www.bcv.org.ve/estadisticas/compras-de-oro-en-el-mercado-interno

BCV (S/Fa) Estadísticas. https://www.bcv.org.ve/#

BCV (S/Fb) Informe Económico Anual. https://www.bcv.org.ve/publicaciones/informe-economico

Beaumont-Rodríguez, O (2007) ¿Por qué fue derrotada la lucha armada en Venezuela? 1960-1970. Caracas: Universidad Bolivariana de Venezuela.

Bebbington, A. Humphreys, D (2009) Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú. *Íconos-Revista de Ciencias Sociales*, (35): 117-128.

Beinstein, J (2005) El concepto de crisis a comienzos del siglo XXI. Instituto De Investigaciones Sociales. Universidad Nacional Autónoma De México. https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/418trabajo.pdf

Bellamy-Foster, J. Clark, B (2022) Socialism and ecological survival. *Monthly Review*, 74(3): 1-33. https://monthlyreview.org/2022/07/01/socialism-and-ecological-survival-an-introduction/

Bermúdez, A (2016) Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la emergencia económica. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab

Bevir, M (2010) Democratic Governance. Princeton: Princeton University Press.

Bocco, G (2019) Vulnerabilidad, adaptación y resiliencia sociales frente al riesgo ambiental. Teorías subyacentes. *Investigaciones geográficas*, (100). https://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n100/2448-7279-igeo-100-e60024.pdf

Boege V, Brown A, Clements K, Nolan A (2008) On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of 'Fragility'. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.

Bohle HG, Fünfgeld H (2007) The Political Ecology of Violence in Eastern Sri Lanka. *Development and Change*, 38: 665–687

Bonilla-Molina, L (2023) Venezuela ¿Una nueva etapa en la lucha social? https://luisbonillamolina.com/2023/01/10/venezuela-una-nueva-etapa-en-la-lucha-social/

Boon, L. Meléndez, L (2019) Canaima. El paraíso envenenado por el oro. https://alianza.shorthandstories.com/canaima-el-paraiso-envenenado-por-el-oro/index.html

Boon, L. Meléndez, L (2020) "Ataques contra comunidades indígenas buscan militarizar nuestro territorio": Lisa Henrito. https://es.mongabay.com/2020/04/lisa-henrito-ataques-comunidades-indigenas-venezuela/

Boon L, Ramírez M, Meléndez L (2022) El Arco Minero. La corporación de la molienda. https://alianza.shorthandstories.com/Arco-minero-corporacion-molienda/index.html

Bourdieu, Pierre (2011) Las estrategias de la reproducción social. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bowen, GA (2009) Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, *9*(2): 27-40.

Bracamonte L (2015) El declive de la democracia liberal de partidos en Venezuela (1974–2001). Caracas: Fundación Celarg

Braudel, F (1970) La historia y las ciencias sociales. Madrid: Alianza.

Bridge, G. Le Billon, P (2013) Oil. Cambridge: Polity.

Briceño-León, R. Camardiel, A (2015) Delito organizado, mercados ilegales y democracia en Venezuela. Caracas: Alfa.

Brito-Figueroa, F (1974) Historia Económica y Social de Venezuela; una estructura para su estudio. Tomo 1. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca.

Brombacher, D (2025) Crimen organizado europeo en América Latina. https://www.rosalux.org.ec/crimen-organizado-europeo-en-america-latina/

Browne, C. Kelly, CL. Pilgram, C (2022) Illegal Logging in Africa and Its Security Implications. https://africacenter.org/spotlight/illegal-logging-in-africa-and-its-security-implications/

Brozović, D (2023) Societal collapse: A literature review. *Futures*, *145*, 103075. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328722001768

Buhaug H (2002) The Geography of Civil War. Peace Research 39:417–433

Bull, B. Rosales, A (2020) The Crisis in Venezuela: Drivers, transitions, and pathways. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 109: 1-20.

Bull, B. Rosales, A (2023) Cómo las sanciones a Venezuela abrieron paso a un capitalismo autoritario. *Nueva Sociedad*, 304: 112-125.

Bull, B. Sutherland, M. Rosales, A (2022) Venezuela: lujo, desigualdades y «capitalismo bodegonero». *Nueva sociedad*, (298): 14-26.

Buxton, J (2018) Venezuela: Deeper into the abyss. *Revista de Ciencia Política*, *38*(2): 303-333.

Caffentzis G (2005) No Blood For Oil! Energy, Class Struggle, and War, 1998-2004. Radical Polytics, Portland

Cairns, D. De Almeida-Alves, N. Alexandre, A. Correia, A. Carvalho, T (2014) Social Movements in a Crisis Context: Three Case Studies from Portugal. EASA2014: Collaboration, Intimacy & Revolution. https://www.researchgate.net/publication/268148749_Social_Movements_in_a_Crisis_Context_Three_Case_Studies_from_Portugal

Cajiao, A. González, P. Pardo, D. Zapata, O (2018) Una aproximación al crimen transnacional organizado: redes de narcotráfico Colombia-España. *Real Instituto Elcano*, https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/10/dt5-2018-crimen-transnacional-organizado-redes-narcotrafico-colombia-espana.pdf

Calvario, R. Velegrakis, G. Kaika, M (2016) The Political Ecology of Austerity: An Analysis of Socio-environmental Conflict under Crisis in Greece. Capitalism Nature Socialism. DOI: 10.1080/10455752.2016.1260147

Camacho, JA (2020) Girot: Todos los trabajadores de la industria petrolera están enfermos y condenados a muerte. https://cronica.uno/girot-todos-los-trabajadores-de-la-industria-petrolera-estan-enfermos-y-condenados-a-muerte/

Camargo, E (2019) Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila) y Galipán bajo el ataque de obras de construcción. https://ecopoliticavenezuela.org/2019/05/30/parque-nacional-waraira-repano-avila-galipan-ataque-obras-construccion/

Camargo, E (2020) Protesta Yukpa en Caracas, un espejo donde la ciudad puede verse. https://ecopoliticavenezuela.org/protesta-yukpa-en-caracas-un-espejo-donde-la-ciudad-puede-verse/

Camargo, E (2024) El agua como derecho humano: Entrevista al Movimiento Unidos por el Agua. https://ecopoliticavenezuela.org/el-agua-como-derecho-humano-entrevista-al-movimiento-unidos-por-el-agua/

Cammack, P (2003) The governance of global capitalism: a new materialist perspective. *Historical Materialism*, *11*(2): 37-59.

Campbell, B (2000) Overview of governance. Commissioned Paper Prepared for the International Development Research Centre (IDRC). https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/f6f650f0-a303-480e-9974-acbd736b4377/content

Cannon, T. Müller-Mahn, D (2010) Vulnerability, resilience and development discourses in context of climate change. *Nat Hazards*. 55:621–635

Caraballo-Arias, Y. Madrid, J. Barrios, MC (2018) Working in Venezuela: how the crisis has affected the labor conditions. *Annals of global health*, *84*(3): 512.

Caracol (2013) Contrabando de gasolina por el río Limón! Archivo de Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=-Tz_EkCJtXw

Cardoso, FH, Faletto, E (1979) *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI.

Carrere, M (2020) Venezuela: la científica que estudia a los jaguares en medio de un conflicto armado. https://es.mongabay.com/2020/03/venezuela-maria-fernanda-puerto-jaguares-entrevista-video/

Carril, LF. Rivera, JR (2017). La evolución discursiva de la sostenibilidad a la resiliencia: ¿Un problema ético? *Ecología Política*, (53): 34-38.

Carrillo, M (2000) La inversión extranjera directa y los conflictos ambientales locales en Venezuela. *Cuadernos Del Cendes*, 53:155–196

Carter, A (2011) Environmental policy in a Petro-state: the resource curse and political ecology in Canada's oil frontier. Cornell University, New York

Castellanos, M (2018) Capturan a tres integrantes de la banda "Los sindicalistas de Las Minas" en Tocuyito. https://acn.com.ve/desarticulan-banda-los-sindicalistas-las-minas-tocuyito/

Castro, M. Asuaje, L (2013) Los traficantes salvajes del cardenalito. https://armando.info/los-traficantes-salvajes-del-cardenalito/

Castro, B (2022) Maduro admite que la exportación petrolera de Venezuela registra ingresos mínimos. https://es.euronews.com/2022/11/18/maduro-admite-que-la-exportacion-petrolera-de-venezuela-registra-ingresos-minimos

Castro, E. Lazo, R. Herrera, K (2017) Construcción del segundo puente sobre la Laguna de la Restinga, Isla de Margarita, Venezuela: Conflictos socio-ambientales y primeros impactos ecosistémicos. *Saber*, 29:400-409

CCGPP (2018) Comunicado Oficial del Consejo de Caciques Generales Del Pueblo Pemón sobre el manejo del Parque Nacional Canaima. https://ecopoliticavenezuela.org/comunicado-oficial-del-consejo-caciques-generales-del-pueblo-pemon-manejo-del-parque-nacional-canaima/

CDH-ONU (2022) Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. https://observatorioddhhmujeres.org/a_hrc_51_43_unofficial_spanish_version_1_.pdf

Cedice (2024) Venezuela en Cifras | Enero 2024. https://cedice.org.ve/ogp/wp-content/uploads/2024/02/CII-2024-febrero.pdf

Celag (2019) Las consecuencias económicas del boicot a Venezuela. https://www.celag.org/las-consecuencias-economicas-del-boicot-venezuela/

Celi, S (2019) Indígenas Pemón en la trampa de la minería ilegal. https://www.rfi.fr/es/americas/20190103-indigenas-pemon-en-la-trampa-de-la-mineria-ilegal

CEPAL (2010) Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe – 2010. República Bolivariana de Venezuela. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/127293e5-5065-4828-a84c-50972c7214de/content

CEPAL (2017a) Estudio Económico de América Latina y el Caribe – 2017. República Bolivariana de Venezuela. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7dfc735c-2e4b-4dcb-8121-033177a9a44f/content

CEPAL (2017b) Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2017. República Bolivariana de Venezuela. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7dfc735c-2e4b-4dcb-8121-033177a9a44f/content

CEPAL (2022a) Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2021. República Bolivariana de Venezuela. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47669/20/BP2021_Venezuela_es.pdf

CEPAL (2022b) Estudio Económico de América Latina y el Caribe – 2022. República Bolivariana de Venezuela. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/52999468-258f-4efe-9956-5cb400e17ee3/content

CEPAL (2023) Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2023. República Bolivariana de Venezuela.

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/18052be0-dcaf-448b-b02e-5244cd422b66/content

CEPAL (S/F) CEPALSTAT. Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/perfil-nacional.html?theme=1&country=ven&lang=es

Chaparro-Arenas, S (2024) Hegemonía de campos catastrofistas: tensiones de la colapsología emergente con los societal collapse studies. Tesis de Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. https://philpapers.org/archive/CHAHDC-3.pdf

Chapellín, E (2022) Cartón Venezuela S.A tiene nueva junta directiva. http://www.correodelorinoco.gob.ve/carton-venezuela-s-a-tiene-nueva-junta-directiva/

Chávez, LF (1963). Geografía Agraria de Venezuela. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca.

Chia, E. Rey-Valette, H. Michel, L. Soulard, C. Nougarèdes, B. Mathé, S. Barbe, E. Maurel, P. Jarrige, F. Guiheneuf, PY (2016) Proposición metodológica para el análisis de la gobernanza territorial a partir de una experiencia francesa. *Revista geográfica de Valparaíso*, *1*(53).

Chinea, E. Pons, C (2016) ENTREVISTA-Ex ministros denuncian malversación de 300.000 mln dlr en última década por corrupción en Venezuela. https://www.reuters.com/article/world/americas/entrevista-ex-ministros-denuncian-malversacin-de-300000-mln-dlr-en-ltima-dca-idUSKCN0VB1SO/

CIIP (2023) Avanza producción en empresas básicas del país. https://www.ciip.com.ve/avanza-produccion-en-empresas-basicas-del-pais/

Ciudad CCS (2023) Ministerio Público implacable contra corrupción en Pdvsa. https://www.ciudadccs.info/publicacion/5812-0

Clima21. OVDHA (2022) Bosques En Desaparición Deforestación En Venezuela 2016-2021. https://clima21.net/wp-content/uploads/2022/09/Info-03-Bosques-06_08-baja.pdf

Clyde & Co (2025) Histórico del salario mínimo en Venezuela. https://aureliofernandezconcheso.com/es/wp-content/uploads/2025/04/Historico-del-salario-mi%CC%81nimo-Actualizado-2025.pdf

CNE (2018) Elecciones Municipales 2018. https://web.archive.org/web/20181210113638/http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2018/concejales/documentos/cargos_elegir/Cargos_Vs_Circuns_31-12-2018_Concejales.pdf

Coalición en defensa de los árboles de Caracas (2021) Plantados. Manifiesto en defensa de los árboles de Caracas. https://prodavinci.com/plantados-manifiesto-en-defensa-de-los-arboles-de-caracas/

Cobos, G (2014). En el epicentro del contrabando de gasolina en el Zulia**:** contrabando de gasolina vía "chorizos". https://www.reportero24.com/2014/04/16/zulia-contrabando-de-gasolina-via-chorizos/

Codazzi, A (1840) Atlas físico y político de la República de Venezuela dedicado por su autor el Coronel de Ingenieros Agustín Codazzi al Congreso Constituyente de 1830. Paris. Lith. de Thierry Fres.; Cite Bergère. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/atlas-fisico-y-politico-de-la-republica-de-venezuela--0/html/

Codazzi, A (1841) Resumen de la Geografía de Venezuela. Paris. Imprenta de H. Fournier y Compañía. https://books.google.co.ve/books/about/Res%C3%BAmen_de_la_Geograf%C3%ADa_de_Venezuela_e.html?id=eWcUt2IH_9UC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=es-419&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Codhez (2018) Lusbi Portillo: "No soy barí, ni yukpa pero me duelen las injusticias". https://codhez.org/no-soy-bari-ni-yukpa-pero-me-duelen-las-injusticias/

Cohen, L (2021) Venezuela requiere 58.000 million de dólares para restaurar la producción de crudo a niveles de 1998: documento. https://www.reuters.com/article/world/americas/venezuela-requiere-58000-million-de-dlares-para-restaurar-la-produccin-de-cru-idUSKBN2CR29L/

Collier, P. Hoeffler, A (2004) Greed and grievance in civil war. *Oxford economic papers*, *56*(4): 563-595.

Colona, F. Jaffe, R (2016) Hybrid Governance Arrangements. *European Journal of Development Research*, 28(2):175-183

Conindustria (2021) Encuesta cualitativa de coyuntura industrial. IV Trimestre 2021. https://www.conindustria.org/wp-content/uploads/2022/08/ECI-IV-2021.pdf

Connectas (2020) PDVSA contamina más de lo que produce. https://www.connectas.org/especiales/pdvsa-contamina-mas-de-lo-que-produce/

Connectas (2025) Guerrilla, drogas y control político: ¿Qué hay tras la detención de ocho alcaldes del estado Zulia? https://www.connectas.org/guerrilla-drogas-y-control-politico-que-hay-tras-la-detencion-de-ocho-alcaldes-del-estado-zulia/

Consejo de Derechos Humanos ONU (2020) Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://undocs.org/es/A/ HRC/44/54

Consejo de Derechos Humanos – UN (2020) Independencia del sistema judicial y acceso a la justicia en la República Bolivariana de Venezuela, también respecto de las violaciones de los derechos económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. https://docs.un.org/es/A/HRC/44/54

Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto (2024) La sofisticada estrategia para lavar la extracción ilícita de oro en Bajo Cauca. https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/investigacion/la-sofisticada-estrategia-para-lavar-la-extraccion-ilicita-de-oro-en-bajo-cauca/

Contreras, MA (2004) «Ciudadanía, Estado y democracia en la era neoliberal: dilemas y desafíos para la sociedad venezolana», en: Mato, D (coord.). Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización [versión en línea]. Caracas: Faces, Universidad Central de Venezuela, pp. 111-132.

Cordini, N (2017) El "crimen organizado": un concepto extraño al derecho penal argentino. *Direito GV* 13(1): 334-355.

Coronil F (2002) El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela. Nueva Sociedad/Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Coronil, F (2007) El estado de América Latina y sus Estados. *Nueva Sociedad*, *210*, 203-215.

Crazut, R (2000) La frustración de la siembra del petróleo. *Revista de Derecho / Tribunal Supremo de Justicia*, 2:45-63.

Crespo, F (2015) La organización criminal y carcelaria en Venezuela, en: Briceño-León, R. Camardiel, A. Delito organizado, mercados ilegales y democracia en Venezuela. Caracas: Alfa. pp.333-344.

Crisis Group (2018) Fuego amigo: el caos de la oposición venezolana. Report No. 71. https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/71-friendly-fire-venezuelas-opposition-turmoil

Crisis Group (2020a) A Glut of Arms: Curbing the Threat to Venezuela from Violent Groups. www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela/78-glutarms-curbing-threat-venezuela-violent-groups

Crisis Group (2020b) Desorden en el borde: mantener la paz entre Colombia y Venezuela. REPORT 84. https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombiavenezuela/84-disorder-border-keeping-peace-between-colombia-and-venezuela

Crutzen, PJ (2006) The “Anthropocene”, en: Ehlers, E. Krafft, T (Eds) Earth System Science in the Anthropocene. Berlin: Springer. pp 13–18

Cuentas Claras Digital (2021) Protestas contra la Corporación Venezolana de Minería se intensifican en El Callao. https://www.cuentasclarasdigital.org/2021/02/protestas-contra-la-corporacion-venezolana-de-mineria-se-intensifican-en-el-callao/

Cuestión Pública (2018) El botín de la gasolina corrompe la frontera con Venezuela. https://cuestionpublica.com/botin-gasolina-corrompe-frontera-venezuela/

Cuvelier J, Vlassenroot, K, Olin Nathaniel (2014) Resources, conflict and governance: A critical review. The Extractive Industries and Society 1:340–350

D’Hers-Del Pozo, M (2021) Aproximaciones a la migración inmóvil en el contexto de la diáspora y la crisis venezolana. *Arxiu d'Etnografia de Catalunya*, (23): 39-63.

Dachevsky, F. Kornblihtt, J (2017) The reproduction and crisis of capitalism in Venezuela under Chavismo. *Latin American Perspectives*, *44*(1): 78-93.

Daphi, P. Flesher-Fominaya, C. Romanos, E (2024) Introduction: Mobilizing during COVID-19: social movements in times of crisis. *Social Movement Studies*, *23*(6): 667–675.

Davies, JS (2011) Repensando las redes: gobernanza como hegemonía, en: Bassols, M. Mendoza C (eds.). Gobernanza. Teoría y prácticas colectivas. México: Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana.

Davoudi, S. Evans, N. Governa, F. Santangelo, M (2008) Territorial governance in the making. Approaches, methodologies, practices. *BAGE. Boletín de la Asociación Española de Geografía*, (46); 33-52.

De Sousa Infante, JG (2018) San Nicolás de Bari y el pueblo de Simón Planas caminaron en defensa del parque municipal "Cerro la Vieja". https://ecopoliticavenezuela.org/2018/12/25/san-nicolas-bari-pueblo-simon-planas-caminaron-defensa-del-parque-municipal-cerro-la-vieja/

De Sousa Infante, JG (2019) Mineros y terrófagos azotan a Simón Planas. https://ecopoliticavenezuela.org/2019/02/11/mineros-terrofagos-azotan-simon-planas/

De Sousa Santos, B (2009) Governance: Between Myth and Reality. RCCS Annual Review [Online]. https://journals.openedition.org/rccsar/pdf/95

De Marinis, N. Fuentes-Díaz, A (2023) Repensar las violencias y el estado en Latinoamérica: estados de excepción, gobernanza criminal y extractivismo. *Bajo el Volcán. Revista del Posgrado de Sociología. BUAP*, 4(8).

Delgado, AM (2019) Saqueando El Dorado: Así es como Maduro y su familia se llevan el oro venezolano. https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article236537608.html

Della-Porta, D (2020) Building bridges: Social movements and civil society in times of crisis. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, *31*(5): 938-948.

Departamento del Tesoro de EE. UU. (2022) El Departamento del Tesoro emite la Licencia General 41 sobre Venezuela al reanudarse las conversaciones en la Ciudad de México. https://www.state.gov/translations/spanish/el-departamento-del-tesoro-emite-la-licencia-general-41-sobre-venezuela-al-reanudarse-las-conversaciones-en-la-ciudad-de-mexico/

Despacho de la Presidencia (2022) TSJ determina responsabilidad de la diputada Taina González en delitos contemplados en Ley de Drogas. https://presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=20156

Diamond, J (2006) Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Barcelona: Debate.

Diario Los Andes (2020) Comunidad vuelve a cerrar el vertedero de San Josecito. https://diariodelosandes.com/comunidad-vuelve-a-cerrar-el-vertedero-de-san-josecito/

Díaz, R (2009) Los sindicatos en Venezuela de la negociación a la confrontación. *Revista sobre relaciones Industriales y laborales*, (45): 91-104.

Domínguez, R (2021) El extractivismo y sus despliegues conceptuales. *Territorios y Regionalismos*, (4), 1-26.

Dornstreich, M (1977) The ecological description and analysis of tropical subsistence patterns: an example from New Guinea. In: Bayliss-Smith, T (ed.) Subsistence and Survival: Rural Ecology in the Pacific. London: Academic Press, pp. 245-271

Duarte-Villa, R. De Macedo Braga, C. Ferreira, M (2021) Violent nonstate actors and the emergence of hybrid governance in South America. *Latin American Research Review*, 56(1):36-49.

Duque, JR (2020) Venezuela crónica. Cómo fue que la historia nos trajo hasta aquí. Buenos Aires: Tinta Limón.

DW (2013) Venezuela: Maduro anuncia nuevas medidas contra "guerra económica". https://www.dw.com/es/venezuela-maduro-anuncia-nuevas-medidas-contra-guerra-econ%C3%B3mica/a-17262112

Ebus, B (2018a) El crecimiento del Arco Minero de Venezuela barre a los pueblos y culturas indígenas. https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-arco-minero-indigenas/

Ebus, B (2021) Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana. https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/rebel-playing-field-colombian-guerrillas-venezuelan-border

Echarte-Fernández, MÁ. Martínez-Hernández, M. Zambrano, O (2018) Un análisis de la crisis económica de Venezuela desde los postulados de la Escuela Austríaca de Economía. *Revista Lasallista de investigación*, *15*(2): 68-82.

EIA (S/F) Petroleum & Other Liquids. Statistics and Analysis. https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=IVE0000004&f=A

Eisinger, PK (1973) The conditions of protest behavior in American cities. *American political science review*, *67*(1): 11-28.

EJAtlas. Website: https://ejatlas.org.

EjAtlas (2018) La Reserva Forestal Imataca, Región Guayana. https://ejatlas.org/conflict/reserva-forestal-imataca-region-guayana-de-venezuela

El Estímulo (2023) Comunidades indígenas denuncian desalojos en Yapacana, ¿cómo les afecta? https://elestimulo.com/de-interes/2023-09-30/comunidades-indigenas-denuncian-desalojos-en-yapacana-como-les-afecta/

El Impulso (2015) Alarmante bajo nivel de Los Quediches (Fotos). https://www.elimpulso.com/2015/08/01/alarmante-bajo-nivel-de-los-quediches-fotos/

El Impulso (2018) VIDEO Paleros y volqueteros exigen permisología para extraer granzón y arena en el Río Turbio. https://www.elimpulso.com/2018/03/15/video-paleros-y-volqueteros-exigen-permisologia-para-extraer-granzon-y-arena-en-el-rio-turbio/

El Informante (2018) En Carora estará hoy el presidente del TSJ. https://www.elinformanteve.com/2018/06/en-carora-estara-hoy-el-presidente-del.html

El Libertario (2013) Entrevista con Alexis Romero, pemón en resistencia: "Ahora se nacionaliza el oro para entregarlo a transnacionales". http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/2013/05/entrevista-con-alexis-romero-pemon-en.html

El País (2017) Venezuela, crimen sin frontera.

El Pitazo (2022) Lara l Provea denuncia explotación irregular de una mina de sílice. https://elpitazo.net/occidente/lara-l-provea-denuncia-explotacion-irregular-de-una-mina-de-silice/

El Universal (2022) Detienen a dos funcionarios en Delta Amacuro por contrabando de gasolina. https://www.eluniversal.com/sucesos/117429/detienen-a-dos-funcionarios-en-delta-amacuro-por-contrabando-de-gasolina

Elbers, J (Ed.) (2011) Las áreas protegidas de América Latina: Situación actual y perspectivas para el futuro. Quito: UICN. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2011-019.pdf

Ellis, E (2018) El colapso de Venezuela y su impacto para la región. *Military Review*, *73*(1): 30-42.

Ellner S (2014) El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto (hasta 2013). Caracas: Fundación Celarg.

Enciso, A (2024) La tala clandestina está ligada al crimen organizado: Conafor. https://www.nacionmulticultural.unam.mx/mezinal/docs/11545.pdf

Encovi (S/F) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) (https://www.proyectoencovi.com/).

Encovi (2018) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018. https://cdn.prod.website-files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/5f034777c92bdce763e10c4b_PRESENTACI%C3%93N%20ENCOVI%202018.pdf

ENH (2019) Encuesta Nacional de Hospitales 2019. https://www.encuestanacionaldehospitales.com/_files/ugd/0f3ae5_bb11695325ef4dde8026e9cd5409298d.pdf

Erkut, B (2020) From digital government to digital governance: are we there yet? *Sustainability*, 12(3), 860.

Escobar A (2001) Culture sits in places: reflections on globalism and subaltern strategies of localization. Polit Geogr 20:139–174

Escobar, A (2007) La invención del Tercer Mundo. Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana

Espina, G (2017) Guerrilleras venezolanas de los años 60. *Revista venezolana de estudios de la mujer*, *22*(48).

Estraño, K (2015) Minería Ilegal y terror entre los cimarrones del río Caura, Estado Bolívar, Venezuela, en: Mommou, Jean. *Sociétés marronnes des Amériques Mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles.* Matoury, Guyana Francesa: Ibis Rouge Editions. pp: 505-519

Etchart, NP (2012) Violencia y sufrimiento tóxico: la lucha por justicia ambiental en Dayuma, Amazonía ecuatoriana. Tesis de Maestría. FLACSO-Sede Ecuador.

Europol (2025) European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment - The changing DNA of serious and organised crime. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Evan-Ellis, R (2017) The collapse of Venezuela and its impact on the region. *Military Review*, 97(4): 22-33.

Expansión (S/F) Venezuela - Gasto público. https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/venezuela

Fagoaga, W (2014) La economía informal y su conexión con el avance de formas delictivas organizadas: Prospectiva para el decenio 2015-2025. *Policía y Seguridad Pública* 4(2): 227-254.

FAO (2010) Global Forest Resources Assessment 2010. Fao Forestry Paper 163. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/4f69bda1-f137-4291-a4b1-6cddcca04c5f/content

FAO (2020) Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA). Informe Venezuela (República Bolivariana de). https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/c1e9fb4f-e83e-4a53-aeb9-5483bfa026da/content

FAO (S/F) FAOSTAT. Datos de Seguridad Alimentaria. https://www.fao.org/faostat/es/#data/FS

FAO. IFAD. UNICEF. WFP. WHO (2020) The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. https://openknowledge.fao.org/items/08c592f2-1962-4e1a-a541-695f9404b26d

Faoro, O (2016a) Gobierno reporta una vez más millonaria inversión en la desmantelada planta de tratamiento de los Olivos. Correo del Caroní. Disponible en https://issuu.com/correodelcaroni/docs/02-09-16/7

Faoro, O (2016b) En San Félix protestan por agua a pesar de las agresiones de la GN. https://archivo.elpitazo.net/regiones/video-en-san-felix-repiten-protesta-por-falta-de-agua-a-pesar-de-agresiones-de-la-gn/

FAS-USDA (2022) Venezuela: A Booming Venezuelan Seafood Industry. https://fas.usda.gov/data/venezuela-booming-venezuelan-seafood-industry

Faulseit, RK (2016) Collapse, resilience, and transformation in complex societies: modeling trends and understanding diversity, en: Faulseit, RK (ed.) Beyond collapse: archaeological perspectives on resilience, revitalization, and transformation in complex societies, Carbondale: Southern Illinois University Press, 3-26.

Favela-Gavia, DM (2002) La estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales en sistemas políticos cerrados: examen del caso mexicano. *Estudios sociológicos*, 91-121.

Fedeagro (S/F) Estimaciones Fedeagro. https://fedeagro.org/estimaciones/

Federici, S (2013) Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficantes de Sueños, Madrid

Fernández-Durán, R. González-Reyes, L (2018) *En la espiral de la energía*. Madrid: Libros en acción.

Ferreira, C (1998) Algunos conflictos ambientales recientes en Venezuela. *Ecología política*, 15:103-109

FICEM (S/F) Acerca de la industria. Informes estadísticos. https://ficem.org/uso-estadisticas/

Field, S (2018) "Venezuela: It's all about the oil". https://antipodeonline.org/2018/08/10/venezuela-its-all-about-the-oil/

Figueroa, Y (2022) Industria podría quedarse sin cartón por paralización. https://cronica.uno/industria-podria-quedarse-sin-carton-por-paralizacion-carton-venezuela/

Fierro, L. Ferrigni, Y (2008) El proceso de estructuración capitalista de la formación social venezolana, en: Carrera-Damas, G (Coord.) Formación Histórico Social de Venezuela. Caracas: UCV, Ed, de la Biblioteca.

Figueroa, Y (2022) Industria podría quedarse sin cartón por paralización. https://cronica.uno/industria-podria-quedarse-sin-carton-por-paralizacion-carton-venezuela/

Folke, C (2016) Resilience. *Ecology and Society*, 21(4):44.

Fontaine, L. Schlumbohm, J (2000) Household strategies for survival: an introduction. *International review of social history*, *45*(S8): 1-17.

Forero, JE (2023) Extractivismo: contexto histórico, fuentes analíticas y desafíos conceptuales. *Letras Verdes, Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*, (34), 180-200.

France 24 (2022) Del petróleo a la chatarra: una alternativa para la crisis económica en Venezuela. Archivo de video en Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=FS9C67N2ZmQ

Franco, JA (2016) La trampa neoliberal de la resiliencia. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, (134): 129-138.

Frangie, T (2020) La extraña vida de los jaguares del sur del Lago de Maracaibo. https://www.cinco8.com/periodismo/la-extrana-vida-de-los-jaguares-del-sur-del-lago/

Frank, AG (1974) *El desarrollo del subdesarrollo*. Bilbao: Zero.

Fréitez, N (2007) Diversidad productiva, valores y tejidos sociales en el estado Lara. Compendium, (19): 63-75. https://www.redalyc.org/pdf/880/88001905.pdf

FSIN (2020) Global Report On Food Crises – 2020. https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%20ONLINE%20FINAL%202020.pdf

Fundación Agua Clara (2021) El Derecho al agua, al saneamiento y al ambiente seguro sano y ecológicamente equilibrado en Venezuela. Informe para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela, durante el 40° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas /junio 2021. https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=9247&file=SpanishTranslation

Fundación Agua Sin Fronteras. Fundación Agua Clara. Clima21. MTA (2018) Emergencia Humanitaria Compleja. Venezuela. Reporte Nacional, Octubre 2018. Derecho al Agua. *Tribuna del Investigador*, *19*(2). https://www.aguaclara.org/downloads/Reporte-Nacional-EHC-y-Derecho-al-Agua-Octubre-2018.pdf

Fundación Paz y Reconciliación (2024) ELN. Corrupción, crimen organizado e internacionalización. https://fca00126-f5d3-4f61-b905-d596c29588de.usrfiles.com/ugd/fca001_647d140e1db34e0f96191fb5d3df797e.pdf

FundaRedes (2020) FundaRedes: "hay nuevos asentamientos del ELN en el municipio Lobatera del Táchira". https://www.fundaredes.org/2020/06/30/fundaredes-hay-nuevos-asentamientos-del-eln-en-el-municipio-lobatera-del-tachira/

FundaRedes (2021) FundaRedes: "Grupos armados irregulares talan indiscriminadamente en Apure para financiar sus operaciones".

https://www.fundaredes.org/2021/03/01/fundaredes-grupos-armados-irregulares-talan-indiscriminadamente-en-apure-para-financiar-sus-operaciones/

FundaRedes (2022a) El Arco Minero del Orinoco y la destrucción de la reserva natural más importante de Venezuela. https://fundaredes.org/informes/2022-ambiente-Arco-Minero-del-Orinoco-y-la-destruccion-de-la-reserva-natural.pdf

FundaRedes (2022b) Grupos Armados irregulares condicionan el derecho a la salud en el Arco Minero del Orinoco. https://fundaredes.org/informes/2022-EPA-GAI-condicionan-derecho-a-la-salud.pdf

FundaRedes (2022c) Guerrilla colombiana y «sindicatos» armados pugnan el control de los pasos fluviales en el estado Monagas. https://www.fundaredes.org/2022/02/17/boletin37-guerrilla-colombiana-y-sindicatos-armados-pugnan-el-control-de-los-pasos-fluviales-en-el-estado-monagas/

GAO (2023) Venezuela: Illicit Financial Flows and U.S. Efforts to Disrupt Them. https://www.gao.gov/assets/gao-23-105668.pdf

Galbraith, JK (2002) A perfect crime: inequality in the age of globalization. Daedalus, 131(1): 11-25.

García, M (2022) "No podemos parar": La bióloga María Fernanda Puerto salva jaguares en Venezuela. https://elcooperante.com/hemos-creado-una-huella-y-no-podemos-parar-la-biologa-maria-fernanda-puerto-que-salva-jaguares-en-venezuela/

García-Bueno J (2022) Condenados dos mandos de la Policía Nacional por liderar una banda de 'narcos' en el puerto de Barcelona. https://elpais.com/espana/catalunya/2022-11-11/condenados-dos-mandos-de-la-policia-por-liderar-una-banda-de-narcos-en-el-puerto-de-barcelona.html

García-Guadilla, MP (1992) The Venezuelan ecology movement: symbolic effectiveness, social practices and political strategies. In: Escobar A, Álvarez S (eds) The making of social movements in Latin America. Westview Press, Boulder, pp 150–170

García-Guadilla, MP (2001) El movimiento ambientalista y la constitucionalización de nuevas racionalidades: dilemas y desafíos. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 7:113-132

García-Guadilla, MP (2009) Ecosocialismo del siglo XXI y modelo de desarrollo bolivariano: los mitos de la sustentabilidad ambiental y de la democracia participativa en Venezuela. *Revista Venezolana de economía y ciencias sociales*, 15:187-223.

García-Guadilla, MP (2014) Dilemas del ecosocialismo post-neoliberal y resistencia de los movimientos sociales frente al modelo neo-extractivista en Venezuela. *Revista Encuentros Latinoamericanos*, 8:3–47

Gardner, CJ. Bullock, JM (2021) In the climate emergency, conservation must become survival ecology. *Frontiers in Conservation Science*, *2*, 659912.

GI-TOC (2023) Índice Global de Crimen Organizado. Venezuela (República Bolivariana De). https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/ocindex_profile_venezuela_2023.pdf

Global Forest Watch (S/F) Venezuela. Dashboard. https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/VEN/

Global Initiative against Transnational Organized Crime (2016) El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina. http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/03/El-Crimen-Organizado-y-la-Miner%C3%ADa-Ilegal-de-Oro-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf

Glockner, V. Borzacchiello, E. Torres, RM. Faria, C. Danze, A. Herrera-Martínez, E. García-Figueroa, G. Niño-Vega, N (2024) The cuerpo-territorio of displacement: A decolonial feminist geopolitics of re-existencia. *Geopolitics*, *29*(4): 1220-1244.

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (2021) Datos económicos del bloqueo a Venezuela. Boletín Antibloqueo / Nro 4. https://observatorio.gob.ve/wp-content/uploads/2021/08/Boletin_Antibloqueo_N3VF.pdf

Gómez Suárez, Á (2003) Movilizaciones étnicas y oportunidades políticas en América Latina. *Nueva antropología*, *19*(63): 71-90.

González, M (2021) Watersheds of Mara are environmental and cultural heritage. Últimas Noticias. Disponible en https://en.ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/cuencas-hidrograficas-de-mara-son-patrimonio-ambiental-y-cultural/

González-Cruz, D (2009) Venezuela ante la baja de los precios del petróleo. *Nueva Sociedad*, 221. https://nuso.org/articulo/venezuela-ante-la-baja-de-los-precios-del-petroleo/

González-Plessmann, A (2019) Minería en El Cerro La Vieja: El Capital contra los derechos humanos del pueblo de Simón Planas. https://albaciudad.org/2019/06/mineria-en-el-cerro-la-vieja-el-capital-contra-los-derechos-humanos-del-pueblo-de-simon-planas/

González-Guinán, F (1954) Historia Contemporánea de Venezuela. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República.

Goodhand, J (2004) Afghanistan in Central Asia, en: Pugh, MC. Cooper, N. Goodhand, J. War economies in a regional context: challenges of transformation. Colorado: Lynne Rienner Publishers. pp.45-89.

Goyatá-Campante, R (2003) O patrimonialismo em Faoro e Weber e a sociologia brasileira. *Dados*, *46*, 153-193.

Gramsci, A (1999) Cuadernos de la cárcel. Tomo 5. Puebla: Ediciones Era.

Graña, F (2005) Todos contra el Estado: Usos y abusos de la "gobernanza". *Espacio Abierto*, 14(4): 501-529.

Gregson, N. Crang, M (2016) Illicit economies: customary illegality, moral economies and circulation. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *42*(2): 206-219.

GTAI. Provea. Laboratorio de Paz (2016) Derechos humanos en el contexto del proyecto "Arco Minero del Orinoco" en Venezuela. Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/DD-HH-en-el-contexto-del-AMO-en-Venezuela.pdf

Guanipa, M (2017) Pescadores protestaron impidiendo acceso de buques a refinería de Falcón. http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/pescadores-protestaron-impidiendo-acceso-buques-refineria-falcon_660380

Guarnizo J (2022) La mina de oro en la que trabajan de la mano Eln, disidencias y la Guardia venezolana. https://es.mongabay.com/2022/11/la-mina-de-oro-en-la-que-trabajan-de-la-mano-eln-disidencias-de-colombia-y-la-guardia-venezolana/

Gudynas, E (2014) Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinámicas. *Decursos*, 27-28: 79-115.

Gudynas E (2015) Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Cochabamba: Claes, Cedib.

Gudynas, E (2016) Modos de producción y modos de apropiación, una distinción a propósito de los extractivismos. *Actuel Marx/Intervenciones*, *20*, 95-121.

Gudynas, E (2019) *Extractivismo y corrupción: anatomía de una íntima relación*. Quito: Editorial Abya-Yala.

Guha, R (2002) Environmentalist of the Poor. *Economic and Political Weekly*, 204-207.

Guillén, JC (2023) Van 14 gandolas secuestradas: Pescadores cerraron la entrada a Coro. https://noticialdia.com/al-dia/van-14-gandolas-secuestradas-y-pescadores-cerraron-la-entrada-a-coro/

Guillén-Araque, JP (2014) Los Territorios Federales en tiempos de Guzmán Blanco. *Academia Nacional de la Historia (Venezuela). Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, *97*(385), 89.

Gutberlet, J. Mantovani-Martiniano de Azevedo, A. Morais, L. Bacic, MJ. Silva de Mesquita, M (2023) Social movements in the context of crisis: waste picker organizations as collaborative public partners in the context of the COVID-19 pandemic. *Environment and Urbanization*, *35*(1): 255-274.

Gutiérrez, J (2017) Cardenalito: belleza alada que desaparece progresivamente de cielos y bosques de Venezuela. https://es.mongabay.com/2017/05/cardenalito-venezuela-extincion/

Gutiérrez, J (2018) Crisis económica en Venezuela: ciudadanos cazan especies silvestres y animales de zoológico. https://es.mongabay.com/2018/08/crisis-economica-en-venezuela-cazan-animales/

Gutiérrez, A (2019) La situación agroalimentaria en Venezuela. Hacia una Nueva Estrategia Revista. *Foro*, *3*(5): 31-52.

Gutiérrez, S (2020) Venezuela, la crisis y la seguridad alimentaria: hacia una nueva estrategia. *Agroalimentaria Journal-Revista Agroalimentaria*, *26*(51): 77-116.

Gutiérrez-Aguilar, R. Navarro, ML. Linsalata, L (2016) Repensar lo político, pensar lo común: claves para la discusión, en: Inclán, D. Linsalata, L. Millán, M. Modernidades alternativas. Cidade do México: Ediciones del Lirio, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. pp.377-417.

Gutiérrez-Sanín, F. Rodgers, D (2020) Economías ilícitas, movilización social y ambigüedades. *Estudios Socio-Jurídicos*, *22*(2): 11-22.

Gutiérrez-Torres, J (2018) Venezuela's hungry hunt wildlife, zoo animals, as economic crisis grows. https://news.mongabay.com/2018/05/venezuelas-hungry-hunt-wildlife-zoo-animals-as-economic-crisis-grows/

Habitantes del poblado autóctono de Galipán (2019) CARACAS: Comunicado de los habitantes del poblado autóctono de Galipán, ante la construcción de la nueva ruta prevista en el proyecto «Sistema teléferico Warairarepano-Macuto». https://ecopoliticavenezuela.org/2019/05/30/comunicado-los-habitantes-del-poblado-autoctono-galipan-ante-la-construccion-la-nueva-ruta-prevista-proyecto-sistema-teleferico-warairarepano-macuto/

Haesbaert, R (2013) Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y representaciones sociales*, 8 (15): 9-42.

Hagmann T, Péclard, D (2010) Negotiating Statehood: Dynamics of Power and Domination in Africa. Development and Change, Oxford

Hallegatte, S. Rentschler, J. Rozenberg, J (2020) Adaptation Principles: A Guide for Designing Strategies for Climate Change Adaptation and Resilience. Washington: World Bank. http://hdl.handle.net/10986/34780

Halperin-Donghi, T (1985) Historia Contemporánea de América Latina. Madrid: Alianza Editores.

Hanisch, M. Goldsby, CM. Fabian, NE. Oehmichen, J (2023) Digital governance: A conceptual framework and research agenda. *Journal of Business Research*, 162, 113777.

Hardt M, Negri A (2004) Multitud. Debate, Barcelona.

Harper K (2006) Wild Capitalism: Environmental Activism and Postsocialist Political Ecology in Hungary. University of Massachusetts

Harvey, D (2001) Globalization and the "spatial fix". *Geographische revue*, *3*(2), 23-30.

Harvey D (2004) El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.

Harvey, D (2014) Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: IAEN. Traficantes de sueños.

Harwich Vallenilla, N (1975) Cipriano Castro: El retorno. *Revista Resumen*, (85).

Harwich Vallenilla, N (1990) El positivismo venezolano y la modernidad. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares.

Hausmann, R. Muci, F (2019) Don't Blame Washington for Venezuela's Oil Woes: A Rebuttal. https://www.americasquarterly.org/article/dont-blame-washington-for-venezuelas-oil-woes-a-rebuttal/

Hecht, S. Schminkb, M. Abersc, R. Assadd, E. Humphreys-Bebbingtone, D. Brondiziof, E. Costag, F. Durán-Calistoh, AM. Fearnsidei, P. Garrettj, R. Heilpernk, S. McGrathl, D. Oliveiram, G. Pereiran, H. Pinedo-Vazquez, M (2021) La Amazonía en movimiento: Políticas cambiantes, estrategias de desarrollo, pueblos, paisajes y medios de subsistencia. In: Nobre et al (Eds.). Informe de evaluación de Amazonía 2021, chapter 14. New York: United Nations Sustainable Development Solutions Network. https://www.laamazoniaquequeremos.org/wp-content/uploads/2022/10/Chapter-14-ES-Bound-Oct-20.pdf

Hernández, I (2017) En discusión posible extracción del mineral sílice en Torres. http://diarioelcaroreno.com.ve/web/2017/01/19/en-discusion-posible-extraccion-del-mineral-silice-en-torres/

Hernández-Arocha, A (2007) Espacios naturales protegidos, en: GeoVenezuela. Tomo 2. Caracas: Fundación Empresas Polar. pp.616-683

Herrera, F. Rodríguez, I (2015) Minería de oro en Venezuela: luchas simbólicas vs políticas redistributivas. *Ecología Política*, 49:84-88

Higgins, V. Dibden, J. Potter, C. Moon, K. Cocklin, C (2014). Payments for ecosystem services, neoliberalisation, and the hybrid governance of land management in Australia. *Journal of Rural Studies*, 36:463-474.

Hintze, S (2004) Capital social y estrategias de supervivencia. Reflexiones sobre el capital social de los pobres, en: Danani, C (Comp.) Política social y economía social: debates fundamentales. Buenos Aires: UNGS-Fundación OSDE-Altamira. pp. 87-116.

Hispanopost (2023) Ministro de Pesca y Acuicultura proyecta 40 mil toneladas de producción de camarón en este año. https://hispanopost.com/ministro-de-pesca-y-acuicultura-proyecta-40-mil-toneladas-de-produccion-de-camaron-en-este-ano/

Hobsbawm, EJ (1974) Rebeldes primitivos. Barcelona: Ariel.

Homer-Dixon, TF (1994) Environmental scarcities and violent conflict: evidence from cases. *International security*, *19*(1): 5-40.

Horowitz L (2009) Environmental violence and crises of legitimacy in New Caledonia. Political Geography 28:248–258

Hostein, N (2010) El pueblo wayuu de la Guajira colombo-venezolana: un panorama de su cultura. *Cuadernos de Antropología*, *20*. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6066269.pdf

HRW (2018) Venezuela: Las cifras evidencian una crisis de salud. https://www.hrw.org/es/news/2018/11/15/venezuela-las-cifras-evidencian-una-crisis-de-salud

HRW (2020) Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales. https://www.hrw.org/es/news/2020/02/04/venezuela-violentos-abusos-en-minas-de-oro-ilegales

HRW (2021) Informe Mundial 2021 Venezuela. https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/venezuela

Hudson, R (2018) The illegal, the illicit and new geographies of uneven development. *Territory, Politics, Governance*, *8*(2): 161-176.

HumVenezuela (2023) Informe de seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. https://provea.org/actualidad/servicios-basicos-hum-venezuela-advierte-sobre-crisis-electrica-y-dificultades-en-transporte-gas-y-comunicaciones-en-el-pais/

Humphreys, M (2005) Natural resources, conflict, and conflict resolution: Uncovering the mechanisms. *Journal of conflict resolution*, *49*(4): 508-537.

Hunt, E (2023) The U.S. economic war on Venezuela has fueled the migrant crisis. https://fpif.org/the-u-s-economic-war-on-venezuela-has-fueled-the-migrant-crisis/

Ibarra, H (2002) Gamonalismo y dominación en los Andes. *Íconos: Revista de Ciencias Sociales* 15: 137-147.

Idrobo, N. Kronick, D. Rodríguez, F (2023) Causes and Consequences of Food Insecurity During the Venezuelan Crisis. Proposal for the Inter-American Development Bank. https://research-proposals.iadb.org/system/files/2023-09/Determinants_of_Food_Insecurity_During_the_Venezuelan_Crisis%20-%20main.pdf

IMF (2025) IMF Datamapper. https://www.imf.org/external/datamapper/datasets

IMF (S/F) Venezuela. Datasets. https://www.imf.org/external/datamapper/profile/VEN

Impacto Venezuela (2021) ANTISOCIALES CON GRANADAS: Cicpc abate a cinco sujetos que se dedicaban a la minería ilegal en Carabobo. https://impactove.com/antisociales-con-granadas-cicpc-abate-a-cinco-sujetos-que-se-dedicaban-a-la-mineria-ilegal-en-carabobo

Indaga (2022) La tala ilegal en la Amazonía peruana. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3095185/Documento%20-%20La%20tala%20ilegal%20en%20la%20Amazon%C3%ADa%20peruana.pdf.pdf

INE (2014) XIV CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. https://web.archive.org/web/20191020184043/http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/nacional.pdf

INE (2015) Censo nacional de población y vivienda 2011. Empadronamiento de la población indígena. https://celade.cepal.org/censosinfo/manuales/VE_EmpadronPobIndigena_2011.pdf

Insight Crime (2018a) The Devolution of State Power: The 'Colectivos'. https://insightcrime.org/investigations/devolution-state-power-colectivos/

Insight Crime (2018b) Venezuela: ¿Un Estado mafioso? https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/05/Venezuela-Estado-mafioso-InSight-Crime-Observatorio-de-crimen-organizado.pdf

Insight Crime (2021a) La guerra subsidiaria en Apure. https://insightcrime.org/es/investigaciones/guerra-subsidiaria-apure/

Insight Crime (2021b) La minería ilegal en la Amazonía colombiana. https://insightcrime.org/es/investigaciones/mineria-ilegal-amazonia-colombiana/

Insight Crime (2022a) Las guerrillas colombo-venezolanas: la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela. https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2022/10/Las-guerrillas-colombo-venezolanas-la-migracio%CC%81n-de-la-guerra-de-Colombia-hacia-Venezuela-InSight-Crime-Oct-2022.pdf

Insight Crime (2022b) ¿Por qué el ELN está detrás de la ruta del río Orinoco en Venezuela? https://insightcrime.org/es/noticias/por-que-eln-detras-ruta-rio-orinoco-venezuela/

Insight Crime (2023a) Frente Acacio Medina – Ex-FARC Mafia. https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/frente-acacio-medina/

Insight Crime (2023b) La Organización R. Disponible en: https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-venezuela/la-organizacion-r/

Insight Crime (2023c) Cómo se convirtió la chatarra en empresa criminal en Venezuela. https://insightcrime.org/es/noticias/chatarra-empresa-criminal-venezuela/

Inter-American Dialogue (2020) Reviving Venezuela's Oil Sector: The Role of Western Oil Majors. https://thedialogue.org/analysis/reviving-venezuelas-oil-sector-the-role-of-western-oil-majors/

Inter-American Dialogue (2023) Venezuela: Remittances as a Source of Foreign Exchange and Economic Survival. https://thedialogue.org/analysis/venezuela-remittances-as-a-source-of-foreign-exchange-and-economic-survival/

Interpol (2022) INTERPOL: La tala ilegal en América Latina y el Caribe causa daños irreversibles. https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2022/INTERPOL-La-tala-ilegal-en-America-Latina-y-el-Caribe-causa-danos-irreversibles

Inverardi-Ferri, C (2021) Towards a cultural political economy of the illicit. *Progress in Human Geography*, *45*(6): 1646-1667

IOM (S/F) Portal De Datos Sobre Migración. https://www.migrationdataportal.org/es/international-data

IPDRS (2021) Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica 2021. Séptimo Informe anual. https://ipdrs.org/libros/septimo-informe-anual-acceso-a-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica-2021/

Irwin, D (1991) Ejército y Caudillismo en el Siglo XIX. El Caso Venezolano. *Revista Montalbán*, (23).

Irwin, D. Micett, I (2011) De caudillos a pretorianos. Una Periodización de la realidad militar venezolana, siglos XIX y XX. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos.* Versión digital. https://journals.openedition.org/nuevomundo/60783

James, LM (2015) Fields of control: oil and (in) security in Sudan and South Sudan. HSBA Working Paper, 40. https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/HSBA-WP40-Oil.pdf

Janus, T (2012) Natural resource extraction and civil conflict. *Journal of Development Economics*, *97*(1): 24-31.

Jasper, JM (2012) ¿De la estructura a la acción? La teoría de los movimientos sociales después de los grandes paradigmas. *Sociológica (México)*, *27*(75): 7-48.

Jiménez, M (2022) La democratización en Venezuela pasa también por la reconstrucción del Estado. *Nueva sociedad*, 299: 120-133.

Jiménez-Lemón, A. Teran-Mantovani, E (2024) A diez años de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Desafíos ambientales y sociales de las inversiones de China en América del Sur. Caso Venezuela, en: LAS. CICDHA. Sustentarse. A diez años de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Quito: Latinoamérica Sustentable. pp. 126-138.

Jones, K. Lizcano, J.Ramírez, MF (2022) Bajo la superficie de la minería ilegal de oro en el Amazonas. https://insightcrime.org/es/investigaciones/bajo-superficie-mineria-ilegal-oro-amazonas/

Kakabadse, A. Kakabadse, N (2001) Governance, en: The Geopolitics of Governance. London: Palgrave Macmillan.

Kaldor M, Karl TL, Said Y (2007) Oil Wars. Pluto Press, London

Kaltmeier, O (2019) Refeudalización: Desigualdad social, economía y cultura política en América Latina en el temprano siglo XXI. Bielefeld: Calas

Kapé-Kapé (2020) Indígenas del Caura y Erebato piden salida de grupos armados en 72 horas. https://kape-kape.one/2020/04/08/indigenas-del-caura-y-erebato-piden-salida-de-grupos-armados-en-72-horas/

Kapé Kapé (2022a) Expansión de la minería y la violencia en las comunidades indígenas. https://Kape-Kape.one/wp-content/uploads/pdf/BOLETIN.28.Expansion.de.la.mineria.y.la.violencia.en.las.comunidades.indigenas_opt.pdf

Kapé-Kapé (2023) Se cumplen 6 meses de la Operación Autana en el Parque Nacional Yapacana. https://kape-kape.one/2023/06/15/se-cumplen-6-meses-de-la-operacion-autana-en-el-parque-nacional-yapacana/

Kapé Kapé (2022b) Heridos dos indígenas jivi en incidente en mina El Silencio. https://lostubazos.com/2022/05/31/heridos-dos-indigenas-jivi-en-incidente-en-mina-el-silencio/

Karl TL (1997) Paradox of plenty: oil booms and Petro-States. University of California Press, Los Angeles

Khan, H (2011) A literature review of corporate governance. In *International Conference on E-business, management and Economics*, 25(1): 1-5. Singapore: IACSIT Press.

Kitschelt, H (1986) Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies. *British Journal of Political Science*, 16: 57–85.

Kooiman, J (2005) Governing as governance. London: Sage.

Koselleck, R (2016) Algunas preguntas sobre la historia del concepto "crisis". *Philosophia*, *76*(2): 101-115.

Kovalik, D (2019) The plot to overthrow Venezuela: how the US is orchestrating a coup for oil. New York: Arcade Publishing.

Kriesi, H (2004) Political context and opportunity. en: Snow, DA. Soule, SA. Kriesi, H (Eds.) The Blackwell companion to social movements. Blackwell Publishing, pp. 67-90.

Krokfors, C (1991) The Political Ecology of Survival in Africa, a Conceptual Framework, en: Mickels, G. Floor, K. Toro, A (Eds.). The Third World, The Fourth World: Dimensions of Developmentin the Peripheries. Occasional Papers of the Finnish Association for Development Geography, (26): 23-24.

La Cruz, R (1992) El uso del agua y sus problemas en la subcuenca de la Quebrada Las Tapias. Municipio Autónomo Rivas Dávila. Estado Mérida. Tesis de grado. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela. pp 164.

La Opinión (2022a) Carbón de Venezuela es traído de contrabando a Colombia. https://www.pressreader.com/colombia/la-opinion-ea57/20220527/281535114613152

La Opinión (2022b) La Opinión te cuenta por qué los mineros de Lobatera en Táchira están paralizados. Archivo de video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pnEP9CYu0Hw

La Patilla (2022) Los rusos y el ELN controlarían la explotación de carbón en Táchira amparados por el chavismo. https://www.lapatilla.com/2022/02/19/los-rusos-y-el-eln-controlarian-la-explotacion-de-carbon-en-tachira-amparados-por-el-chavismo/

La Tabla (2020) Cuenta de Twitter del Diario. Hilo del 19 de noviembre de 2020. https://twitter.com/latablablog/status/1329486578876559362?lang=en

Lacabana, M. Cariola, C (2003) Estrategias de sobrevivencia, modos de vida y heterogeneidad social en la interfase periurbana de caracas. *Cuadernos del CENDES*, *20*(53); 51-64.

Lagunes, PF. Svejnar, J (eds) (2020) Corruption and the Lava Jato Scandal in Latin America. Routledge, New York.

Lander, E (2000) Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos, en: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Clacso. pp. 11-40.

Lander, E (2016) La implosión de la Venezuela rentista. Cuadernos de la Nueva Política. 1: 1-23. https://www.tni.org/files/publication-downloads/lander-venezuela-spanish_0.pdf

Lander, E (2017a) Venezuela: la experiencia bolivariana en la lucha por trascender al capitalismo. Working paper. Fundación Rosa Luxemburg. http://www.rosalux.org.ec/pdfs/venezuela_la_experiencia_bolivariana_en_la_lucha_por_trascender_al_capitalismo_25_de_agosto__2017.pdf

Lander, E (2017b) La larga crisis terminal del modelo rentista petrolero venezolano y la profunda crisis que actualmente enfrenta el país. *Investigaciones sociales*, *21*(38): 187-198.

Lapierre, M. Aguasantas, M (2018) Extractivismo,(neo) colonialismo y crimen organizado en el norte de Esmeraldas. Quito: Abya Yala. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Larsen, RK. Osbeck, M. Dawkins, E. Tuhkanen, H. Nguyen, H. Nugroho, A. Wolvekamp, P (2018) Hybrid governance in agricultural commodity chains: Insights from implementation of 'No Deforestation, No Peat, No Exploitation'(NDPE) policies in the oil palm industry. *Journal of Cleaner Production*, 183:544-554.

Latorre S, Farrell K, Martínez-Alier J (2015). The commodification of nature and socio-environmental resistance in Ecuador: An inventory of accumulation by dispossession cases, 1980–2013. Ecological Economics, 116:58-69

Latour, B (2017) Cara a cara con el planeta: Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Launay, C (2005) La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. *Revista Controversia*, (185), 92-105.

Lawler, A (2010) Collapse? What collapse? Societal change revisited. *Science*, 330: 907-909.

Le Billon P (2001) The political ecology of war: natural resources and armed conflicts. Political Geography 20:561–584

Le Billon, P. Duffy, R (2018) Conflict ecologies: Connecting political ecology and peace and conflict studies. *Journal of Political Ecology*, *25*(1): 239-260.

Le Tran D, Martinez-Alier J, Navas G, Mingorria S (2020) Gendered geographies of violence: a multiple case study analysis of murdered women environmental defenders. Journal of Political Ecology, 27(1), 1189-1212.

Leff, E (1994) Ciencias sociales y formación ambiental. México: Gedisa.

Leff, E (1998) Saber Ambiental: Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder. México: Siglo XXI.

Leff, E (2003) La Ecología Política en América Latina. Un campo en construcción. *Polis,* [En línea], 5. http:// polis.revues.org/6871

Leff, E (2004) Racionalidad Ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. Buenos Aires: Siglo XXI.

Leff, E (2015) Political ecology: a Latin American perspective. *Desenvolvimento e meio ambiente*, *35*(35): 29-64.

Legler, T. Serbin-Pont, A. Garelli-Ríos, O (2018) Venezuela: la multidimensionalidad de una crisis hemisférica. *Pensamiento Propio*, *23*(47).

Lessing, B (2021) Conceptualizing criminal governance. *Perspectives on politics*, 19(3): 854-873.

Levi, M (2002) The Organization of Serious Crimes, en: Maguire, M. Morgan, R. Reiner, R. The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press, pp. 878-913.

Ley del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre de 2013. http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/PLAN-DE-LA-PATRIA-2013-2019-1.pdf

Library of the Congress (2005) Country Profile: Venezuela. https://tile.loc.gov/storage-services/master/frd/copr/Venezuela.pdf

LIT-CI (2023) Venezuela: Un programa para el proceso de luchas obreras en curso en el país. https://litci.org/es/venezuela-un-programa-para-el-proceso-de-luchas-obreras-en-curso-en-el-pais/?utm_source=copylink&utm_medium=browser

Lockwood, M. Davidson, J (2010) Environmental governance and the hybrid regime of Australian natural resource management. *Geoforum*, 41(3), 388-398.

Lombardi, JV (1982) La búsqueda del orden, El sueño del progreso. Barcelona: Editorial Crítica.

Longstaff, P. Armstrong, NJ. Perrin, K. Parker, WM. Hidek, MA (2010) Building Resilient Communities: A Preliminary Framework for Assessment, Homeland Security Affairs, Volume VI, No. 3.

López, E (2012) Mafias en Alto Paragua: explotacion de oro y destruccion de la naturaleza en la Guayana Venezolana. http://amigransa.blogia.com/2012/030102-mafias-en-alto-paragua-explotacion-de-oro-y-destruccion-de-la-naturaleza-en-la-.php

López, J [@Joannelopezch] (2023a, 15 de junio) *#ULTIMAHORA pescadores de Río Seco en #Falcón regresaron a las calles reclamando el derecho al sustento y protegiendo al mar*…X. https://x.com/Joannelopezch/status/1669335901296553986

López, J (2023b) Pescadores de Río Seco en Falcón señalan a Pdvsa de contaminar el Golfete de Coro. https://cronica.uno/pescadores-de-falcon-acusan-a-pdvsa-acabar-el-golfete-de-coro/

López-González, AE. Domenech-Lega, B. Ferrer-Martí, L (2017) Renta petrolera y electrificación en Venezuela: Análisis histórico y transición hacia la sostenibilidad. *Cuadernos latinoamericanos*, *29*(51): 1-24.

López-Maya, M (2018) Populism, 21st-century socialism and corruption in Venezuela. *Thesis Eleven*, 149(1), 67-83.

López-Maya, M (2001) Venezuela después del Caracazo: formas de protesta en un contexto desinstitucionalizado. Working Paper # 287. Kellogg Institute. https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/287_0.pdf

López-Maya, M. Lander, LE (2009) El socialismo rentista de Venezuela ante la caída de los precios petroleros internacionales. *Cuadernos del CENDES*, *26*(71): 67-87.

López-Maya, M. Panzarelli, D (2012) Populismo, rentismo y socialismo del siglo XXI: El caso venezolano, en: Cheresky, I (Comp.) ¿Qué democracia en América Latina? Buenos Aires: Clacso, pp. 205-234.

López-Tarabochia, M (2018) La tala ilegal: Crimen organizado que acaba con los bosques latinoamericanos. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/La_tala_ilegal_Crimen_organizado_que_acaba_con_los_bosques_latinoamericanos

López-Vallejo, M. Fuerte-Celis, M (2021) Hybrid governance in Northeastern Mexico: crime, violence, and legal-illegal energy markets. *Latin American Perspectives*, 48(1):103-125.

Los Informantes (2018) Conozca la odisea del tráfico ilegal de gasolina en la frontera con Venezuela. Archivo de video de Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=sS-KaMfgrIs.

Lozada, JR (2019) The Orinoco mining arc: A historical perspective. *Gold Bulletin*, *52*(3), 153-163.

Lucas, G (Coord.) (2021) Propuestas para la reactivación del Sector Manufacturero. Proyecto Universidad Católica Andrés Bello y la Fundación Konrad Adenauer. https://economia.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Informe-Preliminar-Sector-Manufacturero-1.docx

Luján, R (2022) Remesas en Venezuela se duplicaron en cuatro años, aunque a un menor ritmo en 2022. https://www.bloomberglinea.com/2022/12/06/remesas-en-venezuela-se-duplicaron-en-cuatro-anos-aunque-a-un-menor-ritmo-en-2022/

MAAP (2022) MAAP #155: Deforestation Hotspots in the Venezuelan Amazon. https://maaproject.kinsta.cloud/?html2pdf=https://www.maapprogram.org/deforestation-venezuela/&media=print

Machado-Aráoz, H (2015) Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-ex-sistencias decoloniales en Nuestra América. *Bajo el Volcán*, 15(23):11-51.

Machado-Aráoz, H (2018) Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea. Quito: Editorial Abya-Yala.

Madrid, AG. Ortiz-López, LM (2005) Análisis y síntesis en cartografía: algunos procedimientos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. https://repositorio.unal.edu.co/items/6fddaa6b-ab19-4f3d-af78-671ca01bb768

Magdaleno, J (2018) Escenarios en la encrucijada venezolana. *Nueva sociedad*, 274: 152-164.

Maikiraalasalii (2012) Maikiraalasalii, autonomía indígena y conciencia ecológica. http://www.aporrea.org/regionales/a139862.html

Makadok, R. Coff, R (2009) Both market and hierarchy: An incentive-system theory of hybrid governance forms. *Academy of Management Review*, 34(2):297-319.

Malamud, C (2019) La crisis de Venezuela y el tablero geopolítico internacional. ARI 24/2019. https://www.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/11/ari24-2019-malamud-nunez-crisis-venezuela-tablero-geopolitico-internacional.pdf

Manganelli, A. Van den Broeck, P. Moulaert, F (2020) Socio-political dynamics of alternative food networks: a hybrid governance approach. Territory, Politics, Governance, *8*(3):299-318.

Mann, M (2006) El poder autónomo del Estado: Sus orígenes, mecanismos y resultados, *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, 5: 1-43.

Mampilly, ZC (2007) Stationary Bandits: Understanding Rebel Governance. Doctoral dissertation. University of California, Los Angeles

Marea Socialista (2014) Sinfonía de un Desfalco a la Nación: Tocata y fuga… de Capitales. https://www.aporrea.org/contraloria/n257348.html

Markham, A (2018) Half a Degree of Warming Could be the Difference Between Survival and Extinction for Many Species. https://blog.ucs.org/adam-markham/half-a-degree-of-warming-could-mean-species-extinction/

Márquez, T (2004) Presidencialismo, autoritarismo y culto a la personalidad (Hugo Chávez y el ejercicio del poder). *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, *10*(2): 57-77.

Márquez-Marín, G. Mendoza-Pottellá, C. Millán, O (2023) Contrato PDVSA-Chevron Inició Nueva Apertura Petrolera https://www.aporrea.org/energia/a320133.html

Marrero, Levi. 1964. Venezuela y sus Recursos. Una Geografía Visualizada, física, humana, económica y regional. Caracas: Editorial Cultural Venezolana S.A.

Marrero, Levi. 1978. Venezuela visualizada. Atlas geográfico y económico. Caracas: Editorial Cultural Venezolana S.A.

Martens, R (2018) La ordenación del territorio en Venezuela y su impacto en las comunidades indígenas del municipio Gran Sabana-estado Bolívar. *Boletín Antropológico*, 36(96): 274-306.

Martín, F (2017) Extractivismo y espacialidad en Latinoamérica. Reflexiones desde la teoría espacial crítica, en: Rosales, M. Garay Reyna, ZM (eds.). *Tensiones (pos) identitarias, Desarrollo y Derechos. Procesos de (des)(re) territorialización en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO; Córdoba: CEA/UNC. 13-26.

Martinez-Alier, J (1995) The environment as a luxury good or "too poor to be green"? *Ecological economics*, *13*(1): 1-10.

Martínez-Alier J (2003) The Environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation. Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton

Martínez-Alier, J. Sejenovich, H. Baud, M (2015) El ambientalismo y ecologismo latinoamericano, en: De Castro, F. Hogenboom, B. Baud, M (Coords.) Gobernanza ambiental en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 39-72.

Martínez-Alier J, Walter M (2016) Social metabolism and conflicts over extractivism. In: De Castro F, Hogenboom B, Baud M (eds) Environmental Governance in Latin America. Palgrave Macmillan, New York. pp:58-85.

Martínez- Castillo, AD (2017) La intervención del Estado venezolano en la economía 1936-2016: alcances y límites. *Economía*, *42*(43): 113-139.

Mayorca, JI (2017). Las megabandas: Una aproximación a la insurgencia criminal venezolana. Monografıas Visibilizando el Delito Organizado. Caracas*:* Observatorio del Delito Organizado. https://observatoriodot.org/wp-content/uploads/2018/05/Lasmegabandas.pdf

Mbembe, A (2016) Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo. Barcelona: NED Ediciones.

McAdam, D (1999) Political process and the development of black insurgency, 1930-1970. Chicago: University of Chicago Press.

McCarthy-Jones, A. Turner, M (2022) What is a "Mafia State" and how is one created? *Policy Studies*, 43(6): 1195-1215.

McCool, WC. Vernon, KB. Yaworsky, PM. Codding, BF (2022) Subsistence strategy mediates ecological drivers of human violence. *PLoS one*, *17*(5): e0268257

McDermott, J (2019) Game Changers 2018: 5 razones por las que el crimen organizado crecera en Latinoamerica en 2019. Insight Crime. https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/gamechangers-2018-5-razones-por-las-que-el-crimen-organizadocrecera-en-latinoamerica-en-2019/

McLafferty, F. Dennis, M. Krings, A (2019). Collective survival strategies and anti-colonial practice in ecosocial work. *Ecosocial Work in Community Practice*. https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1127&context=socialwork_facpubs

MDME (2018) Plan Sectorial Minero 2019-2025. https://observatorioguayana.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2024/01/23-Plan-Sectorial-Minero-2019_2025.pdf

MDME (2020) Ministra Magaly Henríquez participó en encuentro con representantes de plantas de lixiviación del estado Bolívar. http://www.desarrollominero.gob.ve/ministra-magaly-henriquez-participo-en-encuentro-con-representantes-de-plantas-de-lixiviacion-del-estado-bolivar/

MDME (S/F) Arco Minero del Orinoco (AMO): un modelo de minería responsable. http://www.desarrollominero.gob.ve/zona-de-desarrollo-estrategico-nacional-arco-minero-del-orinoco/Meagher K (2012) The strength of weak states? Non-state security forces and hybrid governance in Africa. Development and Change, 43(5):1073-1101.

Meagher, K (2012) The strength of weak states? Non-state security forces and hybrid governance in Africa. *Development and Change*, 43(5):1073-1101.

Meagher, K. De Herdt, T. Titeca, K (2014) Unravelling public authority: Paths of hybrid governance in Africa. Academy on Human Security in Fragile States.

Meléndez, L (2019) No hay quien proteja a los defensores ambientales de Venezuela. https://es.mongabay.com/2019/10/defensores-ambientales-venezuela-impunidad-asesinato-indigenas/

Meléndez, L (2023) Desafíos ambientales para Venezuela en 2023: controlar la minería ilegal en la Amazonía y mitigar riesgo de deslaves. https://es.mongabay.com/2023/01/desafios-ambientales-para-venezuela-en-2023-controlar-mineria-ilegal-en-la-amazonia/

Mellado, MA. Rodríguez I (2018) Proyecto de Tendido Eléctrico en el Parque Nacional Canaima. https://ejatlas.org/conflict/proyecto-de-tendido-electrico-en-el-parque-nacional-canaima-venezuela

Melucci, A (2015) El conflicto y la regla: movimientos sociales y sistemas políticos. *Sociológica México*, (28): 225-233.

Mendoza-Pottellá, C (2016) Vigencia del nacionalismo petrolero. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana.

Merchán-Rojas, MA (2016) Neoextractivismo y conflictos ambientales en América Latina. *Espiral estudios sobre Estado y sociedad*, *23*(66), 155-192.

Merlinsky, M (2015) Una sociología reflexiva para el análisis de los conflictos ambientales: notas teórico-metodológicas en torno a dos estudios de caso. Debate Público, 5(10): 29-42.

Merlinsky, G (2017) Los movimientos de justicia ambiental y la defensa de lo común en América Latina. Cinco tesis en elaboración, en: Alimonda, H. Toro-Pérez, C. Martín, F (Coords.). Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Tomo 2, Buenos Aires: CLACSO, 241-264.

Meyer, D (2004) Tending the Vineyard: Cultivating Political Process Research, en: J. Goodwin y J. M. Jasper (eds.), Rethinking Social Movements. Maryland: Rowman and Littlefield, Lanham.

Miklian J (2012) The Political Ecology of War in Maoist India. Politics, Religion & Ideology 13:561–576

Milles, M. Huberman, M (1994) Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications.

MinAmb Perú (2016) Manual de buenas prácticas en minería aurífera aluvial para facilitar una adecuada recuperación de áreas. https://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2017/02/2017-01-30-Manual-de-buenas-pr%C3%A1cticas-en-miner%C3%ADa-aur%C3%ADfera-aluvial-para-facilitar-una-adecuada-recuperacion-de-%C3%A1reas-FINAL-3.pdf

Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (2024) Panorama del sector camaronero en Venezuela. http://minpesca.gob.ve/2024/05/24/venezuela-cuenta-con-un-clima-adecuado-para-la-produccion-de-camaron-durante-todo-el-ano/

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) e Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA) (2010). GeoVenezuela. Perspectivas del Ambiente en Venezuela. Caracas: Pnuma, MPPA e IFLA

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. PDVSA (Comps.) (S/F) Pensamiento petrolero del Comandante Chávez. Caracas: Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos PDVSA.

Ministerio Público (2017) Balance de Víctimas fallecidas y lesionadas durante manifestaciones en abril-julio de 2017. 10 de julio. http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=31c69457-3dd2-49d0-94d9-7fca7f6ba8c8&groupId=10136

MippCI (2019) Arco Minero del Orinoco cuenta con más de 1.000 alianzas estratégicas. http://www.minci.gob.ve/arco-minero-del-orinoco-cuenta-con-mas-de-1-000-alianzas-estrategicas/

Moguel-Viveros, R. Moreno-Andrade, S (2005) Estrategias sociales: de la sobrevivencia a la contingencia. *Papeles de población*, 11(46): 139-159.

Molina Bedoya, VA (2015). Existencia equilibrada. Metáfora del Buen Vivir de los pueblos indígenas. *Polis. Revista Latinoamericana*, (40). http://journals.openedition.org/polis/10679

Mommer, B (2010) La Cuestión Petrolera. Caracas: Fondo Editorial Darío Ramírez, PDVSA.

Monaldi, F (2024) Latin American Oil Production: A Rosy Outlook, for a Change. https://www.bakerinstitute.org/research/latin-american-oil-production-rosy-outlook-change

Moncada, A. Tillet, A (2018) Las organizaciones indígenas y la lucha por la defensa de sus territorios en el estado Amazonas. *Territorios Comunes*, 1: 71-76.

Moncada, A (2020) Oro, cocaína y control: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la minería ilegal del Estado Amazonas. *Territorios Comunes*, *3*, 46-55.

Moncayo, VM (2012) ¿Cómo aproximarnos al Estado en América Latina, en: Thwaites, M. *El estado en América Latina: continuidades y rupturas*. Santiago: ARCSIS. CLACSO. p. 19-49.

Moneada, (S/F) Organizaciones campesinas. Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Empresas Polar. https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/o/organizaciones-campesinas/

Monedero, JC (2003) La trampa de la gobernanza: Nuevas formas de participación política. Comisión de Participación Ciudadana, Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura. http://2015ymas.org/IMG/pdf/Anuario_2003_02_E_LATRAMPA.pdf

Monks, R. Minow, N (2011) Corporate governance. United Kingdom: John Wiley & Sons.

Monsiváis-Carrillo, A. Del Río-Martínez, A (2013) El neopatrimonialismo a debate: coordenadas conceptuales y apuntes analíticos. *Espiral (Guadalajara)*, *20*(58), 37-66.

Montenegro, C (2020) La Conquista del Sur. https://talcualdigital.com/la-conquista-del-sur-por-carlos-m-montenegro/

Montenegro, YA (2021) Sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela: consecuencias regionales. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, *16*(2): 121-139.

Montenegro y Colón, F (1833) Geografía general para el uso de la juventud de Venezuela, Volumen 4. Caracas: Imprenta Damirón. https://books.google.co.ve/books?id=SQYIAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Felicia

no+Montenegro+y+Col%C3%B3n&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiO5_mm--WJAxVrJkQIHTYwDccQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q&f=false

Montiel, A (2016) Laguna de Sinamaica agoniza en el abandono. https://www.diariocontraste.com/2016/05/laguna-de-sinamaica-agoniza-en-el-abandono/#

Moore JW (2000) Sugar and the expansion of the Early Modern World economy. Review 23:409–433

Moore JW (2011) Transcending the metabolic rift: a theory of crises in the capitalist world-ecology. *J Peasant Stud* 38:1–46

Moore JW (2013) El auge de la ecología-mundo capitalista, I: Las fronteras mercantiles en el auge y decadencia de la apropiación máxima. Laberinto 38:9–26. https://jasonwmoore.com/wp-content/uploads/2017/08/Moore-El_Auge_de_la_ecologia-mundo_capitalista__Part_I__Laberinto__2013.pdf

Mora-Delgado, J (2008) Persistencia, conocimiento local y estrategias de vida en sociedades campesinas. *Revista de estudios sociales*, (29), 122-133

Mora-Silva, J. Rodríguez-Velásquez, F (2019) La Amazonía en disputa: agencias políticas y organizaciones indígenas de la Amazonía venezolana frente al Arco Minero del Orinoco. *Polis. Revista Latinoamericana*, (52).

Moraitis, A (2024) 'Drawing the Line': Market Rule and Liberal Planning in the Governance of Capitalism. Critical Sociology, 1-17. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/08969205241303445

Moraria, L (1998) El fantasma del Valle. Un relato. Mérida: Ediciones Conmemorativas Concejo Municipal y Alcaldía De Rivas Dávila.

Moya-Díaz, E. Paillama-Raimán, D (2017) Clientelismo y corrupción en contextos de baja estatalidad, una relación mutualista. *Revista de Sociología e Política*, *25*, 73-98.

Movimiento Popular Ecosocialista En Defensa Del Valle Del Rio Turbio (2022) Comunicado Público. [Propuestas: Encuentro por la restauración del Valle del Turbio y Defensa estratégica de los acuíferos. 28 de abril.

Mozo, R (2023) Quién es Néstor Richardi, el excéntrico pran de la cárcel de Tocuyito. https://efectococuyo.com/sucesos/quien-es-nestor-richardi-el-excentrico-pran-de-la-carcel-de-tocuyito/

MPPEF (2018) Venezuela tiene €173.300 millones en reservas certificadas de oro y cobre. http://www.mppef.gob.ve/venezuela-tiene-e173-300-millones-en-reservas-certificadas-de-oro-y-cobre/

Muci, F (2024) Why did Venezuela's economy collapse? https://www.economicsobservatory.com/why-did-venezuelas-economy-collapse

Mujica, J. Zevallos-Trigoso, N. Vásquez, CG (2024) Vigilar y performar. La cadena de suministro de la madera ilegal en Perú. *URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad*, 38: 49–68. doi.org/10.17141/urvio.38.2024.6093

Muñoz, N (2018) ¿De dónde venimos? No solo decimos "¡no al carbón!" en la Sierra de Perijá. https://ecopoliticavenezuela.org/de-donde-venimos-no-solo-decimos-no-al-carbon-en-la-sierra-de-perija/

Murga, A (2006) Los movimientos sociales en América Latina (1980-2000): una revisión bibliográfica. *Polis*, *2*(2): 163-196.

Murolo, D (2018) Cientos abarrotan laguna en Tacarigua con la esperanza de pescar para comer. https://www.analitica.com/economia/cientos-abarrotan-laguna-en-tacarigua-con-la-esperanza-de-pescar-para-comer/

Narbaiza, I (2016) A propósito de Tumeremo, la minería ilegal en Amazonas, cómo llegamos a ésto. http://www.aporrea.org/actualidad/a224138.html

Navarro, V (2007) Neoliberalism, globalization, and inequalities. New York: Baywood Publishing

Navarro, ML. Pineda, C (2010) Luchas socioambientales en América Latina y México. Nuevas subjetividades y radicalidades en movimiento. *Bajo El Volcán.* 8(14): 81-104.

Neckel, S (2020) The refeudalization of modern capitalism. *Journal of Sociology*, 56(3): 472-486.

Nellemann Ch, Stock J, Shaw M (2018) World atlas of illicit flows. Global Initiative. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/Atlas-Illicit-Flows-FINAL-WEB-VERSIONcopia-compressed.pdf

Neyra R (2019) Cambios en el metabolismo social y la generación de conflictos socioambientales en el Perú. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza.

Notifalcón (2024) Pescadores trancan la Coro- Punto Fijo para exigir indemnización de Pdvsa. https://pegaisimafm.com/pescadores-trancan-la-coro-punto-fijo-para-exigir-indemnizacion-de-pdvsa/

Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Website: https://www.ecopoliticavenezuela.org/

OCDE. World Bank (2020) Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2020/06/health-at-a-glance-latin-america-and-the-caribbean-2020_4f138987/740f9640-es.pdf

OCDE (2021) Flujos de oro desde Venezuela. Apoyo a la diligencia debida sobre la producción y el comercio de oro en Venezuela. https://mneguidelines.oecd.org/flujos-de-oro-desde-Venezuela-apoyo-a-la-diligencia-debida-en-la-produccion-y-comercio-de-oro.pdf

OCDE (2022) ¿Cómo va la vida en América Latina?: Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/7f6a948f-es

Ochoa-Henríquez, H. Chirinos-Zárraga, E (2006) Tendencias de la reforma del Estado venezolano en el gobierno de Chávez. *Revista Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental*, 6 (14): pp. 145-158

O'Donnell, G (1993) Estado, democratización y ciudadanía. *Nueva sociedad*, (128), 62-87.

O'Donnell, G (2004) Acerca del estado en América Latina contemporánea: diez tesis para discusión. *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. DRALC-PNUD. 149-192. https://www.academia.edu/download/43994904/ODONELLL_Acerca_de_los_Estados_en_America_Latina.pdf

OCDE (2021) Flujos de oro desde Venezuela. Apoyo a la diligencia debida sobre la producción y el comercio de oro en Venezuela. https://mneguidelines.oecd.org/flujos-de-oro-desde-Venezuela-apoyo-a-la-diligencia-debida-en-la-produccion-y-comercio-de-oro.pdf

OEA (2021) Tras el dinero del oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal. Ecuador. https://www.oas.org/es/sms/ddot/docs/Tras-el-dinero-del-oro-ilicito-El-caso-de-Ecuador.pdf

OEA (2022) Tras el dinero del oro ilícito: fortalecimiento de la lucha contra las finanzas de la minería ilegal. Colombia. https://www.oas.org/es/sms/ddot/docs/Tras-el-dinero-del-oro-ilicito-El-caso-de-Colombia.pdf

OEC (S/F) Venezuela. https://oec.world/es/profile/country/ven

OEDT (2022) Informe Europeo sobre Drogas 2022. https://www.euda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022_en

OEP (2018) Caparo en peligro por invasión, último bosque de los Llanos Occidentales de Venezuela. https://ecopoliticavenezuela.org/caparo-peligro-invasion-ultimo-bosque-los-llanos-occidentales-venezuela/

OEP (2019a) Claves para entender lo ocurrido en el rescate del predio Los Tramojos, Guárico #18jun. https://ecopoliticavenezuela.org/claves-entender-lo-ocurrido-rescate-del-predio-los-tramojos-guarico-18jun/

OEP (2019b) Cierre de minas en Bolívar evidencia tensiones entre mineros, FANB y grupos irregulares. http://ecopoliticavenezuela.org/cierre-minas-bolivar-evidencia-tensiones-mineros-fanb-grupos-irregulares/

OEP (2022). Informe Situación Socioambiental de Venezuela 2021. https://ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2022/04/Situacio%CC%81n-socioambiental-de-Venezuela-2021_ConsolidadoFinal.pdf

OEP (2023). Informe Situación Socioambiental de Venezuela 2022. https://ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2023/06/Situacion-socioambiental-de-Venezuela-2022_OEP.pdf

OFAC (S/F) Venezuela-Related Sanctions. https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions

OIT y PNUD (2021) Migración desde Venezuela: oportunidades para América Latina y el Caribe. https://data.unhcr.org/fr/documents/download/85347

Ojewale, O (2022) Cross-border smuggling / State collusion perpetuates oil smuggling across Nigeria-Cameroon borders. https://enactafrica.org/enact-observer/state-collusion-perpetuates-oil-smuggling-across-nigeria-cameroon-borders

Ojewale, O (2024) Rampant cobalt smuggling and corruption deny billions to DRC. https://issafrica.org/iss-today/rampant-cobalt-smuggling-and-corruption-deny-billions-to-drc

Oliveros, A (2020) Impacto de las sanciones financieras y petroleras sobre la economía venezolana. https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/10/Oliveros-informe-completo-2.pdf

ONU (2019a) Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. https://www.ohchr.org/es/2019/03/oral-update-situation-human-rights-bolivarian-republic-venezuela

ONU (2019b) Declaración de Michelle Bachelet sobre las recientes sanciones impuestas a Venezuela. https://www.ohchr.org/es/statements/2019/08/statement-michelle-bachelet-recent-sanctions-imposed-venezuela

OPEC (2020) Monthly Oil Market Report. www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm

OPEC (2021) 2021 OPEC Annual Statistical Bulletin. https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_ASB_2021.pdf

OPEC (2022) 2022 OPEC Annual Statistical Bulletin. https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB_2022.pdf

OPEC (2024) Venezuela. https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm

Organización Kuyujani (2014) Pronunciamiento de los pueblos y comunidades Yekwana y Sanema del Caura ante la sentencia del TSJ sobre "proteger" los territorios indígenas. https://archivo.provea.org/actualidad/derechos-sociales/derecho-de-los-pueblos-indigenas/pronunciamiento-de-los-pueblos-y-comunidades-yekwana-y-sanema-del-caura-ante-la-sentencia-del-tsj-sobre-proteger-los-territorios-indigenas/

Oronoz, A (2024) Pueblo indígena Pemón persiste en mantener su cultura y costumbres. https://aler.org/nota_informativa/pueblo-indigena-pemon-persiste-en-mantener-su-cultura-y-costumbres/

ORPIA, Wataniba, Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, Cerlas, Plataforma en Defensa de la Constitución, GTAI, GRIAM, OEP (2020) Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia. www.ecopoliticavenezuela.org/ wp-content/uploads/2020/07/Informe-situaci%C3%B3n-Amazon%C3%ADaVenezuela.-AMPA-2020.pdf

Osorio, FE (2001) Entre la supervivencia y la resistencia. Acciones colectivas de población rural en medio del conflicto armado colombiano. *Cuadernos de desarrollo rural*, 47: 55-80

Ostos P (2021) Grupos armados no estatales y cuerpos de seguridad monopolizan la violencia en Bolívar. https://runrun.es/monitor-de-victimas/461815/monitordevictimas-grupos-armados-no-estatales-y-cuerpos-de-seguridad-monopolizan-la-violencia-en-bolivar/

Ostrom, E (2002) Common-pool resources and institutions: Toward a revised theory. *Handbook of agricultural economics*, 2: 1315-1339.

Oszlak, O (1978) Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teórico-metodológicos para su estudio. Estudios Cedes, 1(3), p.44. https://repositorio.cedes.org/bitstream/123456789/3455/1/Est_c1%2c3.pdf

Oszlak, O (1986) Public policies and political regimes in Latin America. *International Social Science Journal*, *38*(2):219-236.

OVCS (2017) Venezuela: 6.729 protestas y 163 fallecidos desde el 1 de abril de 2017. https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/sin-categoria/venezuela-6-729-protestas-y-157-fallecidos-desde-el-1-de-abril-de-2017

OVCS (2022) Conflictividad Social VENEZUELA ANUAL 2022. https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2023/02/INFORMEOVCS-ANUAL2022.pdf

OVCS (S/F) Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Tendencias de la Conflictividad. https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/categoria/tendencias-de-la-conflictividad.

OVSP (2021) Resultados del Estudio de percepción ciudadana sobre servicios públicos. Boletín No. 20. https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2021/09/Boletin-20.-Version-final-web.pdf

OVV (2018) 2018 – La violencia presenta nuevos rostros en el país: el empobrecimiento y la letalidad policial. https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/

OVV (2022a) Hallazgo de fosas en comunes en el sur de Bolívar confirma graves violaciones a los derechos humanos en territorios mineros. https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/hallazgo-de-fosas-en-comunes-en-el-sur-de-bolivar-confirma-graves-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-territorios-mineros/

OVV (2022b) Hurto de chatarra: un negocio que se generaliza en Monagas. https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/hurto-de-chatarra-un-negocio-que-se-generaliza-en-monagas/

OVV (2023) Informe Anual Violencia 2023. https://observatoriodeviolencia.org.ve/wp-content/uploads/2023/12/INFORME-ANUAL-DE-VIOLENCIA-2023.pdf

Páez, G. Rondón, K.Trejo, Y (2022) Esperanza de vida en el estado Mérida, Venezuela, en tiempos de crisis humanitaria. *Interacción y perspectiva: Revista de Trabajo Social*, *12*(1): 3-26.

Page, KR. Doocy, S. Ganteaume, FR. Castro, JS. Spiegel, P. Beyrer, C (2019) Venezuela's public health crisis: a regional emergency. *The Lancet*, *393*(10177): 1254-1260.

PanamPost (2015) Denuncian que las FARC explotan oro y coltán en el sur de Venezuela. https://es.panampost.com/thabata-molina/2015/04/16/denuncian-que-las-farc-explotan-oroy-coltan-en-el-sur-de-venezuela/

Pastrana-Valls, Alejandro. 2019. "Estudio sobre la corrupción en América Latina". *Revista mexicana de opinión pública*, 27: 13-40. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-49112019000200013

Paulson S, Gezon L (2005) Political ecology across spaces, scales, and social groups. New Jersey: Rutgers.

PDVSA (2014). Política petrolera venezolana. Exploración y producción. Presentación. https://www.slideserve.com/hansel/pol-tica-petrolera-venezolana-exploraci-n-y-producci-n

PDVSA (2015) Informe de Gestión Anual 2014. https://www.rafaelramirez.net/mi-gestion/pdvsa/pdvsa-informe-de-gestion-anual-2014/

Pellegrino, A. Vigorito, A (2004) Estrategias de sobrevivencia ante la crisis: un estudio de la emigración uruguaya en 2002. *Iberoamericana–Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, *34*(1-2).

Peluso, N. Watts, M (Eds.) (2001) Violent environments. New York: Cornell University Press.

Penfield, A (2019) Extractive Pluralities: The Intersectionof Oil Wealth and Informal Gold Mining in Venezuelan Amazonia. In: Vindal Ødegaard C., Rivera Andía J. (eds) Indigenous Life Projects and Extractivism. Approaches to Social Inequality and Difference. Palgrave Macmillan, Cham

Penfold, M (2010) La democracia subyugada: El hiperpresidencialismo venezolano. *Revista de ciencia política (Santiago)*, *30*(1): 21-40.

Penuela, F (2022) Desarticulado un grupo de delincuencia organizada por desviar gasolina a minería ilegal. http://radiomundial.com.ve/desarticulado-un-grupo-de-delincuencia-organizada-por-desviar-gasolina-a-mineria-ilegal/

Pereira-Chagas R (2024) Narcogarimpo: las afinidades electivas entre los frentes de minería ilegal y la expansión del narcotráfico en la Amazonía brasileira. URVIO (38): 32–48.

Pérez, L (2018) Maracaibo Gótica: La quema de basura se ha convertido en la "bati-señal" de los barrios. tureporte.com/maracaibo-gotica-la-quema-basura-se-ha-convertido-la-bati-senal-los-barrios/

Pérez-Alfonzo, JP (2009) Hundiéndonos en el excremento del diablo. Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana.

Pérez-Cubero, ME (2019) La participación ciudadana de los movimientos socioambientales en América Latina. *Revista Colombiana de Sociología*, *42*(1): 135-156.

Pérez-Gallardo, M (2023) "La bomba del tiempo climática está corriendo": Guterres alerta sobre el informe del IPCC. https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20230320-la-bomba-del-tiempo-clim%C3%A1tica-est%C3%A1-corriendo-guterres-alerta-sobre-el-informe-del-ipcc

Pérez-Rincón M (2014) Injusticias ambientales en Colombia: estadísticas y análisis para 95 casos. Ambiente y Sostenibilidad 4:65–78. https://www.academia.edu/28695876/INJUSTICIAS_AMBIENTALES_EN_COLOMBIA_ESTAD%C3%8DSTICAS_Y_AN%C3%81LISIS_PARA_95_CASOS_Environmental_Injustice_in_Colombia_Statistics_and_Analysis_for_95_cases

Pérez-Rincón M, Vargas-Morales J, Martinez-Alier J (2019) Mapping and Analysing Ecological Distribution Conflicts in Andean Countries. *Ecological Economics*, 157:80-91.

Peterson, G (2000) Political ecology and ecological resilience: An integration of human and ecological dynamics. *Ecological economics*, *35*(3): 323-336.

Pino-Iturrieta, E (2018) Venezuela metida en cintura:(1900-1945). Caracas: Editorial Alfa.

Pittier, H (1922) Mapa Ecológico de Venezuela, en: Norman B. Leventhal Map & Education Center Collection. https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:x059cc20b

Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019. https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/VenezuelaPlandelaPatria20132019.pdf

PMA (2019) Venezuela — Evaluación de seguridad alimentaria. https://reliefweb.int/attachments/7c17e6a4-a14e-3d3d-8f7b-41eb2234b579/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.pdf

PNUD (2022) Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022. https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210016421/read

PNUD (2024) Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024. https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24overviewsp.pdf

Pocaterra, L (2004) Las mujeres indígenas frente a la actividad petrolera: un estudio de caso La Ladera, pueblo indígena Warao. Tesina Flacso.

Polanyi, K (1977) The Livelihood of Man. Pearson, H (Ed.), Nueva York: Academic Press. http://digamo.free.fr/polalive.pdf

Poliszuk J, Ramírez M, Segovia MA (2022a) Las pistas ilegales que bullen en la selva venezolana. https://elpais.com/internacional/2022-01-30/las-pistas-clandestinas-que-bullen-en-la-selva-venezolana.html

Poliszuk, J. Ramírez, MA. Segovia, MA (2022b) La resistencia indígena se organiza en la selva venezolana. https://elpais.com/internacional/2022-02-13/la-resistencia-indigena-se-organiza-en-la-selva-venezolana.html

Portillo, Lusbi (2020). Mara y Guajira. Zona de sacrificio. Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Disponible en https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/01/30/mara-y-guajira-zona-de-sacrificio/

Porto-Gonçalves CW (2002) Da Geografia às Geo-grafias. Um Mundo Em Busca de Novas Territorialidades. Xalapa: Universidad Veracruzana.

Pradilla-Cobos, E. Márquez-López, L (2022) La desigual intervención estatal sobre los territorios en América Latina. *Territorios*, (46). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35771093008

Prebisch, R (2012). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemes. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/entities/publication/e3a8ee47-150f-4d31-83c5-3bcdb7422d58

Prince, G. Muttitt, G. Collett-White, R. Coffin, M (2023) Petrostates of Decline: Oil and Gas Producers Face Growing Fiscal Risks as the Energy Transition Unfolds. https://carbontracker.org/reports/petrostates-of-decline/

Provea (2017) Indígenas de Amazonas denuncian que falta de acceso a cupos de combustible afecta vida de las comunidades. https://www.derechos.org.ve/actualidad/indigenas-de-amazonas-denuncian-que-falta-de-acceso-a-cupos-de-combustible-afecta-vida-de-las-comunidades

Provea (2020) 27 años después de la masacre de Haximú indígenas yanomami denuncian presencia de mineros y complicidad de autoridades. https://provea.org/actualidad/27-anos-despues-de-la-masacre-de-haximu-indigenas-yanomami-denuncian-presencia-de-mineros-y-complicidad-autoridades/

Provea (2021) Sistema público de salud perdió 80% de su capacidad operativa en medio de la pandemia | Informe Anual 2020. https://provea.org/actualidad/informe-anual-2020-sistema-publico-de-salud-perdio-80-de-su-capacidad-operativa-en-medio-de-la-pandemia/

Provea [@_Provea] (2022, 28 de mayo) *#CaroraSinAgua* | *FAES, Guardia Nacional y Colectivos son usados para intimidar a quienes protestan en la capital del Municipio Torres por la...* X. https://x.com/_Provea/status/1530682718119501824

Provea (2024) Situación de los derechos humanos en Venezuela. Resumen Informe Anual Provea enero / diciembre 2023. https://provea.org/wp-content/uploads/2024/04/Informe-Provea-BN-2023-compressed.pdf

Puente, JM (2016) Venezuela en colapso macroeconómico. ¿Qué se puede esperar? *Real Instituto Elcano*, ARI 23: 1-13. https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2016/07/ari63-2016-puente-venezuela-en-colapso-macroeconomico-que-se-puede-esperar.pdf

Puente, JM. Rodríguez, JA (2020) Venezuela en etapa de colapso macroeconómico: un análisis histórico y comparativo. *América Latina Hoy*, 85: 55-72.

Quijano A (2000) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, en: Lander, E (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Caracas: Ediciones Faces/UCV.

R4V-UNHCR (2023) R4V Latin America and the Caribbean, Venezuelan Refugees and Migrants in the Region - Jan 2023. https://www.r4v.info/en/document/r4v-latin-america-and-caribbean-venezuelan-refugees-and-migrants-region-jan-2023

Rachmad, YE (2022) Social Resilience Theory. Aix-en-Provence Cézanne Éditions. https://osf.io/z5erq/

Radio Fe y Alegría (2020) Reportan cuatro indígenas heridos en Puente Llaguno. https://www.radiofeyalegrianoticias.com/reportan-cuatro-indigenas-heridos-en-puente-llaguno/

RAE (S/F) Diccionario de la lengua española. https://dle.rae.es/

Raftopoulos, M (2018) Extractivismos y derechos: El uso de las Evaluaciones del Impacto de los Derechos Humanos. Ecuador Debate, No 105: 91-108. http://extractivismo.com/wp-content/uploads/2019/04/RaftopoulosExtractrivismosDerechosED18.pdf

RAISG (2012) *Amazonía bajo presión*. Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. www.raisg.socioambiental.org

RAISG (2020) Amazonía bajo presión. https://www.raisg.org/es/publicacion/amazonia-bajo-presion-2020/

Ramírez, S (1991) Las estrategias de sobrevivencia como una dimensión del movimiento de mujeres en Colombia. *Boletín americanista*, (39-40). https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/50376/lasestrategiasdesobrvivencia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ramírez, R (2021) The Venezuelan Oil Industry Collapse: Economic, Social and Political Implications. Istituto Affari Internazionali - Commentaries (21) 52: 1-7. https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2152.pdf

Ramírez, MA (2023) Grupos armados amenazan tierras indígenas en el sur de Venezuela. https://pulitzercenter.org/es/stories/grupos-armados-amenazan-tierras-indigenas-en-el-sur-de-venezuela

Ramírez-Cabello, M (2020) Depredación minera frente a los ojos del tepuy Roraima. https://prodavinci.com/depredacionminera/

Ramírez-Cabello M (2023) Grupos armados amenazan tierras indígenas en el sur de Venezuela. https://infoamazonia.org/es/2023/08/06/grupos-armados-amenazan-tierras-indigenas-en-el-sur-de-venezuela/

Rangel, C (2019) Fosas del silencio. La Vida de Nos. https://www.lavidadenos.com/fosas-del-silencio/

Rangel, DA (1971) La oligarquía del dinero. Caracas: Fuentes

Rangel, DA (2007) La "boliburguesía". https://independent.typepad.com/elindependent/2007/04/la_boliburguesa.html

Red Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch (2003) El conflicto petrolero venezolano y sus implicaciones ambientales. https://www.alainet.org/es/active/3240

Reed C (2009) Crude existence: environment and the politics of oil in Northern Angola. University of California, USA

Reuters (2021) Venezuela arresta a 10 funcionarios de PDVSA por venta ilegal de combustible. https://www.reuters.com/article/idUSKBN2CG2A9/

Reuters (2022) Venezuela's PDVSA saw debt rise to $34.9 billion in 2021 https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-pdvsa-saw-debt-rise-349-billion-2021-2022-01-19/

Revilla, I (2022) Los pescadores del Golfete de Coro paralizaron la construcción de una tubería de gas. https://www.turimiquire.net/2022/07/13/los-pescadores-del-golfete-de-coro-paralizaron-la-construccion-de-una-tuberia-de-gas/

Rey JC (1991) La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación. Revista de estudios políticos 74:533–578

Rhodes, RA (2007) Understanding governance: Ten years on. *Organization studies*, *28*(8), 1243-1264.

Rivas, N (2017) En Guarenas van camino a Ciudad Belén a pie, en camiones y mototaxis por falta de los «rojitos». https://cronica.uno/por-falta-de-transporte-en-ciudad-belen-pagan-mil-bolos-en-camiones-de-carga/

Rivera-Cusicanqui, S (2018) Un mundo ch'ixi es posible: ensayos desde un presente en crisis. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.

Rivera-Rhon, RA. Bravo-Grijalva, CE (2023) Gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, *15*(2), 49-69.

Rivero, F (2001) Bailadores. http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/lico/Libros/Visitanmerida/Bailadores.pdf

Rivero, M (2019) Seis trabajadores detenidos por la FAES en empresa Vencemos de Anzoátegui. https://www.eluniversal.com/venezuela/37562/seis-trabajadores-detenidos-por-la-faes-en-empresa-vencemos-de-anzoategui

Rocheleau, D (1991) Gender, ecology, and the science of survival: Stories and lessons from Kenya. *Agriculture and human values* 8(1): 156-165

Rodríguez C (2004) The Struggle over the Electric Transmission Line to Brazil: Lessons from the Indigenous Conflict in Venezuela. In: Roy C, Tauli-Corpuz V, Romero-Medina A (eds.). Beyond the Silencing of the Guns, Tebtebba, Baguio City

Rodríguez, JA (2007) La geografía del poblamiento de la Venezuela hispánica, en: Cunill-Grau, P. GeoVenezuela. Tomo 1. Capítulo 3. Caracas: Fundación Empresas Polar.

Rodríguez, F (2019) Sanctions and the Venezuelan economy: what the data say. https://venezuelanalysis.com/wp-content/uploads/2019/09/Sanctions-and-Vzlan-Economy-June-2019.pdf

Rodríguez, H (2022) La radio comunal de Medianálisis y "los enemigos de quienes tienen sed". https://www.medianalisis.org/la-radio-comunal-de-medianalisis-y-los-enemigos-de-quienes-tienen-sed/

Rodríguez I (2002) The transformative role of conflicts beyond conflict management in national parks: a case study of Canaima National Park, Venezuela. Doctoral dissertation, University of Sussex.

Rodríguez, MF. Gutiérrez, J (2023) Locals fight to save 'a piece of the sea' in Venezuela's Andes. https://news.mongabay.com/2023/01/locals-fight-to-save-a-piece-of-the-sea-in-venezuelas-andes/

Rodríguez, I. Aguilar, V (2021) Juegos de Poder en la Conquista del Sur. Dominación, resistencia y transformación en las luchas contra el extractivismo. Parque Nacional Canaima, Venezuela. Barquisimeto: Fundación Buría.

Rodríguez-Arechavaleta, CM (2010) De la estructura de oportunidades políticas a la identidad colectiva. Apuntes teóricos sobre el poder, la acción colectiva y los movimientos sociales. *Espacios públicos*, *13*(27): 187-215.

Rodríguez-Campos, M. Pino-Iturrieta, E (2007) La geografía del poblamiento decimonónico y de la Venezuela prepetrolera, en GeoVenezuela. Tomo 1. Caracas: Fundación Empresas Polar.

Rodríguez-Flores, JN. Colomine-Rincones, F (2003) La política de fronteras del estado venezolano en los albores del siglo XXI. *Aldea Mundo*, 8(15): 35-45. https://www.redalyc.org/pdf/543/54381505.pdf

Rodríguez-Gilly, C (2024) Movimiento ambiental en Venezuela ante el decreto de apertura minera de 1997. https://provea.org/actualidad/derechos-sociales/ambiente/movimiento-ambiental-en-venezuela-ante-el-decreto-de-apertura-minera-de-1997/

Rodríguez-Olarte, D (2023) Relaciones perniciosas en la expansión de la acuicultura y la destrucción de los humedales en Venezuela (parte 1). https://ecopoliticavenezuela.org/2023/02/13/relaciones-perniciosas-en-la-expansion-de-la-acuicultura-y-la-destruccion-de-los-humedales-en-venezuela-parte-1/

Rodríguez-Pinzón, E. Ramos-Rollón, M (eds.) (2025) América Latina en un mundo perplejo: inseguridad, turbulencias económicas y democracias asediadas. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2025/01/ANUARIO-2024.pdf

Rodríguez-Ugalde, DC. Chávez-González, ML (2024) Territorio, género y re-existencias en la escuela rural: contextos de violencia criminal y extractivista en Michoacán. III Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín.

Rojas-Díaz, JA (2020) La hiperinflación en Venezuela. Causas y consecuencias. Universidad Católica Andrés Bello. https://api-

saber.ucab.edu.ve/server/api/core/bitstreams/45e8fef1-c701-42e7-b62a-6034f3e42df5/content

Romero, CA. Benayas, G (2018) Venezuela: el ocaso de una democracia. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, *63*(233): 285-306.

Rosales, A (2018) El agotamiento del modelo de neo-extractivismo en Venezuela: causas económicas y sus implicancias globales. *Pensamiento Propio*, *23:* 69-90.

Rosas-Ferrusca, FJ. Calderón-Maya, JR. Campos-Alanís, H (2012) Elementos conceptuales para el análisis de la gobernanza territorial. *Quivera*, *14*(2): 113-136.

RT (2017) Maduro sobre la "profecía" de Bolívar, "la guerra comunicacional" y "el mundo más allá del dolar". https://actualidad.rt.com/actualidad/251961-maduro-venezuela-foro-moscu

Rucks-Ahidiana, Z. Bierbaum, AH (2015) Qualitative spaces: Integrating spatial analysis for a mixed methods approach. *International Journal of Qualitative Methods*, 14(2): 92-103.

Ruíz, O. Ramonetti, A (2020) Todo lo sólido (se desvanece en el aire): Extractivismo y necropaisaje en el noreste de México. *Re-visiones*, (10), 13.

Runrunes (2018) 18 comunidades indígenas piden reapertura de la mina El Silencio. https://runrun.es/noticias/356270/18-comunidades-indigenas-piden-reapertura-de-la-mina-el-silencio/

Sagan, A. Webb, E. Azzopardi-Muscat, N. De la Mata, I. McKee, M. Figueras, J (2021) Health systems resilience during COVID-19. Lessons for building back better. 56 Health Policy Series. WHO. EU. EOHSP. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/348493/9789289051873-eng.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Salas, A (2018) Aumenta la quema de basura en Maracaibo, una "solución" mortal. https://www.panorama.com.ve/ciudad/Aumenta-la-quema-de-basura-en-Maracaibo-una-solucion-mortal-20180624-0007.html

Salinas S, Riquelme J (2017) Democracia, integración y seguridad en America Latina: el Crimen Organizado Transnacional (cot) como desafio. Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, 15(27):149-172.

Sampó, C (2021) Una aproximación teórica, el concepto de Gobernanza Criminal en América Latina, en: Mejías, SA (coord.) Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina. Real Instituto Elcano. p: 9-19

Sampó, C. Alda-Mejías, S (2019) La transformación de las Fuerzas Armadas en America Latina ante el Crimen Organizado. Lima: Real Instituto Elcano/ Centro de Estudios Estratégicos del Ejercito del Perú.

Sánchez, F (2018) Esfuerzos titánicos para salvar ave diminuta en Venezuela. https://apnews.com/general-news-d3dabf29671a4cd581c9f53b735d1cd8

Sánchez, F (2021) Minería aurífera se abre paso en la cuenca baja del río Caura. https://ecopoliticavenezuela.org/mineria-aurifera-se-abre-paso-en-la-cuenca-baja-del-rio-caura/

Sánchez, F (2022a) Minería Ilegal sigue avanzando en el Bajo Caura. Cuenta X. https://x.com/Fritz_A_Sanchez/status/1562038935718690816. 23 de agosto.

Sánchez, F [@Fritz_A_Sanchez] (2022b, 23 de agosto) *Minería Ilegal sigue avanzando en el Bajo Caura El estimado es, un incremento de al menos 250 mil metros cuadrados*… X. https://twitter.com/Fritz_A_Sanchez/status/1562038935718690816

Sandoval-Díaz, J (2020) Vulnerabilidad-resiliencia ante el proceso de riesgo-desastre: Un análisis desde la ecología política. *Polis*, 19(56). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682020000200214

Santillana, E (2016) Contaminación ambiental marca 25 aniversario de Guanta. https://www.elcorreodelorinoco.com/contaminacion-ambiental-marca-25-aniversario-guanta/

Santos, MA (2016) The right fit for the wrong reasons: real business cycle in an oil-dependent economy. *Latin american journal of economics*, *53*(1): 61-94.

Sarkar, A. De Waal, A (2024) Fragile Petrostates and the Green Transition. The Indian Forum. https://www.theindiaforum.in/sites/default/files/article_pdf/2024/05/20/1571-1716186072.pdf

Sarmiento, L (2018) Petróleo, paz inconclusa y nueva lógica del conflicto. *Ciencia Política*, *13*(25), 67-92.

Saxe Fernández, J (2004) Petróleo, militarización y guerra. Documentos de Estudio. No.25. Heredia: Nueva Época. https://repositorio.una.ac.cr/bitstreams/bbe8fb5a-370a-47c4-b01f-7df98c390b62/download

Scheller, A. Lugo, E (2019) Conceptualización del Crimen Organizado y su regulación en la legislación Penal Colombiana. *Nuevo Foro Penal* 92. Schlenker, O (2021) Venezuela y sus ricos: compras de lujo en medio de la crisis. https://www.dw.com/es/venezuela-los-ricos-y-sus-compras-de-lujo-en-medio-de-la-crisis-humanitaria/a-56336442

Schlichte, K (2005) Der Staat in der Weltgesellschaft: Politische Herrschaft in Asien, Afrika und Lateinamerika. Campus.

Scott, E (2016) Decolonisation, interculturality, and multiple epistemologies: Hiwi people in Bolivarian Venezuela. James Cook University, DOI: https://researchonline.jcu.edu.au/49417/1/49417-scott-2016-thesis.pdf

Scott, JC (1977) The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press.

Sebastiani, M. González, S. Castill, M. Alvizu, P. Oliveira, M. Pérez, J. Quilici, A. Rada, M. Yáber, M. Lentino, M (1994) Large-scale shrimp farming in coastal wetlands of Venezuela, South America: Causes and consequences of land-use conflicts. *Environmental Management*, 18:647-661

Segovia, MA (2020) En teleférico la playa queda más lejos de Caracas que nunca. https://armando.info/en-teleferico-la-playa-queda-mas-lejos-de-caracas-que-nunca/

Seijas-Meneses, C (2020) Se prevé una caída de 47% de los ingresos del país por pandemia y crisis petrolera. https://talcualdigital.com/se-preve-una-caida-de-47-de-los-ingresos-del-pais-por-pandemia-y-crisis-petrolera/

Serbin-Pont, AS (2018) La crisis humanitaria en Venezuela y su impacto regional: migración, seguridad y multilateralismo. *Pensamiento Proprio, 47*: 129-158.

Servigne, P. Stevens, R (2020) How everything can collapse: A manual for our times. Massachusetts: Polity Press.

SIGTA (S/F) http://sigta.minec.gob.ve/sigta/geoportal/index.php

Silva, M (2013) "A los Yanomamis nos están matando". http://www.lavanguardia.com/vida/20131129/54394609029/yanomamis-explotacion-minera-amazonas.html

Silva, N (2018) Identidad, frontera y oportunidades. Los Ye'kwana de Venezuela en la frontera con Brasil. *Anuário Antropológico*, 43(2): 27-54.

Siqueira-Gay, J. Sánchez, LE (2021) The outbreak of illegal gold mining in the Brazilian Amazon boosts deforestation. Reg Environ Change 21(28)

Siverio J (2020a) Detienen en Bolívar a militares que permitían el tráfico de combustible y minería ilegal. https://cronica.uno/detienen-en-bolivar-a-militares-que-permitian-el-trafico-de-combustible-y-mineria-ilegal/?amp_markup=1

Siverio J (2020b) Mueren siete mineros de El Callao en tercer derrumbe en lo que va de 2020. https://cronica.uno/mueren-siete-mineros-de-el-callao-en-tercer-derrumbe-en-lo-que-va-de-2020/

Siverio, J (2021) Duelo del Pueblo pemón no cesa desde la masacre de Kumarakapay. https://cronica.uno/duelo-del-pueblo-pemon-no-cesa-desde-la-masacre-de-kumarakapay/

Siverio J (2022) Codehciu contabiliza 37 desapariciones y 43 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Bolívar. https://correodelcaroni.com/region/codehciu-contabiliza-37-desapariciones-y-43-presuntas-ejecuciones-extrajudiciales-en-bolivar/

Sletto B (2008) The knowledge that counts: institutional identities, policy science, and the conflict over fire management in the Gran Sabana, Venezuela. *World Development*, 36:1938-1955

Soberón-Garrido R (2024) Territorialización, territorialidades y geografías del extractivismo ilícito en la región de Ucayali en Perú. URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (38): 84-99.

Sociedad Homo et Natura (2015). Sabino, los ganaderos de Machiques y los 30 años de cárcel para Manguera. Aporrea. Disponible en http://www.aporrea.org/actualidad/a212710.html

Sociedad Homo et Natura (2016a). El Juicio de Sabino está cerrado anuncia Fiscal adscrita a la Dirección General de Acción Procesal. Venezuela Originaria. Disponible en http://venezuelaoriginaria.blogspot.com.es/2016/06/ministerio-publico-cierra-el-caso-del.html

Sociedad Homo et Natura (2016b). Asesinan a otro cacique yukpa: Cristobal Romero, comunidad Tinacoa. Aporrea. Disponible en http://www.aporrea.org/ddhh/a231117.html

Sojo, C (2011) El Estado bajo escrutinio: opinión pública, estatalidad y desempeño gubernamental en América Latina. Santiago: CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e94da0d6-cf89-4dae-81f1-0440b215c19a/content

Solano, S (2019) ¿Qué pasa con «La Vieja»? https://tatuytv.org/luchas-que-pasa-con-la-vieja/#_ftn2

SOS Orinoco (2018) Situación Actual de la Minería Aurífera en el Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela. https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/07/CanaimaEspa%C3%B1ol_PortadaNueva_ConA3.pdf

SOS Orinoco (2020a) Minería en Icabarú, Cuenca Alta del Caroní: De la Incoherencia a la Anarquía Criminal de Estado. https://sosorinoco.org/es/informes/mineria-en-icabaru-cuenca-alta-del-caroni-de-la-incoherencia-a-la-anarquia-criminal-de-estado/

SOS Orinoco (2020b) La minería en el Paragua asedia al Monumento Natural Guaiquinima: el Infierno a las puertas del Paraíso. https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Guaiquinima_20200602.pdf

SOS Orinoco (2020c) Coltán: El Contrabando del "Oro Azul" por el Régimen en Venezuela. https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/07/InformeElColta%CC%81n20200428.pdf

SOS Orinoco (2020d) La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana, Amazonas Venezolano. https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/08/ActualizacionPNY_20200602.pdf

SOS Orinoco (2020e) Enfrentamiento entre indígenas y FARC (disidencia) en el municipio Atabapo, Amazonas (Venezuela) https://sosorinoco.org/es/hechos/soberania-nacional/enfrentamiento-entre-indigenas-y-farc-disidencia-en-el-municipio-atabapo-amazonas-venezuela/

SOS Orinoco (2022a) Presencia, actividad e influencia de los Grupos Armados Organizados en la actividad minera al sur del río Orinoco. https://sosorinoco.org/es/informes/presencia-actividad-e-influencia-de-los-grupos-armados-organizados-en-la-actividad-minera-al-sur-del-rio-orinoco/

SOS Orinoco (2022b) Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare: Invasión garimpeira en auge con apoyo del gobierno venezolano. https://drive.google.com/file/d/1XvgM9U7VGq71xINeljuqwhExf5LpSk2l/view

SOS Orinoco (2024) Pérdida de bosque en la Amazonía Venezolana. https://sosorinoco.org/es/galeria/story-maps-es/perdida-de-bosque-en-la-amazonia-venezolana/

South, A (2017) "Hybrid governance" and the politics of legitimacy in the Myanmar peace process. *Journal of Contemporary Asia*, 48(1):50-66.

Souza-Pimenta, MC. García-Suarez, MA. Ferreira, MA (2021). Hybrid governance as a dynamic hub for violent non-state actors: examining the case of Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 64.

Starchevich (2017) La minería en Venezuela también es asunto de mujeres. El Estímulo. https://elestimulo.com/fotos-la-mineria-en-venezuela-no-es-cosa-de-machos/

Stendie L (2013) Public Participation, Petro-Politics and Indigenous Peoples. The Contentious Northern Gateway Pipeline and Joint Review Panel Proces. University of Oslo, Blindern

Stiglitz, J (2002) El malestar en la globalización. México: Santillana.

Stoll, S (2014) The captured garden: The political ecology of subsistence under capitalism. *International Labor and Working-Class History*, 85: 75-96

Suárez, M (2017) La política del despojo: el conflicto territorial del pueblo yukpa de la Sierra de Perijá (Venezuela). Trayectorias Humanas Trascontinentales, DOI: http://www.unilim.fr/trahs/141

Sutherland, M (2018) La ruina de Venezuela no se debe al «socialismo» ni a la «revolución». *Nueva Sociedad*, (274): 142-151.

Sutherland, M (2019) Hiperinflación, crisis, trabajo asalariado, poder adquisitivo. Crónica de una ruina anunciada. Cuadernos del Cendes, 36(100): 35-55.

Sutherland, M (2020) Las sanciones económicas contra Venezuela: consecuencias, crisis humanitaria, alternativas y acuerdo humanitario. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/UCM/ReportHRC48/NGOs/submission-provea-venezuela.pdf

Svampa, M (2011) Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro eco-territorial, en: Alimonda, H (Coord.). La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, CICCUS, 181-215.

Svampa, M (2016) Debates Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo. Buenos Aires: Edhasa.

Svampa, M (2018) Imágenes del fin. Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno. *Nueva Sociedad*, (278): 151-164.

Svampa, M (2019) Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Wetzlar: Calas.

Svampa, M. Viale, E (2020) El colapso ecológico ya llegó: Una brújula para salir del (mal) desarrollo. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Svampa, M (2024) La era de los colapsos localizados necesita más Estado, no menos. https://www.eldiarioar.com/politica/colapsos-localizados-necesita-no_1_11223543.html

Svampa, M. Teran-Mantovani, E (2019) En las fronteras del cambio de época. Escenarios de una nueva fase del extractivismo en América Latina, en: Gabbert, K. Lang, M (eds.)

¿Cómo se sostiene la vida en América Latina? Feminismos y re-existencias en tiempos de oscuridad. Quito: Fundación Rosa Luxemburg y Abya Yala.

Swiss Info (2020) Venezuela sufre caída del 99% de ingresos petroleros entre 2014 y 2019, dice Maduro. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-sufre-ca%C3%ADda-del-99-de-ingresos-petroleros-entre-2014-y-2019-dice-maduro/46066878

Swiss Info (2021) Venezuela cerró 2020 con un 98,6 % menos de ingresos que en 2013. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-cerr%C3%B3-2020-con-un-98-6-menos-de-ingresos-que-en-2013/46281800

Swiss Info (2023) Venezuela ha recuperado 60.000 hectáreas forestales en 17 años, según el Gobierno. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-ha-recuperado-60-000-hect%c3%a1reas-forestales-en-17-a%c3%b1os-seg%c3%ban-el-gobierno/48565880

Tainter, J (1988) The collapse of complex societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Tal Cual. Connectas (2021) Se vende Venezuela como chatarra. https://alianza.shorthandstories.com/Se-vende-Venezuela-como-chatarra/index.html

Tal Cual (2022) Según Saab, en lo que va de año se han incautado 213.547 kilos de chatarra. https://talcualdigital.com/policia-de-guanta-detuvo-a-13-gandolas-con-chatarra/

Tarrow, S (2011) Power in Movement Social Movements and Contentious Politics. New York: Cambridge University Press.

Tatuy Televisión (2019) El Movimiento Campesino sigue en pie de lucha. [Archivo de Video en Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=r0CqDZGW1AM

Temper L, Del Bene D, Martínez-Alier J (2015) Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas. *Journal of Political Ecology*, 22: 255–278.

Teran-Mantovani E (2014) El fantasma de la gran Venezuela. Caracas: Fundación Celarg.

Teran-Mantovani E (2015) El extractivismo en la Revolución Bolivariana: potencia energética mundial y resistencias eco-territoriales. *Iberoamericana*, 59 (3):111-125.

Teran-Mantovani E (2016) Las nuevas fronteras de los commodities en Venezuela: extractivismo, crisis histórica y disputas territoriales. *Ciencia Política*, 11: 251–285.

Teran-Mantovani E (2018a) Inside and beyond the Petro-State frontiers: geography of environmental conflicts in Venezuela's Bolivarian Revolution. *Sustainability Science*, 13: 677–691.

Teran-Mantovani E (2018b) El extractivismo como eco-régimen: múltiples ámbitos y escalas de su impacto socioterritorial. In: Medeiros, M. (coord.). Perspectivas de natureza. Sao Paulo: Annablume, pp. 319–344.

Teran-Mantovani E (2018c) Los ecologismos populares venezolanos y el eco-socialismo realmente existente en la Revolución Bolivariana. In: Gabbert K, Martínez A (comps.). Venezuela desde adentro. Ocho investigaciones para un debate necesario. Quito: Fundación Rosa Luxemburg, pp. 19–84.

Teran-Mantovani, E (2021) Crimen organizado, economías ilícitas y geografías de la criminalidad: otras claves para pensar el extractivismo del siglo XXI en América Latina, en: López, P. Betancourt, M (Coords). Conflictos territoriales y territorialidades en disputa re-existencias y horizontes societales frente al capital en américa latina. Buenos Aires: CLACSO, pp. 419-455.

Teran-Mantovani E (2022) Las metamorfosis del progresismo: neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en La Gran Crisis venezolana (2013-2020). In: Schavelzon S, López P, Ivanovic M (comps) Derivas y dilemas de los progresismos sudamericanos. Red Editorial.

Teran-Mantovani E (2023) The Amazon exposed in the Venezuelan Great Crisis (2013–2021): The rise of an extractivism of hybrid governances. In: López P, Anthias P (eds.). Neoextractivism and Territorial Disputes in Latin America. Routledge. pp. 53-78

Teran-Mantovani, E. Jiménez-Lemón, A (2022) Venezuela, en: Bautista-Durán, R (Coord.) Informe 2021. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. La Paz: Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. https://ipdrs.org/libros/septimo-informe-anual-acceso-a-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica-2021/

Teran-Mantovani, E. Scarpacci, M (2024) Economías criminales, extractivismo y acumulación entrelazada: un análisis multiescalar de los nuevos escenarios latinoamericanos. *URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, (38), 8-31.

Testigo Directo (2014) Guerra Contra el Contrabando Departamento, así son las caravanas de la muerte en la Guajira. Archivo de Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=xPFkIdu5ETg

The Fund for Peace (2017) Fragile States Index. Methodology and cast framework. https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2017/05/FSI-Methodology.pdf

The Global Economy (S/F) Venezuela: Coal exports. https://www.theglobaleconomy.com/Venezuela/coal_exports/

Thompson, EP (1971) The moral economy of the English crowd in the eighteenth century. *Past & present*, *50*(1): 76-136.

Thompson, EP (2019) Costumbres en común. Barcelona: Crítica.

Tilly, C (1992) Coerción, capital y los Estados europeos. Madrid: Alianza.

Tilly, C (2006) Guerra y construcción del estado como crimen organizado. Revista Académica de Relaciones Internacionales, 5 UAM-AEDRI ISSN. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678494/RI_5_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tinker-Salas M (2014) Una herencia que perdura. Caracas: Galac.

Torres, A. Castillo, M (2022) Denuncia penal como vía para combatir la tala ilegal en la Zona Protectora Mitar Nakichenovhic. Programa de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora "UNELLEZ". https://es.calameo.com/read/007087755bad3dd5a8b78

Transparencia Venezuela (2017) Empresas propiedad del Estado en Venezuela. https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2017/09/Empresas-propiedad-del-Edo.-2017-TV-sin-linea-de-corte.pdf

Transparencia Venezuela (2018) Sector minero. https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2018/11/EPE-II-Sector-Mineria_AF.pdf

Transparencia Venezuela (2019) Informe Corrupción 2019. https://transparenciave.org/informe-de-corrupcion-2019/

Transparencia Venezuela (2020) Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado. https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/07/Crimen-organizado-y-corrupcio%CC%81n-en-Venezuela-Un-problema-de-Estado-completo.pdf

Transparencia Venezuela (2022) Sindicato de Barrancas. https://transparenciave.org/economias-ilicitas/sindicato-de-barrancas/

Transparencia Venezuela (2023a) Gran corrupción venezolana, derechos humanos e impunidad. https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/04/Gran-Corrupcion-venezolana-Derechos-Humanos-e-impunidad.pdf

Transparencia Venezuela (2023b) Índice de Economías Ilícitas. Venezuela 2023. https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2023/11/Indice-de-Economi%CC%81as-Ilicitas-en-Venezuela-2023.pdf

Transparencia Venezuela (2023c) Economías ilícitas en Venezuela:
Una renta creciente repartida entre aliados. https://transparenciave.org/economias-ilicitas/economias-ilicitas-en-venezuela-una-renta-creciente-repartida-entre-aliados/

Transparencia Venezuela (S/Fa) Pdvsa. Combustible de la corrupción.
https://transparenciave.org/project/petroleo-historia-2/

Transparencia Venezuela (S/Fb) Obras Inconclusas.
https://transparenciave.org/obrasinconclusas/

Transparencia Venezuela (S/Fc) Corruptómetro. https://corruptometro.org/

Transparencia Venezuela (S/Fd) ECONOMÍAS ILÍCITAS APURE.
https://transparenciave.org/economias-ilicitas/economia-ilicitas-apure/

Transparencia Venezuela (S/Fe) ECONOMÍAS ILÍCITAS BARINAS.
https://transparenciave.org/economias-ilicitas/economia-ilicitas-barinas/

Transparencia Venezuela (S/Ff) ECONOMÍAS ILÍCITAS CARABOBO.
https://transparenciave.org/economias-ilicitas/economia-ilicitas-carabobo/

Transparencia Venezuela (S/Fg) Arco Minero Del Orinoco: la legalización de lo ilícito.
https://transparenciave.org/economias-ilicitas/economias-ilicitas-en-venezuela-una-renta-creciente-repartida-entre-aliados-el-arco-minero-del-orinoco-la-legalizacion-de-lo-ilicito/

Trujillo-Ospina D, Rojas-Lozano D, López-Cerquera N (2018) Desbordamiento del extractivismo minero en Colombia: el caso de Suárez, Cauca. *CS* (26):171-201.

Tynkkynen V (2007) Resource Curse Contested— Environmental Constructions in the Russian Periphery and Sustainable Development. *European Planning Studies*,15:853-870

Ulloa A (2016) Feminismos territoriales en América Latina: defensas de la vida frente a los extractivismos. Nómadas (45):123-139.

Umbría-Acosta, L (2016) "Cuatro tesis sobre las economías ilícitas". *Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 18: 13-27.

UN (2016) Climate change resilience for sustainable development, en: World Economic and Social Survey 2016. pp.1-20. https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/1_Chapter_WESS2016.pdf

UN (2021) Situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://venezuela.un.org/es/144104-situaci%C3%B3n-de-los-derechos-humanos-y-la-asistencia-t%C3%A9cnica-en-la-rep%C3%BAblica-bolivariana-de

UNDP (2024a) Un subibaja: El crecimiento económico en América Latina y el Caribe. https://www.undp.org/es/latin-america/blog/un-subibaja-el-crecimiento-economico-en-america-latina-y-el-caribe

UNDP (2024b) Ebullición global: por qué es importante este concepto durante la ola de calor. https://www.undp.org/es/argentina/noticias/ebullicion-global-por-que-es-importante-este-concepto-durante-la-ola-de-calor

UNFCCC (2023) Glasgow–Sharm el-Sheikh work programme on the global goal on adaptation referred to in decision 7/CMA.3. https://unfccc.int/documents/636595

UNFPA (S/F) World Population Dashboard. Venezuela, Bolivarian Republic of. https://www.unfpa.org/data/world-population/VE

UNHCR (2022) Venezuela situation. GLOBAL REPORT 2022. https://reporting.unhcr.org/venezuela-situation-global-report-2022

Unicef (2024) UNICEF Data: Monitoring the situation of children and women. https://data.unicef.org/country/ven/

Urdaneta, E (2019a) Desde Zulia opera el contrabando de palma aceitera hacia Colombia. https://elpitazo.net/reportajes/desde-zulia-opera-el-contrabando-de-palma-aceitera-hacia-colombia/

Urdaneta, E (2019b) Palmeras Diana salpicada por hechos de corrupción. https://elpitazo.net/reportajes/palmeras-diana-salpicada-por-hechos-de-corrupcion/

Uribe, R (2022) María Fernanda Puerto Carrillo: una científica tras las huellas de los jaguares en el Zulia. https://talcualdigital.com/maria-fernanda-puerto-carrillo-una-humana-en-una-manada-de-jaguares/

Urteaga-Quispe, M (2017) La desigual capacidad del Estado en América Latina: Análisis de sus fundamentos históricos. *Política y gobierno*, *24*(2), 435-457.

USGS (1999) Gold – 1999. Gold Statistics and Information. https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/gold-statistics-and-information

USGS (2019) 2019 Minerals Yearbook. Venezuela. https://pubs.usgs.gov/myb/vol3/2019/myb3-2019-venezuela.pdf

USGS (S/F) National Minerals Information Center. South America. https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/south-america

Valverde M (2020) A orillas del Cuyuní, el mercurio brilla más que el oro. https://armando.info/a-orillas-del-cuyuni-el-mercurio-brilla-mas-que-el-oro/

Van de Graaf, T (2023) Barrels, booms, and busts: The future of petrostates in a decarbonizing world, en: Scholten, D (Ed.) Handbook on the geopolitics of the energy transition. Edward Elgar Publishing. pp. 183-196

Vargas-Jiménez, M (2022) Estrategias de sobrevivencia, alternativas económicas y sociales de la unidad campesina. *Papeles de población*, *3*(12): 39-50.

Vargas-Ribas, C (2018) La migración en Venezuela como dimensión de la crisis. *Pensamiento propio*, 47: 91-128.

Vargas-Valencia, F (coord.) (2023) Extractivismo y captura del Estado en Colombia: aportes contra la impunidad. Bogotá: Fundación Heinrich Böll Colombia. https://co.boell.org/sites/default/files/2023-06/extractivismo-y-capt.web_.pdf

Vázquez, O. Rodríguez, C (2021) Expansión de la frontera extractivista en Venezuela: el Arco Minero del Orinoco. El Estado y las organizaciones armadas paraestatales ante los pueblos indígenas de ese territorio, en: AAVV. Amazonía y expansión mercantil capitalista. Nueva frontera de recursos en el siglo XXI. Buenos Aires: Clacso, Cedla, pp 149-157.

Velasco-Páez, FJ (2018) Breve relación de la historia del ambientalismo venezolano: hitos, dinámicas y perspectivas. *Territorios Comunes*, 1: 13-17.

Véliz M (2019) Liborio Guarulla: «Amazonas es tierra de minería ilegal y guerrilleros colombianos». https://storage.googleapis.com/qurium/elpitazo.net/guayana-liborio-guarulla-amazonas-es-tierra-de-mineria-ilegal-y-guerrilleros-colombianos.html

Véliz, M (2020) Indígenas piden a las autoridades frenar la minería ilegal en Amazonas. https://elpitazo.net/guayana/indigenas-piden-a-las-autoridades-frenar-la-mineria-ilegal-en-amazonas/

Vera, L (2018) ¿ Cómo explicar la catástrofe económica venezolana? *Nueva Sociedad*, 274: 83-96.

Verité (2016) The Nexus of Illegal Gold Mining and Human Trafficking in Global Supply Chains. https://verite.org/wp-content/uploads/2016/11/Verite-Report-Illegal_Gold_Mining-2.pdf

Villafañe, O (2017) Los yukpas: una etnia asediada por la desdicha. Crónica Uno. https://cronica.uno/los-yukpas-una-etnia-asediada-por-la-desdicha/

Villalobos, H (2022) Pescadores de Paraguaná protestan por derrames de crudo y gas en el golfete de Coro. https://notizulia.net/pescadores-de-paraguana-protestan-por-derrames-de-crudo-y-gas-en-el-golfete-de-coro/

Villasmil, R (2022) Medición del impacto de la migración en Venezuela. BID, Banco Interamericano de Desarrollo. DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN No IDB-DP-00986. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Medicion-del-impacto-de-la-migracion-en-Venezuela.pdf?download=true

Vitti, M (2016a) Los sanema: Indígenas que cargan a sus espaldas la depredación del Caura. https://revistasic.gumilla.org/2016/los-sanema-indigenas-que-cargan-a-sus-espaldas-la-depredacion-del-caura/

Vitti, M (2016b) Minería, sindicatos y Arco Minero del Orinoco, combinación mortal para los indígenas de El Caura. https://revistasic.org/mineria-sindicatos-y-arco-minero-del-orinoco-combinacion-mortal-para-los-indigenas-de-el-caura/

Vitti, M (2021) Los anillos del árbol de Lisa. https://revistasic.org/los-anillos-del-arbol-de-lisa/

Vitti M, Ramírez M, Poliszuk J (2022) La veda a la minería se levanta en 'La Nueva Amazonas'. https://armando.info/la-veda-a-la-mineria-se-levanta-en-la-nueva-amazonas/

Vivas, F (1991) Los tres primeros siglos de Venezuela 1498-1810. Caracas: Editorial Fundación Eugenio Mendoza.

Vivas, F (1993) Los grandes períodos y temas de la historia de Venezuela (v Centenario). Caracas: Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela.

VOA (2023) Exportaciones de petróleo de Venezuela caen en 2022 pese a ayuda de Irán. https://www.vozdeamerica.com/a/exportaciones-petroleo-venezuela-caen-2022-pese-ayuda-ir%C3%A1n/6906251.html

Volman, D (2003) Oil, arms and violence in Africa. *ACAS Bulletin*, 64.

VPI Tv (2024) Petróleo contaminó el sustento de pescadores - Rostros de la Crisis. . [Archivo de Video en Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=vlLI-ckb3gI

Wainjirawa. Aceinluz. (2014). Palabra de Emergencia, A los Pueblos del Mundo, Al Pueblo de Venezuela. http://wainjirawa.blogspot.com/2014/03/palabra-de-emergenciaa-los-pueblos-del.html

Wagner, LS (2010) Problemas ambientales y conflicto social en Argentina. Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la megaminería en los

inicios del siglo XXI. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Quilmes. http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/192

Wallerstein, I (1995) *La reestructuración capitalista y el sistema-mundo*. Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations, State University of New York at Binghamton. https://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1265665449.La_reestructuracion_capitalista_y_el_sistema.pdf

Wallerstein, I (2004) Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos: un análisis de sistemas-mundo. Madrid: Akal.

Wallerstein, I (2006) La trayectoria del poder estadounidense. *New Left Review*, *40*, 1-16.

Walter M (2009) Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de contenido ambiental… Reflexionando sobre enfoques y definiciones. *Cip Ecosocial*, 2-5.

Wataniba. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) (2021) Evolución de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela: estado de la cuestión en los últimos cinco años. Estudio preparado para el 40 Período de Sesiones del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Watts M (2001) Petro-violence: community, extraction, and political ecology of a mythic commodity. In: Peluso N, Watts M (eds) Violent environments, New York: Cornell University Press, pp 189–212

Watts M (2003) Economies of Violence: More Oil, More Blood. *Economic and Political Weekly*, 38:5089-5099

WDPA (S/F) Protected Areas. https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA

Weisbrot, M. Sachs, J (2019) Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela. https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf

Wenar, L (2017) Blood Oil. A Précis. *Philosophy and Public Issues*, 7(2): 3-16

Wexell-Severo, Luciano (2009) Economía venezolana (1899-2008). Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana.

WFP (2022) 7 of the Largest Refugee Crises Around the World and Their Effects on Hunger. https://www.wfpusa.org/news/largest-refugee-crises-around-world-effects-hunger/

WFP (2023) Latin America Annual. Country Report 2022. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000148023/download/

WHO (2017) World Malaria Report 2017. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259492/9789241565523-eng.pdf?sequence=1

WHO (2024) World Malaria Report 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789240104440

Wikipedia (2025) Anexo: Salario mínimo en Venezuela. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Venezuela

Wolf, ER. Hansen, EC (1967) Caudillo politics: A structural analysis. *Comparative studies in society and history*, *9*(2): 168-179.

World Bank Group (2018) Global Economic Perspectives. Broad-Based Upturn, but for How Long? https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/da2c5a6b-5650-576b-8e43-add85378e6bd/content

World Bank Group (S/Fa) Support to Venezuelan Migration. https://www.worldbank.org/en/programs/world-bank-support-to-the-venezuelan-migration/overview

World Bank Group (S/Fb) World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/

World Gold Council (2022) Global mine production. https://www.gold.org/goldhub/data/gold-production-by-country

World Steel Association (2024) World Steel in Figures 2024. https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures-2024/

Zaffaroni, E (1996) El crimen organizado. Una categorización frustrada. Bogotá: Editorial Leyer.

Zambrano-Sequín, L (2023) Informe de coyuntura Venezuela. Abril, 2023. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales – Universidad Católica Andrés Bello. https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2023/05/Informe-de-coyuntura-IIES-UCAB-abril-2023_compressed.pdf

Zavaleta-Mercado, R (1986) Lo nacional popular en Bolivia. CDMX: Siglo XXI.

Zavaleta-Mercado, R (2009) El Estado en América Latina, en: La autodeterminación de las masas. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160314050938/15estado.pdf

Zurbriggen, C (2011) Gobernanza: una mirada desde América Latina. *Perfiles latinoamericanos*, *19*(38), 39-64

Zürn, M (2010) Global governance as multi-level governance. In *Handbook on multi-level governance*. Edward Elgar Publishing.

Zürn, M (2019) Politicization compared: at national, European, and global levels. *Journal of European Public Policy*, *26*(7), 977–995. ttps://doi.org/10.1080/13501763.2019.1619188

Zysman-Quirós D (2019) White-Collar crime in South and Central America: Corporate State crime, governance, and the high impact of the Odebrecht corruption case. In: Rorie M The handbook of white-collar crime. Wiley-Blackwell, Pondicherry. pp.363-380.

APÉNDICE

I. Lista de Acrónimos

AAI	Ambientalismo de Alta Intensidad
ABI	Ambientalismo de Baja Intensidad
ABRAE	Área Bajo Régimen de Administración Especial
AMO	Arco Minero del Orinoco
AN	Asamblea Nacional
ANC	Asamblea Nacional Constituyente
ATPP	Alcance territorial y predominio sobre la población
BCV	Banco Central de Venezuela
CCGPP	Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón
CCP	Tipo 6 ‘Ciudad/Centro Político’ (Estatalidades)
CEN	Conexión con la economía nacional
CPMV	Capacidad de pacificación y de monopolización de la violencia
CVG	Corporación Venezolana de Guayana
CVM	Corporación Venezolana de Minería
ELN	Ejército de Liberación Nacional (Colombia)
ERN	Extracción de Recursos Naturales
FAES	Fuerzas de Acciones Especiales
FANB	Fuerza Armada Nacional Bolivariana
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FPO	Faja Petrolífera del Orinoco
GNB	Guardia Nacional Bolivariana
LABMVE	Lucha por el Acceso Básico a Medios de Vida Ecológicos

MDME	Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico
NFC	Tipo 1 ‘Nueva Frontera de Commodities’ (Estatalidades)
PDVSA	Petróleos de Venezuela, S.A.
PEIP	Presencia y eficiencia institucional y de provisión
PEXC	Perfil extractivismo / commodities
PN	Parque Nacional
PSUV	Partido Socialista Unido de Venezuela
PTC	Tipo 4 ‘Periferia Tradicional Central’ (Estatalidades)
PTF	Tipo 5 ‘Periferia Tradicional Fronteriza’ (Estatalidades)
RPC	Responsividad al poder central (Caracas)
S	Sobrevivencia
TSJ	Tribunal Supremo de Justicia
ZSNP	Tipo 3 ‘Zona de Sacrificio no Petrolera’ (Estatalidades)
ZSP	Tipo 2 ‘Zona de Sacrificio Petrolera’ (Estatalidades)

II. Lista de Tablas

TABLA 1M. Métodos aplicados en la investigación doctoral, partiendo desde la perspectiva de la Ecología Política Comparativa

TABLA 2M. Lista de los 75 conflictos socioambientales en Venezuela analizados (2013-2022). Distribuidos por zonas

TABLA 3M. Variables categóricas y su taxonomía, agregadas a la Matriz General luego del primer análisis de datos

TABLA 4M. Matrices específicas de Gobernanza híbrida. Categorías, Indicadores y Códigos

TABLA 5M. Matrices específicas sobre Ecologismos en contextos de sobrevivencia. Categorías, Indicadores y Códigos

TABLA 1. Reservas probadas de petróleo en Venezuela, por cuencas. Se presenta también el tipo de crudo y su situación actual

TABLA 2. Periodización de La Gran Crisis 2013-2022 (por fases).

TABLA 3. Tasas de inflación de los 5 países con los niveles más altos del mundo, por año (2013-2022).

TABLA 4. Lista de principales sanciones internacionales emitidas por el gobierno de los Estados Unidos, período 2015-2019.

TABLA 5. Indicadores del Índice de Fragilidad Estatal

TABLA 6. Principales actores del Estado venezolano, clasificados por su nivel de importancia en el régimen político

TABLA 7. Principales políticas de Estado en la relación extractivismo/poder/terriorialización.

TABLA 8. Criterios para la definición de la tipología de estatalidades

TABLA 9. Tipología de estatalidades de Venezuela en La Gran Crisis

TABLA 10. Mecanismos y estrategias conjuntas de los actores estatales y criminales en las operaciones de contrabando transfronterizo – Hibridación. Casos: Amazonía-oro, Palma aceitera y combustible

TABLA 11. Clasificación de la orientación de las luchas en los conflictos ecológico-distributivos. Se añade breve descripción

TABLA 12. Principales demandas y reivindicaciones de los Pueblos Indígenas en los casos en los que participan

TABLA 13. Principales demandas y reivindicaciones de Actores Rurales en los casos en los que participan

TABLA 14. Principales demandas y reivindicaciones de Actores Urbanos en los casos en los que participan.

TABLA 15. Principales demandas y reivindicaciones de Actores Semi-urbanos en los casos en los que participan

III. Lista de Figuras

FIGURA 1M. Mapa de regiones ecopolíticas de Venezuela, con conflictos georreferenciados. Fuente: elaboración propia

FIGURA 1. Esquema conceptual base de la investigación

FIGURA 2. Biorregiones de Venezuela

FIGURA 3. Amazonía venezolana (en verde) y sus estados

FIGURA 4. Áreas Protegidas de Venezuela y Reservas Forestales

FIGURA 5. Ubicación de las principales cuencas petroleras de Venezuela, incluyendo la Faja Petrolífera del Orinoco

FIGURA 6. Ubicación de aglomeraciones poblacionales en los centros urbanos de Venezuela (2001)

FIGURA 7. Ubicación de reservas de minerales y su solapamiento con los territorios indígenas tradicionales (marcados en áreas azules) en la Amazonía venezolana

FIGURA 8. Geografía del extractivismo en Venezuela (1777-1820)

FIGURA 9. Geografía del extractivismo en Venezuela (1863-1890)

FIGURA 10. Geografía del extractivismo en Venezuela (1925-1974)

FIGURA 11. Pilares del Régimen eco-sistémico del Petro-estado en su articulación con la distribución de renta petrolera

FIGURA 12. Ubicación de los principales proyectos extractivistas del "Plan de la Patria 2013-2019"

FIGURA 13. Tasas de variación del PIB, Venezuela 1999-2022.

FIGURA 14. Producción de petróleo y otros líquidos (en MBD), período 1999-2022.

FIGURA 15. Producción de Caña de Azúcar (2002-2022).

FIGURA 16. Producción de Arroz (2003-2022).

FIGURA 17. Producción de Maíz (2003-2022).

FIGURA 18. Producción de Cebolla (2007-2022).

FIGURA 19. Exportaciones e importaciones FOB (en MM US$), 1999-2022.

FIGURA 20. Porcentaje de la población en condición de pobreza y pobreza extrema (de ingresos), período 2005-2022

FIGURA 21. Salario mínimo en US$ (1er semestre de cada año), a tasa paralela (desde 2018, calculado a tasa oficial) y porcentaje de variación de la inflación (promedio anual). Período 1999-2022

FIGURA 22. Prevalencia de subalimentación respecto al total de la población de Venezuela. Período 2000-2022. Datos de 2008 a 2013 marcados como <2.5

FIGURA 23. Top 10 de países del mundo con la mayor prevalencia de subalimentación respecto al total de su población. Período 2017-2019

FIGURA 24. Migración hacia fuera de Venezuela, en total acumulado de migración saliente, y de migración neta por año y total. Período 2013-2022

FIGURA 25. Protestas en Venezuela, período 2011-2022

FIGURA 26. Principales tipos de protestas, frecuencia por años. Período 2011-2022 (sin datos para 2016-2017)

FIGURA 27. Niveles de deforestación en Venezuela (medido en hectáreas), período 2002-2022

FIGURA 28. Principales exportaciones de Venezuela por productos (2017)

FIGURA 29. Principales ingresos financieros desde el exterior (2020)

FIGURA 30. Factores desencadenantes relacionados de La Gran Crisis, destacando en verde las dimensiones de la distribución ecológica.

FIGURA 31. Exportación de commodities por rubro (en Toneladas, millones de toneladas o barriles diarios). Commodities: petróleo, camarón, oro, hierro, cemento, bauxita y carbón. Período 2012-2022.

FIGURA 32. Conflictos de distribución ecológica analizados, distribuidos por la clasificación de las actividades principales que los generan

FIGURA 33. Distribución de los commodities principales involucrados en los 75 conflictos de distribución ecológica analizados

FIGURA 34. Relación entre las 9 actividades económicas principales que generan los conflictos de distribución ecológica y los principales commodities involucrados en los mismos.

FIGURA 35. Relación entre la intensidad de los conflictos, el commodity y la Zona Ecopolítica donde se desarrollan los mismos. Se agrupan los recursos en clusters zonales para facilitar el análisis.

FIGURA 36. Tipo de administrador de las actividades económicas que generan los 75 conflictos ecológico-distributivos

FIGURA 37. Distribución de los principales commodities involucrados en los conflictos ecológico-distributivos en relación a la condición de legalidad o ilegalidad de las actividades económicas que los generan

FIGURA 38. Distribución de los principales commodities involucrados en los conflictos ecológico-distributivos en relación a la presencia o no de economías ilícito/criminales en los mismos

FIGURA 39. Superficie y áreas de explotación del AMO, junto con las principales concentraciones mineras en cada una de ellas

FIGURA 40. Verificación si se alcanza o no la justicia ambiental en los 75 conflictos de distribución ecológica

FIGURA 41. Pilares del Régimen eco-sistémico del nuevo Estado neo-patrimonial en La Gran Crisis

FIGURA 42. Mapa de estatalidades de Venezuela en La Gran Crisis (2013-2022)

FIGURA 43. Distribución de los principales actores ilícito/criminales involucrados en los 75 conflictos ecológico-distributivos

FIGURA 44. Ubicación geográfica de los principales actores ilícito/criminales involucrados en los conflictos ecológico-distributivos en el Norte del Orinoco

FIGURA 45. Ubicación de puntos mineros ilegales en la Amazonía y del proyecto AMO

FIGURA 46. Ubicación de los principales grupos criminales, eje extractivos ilícitos (de acuerdo a los puntos mineros geolocalizados) y proyecto AMO, biorregión Amazonía

FIGURA 47. Formas de operaciones y estrategias territoriales de los actores de poder en las gobernanzas del extractivismo en La Gran Crisis

FIGURA 48. Ubicación de los Comandos de la Guardia Nacional Bolivariana junto a la ubicación de puntos mineros ilegales en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare (territorio yanomami)

FIGURA 49. Distribución de los tipos de actores sociales que protagonizan en los 75 conflictos de distribución ecológica, de acuerdo a su Territorialidad

FIGURA 50. Ubicación del Tipo de población que protagoniza los 75 conflictos de distribución ecológica de acuerdo al tipo de Estatalidad

FIGURA 51. Relación entre el Tipo de población que protagoniza los 75 conflictos de distribución ecológica y las Estatalidades

FIGURA 52. Niveles de Masividad y Escala de las Luchas en los 75 conflictos de distribución ecológica analizados

FIGURA 53. Mapa en el que se solapan las áreas de presencia/predominancia de grupos criminales en el extractivismo y la ubicación de los actores sociales (por tipo) que intervienen en los 75 conflictos de distribución ecológica en estudio

FIGURA 54. Evolución de la intensidad del conjunto de los 75 conflictos de distribución ecológica, en las tres fases de La Gran Crisis

FIGURA 55. Evolución de la intensidad de los conflictos por casos (serie del 1 al 75), diferenciado por Fase de La Gran Crisis

FIGURA 56. Frecuencia del tipo predominante de orientación de la lucha en los 75 conflictos de distribución ecológica

FIGURA 57. Mapa de ubicación de los diferentes tipos de orientación de la lucha en los 75 conflictos de distribución ecológica

FIGURA 58. Diagrama que cruza los 5 tipos de orientaciones de la lucha en los 75 conflictos ecológico- distributivos, con el tipo de contexto donde se desenvuelven

IV. Lista de Imágenes

IMAGEN 1. Marcha en Caracas contra la minería en la RF Imataca

IMAGEN 2. Protestas Pemón en contra del tendido eléctrico en Caracas, 1998

IMAGEN 3. Usuarios en Guarenas (cerca de Caracas) usan métodos de transporte masivo alternativo (transportes de carga), que establecen sus rutas y sus propias tarifas. Noviembre 2017.

IMÁGENES 4 y 5. Imágenes de radar del lago de Maracaibo (estado Zulia), donde se denotan grandes manchas negras que dan cuenta de la presencia de plantas flotantes y derrames petroleros en el cuerpo lacustre, el más grande de Suramérica. Fecha de Imagen 4: 04/11/2022. Fecha de Imagen 5: 22/12/2022.

IMÁGENES 6 y 7. Imágenes satelitales de la región oriental del Lago de Maracaibo donde se denota el avance territorial de la industria camaronera en zonas de humedales.

IMÁGENES 8, 9 y 10. No. 8 corresponde a Las Claritas (Bolívar), secuencia satelital 2015-2020, zona con un alto nivel de concentraciones de oro. Imagen 9, Ikabarú, territorio indígena al sur del estado Bolívar, donde se encuentra un bloque especial del Arco Minero del Orinoco. Secuencia 2013-2022. Imagen 10, Parque Nacional Yapacana (Amazonas). Al centro de la imagen se encuentra el Cerro Yapacana, el cual, como se puede ver en el detalle de la satelital, está degradado en sus faldas por el avance de la minería ilegal. Secuencia 2012-2020.

IMAGEN 11. Manifestantes protestan contra el gobierno de Maduro, crean una barricada con escudos elaborados por ellos mismos, y se enfrentan a la Guardia Nacional Bolivariana. Caracas, mayo 2017

IMAGEN 11. Ministro de Desarrollo Minero Ecológico de ese período, Víctor Cano, junto a integrantes del pueblo wottuja, anuncia inicio de operaciones de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista “Parguaza” (9 de septiembre de 2017).

IMAGEN 12. Comunidad R1 de la ciudad petrolera de Cabimas (Costa Oriental del Lago de Maracaibo), donde se muestra que el petróleo está en las propias calles de la misma

IMAGEN 13. Imagen del Complejo refinador de Paraguaná, que genera extraordinaria contaminación, afectando la salud de los habitantes de la península

IMAGEN 14. Mina de oro “Cuatro Muertos” cerca de Las Claritas

IMAGEN 15. FANB anuncia desmantelamiento de “campamento militar TANCOL” en Los Pijiguaos, e incautación de armas de guerra, municiones y otros pertrechos. Diciembre 2022

IMAGEN 16. Imagen satelital de Las Claritas, donde se marcan en rojo la ubicación de las minas Las Cristinas y Brisas

IMAGEN 17. Imagen satelital de una parte de El Callao (Área 4 del AMO)

IMAGEN 18. Fotografía aérea del contrabando de combustible por el río Limón, principal afluente de la laguna de Sinamaica

IMAGEN 19. Protestas en Maripa por servicios básicos y la instalación de balsas mineras

IMAGEN 20. Grupos movilizados realizaron una caminata en defensa del Parque Cerro La Vieja, Día Mundial de la Tierra

IMAGEN 21. Protestas de calle en la ciudad de Puerto Ordaz (Ciudad Guayana) por falta de agua

IMAGEN 22. Comunidad de Veracruz junto a otras comunidades campesinas, organizaciones ambientalistas e individualidades, en asamblea sobre situación del proyecto de minería de sílice en sus territorios

IMAGEN 23. Protesta en la entrada del PN Waraira Repano en San Bernardino, contra el anuncio de una "ciudad comunal" controlada por el PSUV en esta área protegida

IMAGEN 24. En visita de campo (junio 2019) constatamos el arrase de cultivos de eucalipto de pobladores de Galipán por las obras del teleférico

IMAGEN 25. Indígenas yanomami de la organización Horonami se movilizan en Puerto Ayacucho (2016) solicitando la demarcación y entrega de tierras indígenas

IMAGEN 26. Comunas y campesinos de la comunidad de Caparo (Barinas) viajaron a Caracas para introducir un documento en la Fiscalía (Ministerio Público) solicitando protección del bosque invadido en la Reserva Forestal

IMAGEN 27. Foro público: Riesgos y consecuencias de la extracción minera en el Monumento Morros de Macaira

IMAGEN 28. Foro público: Riesgos y consecuencias de la extracción minera en el Monumento Morros de Macaira

IMAGEN 29. Reportaje sobre la bióloga Diana Liz Duque en el diario español El País

IMAGEN 30. Integrantes de la organización Azul Ambientalistas denunciando in situ un 'ecocidio' en el Refugio de Fauna de Cuare

IMAGEN 31. Vecinos de Tibana, Granjas de Tibana, Sanare, Boca de Tocuyo y El Marite, exigen paralización inmediata del cierre del canal

IMAGEN 32. Movimiento Unidos por el Agua demandó a la estatal HidroLara por el deficiente servicio de agua en la entidad

IMAGEN 33. Concentración realizada en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (Caracas) el 31 de mayo de 2016 para acompañar la entrega de un recurso de Nulidad contra el Decreto 2.248 que formaliza el Arco Minero del Orinoco

IMAGEN 34. Varias organizaciones sociales asistimos al Tribunal Supremo de Justicia solicitando respuesta después de 3 años de introducido el recurso de nulidad contra el decreto 2.248 del AMO

IMAGEN 35. Organizaciones como la Fundación Salvemos la laguna de Urao impulsaron un trabajo educativo y de movilización con comunidades, participando en un desfile junto a una institución educativa en la ciudad de Lagunillas

IMAGEN 36. Indígenas wayuú se movilizan hasta la ciudad de Caracas, exigiendo derogatoria del decreto 1.606

IMAGEN 37. Comunidades wayuú logran parar las máquinas de la empresa militar Caminpeg y la rusa VostokCoal, defendiendo los ríos Socuy, Mache y Cachiri

IMAGEN 38. Comunidad pemón cierra la pista de aterrizaje en el aeropuerto del Parque Canaima

IMAGEN 39. Indígenas de Kanaimö rechazan ataque de funcionarios de la DGCIM contra los pemones mineros de Arenal

IMAGEN 40. Caminata al Cerro La Vieja, donde también se celebra la procesión del Santo Patrono de la zona, "San Nicolás de Bari"

IMAGEN 41. Cueva de la Estefanía, dentro del cerro, posee múltiples altares donde se realizan rituales espiritistas

IMAGEN 42. Concentración de organizaciones sociales por el día de la Tierra

IMAGEN 43. Poster que realizado como parte de la campaña en defensa del PN Waraira Repano

IMAGEN 44. Palmeros de Chacao bajando del PN con las hojas de palma para el Domingo de Ramos

IMAGEN 45. Comparsa contra la minería y en defensa del agua (luchas contra el sílice y por el embalse de Los Quediches) en la Cabalgata de Carora

IMAGEN 46. Integrantes del Movimiento Salvemos el Embalse Los Quediches intervienen en la quebrada La Ribera para reencauzar sus aguas que alimentan el embalse

IMAGEN 47. Comunidades indígenas en manifestación solicitando protección a la laguna de Urao

IMAGEN 48. Marcha "Nos plantamos en defensa de los árboles de Caracas" organizada por la Coalición Plantados

IMAGEN 49. Mina Parkupi, cerca de Ikabarú

IMAGEN 50. Campamento minero en Musuk Pa

IMAGEN 51. Asamblea de indígenas de Musuk Pa, planificando estrategias para enfrentar a los grupos armados criminales

IMAGEN 52. Oficina de Seguridad Indígena en El Playón

IMAGEN 53. Encuentro entre Capitanes indígenas con 300 «flecheros» en el campamento de «JJ», comandante del Frente "Acacio Medina" de las FARC (disidencias)

IMAGEN 54. Indígenas Pemón Kamarakoto y turistas que visitan Canaima protestan contra la minería en el río Carrao

IMAGEN 55. Indígenas wayuu en oposición a la construcción de la planta carboeléctrica en el Guasare

IMAGEN 56. María Fernanda Puerto Carrillo en trabajo de campo en el sur del Lago de Maracaibo

IMAGEN 57. Miembros de la Fundación Ecológica Brión (Ecobrión) en el humedal costero La Reina

IMAGEN 58. Marcha de trabajadores del sector público, específicamente de la salud y educación, además de personal jubilado

IMAGEN 59. Integrantes de la Plataforma de Lucha Campesina, en el marco de la 'Marcha Campesina Admirable'

IMAGEN 60. Representantes locales de Altagracia de Orituco llevan denuncia sobre la minería en el Monumento Natural Morros de Macaira a la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional

IMAGEN 61. Se documenta la matanza de flamencos en la laguna de las Peonías, Maracaibo (Zulia), probablemente para consumo humano

IMAGEN 62. Quema de basura en la ciudad de Maracaibo

IMAGEN 63. Trabajadores de Vencemos Guanta protestan frente la alcaldía exigiendo más inversión y menos contaminación

IMAGEN 64. Eudis Girot en una manifestación en 2020

IMAGEN 65. Indígenas de la Sierra de Perijá se concentran en la av. Baralt de Caracas (cercanías al palacio presidencial) y exigen hablar con el presidente Maduro, por sus condiciones de salud

IMAGEN 66. Pescadores de varias comunidades de Paraguaná realizan protesta en Punta Cardón, exigiendo a PDVSA atienda situación de los derrames en el golfete de Coro

IMAGEN 67. Segundo Encuentro en Defensa de Agua, Barquisimeto (Lara), noviembre de 2023, en el que he participado con una presentación sobre la ecología política del agua

IMAGEN 68. Cierre del Segundo Encuentro en Defensa de Agua, Barquisimeto (Lara)

V. Lista de Anexos

ANEXO 1. Zonificación del Mapa de Regiones Ecopolíticas de Venezuela

ANEXO 2. Formulario para el registro de conflictos socioambientales

ANEXO 3. Cuadro de preguntas del formulario de registro de los casos, con variables y capítulo al que contribuye

ANEXO 4. Guía de preguntas para la entrevista a profundidad con actores de los grupos movilizados en los conflictos socioambientales en estudio